# Bolivia, su historia

## Tomo VI

Constitución, desarrollo
y crisis del estado de 1952

# BOLIVIA, SU HISTORIA

## TOMO VI

## Constitución, desarrollo y crisis del estado de 1952

Magdalena Cajías
Coordinadora

Autores:

Eugenia Bridikhina
Magdalena Cajías
Cristina Machicado Murillo
José A. Peres-Cajías
Jorge Ocsa Laime
Beatriz Rossells
Carmen Soliz

Colaboradora:

Beatriz Cajías



Agradecemos por el apoyo en la edición al Programa
de Investigación Estratégica en Bolivia PIEB.

Edición: Matías Contreras Soux
Diagramación: Marco Guerra
Elaboración de mapas: Renzo Aruquipa Merino
Portada: Alejandro Salazar
Asistencia editorial: Plural editores



ISBN OBRA COMPLETA: 978-99974-47-57-9
ISBN VOLUMEN: 978-99974-47-63-0
D.L.: 4-1-1520-15

Impresión: Artes Gráficas Sagitario S.R.L.

Impreso en Bolivia

# Índice general de la colección

Tomo I: De los orígenes a los Estados prehispánicos, siglos XV a.C. – XVI d.C.

1. Origen de la población de América y las sociedades más tempranas
2. El periodo Formativo (2000 a.C.-500 d. C.)
3. Tiwanaku (600-1100 d. C.)
4. Señoríos y Desarrollos Regionales (1000/1100-1440 d. C.)
5. La impronta Inca en Bolivia (1470- 1540 d. C.)
6. Arqueología y etnohistoria de las tierras bajas de Bolivia

Tomo II: La experiencia colonial en Charcas, siglos XVI-XVII

1. Hombres europeos llegan a los Andes (1533-1542)
2. En busca de un nuevo orden. La primera fase del Estado colonial (1542-1572)
3. La construcción y consolidación del orden colonial (1570-1600)
4. El siglo XVII. La sociedad de los pactos

Tomo III: Reformas, Rebeliones e Independencia, 1700-1825

1. Reformas. El siglo de los Borbones: estructuras económicas, sociales, políticas y culturales
2. Sublevaciones. Las respuestas de indios, mestizos y criollos
3. Intendencias. Charcas a fines del siglo XVIII: el proyecto ilustrado.
4. Independencia: un complejo y largo proceso

Tomo IV: Los primeros cien años de la República, 1825-1925

1. Construyendo la república (1825-1870)
2. Reconduciendo el país y reformulando la nación (1870-1900)
3. Entre conflictos y conmemoraciones (1900-1925)

Tomo V: Gestación y emergencia del nacionalismo en Bolivia, 1920-1952

1. El despertar de las energías sociales y políticas
2. La industria manufacturera en la primera mitad del siglo XX
3. Fundamentos culturales para el desarrollo de la sociedad y el nacionalismo.

Tomo VI: Constitución, desarrollo y crisis del Estado de 1952

1. De la Revolución Nacional a la crisis del Estado de 1952
2. ¿Una revolución en la economía y en la tierra?
3. La revolución y su herencia en las políticas y prácticas culturales

Tomo VI

# Contenido

Presentación general ........ 13

PRIMERA PARTE
De la Revolución nacional a la crisis del Estado de 1952

I. La Revolución Nacional: actores sociales y políticos
en alianza y disputa (1952-1964)
Magdalena Cajías ........ 19
Sentidos generales del periodo ........ 19
La revolución en marcha ........ 22
La revolución en crisis y el deterioro de las alianzas ........ 62

II. La implantación del poder militar y el retorno de la democracia (1964-1982)
Magdalena Cajías ........ 95
Sentidos generales del periodo ........ 95
Los militares en el poder: entre el nacionalismo y la Doctrina de Seguridad Nacional........ 100
Del septenio banzerista a la implantación de la democracia ........ 130

III. Crisis del Estado de 1952, consolidación de la democracia y emergencia
de nuevos movimientos sociales (1982-1999)
Jorge Ocsa Laime ........ 167
Sentidos generales del proceso democrático en Bolivia y sus dinámicas........ 167
La transición democrática y la crisis del Estado del 52 - La UDP ........ 168
La respuesta a la Crisis de Estado: el 21060 y el proyecto neoliberal (1985-1993)........ 184
La fuerza del Estado, la gobernabilidad y el institucionalismo democrático (1993-1999)........ 198
SEGUNDA PARTE
¿Una revolución en la economía y en la tierra?

IV. La dinámica económica del capitalismo de Estado (1952-1985)
José Alejandro Peres-Cajías ........ 209
Consideraciones generales........ 209
El Capitalismo de Estado: ¿un retorno al punto de partida? ........ 210
Las bases fiscales del Capitalismo de Estado
(o cuando la realidad le puso freno a los deseos)........ 213
La minería boliviana durante el Capitalismo de Estado........ 217
La Marcha al Oriente: los alcances y los límites de la diversificación económica ........ 219
A modo de conclusión: el proceso entendido desde la interacción de los agentes
y no desde su naturaleza........ 223

V. Reforma agraria: balances, perspectivas y nuevos enfoques
Carmen Soliz ..... 225
Introducción ..... 225
Reforma agraria y "problema del indio" antes de 1952 ..... 226
Celebraciones, avances y balances ..... 231
Escudriñando paradigmas ..... 233
Reforma Agraria en tres actos ..... 237
El baile de los números ..... 246
Algunas notas sobre el proceso de redistribución ..... 248
El Oriente de Bolivia: la otra historia de la Reforma Agraria ..... 251
Las demandas por una nueva ley de reforma agraria ..... 253
La reforma después de la reforma ..... 254
A una década de aplicación de la ley la ley INRA ..... 255
Evo Morales: en el cruce de múltiples tendencias ..... 258

TERCERA PARTE
La revolución y su herencia en las políticas y prácticas culturales

VI. Cambio de paradigmas en las políticas culturales en Bolivia (siglo XX al XXI)
Beatriz Rossells ..... 263
Introducción ..... 263
Las primeras décadas del siglo XX ..... 264
La revolución de 1952 y la cultura ..... 265
¿Qué quedó de la Revolución Nacional? ..... 271
Los regímenes militares y la cultura ..... 272
La cultura en el periodo democrático ..... 276
La cultura durante el período neoliberal ..... 277
Globalización y cultura en el siglo XXI ..... 278
Descolonización e interculturalidad en el Estado Plurinacional ..... 279
El Estado Plurinacional y la cultura ..... 282
La sociedad civil y la cultura ..... 290
Los últimos tiempos (2013-2014) ..... 295
Conclusiones: zampoñas y/o violines para los niños y niñas de Bolivia ..... 299

VII. La revolución artística y los sonidos rebeldes de tres décadas del siglo XX
Cristina Machicado Murillo ..... 303
Introducción ..... 303
Nuevos imaginarios para la segunda mitad del siglo XX ..... 303
El primer colectivo de taller en Bolivia: Anteo ..... 305
Arte para la revolución ..... 307
Memorias del teatro ..... 311
Voces desde las minas: emisoras mineras ..... 313
Los nuevos derroteros de la música ..... 315
El poder de la pantalla grande ..... 318
La expresión de la denuncia ..... 319
Apuntes finales ..... 321

VIII. Políticas y prácticas festivas después de la Revolución Nacional
Eugenia Bridikhina ..... 323
Propaganda política del MNR y los actos masivos ..... 323

Organización del nuevo espacio festivo a partir de la revolución...... 324
La imagen del líder de la revolución ...... 325
La formación de la "bolivianidad" y los héroes patrios en las décadas de 1960 y 1970...... 327
Las fiestas cívicas durante las dictaduras y la democracia ...... 329
Nuevo orden político y nuevas prácticas festivas (2006-2012) ...... 332

Bibliografia...... 337

Autores y colaboradores...... 351

## Índice de figuras

1. Lechin junto a combatientes en las insurrección popular de 1952...... 24
2. Milicias mineras marchan disciplinadamente en 1952...... 25
3. Primer Comité Ejecutivo de la COB...... 30
4. Lechin firma el Decreto Supremo de Nacionalización de Minas...... 40
5. Campesinos junto al Presidente Victor Paz Estenssoro...... 47
6. Milicias armadas campesinas...... 49
7. Victor Paz y Milton Eisenhower en La Paz...... 50
8. La ciudad de La Paz experimentó la construcción de viviendas sociales con la Reforma Urbana...... 53
9. La matrícula escolar se incremento con la reforma de la educación de 1955...... 60
10. Campaña electoral en el campo, 1956...... 64
11. La clase obrera, aliada al MNR en los primeros años de la R.N., se alejó del partido de gobierno desde 1956...... 72
12. Victor Paz Estenssoro asumió la presidencia de Bolivia por segunda vez en 1960. ...... 83
13. El Plan Triangular buscó sacar de su crisis a COMIBOL, pero fracaso...... 86
14. Campamento de siglo XX bajo presencia militar...... 102
15. Ernesto Ché Guevara...... 109
16. Afiche de Homenaje Guerrilleros de Teoponte 2000...... 113
17. Marcha del 1 de mayo de 1971 en la ciudad de Sucre...... 124
18. Marcha del 1 de mayo de 1971 en la ciudad de La Paz...... 125
19. Delegados obreros de la FSTMB a la Asamblea Popular, 6 de agosto 1971. ...... 126
20. Banzer utilizó a paramilitares civiles en la represión bajo su gobierno. ...... 132
21. El Frente Popular Nacionalista, conformado por el MNR, la FSB y las FFAA se desintegró en 1974. ...... 138
22. El movimiento universitario se enfrentó al gobierno de Banzer por la autonomía universitaria y sufrió la represión militar...... 151
23. El movimiento minero fue protagonista en el retorno a la democracia. ...... 155
24. Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora posesionados como Presidente y Vicepresidente de Bolivia 1982. ...... 172
25. Hernán Siles Zuazo...... 172
26. Grupo de paramilitares internacionales en Bolivia 1982. ...... 175
27. Klaus Barbie en una calle de La Paz. ...... 175
28. Niño minero a la cabeza de la Marcha por la Vida, 29 de agosto de 1986...... 188
29. Marcha por el Territorio y Dignidad 1990. ...... 193
30. Banzer y los representantes de la Megacoalición 1997...... 202
31. Revision de títulos originarios de la ex comunidad Collantaca...... 242
32. Indígenas denuncias despojo y exigen restitucion de tierras...... 242
33. En 1953 los periodicos reflejan el agudo debate que se originó sobre el derecho de las comunidades a la restitución de sus tierras...... 243

34. La Confederación Agraria Nacional que representa a grandes y medianos propietarios publicaba una solicitada utilizando el slogan de "la tierra para quien la trabaja" para prevenir la promulgación de la Ley Inra en 1996. ........ 254
35. Portada de Revista Pututu. ........ 268
36. Actividades del Ballet Oficial, 1952. ........ 274
37. Museo Nacional de Etnografía y Folklore. ........ 283
38. Martadero, Cochabamba-Bolivia. ........ 287
39. Música barroca boliviana: Orquesta Urubichá. ........ 293
40. Portada cuadernillo 9 folios ¿Que es ser artista? Andina Publicidad, 1954 ........ 304
41. Mural Colegio Junín, Sucre, 1955. ........ 307
42. Oleo/Lienzo "Diablo". ........ 308
43. El retrato de un Pueblo. (Fragmento) Mural a la piroxilina. Salón de honor de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). ........ 310
44. Wiracocha danzante de Illanes. ........ 311
45. Liber Forti ........ 312
46. Portada de disco. Discolandia DUERI Y CIA. 1976. ........ 316
47. Publicidad en prensa sobre Peñas y movimiento cultural ........ 317
48. Afiche película de Jorge Sanjinés "El coraje del pueblo"´1971 ........ 318
49. Dibujo Walter Solón Romero "La libertad tiñe de Rojo" serie El Quijote y los Perros 1973. ........ 320
50. Festejo del 9 de abril 1953 ........ 325
51. Celebraciones cívicas Ucureña, Cochabamba ........ 328
52. Festejo del día del mar. ........ 329
53. Festejo del 6 de agosto 2008 en Llallagua ........ 330
54. Evo Morales ........ 332
55. Evo Morales y Alvaro García Linera participando en un ritual andino ........ 333
56. Evo Morales y Alvaro García participando en el acto de inaguración del gasoducto. ........ 335

## Índice de gráficos

1. Cantidad de Conflictos por mes del gobierno de la UDP 1982-1985 ........ 178
2. Evolución del PIB per cápita boliviano (US$2000) entre 1950 y 1986 ........ 210
3. Evolución de la cantidad producida –eje izquierdo– y del precio del estaño –eje derecho (1950=100), 1950-1986 ........ 218
4. Producción e importación de arroz (tons.), 1952-1961 ........ 221
5. Producción e importación de azúcar (tons.), 1951-1961 ........ 221
6. Producción de petróleo (miles de barriles) y de gas natural (millones de pies cúbicos), 1952-1985 ........ 222

## Índice de cuadros

1. Cotización oficial de los precios del estaño (En dólares americanos) ........ 142
2. Exportaciones de estaño (En millones de dólares) ........ 142
3. Composición del Congreso de 1980 ........ 171
4. Cuadro de cotizaciones del dólar 1982-1985 ........ 179
5. Composición del Congreso de 1985 ........ 185
6. Bolivia: población, superficie y dencidad de población, según censos nacionales de población 1950, 1976, 1992, 2001 y 2012 ........ 194
7. Distribución de la hacienda Santa Lucía ........ 239

8. Redistribución de la parcela en Omasuyos desde de 1953 ..... 242
9. Redistribución de la hacienda Naranjani, en Sud Yungas ..... 243
10. Informe del CNRA sobre redistribución de tierras en 1962 ..... 248
11. Asignación y tamaño de las parcelas al interior de una hacienda después de 1953 ..... 250
12. Asignación de tierras para una persona en la hacienda Chiquero, Sud Yungas ..... 250
13. Saneamiento y Titulación de la Tierra en Bolivia: 1996-2006 ..... 256

## Índice de recuadros

1. Relato de El Diario sobre la insurrección popular ..... 23
2. Participación del grupo Lechín en la insurrección ..... 24
3. Discurso de Lechín ..... 25
4. Plataforma de lucha de la COB ..... 29
5. Primer Comité Ejecutivo de la COB ..... 30
6. Estructura organizativa de la COB aprobada en 1954 ..... 34
7. Normas para el funcionamiento de los sindicatos campesinos, aprobadas en 1954 ..... 35
8. Extracto del Decreto de nacionalización de las minas ..... 39
9. Propuesta de la COB sobre el tema agrario ..... 46
10. Objetivos del D.S. de Reforma Agraria ..... 47
11. Relato de la presencia campesina en La Paz del 9 de abril de 1958 ..... 49
12. Miembros de la Comisión de Educación en 1953 ..... 55
13. Tareas de la Comisión de Educación ..... 56
14. Bases de la Educación boliviana ..... 57
15. Características del Código de la Educación ..... 57
16. Propósitos de la educación técnica, vocacional y profesional ..... 59
17. Tareas para las universidades del país ..... 61
18. Principales propuestas electorales de los partidos políticos para las elecciones de 1956 ..... 65
19. Algunos aspectos de los "considerandos" del Decreto Supremo Nr. 4538, fechado el 15 de diciembrede 1956 ..... 67
20. Representación de delegados al II Congreso de la COB de 1957 ..... 68
21. Propuestas de la COB frente a la Estabilización Monetaria y el futuro de la Revolución Nacional ..... 69
22. Documento del sindicato de Catavi contra las políticas del Gobierno de Siles Zuazo ..... 73
23. Interpelación de los movimientistas de izquierda al gobierno de Siles Zuazo en 1959 ..... 79
24. "Plataforma Electoral" de la COB frente a las elecciones nacionales de 1960 ..... 80
25. Gabinete de Paz Estenssoro en 1960 ..... 83
26. Plan de Gobierno en el campo económico para 1960-1964 ..... 84
27. Fragmentos de la Tesis Política del Congreso de Trabajadores Mineros de Bolivia, realizado en Colquiri en 1963 ..... 90
28. Lista de rehenes cuya liberación Estados Unidos demandó al presidente Víctor Paz Estenssoro ..... 90
29. Fragmentos de la carta de Irineo Pimentel y Federico Escóbar a las bases mineras de Siglo XX ..... 91
30. Objetivos principales del "Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas" ..... 110
31. Fragmentos del documento: "a la juventud revolucionaria de bolivia y américa" ..... 112
32. Fragmentos de escritos de combatientes en Teoponte ..... 114
33. Aspectos centrales del "Mandato Obrero de Participación en el Gobierno del General Torres" ..... 119
34. Sectores sociales y políticos convocados a conformar la Asamblea Popular ..... 124
35. Aspectos centrales de los estatutos de la Asamblea Popular ..... 124

36. Presidium de la Asamblea Popular ........ 126
37. Testimonio de un sobreviviente de la masacre de Santa Cruz ........ 129
38. Primer Gabinete de Banzer ........ 131
39. Resumen del documento "Evangelio e Iglesia" ........ 134
40. Fragmentos del libro "La Masacre del Valle", Cuaderno Justicia y Paz, Cochabamba, enero de 1975 ........ 139
41. Lista agrupada de obras gubernamentales de inversión concluidas y en ejecución por el Gobierno de Banzer ........ 143
42. Logros económicos de acuerdo al Presidente Banzer ........ 144
43. Fragmentos de la Declaración Conjunta firmada entre los presidentes de Bolivia y Venezuela, el 8 de agosto de 1975 ........ 147
44. Plataforma de lucha aprobada en el Congreso Minero de Corocoro de 1976 ........ 154
45. FSTMB plantea enjuiciar a Banzer ........ 161
46. Descripción de la resistencia popular en La Paz ........ 164
47. Carta de los partidos políticos al Ministro de Interior ........ 169
48. Fragmentos del discurso de Hernán Siles Zuazo ........ 171
49. Similitudes entre las posesiones de 1952 y 1982 ........ 172
50. Puntos más importantes del Paquete Económico ........ 173
51. Gabinete del Presidente Hernán Siles Zuazo, octubre de 1982 ........ 174
52. El ejercicio del poder durante la UDP ........ 182
53. El rol contradictorio de la COB en el proceso democrático ........ 182
54. El katarismo ........ 183
55. Principales puntos del Decreto Supremo 21060 ........ 186
56. Principales planteamientos del XXI Congreso de la FSTMB ........ 187
57. Argumentos de Filemón Escobar para evitar el enfrentamiento ........ 188
58. Testimonio anónimo de un policía ........ 191
59. Leyes principales del gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997) ........ 199
60. Visión del gobierno de Sánchez de Lozada ........ 200
61. Sugerencias de campos de acción del BID ........ 204
62. Organización del Estado ........ 213
63. Fragmentos de la entrevista a Francisco Chipana Ramos ........ 229
64. Informe de Paz Estenssoro al Congreso de 1955 ........ 231
65. Contrato entre Héctor Lorini (propietario) y Eduardo Sillo (arrendero) ........ 244
66. Lista de demandantes de la ex -hacienda Pongon–Huyo, Omasuyos ........ 249
67. Instituciones culturales creadas en el período del MNR (1952-1964) ........ 267
68. Organizaciones populares en la concentración política de celebración del MNR (1958) ........ 269
69. Instituciones dependientes del Instituto Boliviano de Cultura ........ 274
70. Red Telartes ........ 295
71. Principales artistas nacidos entre 1930-1940 ........ 305
72. Grupo Anteo ........ 306
73. Cadena minera ........ 314
74. Canciones del autor sobre regiones bolivianas ........ 315
75. Peña Naira ........ 316
76. Principales exponentes musicales ........ 316
77. Serie de dibujos Walter Solón Romero ........ 320
78. Víctor Paz Estenssoro y el pueblo ........ 326
79. Decreto Ley n. 07108 ........ 327
80. Discurso de Evo Morales en el Parlamento Europeo el 15/05/2006 ........ 336

# Presentación general

¿Qué fue lo que llevó a un grupo de más de veinte investigadores a emprender la aventura de escribir una obra de cerca de dos mil páginas para la lectura de un público no especializado en el tema de la historia? ¿Cuál fue la energía que impulsó a este grupo a trabajar más de tres años, articulando la investigación individual con el debate colectivo y sacrificando horas y días en reuniones a veces interminables?

Las mismas preguntas han estado presentes en los participantes en este proyecto. ¿Por qué pudimos pasar tardes íntegras dedicadas a leer, escribir y debatir sobre temas tan diferentes como las formas de organización social en Tiwanaku; la violencia del ingreso de Almagro al Collasuyo, las luchas de los pueblos indígenas en el Oriente, los andares de José Santos Vargas en Ayopaya, los proyectos liberales o la manera en que se luchó contra las dictaduras? Quizás podamos encontrar las respuestas en la lectura misma de estos libros, resultado de esa aventura humana e intelectual.

Para comprender nuestro compromiso con este proyecto es importante retroceder en el tiempo con el fin de conocer la historia de esta historia, ya que estos libros se remontan a un objetivo de larga data. A inicios de la última década del siglo XX, se reunieron algunos grupos de investigación para debatir diversos temas en torno a la situación de la historia en Bolivia. En aquel tiempo, ninguno de nosotros podía imaginarse que de esta experiencia saldría un proyecto que lleva ya más de veinte años de existencia. Fue ahí que se decidió la creación de una Coordinadora de Historia cuyo objetivo central era, precisamente, elaborar una historia de Bolivia que incluyera los últimos avances de la investigación historiográfica y que estuviera dedicada a un público más amplio.

En los siguientes años se trabajó y publicó una colección de fascículos sobre el siglo XX (1999), otra abordó la historia de mujeres bolivianas bajo el título "Protagonistas de la Historia" (1997) iniciándose también la publicación de la revista Historias de… (1998-2003). También organizamos varios congresos internacionales sobre temas como la historia del siglo XIX (1994) y del siglo XX (1998), la historia de la minería (2007) y el congreso de Etnohistoria (2011).

A pesar de que las actividades individuales de cada uno de los investigadores nos llevaron por caminos diversos, siempre mantuvimos el sueño de realizar esta obra colectiva. A lo largo de los últimos años, y pese a haber reducido parcialmente las actividades del grupo, el análisis conjunto de los temas que nos interesan no cesó. En reuniones periódicas y en proyectos más específicos se siguió debatiendo acerca de la historiografía boliviana y del propio quehacer histórico. Así, a lo largo de nuestro recorrido como historiadores individuales y como Coordinadora, la reflexión teórica se fue enriqueciendo a partir de la formación adquirida en postgrado y de las experiencias que algunos acumulamos durante años como docentes de la Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz). El debate con una nueva generación de investigadores y la vivencia sobre la historia reciente de Bolivia también han sido muy fructíferos e inspiradores. La toma de conciencia conjunta en torno a este enriquecimiento mutuo fue la que nos llevó, finalmente, a tomar la decisión de asumir este reto –una obra fruto de la experiencia– en un momento como el actual en

el cual urge contar con una historia de Bolivia actualizada y accesible.

Desde la conformación del equipo de investigación, esta obra ha sido un reto pues si bien predominan los historiadores, otros profesionales como arqueólogos y cientistas sociales también participaron en la misma, abriendo la investigación a la interdisciplinariedad, confluyendo en ella diversas generaciones de investigadores, mujeres y hombres.

El análisis realizado de forma individual y grupal sobre las percepciones pasadas y actuales acerca de la historia de Bolivia nos llevó a preguntarnos sobre las imágenes que se han construido y se construyen sobre nuestro pasado. En muchos casos, nos encontramos con una historia militante respaldada en una visión de fe subordinada a las coyunturas políticas que generan y regeneran mitos y se basan sólo en una historia de culpables e inocentes, vencedores y vencidos o de explotadores y víctimas, de malos y de buenos, encubriendo tramas complejas de dominación y explotación pero también dinámicas de exclusión e inclusión en las que participan diferentes grupos sociales, de distintas maneras y en diversos momentos históricos.

Esta obra no trata de ofrecer una historia "color de rosa" carente de conflictos sino, precisamente, una historia mucho más articulada de lo que suponemos y, por tanto, mucho más compleja, densa y con contradicciones. Los actores y sujetos, trátese de individuos, clases sociales, grupos étnicos, pueblos o naciones, no son ni han sido entidades esenciales con fronteras absolutamente discernibles y que han coexistido de manera separada: todos ellos han estado absolutamente interconectados e interrelacionados. Si bien somos un país geográficamente diverso y plurinacional, esto no supone que tengamos historias aisladas, cerradas en sí mismas y autorreferentes. Más bien, nos hemos interesado en enfatizar un pasado articulado, con tensiones, luchas cambiantes y paradojas. Asimismo, hemos buscado articular procesos y estructuras, aspectos macro y micro, determinaciones estructurales y agencia de los actores que nos permitan entender los cambios y las continuidades en un proceso de larga duración. Finalmente, pretendemos superar la estructura y cronología presidencial y las visiones Estado-centristas, andino-centristas, andro-centristas y elitistas.

Estos libros también están pensados como instrumentos de reflexión sobre el pasado, presente y futuro de una sociedad. Las visiones que consideraban a la historia de manera instrumental, como herramienta para la creación de una unidad nacional o bien como posibilidad científica para descubrir leyes y regularidades, o para prevér el futuro, han quedado –indudablemente– atrás. Para nosotros, la historia permite desarrollar una mirada analítica, crítica y reflexiva. Esto significa que, como académicos y profesionales, proporcionamos elementos para pensar y no para repetir, para comparar visiones y proposiciones, para generar reflexión antes que entregar una interpretación histórica que pretenda ser la única y la verdadera. La historia contribuye así a la creación de una ciudadanía activa, a la construcción de una esfera pública informada y democrática.

Nuestra propuesta se centra en tres ejes estructuradores. En primer lugar, repensar y utilizar las nuevas propuestas teóricas planteadas en los ámbitos científicos y que fueron plasmadas en varios estudios por historiadores nacionales y extranjeros que no habían sido aún difundidas; en segundo lugar, transmitir en un lenguaje más simple –pero no por ello menos profundo– la información recogida por los estudios historiográficos de los últimos treinta años y que se mantuvo hasta hoy en un ámbito exclusivamente académico; y, en tercer y último lugar, generar a partir de nuestra propia reflexión una agenda de opinión y debate ciudadano en torno a nuestra historia y nuestra visión del pasado y del presente.

El proyecto editorial que presentamos consta de seis tomos, elaborados por el mismo número de equipos de investigación.

El primer tomo aborda la historia de los pueblos originarios en la etapa anterior a la llegada de los europeos, tradicionalmente llamada prehispánica. En este tomo, se enfatiza en la relación hombre-naturaleza en la multiculturalidad tan evidente tanto en el espacio de las tierras altas como de las bajas, así como en el papel del Estado en las primeras sociedades. Se parte de los primeros poblamientos en América así como sus interrelaciones e influencias hasta llegar a inicios del siglo XVI.

El segundo tomo se centra en los siglos XVI y XVII, caracterizados por la implantación en Charcas del sistema colonial bajo el reinado

de la Casa de Austria y su proyecto de establecimiento de un sistema político mixto; en él se toma en cuenta diversos proyectos de sociedad: el proyecto estatal, el de la Iglesia y el de la propia sociedad (indígena, mestiza o española), así como las estrategias económicas y sociales que lograron establecer una pax colonial, aunque en un contexto de desigualdad.

El tercer tomo abarca la etapa conocida como colonial tardía que comprende la época de la dinastía de los Borbón, las reformas en el sistema colonial y las luchas insurgentes de indígenas y criollos, es decir el resquebrajamiento del equilibrio de la pax colonial que llevó a una crisis final del sistema. En él se muestra las tensiones generadas por los cambios en el proyecto colonial como las respuestas surgidas desde diversas esferas de la sociedad en Charcas en una etapa conocida como de la Independencia.

El cuarto tomo aborda el complejo proceso de una nueva construcción política: el sistema republicano que puso fin a una legitimidad que emanaba del Rey situándola en el principio abstracto de la soberanía del pueblo. Los cambios no implicaron ni inclusiones generales ni transformaciones totales. El siglo XIX se presenta así no solo como la transición de un Estado colonial a un Estado republicano, de un Estado corporativo a otro tipo de Estado, de una sociedad de castas a una sociedad de individuos iguales en principio, porque ello supondría un fácil cambio unilineal. Se trata, más bien, de un periodo de cambios y continuidades que se reestructuran en una nueva formación que articuló y recompuso lo antiguo y lo colonial, coexistiendo con lo nuevo y lo moderno liberal. Es, de alguna manera, un "barroco político-social".

El quinto tomo está centrado en el proceso que abarca la crisis del modelo liberal hasta la revolución de 1952: analiza los procesos políticos y sociales que evidenciaron el despertar de corrientes que planteaban transformaciones profundas a la sociedad boliviana y examina las estructuras económicas en un momento de mayor inserción de Bolivia en el mercado mundial como productora de materias primas, así como en sus intentos por avanzar en procesos de industrialización. Asimismo, la cultura es abordada en sus variadas expresiones concretas así como en su capacidad de expresar mentalidades, imaginarios e incluso ideas relacionadas con los proyectos políticos en disputa.

El sexto tomo centra su análisis en el Estado del 52, nacido de la insurrección popular y de la destrucción del Estado oligárquico. Este ciclo histórico, que no puede circunscribirse a los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (1952-1964), tuvo un amplio despliegue en distintas dimensiones de la sociedad y el Estado, de la cultura y la economía, que son estudiadas tanto en sus concreciones como en sus límites y contradicciones, muchas de ellas producto de disputas intensas en torno al sentido final de las transformaciones realizadas. Este ciclo histórico llegó a su fin en la década de 1980 en una crisis determinada por las pugnas entre fuerzas políticas y sociales que buscaban radicalizar la revolución y aquellas que representaban a los nuevos grupos dominantes. Desde entonces, se abrieron dos procesos: el neoliberal, que duró hasta inicios del siglo XXI y el actual. En ambos, algunos legados de la Revolución Nacional continuaron vigentes.

En la elaboración de cada uno de los tomos se ha respetado en todo momento las decisiones adoptadas por los respectivos equipos con relación a temas como la autoría, la estructuración interna del trabajo y el uso de imágenes, aunque se ha determinado pautas generales para el uso de citas, notas y registros bibliográficos como, por ejemplo, no recurrir al uso de las notas a pie de página. Igualmente, dentro de cada equipo, se ha trabajado respetando estrictamente el parecer de cada uno de los miembros por lo que el lector quizás encuentre, más que contradicciones, abordajes diversos sobre determinados temas, aunque se ha tratado de seguir una línea común que guíe el trabajo colectivo. Sabemos que en el frágil equilibrio entre las posiciones individuales y el camino común se halla en gran parte el valor de nuestro trabajo.

El resultado de este compromiso es este conjunto de tomos en los que subyace la experiencia colectiva e interna de leernos y releernos, de hablarnos y escucharnos, buscando consensos de forma conjunta pero también manteniendo ciertas divergencias. Desde esta perspectiva, podemos sentirnos plenos con la seguridad de haber alcanzado más de lo que esperábamos: un resultado de diálogo y amistad.

Muchas instituciones y personas han colaborado en la realización de este proyecto.

Agradecemos profundamente a Plural Editores que confió en nosotros desde el inicio del proyecto, al periódico La Razón, que se comprometió de forma militante en el mismo, al Programa de Investigación Estratégica en Bolivia que apoyó en el trabajo de edición de tres tomos, al Instituto de Estudios Bolivianos de la UMSA que nos prestó generosamente espacios y tiempos para el debate, a los alumnos de la Carrera de Historia de la UMSA que leyeron en clases algunos de nuestros avances y al Archivo de La Paz que autorizó el uso de imágenes y fotografías. Finalmente queremos agradecer profundamente a nuestras familias por su constante paciencia, comprensión y apoyo.

La Paz, diciembre 2014

# PRIMERA PARTE

## De la Revolución nacional a la crisis del Estado de 1952

# I. La Revolución Nacional: actores sociales y políticos en alianza y disputa (1952-1964)

Magdalena Cajías

## Sentidos generales del periodo

Entre las décadas de 1930 y 1960 del siglo XX, la gran mayoría de los países de América Latina pasó por experiencias populistas con fuertes tintes nacionalistas. Este fue el caso de México, Brasil, Argentina, Ecuador, Guatemala, Colombia y Perú, para citar solo a los procesos más significativos. Paralelamente, en otros países de la región se establecieron las primeras dictaduras militares de largo aliento, como en Nicaragua, Paraguay, Venezuela y República Dominicana.

En ambos contextos políticos, la democracia representativa liberal quedó muy debilitada. En cambio, el personalismo, los caudillos, los jefes carismáticos y los dictadores primaban. Los partidos políticos que no estaban en el poder fueron perseguidos y reprimidos. No existía una oposición con libertad de acción, y los gobiernos populistas o dictatoriales controlaban abierta o encubiertamente los espacios de poder, la prensa, los parlamentos y las principales decisiones políticas.

Sin embargo, durante el periodo en cuestión, los viejos y nuevos actores sociales subalternos vivieron importantes experiencias de movilización. Ya sea en apoyo a los caudillos populistas o en pos de sus demandas particulares o sectoriales, en la mayoría de los casos los sectores movilizados lograron irrumpir como nunca antes en la vida política. Cuando ya no entraban en el esquema de poder, cuando sus demandas sobrepasaban lo que los Gobiernos podían dar a cambio de su apoyo o cuando empezaban a actuar autónomamente, las masas –o "el pueblo"– fueron reprimidas y sus derechos ciudadanos conculcados.

En las décadas anteriores (1900 a 1930), las ideas anarquistas y socialistas de origen europeo habían logrado implantarse en la clase media radicalizada y en el joven proletariado de las minas, entre otros sectores. Pero, tanto en las ciudades como en el campo –y especialmente en los sectores rurales tradicionales–, los partidos y organizaciones políticas que sustentaban estas ideas aún eran débiles. En muy pocos casos –como en el Chile de Marmaduke Grove– los políticos que querían implementarlas habían conseguido llegar al poder, y sus triunfos duraron muy poco tiempo. El proletariado, convocado por esas ideologías para conducir los cambios, optó por enrolarse en las corrientes populistas, y muchas veces terminó diezmado por la represión ejercida en contra de sus movilizaciones.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría comenzó a trasladarse lentamente hacia América Latina. La primera muestra de ello fue la caída de Jacobo Arbenz, en 1954, en Guatemala. A raíz de este acontecimiento, los norteamericanos, atemorizados por una radicalización comunista de parte del populismo en ese país, decidieron intervenirlo con sus tropas armadas. Sin embargo, a la Unión Soviética no parecía importarle mucho el subcontinente, aun cuando mimaba a los partidos comunistas que habían nacido en las décadas de 1920 y 1930. Por su parte, estos partidos seguían batallando a su manera por el socialismo en América Latina.

Las luchas fuertes se libraban en otras partes: Corea, China, África y –un poco más tarde– Vietnam. Muchas de las guerras africanas por la descolonización cobraron tintes socialistas, y los radicales nacionalistas árabes expropiaron a los europeos las riquezas naturales de sus territorios,

que les pertenecían por derecho. Ello no obstante, árabes y africanos optaron muchas veces por una "tercera vía" –o lo que en la década de 1960 se conoció como el "tercermundismo". De todos modos, la expansión de los discursos "anticolonialista" y "antiimperialista" y la de los intereses económicos en juego hicieron que el mundo volcara su atención hacia esos confines del mundo, en donde las dos potencias se encontraban en disputa: por un lado, la URSS y sus aliados; por el otro, el mundo capitalista, capitaneado por la potencia norteamericana.

El miedo de que ocurriese lo mismo en América Latina no estuvo ausente, y por eso se optó por la prevención. En los años de la post Primera Guerra Mundial, el instrumento norteamericano para vender el discurso de la democracia a los gobiernos del subcontinente fue el Panamericanismo (obviamente, lo hicieron desde sus particulares definiciones de lo que, para ellos, era el totalitarismo). Después de la Segunda Guerra Mundial, con la caída del fascismo, la OEA –hija directa de la recientemente creada ONU– abanderó esa oferta con mayores argumentos a su favor.

Un poco después, John F. Kennedy se convirtió en el paradigma de la política de cooperación amistosa con América Latina. El Gobierno de Estados Unidos prestó su apoyo económico a la región con la instalación de bancos de créditos para el acceso a los sectores desfavorecidos, con el envío de alimentos que les sobraban y de Cuerpos de Paz y con la formación de la Alianza para el Progreso. A cambio de todo ello, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó a imponer sus recetas para que nuestros países "salgan de sus crisis"; paralelamente, exigía condiciones favorables para la entrega de recursos naturales latinoamericanos a las empresas norteamericanas.

El Gobierno de Washington tampoco se olvidó de introducir la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) en los ejércitos latinoamericanos. Desde mediados de los cincuenta, cientos de militares viajaron a la Escuela de las Américas, instalada en el Canal de Panamá, para formarse según esta Doctrina. El Departamento de Estado seguía de cerca los pasos de los opositores –reales y ficticios– del capitalismo pujante. Todos ellos fueron encasillados como los que respondían al otro lado de la "Cortina de Hierro". La CIA encabezó el trabajo de inteligencia a través de las respetadas embajadas norteamericanas. Desde allí detectó a comunistas y subversivos, tal como lo había hecho años antes en su país (1950-1956), durante la famosa "caza de brujas" que lideró el senador Arthur McCarthy.

Mientras tanto, el modelo socialista, con todas sus variantes, controlaba ya un tercio de los pueblos del mundo, habiéndose instalado en Corea del Norte, Vietnam del Norte, China, Camboya, los países pro-soviéticos de Europa del Este y algunos países africanos y árabes musulmanes como Angola, Argelia, Mozambique, Congo, Libia, Siria e Irak. Incluso los países no alineados del movimiento tercermundista coqueteaban frecuentemente con el concepto de la "utopía política".

Había quedado atrás la guerra que sacudió y desbastó a Europa, pero aún había armas que no dejaban de disparar y otras que se preparaban para hacerlo. Tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia entraron en una carrera armamentista sin precedentes, olvidando así el terror de Hiroshima y Nagasaki y buscando desesperadamente construir bombas atómicas. Por su parte, los guerrilleros anticolonialistas usaban lo que les sobraba a los poderosos; sus armas eran menos modernas,pero también mataban.

Quienes querían adherirse al pensamiento revolucionario contaban con un amplio espectro ideológico. Una primera veta era el humanismo socialista, con su vertiente anticolonialista, con Cesaire, Eric Fromm, Ernst Bloch y Franz Fanon como sus pensadores más representativos. En medio se encontraban las directrices ortodoxas del socialismo estalinista de la III Internacional, el trotskismo disidente de la IV, el maoísmo de la China emancipada y el vigor de pensadores y combatientes del Vietnam vencedor ante Francia –Ho Chi Minh, Le Duan y Nguyen van Giap lideraban el movimiento que, por aquel entonces, resistía la presencia norteamericana. En el otro extremo estaban los pensadores y conductores de las luchas pacíficas y violentas del movimiento afroamericano: Martin Luther King, Malcom X, Carmichael, Angela Davis e incluso los radicales exponentes de la "nueva izquierda estadounidense".

En enero de 1959 tuvo lugar la revolución cubana. El pueblo cubano, conducido por los guerrilleros (que venían combatiendo en la Sierra Maestra desde hacía tres años), tomó el poder. Este acontecimiento abrió una nueva

época para América Latina. Su fama e influencia crecieron sobre todo a partir de 1961, cuando el Estado cubano se autodefinió como socialista –paralelamente a la creciente influencia soviética en la isla. Además, sus impresionantes logros sociales –principalmente en los ámbitos de salud y educación– se difundieron como un reguero de pólvora.

Por otra parte, la revolución cubana coincidió con el declive del populismo. Este declive se debió en gran medida a la desilusión que sus seguidores comenzaron a manifestar por las limitaciones y las contradicciones del populismo, que llevaron a importantes retrocesos en sus respectivos países. Fue en ese contexto general que la Revolución Nacional boliviana se desenvolvió y vivió su auge y su crisis, hasta finalmente agotarse, en 1964.

¿Cuál fue el significado de la Revolución Nacional en el contexto internacional de la década de 1950 e inicios de la de 1960? Un dato fundamental para medir su trascendencia es que, el 9 de abril de 1952, la revolución que vivió el país ocupó los principales titulares de la prensa internacional. Los más importantes periódicos de Europa y Estados Unidos le dedicaron sendos editoriales.

Sucede que esta revolución era toda una novedad. Un pueblo mal armado había combatido durante tres días en la ciudad de La Paz y había derrotado a un poderoso Ejército. La derrota militar trajo consigo la derrota política de la enriquecida burguesía minera del estaño, que hasta entonces había manejado los hilos del poder. De hecho, su representante más sobresaliente, Simón I. Patiño, había esparcido sus dólares en muchas partes del mundo, dejando muy pocos en Bolivia; según la prensa internacional, esta fue una de las motivaciones principales para la insurrección del pueblo boliviano. Por su parte, los hacendados rurales oprimían a los indígenas, cuya imagen de pobreza extrema hacía olvidar su pasado de grandes civilizaciones originarias. Los artículos de prensa mencionaron esto como una de las injusticias que motivaron la revuelta. Un partido que casi nadie conocía más allá de algunas fronteras vecinas –en esto coincidió la prensa– había comandado el triunfo, proclamando una revolución «a 3.600 metros de altura».

¿Qué clase de revolución era la boliviana?, se preguntaron entonces en el exterior –y siguieron preguntándose por muchos años. Para saber de ella, periodistas y estudiosos se trasladaron a Bolivia. Los principales líderes debían darse modos para atender la curiosidad de los visitantes; otros prefirieron mirar con más profundidad y, en tiempos diversos, publicaron textos que hasta hoy ayudan a comprender el proceso revolucionario.

Llamaba la atención que nadie se hubiese inmiscuido directamente en la gesta heroica boliviana. Para los analistas, esta revolución no era pro-soviética ni pro-norteamericana. Tampoco hacían un vínculo directo entre esta y las experiencias populistas que aun sobrevivían en México o Argentina –de donde, evidentemente, algo bebió la boliviana.

La llamada «Revolución Boliviana», conducida desde el poder por el MNR, tuvo 12 años para desplegar sus políticas. Eso sí, muchas de ellas trascendieron ese periodo, y así el «ciclo del 52» no se cerró totalmente con la caída de los movimientistas del poder, en 1964. Para los estudiosos y políticos, que la analizaron desde dentro y fuera del país, este proceso –tanto el corto como el largo– no pasó de moda. Desde su perspectiva, los alcances, contradicciones, transformaciones y retrocesos de la revolución, así como el legado de imaginarios y memorias, podían ser debatidos una y otra vez.

Es posible hablar de la existencia de una "historia oficial" de la Revolución Nacional, que fue divulgada especialmente por los militantes del MNR. Pero también existe una "historia crítica", que surgió principalmente desde fines de la década de 1960 y que fue sustentada sobre todo por intelectuales y políticos de la izquierda.

Al mismo tiempo, la memoria del periodo quedó fuertemente arraigada en los sectores sociales, más que todo en aquellos que fueron actores centrales del proceso –como la clase obrera y los campesinos indígenas. En realidad, en vez de memoria habría que hablar de memorias y representaciones en plural, ya que no se la puede tomar como si esta fuera homogénea y definitiva.

En los últimos años, la Revolución Nacional ha seguido siendo objeto de análisis, debates y balances. En la mayoría de los casos, la visión que prevalece en los trabajos historiográficos, sociológicos y políticos sobre este proceso es más negativa que positiva. Sin embargo, con el paso del tiempo, las posiciones ideologizadas y

cargadas de diferentes grados de subjetividad han ido cediéndole el lugar a análisis más rigurosos y objetivos.

En relación al discurso político sobre la historia, que hoy es enunciado desde las esferas del poder y desde los movimientos sociales articulados a él, también prevalece una visión negativa sobre la revolución de 1952. Incluso se viene imponiendo una cierta intencionalidad por borrar la memoria de esos acontecimientos. Ya no se hace referencia ni a las jornadas de abril de aquel año –que enorgullecieron a los bolivianos durante décadas– ni al largo proceso, abierto por el Estado, pero que emergió de una insurrección de amplio carácter popular.

En este trabajo hemos buscado inscribirnos en una perspectiva capaz de ampliar el conocimiento, análisis e interpretación de un periodo central de nuestra historia. Queremos hacerlo desde una perspectiva crítica, lo que no quiere decir que dejaremos de lado la necesaria objetividad. Sin embargo, también pretendemos dar cuenta de los acontecimientos cotidianos que fueron enlazando el ir y venir de un tiempo con cambios y permanencias, con esperanzas y frustraciones.

## La revolución en marcha

> Tambor del pueblo que bate y rebate y dobla y redobla, venganza del indio que duerme como perro en el zaguán y saluda al amo hincando la rodilla: el ejército de los de abajo ha peleado con bombas caseras y cartuchos de dinamitas, hasta que por fin cayó en sus manos el arsenal de los militares.
>
> Eduardo Galeano. El Siglo del Viento.

### Las jornadas de abril de 1952

El 9 de abril de 1952 amaneció como ningún otro 9 de abril. Las marchas militares que se oían en todas las radios de los hogares paceños venían acompañadas de proclamas y llamadas al "valeroso pueblo de La Paz". La voz del locutor de Radio Illimani había perdido serenidad. En cambio, sonaba emotiva y enronquecida, y así anunciaba que un golpe de Estado contra la oligarquía había estallado. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido del pueblo y cabecilla del levantamiento, anunciaba la muerte de los opresores y pedía el concurso de todos para consolidar su movimiento. Tras las marchas militares, el himno movimientista cobraba fuerza. El pueblo, convocado, venció la incertidumbre y se volcó a las calles. Se formaron grupos, se tomaron rápidas decisiones y no se pensó en nada más que en ganar la batalla en contra del Ejército, que se atrincheraba para defender al régimen.

El golpe que planificó el MNR debía haber estallado en enero, para así aprovechar la época de las lluvias y la falta de conscriptos. Pero la posibilidad de contar con aliados para el golpe entre los altos mandos del Ejército –como con Torres Ortiz, jefe del Estado Mayor– lo postergó. Finalmente, según el plan definitivo de los conspiradores, el golpe estalló el 9 de abril de 1952. Si este fracasaba en la ciudad de La Paz, inmediatamente se levantarían 57 cantones, provincias y centros mineros para desatar la guerra civil; mientras tanto, en el sur se establecería un Gobierno civil. Esta acción conjunta iba a obligar al Ejército a combatir en 100 lugares diferentes y en medio de una huelga general que se planeaba decretar.

En los meses anteriores al golpe, los comandos barriales, las células de mujeres y los grupos de trabajadores mineros fabricaron granadas de cemento amarradas con una carga de dinamita –especie de bazucas que en las minas eran llamadas "chicharras"–, bombas molotov y otras armas caseras. Este rústico armamento sería la principal arma de lucha cuando el momento llegara.

Durante la revolución, el Comité Revolucionario Regional del MNR estaba compuesto por Hernán Siles Zuazo, Adrián Barrenechea, Hugo Roberts, Jorge Ríos, Juan Lechín, Mario Sanjinés Uriarte, Roberto Méndez Tejada, Raúl Canedo, Jorge del Solar, Manuel Barrau y Alfredo Candia. Este Comité aseguró la participación en el golpe de los comandantes de las tres principales fuerzas del Ejército.

En los hechos, solamente Antonio Seleme, Ministro de Gobierno, mantuvo su palabra y entregó algunas armas. La rápida respuesta del Ejército, que salió totalmente pertrechado a ocupar las calles de la Sede de Gobierno –e incluso pudo retomar el control de algunas capitales de departamento–, hizo parecer que el golpe fracasaría. Entonces, Antonio Seleme se asiló en una embajada. Era un momento crítico para los

revolucionarios. Pero el pueblo, que había salido a combatir desde las primeras horas del 9 de abril, convirtió al cuartelazo frustrado en una auténtica insurrección popular. Esto cambió radicalmente el curso de los acontecimientos futuros.

Ante la avalancha popular, Torres Ortiz, que inicialmente se había comprometido con los conspiradores, cambió de opinión y decidió defender al régimen. Para ello, el Jefe del Estado Mayor del Ejército contaba con los distintos batallones del Ejército, pero no con la Fuerza Aérea, que se mantuvo al margen de los enfrentamientos. La Fuerza Aérea, que había sido decisiva en la derrota de los movimientos pre-insurreccionales durante el sexenio, no participó en este conflicto, en parte, a raíz de las negociaciones hechas por Siles Zuazo. Con la salida del Ejército a las calles, solo había dos posibilidades: o el pueblo se dejaba masacrar o se defendía con sus armas. Así se desataron tres días de hechos violentos.

El periódico El Diario, vinculado desde su nacimiento con los sectores oligárquicos, fue tomado por una turba ansiosa de revancha. En un artículo titulado "Heroica actuación del pueblo de La Paz", publicado el 12 de abril del mismo año, describió la insurrección como una "brava lucha sin precedentes en la historia revolucionaria de Bolivia".

Diferentes estratos del pueblo paceño participaron en la insurrección: los fabriles, los carabineros, los militantes movimientistas y los mineros, que arribaron desde Milluni a la ciudad. Tres días de lucha callejera tuvieron como resultado la destrucción y el desbande del Ejército y la renuncia del Gobierno dirigido por Hugo Ballivián, quien se asiló para salir del país incluso antes del triunfo final de la revolución.

Recuadro 1

### Relato de El Diario sobre la insurrección popular

"Combates: El regimiento Lanza, apostado en el Orkojahuira, disparaba hacia las columnas de civiles que avanzaban por las faldas de enfrente, usando armas automáticas. Se replegaron hasta la ceja del Orkojahuira. A las 10 y 30 del miércoles (9 de abril), los soldados disparan desde el Hospital Obrero con ametralladoras. En la tarde, movimientistas y miembros del Ejército entran por detrás del Palacio de Gobierno. Hay combates en San Jorge, Miraflores, Villa Victoria, Chijini Alto. El regimiento Bolívar traslada sus efectivos desde Viacha y ataca a civiles en Villa Victoria. A las seis de la tarde los tiroteos alcanzan su máxima intensidad, escuchándose disparos en todas partes, incluso de morteros.

En la noche del 9, combates en Villa Victoria, Chijini, Tembladerani, Miraflores, San Jorge, Sopocachi, Cadetes del Batallón Pando de Ingenieros y el Colegio Militar, que dominaban San Jorge y el Parque Forestal.

El día 10 de abril, la superioridad numérica y de armamentos del Ejército hace pensar que ganará la batalla. (…) A las diez de la mañana escasea munición entre los revolucionarios, que se encuentran en situación desesperada.

A las 11, en El Alto, grupos de mineros aparecen con municiones. Unos llegan a entrar en Tembladerani y toman el ferrocarril con municiones. Allí cercan al Ejército que se va rindiendo. A las dos de la tarde, Villa Victoria, Chijini y Tembladerani caen en poder de los revolucionarios, que ingresan a la plaza [Murillo] en dos camiones que fueron arrebatados al Ejército. A las cuatro de la tarde, combates en Miraflores y Sopocachi. El General Jorge Rodríguez pide tregua a través del Nuncio Sergio Pignedoli y se reúne con Siles Zuazo en la Nunciatura a las seis de la tarde.

El viernes 11 de abril sigue el fuego granado en Sopocachi y Miraflores. A las 10 y 30 de la mañana, civiles y carabineros reinician sus ataques contra los cadetes. A las dos de la tarde hay fuertes combates. Estos últimos logran dominar el Montículo y el Ministerio de Defensa. Son tomados prisioneros el comandante y oficiales del Sucre y el Bolívar de la región militar Nr.1; entre otros, el subteniente Alberto Natusch Busch (del Abaroa), el brigadier Luis García Meza y Armando Reyes Villa (del Pérez). Son liberados el 18 de abril.

El Gral. Humberto Torres Ortiz se encuentra en Laja (…) El regimiento Lanza (oficiales más especializados), el Colegio Militar y el Batallón de Ingenieros salieron a recuperar la ciudad. En la calle Lisímaco Gutiérrez funciona el cuartel general del MNR (…) Ese día, a las doce de la mañana, los cadetes que llegan hasta la Plaza Abaroa son rápidamente dominados y se los conduce hasta San Pedro con las gorras y las camisas al revés."



Figura 1 Lechín junto a combatientes en la insurrección popular de 1952. Fuente: Lucio Flores Salinas.

Para René Zavaleta Mercado, Guillermo Lora y otros importantes pensadores, el papel de los mineros fue un aporte fundamental para el triunfo revolucionario. Esto no solo se debe a la decisiva actuación de los trabajadores que combatieron en El Alto de La Paz, sino también a los obreros del subsuelo en Oruro, que –en una increíble muestra de coraje– impidieron que los refuerzos militares que se dirigían a La Paz puedan cumplir con su cometido. Según ambos pensadores, los mineros ya tenían suficiente experiencia de lucha acumulada, y por eso su llegada a la Sede de Gobierno insufló los ánimos del pueblo paceño –al que se unió e incluso dirigió.

La prensa del momento también resaltó esa participación. Por ejemplo, en otro artículo de El Diario, publicado el 13 de abril (cuando aún en las calles se podía sentir el olor a pólvora), se señaló que el día 10 del mismo mes –uno de los de más intensa lucha revolucionaria– tuvo la destacada actuación del grupo denominado "Lechín". El grupo llevaba el nombre del entonces máximo dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

Recuadro 2

### Participación del grupo Lechín en la insurrección

"La intervención de ese grupo fue decisiva para el triunfo del movimiento, puesto que, pese a sus escasos efectivos, logró reducir a gruesas fracciones del regimiento Lanza y el Colegio Militar. Desde sus barricadas, levantadas en la calle Yungas, los animosos soldados de la revolución, que recibieron varios impactos de mortero (…) consiguieron aniquilar a soldados y cadetes parapetados en la Universidad y en la plaza Tiahuanacu de Miraflores, luego de intensa lucha que se prolongó desde las 6 y 30 hasta las 17 horas."

Por su parte, el tiraje del periódico La Razón del 11 de abril reprodujo in extenso el discurso que Lechín había dirigido a los trabajadores mineros el día miércoles 9 de abril, desde la Radio Illimani. Lechín hablaba a nombre de los trabajadores del subsuelo.

No cabe duda de que, en ese momento, Lechín era una de las figuras más populares, pues andaba siempre seguido de muchedumbres que daban vivas a la revolución. Por su parte, los proletarios mineros fueron los que más rápidamente se organizaron en milicias, utilizando las armas arrebatadas al enemigo, y que lucieron orgullosos en su ingreso a la Plaza Murillo. Así se consolidó el triunfo popular. Numerosas fotografías de esos días nos muestran que los fabriles también estaban entrenados a la usanza de la época, con armas colgando en sus pechos. Las mujeres lucían jubilosas, con la V de la victoria en alto; los carabineros acompañaban a los insurrectos; incluso los niños y las niñas participaban de la algarabía general.

Mario Murillo, en su reciente libro titulado La bala no mata sino el destino (2012), resalta el papel desarrollado por los trabajadores fabriles en la insurrección, que, según sostiene, fue minimizado por la historiografía de la revolución. Con base en numerosas entrevistas con protagonistas anónimos que combatieron esos días, muestra que los barrios obreros paceños desplegaron gran capacidad de organización y coraje revolucionario. Y Murillo tiene mucha razón, pues

no hay que olvidar que ese sector también tenía una importante experiencia insurreccional previa. Entre sus principales acciones se encuentra el levantamiento de los barrios fabriles, ocurrido en mayo de 1950. Este levantamiento fue derrotado tras varios días de enfrentamientos con el Ejército, dejando decenas de muertos y cientos de heridos.



Figura 2. Milicias mineras marchan disciplinadamente en 1952.
Fuente: Lucio Flores Salinas.

Recuadro 3

## Discurso de Lechín

"Felicito hondamente emocionado al pueblo, que se ha hecho dueño de sus propios destinos y que ha dado a América una lección que recogerán los siglos como demostración de que en los barrios altiplánicos vive, indomable, el espíritu de la raza heroica que extendió hace seis siglos su civilización hasta los remotos confines de Oriente. Hoy, a seis años de distancia del trágico asesinato del Héroe Gualberto Villarroel, el pueblo de La Paz acaba de rendir, en la misma plaza donde fue colgado, un homenaje de desagravio que me conmovió profundamente, porque ha salido de la más honda entraña popular.

Por encima de los designios de la rosca, que estrangula desde hace sesenta años nuestra economía, hoy se ha fundido en un abrazo fraternal y sincero el pueblo trabajador, la vanguardia del MNR, el Ejército Nacional Patriota y el Cuerpo de Carabineros (…).

Los trabajadores de las minas, que a través de una época jabonada de sangre en los campos de María Barzola, Huanuni, Siglo XX, Uncía, Incahuasi habían ganado gallardamente un puesto de vanguardia en la lucha emancipadora contra el capitalismo financiero, os dicen por mi intermedio, pueblo trabajador de La Paz, que envidian el signo histórico que os llevó hoy a las calles de esta ciudad patricia, cuna de la libertad y cuna de tiranos, para borrar los últimos vestigios de la anti-patria (…).

Las minas que amasaron durante siglos la fortuna de magnates extranjeros son, desde hoy, por heroico mandato de los bolivianos, la piedra inicial de la Soberanía económica. VIVA BOLIVIA, GLORIA A VILLARROEL, MUERA LA ROSCA."

En cuanto a los jefes y comandos del MNR, tanto la prensa –que sacó ediciones especiales en los siguientes días– como la historiografía movimientista posterior coincidieron en resaltar el papel de Hernán Siles Zuazo y de los comandos barriales y zonales del partido en el triunfo popular. Evidentemente, este líder ya gozaba de gran aprecio popular, pues era uno de los pocos miembros de la cúpula movimientista que había retornado clandestinamente a Bolivia en varias oportunidades durante el sexenio pasado. Otros permanecieron en el exilio, viviendo en países vecinos, entre ellos el mismo Víctor Paz Estenssoro, que radicó en Uruguay y en Argentina.

Durante el golpe, ante la arremetida del Ejército, varios de los dirigentes movimientistas que habían participado en los preparativos se encerraron en una casa, midiendo desde allí cómo se iban a desarrollar los acontecimientos para recién actuar. En cambio, Siles Zuazo insistió en que, pese a que la posibilidad de ser vencidos, había que salir a pelear. Consecuente con su posición, desde el 10 de abril se convirtió en uno de los principales estrategas de la lucha popular, actuando con mucho arrojo.

Es verdad que una parte de la cúpula del MNR mostró titubeos en el momento clave. Pero las bases del partido, las organizadas en comandos zonales y barriales –y principalmente en los llamados "Grupos de Honor"–, salieron a pelear desde el primer momento. En la lucha también actuaron las mujeres, comandadas por la valiente líder movimientista Lydia Gueiler.

Finalmente, pese a no haber estado en el momento crucial del triunfo contra el Estado oligárquico, el pueblo exigió el retorno inmediato de Víctor Paz Estenssoro a Bolivia. El Dr. Paz era considerado el jefe nato del proceso revolucionario que se había iniciado, tanto porque era el jefe indiscutido del MNR como por su trayectoria política y capacidad intelectual.

Otra cuestión sobre la que se ha insistido –y con mucha razón– es que el suceso insurreccional de 1952 se desarrolló básicamente en la ciudad de La Paz. En cambio, en los otros departamentos y regiones del país, los acontecimientos revolucionarios no adquirieron mucha relevancia. Sin embargo, no debe desconocerse el papel altamente significativo de las batallas ocurridas en Oruro. Allí, bajo la dirección de los mineros de San José y de las minas aledañas, el pueblo impidió el paso de las tropas del sur hacia La Paz. Muchos ofrendaron sus vidas en esa heroica tarea. Además, en las ciudades de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, los revolucionarios tomaron rápidamente las plazas, destituyendo a las autoridades locales que representaban al viejo régimen. Esto nos revela que allí también se estaba mayoritariamente a favor de la caída de la oligarquía.

Finalmente, si bien los campesinos indígenas no jugaron ningún papel en los tres días de guerra civil, cuando la noticia se esparció por el campo se la recibió con alborozo. Pocas semanas después, cientos de campesinos de los alrededores de la ciudad llegaron a La Paz a mostrar su adhesión a la revolución. A partir de entonces, repetirían estas acciones de manera creciente y masiva.

Así, la revolución de abril tuvo un claro carácter nacional y popular; fue la expresión de una mayoría de los habitantes del país, aunque La Paz fue el innegable epicentro de la insurrección popular. De hecho, este acontecimiento fue apropiado por la memoria histórica como una gesta que demostró –una vez más– el carácter levantisco y revolucionario de los habitantes de la hoyada.

En cuanto a sus conductores, la disputa de las memorias se ha centrado en dos de ellos. Por un lado están el movimiento obrero, que representaba a la clase insurrecta contra los patrones desde el sexenio, y el pueblo en armas –o "los de abajo"–, el que sufría de distintas maneras la opresión oligárquica. Por el otro está el MNR, que había conducido políticamente la lucha contra el sistema oligárquico, y que desde entonces fue denominado como el "partido de la revolución".

¿Y qué pasó con las minorías vencidas?

El rápido desmoronamiento del último gobierno oligárquico mostró que el antiguo régimen había perdido totalmente la legitimidad para mantenerse en el poder. Eso no hubiera sido posible sin un desgaste previo lo suficientemente profundo como para que bastasen tres días para hundirlo. Así lo debieron haber entendido aquellos a los que el viejo sistema les había proporcionado muchas ventajas, pues estos –con excepción del Ejército– no salieron a defenderlo. Posiblemente una actitud diferente de su parte podía haber desatado una guerra civil prolongada, como ocurrió con otras revoluciones del mundo.

Es posible que de ello se desprenda un hecho que ha llamado mucho la atención, haciendo

de la revolución boliviana un caso sui géneris: la casi absoluta ausencia de actos de venganza (ajusticiamientos, asaltos a casas de los caídos, humillaciones desproporcionadas, etc.) o de descontrol de las masas (actos de delincuencia, anarquía, destrucción de bienes estatales, etc.).

El propio Siles Zuazo, que se posicionó como gobernante interino de Bolivia el día 11 de abril, pidió a las masas insurrectas que retornen a sus casas o lugares de origen en calma. Y el pueblo lo escuchó. Las calles de La Paz fueron limpiadas de los escombros que dejaron las barricadas y, pronto, volvió a lucir como antes de las heroicas jornadas. Los trabajadores mineros volvieron a sus campamentos, donde aún reinaban –temerosos– los antiguos amos, a los que no les ocurrió nada. Los campesinos aguardaron unos meses para empezar a movilizarse por la tierra. El pueblo, armado, se llevó los fusiles a sus casas.

Los muertos fueron enterrados en medio del dolor de los familiares y de vítores a la revolución. Los aproximadamente 500 fallecidos que dejaron como saldo los tres días de combates fueron considerados héroes de la gesta popular. Nadie habló de practicar el «ojo por ojo, diente por diente». La revolución no había sido pacífica, pero ahora no se pensaba en nada más que en dar el siguiente paso: consolidarla. La sangre dejó de correr. Comenzó a desplegarse la política.

## La estructuración del nuevo poder: el del cogobierno MNR-COB

La revolución del 9 de abril, al derrotar al Ejército –que representaba al aparato represivo del poder oligárquico–, abrió un momento de clara "disponibilidad del poder", tal como lo señala Zavaleta Mercado. Por las características de la revolución, que había contado con la participación tanto de actores sociales como políticos, rápidamente se planteó el problema de la estructuración del nuevo poder. Una propuesta fue la "alianza de clases" en torno al partido de Gobierno; otra fue una "dualidad de poderes". En esta última, el partido y el movimiento obrero se disputarían su participación en el aparato gubernamental/estatal.

En cuanto a la posibilidad de afianzar la alianza de clases, es indudable que esta era el producto del derrocamiento del régimen anterior, el cual estuvo dirigido por el MNR, el principal auspiciador del golpe de Estado. Por otra parte, la memoria reciente de su triunfo electoral, en 1951, ayudó a afianzar al partido. En los momentos prerrevolucionarios, el MNR había logrado apelar a todas las clases populares con su discurso, recoger banderas económicas y políticas que las reivindicaban. También se había ganado la confianza del pueblo en gran medida a raíz de la persecución sañuda que el Estado practicó con sus líderes. Respaldado por estos hechos, el MNR asumió el gobierno del país.

Al respecto, Fernando Mayorga (2012) señala que el MNR construyó una hegemonía ideológica. Según Mayorga, fue a través de su ideología nacionalista y revolucionaria que el partido apeló a todos los sectores sociales, y lo hizo bajo la postulación de que el país estaba dividido entre la nación y la anti-nación, entre el pueblo y la oligarquía.

También es evidente que, después del triunfo de la revolución, la popularidad del MNR y de sus líderes aumentó significativamente. Esto quedó demostrado en el apoteósico recibimiento brindado a Paz Estenssoro por la población de La Paz tras su arribo al país, el 15 de abril de 1952. Este acontecimiento tuvo lugar exactamente un año después de que al líder se le impidiera volver a Bolivia para asumir la cabeza del proceso electoral, como candidato a la Presidencia por el MNR.

El 23 de abril del mismo año, la Corte Superior de Justicia, reunida en sala plena, declaró constitucional al nuevo Gobierno. La Corte le otorgó legalidad al interpretar como legítimo el triunfo electoral del MNR en 1951 –el triunfo había sido desconocido por un golpe de Estado, lo que fue un argumento más para legalizar el Gobierno del MNR. Sin embargo, no hay que olvidar que el MNR apeló a la acción armada en 1949, cuando impulsó el derrocamiento del Gobierno a través de lo que se denominó la "guerra civil". Esta insurrección duró tres meses antes de ser derrotada, pero en 1952 nadie pudo impedir el golpe de Estado del MNR.

Pero hubo otro hecho que contribuyó al ascenso del MNR al poder. Sucede que los demás partidos políticos, creados en la década del cuarenta, que antes de 1952 contaban con importantes bases sociales –como Falange Socialista Boliviana (FSB), el Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR) y el Partido Obrero Revolucionario (POR)–, en ese momento se encontraban

bastante disminuidos. Ninguno de ellos podía equipararse en popularidad y militancia al MNR, ninguno podía aspirar a ser un factor de poder. Es verdad que algunos de sus postulados coincidían e incluso se habían adelantado en mucho a los que sustentaba el MNR. Pero fue este partido –bajo el paraguas de las "Banderas de Abril"– el que se apropió eficazmente del discurso antioligárquico y convirtió a las demandas populares en un programa de cambios para la sociedad y el Estado bolivianos.

Por otra parte –y pese a que parte de la historiografía movimientista tradicional ha minimizado su papel–, es indudable que la clase obrera llegó a la insurrección con una importante acumulación histórica previa de luchas contra la oligarquía. Estas disputas fueron asumidas y asimiladas por la memoria histórica. Muchas de ellas se habían desarrollado de manera autónoma, es decir: sin la intervención directa de terceros ni de conductores políticos de los partidos. Este fue el caso de las sublevaciones llevadas adelante por el proletariado minero y fabril y los obreros artesanos urbanos de La Paz. Igualmente importantes fueron las insurrecciones previas en el campo.

En cuanto a los obreros proletarios, durante el sexenio (1946-1952) –etapa calificada como decisiva para que los posteriores acontecimientos políticos tuvieran lugar–, los centros mineros fueron el escenario de los principales ensayos preinsurreccionales. Este es el caso del levantamiento ocurrido en enero de 1947 en Potosí y el de mayo de 1949, que llevaron a cabo los mineros de Siglo XX y Catavi. La FSTMB también tuvo un rol fundamental, pues en noviembre de 1946, en el Congreso Extraordinario de Pulacayo, adoptó una tesis radical. También conformó el Bloque Parlamentario Minero, compuesto por sus dirigentes y los del POR, que logró ingresar al Parlamento con senadores y diputados.

Pero, en realidad, el armamento obrero y el clima revolucionario eran fenómenos generalizados en los campamentos mineros, pues allí los sindicatos locales jugaban un papel central en la representación de las bases. Por otra parte, los mineros se convirtieron en el enemigo principal de los gobiernos pro-oligárquicos, que los acusaron de subversivos y comunistas. Y también se convirtieron en una referencia para el pueblo en general, que comenzó a considerarlos como la vanguardia del movimiento obrero y popular.

El sector fabril se organizó más tarde que los mineros, y recién construyó la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB) en 1950. Sin embargo, desde la insurrección de mayo de ese año, este sector ocupó un lugar significativo en las luchas populares anti-oligárquicas, aportando con una gran cuota de sacrificio.En efecto, a mediados de ese mes se desató una brava lucha callejera en los barrios fabriles; sus habitantes fueron masacrados por tierra y por aire. Una muestra del reconocimiento a su aporte fue la declaratoria del Día del Fabril, el 18 de mayo de 1952. Esto se hizo mediante un Decreto Supremo emitido por el Gobierno movimientista.

Junto a los sectores obrero artesanales y populares paceños, los fabriles pasaron de su discutible –y hasta cierto punto incomprensible– participación directa en el derrocamiento y colgamiento del presidente Villarroel, en julio de 1946, a ser parte de un abigarrado bloque social popular de la urbe paceña. Los principales enemigos del bloque eran la rosca minera-feudal y a su brazo armado, las Fuerzas Armadas, que durante todo el sexenio fueron leales al sistema y reprimieron a los insurrectos. Dentro de ese bloque, los sectores artesanales –que categorialmente pueden ser incluidos como parte de las clases medias bajas, compuestas por mestizos residentes– tenían también sus importantes acumulaciones previas de experiencias de resistencia y disidencia. Sus acciones más rescatables fueron su contribución a la creación de las organizaciones obreras, pioneras en las primeras décadas del siglo XX, y la lucha por conquistas sociales de marcada influencia anarquista. Además, este grupo tenía una larga tradición de lucha por afianzar su identidad cultural.

Respecto a los campesinos, su resistencia contra las distintas formas de opresión –étnica, cultural, social, económica y política– de los terratenientes y los abusos del Estado venía de mucho tiempo atrás. Además, estos llevaban adelante una lucha centenaria por mantener sus tierras de comunidad, oponiéndose a los diferentes intentos de desestructurar ese sistema ancestral. Quizás baste con decir que, muy pocos años antes la insurrección de abril –a lo largo de 1947–, se produjo

una sublevación indígena de vastos alcances. Producto de ella, decenas de insurrectos fueron asesinados; los líderes del levantamiento fueron apresados y enviados a campos de residenciamiento. La represión selectiva e indiscriminada no cesó hasta la caída del régimen oligárquico y latifundista, en 1952.

Paralelamente al declive del antiguo régimen –y sobre todo en Cochabamba–, la idea de la reforma agraria comenzó a ser puesta en marcha antes de su dictación formal, en 1953. Los sindicatos rurales comenzaron a afianzarse desde la posguerra del Chaco, como un nuevo instrumento organizativo. Así, si bien los campesinos indígenas no tuvieron ninguna participación directa en la insurrección, fueron gravitantes en el desgaste del poder oligárquico en los años del sexenio.

La conducción política del MNR en el derrocamiento del Gobierno oligárquico es algo indiscutible. Pero el desmoronamiento del sistema –y del poder sustentado por la rosca– fue posible en la etapa prerrevolucionaria por la acción directa y constante de los sectores sociales obreros, campesinos indígenas y populares urbanos. Tampoco hay que olvidar el papel de los intelectuales que no necesariamente estaban vinculados con el MNR, entre ellos estudiantes y catedráticos de las universidades, que contribuyeron a perfilar las demandas centrales del cambio desde la década de 1930.

Inmediatamente después del triunfo de la insurrección popular, la manera en que se resolvería la disponibilidad de poder (señalada anteriormente) se convirtió en un asunto que no era tan fácil de resolver. Varios sectores podían recurrir al papel jugado en el periodo previo a la caída del régimen para reclamar espacios en el nuevo esquema de poder. Es más, de acuerdo a la tesis tan conocida de Zavaleta Mercado, el movimiento obrero estaba lo suficientemente capacitado como para ejercer un "poder dual" o, yendo más lejos incluso –tomando la postura de Guillermo Lora–, para tomar el poder para sí.

Así, el primer momento de tanteo y medición de la correlación de fuerzas surgida de la revolución se dio entre el MNR, ya instalado en el Palacio de Gobierno, y el movimiento obrero, que se organizó y aglutinó desde el 17 de abril de 1952 en la Central Obrera Boliviana (COB).

El dirigente movimientista Alfredo Franco Guachalla fue un actor directo del nacimiento de la COB, el 16 de abril, en la reunión que fue convocada en la sede de los gráficos. Según su testimonio (Así nació la COB, s/f), en aquella reunión, que concluyó con la creación de esa central sindical, participaron dirigentes de diferentes partidos políticos. Por el Partido Comunista de Bolivia (PCB) estaban Joselín Pereira, Sergio Almaraz y Víctor Hugo Libera. Del Partido Obrero Revolucionario (POR) fueron parte Guillermo Lora, Edwin Moller y Ernesto Ayala Mercado. También había un amplio grupo de movimientistas autocalificados como izquierdistas, entre los cuales estaban Ñuflo Chávez, Mario Torres, Germán Butrón, Abel Ayoroa, Mario Guzmán Galarza, Mariano Baptista y Antonio Álvarez Mamani.

Dirigentes políticos y representantes de las diversas organizaciones sindicales y sociales volvieron a reunirse el 17 de abril:

> La Secretaría de la Federación Gráfica de La Paz estaba repleta. Durante varias horas se escucharon brillantes discursos. Era una extraordinaria reunión, parecida seguramente a las fulgurantes asambleas que realizaron Jacobinos y Girondinos en la Gran Revolución Francesa (Ibíd.).

Allí se determinó que la COB tendría la siguiente plataforma de lucha:

Recuadro 4

### Plataforma de lucha de la COB

1. Nacionalización inmediata de las minas sin indemnización y bajo control obrero.
2. Revolución agraria mediante la confiscación de los latifundios y su entrega a las organizaciones sindicales.
3. Establecimiento del voto universal.
4. Disolución y aplastamiento total del Ejército y sustitución con milicias armadas de obreros y campesinos.
5. Nacionalización de los ferrocarriles.
6. Realización de un Congreso Nacional de Trabajadores.
7. Derogatoria de las disposiciones antiobreras dictadas por los anteriores regímenes.

Fuente: La Nación, 20 de abril de 1952.

El Primer Comité Ejecutivo de la COB fue conformado por distintos miembros de los algunos de los sectores que conformaban el bloque obrero:

Recuadro 5

### Primer Comité Ejecutivo de la COB

- Juan Lechín Oquendo (minero): Secretario Ejecutivo.
- Germán Butrón (fabril): Secretario General.
- Mario Torres Calleja (minero): Secretario de Relaciones.
- José Luis Jofré (clase media): Secretario de Hacienda.
- José Zegada Terceros: Secretario de Actas.
- Julio Gonzáles: Secretario de Prensa y Propaganda.
- Edwin Möller: Secretario de Organización.
- Waldo Álvarez (gráfico): Secretario de Cultura.

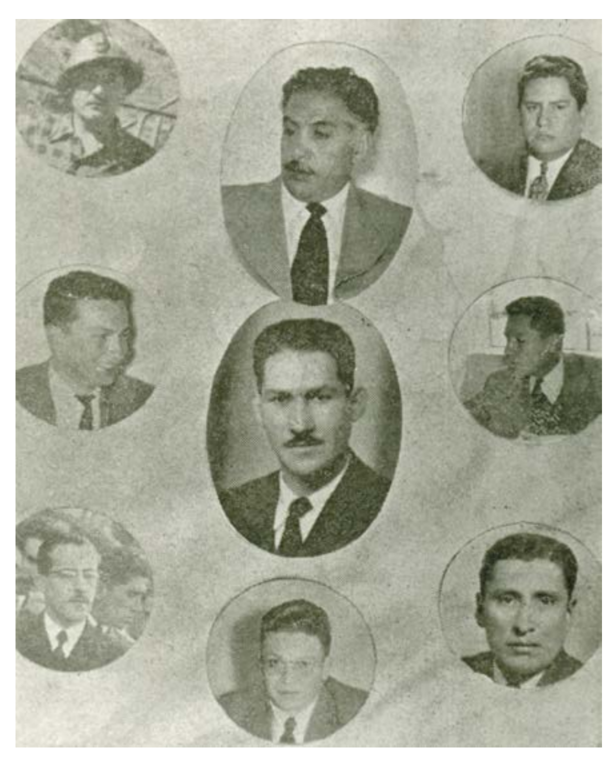


Figura 3. Primer Comité Ejecutivo de la COB.
Fuente: Archivo Magdalena Cajías.

La COB, matriz sindical del movimiento obrero, contaba con la presencia –sin excepción– de todos los sectores sociales importantes en su seno, además de otros menos significativos y de las milicias armadas. La unión de todas estas instituciones y sectores supuso el control inmediato del aparato represivo del Estado, que ahora tenía una gran capacidad de movilización. Así, la matriz sindical se constituyó en un poder que no podía dejar de ser tomado en cuenta. Eso fue lo que posibilitó el establecimiento del cogobierno MNR-COB, cuya implantación aparentemente fue el resultado de una propuesta de Juan Lechín al MNR. La COB y la FSTMB apoyaron la medida con una movilización, y el partido de Gobierno la aceptó, pues vio en ella una forma de ejercer mayor control sobre el movimiento obrero.

Durante el periodo del cogobierno, la COB participó inicialmente con tres ministros, colocados en tres carteras claves para el momento. La de Minería y Petróleos estaba a cargo del dirigente minero Juan Lechín. La de Asuntos Campesinos fue encargada a Ñuflo Chávez (quien a pesar de su extracción pequeño burguesa fue considerado dirigente de los campesinos, debido a su cercanía con ese sector). Finalmente, la de Trabajo y Previsión Social fue dirigida por Germán Butrón, un dirigente fabril de importante trayectoria sindical.

La presencia de la clase obrera en el primer Gabinete movimientista ha sido un tema ampliamente debatido. Aunque las posiciones difieren en algunos puntos, parecen coincidir respecto a que la potencial capacidad de presión de la clase obrera sobre el naciente Estado le otorgó a éste un carácter más cercano al concepto de revolucionario. Otra hubiera sido la historia si se dejaba gobernar a la pequeña burguesía o a las clases medias arribistas –la "burguesía embrionaria"–, sin el concurso del movimiento obrero. Si la mayoría de las posiciones coinciden en esto es porque, como veremos más adelante, las principales medidas de la Revolución Nacional fueron posibles en gran medida por la acción y presión directa de los actores sociales y populares interesados en ellas.

Es importante matizar que, sobre todo durante la primera gestión de gobierno del MNR, las concepciones sobre el sentido del cogobierno tuvieron implicaciones diferentes para ambas partes. Por un lado estaban los militantes políticos y sindicales del MNR. Para este primer grupo –entre ellos para el propio Juan Lechín–, el cogobierno significó principalmente una especie de pacto entre dos actores gravitantes de la revolución. A través de una convergencia de

intereses comunes, estas dos entidades debían llevar adelante las medidas revolucionarias. Así, los ministros obreros, los directores obreros de COMIBOL y las cúpulas sindicales de la COB y la FSTMB tomaron su participación en las esferas de decisión estatal como un compromiso militante con el partido de Gobierno (en el que muchos de ellos ocupaban cargos importantes). Su participación en el partido y en el Gobierno era un concurso responsable que debía desarrollarse dentro de los marcos posibles, sin pretensiones desestabilizadoras, lo que provocó un cierto distanciamiento con sus bases sindicales.

Pero del otro lado estaban las bases sindicales de la COB y la FSTMB, que recibieron bastante influencia del Partido Obrero Revolucionario (POR), del Partido Comunista de Bolivia (PCB) y de otras corrientes de la izquierda marxista. Por la consulta de muchos documentos emitidos por los sindicatos locales de las minas y de otros sectores que pertenecían a la máxima central sindical se advierte que, principalmente para las bases de la COB y de la Federación de Mineros, el cogobierno era una especie de "garantía". Solo mediante el cogobierno ellos podían estar seguros de que los intereses populares serían tomados en cuenta por el Poder Ejecutivo. Además, las bases creyeron que, estando en el poder, iban a poder ejercer control sobre el partido y evitar que éste se desvíe de los postulados revolucionarios.

Así, a pocos meses de funcionamiento del cogobierno, las bases de la COB emitieron un voto resolutivo que emergió de una asamblea. En este voto se dijo lo siguiente:

> Los compañeros Juan Lechín y Germán Butrón están obligados a informar con carácter permanente a sus bases mientras ejerzan sus cargos ministeriales de todo cuanto políticamente interesa a la relación de fuerzas entre explotados y explotadores. Los representantes obreros ante la COB tienen derecho de pedir informaciones y presentar interpelaciones cuantas veces estimen conveniente (El Diario, 28 de agosto de 1952).

Más adelante, inmediatamente después de dictada la Reforma Agraria, en agosto de 1953, la COB utilizó a sus federaciones, confederaciones y sindicatos locales para presionar al Gobierno. Esto se hizo con el fin de conseguir mayor participación obrera en el Gabinete, o, como ellos lo dijeron, "para mantener el ritmo ascendente de las conquistas en favor de las grandes mayorías" (El Diario, 20 de agosto de 1953). Luego de una crisis de Gabinete ocurrida en octubre de ese año, la cantidad de ministerios obreros fue ampliada de tres a cinco. A través de esta medida, Ángel Gómez (como Ministro de Obras Públicas), Fernando Antezana (como Ministro de Trabajo) y Fellman Velarde (como Secretario Privado de la Presidencia), además de Juan Lechín y Ñuflo Chávez, entraron al Gabinete. Eso sí: está claro que ninguno de ellos era exactamente de extracción obrera.

En ese momento, para el presidente Víctor Paz Estenssoro la presencia de Lechín en el gabinete era imprescindible, pues el dirigente sindical le parecía capaz de mantener a aquel movimiento dentro de los límites dictados por el partido. Por ello, cuando Lechín quiso renunciar a su cargo por el pedido de las bases –que deseaban que atienda mejor sus funciones de dirigente máximo en la COB y la FSTMB–, el Presidente desestimó la medida. Según su declaración, "ese dirigente debe mantenerse en puestos altos para la realización de las tareas de la Revolución Nacional" (La Nación, 7 de octubre de 1954).

Sin embargo, poco antes de la realización del I Congreso Nacional de Trabajadores, las bases lograron imponer a Lechín su renuncia. En adelante, el dirigente debía ocuparse íntegramente de su organización. Lechín fue reemplazado en ese cargo por Mario Torres Calleja, hasta entonces Secretario General de la FSTMB. El Congreso se inauguró el 31 de octubre de 1954, instalado en el Palacio Legislativo, cobrando un aire de "parlamento obrero-campesino". Fue en ese ambiente que el tema del cogobierno se discutió nuevamente.

En el documento político, aprobado tras intensos debates –y que fue titulado "Programa Ideológico de la COB"–, se adoptó la posición que Lechín había manifestado días antes. Entonces, el dirigente había insistido en que la "independencia sindical" (concepto propugnado por la Tesis de Pulacayo) ya no tenía razón de ser, pues esta no debía ejercerse con gobiernos populares como el movimientista:

> …ya que las clases trabajadoras juegan dentro de ese organismo político un papel colegislador y coejecutivo, ya sea por intermedio de los congresos obreros o asambleas sindicales, o por intermedio de sus Ministros (COB: 1955).

Unos meses después, en una carta enviada a la prensa, los ministros obreros manifestaron lo siguiente:

> Aun en nuestra condición de Ministros Obreros, no nos creemos representantes en el Gobierno de una organización con política propia o ajena a la política de gobierno. Ante todo, somos militantes del MNR y actuamos dentro del Poder Ejecutivo, si bien como representantes del proletariado boliviano, que es también Gobierno desde el 9 de abril, en función del programa y las directivas de nuestro partido (La Nación, 26 de marzo de 1955).

Pero volvamos al I Congreso, pues allí se discutieron distintos temas sociales, económicos y políticos relacionados con el rumbo que seguiría la Revolución Nacional. Los dirigentes afiliados al partido de Gobierno lograron que las bases apoyaran sus puntos de vista, y esto queda plasmado en el siguiente párrafo del documento político final:

> Nuestra Revolución, pues, es nacional y popular. (…) El Gobierno revolucionario actual es una dictadura democrática de obreros, campesinos y sectores populares y de clase media (COB, 1954: 28).

Todo lo expuesto no debe llevarnos a la fácil conclusión –muchas veces sustentada por el trotskista Guillermo Lora– de que el cogobierno MNR-COB no reportó beneficio alguno para la central sindical; tampoco a decir que el cogobierno fue totalmente instrumentalizado por el MNR. La experiencia de la participación obrera en el poder fue mucho más que eso. Esto lo demuestra el hecho de que, en otros momentos históricos, la COB –y sobre todo sus bases sindicales– volvió a reivindicar esa forma de participación política en el poder. Dos ejemplos concretos de la adhesión de la COB al Gobierno son los de 1971 y 1983.

Quizá lo más significativo de esa experiencia histórica fue el hecho de que los sindicatos y las centrales obreras adquirieron una dimensión política e, incluso, una especie de "vocación de poder". Dicha vocación, sin estar ausente en la propia Tesis de Pulacayo de 1946, se diferenció de esta porque no alcanzó a plantear el ejercicio directo del poder o –en términos de la teoría marxista– la "dictadura del proletariado". En todo caso, se puede decir que la COB ejerció el poder en un marco mucho menos radical que el que años antes proponía la Tesis.

## Sindicatos y milicias armadas

Por su impacto a largo plazo, uno de los dos hechos más significativos que derivó del triunfo popular de 1952 fue el afianzamiento y la expansión de la forma sindical en Bolivia (el segundo hecho significativo fue la constitución de milicias armadas en los sectores obrero y campesino, pero este lo revisaremos más adelante). Como vimos, la participación central de los mineros en este triunfo adquirió el significado de un momento fundador para su identidad social y su historia futura; fue un punto de partida decisivo en su memoria colectiva de clase. Pero este triunfo también fue fundamental para el desarrollo del sindicalismo de clase.

Los sectores obrero y campesino se percibieron a sí mismos como una fuerza redentora triunfante, entendiendo que su concurso en el proceso de la revolución se ubicaba en primera línea. En vista de esto, la reorganización de sus sindicatos era una medida esencial, más aún porque entonces contaban con totales garantías para su funcionamiento. Atendiendo a esta necesidad, en todas las empresas se renovaron las directivas sindicales. Para hacerlo se apeló a la democracia directa, ya que las directivas fueron elegidas en asambleas generales y por aclamación. De hecho, se exigió que nadie quedara al margen de la actividad sindical.

La democracia obrera se impuso en el proceso de elección de los sindicatos de empresa, pues permitió la participación de militantes de diferentes partidos en las directivas, aun cuando la mayoría de los obreros se identificaban con el MNR. Por ejemplo, Pastor Peñaranda, militante del POR, fue elegido Secretario General de la Unificada. Federico Escóbar, miembro del Partido Comunista, fue designado para el control obrero de Siglo XX. Esta medida no le gustó a buena parte de los dirigentes de la Federación de Mineros, cuyos miembros tenían una relación más estrecha con las estructuras partidarias del MNR.

Hubo varias intervenciones de los dirigentes de la FSTMB a favor de una "movimientización" de los sindicatos mineros. Ello no obstante, la tradición democrática de las bases de ese sector fue reafirmada en la práctica sindical. En los años posteriores a 1952, los asuntos de interés colectivo para el sector obrero fueron tratados

en masivas asambleas generales. En estas asambleas se discutieron ampliamente los pasos que se debía tomar, y se buscó permanentemente que las resoluciones sean aprobadas por consenso. Además, en la mayoría de los casos, el dirigente únicamente actuaba como mediador, y acataba disciplinadamente lo resuelto por las bases. Incluso Juan Lechín Oquendo tuvo esta actitud como norma en la mayor parte de su carrera sindical.

Ahora los sindicatos contaban con sus propios locales. De ser alguien que actuaba en la clandestinidad, el dirigente pasó a convertirse un portavoz de los trabajadores, con suficiente credibilidad y poder, frente a las empresas. Mujeres viudas que debían abandonar el campamento, jóvenes que intentaban ingresar a trabajar, obreros que tenían alguna queja contra los técnicos, todos ellos se dirigían al sindicato cuando querían solucionar sus problemas.

Los sindicatos no solamente atendían cuestiones políticas o sociales. En los primeros años de la revolución, también desplegaron una amplia labor cultural en las minas. Cantantes famosos, compañías de teatro sudamericanas y circos de todas partes arribaron a las minas. Se organizaron campeonatos de fútbol, concursos de poesía y canto. Los clubes sociales, antes cerrados exclusivamente a los técnicos, se convirtieron en locales donde se producía una intensa socialización entre los trabajadores. Se consideraba que la cultura era uno de los pilares para la construcción de la nueva sociedad.

Por su parte, el Gobierno del MNR contribuyó con fondos para la reapertura o apertura de emisoras mineras, algunas de las cuáles ya funcionaban desde la década del 40. Este fue el caso de la Radio San José de Oruro y La Voz del Minero de Catavi. Otras nuevas fueron creadas, como Radio Nacional Huanuni, en 1958. Financiadas y administradas por los sindicatos, las radios se encargaron de transmitir las noticias en las minas, además de cumplir amplias funciones artísticas y culturales y acompañar la cotidianidad de las familias mineras.

El sindicato emergió como la institución encargada de organizar la vida en los campamentos mineros. La gerencia era vista ahora como una entidad de las empresas que debía ponerse al servicio de los intereses de los trabajadores. La mina, aún antes de la nacionalización, ya pertenecía a los trabajadores.

Pero el sindicato minero local no se quedó en el ámbito estrecho del campamento. La insurrección popular, en la que sus bases habían participado activamente, los había conectado con el mundo del exterior, con la Bolivia de la Revolución Nacional. Para el Gobierno del MNR era fundamental contar con el respaldo del sector del proletariado minero; por su parte, el movimiento obrero y popular percibía a este sector como su guía, y su influencia iba incluso más allá, pues la sociedad en su conjunto lo consideraba un actor indiscutible de la revolución. Al mismo tiempo, los mineros demostraban fehacientemente su voluntad participativa, al declarar de forma constante que impulsarían las tareas revolucionarias.

También la FSTMB, que había sido sañudamente perseguida durante el sexenio, fue reorganizada después de la revolución. A su cabeza quedaron líderes de gran trayectoria política y sindical. Es por esto que llama la atención que entre 1952 y 1956 la FSTMB haya tenido una actividad limitada –y hasta se podría decir "anormal". Pero sucedió así; su actividad se redujo a convocar conferencias mineras que, en general, tuvieron un carácter coyuntural y muy puntual.

Pese a que los estatutos de la Federación Minera exigían la realización de un congreso nacional anual, hasta 1957 no se había convocado a uno solo de estos. Quizás esto se deba a que, una vez instaurado el nuevo régimen, los ministros obreros y los directores obreros en COMIBOL se convirtieron en los intermediarios privilegiados de las demandas de los sindicatos hacia el Gobierno. Pero también pudo deberse a que la presencia en los congresos de dirigentes de otras corrientes políticas podía generar problemas en la relación con el partido. Lógicamente, esto era algo que se buscaba cuidar desde las cúpulas de la COB y la FSTMB.

En noviembre de 1954, cuando se llevó a cabo el I Congreso de la COB, la identificación con el nacionalismo revolucionario fue casi total, y las visiones críticas fueron rechazadas o controladas. De todos modos, ese primer Congreso de la matriz sindical fue también una muestra fehaciente de cuán fuerte era la forma sindical, pues en ella se incluía a la gran mayoría de los sectores sociales. El Congreso también sirvió para consolidar el lugar central de los mineros –y del sector proletario en general– dentro de su estructura organizativa.

Recuadro 6

## Estructura organizativa de la COB aprobada en 1954

"El Comité Ejecutivo Nacional de la COB está presidido por el Secretario Ejecutivo y por 12 Secretarios cuyas carteras son: General, de Relaciones, de Conflictos, de Organización, de Hacienda, de Prensa y Propaganda, de Milicias Armadas, de Asuntos Campesinos, de Defensa Sindical, de Control y Estadística, de Asuntos Femeninos, de Educación y Cultura y Secretario Permanente.

Las organizaciones auxiliares de la Central Obrera Boliviana son los 17 Comités Regionales correspondientes a las siguientes Regiones Sindicales: La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Cobija, Riberalta, Valle Grande, Tupiza, Viacha, Yacuiba Camiri, Uyuni y Villamontes."

La representación proporcional al interior de la COB era así:

"PROLETARIADO (sector extractivo)
- 10 Representantes de la FSTMB (Mineros)
- 3 Representantes de la FSTPB (Petroleros)
- 1 Representantes de la FSTSB (Siringueros)

Total: 14 votos

PROLETARIADO (industriales)
- 6 Representantes de la CGTFB (Fabriles)
- 4 Representantes de la CSTCB (Constructores)
- 1 Representantes de la FGB (Gráficos)
- 1 Representantes de la FSTHB (Harineros)

Total: 12 votos

PROLETARIADO (transportes y comunicaciones)
- 6 Representantes de la CSTFRATA (Ferroviarios y ramas anexas)
- 3 Representantes de la CSCH (Chóferes)
- 3 Representantes de la CNTT (Telecomunicaciones y Fed. Post.

Total: 12 votos

CAMPESINOS
- 12 Representantes de la Confederación Afiliada

Total: 12 votos

CLASE MEDIA
- 2 Representantes de la CTP (Empleados Particulares)
- 2 Representantes de la CTE (Trabajadores del Estado)
- 2 Representantes de la CESBRA (Bancarios)
- 2 Representantes de la CSTEB (Trabajadores de la Enseñanza)
- 1 Representantes de la CPB (Confederación de Porteros)
- 1 Representantes de la FSTSB (Sanitarios)
- 1 Representantes de la FSTGB (Gastronómicos)

Total: 12 votos

TRABAJADORES INTELECTUALES
- 2 Representantes de la CGTCB (Trabajadores de la Cultura)
- 2 Representantes UNE (Unión Nacional de Estudiantes: 1 por CUB y el otro por la FES y la FEIP).
- 1 Representantes CGPLB (Profesionales Libres)

Total: 5 votos

ORGANIZACIONES POPULARES
- 2 Representantes de la CNAD (Gremiales Art.)
- 2 Representantes CNCPB (Uno por los Comités de Manzana y uno por los Sindicatos de Inquilinos)

Total: 4 votos

TOTAL DE REPRESENTACIONES ANTE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LA COB

| | |
|---|---|
| – Proletarios | 38 votos |
| – Campesinos | 12 votos |
| – Clase Media | 21 votos |
| – Comité Ejecutivo Nacional | 12 votos |

Total: 83 votos

Fuente: COB, 1954.

Muy poco después del triunfo de la insurrección, el sector campesino vivió un momento febril de organización sindical, sobre todo en el Altiplano paceño y en los valles cochabambinos. La tarea fue apoyada por la COB, la FSTMB, los partidos de izquierda marxista –principalmente el POR– y, de manera muy significativa, por el partido de Gobierno. El MNR respaldó esta medida desde el Ministerio de Asuntos Campesinos, dirigido por Ñuflo Chávez. Eso sí, no hay que olvidar que esta forma de organización ya se había expandido de manera importante en el área rural desde la década de los cuarenta, especialmente por el propio impulso de los campesinos-indígenas. De hecho, esto es algo que han señalado varios autores y que Laura Gotkowitz se tomó el trabajo de remarcar en su libro La Revolución antes de la Revolución, publicado en 2011.

Con el apoyo del partido oficialista, el 15 de julio de 1952 se creó la Confederación Nacional

de Trabajadores Campesinos. Meses después, para noviembre del mismo año, ya estaban compuestas las más importantes Federaciones Agrarias Departamentales. Según la información que el 21 de noviembre publicó el periódico La Nación, unos 400 núcleos campesinos de Cochabamba se habían afiliado a los 20 sindicatos dependientes de la Federación Departamental, creada el 6 de agosto de ese año en Sipe Sipe. La Federación Departamental de La Paz fue organizada por el Ministro de Asuntos Campesinos, y tuvo como sus principales dirigentes a Juan Céspedes y Gabino Apaza. Al mismo tiempo, la organización sindical de Ucureña –existente desde 1936– se fortaleció en el post 52 bajo la dirección de José Rojas. Esta organización logró influir en la sindicalización campesina de todo el valle alto de Cochabamba; en cambio, el valle permaneció bajo el dominio del dirigente Sinforoso Rivas.

En todas partes, el modelo de sindicato que se siguió era el mismo que se había adoptado en el valle alto cochabambino después de la Guerra del Chaco: bastante parecido a un sindicato obrero. Así, los sindicatos campesinos de todo el país tomaron esas características –y algunas propias en cada caso. En cuanto a la influencia obrera en el área rural, no hay que olvidar que, desde la década de 1920, varios líderes indígenas tuvieron relaciones y contacto fluido con líderes obreros urbanos. Estos últimos estaban afiliados a federaciones obreras como la FOL, la FOT y otras. Además de ese contacto, los dirigentes campesinos del sexenio –como Pedro Ajhuacho, Enrique Encinas y otros– tuvieron experiencias sindicales previas en las minas. De hecho, varios líderes mineros que fueron expulsados de los campamentos se trasladaron a hacer labor sindical en el campo, sobre todo a partir de 1947. Al final de cuentas, al MNR también le favorecía que el modelo sindical obrero se instalara en el área rural, y por eso lo fomentaba.

Ello no obstante, el partido de Gobierno mostró dubitaciones y contradicciones frente al fortalecimiento de las organizaciones campesinas. Por ejemplo, el 2 de agosto de 1952 dictó una amnistía para todos los indígenas que se habían sublevado en los últimos seis años. Con esta resolución se determinó la liberación de los que permanecían en las cárceles, pero esta no fue aplicada inmediatamente. Incluso se generó un amplio debate sobre si era o no conveniente hacerlo, pues el miedo a la posibilidad de nuevas sublevaciones indígenas seguía latente en las clases medias urbanas y, por supuesto, entre los hacendados. Unos meses después, durante los conflictos que generaron los campesinos indígenas, presionando para que se aplique la reforma agraria, muchos de ellos fueron apresados e incluso maltratados.

Más allá de esto, el fortalecido sindicalismo campesino mostró desde el principio una gran simpatía y adhesión hacia el proceso revolucionario y hacia su principal conductor político. Esto quedó patente en las numerosas manifestaciones que se realizaron en la ciudad de La Paz. Por ejemplo, miles de campesinos estuvieron presentes en la urbe el 1 de mayo de 1952, luciendo sus vestimentas tradicionales y marchando al son de sus pututus, sus instrumentos de viento y sus tambores. Pasaron por el centro de la ciudad –e incluso por la plaza Murillo– sin sufrir discriminación alguna. Este hecho, altamente simbólico, significaba la ruptura respecto a épocas pasadas, pues en situaciones similares habían sufrido el rechazo de la ciudadanía.

El 2 de agosto de 1953 se decretó la Reforma Agraria. Desde el Ministerio de Asuntos Campesinos se procuró intervenir más directamente en las organizaciones sindicales campesinas, pues se buscaba una amplia lealtad de estas hacia el MNR. Esta lealtad se hizo evidente en el Primer Congreso Campesino, realizado el 31 de julio de 1954. En esa oportunidad, el Gobierno hizo aprobar unas normas sindicales que no habían sido elaboradas por los propios sindicatos.

Recuadro 7

### Normas para el funcionamiento de los sindicatos campesinos, aprobadas en 1954

1. Toda actitud debe tomarse en reunión de directiva, trabajando siempre como cuerpo colegiado, en el cual los diferentes trabajos acordados sean por la directiva en pleno.
2. Se deben establecer normas iguales para la formación de sindicatos en el campo.
3. La organización o cambio de directivas de las Centrales Campesinas deberá hacerse previo pedido a la Federación Nacional de Trabajadores Campesinos y al Ministerio de Asuntos Campesinos.
4. Lo mismo para la reorganización de federaciones departamentales

Fuente: La Nación, 5 de marzo de 1954:4.

Hacia 1954, más de 9000 sindicatos campesinos se habían afiliado a las federaciones campesinas provinciales y departamentales y a la Confederación Nacional de Campesinos de Bolivia –esta última tuvo un carácter claramente oficialista desde sus inicios. Paralelamente, los principales dirigentes locales (como Sinforoso Rivas, Gabino Apaza, Álvarez Mamani, José Rojas y Toribio Salas, entre otros) se fueron adscribiendo al MNR.

La emergencia y la actuación de los sindicatos campesinos, las federaciones y la Confederación Nacional en tiempos de la Revolución Nacional han provocado grandes debates y análisis por parte de los especialistas, principalmente a partir de la década de 1970. Pero, pese a su importancia, este no es el espacio para extendernos en ello, por lo que nos limitaremos a señalarlo. Una de las posiciones más recurrentes es la de considerar que el sindicalismo campesino fue impuesto por el MNR (Rivera, Ticona). Según estos autores, el partido de Gobierno lo hizo para cooptar a este sector como una base social incondicional y para debilitar a las organizaciones naturales de los indígenas, todo esto como parte de una estrategia de modernización. Pero otros autores –como Xavier Albó– han intentado demostrar que las organizaciones sindicales campesinas tuvieron importantes márgenes de actuación autónoma. Para ellos, la adopción de la "forma sindical" fue también parte de su proceso interno y de sus condiciones históricas.

Respecto a las milicias obreras y campesinas, es importante mencionar que las primeras de estas se organizaron espontáneamente, mientras se desarrollaban las jornadas de abril de 1952. Ese fue el momento en que muchos trabajadores lograron apoderarse de armamento, tal como se había previsto en la Tesis de Pulacayo. En un primer momento del Gobierno revolucionario, tanto en las minas como en las ciudades, las milicias obreras fueron vistas como la garantía de defensa del nuevo orden. Estaban para sustituir al Ejército, que había sido desbandado y destruido junto con el poder oligárquico. Los milicianos armados se convirtieron en el símbolo del triunfo alcanzado y en el aparato represivo del nuevo Estado.

La COB y la Federación de Mineros organizaron cuerpos de milicianos compuestos por unos 50 a 200 hombres, a los que consideraban el brazo armado de la revolución. A nivel local, estos dependían de la Secretaría de Milicias del sindicato. A nivel nacional, la encargada de los cuerpos milicianos era la secretaría de la FSTMB –para el caso de los mineros– y la de la COB –para las milicias populares.

El armamento con que contaban tenía tres orígenes distintos. Una parte la habían acumulado durante el sexenio; otra la habían arrebatado al Ejército o la habían recibido de parte de los carabineros en las jornadas de abril. Pero la última parte fue el armamento que el nuevo Gobierno hizo llegar a los centros mineros a través de COMIBOL. Esto lo pudimos constatar en las notas de recepción que se encuentran en el Archivo de esa institución. En estos documentos se puede observar que el grueso de los fusiles y municiones fue entregado al sindicato de Huanuni –quizá porque en esa mina la adhesión al MNR era indiscutible, como se verá luego.

En junio de 1953, cuando se reconstruyó el Ejército, la FSTMB respondió al temor de que las milicias obreras y populares pudieran desaparecer de la siguiente manera:

> …[organizó el] Ejército proletario en milicias armadas (…), considerando que siendo la clase obrera la autora del levantamiento del 9 de abril y estando en constante peligro sus postulados revolucionarios y para seguridad y estabilidad del propio Gobierno, y en resguardo de los sagrados intereses del proletariado y el pueblo boliviano (La Nación, 11 de junio de 1953).

Un poco más adelante, en el I Congreso de la COB, realizado en noviembre de 1954, se dijeron las siguientes palabras al respecto:

> La Ley más general de la organización de las milicias radica en que están subordinadas a la estrategia política de la clase obrera (…). La consecuencia que se desprende es que las milicias obrero-campesinas deberán ser altamente politizadas (COB, 1954: 103).

Es verdad que en los momentos iniciales de la revolución las milicias obreras jugaron un papel más relacionado con los intereses del sector obrero y campesino. Las milicias se movilizaban en distintos momentos para presionar al gobierno movimientista, a modo de que este tomara alguna medida favorable a sus intereses. Un claro ejemplo de esto es la presión que ejercieron para que

se dicte la nacionalización de las minas cuanto antes. Pero, por otra parte, las milicias fueron funcionales a los intereses movimientistas, asentados en el poder.

Poco a poco, las milicias descuidaron el resguardo de los intereses de la clase obrera y priorizaron la lucha del MNR contra sus adversarios políticos, coadyuvando así a la permanencia del partido en el poder. Por ejemplo, frente al golpe del "ala de derecha" del MNR, en enero de 1953, los milicianos de todas las minas del país se trasladaron a La Paz y, junto a otras fuerzas populares, impidieron que este prospere. Tuvieron la misma actitud ante los permanentes intentos de desestabilizar al Gobierno por parte de la Falange Socialista Boliviana (FSB), que procuraba su caída.

También es evidente que su grado de organización fue limitado. Es cierto que las milicias teóricamente contaban con una estructura organizativa que copiaba a la del Ejército regular, con comandos, batallones, etc. Pero tenían escaso armamento, pues este en muchas oportunidades fue vendido o cambiado a los campesinos de comunidades aledañas por productos agrícolas y otros. Este fue el caso de las milicias del norte de Potosí, donde surgieron conflictos internos por linderos.

Al final del primer gobierno de Paz Estenssoro, las milicias mineras perdieron protagonismo. En cambio, las milicias campesinas ganaron mayor fuerza, aumentaron en cantidad y pronto se agruparon en regimientos campesinos. El Ministerio de Asuntos Campesinos se encargó de entregar armamento y municiones a los distintos sindicatos campesinos que se habían creado bajo su tuición. La estrecha relación entre las milicias campesinas y el MNR se reflejó en el hecho de que Ñuflo Chávez fuera nombrado Jefe de las Fuerzas Armadas Campesinas. Gabino Apaza, un dirigente muy vinculado con el partido de Gobierno, quedó como Subjefe. En el primer aniversario de la Revolución Nacional, en una demostración de adhesión a la misma, los 16 regimientos campesinos desfilaron por las calles de la ciudad de La Paz. Se calcula que esta delegación contaba con unas 100.000 personas llegadas del campo, buena parte de ellos portando armamento –incluso pesado.

Después de la Reforma Agraria, el número de efectivos de las milicias campesinas creció, y su organización fue perfeccionada. Por ejemplo, en la provincia cochabambina de Arani se organizó un batallón campesino que contaba con más de 2.000 efectivos. En la provincia Jordán (también de Cochabamba), las milicias instalaron su Estado Mayor en Ucureña, bajo la dirección de Agapito Vallejos. En la localidad altiplánica paceña de Calamarca se creó el Regimiento de Infantería Gualberto Villarroel, compuesto por unos 1200 milicianos campesinos. En Achacachi (región lacustre de La Paz), se creó el Colorados de Bolivia, que sustentó a líderes sindicales como Toribio Salas y Paulino Quispe el "Wilasaco".

En el libro Achacachi, medio siglo de luchas campesinas (1979), que trata sobre el sindicalismo campesino de aquella localidad, Xavier Albó sostiene que los cuerpos de milicianos fueron los encargados de hacer prevalecer el poder local, construido por los sindicatos campesinos. Dichos sindicatos eran los encargados de cobrar impuestos en las trancas de los pueblos, sostener a tal o cual dirigente y ejercer presiones o acciones violentas contra la antigua clase terrateniente, entre otras cosas. Incluso se volvieron capaces de imponer un poder autoritario a las bases campesinas.

Desde mediados de la primera gestión de gobierno del MNR, estas milicias comenzaron a ser utilizadas para dirimir las luchas internas entre localidades y sindicatos campesinos. Este fue el caso de las rivalidades estalladas entre Warisata y Achacachi, entre Cliza y Ucureña y entre laimes y jucumanis (para citar solamente los casos más relevantes). Más adelante veremos cómo los enfrentamientos fueron aumentando en violencia, dejando saldos elevados de muertos y heridos. Pero, al mismo tiempo, las milicias campesinas empezaron a ser instrumentalizadas por el Gobierno para atacar a los sectores radicalizados de las minas, especialmente a los sindicatos de Siglo XX y Catavi. Esta confrontación llegó a extremos impensados en los dos siguientes gobiernos movimientistas (1956-1960 y 1960-1964).

Finalmente, hay que recordar que, luego de la reconstrucción del Ejército (1953), la tarea de la represión estatal fue volviendo poco a poco a sus manos y a la de los cuerpos de carabineros. Por su parte, las milicias movimientistas –en gran medida conformadas por el lumpen de las ciudades– se constituyeron en una especie de grupos de choque, que actuaban con gran impunidad contra los adversarios del régimen. De todos modos, las milicias obreras y campesinas siguieron jugando

un rol particular en el contexto de la Revolución Nacional, y no cesaron hasta la caída del gobierno del MNR, en 1964.

## El impacto inicial de la nacionalización de las minas

En las decisiones gubernamentales sobre la implementación de las tareas de la revolución y sobre la marcha de la nueva economía intervinieron muchos y complejos aspectos. Uno de los temas más importantes a encarar era el desafío de transformar la "economía oligárquica antinacional" en una que esté al servicio de la nación y que responda a las demandas sociales de diferentes sectores.

Los principales postulados discursivos del MNR eran la nacionalización de las minas y la Reforma Agraria, así como una diversificación económica que permitiera la creación de un mercado interno y una mayor vinculación entre regiones. El partido venía sosteniendo estos postulados desde fines de la década de 1940, y los reiteró ni bien se hizo del poder, en 1952. Sin embargo, diversas situaciones y condiciones complejas –como la dependencia económica del país frente a los Estados Unidos– llevaron a que la aplicación de estas medidas sea analizada con más calma.

Frente a esa calma, la COB, junto a la FSTMB –para el caso de la nacionalización de las minas– y a los campesinos –para el de la Reforma Agraria– optó por la movilización y la presión directa. La intención del sector obrero era que estas políticas fueran decretadas sin demora. Lógicamente, el triunfo de la revolución había generado una importante "revolución de expectativas", término usado por los teóricos del populismo en América Latina para ejemplificar la confianza en que la vida de los de abajo podía cambiar.

En cuanto a la nacionalización de las minas, ya el 19 de abril de 1952 –a diez días de estallada la insurrección– la COB había señalado a esa medida como prioritaria e impostergable. Según el pensamiento de los trabajadores de las minas, esta medida iba a atacar directamente al poder de las empresas, responsables de la conformación del súper-Estado minero. La nacionalización era percibida como la posibilidad de un cambio radical en sus condiciones de vida y de trabajo. Por ello, después del triunfo de la insurrección, la lucha por su aplicación fue inmediatamente exigida por los sindicatos de base, la COB y la FSTMB.

Después de la insurrección triunfante, cuando los trabajadores del subsuelo retornaron a los campamentos, no tomaron represalias contra los administradores, gerentes y técnicos. Esto resulta curioso, pues estos sujetos representaban a la supuestamente odiada oligarquía minera, y aún permanecían allí. La tranquilidad reinó en los campamentos pese a que las empresas optaron por boicotear la producción, desabastecer las pulperías y tomar otras acciones defensivas. Seguramente, todos en el campamento –mineros y miembros de las empresas– estaban convencidos de que pronto las minas pasarían al Estado.

Por su parte, el Gobierno otorgó importantes beneficios sociales a los trabajadores. El 30 de abril de 1952, un Decreto Supremo dispuso la reincorporación de todos los obreros que habían sido despedidos desde 1949 por causas políticas y sindicales. También reestableció el fuero sindical, otorgado en un principio por el Gobierno de Villarroel, y aplicó un importante aumento salarial. Para dar señales de acción respecto a la principal demanda de los obreros, el 14 de mayo constituyó una Comisión encargada de discutir los alcances de la nacionalización de las minas. Sin embargo, llama la atención que en esta Comisión no participaran representantes de los sindicatos mineros, de la FSTMB ni de la COB.

La Comisión tuvo la característica de incorporar a profesionales de distintas corrientes ideológicas. Así, dentro de esta surgieron dos posiciones encontradas. La primera abogaba por la aplicación de impuestos sobre el 100% de las divisas generadas a las grandes empresas mineras, retomando así el D.S. del 9 de junio de 1939, dictado por el presidente Germán Busch. La segunda posición defendía la expropiación de las minas sin indemnización. Esta también era la posición de la COB y de la FSTMB. Por otra parte, ambas organizaciones plantearon que, una vez producida la nacionalización, debía aplicarse el control obrero con derecho a veto –consigna sustentada por la Tesis de Pulacayo de 1946.

Las presiones al Gobierno para que la medida fuese tomada cuanto antes se hicieron constantes y cotidianas a partir de agosto de 1952. La presión incluso llevó a varios sindicatos a pedir la renuncia de Juan Lechín. El dirigente fue acusado de no haberse librado de "la influencia, el sabotaje, la intriga y la calumnia de los sectores incrustados en el Partido que quieren impedir

que se realice la nacionalización", tal como lo señala un comunicado de la mina San José, que fue reproducido por El Diario el 21 de agosto de aquel año. En otro pronunciamiento de los sindicatos de Catavi, Siglo XX, Pulacayo, Huanuni, Potosí y otras minas, los sindicatos de base afirmaron que la derecha se había incrustado en el seno del Ministerio de Minas.

La oportunidad para ejercer mayor presión se dio en septiembre de ese año, cuando la COB convocó a una manifestación en repudio a supuestos intentos golpistas de la FSB. Como miles de milicianos mineros fueron movilizados a La Paz, la Central Obrera aprovechó su presencia en la plaza Murillo para exigir que Paz Estenssoro salga al balcón del Palacio de Gobierno y fije una fecha para la aplicación de la nacionalización de las minas. Ya sin poder de maniobra, el 3 de octubre de 1952 el Gobierno creó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Esta empresa estatal se encargaría de administrar las minas, una vez que estas fueran nacionalizadas.

Desde los primeros días de octubre hasta la firma del decreto de nacionalización, el día 31 del mismo mes, la prensa oficialista bombardeó a la población con artículos que buscaban desacreditar a los grandes empresarios mineros. Se los acusó de haber defraudado enormes sumas al Estado, realizando una falsa contabilidad. Se los acusó de "maquinaciones y escamoteo", de demorar arbitrariamente la entrega de divisas. La prensa dijo que la "gran minería sojuzgaba al Estado y envilecía la vida pública del país", que "la técnica de controlar gobiernos fue sistema de la política de las empresas de la gran minería" y que "el dominio político de Bolivia estuvo a merced de las grandes empresas". También se publicaron artículos con testimonios que recordaban las masacres ejecutadas en los centros mineros.

El 25 de octubre, el Gobierno ya estaba convencido de que la medida no podía ser postergada por más tiempo. Es día se giraron notas de cargo a las empresas mineras, por remanentes de divisas retenidas desde el 16 de junio de 1939 al 5 de junio de 1952. El detalle de remanentes es el siguiente:

- Patiño: 468.296.124,24 dólares,
- Hochschild: 171.484.224,57 dólares,
- Aramayo: 54.472.194,37 dólares (Fuente: La Nación, 25 de octubre de 1952).

Finalmente, el 31 de octubre de 1952 fue dictado el Decreto de Nacionalización en los Campos de María Barzola, de la histórica mina Catavi.

Recuadro 8

### Extracto del Decreto de nacionalización de las minas

CONSIDERANDO:
Que, el sacrificio, heroísmo y perseverancia de los trabajadores mineros en la lucha contra la oligarquía, han sido elementos decisivos para el triunfo de la Revolución Nacional;

Que, como factor principal en el proceso de producción, el esfuerzo de los trabajadores en la explotación en las minas que pasan a poder del Estado debe merecer especial reconocimiento;

Que, así como ha establecido la participación de los trabajadores en el manejo superior de la Corporación Minera de Bolivia, es de justicia otorgar la intervención y control obreros en la administración local de las minas nacionalizadas.

DECRETA:
Artículo 1o - Se nacionaliza por causa de utilidad nacional, las minas y bienes que forman los grupos Patiño, Hochschildy Aramayo.

Las siguientes minas pasaron al Estado: Bolsa Negra, Kami, San José, Colquiri, Morococala, Huanuni, Alantata, Catavi, Antequera, Colquechaca, Colavi, Unificada del Cerro Rico de Potosí, Pulacayo, Matilde, Chorolque, Ánimas, Chocaya, Oploca, Venus, Pampa Grande y Viloco.

La trascendental medida ocupó la atención del mundo y provocó una reacción favorable y solidaria en toda América Latina.El periódico El Líder, de Buenos Aires, tituló así un artículo de primera plana: "Libérase de una secular esclavitud el Altiplano". O Mundo, de Río de Janeiro, lo hizo así: "Un dia memorável para a Bolívia". El periódico Excélsior de México escribió lo siguiente:

> Nada podrá retener ni desviar el impulso patriótico que arma los corazones de nuestros hermanos de allende el Ande. En el reloj histórico de Bolivia ha sonado también la hora de los pueblos (01 de noviembre de 1952).



Figura 4. Lechin firma el Decreto Supremo de Nacionalización de Minas.
Fuente: Lucio Flores Salinas.

Por su parte, el afamado escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias escribió una "Carta Abierta a Mis Amigos de América", publicada el 4 de noviembre de 1952 en el Diario de Centro América. En la carta, Asturias dijo lo siguiente:

> Invoco los nombres de Bolívar, San Martín y Sucre para pediros velar por Bolivia, en esta hora en que rotas las cadenas del vasallaje económico, marcha a la redención de sus clases campesinas y trabajadoras. Digamos a Dios, digamos a nuestros hijos, digamos a nuestras mujeres, digamos a nuestros amigos, digámosnos a nosotros mismos: 'Oid americanos, hay un pueblo que acaba de despertar en algún lugar de América', y todos gritarán: ¡BOLIVIA!

Una reacción contraria a estos puntos de vista se produjo en diferentes medios políticos y periodísticos de los Estados Unidos, en donde se expresaron temores de que Bolivia se estuviese encaminando hacia un régimen comunista. La posición crítica del Gobierno estadounidense provocó manifestaciones de repudio en toda la población boliviana, que lo acusó de imperialista y de querer impulsar una agresión económica al país. Además, la gente propuso que se busquen nuevos mercados para el estaño boliviano.

El intervencionismo de los norteamericanos se sintió en distintos campos. Por ejemplo, aunque el Ministerio de Minas –que fue creado después del triunfo de la revolución– tenía entre sus objetivos "la defensa y control del comercio de exportación e importación" (La Nación, 22 de abril de 1952), en realidad estas tareas no pudieron cumplirse con autonomía. Producida la nacionalización de las minas, la gran potencia norteamericana amenazó con dejar de comprar estaño –se le vendían a Estados Unidos entre 15.000 y 20.000 toneladas anuales– si no se indemnizaba a las empresas expropiadas. Al respecto, no se tiene que olvidar que la Patiño Mines tenía numerosos accionistas estadounidenses que ejercían presión sobre su Gobierno.

Víctor Andrade, el embajador boliviano en Estados Unidos, trató de calmar los ánimos, transmitiendo una imagen suavizada de la

medida. Andrade aseguró que ésta no implicaba una actitud hostil para con los inversionistas extranjeros (Journal of Camera del Washington Bureau, 3 de noviembre de 1952), y declaró:

> Hay muchas razones de nuestra parte para tratar de permanecer en los mejores términos con los Estados Unidos, para cultivar la buena voluntad de su pueblo y para manejar nuestros asuntos en una forma que promueva el entendimiento y las buenas relaciones (La Nación, 29 de noviembre de 1952).

En diciembre de ese año, el Comité Económico de las Naciones Unidas aprobó –con 31 votos a favor, 19 en blanco y el voto en contra de EE.UU.– la ponencia presentada por Bolivia y el Uruguay, que recomendaba a los Estados miembros de que se abstengan de adoptar medidas destinadas a impedir el ejercicio de la soberanía económica. A pesar de ello, los norteamericanos insistieron en su postura anterior.

Una carta enviada por el Gobierno estadounidense al Presidente de la República de Bolivia decía lo siguiente:

> El Departamento de Estado tiene la responsabilidad de velar por los intereses norteamericanos en el extranjero. Si no se insiste en la compensación se establecería un antecedente que alentaría a otros países donde hay inversiones norteamericanas mayores, a nacionalizar también sus industrias (La Nación, 15 de diciembre de 1952).

La compra de estaño boliviano por parte de los norteamericanos quedó en suspenso. Esto provocó un grave daño a la economía boliviana, porque, al permanecer las cargas de ese mineral en el puerto de Arica, dejaron de entrar divisas que el flamante Gobierno revolucionario necesitaba urgentemente. Seguramente fue por ello que este cedió poco a poco en las presiones. Finalmente, en enero de 1953, el Gobierno boliviano aceptó estudiar los montos de indemnización a pagarse a los empresarios expropiados. Esta decisión muy pronto derivó en la firma de un nuevo contrato con la Williams Harvey Co., de Inglaterra, que compraba el 51% del total producido por la minería del estaño. Dicho contrato se prolongaría hasta 1955.

Desde abril de ese año, tras las negociaciones realizadas con el Grupo Patiño en Santiago de Chile, comenzaron a pagarse los primeros montos a dicha empresa –de manera solapada y bajo el nombre de "compensación". Inmediatamente después, la R.F.C. de EE.UU. compró un lote de 5.000 toneladas de estaño boliviano. Sin embargo, la firma de un convenio a largo plazo no se produjo sino hasta la fijación de los montos indemnizables definitivos. Esto ocurrió a mediados de 1953, y entonces "todo quedó arreglado". Desde ese momento, la actitud del Gobierno norteamericano hacia el boliviano cambió radicalmente.

Mientras todo esto ocurría tras bambalinas, los trabajadores del subsuelo seguían mostrando su plena identificación con la nacionalización de las minas y con la COMIBOL. Esta entidad estatal pasó a dirigir el proceso de producción y de comercialización de todas las empresas mineras que quedaron en sus manos. Los mineros se mostraron muy interesados en que dichas empresas salgan adelante económicamente. También entendieron que COMIBOL, por haber emergido de un proceso de transformación, debía responder ampliamente a sus demandas, principalmente de carácter económico y social.

La nacionalización de las minas fue un momento de conjunción de intereses entre las bases obreras y el partido de Gobierno; fue el momento de mayor identificación de estas con él. Esto puede advertirse en los discursos de los delegados a la IV Conferencia Minera, realizada unos meses después, en la que los mineros expresaron su ferviente apoyo y lealtad al Gobierno movimientista. Pero, meses antes, cuando –a principios de 1953– Paz Estenssoro había aprobado un aumento salarial a los mineros por la elevación del costo de vida, los sindicatos rechazaron la medida, "ante la difícil situación económica por la que se atraviesa" (La Nación del 20 de mayo de 1953).

Otro gran triunfo de los trabajadores fue que el D.S. de nacionalización de las minas incorporó el control obrero con derecho a veto en su artículo 17. Con esto, Bolivia se convirtió en el primer país en aceptar la participación directa de los trabajadores en la administración de una empresa de carácter estatal. Sin embargo, el artículo tenía algunas características diferentes a las formuladas en el proyecto inicial de la FSTMB, en el que se había propugnado el control obrero colectivo, entre otros puntos.

El primer paso para el cumplimiento de la medida fue la incorporación de los dirigentes mineros Mario Torres y Luis Kunkar, que asumieron como directores obreros en el Directorio de COMIBOL. Con esta medida se aplicaba lo señalado en el artículo quinto de los estatutos de la institución. Según el artículo:

> …de un directorio formado por siete miembros que serán nombrados por el Ejecutivo, dos miembros serán elegidos de una terna propuesta por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Torres Calleja: 1955).

Sin embargo, en los siguientes años, solamente un Director Obrero funcionó efectivamente: Sinforoso Cabrera.

En un principio, los directores obreros se abocaron a conseguir distintos beneficios para los mineros: la aplicación de los subsidios de alquiler y familiar, la construcción de viviendas, la dotación de campos deportivos, el funcionamiento regular de las pulperías y el pago de las indemnizaciones a los trabajadores por la liquidación general. Pero, ante la falta de circulante suficiente, el pago de este último punto se realizó en bienes muebles e inmuebles.

En todo caso, los retrasos en el cumplimiento de esos pagos, así como la falta de maquinaria y herramientas de trabajo y un cierto desabastecimiento de las pulperías, provocaron los primeros reclamos de los sindicatos de bases. Mario Torres, Director Obrero en 1953, asumió la posición de impedir que los conflictos adquieran proporciones que, según él, podían significar un "sabotaje a la Revolución". Torres hizo permanentes llamados a los trabajadores para que "cumplan su parte con disciplina y conciencia revolucionaria y su deber ante la Patria y la Revolución Nacional" (ACMB, marzo de 1953).

Para mejorar la situación de sus empresas, en los campamentos mineros se nombraron controles obreros para la supervisión de la producción, el abastecimiento de materiales, equipos y productos de pulpería, el cumplimiento de los beneficios sociales y el cambio de gerentes y técnicos, entre otras cosas. La supervisión se realizó antes de que la reglamentación oficial sea siquiera emitida. Finalmente, esta fue dictada el 15 de diciembre de 1953. En ella se determinó que el control obrero sería elegido en asambleas generales y sería aplicado en los aspectos administrativo, económico y financiero de las empresas. Esta determinación se tomó con "vistas a salvaguardar los intereses del país, racionalizar la producción y elevar el nivel de vida de los trabajadores" (Decreto de Reglamentación, El Diario, 28 de julio de 1953: 3). Eso sí: se dejó claro que el control obrero no debía intervenir en la parte técnica, "que gozará de absoluta independencia" (Ibíd.: 3).

A partir de ese momento, los trabajadores se interesaron aún más por el funcionamiento de cada una de sus empresas y de la propia COMIBOL; en esto demostraron claros sentimientos nacionalistas. Los trabajadores plantearon la búsqueda de otros mercados para la comercialización de nuestros minerales –en especial en los países socialistas, para romper con la dependencia hacia los Estados Unidos y Gran Bretaña–, se interesaron en la construcción de fundiciones en el país y en el aumento de la producción.

En cuanto a las fundiciones, los obreros de las minas donaron a la empresa estatal un jornal por mes desde mediados de 1953, "como contribución a los hornos de fundición". Para ellos, esta actitud representaba lo siguiente:

> …una demostración objetiva y materializada de nuestro apoyo incondicional al gobierno popular del compañero Paz Estenssoro y al progreso y liberación total del vasallaje a que estaba sometida nuestra Patria (ACMB, Pronunciamiento de los sindicatos de Colquiri, Huanuni, Catavi y Siglo XX. ACMB, 24 de junio de 1953).

En su pronunciamiento, los obreros añadieron: "nos convertimos en constructores de la redención económica" (Ibíd.).

Respecto al tema de la producción, desde los primeros meses de 1953 se inició una especie de competencia entre los diferentes distritos mineros, lo que permitió que los índices de producción aumentaran hasta 1954. Algunos sindicatos instaron a sus bases a trabajar incluso en domingos y feriados, con el objetivo de "no paralizar labores bajo ningún pretexto" ("Mensaje de los sindicatos de Bolsa Negra, Caracoles y Viloco, frente a la baja del precio del wólfram", ACMB, 8 de julio de 1953). Los sindicatos también les pidieron que suspendan toda licencia y vacaciones hasta diciembre de 1953, "con el fin de alcanzar mejores niveles de productividad" (Ibíd.).

Sin embargo, desde fines de 1954, el aumento de la producción comenzó a chocar con varios problemas, posiblemente como consecuencia de la actitud pasiva del Gobierno para solucionar aspectos fundamentales para la marcha de COMIBOL. Esto llevó a los trabajadores a centrarse en la defensa de sus reivindicaciones. Ante el incremento del costo de vida, las bases demandaron el aumento de su salario y protestaron por el incumplimiento de algunos beneficios sociales, entre otras cosas.

Cuando Mario Torres los acusó de estar dejando de lado la necesaria disciplina laboral, el sindicato de Siglo XX respondió con estas palabras:

> Sindicatos y controles obreros saben muy bien que para el triunfo de la Revolución Nacional se necesita trabajo y disciplina. De ahí que trabajadores Catavi, Llallagua y Siglo XX vanguardizan clases revolucionarias y pueblo con ejemplo, sacrificio y producción (ACMB, 28 de marzo de 1955).

Sin embargo, en la Conferencia de Secretarios Generales de la FSTMB, realizada en septiembre de 1955, se acotó que los trabajadores no serían capaces de solucionar la disminución de las leyes de los minerales, los problemas de funcionamiento de las máquinas por su mal estado, la deficiencia en la provisión de materiales, la ineficiencia del personal técnico y otros puntos. Todo esto le correspondía a la COMIBOL (La Nación, 2 de octubre de 1955).

Justamente alrededor de esos temas –y mientras en el país se desataba la inflación y estallaba la crisis económica–, desde principios de 1956 se produjeron conflictos más serios entre los sindicatos y la empresa. Pero en Siglo XX, Colquiri, Morococala, Caracoles y Huanuni, los trabajadores decidieron evitar huelgas prolongadas que pudiesen dañar aún más a COMIBOL.

En ese complejo contexto, Sinforoso Cabrera, el Director Obrero de COMIBOL –quien asumió el cargo en marzo de 1955, en reemplazo de Mario Torres–, se vio atrapado en medio de dos fuegos.Como Cabrera manifestó una posición crítica frente a lo que ocurría al interior de COMIBOL, pero favorable a las demandas de los trabajadores, el Directorio de esa empresa comenzó a aislarlo de sus decisiones y a no tomar en cuenta sus opiniones. Con esto, la clase obrera quedaba aislada de esa instancia gubernamental. Frente a esa situación, Cabrera intentó renunciar a su cargo en varias oportunidades. Incluso acusó a los ejecutivos de COMIBOL de haber "desatado una campaña desleal contra los trabajadores para ocultar las verdaderas causas que entorpecen el funcionamiento de la empresa" (Cabrera: 1960). Pese a haberlo intentado, finalmente Cabrera se mantuvo en el cargo por la presión de las bases. Por su parte, Mario Torres, Ministro Obrero en la cartera de Minas, cambió de actitud y justificó abiertamente las demandas de los trabajadores. También pidió que la corrupción imperante en COMIBOL quedase demostrada con documentos, para así exigir su autonomía.

Ante el debilitamiento de Torres y Cabrera en su papel de intermediarios ante el Gobierno, surgió otro fenómeno interesante: los sindicatos mostraron un renovado interés por que la FSTMB volviera a actuar como ente aglutinador de sus reivindicaciones. Con posiciones críticas, instaron a dicha institución a que salga de su pasividad. En junio de 1956, el sindicato de Siglo XX entró en huelga, pero esta fue interrumpida ante el pedido expreso de Siles Zuazo, por la proximidad de las elecciones nacionales. Luego de la huelga, el sindicato de ese distrito evaluó de esta manera a la Federación: "Señalamos que la Federación de Mineros ha actuado con lenidad, abandonando a sus bases durante la lucha por un pliego de peticiones" (ACMB, 5 de agosto de 1956).

Poco después, en un documento publicado por la FSTMB denominado "Memorándum sobre la Nacionalización de las Minas", la organización reconoció que había existido indisciplina laboral en las minas, pero al mismo tiempo acusó a la alta jerarquía de COMIBOL de no haber frenado la corrupción ni la ineficiencia interna (ACMB, octubre de 1956). Junto a este reclamo, varios sindicatos insistieron en otros problemas, como ser la falta de suministro permanente de artículos en las pulperías, la escasez de implementos de trabajo, la falta de desarrollo de trabajos mineros de envergadura, la inexistencia de nuevas maquinarias, la baja del poder adquisitivo del salario, la baja de producción (consecuencia del empobrecimiento de las vetas) y la falta de capital para nuevos métodos de extracción, entre otros.

Juan Lechín, el máximo dirigente de la FSTMB y de la COB, hasta ese momento se había movido fundamentalmente dentro del esquema

gubernamental, manteniéndose al margen de los conflictos entre la empresa y los sindicatos. Sin embargo, en esta ocasión apoyó a Torres en su pedido de autonomía para la COMIBOL.

Finalmente, la misma COMIBOL reconoció públicamente que estaba atravesando una difícil situación, como consecuencia de los altos costos de producción y los bajos precios del estaño en el mercado internacional. En enero de 1955, la empresa estatal emprendió su reorganización, poniendo en vacancia todos los puestos. Paralelamente, el Gobierno contrató a la firma estadounidense Ford, Bacon & Davis para que elabore un estudio completo sobre la situación de cada una de las empresas nacionalizadas. Los resultados presentados por esta firma fueron la base para las medidas tomadas por la Estabilización Monetaria, durante el gobierno de Siles Zuazo (1956-1960).

Hasta la puesta en marcha de la segunda gestión gubernamental del MNR –y como si nada pasara–, COMIBOL siguió estando descapitalizada, pues la empresa continuó contribuyendo con grandes recursos a la diversificación económica. Entre otros proyectos, COMIBOL destinó fondos para la activación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la apertura de la carretera a Santa Cruz, la instalación de un ingenio azucarero y de molinos de yuca, el fomento de la ganadería y el desarrollo de la industria.

Para 1956, a fines del primer periodo de la Revolución Nacional (con Paz Estenssoro a la cabeza), todas estas situaciones habían provocado la pérdida de confianza de los trabajadores hacia la administración estatal de las minas.

## Impacto inicial de la Reforma Agraria

Además del impulso a la organización sindical de los campesinos, el Gobierno movimientista organizó las Oficinas de Defensa Campesinas en los meses que siguieron a la insurrección popular de 1952. Estas oficinas estaban encargadas de controlar y frenar los abusos de los hacendados hacia los colonos. Por su parte, la prensa oficialista se encargó de reproducir numerosas denuncias de campesinos por maltratos sufridos, pues estos continuaban produciéndose a pesar de la revolución. Con ambas acciones, el llamado Gobierno revolucionario quería demostrar que no iba a dejar a los indígenas sin protección. También es posible que con estas acciones el Gobierno buscara frenar los hechos violentos que comenzaron a suscitarse en el campo, donde los campesinos asaltaron las haciendas.

En aquel momento, la Reforma Agraria aparecía como "casada" a la nacionalización de las minas. Entonces, si ya le había llegado el turno a las minas, ahora le tocaba al agro. Ambas demandas tenía una larga historia de gestación. La Reforma Agraria era parte fundamental de las "Banderas de Abril", y en 1951 había sido incorporada en el programa de gobierno del MNR, como una política destinada a transformar las estructuras del sistema oligárquico en el área rural.

Según los datos del censo realizado en 1950, la realidad agraria en Bolivia era la siguiente: de 32 millones de hectáreas de propiedad rural, solamente se cultivaban 654.000 mil hectáreas; esto quiere decir que apenas el 2% de la tierra cultivable era acaparada. En cuanto a la propiedad, el 4,5% de los propietarios rurales existentes en el país retenían el 70% de la propiedad agraria privada, con extensiones de 1.000 a 10.000 hectáreas. Paralelamente, en muchos casos las sayañas o pegujales de los colonos no llegaban siquiera a los 200 m$^2$ (0,02 hectáreas). Estos datos demuestran hasta qué punto las tierras se habían concentrado en pocas manos.

Paradójicamente, ese mismo censo reveló que la mayoría nacional estaba compuesta por habitantes rurales de las etnias oprimidas. De una población total de 3.019.000 habitantes, 1.703.000 (el 62.9%) eran indígenas, y más o menos dos tercios de ellos vivían en el área rural. Esta importante masa humana era justamente la que había perdido los derechos sobre sus territorios ancestrales.

Por otra parte, el sistema agrario imperante antes de la revolución no había transformado positivamente al campo, y por eso la productividad agrícola era muy baja. Bolivia importaba alimentos y materias primas de origen agropecuario que bien podían explotarse dentro del territorio nacional; por ejemplo, el país importaba algodón, maderas y hasta goma natural. Estas y otras realidades rurales habían hecho imperativo un cambio estructural en el sistema de tenencia de la tierra.

Y fue en ese camino de cambio, inaugurado por el Gobierno revolucionario del MNR, que se realizó el Primer Congreso de la Federación Departamental de Cochabamba, en noviembre de

1952. Allí se elaboró un Pliego de Peticiones que fue enviado al Ministro de Asuntos Campesinos, y en él se planteó la legalización de los sindicatos campesinos y la entrega de armamento a estos. También se demandó la creación inmediata de una "comisión para la REVOLUCION AGRARIA con la participación de las federaciones campesinas de todo el país" (La Nación, 20 de noviembre de 1952) y la "restitución de sus parcelas a los colonos desalojados por motivos sindicales, disturbios sociales y políticos" (Ibíd.).

Poco después de aquel Congreso comenzaron a producirse las primeras –y masivas– movilizaciones campesinas en diferentes lugares del país. La consigna de las movilizaciones era presionar al Gobierno para que dicte la medida. A fines de 1952, 100 sindicatos agrarios de Cochabamba se concentraron en el Estadio de esa ciudad y "pidieron la abolición de los latifundios al son de pututus, kenas y tarkas" (La Nación, 23 de diciembre de 1952). Desde enero del siguiente año, estas movilizaciones comenzaron a adquirir connotaciones violentas, pues en muchos lugares los campesinos invadieron por la fuerza grandes propiedades agrarias, cometiendo atropellos.

La conflictiva situación que se vivía en el campo convenció al Gobierno de tomarse en serio la posible aplicación de una reforma agraria. El tema adquirió prioridad en su agenda, y el 20 de marzo de 1953 presionó a la Comisión –creada justamente para definir los términos de su formulación– para que entregue su informe lo más pronto posible, y así fijar la fecha en que finalmente se dictara la reforma. En la Comisión participaron importantes intelectuales, como Edwin Moller, Sergio Almaraz, Gregorio Pérez, Arturo Urquidi, Ernesto Ayala Mercado y Mario Guzmán, todos dirigidos por Ñuflo Chávez. Eso sí: los representantes de las organizaciones sindicales del agro no fueron incluidos.

La Comisión entregó su informe el 25 de julio de 1953, al que denominó "Ley de Bases de la Reforma Agraria". Con este nombre, la propuesta de la COB de "Revolución Agraria" quedaba descartada, pero esta llegó a discutirse internamente. En la propuesta de la COB –"Revolución Agraria"– era notorio el afán de diferenciarse de la de "Reforma", sustentada por el MNR en varios aspectos. Aparentemente, el hecho de que la COB plantee ese concepto de "Revolución" se debió a la influencia de militantes del POR en su seno y, en especial, de Edwin Möller –para entonces Secretario de Conflictos de la central sindical. Aunque Möller practicó el "entrismo" al incorporarse al MNR, nunca dejó de defender y señalar posiciones radicales, derivadas de su formación marxista.

El planteamiento central de los "entristas" –grupo apoyado por miembros del Partido Comunista de Bolivia (PCB)– consistía en aplicar el modelo soviético colectivista en nuestro país. Este grupo consideraba que la tradición comunitaria de los indígenas bolivianos favorecía esa forma de propiedad de la tierra, pues obviaba la repartición individual de parcelas. Durante meses se desarrollaron acaloradas reuniones al interior de la COB. Finalmente, sus dirigentes terminaron por avalar esas posiciones y presentarlas como la voz oficial de la central sindical en relación al tema agrario. Esta posición también fue asumida por algunas federaciones obreras, especialmente la de los mineros.

Lamentablemente, no se cuenta con la suficiente información para determinar si los sindicatos campesinos apoyaron esta posición o no, ni sobre cuál fue el grado de participación de estos en las discusiones al interior de la COB. Al parecer, los sindicatos no fueron tomados en cuenta, y esto significaría que la central sindical actuó de manera parecida a la del MNR.

El 22 de julio de 1953 tuvo lugar un intenso debate. En él, los dirigentes del MNR vinculados a la COB (como Ñuflo Chávez y el Secretario Ejecutivo Juan Lechín Oquendo) pugnaron por "suavizar" las posiciones radicalizadas de los poristas. Luego del debate, la entidad sindical emitió su posición final sobre las características a adoptarse para la aplicación de la Reforma Agraria.

Como puede advertirse, en el documento se hizo énfasis en la necesidad de la tenencia y producción colectiva de la tierra, el trabajo en cooperativas y la participación efectiva y directa de los sindicatos campesinos en todas las medidas a tomarse. Sin embargo, también se incluyó el tema de la distribución individual de las tierras, lo que hacía bastante confusa su posición. En todo caso, Paz Estenssoro y su Gabinete aprobaron el informe de la Comisión organizada por el Gobierno, sin tomar en cuenta el documento presentado por la COB un mes antes de que sea dictada la Reforma Agraria.

Recuadro 9

## Propuesta de la COB sobre el tema agrario

a) Declarar el dominio originario del Estado sobre la tierra.
b) Nacionalización de la tierra sin indemnización, por las vías de la reversión, confiscación y expropiación.
c) Entrega de la tierra a las organizaciones de trabajadores y campesinos.
d) Entrega a las mismas de semillas, cosechas, aperos de labranza y animales de los latifundios agrícolas.
e) Respeto y protección del Estado a la mediana y pequeña propiedad, a las tierras de comunidad y cooperativas de trabajadores campesinos.
f) Respeto a las instalaciones industriales, expropiando la tierra de los latifundios feudales sobre los que están asentados. En aquellos que por sus características sean considerados como empresas industriales agrarias de tipo capitalista, la extensión de la tierra se limitará a lo indispensable para el mantenimiento de la industria.
g) Las tierras pertenecientes a los latifundios, cuyo derecho de propiedad queda abolido por la reforma agraria, se entregará a los trabajadores campesinos conservando su unidad económica productiva y teniendo a la organización colectiva de la producción, respetando la voluntad campesina.
h) Las grandes haciendas mecanizadas con relación de producción de tipo feudal, serán explotadas colectivamente bajo la dirección de los sindicatos agrarios.
i) La Reforma Agraria deberá tender a la agrupación de los pequeños productores en cooperativas.
j) Reversión de las tierras de ex-comunidades, reconociendo el derecho de los ex-colonos de incorporarse a la comunidad en calidad de comunarios.
k) Declaración de uso común sobre las tierras ganaderas naturales.
m) Los órganos de ejecución de la Reforma Agraria tendrán intervención obrero-campesina, siendo en último término los ejecutores, en cada lugar, los sindicatos de trabajadores campesinos.
o) La tierra nacionalizada será entregada en propiedad y con títulos, hasta las del límite de un campesino medio de acuerdo al siguiente orden:
   – A los campesinos pobres.
   – A los obreros agrícolas.
   – A los no propietarios que la soliciten para trabajarla.
   – A los campesinos medios que no tengan tierra suficiente.

Fuente: Gaceta del Ministerio de Asuntos Campesinos, Propuesta de la COB, julio de 1953.

El 2 de agosto de 1953, 250.000 campesinos se reunieron en Ucureña para escuchar la lectura del Decreto que los haría propietarios de sus tierras. Millares de pututus anunciaron el ingreso del Presidente en ejercicio al centro de la concentración campesina. Se oyeron gritos de júbilo y vivas al MNR, a Víctor Paz Estenssoro y a Ñuflo Chávez.

Este momento histórico significó el inicio de la larga vinculación –y en cierta medida subordinación– del movimiento campesino con el partido de Gobierno y con el Estado nacional. Por su parte, los cientos de trabajadores mineros presentes dispararon sus armas al aire e hicieron reventar sus dinamitas, en demostración de su adhesión a la medida.

Un mes después, la matriz sindical de los trabajadores emitió el siguiente comunicado:

> La COB hace suyo el decreto del 2 de agosto de 1953, encuadrando su acción de acuerdo con ese decreto y condena la actitud irresponsable del POR de empujar a los campesinos a la lucha fratricida por la toma indiscriminada de la tierra (…), por considerarla una actividad de provocación y soliviantación por parte de elementos interesados en crear problemas al Gobierno (El Diario, 1 de septiembre de 1953).

El Decreto de Reforma Agraria se iniciaba con consideraciones históricas. Con estas consideraciones se buscaba resaltar la situación de explotación y presión previa a la que habían estado sometidos los indígenas. Posteriormente, se señalaron los principales argumentos para tomar la medida:

> …la penetración financiera del imperialismo no modificó la estructura feudalcolonialista del sistema y la propiedad agrarias; no se promocionó la industrialización del campo, estrangulando casi por completo la tradicional economía de autoabastecimiento agropecuario; no se superaron

> los procedimientos primitivos de producción y se proscribió a la raza aborigen de la vida civilizada (Decreto de Reforma Agraria, 1953).

Otro argumento utilizado a favor de la Reforma fueron las masacres periódicas que hubo contra obreros y campesinos.

También se afirmó que, si bien el Art. 17 de la Constitución Política del Estado indicaba que, para ser respetada, la propiedad debía cumplir una "función social", esto no había ocurrido en el caso de la propiedad de los latifundistas. Todo lo contrario:

> …por los sistemas arcaicos empleados (…) y las formas de servidumbre en el trabajo, la propiedad rural no ha cumplido su función social y se ha convertido, más bien, en un obstáculo para el progreso del país (Ibíd.).

La primera parte del Decreto de Reforma Agraria concluía con la siguiente afirmación:

> …le tocó al Movimiento Nacionalista Revolucionario –expresión de las grandes mayorías de obreros, campesinos y clase media– cumplir el programa de realizaciones históricas, de justicia social y liberación económica (Ibíd.).

Recuadro 10

## Objetivos del D.S. de Reforma Agraria

a) Proporcionar tierra labrantía a los campesinos que no la poseen o que la poseen muy escasa, siempre que la trabajen; expropiando, para ello, las de latifundistas que las detentan con exceso o disfrutan de una renta absoluta no proveniente de su trabajo personal en el campo.
b) Restituir a las comunidades indígenas las tierras que les fueron usurpadas, y cooperar en la modernización de sus cultivos, respetando y aprovechando en lo posible sus tradiciones colectivistas.
c) Liberar a los trabajadores campesinos de su condición de siervos, proscribiendolos servicios y obligaciones personales gratuitas.
d) Estimular la mayor productividad y comercialización de la industria agropecuaria, facilitando la inversión de nuevos capitales, respetando a los agricultores pequeños y medianos, fomentando el cooperativismo agrario, prestando ayuda técnica y abriendo posibilidades de crédito.
e) Conservar los recursos naturales del territorio, adoptando las medidas técnicas y científicas indispensables.
f) Promover corrientes de migración interna de la población rural, ahora excesivamente concentrada en la zona interandina, con objeto de obtener una racional distribución humana, afirmar la unidad nacional y vertebrar económicamente al Oriente con el Occidente del territorio boliviano.



Figura 5. Campesinos junto al Presidente Victor Paz Estenssoro.
Fuente: Lucio Flores Salinas.

Como puede advertirse a través de este resumen de los artículos que reglamentaban la Reforma Agraria a aplicarse en todo el país, el Decreto tomó en cuenta la diversidad regional y las distintas realidades del mundo agrario. Es verdad que su hilo conductor estaba orientado al desarrollo capitalista del agro, ya sea a través de pequeños propietarios incorporados al mercado o de la creación de empresas capitalistas en las zonas poco pobladas del Oriente. Ello no obstante, en su aplicación surgieron contradicciones y problemas sumamente complejos. A la larga, la consecuencia de estos problemas fue que el proceso de transformación de las estructuras agrarias en el país no solamente sucediera de forma lenta, sino también incompleta y, en algunos casos, equivocada. Todo ello lo veremos en un capítulo posterior, a través de ejemplos concretos.

De todos modos, la aplicación de la Reforma Agraria no solo respondió a la intención de sus autores de cambiar la realidad rural del país, sino que tuvo importantísimas implicaciones políticas, sociales y culturales. Esta política estuvo fuertemente articulada con otras medidas de la Revolución Nacional, como con el voto universal y la Reforma Educativa. Además, la Reforma Agraria incidía en aspectos ideológicos trascendentales, como la búsqueda de homogenización cultural (mestización, castellanización) y la conversión del campesinado indígena en una clase social organizada sindicalmente. En todo caso, su postulado principal era la voluntad de lograr la incorporación del campesinado a la vida nacional.

Una vez dictado el Decreto de la Reforma Agraria, la "furia indígena" se desató con mayor ímpetu. El 8 de agosto de 1953 se produjeron los primeros disturbios en Santiago de Huata (Altiplano paceño), donde se atacaron varias haciendas y se flageló a un corregidor del lugar que también era Jefe del Comando Cantonal del MNR. Cuatro días después, en Coripata (Yungas), como producto del asalto campesino a las haciendas del lugar, 36 campesinos fueron apresados; ese mismo día se produjeron disturbios en Chulumani. En Tiquipaya (Cochabamba), el Gobierno persiguió al dirigente Sabino Mallcu –acusado de ser comunista–, quien habría "provocado serios disturbios, encabezando a campesinos armados de fusiles, escopetas, hachas, macanas y cuchillos" (según información del diario La Nación durante los días citados). El grupo dirigido por Sabino Mallcu había dado muerte al Alcalde y al preceptor de la zona; al final, Mallcu resultó herido y luego murió.

Los apresamientos de campesinos levantados continuaron por unos meses. En abril de ese año, bajo los preceptos planteados por el Estado, un vocero del Gobierno declaró que los apresamientos se hacían "en defensa de la revolución". Luego añadió estas palabras: "se tomarán las medidas más enérgicas contra los autores de asaltos y saqueos, los cuales deben ser demandados criminalmente por los propietarios" (La Nación, 25 de abril de 1953).Por otra parte, en agosto, comenzaron las peleas entre los campesinos de Warisata y los de Achacachi –comunarios y colonos, respectivamente–, que en esa oportunidad duraron varios días, dejando un importante saldo de heridos (El Diario, 19 de agosto de 1953). El 5 de septiembre, los dirigentes campesinos de Achacachi fueron enjuiciados por "delitos de sedición, alteración del orden público, saqueos e incendios" (El Diario, 5 de septiembre de 1953). El Gobierno había decidido favorecer al sindicato de Warisata en esa ocasión.

Frente a los disturbios –que ya se sucedían de todo tipo–, el Gobierno publicó las siguientes determinaciones:

1. Que todo acto contra los trabajadores colonos de las haciendas por parte de las comunidades y ex comunidades será sancionados severamente de acuerdo a las leyes penales en vigencia.
2. Los comunarios y ex comunarios deberán seguir el trámite señalado por las leyes de la Reforma Agraria para reivindicación de sus derechos sobre tierras que les fueron usurpadas (El Diario, 10 de septiembre de 1953).

El 25 de agosto tuvo lugar la creación del Servicio Nacional de Reforma Agraria, que señaló que garantizaría la entrega de tierras a un mediano plazo. A partir de entonces, los disturbios comenzaron a disminuir.

Por otra parte, según declaraciones de Ñuflo Chávez, Ministro de Asuntos Campesinos, en los siguientes meses el Gobierno comenzó a dotar a los campesinos de maquinaria. Pero no solo eso, sino que también se importaron nuevas especies vacunas, se cooperó con la construcción

de viviendas, se entregaron materiales escolares y se estableció un crédito agrícola a través del Banco Agrícola. Dicho crédito era apoyado por el Servicio Agrícola Interamericano, y constaba de un capital de 2 mil millones de bolivianos y 50.000 dólares (La Nación, 31 de julio y 4 y 30 de octubre de 1954).

Paralelamente se pusieron en marcha proyectos de colonización rural. En los primeros años de la revolución, estos proyectos fueron apoyados por Naciones Unidas, y consistieron fundamentalmente en el traslado de trabajadores mineros excedentarios al Oriente, especialmente al departamento de Santa Cruz y al norte de La Paz.

Finalmente, se abordó el tema de la educación rural. Increíblemente, meses antes de que esto sucediera, el propioÑuflo Chávez había mostrado su posición racista, señalando lo siguiente sobre la demanda de educación indigenal:

> Por el momento no es necesario alfabetizar a los indígenas. Lo que importa es salvarlos del régimen burgués, incorporándolos a la población boliviana como a un elemento útil al trabajo y por ende a la patria, evitando que sigan siendo una bestia inconsciente de los patrones que los explotan en forma inhumana (El Diario, 13 de agosto de 1952).

Al final, la posición de Chávez no fue tomada en cuenta, y la educación rural recibió un importante apoyo.

Como ya dijimos, la Reforma Agraria fue la que permitió la adhesión masiva del campesinado al MNR y, posiblemente, a la ideología sustentada por este: el nacionalismo revolucionario. Paralelamente, esta adhesión marcó el alejamiento entre el movimiento campesino y la COB.

La adhesión se manifestó de diversas maneras, siendo una de las más comunes la presencia de los campesinos indígenas en manifestaciones oficialistas, que normalmente se realizaban en la ciudad de La Paz. Ya sea para festejar alguna fecha importante –como el 9 de abril, el 1 de mayo o el 6 de agosto– o para realizar demostraciones de fuerza contra los eventuales adversarios del Gobierno, siempre había campesinos adheridos a las iniciativas oficialistas. Estos llegaban a la Sede de Gobierno con sus milicias armadas, situación que hubiese sido impensable una década antes. Asimismo, lo hacían con sus vestimentas típicas y cargados de sus instrumentos musicales.

Recuadro 11

### Relato de la presencia campesina en La Paz del 9 de abril de 1958

"(…) Otra banda de música. Sus instrumentos son la *parka*, el *pinkillo*, la *quena*, que son flautas de distinta longitud, el *pututú*, que es una trompeta de cuernos de carnero, el *siku*, que parece la siringa de Pan, tambores y grandes cajas. Son los indígenas, con pantalones cortos, piernas desnudas, calzados con sandalias rudimentarias, el poncho de colores desteñidos sobre los hombros, cubiertos con grandes sombreros o, de una especie de pasamontaña de formas y colores variados" (LENOIR, 1958: 17, subrayado en el original).



**Figura 6. Milicias armadas campesinas.**
Fuente: Lucio Flores Salinas.

## Las relaciones del Gobierno movimientista con Estados Unidos y la reforma urbana

Las relaciones entre el Gobierno movimientista y los Estados Unidos se fueron configurando según el carácter que fue tomando la aplicación de las dos primeras medidas fundamentales de la revolución: la nacionalización de las minas y la Reforma Agraria. En la medida en que estas avanzaron, la potencia del norte se fue convenciendo de que Bolivia no se estaba encaminando hacia posiciones radicales o comunistas, como lo había creído en un principio.

Antes de la nacionalización de las minas, en 1952, los círculos periodísticos y el Gobierno norteamericano identificaban al MNR boliviano con el populismo de estilo peronista, por los siguientes motivos:

> …ambos [Gobiernos] tienen la mayoría de apoyo de la clase obrera y atacan al imperialismo capitalista como enemigo principal de sus respectivos países (de la revista Bussines Week, El Diario, 19 de abril de 1952).

Pero, después de iniciadas las negociaciones para indemnizar a los grandes empresarios y de decretada la Reforma Agraria, ambos cambiaron de opinión y de actitud.

Por su parte, el Gobierno del MNR había buscado congraciarse con el de los Estados Unidos desde un inicio, intentando convencerlo de que estaban alineados con el anticomunismo. Esta tarea fue encargada a una importante figura política: Víctor Andrade, el embajador boliviano en aquel país. Paralelamente, Paz Estenssoro recalcó a Milton Eisenhower, enviado a nuestro país en agosto de 1953, que Bolivia estaba abierta a la inversión de capitales extranjeros y que el MNR no era anticapitalista.

Convencidos de que no había peligro de entrar en contradicciones con su política para América Latina, los estadounidenses comenzaron a dar una cuantiosa "ayuda" a Bolivia. Esta consistió en la donación de alimentos y créditos, en la reapertura de la compra de estaño, en el envío de técnicos para las minas y en la ayuda técnica para el agro. Pero también supuso la instalación de organismos de diverso tipo, visitas de autoridades de alto rango, reconocimiento de la OEA al flamante Gobierno y otros. Paralelamente, el Gobierno boliviano esquivó estrechar relaciones con la URSS y otros países comunistas



Figura 7. Victor Paz y Milton Eisenhower en La Paz.
Fuente: Lucio Flores Salinas.

que también ofrecieron su apoyo a la revolución, principalmente para el sector minero. Eso sí: la Cancillería mantuvo una política de relaciones abiertas con todo el mundo.

Detrás de esa aparente generosidad estadounidense, se abrió el camino para una cada vez mayor injerencia suya en el curso de la Revolución Nacional, la que fue tímidamente advertida por Juan Lechín y otros dirigentes sindicales de la COB y la FSTMB. La previeron, pues en los siguientes años, la "ayuda" dependió en gran parte de la solución definitiva al tema de las compensaciones a los mineros expropiados.

En cuanto a la donación de alimentos, en noviembre de 1952 llegó al país un primer envío –por valor de 500.000 dólares– de manteca, trigo, harina, leche en todas clases y otros. En el convenio firmado se señaló lo siguiente:

> Los Estados Unidos proporcionarán a Bolivia, de acuerdo a su pedido, aquellos productos agrícolas y otra asistencia económica que pudiera ser solicitada en forma de donación, con el propósito de ayudar a impedir una seria dislocación económica y sufrimientos en masa (…) [y también] para ayudar a los esfuerzos de Bolivia de aumentar la producción de alimentos y otros productos, de modo de reducir su extrema dependencia en alimentos básicos y otras (La Nación, 1 de noviembre de 1952).

Este primer envío fue posible únicamente porque dos meses antes, el 16 de septiembre, se había firmado un contrato de venta de 10.000 toneladas de estaño boliviano con la R.F.C. Dicho contrato tendría vigencia hasta el 31 de marzo de 1954, con el precio que regía en el mercado mundial –que no era el que Bolivia pidió. El 29 de noviembre de ese mismo año se firmó otro contrato, esta vez de una duración de cinco años. Según este, todas las minas que antes pertenecieron a Patiño le venderían estaño a la Williams Harvey, empresa en la que el mismo Patiño era el principal accionista.

Lechín, como Ministro de Minas, no asumió una actitud clara frente a la decisión del Gobierno de indemnizar a los ex barones del estaño para evitar tener conflictos con el Gobierno norteamericano. De hecho, evidenciando su ambigua posición, dijo las siguientes palabras en una oportunidad:

> La ayuda ofrecida por el Gobierno de los Estados Unidos aliviará en gran medida nuestra situación alimentaria. Naturalmente que nosotros hubiésemos deseado mil veces más la venta justa de nuestro estaño, pero ante la actitud hostil de los imperialistas (…) hemos tenido que admitir esa ayuda (La Nación, 1 de noviembre de 1953).

Es importante resaltar que, inmediatamente después de la nacionalización de las minas, el 31 de octubre de 1952, se produjo el abandono del 80% del personal técnico extranjero. Sin embargo, desde marzo de 1953 se comenzó a contratar técnicos norteamericanos. Entre los principales técnicos contratados se encontraba Víctor Hampton, ingeniero de minas y metalurgista que se encargó del grupo II de la COMIBOL, al que pertenecían las minas de Catavi, Huanuni, Japo, Morococala, Viloco y Kami.

En 1952, el Gobierno boliviano había establecido un convenio con el Grupo Chacur para la instalación de una fundición de estaño y una fábrica de explosivos y fósforos dentro del territorio nacional. Sin embargo, pronto se desestimó ese proyecto y se renovaron los contratos de venta de estaño con Williams Harvey y con la fundidora de Texas. Esta medida fue de grave perjuicio para el país.

Para el desarrollo de otros campos, el Gobierno boliviano firmó un convenio con la ONU en mayo de 1953. Según este convenio, esta entidad internacional –en gran medida hegemonizada por los norteamericanos– enviaría a Bolivia 23 técnicos y consultores para asesorar a distintas dependencias fiscales. Bolivia recibiría asesoramiento en los siguientes temas: diversificación económica (en la que el país ya había decidido invertir unos 10 millones de bolivianos, a través de la CBF), desarrollo de la agricultura en la región oriental e incremento de la producción petrolera.

La política de diversificación económica también contó con el concurso directo de los Estados Unidos, a través de un financiamiento de unos tres millones de dólares para su primera fase. El financiamiento se concretó a partir de enero de 1954. Con estos recursos se proyectó la instalación de fábricas, molinos e ingenios, además del fomento de la producción agrícola y la ejecución de obras viales, de riego, saneamiento, educación técnica e inmigración.

En relación al tema agrario, el 18 de septiembre de 1954 se informó que un grupo de asesores del International Development Service de los Estados Unidos supervisarían a los empleados bolivianos durante la planificación del crédito agrícola supervisado (La Nación, 18 de septiembre de 1954). El 30 de octubre de aquel año, el Servicio Agrícola Interamericano –junto al Ministerio de Asuntos Campesinos y al Banco Agrícola– firmó un crédito de 200 millones de bolivianos y 50.000 dólares para dicho programa. Ese capital incluía la gestión de trasplante inmediato de mineros al Oriente del país. Esta migración asistida entraba dentro del marco de los programas de colonización, pues allí los desplazados de otras zonas formarían cooperativas.

En enero de 1954, el Ministro de Economía señaló que la ayuda norteamericana permitiría la tecnificación en el país. Mientras tanto, el presidente Paz Estenssoro manifestó que las donaciones de los Estados Unidos habían ayudado a Bolivia a obtener artículos alimenticios desesperadamente necesitados. En ambas declaraciones se nota la falta de preocupación por la obvia dependencia hacia la ayuda extranjera y la debilidad de la producción interna. Al interior del país, no se contaba con recursos propios para realizar esas tareas nacionales. Como resultado de esto, ya habiéndose producido la Reforma Agraria, Bolivia gastaba unos 25 millones de dólares anuales en importaciones de trigo, arroz, grasas comestibles, productos lácteos, maderas, algodón en rama y petróleo y sus derivados.

Eso sí, también hay que reconocer que los recursos obtenidos para la diversificación económica se concretaron en importantes emprendimientos industriales. Entre estos podemos mencionar: la creación de la planta industrial de leche en polvo en Cochabamba y la de los molinos de yuca, la construcción de silos, el fomento a la producción triguera, el camino a Caranavi, el crédito agrícola y el apoyo para la inmigración japonesa "Okinawa" al departamento de Santa Cruz.

En junio de 1954, una misión norteamericana llegó a La Paz, en el marco de una gira emprendida por otros países latinoamericanos. Su objetivo era interiorizarse en la economía del país. En octubre, el subsecretario auxiliar del Departamento de Estado estadounidense para asuntos latinoamericanos, Holland, también arribó a La Paz. En marzo de 1955, como consecuencia de esas visitas, un grupo de inversionistas norteamericanos llegó al país para entablar negociaciones destinadas a la explotación de minerales bolivianos, principalmente zinc, oro y estaño. También se interesaron por el petróleo y por la industrialización de varios productos agrícolas, así como por participar en el incremento de la ganadería científicamente organizada en el Oriente.

Como consecuencia de esa visita, se inició un proceso de ingreso de capitales extranjeros en el sector minero. Un claro ejemplo de esto es la explotación de distintos yacimientos auríferos en el departamento de La Paz, desde octubre de 1955. La encargada de esta actividad era la firma Sheafler. En las provincias norteñas de este Departamento, la explotación estuvo a cargo de la firma O'Neil. Por su parte, las firmas National Lead de Estados Unidos y Ventures Limited de Canadá acreditaron representantes para exploraciones mineras en las minas Matilde –principalmente de zinc– y Mutún –hierro y manganeso (La Nación, 19 de octubre de 1955).

En noviembre de ese mismo año, se anunció que la Bolivian Exploration and Development Corporation, una firma del estado de Delaware, explotaría los yacimientos de la Bol Inc Minning Corporation, situados en los ríos Beni, Kaka y Mapiri. Finalmente, el 22 de agosto de 1956 se suscribió un convenio entre la South American Gold and Platinium Compañy y el Estado boliviano; este le permitía la explotación de oro en el Alto Beni a dicha empresa. Sin embargo, los acuerdos más importantes para la inversión de capitales norteamericanos en los sectores estratégicos de nuestra economía recién fueron firmados durante la segunda gestión de gobierno movimientista. Más adelante veremos cómo la aprobación del Plan de Estabilización, elaborado por un asesor norteamericano, puso en marcha dicha inversión en los sectores claves.

Para mayo de 1955, según informaciones oficiales, la ayuda estadounidense prestada a América Latina alcanzaba la suma de 52,5 millones de dólares. De ese total, Bolivia había recibido la cifra más alta: 18,5 millones, seguida por Guatemala, con 6,8 millones. Un mes después de que se diera esa información, una partida consistente en materiales técnicos y víveres llegó a Bolivia. El monto de esta partida ascendía a 7.349.500 dólares, que sumados a los 18,5 millones ya

aprobados hicieron un total de más de casi 26 millones de dólares. Cuadros Sánchez, el Ministro de Economía, informó a la prensa que parte de esos fondos sirvieron para superar el déficit de la balanza de pagos y equilibrar el presupuesto en moneda extranjera. Para ese entonces, la inflación y la crisis económica ya se habían desatado.

Nada se dijo entonces de los efectos colaterales de la ayuda norteamericana recibida hasta ese momento. Pero es un hecho que las donaciones norteamericanas provocaron la disminución de la producción en algunos productos agrícolas, el fortalecimiento de algunas casas importadoras (encargadas de la distribución de los productos donados), la aparición de "cuperos" y la llegada a nuestro país de empresas norteamericanas.

En cuanto al primero de estos efectos, lo más negativo de la ayuda en alimentos fue la brusca caída de la producción triguera, situación que no sería superada durante las siguientes décadas. El fortalecimiento de las grandes casas importadoras –algunas instaladas en Bolivia desde principios de siglo– no solo ocurrió por la concesión dada por el Gobierno para la distribución de alimentos donados, sino también la de otros productos que antes habían sido adquiridos y distribuidos por la administración pública.Por ejemplo, desde marzo de 1953, el Ministerio de Economía otorgó el contrato de importación y distribución de azúcar a la Casa Grace –por 440.000 quintales– y a la firma Grabb –por 60.000quintales– (La Nación, 1 de marzo de 1953).

Pero también fueron otras las casas importadoras autorizadas para adquirir alimentos para la población boliviana, como Casa Bernardo, Renecui Hermanos, CONAL. En un contexto de emergencia inflacionaria, estas eran las encargadas de abastecer de harina, arroz, grasa de cerdo, azúcar y leche (en todas sus formas) a la población. Para abril de 1955, la demanda por concesiones de importación y distribución de alimentos había crecido de manera desorbitada, provocando el crecimiento de los "cuperos".

Otra de las derivaciones indirectas de la ayuda norteamericana en alimentos fue, justamente, el surgimiento de los llamados "cuperos". Estos personajes aparecieron a raíz de que, a principios de 1954, el Gobierno decretó la formación de un Comité de Abastecimiento y Control de Precios para cada Departamento.




Figura 8. La ciudad de La Paz experimentó la construcción de viviendas sociales con la Reforma Urbana.
Fuente: Lucio Flores Salinas.

Decenas de hombres y mujeres militantes del MNR fueron escogidos en los barrios urbanos para hacer la distribución directa a la población de productos de primera necesidad que llegaban de Norteamérica, supuestamente para superar la acción de los especuladores. Sin embargo, la mayoría de los "cuperos" cometieron muchos abusos, ya que para garantizar el cupo de cada familia realizaban cobros –popularmente conocidos en Bolivia como "coimas"–, además de terminar convirtiéndose ellos mismos en acaparadores y especuladores. Los productos que ocultaban eran revendidos en el mercado negro a precios muchos más altos, hecho que enriqueció rápidamente a varios "cuperos".

En medio de este difícil panorama económico, el Gobierno decidió impulsar la reforma urbana, que puede ser considerada como la que menor entusiasmo provocó en las organizaciones sindicales. Pese a su importancia, esta fue la que menor huella dejó en la memoria histórica de las medidas tomadas por el MNR. La reforma urbana fue planeada para expropiar extensos predios ubicados sobre todo en los márgenes de las ciudades, predios que pertenecían a conocidos personajes ligados a las élites oligárquicas surgidas desde fines del siglo XIX –las mismas que fueron vencidas por la revolución de 1952.

La reforma urbana se concretó primero en la ciudad de La Paz, y un poco después en Santa Cruz (aunque sobre esta ciudad nos ocuparemos recién en el capítulo que trata sobre el surgimiento del regionalismo en esa región). Para entonces, la Sede de Gobierno era la capital departamental que contaba con mayor población. Según el censo de 1950, La Paz tenía 321.073 habitantes; la seguían Cochabamba y Oruro, con unos 80.000 y 60.000 habitantes respectivamente. Las demás capitales departamentales no superaban los 50.000 habitantes (Fundación Huáscar Cajías, Así fue la Revolución, 2002: 199).

Después de la insurrección de 1952, las casonas de los barones del estaño y de grandes terratenientes, junto con los edificios que albergaban a sus oficinas, fueron tomados por el Gobierno y utilizados para las nuevas oficinas gubernamentales. Este fue el caso de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), que se instaló en una antigua propiedad de Carlos Víctor Aramayo, en La Paz. Pero aún no se había tomado la decisión de qué hacer con las tierras que estos y otros personajes tenían en las ciudades, muchas de las cuáles excedían los límites marcados por la Reforma Agraria de 1953.

Tanto el Gobierno como las alcaldías comenzaron a tomar cartas en el asunto. En cuanto a las alcaldías, para entender mejor su rol en el periodo que tratamos es necesario explicar algunos antecedentes. Las Alcaldías recién habían comenzado a tomar importancia desde la década de 1940. Sus autoridades eran elegidas por voto directo –pero no universal. El MNR, una vez en el poder, no convocó a sufragios para renovar los gobiernos municipales, sino que nombró a las autoridades locales directamente desde el Poder Ejecutivo. En contrapartida, permitió la presencia de representantes de los sectores sociales en los gobiernos municipales. Así, la red de comandos zonales del partido, los sindicatos de comerciantes, las juntas de vecinos y las "barzolas" (el sector femenino del partido) acogieron a estos representantes (Ibíd.: 204). Sus demandas a los gobiernos municipales consistían en políticas de construcción de viviendas, espacios verdes y parques infantiles, entre otros. Muchas veces, estas obras se concretaron gracias al trabajo comunal –o, en otras palabras, al aporte de la mano de obra gratuita por parte de los habitantes de los distintos barrios.

El Primer Congreso de Alcaldías Departamentales del Gobierno de la Revolución Nacional se realizó en La Paz, en julio de 1954. En este Congreso se presentaron ponencias sobre los siguientes temas: reformas a la Ley Orgánica de Municipalidades, impuestos y rentas municipales, reformas a la Ley de Alquileres y problemas de saneamiento, vialidad, urbanización y tránsito, entre otros (Ibíd.: 204).

Como resultado de estas demandas, el Gobierno nacionalista adoptó las siguientes determinaciones legales: el Régimen de Vivienda Popular (D.S. de 28 de agosto de 1954), la suspensión de los Juicios de Desahucio contra los Inquilinos sin Vivienda (1956) y la Ley del Inquilinato (1960). Estas medidas, ampliamente favorables a los intereses populares, provocaron una reacción negativa de parte de los grupos afectados, que pertenecían a las élites y sectores de clase media. En el D.S. de 1954 se prohibió el acaparamiento de terrenos con fines especulativos y se delimitó el tamaño de las posesiones urbanas. Paralelamente, se acordó beneficiar con tierras en el área urbana a los que no tenían vivienda propia y a los sectores afiliados a los sindicatos.

Bajo ese paraguas legal, el Gobierno impulsó la construcción de viviendas baratas para los sectores minero, ferroviario, fabril, ex-combatientes, policía, militares, maestros, bancarios, gráficos, periodistas, empleados estatales y otros. La mayoría de estas viviendas se construyeron en La Paz, Oruro y Cochabamba. Así se formaron barrios que agrupaban a un determinado sector, y que sobrevivieron con esa característica durante las siguientes décadas. En La Paz, unas veinte organizaciones sindicales recibieron lotes en zonas fronterizas a los barrios residenciales del sur de la ciudad, como Calacoto, Obrajes y Següencoma (Ibíd.: 205).

Sin embargo, las inversiones para mejorar los servicios de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado fueron poco exitosas. Algo similar ocurrió con la intención de crear grandes espacios verdes. Los pocos parques resultantes de esta iniciativa fueron el caso del cerro Laiqakota, o el Parque Forestal y el parque de La Florida, donde sí se construyó una amplia área recreacional.

## Reforma Educativa y universidades (Beatriz Cajías)

La Reforma Educativa, impulsada por el Gobierno movimientista, fue la medida que tuvo mayor participación directa de los actores no gubernamentales que estaban interesados en participar activamente de ella. Los maestros, agrupados en sus organismos sindicales e intelectuales procedentes de diversos partidos políticos, incluso de corrientes opositoras al MNR, formaron parte del planeamiento y la ejecución del proyecto. Muchas de sus decisiones permanecieron durante décadas sin ser revisadas, y el Estatuto Docente que emergió junto al Decreto de Reforma Educativa sigue vigente hasta nuestros días.

### Antecedentes generales de la educación boliviana

A inicios de la segunda mitad del siglo XX, la educación boliviana se encontraba en crisis, pues había problemas tanto de acceso como de calidad. Legalmente, durante el gobierno de Mamerto Urrolagoitia, el 15 de febrero de 1951, se había aprobado el Estatuto y Plan Orgánico de Educación. Posteriormente, el 4 de marzo de 1952, ya durante la gestión del General Hugo Ballivián, se aprobó el Estatuto de la Educación Nacional. Ambas disposiciones tuvieron muy escasa difusión y, en los hechos, fueron desconocidas por el Magisterio y la sociedad en general.

Durante ese tiempo, el magisterio llevó adelante diversas acciones, dando impulso a estudios e iniciativas para mejorar la práctica educativa nacional. En los congresos nacionales del sector se elaboraron propuestas concretas de forma constante; incluso para un nuevo estatuto educativo. En el V Congreso de Maestros, realizado en agosto de 1952 –meses después de la Revolución Nacional–, en la ciudad de Oruro, se planteó al nuevo Gobierno la urgencia de una reforma educacional que completase el ciclo de transformaciones que incluía a la nacionalización de las minas, la Reforma Agraria y el voto universal. "La educación y capacitación de las mayorías nacionales, la educación popular, serían la fuerza afirmativa de dichos cambios" (Originales: 22). Recién en 1953, el Gobierno nacional atendió esta demanda.

### Modalidad de diseño de la Reforma Educativa

El 30 de junio de 1953, el presidente Víctor Paz Estenssoro promulgó el Decreto Supremo No. 03441, en el cual se resolvía conformar una comisión –como en otros temas importantes– que estudiase la reforma integral de la educación boliviana. Las instituciones señaladas en el Decreto designaron a sus representantes, constituyéndose la comisión de la siguiente manera:

Recuadro 12

**Miembros de la Comisión de Educación en 1953**

Presidencia de la República y Presidente de la Comisión: Fernando Diez de Medina.

Ministerio de Educación: Presbítero Armando Gutiérrez Granier y Julio Lairana.

Ministerio de Asuntos Campesinos: Leónidas Calvimontes y Vicente Lema.

Confederación Sindical de Trabajadores de la Enseñanza: José Antonio Arze, Gastón Vilar y Humberto Quezada (además, primer Secretario de Cultura de la COB).

Central Obrera Boliviana: José Pereira.

Consejos Universitarios: Manuel Durán P.

Confederación Universitaria Boliviana: Mario Guzmán Galarza.

Colegios Particulares: Huáscar Cajías Kauffmann.

La conformación de esta Comisión es llamativa, pues el partido de Gobierno, respaldado por un exitoso proceso revolucionario y por la mayoría de la población, no guardó para sí la hegemonía dentro de ella. En cambio, incorporó a personalidades de ideologías diversas, principalmente por sus méritos educativos, y generalmente acató lo que las instituciones convocadas resolvieron.

La comisión tuvo un plazo de 120 días para desarrollar su trabajo. Inmediatamente delimitó sus tareas principales:

Recuadro 13

### Tareas de la Comisión de Educación

1) Aplicación de dos tipos de encuestas, unas dirigidas a maestros y catedráticos de universidades y otras a "personas e instituciones extrañas a la docencia, (…) para auscultar mejor las corrientes de la opinión pública boliviana sobre cuestiones educativas" (Documentos Preliminares: 50).
2) Realización de mesas redondas "con instituciones y personas cuyas opiniones se consideren importantes para orientar las tareas de la Reforma Educacional" (*Ibíd.*: 50-51): industriales, organizaciones mineras, campesinas, comerciales, trabajadores, magisterio, organismos internacionales, entre otras. Se realizaron más de veinte mesas redondas en los dos primeros meses de la Comisión.
3) Visitas y viajes de estudio de dos tipos: "a) centros pedagógicos, fábricas, oficinas, etc., de la ciudad de La Paz, b) algunas zonas agrarias, mineras, etc., fuera de La Paz" (*Ibíd.*: 52). Una de las más importantes fue la visita a Warisata.
4) Revisión de documentación pedagógica y legislación escolar sobre las principales tendencias y experiencias educativas del momento. Así, cada miembro de la Comisión elaboró documentos base de discusión sobre las temáticas más importantes de la Reforma, como la historia de la educación boliviana, la educación primaria, secundaria, alfabetización, etc.
5) Conferencias de miembros de la comisión, en diferentes lugares del país. Fueron particularmente importantes dos ciclos de conferencias organizados por la Universidad Técnica de Oruro, sobre las reformas educativas en otros países y los planteamientos para la reforma boliviana.

Además, permanentemente la Comisión recibió correspondencia de todo el país. En ella llegaban sugerencias y propuestas concretas sobre diversos temas que debían ser abordados por la Reforma.

Finalmente, la comisión entregó su informe el 29 de enero de 1954. El informe constaba de tres tomos que contenían el proyecto de CEB, los decretos reglamentarios complementarios, dos planes (el de Arquitectura Escolar y la Campaña Nacional de Alfabetización), diversas recomendaciones, los textos íntegros de las conferencias realizadas y el material recopilado a lo largo de sus tareas.

Por diversos motivos, este informe no fue analizado por el Poder Ejecutivo. Fue así que, un año más tarde (el 20 de enero de 1955), ante las amenazas del Magisterio de aplicarlo directamente, el Gobierno promulgó el Código de la Educación Boliviana (CEB) en la ciudad de Sucre.

## Perspectiva general y sustentos pedagógicos

La perspectiva general de la educación del MNR estuvo marcada por la conceptualización del "Estado docente". Esta noción ya había sido incorporada en la Constitución Política del Estado de 1938, texto en el que se establecía a la educación como "la más alta función del Estado" (CPE 1961, Art. 186). Por su parte, el Código de la Educación Boliviana establecía que la educación "es un derecho del pueblo e instrumento de liberación nacional" (Art. 1ro).

De acuerdo con la visión del nacionalismo revolucionario, propugnada por el partido de Gobierno, la educación era considerada esencialmente un instrumento político. Así lo expresó permanentemente el presidente Víctor Paz Estenssoro, tanto durante la posesión de los miembros de la Comisión como en el acto de la promulgación del Código.

Desde su perspectiva política, "la educación, cuando se constituye en monopolio de estrechos círculos, se transforma en instrumento de dominación" (D.S. No. 03441). Bajo ese entendido, la principal tarea de la Reforma Educativa era la siguiente:

> …destruir el monopolio de la educación mantenido para su provecho por los grupos dominantes para extenderla a todos los sectores de la población, principalmente a aquéllos hoy relegados, como los campesinos, obreros y artesanos pobres de ciudades, pueblos y aldeas (Ibíd.).

La Reforma Educativa pretendía, además, ser una respuesta "de los bolivianos para los bolivianos". Esta intención, señalada desde el inicio del proceso revolucionario, fue consagrada posteriormente como una de las bases del Código:

> Es nacional, porque responde funcionalmente a las exigencias vitales del país en sus diversas zonas geográficas, buscando su integración y la solidaridad de sus pobladores para la formación de la conciencia nacional a través de un destino histórico común (CEB, Art. 1ro: 5).

En cuanto a los sustentos pedagógicos, una primera fuente se encontraba en las experiencias concretas de la Escuela Nueva, en la que participaron Decroly, Plan Dalton, Winnetka, Coussinet, Dewey, Kerschensteiner y otros, utilizando distintos métodos. Estos educadores se formaron en diferentes escuelas del país desde la década de 1930, por la iniciativa de la Dirección de Educación. La segunda fuente era el análisis de las experiencias y los textos teóricos de otros países.

Recuadro 14

### Bases de la Educación boliviana

8) Es activa, vitalista y de trabajo, porque tiende a proporcionar al educando una capacitación práctica para la actividad productiva y socialmente útil.
9) Es globalizadora, porque da al educando conjuntos de experiencias y conocimientos significativos que, al estructurarse en actitudes, ideales y conducta, desarrollan integralmente su personalidad.
10) Es coeducativa, porque los educandos de ambos sexos son educados en común y porque la influencia recíproca de los sexos hacia el pleno desarrollo de sus fuerzas espirituales y morales crea un estado de salud psicofisiológico para la felicidad del individuo. Debe ser realizada de manera progresiva y en condiciones científicamente favorables.
11) Es progresista, porque utiliza y crea mejores técnicas de enseñanza y aprendizaje, tendiendo a formar una definida pedagogía nacional.
12) Es científica, porque se fundamenta en el conocimiento bio-psíquico del educando y le proporciona una formación sistemática basada en los progresos de la ciencia y en función de la realidad nacional (CEB: Art. 1o.).

El Código de la Educación Boliviana fue llamado así porque contemplaba la globalidad del sistema educativo nacional: los aspectos políticos, económicos, administrativos, organizativos y los pedagógicos. Esta fue la primera vez en la historia nacional en que la educación estuvo regida por un instrumento legal tan completo.

Recuadro 15

### Características del Código de la Educación

El Código está dividido en cinco títulos, 42 capítulos y 325 artículos. El Título Primero se ocupa de las Bases y Fines de la educación; el Título Segundo comienza con un capítulo de normas generales, seguido de la estructura del sistema educativo en sus diferentes ciclos y servicios, siendo necesario hacer notar que se incluyen capítulos inéditos tales como el relativo a la "Orientación Educativa y Vocacional", a la "Alfabetización", a la "Educación Campesina", a la "Educación Obrera", a la "Educación Artística", a la "Educación Extra-escolar y de Extensión Cultural", a los que se ha dedicado atención preferente por la importancia que tienen en la actualidad.

El Título Tercero se refiere al enlace entre la Universidad y los ciclos pre-universitarios, dentro de la unidad del proceso educativo.

El Título Cuarto está consagrado al Gobierno y administración del sistema educativo. En él se incluyen cuestiones tales como la "evaluación del trabajo escolar", la "asistencia social escolar" la "cooperación con los padres de familia" y otras que han sido reguladas por primera vez.

El Título Quinto trata de disposiciones transitorias (CEB, Exposición de Motivos).

El Código plantea un sistema educativo organizado en cuatro áreas: educación regular (compuesta por cinco ciclos: pre-escolar, primario, secundario, técnico-vocacional y universitario), educación de adultos, educación especial y educación extra-escolar.

## Ejes de la Reforma Educativa de 1955

La Reforma Educativa buscó ser integral, y por lo tanto intervenir en el conjunto del sistema educativo. Más allá de esa búsqueda, hay que resaltar dos aspectos que recibieron una atención primordial, tanto en la propuesta como en su aplicación: la democratización de la educación y la educación técnica.

En cuanto a la democratización, debemos mencionar que anteriormente hubo avances claros respecto a la mayor extensión de la educación pública en Bolivia, impulsados primero por los gobiernos liberales y, después de la Guerra del Chaco, por los del socialismo militar. Sin embargo, el Censo de 1950 muestra que solamente el 32% de la población boliviana era alfabeta, y la mayor parte estaba marginada de los beneficios de la educación.

Ante esta precaria situación, la Reforma Educativa se planteó la incorporación de todos los bolivianos en edad escolar a la educación regular como uno de sus objetivos principales. Paralelamente, realizó masivas acciones de alfabetización para los adultos analfabetos, asumiendo para sí un lema ya popular en diversos países de América Latina: "de una educación de castas a una educación de masas".

El Código asumió este desafío, incorporando las siguientes bases:

> [La educación] es universal, gratuita y obligatoria, porque son postulados democráticos básicos y porque el individuo, por el hecho de nacer, tiene derecho a igualdad de oportunidades a la cultura. Es democrática y única, porque ofrece iguales oportunidades de educación común a la totalidad de la población, sin hacer diferencia alguna (CEB, Art. 1o, 2 y 3).

En términos pedagógicos, esta democratización de la educación se planteó como "escuela única". Este era uno de los principales postulados de la Escuela Nueva, y fue asumido en Bolivia desde la aprobación de la Constitución de 1938.

A lo largo de los siguientes años, la democratización educativa alcanzó resultados muy significativos. Por ejemplo, de acuerdo con los datos censales, la marginalidad educativa –es decir, la inasistencia a la escuela de la población de 5 a 14 años– pasó de un 72% a un 36% entre 1950 y 1976. Esta es una clara muestra de que la marginalidad, aunque permaneció con datos críticos, se redujo a la mitad en los 26 años que transcurrieron entre ambos Censos.

En cuanto a los alcances de la atención brindada por el sistema educativo nacional, la matrícula escolar se incrementó principalmente en el nivel primario, pasando de 199.619 a 500.878 estudiantes entre 1951 y 1964. El Kindergarten pasó de 5.882 a 20.113 asistentes durante el mismo periodo, y la educación secundaria de 22.788 a 88.788 (Estadísticas educativas presentadas a la Comisión de Reforma Educativa de 1955, en Cajías, Huáscar: Archivo Personal y Ministerio de Educación y Cultura, La educación en Bolivia, 1967).

La Reforma Educativa también se dirigió su atención y acción hacia la población analfabeta del país, cuyo alto porcentaje mostraba una grave situación que se buscó revertir al menor plazo posible. Desde entonces, la educación de adultos pasó a formar parte del sistema educativo nacional. Los adultos fueron atendidos en las escuelas de alfabetización, las de enseñanza complementaria y técnica y las de aprendizaje y recuperación.

La alfabetización, como deber del Estado, se constituyó en una campaña de carácter progresivo y participativo. Esta campaña movilizó a las principales fuerzas sociales del país y utilizó todos los niveles y recursos del sistema educativo nacional que estaban a su disposición. Sus objetivos no se redujeron a la enseñanza de lectura y escritura, sino que abarcaron el mejoramiento de las condiciones generales de vida y de trabajo de los adultos, además de la defensa y la consolidación de la cultura nacional. Asimismo, dado que el analfabetismo se concentraba especialmente en zonas de habitantes indígenas, se estableció lo siguiente:

> …la acción alfabetizadora se hará en las zonas donde predominen las lenguas vernáculas, utilizando el idioma nativo como vehículo para el inmediato aprendizaje del castellano como factor necesario de integración lingüística nacional (CEB, Art. 115).

Como puede verse al comparar los datos obtenidos en los Censos de Población de 1950 y 1976 (según datos oficiales del INE), las acciones desarrolladas alcanzaron resultados concretos. El analfabetismo de la población entre 15 y19 años pasó del 57% al 14%. En el rango de edad de 20 a 29 años se pasó del 61% al 23%. El rango de analfabetismo en personas de 30 a 49 años, disminuyó del 71% al 44%, y para la población mayor de 50 años bajó del 80% al 67%. En el primer grupo hay 43 puntos de diferencia entre ambos censos; en el segundo 38, en el tercero 27 y en el cuarto 13. Tal como muestran estos datos, el porcentaje de analfabetismo disminuyó notoriamente, y sobre todo entre la población más joven.

Los datos por sexo dan cuenta de lo particularmente conflictiva que era la situación para las mujeres. Si en 1950 ellas constituían el 57% de la población analfabeta, en 1976 representaban

el 68% de total. Entonces, si bien el número de mujeres analfabetas se redujo, no sucedió en la misma proporción que entre los hombres. Esta es una clara muestra de la postergación que sufrieron las mujeres en la atención educativa.

En el Censo de 1950, apenas 760 personas en todo el país declararon haber recibido una formación comercial; de este total, sólo el 3% (22) eran mujeres. En relación a la formación técnica, de las 6.270 personas que dijeron tener este nivel de instrucción, el 51% eran mujeres. Se planteó que esa situación debía ser revertida, pues la nueva estructura del Estado demandaba en gran número a personas capacitadas para llevar adelante las transformaciones en los procesos productivos y de creciente industrialización, que eran centrales al proyecto revolucionario del MNR. Para responder a esta necesidad se hizo énfasis en la educación técnica, que pasó a ser la segunda prioridad de la Reforma Educativa de 1955.

El Código de la Educación Boliviana incorporó una modalidad educativa específica, denominada educación técnica, vocacional y profesional, que se desarrolló en tres grados:

Recuadro 16

### Propósitos de la educación técnica, vocacional y profesional

- La educación pre-vocacional, en los dos últimos cursos de la escuela primaria, cuyo propósito principal es que el niño adquiera nociones básicas e interés por el trabajo manual.
- La educación vocacional, que forma parte de la educación secundaria, dentro de secciones específicas y como parte de un "Plan Diferenciado de Estudios"; complementa la formación humanística en procura de iniciar en el alumno el proceso de adquisición de un oficio.
- La educación técnica y profesional, que forma obreros calificados y técnicos, desarrollándose en institutos y escuelas especiales. Las especialidades iniciales ofertadas son: Industrial, Comercial y Administrativa, Agropecuaria, Profesional y Técnica Femenina, aunque no se descarta la apertura de nuevas especialidades, de acuerdo con las necesidades económicas del país. Se da un énfasis marcado en la importancia de la educación técnica de las mujeres.

Fuente: Código de la Educación Boliviana.

Como una actividad relacionada con este campo, en marzo de 1957 se inauguró la Primera Normal Industrial de Bolivia, con 32 nuevos alumnos. Ese mismo año, en Cochabamba, en la Escuela de Artes y Oficios, se retomó un antiguo proyecto para entrenar técnicos en las industrias nativas de tejido, cerámica y trabajos en madera. En 1958 se organizaron los Comités de Aprendizaje y Tecnificación Obrera, conformados por representantes del sector laboral y patronal, de los Ministerios de Trabajo y Educación y de SCIDE. Ese mismo año se inauguró Muyurina, la primera escuela de Educación Vocacional en Agricultura. En 1960 se creó la Escuela Normal Superior Técnica.

Algunos datos, recopilados posteriormente, ayudan a evaluar los resultados del planteamiento de la Revolución Nacional. Entre 1960 y 1964, la matrícula de la modalidad profesional femenina decreció en un 1.5%, y la matrícula industrial se incrementó apenas en un 9%. El mayor incremento se experimentó en la matrícula comercial, con un 148%. Como se puede observar, estos parámetros responden más a una economía centrada en el sector terciario que a una basada en la producción, cosa que la Reforma Educativa buscaba. Durante los cuatro años estudiados, la matrícula de la modalidad del Bachillerato Humanístico para la educación secundaria osciló entre el 88 y el 89% del total, dejando el porcentaje restante al bachillerato técnico.

En 1974, diez años después de haber sido derrocado el MNR, la matrícula educativa lanzó datos que eran una clara muestra del estancamiento experimentado durante la década anterior. Solamente 4.443 alumnos en todo el país eligieron una opción de formación técnica-profesional: apenas el 4% de todos los alumnos matriculados en el nivel secundario.

Con relación a la educación técnica, vocacional y profesional, entre 1952 y 1964 la matrícula total pasó de 4.049 a 8.704 estudiantes: un incremento del 115%. La matrícula de educación técnica industrial pasó de 704 a 2.133 estudiantes; la comercial de 1.675 a 3.758 inscritos; y la profesional femenina de 1.670 a 2.833 alumnas. A pesar de que, porcentualmente, estas cifras son significativas, el número de alumnos se mantuvo en un nivel muy bajo, hecho que imposibilitó el logro de los objetivos trazados por el MNR. La masificación de la educación técnica, planteada como objetivo central por la Reforma Educativa de 1955, se mantuvo muy por debajo de las expectativas generadas.



Figura 9. La matrícula escolar se incremento con la reforma de la educación de 1955.
Fuente: Lucio Flores Salinas.

## Otras acciones de aplicación de la Reforma

Al igual que en muchos otros casos del periodo post-revolucionario, la normativa del CEB no fue aplicada en su totalidad. Sin embargo, hay que resaltar las diversas acciones que sí fueron desarrolladas en busca de la transformación de la educación boliviana. A continuación, mencionamos las más relevantes.

Durante los primeros años de gobierno del MNR se organizaron seminarios internos, conferencias y jornadas de reflexión como, por ejemplo, la Conferencia Nacional de Educación Urbana, en 1956, y III Seminario de Educación Fundamental, en 1955. Ambos seminarios –y otros más– sirvieron para clarificar los alcances de la Reforma en los distintos niveles del sistema educativo y elaborar los nuevos planes y programas. Un punto principal en ellos era la definición y experimentación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza.

Hasta 1958 se elaboraron cinco guías básicas: 1) Planes normativos; 2) Programas de enseñanza (que incluyó contenidos, normas metodológicas y sugerencias para el maestro); 3) Programas de Alfabetización y Educación de Adultos; 4) Plan General, Programas y Reglamento General de las Escuelas Normales Rurales; y 5) Nueva Guía Didáctica.

Además, ese mismo año se aprobó el Plan de Fomento de la Educación Nacional, que abarcaba temas de infraestructura, equipamiento, orientación vocacional y distribución de personal docente, entre otros.

En cumplimiento de los objetivos definidos por el CEB, el Estado enfocó sus esfuerzos en la atención a la educación rural, privilegiando la entrega de material didáctico, avanzando así en la aplicación de la Reforma. La enseñanza se realizó principalmente en castellano y con comprensión del idioma nativo. Esto se realizó así sobre todo por la postura de las organizaciones campesinas y de la población rural en general, pues consideraban que enseñar en los idiomas nativos significaría prolongar el retraso y el aislamiento hacia las siguientes generaciones.

En 1955 existían dos escuelas normales rurales y dos urbanas en Bolivia, todas con funciona-

miento irregular. Respondiendo a esta carencia, el Estado impulsó la matriculación y asumió distintas medidas para garantizar un mejor desempeño laboral. También organizó actividades de actualización y perfeccionamiento para los docentes en ejercicio, becando a los profesores para que realizaran estudios de especialización en el exterior.

Pero el centro principal de atención fue la ampliación de la infraestructura escolar. En 1959 se puso en marcha el Programa de Reparaciones y Refacciones Escolares, destinado a los 15 distritos escolares urbanos. En el área rural, esta tarea todavía estaba a cargo del Ministerio de Asuntos Campesinos, que fundó núcleos y escuelas seccionales a lo largo y ancho de todo el país, incluyendo mobiliario escolar.

En términos generales, la construcción y fundación de nuevas escuelas en todos los niveles fue un proceso masivo. Así, entre 1951 y 1964 se pasó de un total de 2.723 establecimientos educativos a 6.746, con un incremento cercano al 150%. La educación privada administraba el 51% de los establecimientos de educación inicial, el 5% en la educación primaria y el 47% en la secundaria.

También cabe resaltar que se desarrollaron diversas actividades de educación extraescolar. Un ejemplo de esto es el Programa de Alfabetización y Difusión Cultural, iniciado en 1956 y dirigido al Altiplano paceño. La particularidad de este programa es que se realizaba por radio y en aimara, pues estaba destinado a los campesinos adultos. Dicho programa, a cargo de los Padres Maryknoll, llegó a tener 22 centros de recepción y a contar con apoyo de maestros rurales y líderes de comunidad.

Un ejemplo de la atención que en aquel entonces se otorgó a la educación está contenido en el mensaje al Congreso de 1955, por parte Víctor Paz Estenssoro. En él, el Presidente señaló lo siguiente:

> …una prueba del interés puesto por el Estado en la educación es que ahora gasta en ella, como nunca sucedió en el pasado, la suma más alta del presupuesto: Bs. 5.827.561.819, sobre un total de Bs. 30.282.248.107, lo que equivale al 19.2%. El Gobierno ha destinado para material didáctico $us.141.000, para material escolar de consumo general $us. 644.000 y para equipos de enseñanza industrial $us. 210.000.

### Las Universidades

En Cochabamba, del 25 al 27 de agosto de 1953, tuvo lugar una Mesa Redonda de Rectores. Allí se debatió sobre la pertinencia de la inclusión de un delegado de la Universidad en la comisión de diseño de la Reforma Educativa. Al final se accedió a que estos delegados participen, pero bajo la condición de que no se tomen medidas que contradigan la autonomía universitaria. La Comisión revisó con mucho cuidado la relación de la Universidad con los otros niveles educativos. Fue así que, desde la postura del CEB, la Universidad pasó a formar parte del sistema educativo nacional y, por tanto, parte de la Escuela Única.

Además, la Comisión elaboró un documento de recomendación a las universidades. En él se refirió a la necesidad de realizar reuniones periódicas de coordinación entre universidades y de constituir un consejo o secretariado de coordinación interuniversitario, con representación docente-estudiantil. También aludió a la modernización de sus métodos de enseñanza como un requisito indispensable para propiciar el enlace con los ciclos preuniversitarios, entre otros aspectos.

Muchas de estas medidas contribuyeron al cumplimiento de las grandes misiones asignadas a las universidades modernas por la Reforma Educativa. Entre ellas destacan las siguientes:

Recuadro 17

#### Tareas para las universidades del país

- Implantar en cada universidad una Universidad Popular, orientada a dar educación técnica y político-social moderna a las grandes masas obreras y campesinas.
- Incluir obligatoriamente en los programas anuales de las Universidades la discusión de los grandes temas de interés nacional (…).
- Sugerir que los catedráticos formen asociaciones sindicales dentro de cada Universidad, una Central de Profesores Universitarios y que se vinculen con la Confederación Sindical de Trabajadores de la Enseñanza y, por medio de ella, con la COB.

Fuente: Archivo Huascar Cajías.

El primer punto fue uno de los primeros en ser aplicados. Gracias a su pronta puesta en marcha, la Universidad Popular funcionó por varios años, y con importantes resultados. Dos ejemplos de esto son el Instituto Tecnológico Túpac Katari, de La Paz, y la Universidad Popular Eustaquio Méndez, de Tarija.

En los años anteriores a la Revolución Nacional, los estudiantes universitarios, junto a los obreros y campesinos, participaron en diversas acciones revolucionarias. Incluso muchos formaron parte en las violentas jornadas de abril de 1952.

El X Congreso Universitario Nacional tuvo lugar pocos meses después del triunfo revolucionario. Allí se declaró el inicio de la "segunda etapa popular y revolucionaria de la Reforma". Durante las jornadas del X Congreso se hizo notorio que la "lucha es por la revolución nacional" había reemplazado al discurso sobre la implantación del socialismo. En la Declaración de principios que emanó de este Congreso se adoptó el nombre de Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y se asumieron los siguientes principios: el gobierno paritario –para canalizar la participación política del estudiantado, parcializado con el MNR–, la democratización de la enseñanza y la selección de autoridades "no contrarias a las mayorías nacionales" (X Congreso Universitario).

Sin embargo, muy pronto, el respaldo universitario al Gobierno movimientista se revirtió. El 10 de junio de 1954 (medio año antes de que el Código de la Educación Boliviana fuera promulgado), después de una huelga de hambre, en la UMSA de La Paz se declaró la "Revolución Universitaria", en contra de los postulados nacionales y en defensa de la autonomía. Esta declaración recibió el apoyo de los estudiantes de otras universidades, especialmente de las de Cochabamba, Oruro y Sucre. Por su parte, la COB propugnó la supresión de la autonomía universitaria, por considerar que estaba constituida en base a un sistema de privilegios.

En la Conferencia Nacional de Dirigentes Universitarios, llevada a cabo en La Paz durante el mes enero de 1955, con la asistencia de delegados de todas las universidades del país, el movimiento universitario se dividió entre "movimientistas" y "autonomistas". El enfrentamiento entre ambas partes derivó en la ocupación de las universidades por parte de estudiantes movimientistas, que impusieron nuevos nombres para el cargo de rector. Algunos consideraban que los que subieron eran revolucionarios; otros los tomaban por interventores. Se instituyeron comités de huelga en cada universidad, para llevar adelante la medida de paro de labores. El conflicto acabó recién cuando se constituyeron los Consejos Universitarios, en donde participaron estudiantes de ambos grupos e iniciaron un proceso de elección de las nuevas autoridades y de selección de nuevos catedráticos.

Finalmente, en el Segundo Congreso de Universidades Bolivianas, realizado en Sucre entre el 14 y el 19 de octubre de 1958, se aprobaron las Bases Generales de la Universidad Boliviana. En ellas se ratificó la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la independencia ideológica, la inviolabilidad de sus recintos y el no reconocimiento a cualquier gobierno universitario impuesto por la violencia o la coacción. Así, por decisión de la misma Universidad, esta se alejó del proceso educativo general y, por consiguiente, del proceso revolucionario en marcha.

## Larevolución en crisis y el deterioro de las alianzas

> (…) Los bolivianos hicimos una revolución [1952] que se detuvo en pleno camino y luego sobrevino el desorden, la arbitrariedad, lo absurdo, a todo lo cual fuimos acostumbrándonos poco a poco (…). Nosotros queremos decir con el patriota y pensador: Pertenezco a una Nación admirable y perseverante que, por encima de su multitud de errores y de debilidades, no ha dejado que se pierda la idea que constituye toda su grandeza y que su pueblo siempre, sus minorías selectas algunas veces, buscan sin cesar el formular cada vez mejor. Este país merece que yo le ame con este amor difícil y exigente que es el mío (Almaraz, Sergio, 1970: 36)

### El cambio de mando en el esquema movimientista

En marzo de 1956, el Gobierno presidido por Víctor Paz Estenssoro convocó a elecciones generales para ese año. Ese llamado respondía a, al menos, cuatro objetivos concretos. El primero era mantener la presencia del MNR en el Gobierno por la vía democrática. Fueron las condiciones externas e internas las que llevaron a los líderes del MNR a convencerse de la importancia de incorporar a la Revolución Nacional en el sistema democrático liberal. El segundo era renovar el mando movimientista en el poder. Se consideró

que era prudente dar paso a otro líder del partido para que ocupara la Presidencia. El tercer objetivo era derrotar a la oposición falangista en el plano electoral. Según los miembros del MNR, una de las mejores estrategias para aplastar a FSB era la convalidación democrática del régimen. El último de los cuatro objetivos era poner en práctica el voto universal, decretado en julio de 1952. Esto permitiría que más de un 1.200.000 personas asistan a las urnas, cifra muy superior en comparación con las cerca de 150.000 personas que habían gozado de ese derecho en las elecciones nacionales de 1951.

Un primer paso para encaminar a buen puerto las elecciones fue la delimitación de los distritos electorales. Se optó por utilizar la división del territorio nacional en nueve departamentos. Cada uno de ellos elegiría cuatro diputados como base fija y un diputado más por cada 100.000 habitantes. En cambio, los senadores serían elegidos a dos por cada departamento, en base a una lista completa y por simple mayoría de votos. Estos durarían seis años en su cargo, dos más que los diputados y que el Presidente y Vicepresidente de la República (Decreto Nr. 04315, La Paz, 13 de marzo de 1956).

En una de sus partes, el reglamento Electoral señalaba lo siguiente:

> …el régimen democrático que ha impuesto la Victoria Nacional de Abril descansa fundamentalmente en el pueblo, que es fuente de toda autoridad y poder; (…) el partido político es el instrumento mediante el cual los ciudadanos buscan la realización de sus intereses en el terreno de la política y como tales, son los únicos facultados para intervenir en elecciones, eliminándose el aventurerismo electoral (D.S. de 1956).

Es importante hacer notar que, por primera vez en Bolivia, se daba la supremacía a los partidos políticos para la representación política. Durante el régimen anterior, los candidatos podían postularse con el simple apoyo de una institución pública o social. Este fue el caso, por ejemplo, de José Antonio Arce, quien en 1940 fue apoyado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz para su postulación presidencial.

Las garantías constitucionales y políticas fueron dadas. Todos los partidos políticos que estuviesen inscritos en la Corte Electoral serían susceptibles a elección por medio del voto. Sin embargo, ningún otro partido político tenía las condiciones de enfrentarse al MNR en igualdad de condiciones. Esto no fue así únicamente por el amplio respaldo popular que el partido de Gobierno tenía –por haber sido el conductor de los cambios posteriores a 1952–, sino porque los demás no encontraban las fórmulas políticas para conformar una posición contraria capaz de reunir los suficientes votos y constituirse en una oposición real, con un proyecto alternativo respaldado por amplias bases sociales.

Mientras tanto, en la VII Convención del MNR, se designó como candidatos a Hernán Siles Zuazo para Presidente y a Ñuflo Chávez Ortiz para Vicepresidente. Esta fórmula nació sin mayores problemas, ya que el propio Paz Estenssoro –que continuaba siendo el líder indiscutido del partido– consideraba a Siles Zuazo como a su natural sucesor. En cambio, la presencia de Chávez en la fórmula respondía a la fuerza que había ganado la facción de Juan Lechín Oquendo. Esa facción, aun actuando dentro del partido de Gobierno, en los años anteriores había buscado aparecer como "el ala izquierda del MNR" y como fiel representante de los intereses de la COB.

Los resultados de la VII Convención mostraron que aún era posible mantener unidas bajo el paraguas partidario a las distintas tendencias que surgieron dentro del MNR desde los primeros momentos de la revolución. Una de las principales tendencias era la ya mencionada "ala izquierda"; liderada por Juan Lechín. La otra, más bien de derecha, era representada por Walter Guevara Arce, uno de los más importantes ideólogos del nacionalismo revolucionario. Hay que recordar que la facción más conservadora, comandada por Rafael Otazo –uno de los fundadores del MNR–, había sido expulsada del partido en 1953, a raíz del golpe de Estado que propició junto a Falange Socialista Boliviana (FSB). Por su parte, Carlos Montenegro, uno de los dirigentes que más sombra podía haberle hecho a Paz Estenssoro, ya había fallecido. Finalmente quedaban algunos dirigentes intermedios del tronco histórico del partido, como Fellman Velarde, Guillermo Bedregal, Germán Monroy, Augusto Céspedes y otros que se habían mantenido fieles a la conducción del máximo líder.

Las elecciones de julio de 1956 se realizaron luego de una activa campaña electoral que, por primera vez, llegó al área rural. Fue en estas

regiones donde concentraciones multitudinarias recibieron a los candidatos movimientistas, agasajándolos con collares de flores, ponchos, lluchos andinos, bastones de mando, coca y cuantas cosas más se pudiese obsequiar… todo para mostrar su adhesión al partido que les había otorgado derecho sobre sus tierras. Por su parte, Paz Estenssoro y Siles Zuazo balbuceaban palabras en aimara y quechua, recorrían lugares nunca antes visitados por candidatos presidenciales, prometían profundizar la revolución y volvían a la ciudad embadurnados de mistura.

La candidatura oficial triunfó ampliamente en todo el país, contando con 15 de los 18 senadores y 63 de los 68 diputados elegidos. La Falange Socialista Boliviana, el único partido importante de la oposición, acusó al MNR de haber cometido un fraude electoral, de usar los aparatos gubernamentales a su favor y de manipular el voto campesino. Lo cierto es que sus candidatos, Oscar Únzaga de la Vega y Mario Gutiérrez –para la Presidencia y Vicepresidencia respectivamente–, no gozaron de las suficientes garantías en el proceso electoral, e incluso algunos de sus militantes fueron apresados bajo la no muy creíble acusación de que estaban organizando un nuevo golpe de Estado. Aun así, la FSB obtuvo una expectante votación en la ciudad de La Paz, donde consiguió 40.626 votos frente a los 56.472 del MNR (La Nación, 13 de julio de 1956).

Esas acusaciones bien pudieron haber desvirtuado la elección y la votación. También es cierto que el MNR estaba mostrando un cierto alejamiento respecto a las clases medias de la ciudad de La Paz, sector del que sacó menor porcentaje de votos a nivel nacional. Ello no obstante, es indudable que, con fraude o sin él, el MNR contaba con un vigoroso y amplio respaldo popular. Entonces, es posible afirmar que su triunfo en las urnas fue legitimado y recibido con algarabía por las mayorías nacionales. Más aún, mostró que la alianza de clases todavía estaba en pie.

Es interesante recalcar que, luego de conformado el nuevo Congreso Nacional, nacieron bancadas, es decir, grupos espontáneos de diputados que se reunían –no necesariamente de manera permanente–, buscando una determinada identidad e, incluso, su diferenciación frente a otras. Los casos más notables en este periodo fueron la Bancada Minera, la Campesina y la Oriental. La Bancada Minera estaba conformada por Potosí, con Juan Lechín como Senador y Gabriel Porcel, Alberto Jara, Nicolás Bernal, Pedro Arismendi y Noél Vásquez como diputados. Por Oruro estaban como representantes Mario Torres –como Senador– y Niceto Aracena –como Diputado.

Consideramos necesario profundizar en los ejes de las propuestas políticas del MNR y las de los partidos políticos opositores. Para ello será muy útil el análisis de los principales planteamientos electorales del MNR, que contaba con el respaldo de importantes sectores de la sociedad, y de los demás partidos que se presentaron a las elecciones de 1956.




Figura 10. Campaña electoral en el campo, 1956.

Fuente: Lucio Flores Salinas

Recuadro 18

## Principales propuestas electorales de los partidos políticos para las elecciones de 1956

MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO (MNR):

- Agricultura: continuación de la Reforma Agraria, aceleración de entrega de títulos, cooperativización, legislación del trabajo campesino, planificación unificada de la economía agraria, desarrollo industrial agrario, recuperación de proyectos en Yungas, Beni y el Chaco, fomento triguero en Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija, expansión del cultivo de café, producción frutícola, racionalización de la explotación forestal, fomento maderero, incremento de la producción ganadera, obras de riego.
- Industria: diversificación industrial, contrato colectivo por ramas industriales, regulación de sueldos y salarios mediante el Instituto de Costos según productividad, seguridad industrial.
- Minería: reorganización de COMIBOL, dotación de capital en giro, adquisición de materiales y maquinaria, apoyo a industria minera mediana.
- Hidrocarburos: fomento al de desarrollo de YPFB, mayor provisión de energía.
- Mejor sistema de comunicaciones.
- Defensa de la economía popular.
- Estabilización monetaria y régimen tributario (esta última la calificó como tarea urgente, señalando que debían aplicarse las recomendaciones del Consejo Nacional de Estabilización).
- Recurrir al capital y a la técnica extranjera.
- Consolidación de las conquistas obtenidas.
- Vivienda: reforma urbana aplicada, extensión del seguro social a nuevos sectores de la población boliviana.
- Política: reafirmación de la COB como central única de los trabajadores del país.
- Educación: alfabetización, orientación vocacional, institutos especiales, aumento de establecimientos educativos, creación de la Universidad Técnica Boliviana.
- Política sanitaria.

FALANGE SOCIALISTA BOLIVIANA (FSB):

- Política: autogeneración y correlativa interdependencia de los diferentes poderes del Estado, para que sea imposible la supeditación servil del Legislativo y el Judicial al Ejecutivo.
- Amplia libertad de industria y comercio.
- Apoyo total a la minería, impulso a la pequeña y mediana.
- Fundamentos: "Ningún Estado tiene derecho a coartar las libertades ni afrentar a la persona humana", "Los que lo hacen son tiranos", "La familia constituye la célula primaria de la sociedad", "Velar por el indio, los ancianos y la niñez".

La propuesta de la FSB fue firmada por G. Stumpf, Gonzalo Romero, Mario Gutiérrez y otros.

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR):

- Minería: defensa, consolidación y superación de la nacionalización de las minas. Nacionalización de la minería mediana en manos de foráneos. Reestructuración de la minería pequeña. Reorganización de COMIBOL sobre bases socialistas, que se cimentará en la gran capacidad creadora de la clase obrera. Reducción de los costos de producción minera.
- Hidrocarburos: defensa de la riqueza petrolífera (anulando toda concesión que se haya hecho a imperialistas), implantación de refinería en Bolivia, fortalecimiento de YPFB.
- Nacionalización de los ferrocarriles y progresiva nacionalización de la industria.
- Desconocimiento de la deuda pública y cancelación de los convenios internacionales lesivos al país.
- Monopolio estatal del comercio exterior y severo control de divisas.
- Establecimiento de relaciones diplomáticas con países populares.
- Búsqueda de mejores mercados para nuestras materias primas.
- Agricultura: destrucción del latifundio y creación de cooperativas, granjas agrícolas, aprovechar la comunidad indígena para impulsar la colectivización, maquinaria, etc.
- Ejército: creación de milicias obrero-campesinas en vez del antiguo Ejército, creación del Nuevo Ejército Revolucionario.

- Escala móvil de salarios.
- Educación: enseñanza sin privilegios, tribunales populares y justicia.
- Unidad nacional prestándose especial atención al desarrollo económico del Oriente, Noreste y Sudeste del país.
- Derechos de ciudadanía: ampliación irrestricta de estos derechos a los mayores de 18 años, a mujeres y analfabetos.

Principio de proporcionalidad de acuerdo a la densidad demográfica.

Firmaron esta propuesta Guillermo Lora, Miguel Alandia Pantoja, Alfonsina Paredes Larrea, Walter García Guzmán, Indalencio Velarde, Mario Carrasco Marín, César Villagra.

Fuente: El Diario, 18 de mayo de 1956

Por su parte, los representantes de la COB, en un ampliado –denominativo dado a las asambleas de dirigentes de los sindicatos– realizado poco antes de las elecciones, decidieron que tanto la brigada parlamentaria minera como los Ministros Obreros debían sujetar sus actos a la Plataforma de Acción Parlamentaria aprobada durante el mismo. Esto implicaba lo siguiente para los representantes obreros:

> …defender la nacionalización de las minas, impulsar la profundización de la Reforma Agraria, luchar por las reivindicaciones sociales y culturales de los trabajadores y combinar la lucha parlamentaria con la acción de masas para profundizar la Revolución Nacional (La Nación, 24 de julio de 1956).

Como se puede advertir, estas propuestas recogieron en gran medida los postulados de los poristas, quienes en esos años tenían una fuerte influencia en las minas y, por ende, en la misma Federación de Mineros y en la propia COB, donde los movimientistas seguían siendo mayoría.

Como veremos más adelante, la pugna entre diferentes posturas frente al curso de la revolución –que estuvieron presentes desde los inicios del proceso– se agudizarían en este segundo periodo del MNR. Esta situación se haría especialmente crítica a partir de la aplicación de la Estabilización Monetaria, en diciembre de 1956.

## La Estabilización Monetaria y primeras reacciones contrarias

El segundo Gobierno de la Revolución Nacional, encabezado por Hernán Siles Zuazo (1956-1960), tenía ante sí el desafío de transformar el triunfo político obtenido en las urnas en un triunfo económico. La ciudadanía en su conjunto esperaba de él que resuelva la crisis económica que se había agudizado hace un año, y que por entonces se traducía en una inflación descontrolada –en junio de 1956, el peso boliviano se cotizaba en 7.600 por dólar. La inflación trajo como desagradables consecuencias el desabastecimiento y el encarecimiento desmedido de los productos de primera necesidad.

Ya en los últimos meses de la gestión de gobierno de Paz Estenssoro se había determinado dar una urgente solución a esta situación. Fue con ese afán que, el 19 de mayo de 1956, se firmó un convenio con el Gobierno de los Estados Unidos. Los norteamericanos se comprometieron a enviar una comisión técnica que analizaría las medidas que debían adoptarse para lograr la estabilización. Poco después comenzó a funcionar el Consejo Nacional de Estabilización, que encargó a Jackson Eder –consultor norteamericano enviado como parte del convenio citado– la redacción de un proyecto de decreto. Pero la política de estabilización, delineada inicialmente por Paz Estenssoro, tendría que ser aplicada por el Presidente entrante, Hernán Siles Zuazo, a quien el Parlamento Nacional otorgó facultades extraordinarias para hacerlo. El decreto fue dictado el 15 de diciembre de 1956.

El proyecto de Jackson Eder fue bautizado como Plan Eder. Entre las principales determinaciones macroeconómicas de este plan estaban: la estabilización de la unidad del peso boliviano en un sólo tipo de cambio; la eliminación de los controles oficiales sobre los precios y de los subsidios para la producción de artículos de consumo; y la implantación de rígidos controles sobre créditos bancarios.

Recuadro 19

### Algunos aspectos de los "considerandos" del Decreto Supremo Nr. 4538, fechado el 15 de diciembrede 1956

(…) el proceso inflacionario, iniciado como consecuencia de la crisis mundial y que cobró impulso a través de la Guerra del Chaco, se ha agudizado en los últimos años y lleva al país a la necesidad de encarar el problema de manera integral, actuando sobre todos los factores que inciden en la situación monetaria.

Que las posibilidades de inversión de capitales privados extranjeros, necesarios para el desarrollo económico, quedan limitados a la inestabilidad monetaria, dejando margen únicamente para la explotación extractiva con destino a la exportación que, por lo general, es dependiente de los mercados internacionales.

Que los planes de desarrollo y diversificación económica, con los cuáles se busca aumentar los bienes disponibles, se ven también entorpecidos en su ejecución por la persistente desvalorización económica monetaria, que hace inaplicable todo presupuesto de costos

Fuente: La Nación, 5 de agosto de 1956.

El proyecto de estabilización, asesorado de pies a cabeza por Eder, contó con un respaldo financiero de 25 millones de dólares, de los cuáles 7.5 millones provenían del FMI y 17.5 millones de dólares del Gobierno de los Estados Unidos. Este proyecto trajo consigo el inevitable replanteo de algunos postulados básicos de la Revolución Nacional, pues no solo apuntaba a disminuir el carácter benefactor del Estado, sino también a quitarle su papel de principal impulsor de la economía.

El control de la inflación pasaba por el congelamiento de sueldos y salarios, la suspensión de varios beneficios sociales y la anulación de subvenciones que el Estado otorgaba a algunos rubros, con el objetivo de que sus precios se mantuvieran bajos. También era importante reactivar la inversión, y para eso se buscaron capitales privados nacionales y extranjeros para las áreas de la minería y los hidrocarburos. Lógicamente, ambas medidas conminaron al Estado boliviano a tomar un rol que poco tenía que ver con el que adquirió en los primeros años de la revolución.

Por otra parte, el decreto puso al descubierto la dependencia de nuestro país respecto a los Estados Unidos. En años pasados, la potencia norteamericana ya había impuesto la indemnización de las empresas mineras expropiadas (hasta julio de 1956 se pagaron a los ex-barones del estaño aproximadamente 9 millones de dólares) a cambio de seguir comprando nuestro estaño. Pero Estados Unidos no se limitó a eso, sino que, como principal comprador del estaño boliviano y por su aporte fundamental a la estabilización, se sintió con el derecho de intervenir en los distintos campos de la política interna.

Bolivia también adolecía de una fuerte crisis en el ámbito minero. Uno de los principales problemas por abordar era la crisis de COMIBOL, que afectaba duramente al sector que producía la mayor cantidad de divisas para el país. El decreto recogió gran parte las sugerencias que la firma Ford, Bacon & Davis había hecho hace unos meses. La tarea de esta firma, contratada por el Gobierno de Paz Estenssoro, era hacer una inspección de las minas y señalar las causas de la disminución de producción y de los altos costos de la misma.

En el capítulo correspondiente a la economía del periodo de la Revolución Nacional se abordarán en detalle las consecuencias económicas de la puesta en efecto del Decreto Supremo Nr. 4568, promulgado para lograr la estabilización monetaria. En esta parte nos concentraremos fundamentalmente en su impacto político y social. Al respecto, primero nos interesa señalar que su aplicación marcó en mucho la redefinición de las relaciones entre el partido de Gobierno y el movimiento obrero. También hizo que las disputas al interior del MNR se agudizaran y que se consolide la lealtad del movimiento campesino al partido. Finalmente, cabe señalar la relación contradictoria del segundo Gobierno de la Revolución Nacional con los postulados iniciales de las "banderas de abril".

El Decreto Supremo determinó el congelamiento de sueldos y salarios por un año, tanto para el sector laboral minero como para el resto de los sectores productivos. Pero no se limitó a eso, sino que resolvió la racionalización de la fuerza de trabajo y la abolición del sistema de pulpería barata. Para paliar esta medida se fijaron compensaciones –por las pérdidas de pulpería y de tipo de cambio– que quedarían incorporadas a los sueldos y salarios.

En el entendido que la estabilización monetaria iba a permitir frenar la crisis, la creciente especulación y la corrupción, las primeras reacciones de parte de los trabajadores de las minas fueron de aceptación. La FSTMB y los sindicatos locales también mantenían una actitud crítica frente a la situación de COMIBOL y coincidían en la necesidad de reformulación de la política minera.

Así, en un documento titulado "Memorándum sobre la nacionalización de las minas" (1956), la FSTMB señaló que la política estabilizadora debía dar impulso a la minería nacionalizada, "ya que sobre ella gira la actividad pública y privada, al representar el 75% de las divisas nacionales" (ACMB, septiembre de 1956). Por otra parte, en un ampliado minero realizado en octubre de 1956, los obreros determinaron lo siguiente:

> …ofrecer su respaldo y confianza al Gobierno de Siles Zuazo, en el entendido de que los frutos que se obtengan de la medida a tomarse determinarán la detención de la inflación y en ningún momento atentarán contra los derechos e intereses de los trabajadores (La Nación, 29 de octubre de 1956).

Sin embargo, algunos sindicatos controlados por corrientes políticas de corte marxista, como el de Siglo XX, asumieron desde el principio una posición crítica ante los términos del decreto. El sindicato de Siglo XX manifestó su postura con el siguiente argumento:

> …no se puede imputar a los trabajadores la política de despilfarro de las disponibilidades en moneda extranjera (…), de la excesiva burocratización e influencia política en la designación de personal, de los malos manejos, los robos, etc. (…) ni de la mala administración técnica y administrativa de COMIBOL, de los contrabandos y la inmoralidad (ACMB, 1 de diciembre de 1956, documento firmado por Irineo Pimentel, Federico Escóbar, César Lora y otros).

Otros sindicatos también se expresaron al respecto, señalando que no iban a permitir que el Plan de Estabilización afecte sus intereses. Así, demandaron el normal funcionamiento de los sindicatos, la participación obrera en el Gabinete, en el Legislativo y en la COMIBOL, la vigencia del control obrero y la pervivencia de todas las conquistas sociales y económicas conseguidas desde 1952. Pero también hubo quienes respaldaron la política gubernamental sin condiciones. Lógicamente, el cruce de ambas posiciones llevaría muy poco después a la división interna del movimiento minero, hecho que obligó a la FSTMB a convocar al VIII Congreso de Trabajadores Mineros.

Recuadro 20

### Representación de delegados al II Congreso de la COB de 1957

- Comité Ejecutivo Nacional: 13 delegados.
- Ministros Obreros: 4 delegados.
- Parlamentarios Obrero-Campesinos: 50 delegados.
- Comités Regionales de la COB: 17 delegados.
- Federación de Mineros: 67 delegados.
- Federación de Petroleros: 12 delegados.
- Federación de Siringueros: 7 delegados.
- Confederación de Fabriles: 35 delegados.
- Confederación de Constructores: 24 delegados.
- Confederación de Harineros: 8 delegados.
- Federación de Gráficos: sin cifra.
- Confederación de Ferroviarios: 31 delegados.
- Confederación de Choferes: 17 delegados.
- Confederación de Telecomunicaciones: 6 delegados.
- Confederación de Campesinos: 57 delegados.
- Confederación de Maestros: 16 delegados.
- Confederación de Trabajadores Particulares: 12 delegados.
- Confederación de Trabajadores del Estado: 7 delegados.
- Federación de Trabajadores Municipales: 5 delegados.
- Federación de Trabajadores de Seguridad Social: 5 delegados.
- Confederación de Bancarios: 4 delegados.
- Federación de Sanitarios: 3 delegados.
- Federación de Gastronómicos: 3 delegados.
- Trabajadores Manuales de Educación: 3 delegados.
- Confederación Universitaria Boliviana: 5 delegados.
- Confederación de Estudiantes: 3 delegados.
- Federación de Trabajadores del Arte: 3 delegados.
- Juventud Revolucionaria de la COB: 3 delegados.
- Gremiales: 7 delegados.
- Vendedores de Periódicos y Loterías: 2 delegados.
- Federación de Inquilinos: 3 delegados.

La suma total de delegados era de 439.

Fuente: La Nación, 23 de abril de 1957.

El Congreso, realizado durante el mes de abril de 1957en la localidad de Pulacayo, se inició con un amplio y profundo debate sobre el carácter de la Revolución Nacional, el papel de los obreros en ese proceso y el camino futuro que esta debía seguir. Dicho Congreso puede ser considerado como uno de los eventos mineros de mayor trascendencia a nivel político e ideológico.

Tras largos debates, la posición radical de los poristas y los comunistas de convocar a una huelga general logró imponerse, arrastrando a esa determinación al propio Juan Lechín, que en un principio se había mostrado más cauto. El Presidente Siles movió todos sus hilos. El 29 de diciembre se declaró en huelga de hambre, con el propósito de evitar una huelga laboral en Siglo XX. Posteriormente consiguió el apoyo de varios sindicatos –muy poco después serían denominados "silistas"–, encabezados por el de Huanuni.

Mientras corría el plazo dado al Gobierno por los sindicatos mineros para iniciar una huelga de carácter general, la COB se apresuró a convocar a su II Congreso Nacional, que inició sus deliberaciones el 4 de junio de 1957. Como habían establecido los estatutos aprobados en 1954, la representación minera era mayoritaria.

Como máximo dirigente de la COB, Lechín abrió la discusión en plenarias con un discurso en el que señaló que la estabilización se estaba convirtiendo en la "enajenación de abril". Argumentó que esta estaba destinada a matar la industria y el comercio nacionales, a impedir la diversificación económica y a transformar a la Revolución Nacional en:

> …[un] marbete carente de contenido y orientación nacional por su orientación librecambista y su tendencia a acentuar nuestra condición de país monoproductor y dependiente (La Nación, 6 de junio de 1957).

Recuadro 21

### PropuestasdelaCOBfrentealaEstabilizaciónMonetariayelfuturodelaRevoluciónNacional

1. Supresión del pago de las indemnizaciones a las ex-empresas mineras.
2. Completar la Reforma Agraria aplicada por los sindicatos campesinos con ayuda del Estado.
3. Nacionalización de los bancos bajo control obrero.
4. Protección de la industria con divisas baratas bajo control obrero.
5. Plan de producción agraria aplicado por los sindicatos campesinos con ayuda del Estado.
6. Nacionalización sin pago y administración obrera de las empresas que cierren.
7. Mantenimiento del actual funcionamiento de las demás empresas bajo control obrero.
8. Supresión de los elevados gastos de la burocracia estatal y del Ejército, lo cual daría un fondo de aumento inmediato de los salarios que permita aumentar la productividad.
9. Capitalización de COMIBOL con los recursos ya anunciados y administración obrera de la empresa.
10. Censo por comisiones de todos los recursos del país, stocks de mercaderías y alimentos, viviendas, etc., y su distribución equitativa bajo control obrero y campesino, asegurando que lleguen a todos y no a unos pocos privilegiados.
11. Elaboración de un Plan realista de desarrollo industrial y económico, que identifique la explotación de los recursos naturales.
12. Monopolio estatal del comercio exterior, con control obrero para que sus recursos beneficien al país y se importe lo necesario para las masas y no lo superfluo para los ricos.
13. Tribunales populares para sancionar con penas severísimas a los que especulan y se enriquecen con el hambre del pueblo.
14. Proposición de un pool latinoamericano del petróleo para poner en común con otras empresas latinoamericanas (como las de Argentina, Brasil y México) los capitales, los técnicos y la comercialización bajo control obrero, a modo de solucionar esos problemas.
15. Funcionamiento bajo control obrero de toda la gran industria privada, excluidos los capitales extranjeros, a los cuáles se puede asegurar una ganancia razonable pero no tolerar el saqueo del país por ellos ni permitir su dominio completo, como lo hace el Plan Eder.

Fuente: La Nación, el 6 de diciembre de 1957.

En otras palabras, según Lechín, la estabilización iba a llevar a la realidad boliviana a convertirse en la antítesis de la revolución.

Este congreso, igualmente importante en sus debates políticos e ideológicos que el de la FSTMB que lo antecedió, sirvió para elaborar una plataforma de lucha que pronto se conocería como el Plan Barcelli, cuya redacción final estuvo a cargo de Agustín Barcelli. En este texto se resumieron los puntos de vista de los cobistas frente al futuro de la Revolución Nacional.

A la conclusión del II Congreso Nacional, la mayoría de los delegados votaron por sumarse a la preparación de la huelga minera, ahora convertida en una huelga general, que iba a ser decretada el 30 de junio de 1957. Sin embargo, antes de que la huelga comience a hacerse efectiva, varias organizaciones sindicales se retractaron, entre ellas las de los fabriles (especialmente la federación de La Paz), ferroviarios, petroleros, artesanos, comerciantes minoristas, choferes, bancarios, telegrafistas y radiotelegrafistas del Estado, entre otros.

Paralelamente, la prensa oficialista se encargó de iniciar una campaña de desprestigio a los miembros de la COB. De hecho, un columnista conocido los tachó de "trotscobitas", término que muy pronto se popularizó (columna de "Cuadrante Político", sección del periódico oficialista La Nación).

Los sindicatos mineros, que habían incitado y apoyado la huelga general, se quedaron solos; lógicamente, esta fracasó. La primera batalla laboral contra la estabilización y la primera huelga nacional decretada por la COB contra un Gobierno movimientista se transformaron en dos derrotas que acarrearon importantes consecuencias para el futuro del país y del movimiento obrero en sí. Entre estas se encuentra el surgimiento de divisiones internas en todos los sectores laborales durante los siguientes meses. El sector fabril, el minero y el ferroviario –entre otros– se dividieron, rompiéndose así la búsqueda constante de la unidad, búsqueda que en el pasado había caracterizado a sus organizaciones.

## Divisiones en el partido de Gobierno, creación de los Bloques Reestructuradores de la COB y la FSTMB y vinculación campesina con el MNR

Uno de los primeros efectos del fracaso de la huelga fue el inicio de un proceso de depuración de los movimientistas de izquierda. Durante la Conferencia de Jefes de Comandos Especiales y Departamentales del MNR, realizada en julio de 1957, Edwin Möller, Lydia Gueiler, Roberto Jordán Pando, Edwin Rodríguez, Fernando Prudencio y otras figuras con cargos más importantes, como Ñuflo Chávez, Juan Lechín Oquendo y Mario Torres Calleja, fueron apartados de las direcciones del partido de Gobierno.

Fue en esta Conferencia que los delegados pro-Siles comenzaron ser identificados como pertenecientes al "ala derechista" del partido, en respuesta a la censura que lanzaron contra los dirigentes sindicales movimientistas que habían estado involucrados en la declaratoria de huelga. El ala derechista determinó que los implicados dejaran los puestos que sustentaban en el Comité Político Nacional; luego nombró una nueva directiva que no los incluía. Esta medida fue avalada por el propio Siles Zuazo.

Ni bien concluida la Conferencia, esta fue impugnada por los movimientistas de izquierda, que la calificaron de ilegítima. Ñuflo Chávez decidió presentar su renuncia como Vicepresidente de la República ante el Senado, al que envió una nota que aclaraba su decisión. En el entendido de que la medida de Chávez había sido apresurada, sus compañeros decidieron retirar la carta antes de que esta sea leída en el Parlamento. Sin embargo, la fracción pro-Siles del MNR aprovechó el mal paso dado para hacerla aprobar rápidamente, en una maniobra inteligente que les permitió "quitárselo de encima". Por su parte, Lechín renunció como Presidente del Senado.

El cogobierno MNR-COB sufrió importantes modificaciones. La principal de ellas fue que las acciones a realizarse para la elección de los llamados "Ministros Obreros" pasaron a manos del Gobierno. Así, la injerencia de Juan Lechín, el principal líder obrero, y de las Confederaciones y Federaciones nacionales de los diferentes sectores de trabajadores quedó prácticamente anulada.

Mario Torres dejó el Ministerio de Minas, y Siles Zuazo nombró directamente a nuevos Ministros Obreros a ese y a otros puestos. Entre estos ministros, que pertenecían a su tendencia y no habían sido propuestos por los sectores laborales, se encontraban: Vicente Álvarez Plata en la cartera de Asuntos Campesinos; José Solar Alemán (empleado de Huanuni y uno de los fundadores de la FSTMB) en la de Minas y Petróleo;

Edil Sandóval en la de Trabajo; y José Cuadros Quiroga como Ministro de Gobierno.

Paz Estenssoro, que se encontraba cumpliendo funciones diplomáticas fuera del país, advirtió a Siles –en un telegrama que el diario La Nación publicó– sobre los peligros de una división en el seno del partido, de las depuraciones y de la anulación del cogobierno con la COB. Pero Siles Zuazo dio un paso más en su objetivo de hegemonizar a las distintas fuerzas concurrentes en el partido, y creó los llamados "Bloques Reestructuradores". Estos Bloques eran organizaciones sindicales de carácter oficialista, llamadas a reemplazar o a actuar paralelamente a las dirigencias de la Central Obrera Boliviana –elegida en el último congreso– y de la Federación de Mineros –emergida en el de Pulacayo.

El Bloque Reestructurador de la COB fue organizado bajo la conducción indiscutida del dirigente movimientista ferroviario, Juan Sanjinés Ovando, y con el apoyo de diferentes federaciones y confederaciones, la mayoría pertenecientes a la clase media. Los bancarios y los empleados de reparticiones estatales brindaron su apoyo al Bloque, que en un principio también contó con el respaldo del sector fabril.

El proletariado, la columna vertebral de la COB –nacida en 1952–, se mantuvo en ella mayoritariamente. Sin embargo, las divisiones internas en su propio sector y el abandono de importantes sectores de sus filas (como los nombrados arriba) la debilitaron profundamente, al punto de que este fue uno de sus periodos de mayor inactividad y visibilidad. Lechín Oquendo se mantuvo a la cabeza de la COB legítima, y nunca dio su aval a la organización paralela, pero está claro que sus antiguas dotes de líder de los distintos sectores obreros y populares, que conformaron la COB desde su nacimiento, decayeron. Solamente al final de la gestión de gobierno de Siles Zuazo, la COB comenzó a recuperarse y la legitimidad de Lechín fue restablecida.

El proceso de creación de organismos sindicales paralelos y oficialistas no se detuvo ahí, y alcanzó también a la Federación de Mineros. Bajo la iniciativa del sindicato y del Comando Especial de Huanuni, con la participación de los sindicatos de Colquiri, Santa Fe, Machacamarca, Telamayu y Tatasi, en septiembre de ese mismo año se organizó el Bloque Reestructurador de la FSTMB.

Los dirigentes de la FSTMB rechazaron unánimemente al nuevo organismo, así como los Directores Obreros de COMIBOL y varios sindicatos locales entre los que se encontraban Siglo XX, Catavi, San José, Caracoles y otros. No obstante la oposición, el Gobierno otorgó plenas garantías para su funcionamiento, avalado también por el Ministerio de Gobierno.

La intervención del Gobierno en la Central Obrera Boliviana y la Federación de Mineros generó serias tendencias divisionistas que nunca antes habían tenido lugar. Apadrinadas por el Gobierno, ambas instituciones vieron emerger de su seno un sindicalismo francamente oficialista. Esta es una clara muestra de cuán profundo penetraron el MNR y la ideología nacionalista-revolucionaria en las filas de los trabajadores.

Con ello, una buena parte del movimiento minero dejó de lado la consigna de independencia sindical. Es cierto que, en los hechos, dicha independencia no siempre fue practicada de manera absoluta. Sin embargo, esta había posibilitado al movimiento minero un importante margen de autonomía frente al Gobierno movimientista, como cuando impuso sus puntos de vista al dictarse la nacionalización de las minas. Finalmente, la democracia sindical y la tendencia tradicional a lograr el consenso entre una pluralidad de opiniones, dos hechos que habían caracterizado al proletariado minero aglutinado en la FSTMB durante el primer mandato del MNR, entraron en crisis.

Mientras se abría un largo periodo de enfrentamientos internos en el seno del sector minero, la crisis económica de COMIBOL y la del país siguieron golpeando a los mineros y a otros sectores laborales. Varios sindicatos respondieron a la crisis disponiéndose a realizar huelgas y movilizaciones. Su intención era evitar que las pulperías sean descongeladas (lo que iba a significar una rebaja de más o menos el 20% del salario) y que se proceda a realizar mayores despidos. Es importante remarcar que ya se había despedido a 5.139 trabajadores de las empresas de Kami, San José, Bolsa Negra y Potosí. Por otra parte, los salarios estaban congelados desde diciembre de 1956, pero la cotización del dólar –fijada en 7,75 en diciembre de 1956– había aumentado en un 12%. Lógicamente necesitados, también pidieron un aumento de salarios y aprovisionamiento de herramientas y artículos de consumo, entre otras cosas.

Desde fines de 1957 –y a lo largo de todo el año de 1958–, los conflictos desatados contra la estabilización en las minas se intensificaron. Los mineros y sindicalistas de Siglo XX eran la cabeza indiscutida de las protestas y huelgas. El Gobierno no se prestó a dialogar; en cambio, suspendió el fuero sindical, persiguió a los dirigentes Pimentel, Escóbar, Crespo, Lora y Camacho y apresó a Sinforoso Cabrera. En marzo de 1958 se produjo el primer enfrentamiento violento entre las milicias armadas del Bloque Reestructurador y las de los sindicatos de la FSTMB. La abierta participación del Gobierno a favor de los primeros se hizo evidente durante el asalto a la Federación de Mineros, en abril de ese año. Esta acción, liderada por los milicianos del sindicato y del comando de Huanuni, era dirigida por Celestino Gutiérrez, Alejandro Ayllón, Silverio Rodríguez y Wilfredo Siñani, movimientistas que en los siguientes años se hicieron célebres por sus abusos. No obstante la represión violenta, los mineros continuaron movilizados y oponiéndose al Gobierno.

Ese mismo año, el IX Congreso de Trabajadores Mineros de Colquiri fue atacado por los reestructuradores a balazos, hecho que obligó a los delegados a abandonar el lugar donde se encontraban reunidos. Lechín logró huir atravesando a pie toda la mina para no ser atrapado. Finalmente, el congreso fue reinstalado a los pocos días en la mina de San José, y de los dirigentes elegidos, casi todos pertenecían al ala izquierdista del MNR –o MNR de izquierda. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron hasta 1960. En todo caso, lo más importante del IX Congreso fue la discusión política, pues la tesis aprobada por unanimidad mostró de forma muy clara el profundo distanciamiento de este sector con el partido de Gobierno.

La tesis aprobada en San José fue denominada "La FSTMB debe colocarse a la cabeza del pueblo boliviano". Uno de sus principales postulados es el siguiente:

> Los mineros debemos practicar una política independiente de clase, pues el proletariado minero es la vanguardia de la revolución no solo porque ocupa un puesto clave en el proceso de la producción nacional, si no, y esto es trascendental, porque su evolución política ha alcanzado un alto nivel (SIDIS).



Figura 11. La clase obrera, aliada al MNR en los primeros años de la R.N., se alejó del partido de gobierno desde 1956.
Fuente: Lucio Flores Salinas.

Recuadro 22

### Documento del sindicato de Catavi contra las políticas del Gobierno de Siles Zuazo

"Los mineros reafirmamos nuestra voluntad de luchar contra las medidas anti-nacionales y anti-obreras dictadas por Míster Eder y Míster Siles. La revolución de abril sirvió para voltear a la antigua rosca y todos sus decretos oligárquicos. La actual lucha de las masas mineras, al profundizarse y extenderse a todos los sectores obreros del país, servirá en su desarrollo para echar abajo a la nueva rosca y sus decretos reaccionarios. Llamamos a los trabajadores de las ciudades y los campos a unirse a esta marcha revolucionaria de los mineros".

Fuente: APSC, 1 de mayo de 1958.

Los mineros tenían muy claro que, para poder enfrentarse con mayor éxito al Gobierno, debían contar con aliados entre otros sectores del movimiento obrero y popular. Así, en el IX Congreso se decidió que la FSTMB debía promover la firma de pactos intersindicales. Esta consigna se puso rápidamente en práctica, con la suscripción de pactos con los siguientes grupos: ferroviarios de Uyuni y Machacamarca, las confederaciones de Constructores, Harineros y Gremiales y la Central Obrera Departamental de La Paz. Inesperadamente, los campesinos de Ucureña también se afiliaron a este pacto.

En relación a la situación del movimiento campesino y sus vínculos con el MNR, hay que señalar que este fue el sector social agrupado sindicalmente más representativo de todos los que brindaron su respaldo al partido de Gobierno y a la candidatura Siles-Chávez. La VII Convención del MNR, realizada de enero de 1956, sirvió para que los delegados campesinos mostraran su total apoyo a la fórmula. Para entonces, los campesinos contaban con unos 50.000 milicianos, y el sindicalismo rural se había afianzado en todo el país bajo la conducción de su Confederación.

Ni bien el Decreto de la Estabilización Monetaria se hizo conocido, en diciembre de 1956, la mayoría de las provincias hicieron sus votos públicos de apoyo a la medida. La Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos y sus Federaciones Departamentales también se manifestaron a favor, al tiempo que repudiaron "las maniobras que realizan en su contra los enemigos del país" (La Nación, 5 de enero de 1957). Por su parte, el Gobierno declaró que la estabilización iba a permitir la consolidación de la producción agropecuaria, autoabastecimiento de las necesidades de la población boliviana y la conquista de mercados más amplios. Estas palabras fueron bien recibidas por el sector campesino.

Por otra parte, Salvador Vázquez, dirigente de la Federación Departamental de Campesinos de Cochabamba, aun sin tener nada que ver con la declaratoria de huelga decretada por la COB en 1957 –pues el tema de las compensaciones no los involucraba– hizo conocer su pleno respaldo al Gobierno. También acusó a "elementos trotskistas, comunistas y falangistas" de estar creando intranquilidad en el país (La Nación, 28 de junio de 1957).

El nombramiento de Vicente Álvarez Plata como Ministro de Asuntos Campesinos agudizó el enfrentamiento entre grupos organizados en milicias –grupos que ya habían sobrellevado distintos conflictos previamente. Álvarez Plata, dirigente movimientista, optó por tomar abierto partido por algunos dirigentes que eran fieles a su causa. Por ejemplo, en algunas provincias de La Paz, donde la influencia del sector de izquierda del MNR había sido importante hasta ese momento, él organizó otras concentraciones a favor del Gobierno y la estabilización a lo largo del mes de agosto de 1957. El 20 de ese mismo mes, en la localidad de Achacachi, una gran concentración campesina dio su apoyo a Ñuflo Chávez, miembro del "ala izquierdista". Por otra parte, el 1 de septiembre de ese año, en un congreso campesino de la provincia Camacho, se apoyó el nombramiento de Antonio Mamani, Armando Maldonado y Gabino Apaza como nuevos dirigentes de esa provincia, señalando que "han vuelto a conducir a sus bases, una vez eliminados los pseudo dirigentes" (La Nación, 20 de agosto de 1957).

Un poco después, el nuevo Ministro Álvarez Plata movilizó un importante personal de su repartición "para controlar celosamente las actividades disociadoras y anárquicas de los extremistas" (La Nación, 7 de septiembre de 1957). Es posible que esa acción haya motivado la salida del país del dirigente Sinforoso Rivas, aparentemente ligado al sector de izquierda del MNR. Oficialmente, Rivas fue acusado de

enriquecimiento ilícito. Otro líder campesino no oficialista, Gabino Apaza, fue acusado de ser deudor de 40 millones de pesos bolivianos. Miguel Veizaga, dirigente de Cliza, fue señalado como autor de la muerte de una mujer y de ser amparado por los dirigentes máximos de la COB.

En octubre de ese año, Vicente Álvarez Plata recorrió distintos lugares del área rural boliviana. Allí promovió la "reestructuración" de la Confederación Nacional de Campesinos, con este objetivo:

> ...que ella sea genuina representación de los anhelos de los trabajadores del agro, dentro de una clara orientación nacionalista y revolucionaria que permita fortalecer la alianza de obreros, campesinos y clase media (La Nación, s/f, octubre de 1957).

En la misma nota de prensa se dijo que dicha reestructuración estaba orientada por el CPN del MNR, a través del Secretario Ejecutivo Cuadros Quiroga y del Secretario de Asuntos Campesinos Zenón Barrientos Mamani, "porque el partido de vanguardia, el MNR, debe ser el que oriente y canalice la organización del campesinado" (Ibíd.).

Durante 1957, los conflictos entre sectores campesinos no cesaron. En noviembre de ese año, los campesinos de Ucureña y Punata –por una parte– y los de Cliza y Quillacollo –por la otra– tuvieron arduos enfrentamientos que dejaron como saldo dos muertos y cuatro mujeres heridas. Ante la gravedad de estos hechos, y ya que se había instalado un bloqueo de caminos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, viajaron hasta allí el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y el Coronel Alfredo Ovando, Jefe del Estado Mayor del Ejército.

En el III Congreso Campesino, Álvarez Plata señaló que la división en las filas del sector se producía "por la acción de elementos ajenos al movimiento campesino" (La Nación, 13 de diciembre de 1958). Esta declaración es extraña, pues, como ya vimos, él fue uno de los que más alentó la división, primero desde su función oficial como Ministro de Asuntos Campesinos y luego –desde marzo de 1959– como Secretario Ejecutivo de la Federación Departamental de La Paz, cargo que aceptó sin haber dejado el anterior. Pero las cosas le salieron mal a Álvarez Plata, pues el 15 de noviembre de 1959 fue asesinado por milicianos en Achacachi. Paulino Quispe y Toribio Salas, los dirigentes de esa zona, fueron apresados y se les inició un juicio muy sonado. Sin embargo, los verdaderos culpables lograron eludir la justicia.

Finalmente, en el norte de Potosí –donde aún la Reforma Agraria no había ingresado y las comunidades indígenas eran muy fuertes– también surgieron brotes de violencia desde septiembre de 1957. Estos brotes tenían mucho que ver con luchas ancestrales por la tierra y por linderos entre los diferentes grupos étnicos. En agosto de 1958, los enfrentamientos en San Pedro de Buena Vista y Totora arrojaron varios muertos, hecho que hizo que distintas comisiones del Gobierno se desplazaran al lugar para solucionar el conflicto.

Como veremos más adelante, la calma no llegaría al campo boliviano sino con la caída del MNR, en 1964. Esto demuestra que, pese al alineamiento generalizado de las organizaciones sindicales al partido de Gobierno y a la aplicación de la Reforma Agraria, aún subsistían problemas internos que, fundamentalmente, tenían que ver con la ocupación de la tierra. En muchos casos, estos problemas eran de carácter ancestral. Otros conflictos, relacionados con rivalidades locales y regionales y con luchas de liderazgo, echaron aún más leña al fuego.

Esas disputas internas fueron permanentemente azuzadas por las distintas tendencias y grupos presentes al interior del MNR. Y, como vimos, desde hace un tiempo que estos pugnaban por ganar influencia en uno u otro sector del movimiento campesino. Este fenómeno fue analizado a posteriori por autores como Xavier Albó (para el caso de Achacachi), José Gordillo (para el caso de Cochabamba) y Esteban Ticona, entre otros.

## Opositores falangistas, poder local en Santa Cruz y Fuerzas Armadas

La única oposición política al MNR que contó con cierta fuerza era la Falange Socialista Boliviana (FSB). Este partido político fue fundado en 1937, bajo una ideología que emulaba al falangismo español, planteaba un nacionalismo de tinte patriotero, un radical anticomunismo, y estaba compuesta por sectores conservadores que se opusieron a la Reforma Agraria y otras medidas del Gobierno movimientista.

Desde el inicio del periodo revolucionario, la FSB consideró al MNR como a su enemigo irreconciliable. Luego, durante los doce años que este se mantuvo en el poder, la Falange mantuvo su postura de abierta oposición. Por su parte, el MNR respondió con una violencia y represión desmedida contra sus miembros, a quienes apresó, envió a campos de concentración –donde sufrieron torturas y humillaciones– e incluso, en casos contados, asesinó.

Como vimos en el resumen de su programa electoral para las elecciones de 1956, los falangistas plantearon el carácter autoritario del MNR y se arrogaron la defensa de la democracia. Con esta campaña consiguieron cierto éxito en las ciudades. En el plano de la participación electoral, los falangistas sufrieron distintas formas de persecución política y represión contra sus principales dirigentes, a los que se les puso muchos obstáculos para su desenvolvimiento político normal.

Su líder, Oscar Únzaga de la Vega, una persona caracterizada por su fanatismo, su obsecuencia y su idealismo, consiguió el respaldo de terratenientes afectados por la Reforma Agraria, de algunos sectores de las clases medias (principalmente altas), y de los miembros del Ejército que fueron afectados por la derrota de su institución, en abril de 1952. Entre sus filas también contó con líderes locales de Santa Cruz, departamento en el que estallaron intensos conflictos regionales a partir del segundo gobierno del MNR. Sin embargo, la FSB se mantuvo casi por completo desvinculada de las organizaciones sindicales obreras y campesinas, pues estas la consideraban como un enemigo antirrevolucionario y de derecha.

Durante el periodo gubernamental de Siles Suazo (1956-1960), la confrontación con la Falange fue aún más dura. En esos años, el partido opositor preparó varios levantamientos insurreccionales, como los del 21 de octubre de 1958 y los del 19 de abril y 26 de junio de 1959. Estos levantamientos fracasaron y fueron aprovechados por el MNR para incrementar la represión contra los falangistas.

Durante el levantamiento de abril de 1959 se produjeron más de 60 heridos y 20 muertos; 216 personas fueron detenidas en todo el país y 122 asilados en las embajadas. Pero el hecho más dramático fue la muerte del líder de la Falange, Únzaga de la Vega, en circunstancias de un supuesto suicidio, versión que continuó siendo desmentida por algunos falangistas durante los siguientes meses y años. En ese momento también murieron sus correligionarios Walter Alpire, Carlos Kellenberger, René Gallardo, Fidel Andrade, Carlos Prudencio y otros.

La muerte de Únzaga fue un durísimo golpe para el partido que lideraba. A partir de ese momento, algunos sectores de la sociedad comenzaron a compartir la opinión de los falangistas sobre el carácter autoritario del movimientismo. Fue entonces cuando empezaron a salir a luz denuncias de los castigos que recibían sus presos: torturas, flagelaciones, etc. Estos castigos eran llevados a cabo por el tristemente célebre Control Político, cuyo jefe, Claudio San Román, estaba totalmente ensañado contra los miembros de la FSB.

Otro foco importante de oposición al MNR provino de una región específica del país: el departamento de Santa Cruz. En este territorio –y especialmente en la capital departamental–, la gente se vinculó de una u otra manera con la oposición falangista, pues vio con malos ojos los conflictos internos del partido, que estallaron con más fuerza durante el gobierno de Siles Zuazo.

Santa Cruz había recibido mucho apoyo de parte del MNR desde los primeros años de la Revolución Nacional, como parte del plan de diversificación económica. La construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la transferencia de recursos económicos de COMIBOL a la producción petrolera de Camiri (a cargo de YPFB), el desarrollo de la industria azucarera, el impulso a la colonización de tierras del norte para la producción de arroz; todos estos proyectos de desarrollo fueron respaldados por el Gobierno movimientista. Ello no obstante, allí se fue generando un creciente descontento que se debió a varias causas.

Un primer aspecto a considerar es que el Comando local del MNR, dirigido por Luis Sandóval Morón y conformado por personajes como Alcibíades Velarde, Juan Peredo Chávez, Alcides Sandóval Morón, Juan Herrera Morón y otros, fue acusado de practicar numerosos abusos contra la población y de ejercer un poder local desmedido desde los primeros años de la revolución. El Comando contaba con el apoyo de sectores obreros aglutinados en la Central Obrera Departamental y con vínculos

importantes con el sector lechinista del MNR, el PCB y otros partidos de izquierda. Sin embargo, este fue rechazado por la mayoría de la población cruceña urbana.

Pero este rechazo se intensificó a partir de la segunda gestión del MNR, cuando los simpatizantes de Morón entraron en conflicto con un nuevo actor regional: el Comité Pro Santa Cruz, que desde 1957 inició una lucha reivindicativa de amplias consecuencias. La disputa comenzó cuando un diputado cruceño apellidado Vega consiguió que el Parlamento Nacional aprobara la vigencia de una ley dictada por el presidente Germán Busch, en 1938. Dicha ley establecía que el Estado central debía pagar un 11% de regalías a los departamentos productores petroleros, en este caso a Santa Cruz. Sin embargo, el Código del Petróleo, dictado por Siles Zuazo, había eliminado el pago de regalías, cosa que permitía al Estado –asentado en La Paz– quedarse con el total de los ingresos petroleros. Siles Zuazo vetó la Ley citada, provocando una enorme molestia en las élites cruceñas, que se agruparon en el Comité Pro Santa Cruz.

Pronto estallaron los conflictos entre el Comando del MNR, que hasta entonces había tenido el control de la ciudad, y el organismo cívico de reciente creación, cuyo principal dirigente era Melchor Pinto Parada. Estos pronto adquirieron un carácter violento, pues Sandóval Morón contaba con unos 300 hombres armados y el Comité tenía su aparato de choque concentrado en la Unión Juvenil Cruceñista, donde los jóvenes falangistas eran mayoritarios. Durante la primera quincena de octubre de 1957, en las calles y centros públicos cruceños los enfrentamientos entre ambos bandos fueron en aumento.

Los líderes del Comité obtuvieron cada vez más apoyo popular a su demanda. Finalmente, en octubre de 1957, los trabajadores petroleros, asentados en la población de Camiri, junto a amplios sectores de clase media de la ciudad e incluso algunos miembros de la Central Obrera Regional, lograron expulsar a Sandóval Morón de Santa Cruz. El 30 de ese mismo mes, por otra parte, una multitud opositora atacó el local del Control Político, tomando posesión de la Alcaldía Municipal y del Comando de la División Militar, haciéndose dueños de la ciudad. En respuesta, el Gobierno nacional decretó el estado de sitio, movilizó al Ejército y acusó al Presidente del Comité Pro Santa Cruz y a los falangistas de ser cabecillas de un movimiento separatista.

Los jefes militares que arribaron al Departamento lograron negociar con los rebeldes para que depusieran las armas antes de que los incidentes fuesen a mayores. El propio Presidente de la República, Siles Zuazo, se trasladó allí desde La Paz y recordó a la población cruceña –en un discurso improvisado– que el Gobierno había invertido en Santa Cruz cien millones de dólares y había dotado a la ciudad de alcantarillado, pavimento y energía eléctrica.

Los rebeldes lograron hacer retroceder a unos 50 milicianos armados del MNR y asaltar y saquear el domicilio de Sandóval Morón. Ello no obstante, Santa Cruz pudo pacificarse. El único que se opuso a entregar las armas fue el Jefe de la Juventud Cruceñista, Carlos Valverde, quien apoyado por líderes radicales (como Jorge Landívar, Jorge Antelo y otros) decidió continuar la lucha en el campo, hasta que finalmente fue derrotado.

En mayo de 1958, ante un nuevo levantamiento protagonizado principalmente por falangistas, el Gobierno tuvo que movilizar nuevamente a la VIII División del Ejército a Santa Cruz. Esta vez, los militares fueron acompañados por unos 900 milicianos campesinos de Ucureña (valle de Cochabamba) que se acantonaron a pocos kilómetros de la ciudad. Mario Gutiérrez, Carlos Valverde y otros rebeldes huyeron primero a Vallegrande y Camiri, donde contaban con el apoyo de la población. Luego fueron arrinconados en Terebinto (La Nación, 18 de mayo de 1958).

En esta localidad, los campesinos llegados desde Cochabamba y los militares atacaron con dureza al grupo de sublevados, algunos de los cuales terminaron heridos o muertos. Aunque se desconoce la cifra exacta de los fallecidos, para la población cruceña este hecho quedó fuertemente arraigado en la memoria histórica, y fue bautizado como la "masacre de Terebinto". Para la población cruceña, la masacre significó una ruptura profunda con el Gobierno movimientista, cuyo accionar fue totalmente repudiado. Esta reprobación duró hasta la caída del poder del MNR, e incluso tuvo trascendencia en la posición política de la mayoría de la población durante las siguientes décadas.

Como señala Ricardo Catoira en su libro Las luchas sociales en Santa Cruz (1998), la aparente

victoria de Siles Zuazo pronto se convirtió en una derrota. Finalmente, el Ejército se vio obligado a abandonar el Departamento, permitiendo así que el control de la ciudad caiga nuevamente en manos del Comité Cívico. El conflicto volvió a estallar en junio de 1959, a raíz de que la Unión Juvenil Cruceñista rechazó el nombramiento del movimientista Harold Zambrana como Prefecto del Departamento. Entonces, Siles Zuazo envió nuevamente al Ejército, pero esta vez acompañado no solo por las milicias campesinas de Ucureña, sino también las de los departamentos de Cochabamba, Oruro y La Paz. El 28 de junio, las fuerzas del orden se impusieron y detuvieron a 114 "fasciosos" (La Nación, 4 de julio).

El Gobierno señaló que se había logrado "preservar la soberanía de la patria" e insistió en que el verdadero carácter de las revueltas en Santa Cruz era la intención de separarse de Bolivia. Pese a que es verdad que no faltaron esas propuestas en los discursos del Comité y de los falangistas, el motivo central de la rebeldía cruceña fue, sin lugar a dudas, el tema de las regalías. A su vez, este tema estaba vinculado a una percepción que venía de tiempo atrás: de que el centralismo paceño había postergado las demandas e intereses regionales. Esa era una realidad sobre todo anterior al régimen del MNR, y que había comenzado a ser cambiada justamente desde la revolución de 1952. De hecho, Santa Cruz había recibido muchas transferencias económicas y el impulso para su posterior desarrollo.

Pero en el caso de las regalías, que finalmente fueron conquistadas por los cruceños, el Gobierno de Siles Zuazo tomó las decisiones equivocadas, entre ellas el uso desmedido de la fuerza cuando estallaron conflictos. El costo político de estas decisiones fue enorme para los movimientistas, pues Santa Cruz se convirtió en la plaza fuerte de los opositores falangistas y de las fuerzas conservadoras, ambos parte de la élite cruceña, aglutinada en el Comité Pro Santa Cruz. Pero la derrota no se quedó allí, sino que el MNR incluso perdió el respaldo de los sectores obreros y populares de aquel Departamento. Si la gente de Santa Cruz había sido leal al MNR desde el sexenio y durante la primera gestión de gobierno del partido, hasta su caída del poder no dejó de alzarse en protestas y enfrentamientos, muestra notoria del resentimiento profundo hacia sus líderes, especialmente hacia Siles Zuazo.

En relación a las fuerzas del orden, tanto militares como policiales, fue también durante la gestión de Siles Zuazo que se generaron divisiones internas y conflictos con el Gobierno nacional. Fue en este periodo cuando ambos cuerpos comenzaron a intervenir directamente para apaciguar o controlar conflictos sociales y regionales.

En julio de 1957 estalló un problema serio al interior del Ejército. Como relata Gary Prado (1984), este se produjo cuando un sector de las Fuerzas Armadas rechazó las renuncias –inducidas por Siles Zuazo– del Ministro de Defensa Nacional, Julio Prado Montaño, y del Jefe del Estado Mayor, General Clemente Inofuentes. Para frenar intentos de sedición al interior de la institución, incluso la Iglesia Católica tuvo que intervenir como mediadora. Finalmente, en octubre de ese año, las partes en conflicto suscribieron un convenio que perseguía alcanzar la "conciliación y armonía entre miembros de las Fuerzas Armadas". En el convenio se señaló: "El ejército revolucionario se halla identificado con su pueblo y el partido (…) mantiene su lealtad y adhesión firme al Jefe de Estado" (La Nación, 4 de octubre de 1957).

Como consecuencia del acuerdo de octubre de 1957, se produjo la anunciada reorganización del Ejército. A través de esta medida, las Fuerzas Armadas adquirieron la obligación de intervenir en el desarrollo económico nacional. Desde ese momento, los militares pro-gubernamentales hegemonizaron la institución castrense. Julio Prado Salmón (Ministro de Defensa), Miguel Ayllón (Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas), Luis Arce (Comandante del Ejército), Walter Arce (Comandante de la Fuerza Aérea), Alfredo Ovando (Jefe del Estado Mayor del Ejército) y Javier Cerruto (Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea), eran todos defensores de la causa movimientista.

En enero de 1958, varios mandos del Cuerpo de Carabineros fueron dados de baja, tras comprobarse su participación en la conspiración de la Falange de ese año. Esto incluyó a miembros del regimiento Escolta. Aunque estuvieron a punto de producirse motines policiales, la Acción de Defensa del MNR –organismo que funcionaba al interior del sector policial– le puso freno a estas medidas excesivas (La Nación, 24 de enero de 1958). El Cuerpo de Carabineros, al igual que

las FF.AA., concluyó el conflicto reafirmando su voluntad de apoyo al partido de Gobierno:

> …la adhesión absoluta a su Capitán General y Presidente Constitucional de la República; el propósito irrevocable de hacer respetar las decisiones del Primer Mandatario y el orden y la paz dentro de un clima de ordenamiento jurídico y la firme voluntad de contribuir eficazmente a la recuperación definitiva del principio de autoridad (La Nación, 9 de septiembre de 1958).

Pero estos no fueron los únicos conflictos que involucraron a militares o policías durante los cuatro años que gobernó Siles Zuazo. Las pugnas volvieron por motivos políticos, relacionados con las crecientes divergencias al interior del MNR. Por ejemplo, durante la campaña electoral de 1960, varios mandos policiales se alinearon al disidente Walter Guevara Arce. Como consecuencia de esto, 23 oficiales fueron dados de baja. Paralelamente, los sectores institucionalistas comenzaron a cuestionar la creciente politización de los organismos de seguridad del Estado. Sin embargo, las células del MNR en ambos organismos siguieron vigentes (Quintana: 2012)

Durante el gobierno de Siles Zuazo, la intervención de los organismos represivos en los conflictos sociales impulsados por la COB y la FSTMB se hizo cada vez más frecuente y violenta. Lo mismo cuando se presentaban disputas internas entre fracciones de campesinos en distintos puntos del país o durante los conflictos regionales, las asonadas y los levantamientos de la FSB.

Por ejemplo, en enero de 1960, las fuerzas del Regimiento Camacho fueron enviadas a Huanuni y permanecieron allí por un tiempo, al tanto del desarrollo de los conflictos entre el sector minero silista (reestructuradores) y el sindicato de Huanuni. Lógicamente, su sola presencia en aquella localidad era una forma de ponerle presión al sindicato opositor. A esta situación nos referiremos con más detalle en el siguiente punto.

El 24 de junio de 1960, muy poco antes del cambio de Gobierno, Siles Zuazo envió tropas del regimiento Waldo Ballivián a la mina de San José. Los mineros del lugar, opositores de Siles, fueron acusados de haber sustraído armas y municiones de una de las bodegas de la estación central de Oruro, apenas unos días antes. El armamento consistían en: 117 cajones de munición de fusil, 10 cajones de munición de armas automáticas, 29 fusiles y 43 cuchillos bayonetas. El sindicato respondió que había tomado ese armamento "para hacer respetar al pueblo ante las constantes invasiones de auténticos que hasta ahora han mantenido en zozobra al pueblo de Oruro" (Presencia, 19 de abril de 1960). A pesar de esta alegación, los mineros se vieron forzados a devolverlo.

Como ya vimos, las Fuerzas Armadas intervinieron activamente en los levantamientos regionales desarrollados en Santa Cruz desde 1957. La intervención en Terebinto dejó un saldo desconocido de bajas entre los civiles que se habían atrincherado allí. Pero aún más frecuente y dura fue su cada vez mayor intervención en los violentos enfrentamientos entre sectores campesinos, principalmente en los que se produjeron constantemente entre Cliza y Ucureña, dos regiones del valle alto de Cochabamba.

Por otra parte, en el periodo gubernamental de Siles Zuazo fueron dictados innumerables estados de sitio, en los que se utilizó a las fuerzas represivas del orden para desactivar huelgas, apresar a dirigentes y amedrentar a los organismos sindicales. En todo caso, no hay que olvidar que, según información del Ministerio de Trabajo de la época, el Presidente tuvo que afrontar 3.400 huelgas y 4.700 conflictos sociales en un periodo de cuatro años (Presencia, 4 de agosto de 1960).

Finalmente, ya con Paz Estenssoro nuevamente en el Gobierno y a raíz de la creación de la Dirección general de Policías, en septiembre de 1960, se rebelaron datos bastante comprometedores. Según estos, desde la creación del Control Político –bajo el nombre de Departamento de Coordinación en los primeros años de la revolución–, más de 40.000 personas habían pasado por ahí hasta el 19 de abril de 1959, en distintas fechas. Todos ellos fueron fichados en los archivos políticos de ese organismo, y la mayoría sufrió maltratos, torturas y la violación de sus derechos humanos.

Además de los enormes problemas económicos y sociales que tuvo que afrontar durante su gestión, la opinión general percibió a Hernán Siles Suazo como un gobernante que usó la represión militar y policial para acallar a los opositores del campo sindical y político.

## Elecciones Nacionales de 1960

Durante los cuatro años que gobernó Siles Zuazo, la situación al interior del MNR se tornó cada vez más crítica y confusa, lo que llevó a la aparición de nuevas tendencias y al mayor deterioro de su coherencia interna. De la primera división al interior del partido –entre "movimientistas de izquierda" y "silistas"– surgieron otras, así como reacomodos políticos para encarar el proceso electoral abierto para las elecciones de 1960.

Entre los principales silistas se encontraban Álvaro Pérez del Castillo, Juan Valdivia Altamirano, Gastón Araoz, Eufronio Hinojosa, Jaime Otero, Ciro Humboldt, Luis Alberto Alípaz, Gastón Prudencio, Heriberto Centellas, Federico y Vicente Álvarez Plata. Entre los movimientistas de izquierda se encontraban Juan Lechín Oquendo, Ñuflo Chávez, Mario Torres, Roberto Méndez Tejada, Germán Quiroga Galdo, Mario Torres Calleja, Ernesto Ayala Mercado, Alfredo Franco Guachalla, Mario Sanjinés Uriarte, Germán Butrón, Ángel Gómez García, Lydia Gueiler y José María Palacios.

Desde su conformación, el grupo silista asumió posiciones autoritarias con creciente frecuencia, tanto en las prácticas internas del Partido como en la utilización de los instrumentos del poder (Ejecutivo, Legislativo, prensa oficialista, etc.). Por su parte, los movimientistas de izquierda se apoyaron de manera cada vez más decidida en las tendencias radicales del movimiento obrero y de los partidos de izquierda: el PCB y el POR. Desde esa posición, los izquierdistas desarrollaron una oposición abierta y movilizada contra el Gobierno, entonces todavía dirigido por Siles Zuazo.

Para ejemplificar mejor la separación entre los movimientistas de izquierda y los silistas, observemos la interpelación que estos hicieron al Gobierno el 23 de agosto de 1959, en el pleno del Parlamento nacional.

Mientras tanto, Víctor Paz Estenssoro, a pesar de encontrarse fuera del país, continuó como jefe del MNR y manifestó en varias ocasiones su preocupación por el carácter que había adquirido la lucha interna. Con una actitud que lo mantuvo al margen de esas disputas –pero sin dejar al barco sin timón por ello–, el máximo líder del partido logró ser respetado por unos y por otros y resguardar su imagen de conductor. Esta cautela le sería muy beneficiosa para sus inmediatas aspiraciones políticas.

Recuadro 23

### Interpelación de los movimientistas de izquierda al gobierno de Siles Zuazo en 1959

1. Por haber desconocido y atropellado el fuero sindical, por haber perseguido, arrestado y desterrado a dirigentes obreros y por haber asaltado, ocupado y destruido locales sindicales.
2. Por la masacre de Colquiri y por la detención, tortura y asesinato del dirigente minero Antenor Miranda.
3. Por haber desconocido la inviolabilidad parlamentaria que asiste a los representantes nacionales.
4. Por haber sorprendido a la buena fe del Honorable Congreso Nacional, indicando que en Santa Cruz existía un movimiento separatista y anexionista, y por haber dictado inconstitucionalmente el estado de sitio del 29 de diciembre de 1957.
5. Por haber usurpado las atribuciones legislativas del Honorable Congreso, dictando el decreto supremo de 12-12-57 sobre el régimen de las regalías del petróleo.
6. Por haber tratado de comprometer las relaciones internacionales y la seguridad del Estado.

El 4 de julio de 1959, Paz Estenssoro retornó definitivamente al país. Como parte de una estrategia para ganar mayores espacios políticos al interior del MNR, el sector de izquierda intentó estrechar sus relaciones con él. El jefe del partido pidió unidad en las filas del MNR y señaló que su labor inmediata iba a ser la de buscar la reorganización del mismo, pero sobre la base de todas las tendencias existentes. Fue así que, el 15 de agosto de 1959, en respuesta a esa iniciativa, el sector de izquierda del MNR determinó su disolución.

Esa decisión premeditada respondía al objetivo de perfilar a Juan Lechín como uno de los candidatos fuertes para acompañar a Paz Estenssoro en las elecciones generales, que debían realizarse a mediados de 1960. La medida tuvo éxito, pues en septiembre de 1959 comenzaron a producirse grandes concentraciones populares en distintos departamentos del país, y en todas ellas se pedía la proclamación de la candidatura Paz-Lechín.

Como Paz Estenssoro nunca aprobó ni rechazó abiertamente esa fórmula, el primero en reaccionar contra lo que consideraba una usurpación a sus derechos fue Walter Guevara Arce. Él siempre había aspirado a que se reconociera su condición de cuarto hombre fuerte del MNR (junto a Paz Estenssoro, Lechín y Siles Zuazo), ya sea para ser candidato a la Presidencia o, al menos, para ser el acompañante del principal líder del partido (como en esta ocasión).

Walter Guevara Arce, que ocupó importantes puestos públicos durante el gobierno de Siles Zuazo, fue comúnmente considerado como un conservador –u hombre de derecha– del MNR. Además, desde los primeros días de la Revolución Nacional había manifestado su disconformidad con las tendencias obreristas y de izquierda, así como su antipatía por Lechín. Lógicamente, esto lo impulsó a respaldar al Bloque Reestructurador de la FSTMB y de la COB.

En septiembre de ese 1959, como una forma de presionar a Paz Estenssoro, Guevara Arce anunció la creación del Movimiento Nacionalista Revolucionario Auténtico (MNRA), pero el CPN no lo reconoció. Ello lo motivó a renunciar al MNR, acción que llevó a cabo el 6 de diciembre de ese año. Pocos días después, los campesinos cochabambinos de las localidades de Cliza, Quillacollo, Tarata, Punata, Ayopaya, Arque y Mizque, así como las delegaciones de los centros mineros de Japo, Colquiri y Huanuni (sindicatos del Bloque Reestructurador y Comandos Especiales), se pronunciaron a favor de su candidatura a la Presidencia de la República. Con este pronunciamiento quedaron al descubierto sus verdaderas intenciones.

La estrategia de Guevara Arce era trasladar la pugna política con Paz Estenssoro al campo sindical, buscando el sustento social en grupos que, durante el gobierno de Siles, habían jugado un importante rol en la división de sus sectores. Pero esto contribuyó a que las pugnas internas alcancen mayores niveles de violencia, al punto que sus aliados decidieron combatir a Lechín y a Paz Estenssoro con sus mismas armas. El 7 de enero de 1960, la cúpula del MNR aprobó la expulsión de sus filas de Guevara Arce y de varios de sus acólitos, acusando al dirigente de ser una nueva expresión de la "rosca".

Pero si la salida de Guevara del MNR parecía favorecer directamente a las aspiraciones de Lechín, un nuevo obstáculo apareció en su camino, esta vez a manos de los silistas que se mantuvieron en el partido, y que lanzaron la candidatura de Jorge Álvarez Plata como acompañante de Paz Estenssoro. Asustado por una nota de Lechín –en la que le hacía exigencias sobre lo que debía ser el plan del futuro Gobierno–, el jefe del partido hizo una hábil maniobra. Víctor Paz pidió que la Convención del MNR se limitara a nombrarlo a él como candidato a la Presidencia, pero que dejara para después el asunto del acompañante. Así, el 16 de enero, al término de la misma, Víctor Paz fue proclamado ante unos 15.000 miembros del partido; entre ellos se encontraban centenares de campesinos.

Lo sucedido durante la Convención puso al descubierto más que nunca las ambiciones personales de los jefes de las diferentes tendencias ideológicas existentes al interior del MNR. Los lechinistas no cejaron en su propósito, y ese mismo día organizaron una gigantesca manifestación popular de apoyo a su líder, cuya contundencia inclinó finalmente la balanza a su favor. Durante la Convención se votó para decidir la fórmula que se iba a presentar en las elecciones. El resultado fue el siguiente: 203 votos para Paz Estenssoro, 129 para Lechín y 70 para Álvarez Plata (Presencia, 19 de febrero de 1960). Finalmente, Lechín fue proclamado como candidato a la Vicepresidencia.

De todos modos, Paz Estenssoro tampoco estaba dispuesto a cederle mucho terreno a Lechín. Por ese motivo, el 28 de abril de 1960 declaró que rechazaba el sorpresivo apoyo recibido por Lechín del Partido Comunista de Bolivia (PCB), que posiblemente vio en el líder obrero un intermediario válido de que sus posiciones pesen en algo en el partido de Gobierno si este salía electo como Vicepresidente. Así, Jorge Kohle, su principal dirigente, justificó la posición del PCB, señalando que se habían encontrado importantes coincidencias entre su programa y el del MNR. Estas palabras eran posiblemente una maniobra política para incentivar al MNR a girar más decididamente a la izquierda.

Lechín no tomó en serio las palabras de Kolle, y faltó al acto de proclamación preparado por el PCB, el 29 de mayo. Esto obligó a Kolle a cambiar de posición y señalar que la candidatura del MNR no representaba ninguna garantía para el pueblo, que era necesario elaborar un programa

"antiimperialista de la COB". Los líderes obreros de ese partido, con los que Lechín había trabajado más o menos de cerca en los últimos años, se distanciaran nuevamente de él.

Algunos miembros del Partido Comunista se encontraban presos en distintas cárceles del país. Aparte de esa traba, el PCB contaba con una reducida militancia, que se limitaba a algunos intelectuales de izquierda y a autoridades y dirigentes estudiantiles de la UMSA (como Gualberto Pedraza, Hernán Melgar y Felipe Iñiguez). Pero algunos de sus militantes actuaban en el seno de la clase obrera minera (como Federico Escóbar, Simón Reyes, Oscar Salas y otros), y ejercían una importante influencia en sus distritos y en la FSTMB. Ellos, junto a los militantes del POR, dirigido por Guillermo Lora, actuaban como impulsores de la radicalización del movimiento obrero y siempre rechazaron la posibilidad de participar en elecciones.

Para abril de 1960, ya habían asegurado su participación en las elecciones las siguientes fórmulas: MNR (Paz Estenssoro y Lechín), MNRA (Guevara Arce y Ríos), FSB (Gutiérrez y Siles Salinas), PSC (Remo Di Natale y Vicente Mendoza) y PCB (Jesús Lara y Felipe Iñiguez). La Falange intentó organizar una fórmula única capaz de oponerse al MNR, –lo que implicaba la exclusión del PCB y del MNRA–, pero fracasó en el intento y también en su impugnación al estatuto electoral.

Por su parte, los movimientos obrero-populares se mantuvieron bastante alejados de las pugnas político-electorales. Sin embargo, entendían que el nuevo Gobierno movimientista debía enmendar el curso que la Revolución Nacional había tomado bajo el mando de Siles Zuazo. Es por ese motivo que, en los meses previos al cambio de Gobierno, estos impulsaron distintos conflictos sociales desde sus bases.

En el seno del movimiento obrero se vivía un marcado proceso de radicalización. Esto hizo que numerosos sindicatos pasen a ser dirigidos por militantes del PCB y de las distintas acciones del POR. Los nuevos dirigentes, siguiendo la lógica de la democracia sindical, se subordinaron a las exigencias de las bases para presionar por sus reivindicaciones con huelgas y movilizaciones. Ante esta postura radicalizada, el intento de Guevara Arce por mantener la vigencia del Bloque Reestructurador falló definitivamente tras los acontecimientos ocurridos en Huanuni, el 24 de enero de 1960. Allí las bases obreras, apoyadas por el sindicato de la mina de Siglo XX, se levantaron contra los dirigentes del sindicato de Huanuni y del Comando del MNR, apoyando así a las bases de Huanuni –que querían expulsarlos del distrito. El levantamiento alcanzó tal extremo de violencia, que dejó un saldo de 11 muertos y 23 heridos. La turba procedió al colgamiento público del ex dirigente sindical Celestino Gutiérrez. Tras estos acontecimientos, la unidad de la FSTMB quedó restaurada; nunca más volvería a emerger una Federación paralela.

Por su parte, la Federación de Fabriles de La Paz era liderada por Saturnino Lima, quien en un principio estuvo a favor de la estabilización, pero que pronto cambió de posición. Ese dirigente acusó al Gobierno de haber destruido la diversificación económica y haber liquidado la industria nacional, pues muchas fábricas tuvieron que cerrar sus puertas a partir de las medidas tomadas en 1956. En mayo de 1959, la Confederación Nacional del sector (CGTFB) emitió un documento que señalaba que la crisis estaba golpeando directamente a los hogares proletarios, que había desocupación y bajos salarios, que la COB debía revivir y que los elementos divisionistas y aprovechadores debían ser expulsados (La Nación, 18 de mayo de 1960).

También los ferroviarios plantearon una dura oposición al Gobierno. El 12 de agosto de 1958, varios sindicatos pertenecientes a la Bolivian Railway pidieron un incremento salarial y declararon huelga general. En respuesta, el Gobierno los acusó de comunistas. La huelga duró más de 11 días, y el propio dirigente sindical silista, Sanjinés Ovando, optó por plegarse al movimiento hasta que se lograran sus objetivos. Año y medio más tarde, a principios de 1960, el sector realizó una nueva huelga que fue calificada como la más larga de la historia sindical del país, pues duró 50 días. Esta se debió a la situación deficitaria y desastrosa de los ferrocarriles, y contó con el apoyo de la COB y de los mineros, ya que los dirigentes de FESTRE, que reunía a los empleados y los trabajadores de los ferrocarriles, firmaron un acuerdo con los sindicatos de Siglo XX y Catavi.

Por su parte, los trabajadores petroleros emitieron un documento-balance de YPFB el 25 de agosto de 1958. En el documento, publicado ese día por el periódico La Nación, señalaron

que Estados Unidos e Inglaterra constituían con grandes carteles petroleros "que ahogan las industrias nacionales" y se adscribieron a la siguiente postura política e ideológica:

> …el Gobierno de la Revolución Nacional, de extracción proletaria, debe escuchar la voz de sustentación de su régimen, impulsando la "Política Laboral" del trabajador petrolero para solucionar la difícil situación por la que atraviesa nuestra industria petrolera (Ibíd.).

Otros sectores laborales también se plegaron a las protestas y huelgas. Un claro ejemplo son los constructores, que a lo largo de 1958 y 1959 declararon varias huelgas por aumento de salarios. También fueron importantes los movimientos huelguísticos de los bancarios, en abril y agosto de 1959, que tuvieron gran impacto a nivel nacional. A principios de 1960, los desocupados –que según datos oficiales alcanzaban los 5.000 en La Paz y los 20.000 en todo el país– realizaron masivas manifestaciones en contra del Gobierno. Finalmente, los maestros, en la reunión de secretarios generales realizada el 12 de febrero de 1959, decidieron el "enjuiciamiento y revisión del Plan de Estabilización de parte de los sectores populares" y en agosto del mismo año realizaron una gran huelga. En respuesta a esta última movilización, el Gobierno dictó estado de sitio, y 14 dirigentes del sector fueron apresados y enjuiciados.

Cuando el proceso electoral entró en la fase de desarrollo pleno, las posiciones radicalizadas de la COB contaban con mucho mayor apoyo que en los años anteriores. Esto animó a los dirigentes obreros a aprobar su propia "Plataforma Electoral", que presentaron a Paz Estenssoro y Lechín para que sea tomada como el programa del futuro Gobierno. El plan también fue aprobado por el PCB.

Recuadro 24

### "Plataforma Electoral" de la COB frente a las elecciones nacionales de 1960

1. Defensa de la minería nacionalizada. Liquidación del pago de las indemnizaciones a las ex empresas de acuerdo al Decreto del 31 de octubre de 1952. Mercado libre para el estaño boliviano. Recapitalización y reorganización técnica y administrativa de la COMIBOL y del Banco Minero. Fomento de la Minería Privada.
2. Defensa y resguardo de la riqueza petrolera nacional. Fortalecimiento y recapitalización de YPFB. Caducidad de las concesiones otorgadas a los consorcios privados por incumplimiento de los plazos de producción. Estudio y revisión del Código del Petróleo. Ninguna nueva concesión a los grandes consorcios que signifique reducción de las reservas nacionales del petróleo.
3. Respeto al fuero sindical y al derecho a huelga. Solución impostergable al problema de la desocupación, el desempleo y la miseria existente. Elevación de los niveles de vida de la clase trabajadora y del pueblo en general. A mayor trabajo y producción, mayores salarios.
4. Unidad obrera y campesina y de los demás sectores de trabajadores manuales e intelectuales en torno a la COB. Adquisición de una editorial propia para la COB. Reorganización y armamento de las milicias populares para la defensa y profundización de los postulados de abril.
5. Revisión de las sentencias sobre afectación de tierras que violen las disposiciones de la Ley de Reforma Agraria. Fomento a la organización y propiedad cooperativas. Mecanización del campo. Ayuda técnica y concesión de créditos fáciles y directos a los campesinos. Aceleración de los trámites de afectación, dotación y restitución de tierras.
6. Ejecución e impulso a los planes de diversificación y desarrollo económico. Instalación de hornos de fundición. Créditos a la industria privada y al artesanado.
7. Atención y solución preferente a los problemas regionales y distritales, conciliándolos con los intereses generales de la Nación.
8. Lucha intransigente por la moralización de la función pública.
9. Política internacional definida e independiente de toda imposición o vasallaje. Relaciones comerciales y diplomáticas con todos los países que puedan beneficiar a Bolivia. Solidaridad efectiva con todos los pueblos que luchan por su soberanía e independencia nacional.

Fuente: Presencia, 20 de abril de 1960.

Tras un proceso electoral no exento de confrontaciones y "guerra sucia", finalmente la fórmula Paz Estenssoro-Lechín ganó las elecciones. En ese momento el Presidente electo tenía 55 años y el Vicepresidente 47.

Como no se cuenta con datos generales de la elección, veamos el caso de La Paz, donde los cómputos finales fueron los siguientes: MNR: 237.771; MNRA: 33.016; FSB: 37.954; POR (Moscoso): 778; PCB: 2.036; Nulos: 2.000; Blancos: 4.600. Los resultados mostraron que, sobre un total de 318.752 votos emitidos, el MNR había captado el 74,6%. Los resultados fueron casi idénticos a nivel nacional y en los demás departamentos de la República –incluso en Santa Cruz, donde se esperaba un mayor porcentaje de votos para la Falange.

Los falangistas señalaron que se había producido un fraude electoral y afirmaron haber obtenido más de 57.000 votos tan solo en el departamento de La Paz. Exhibieron como prueba las copias de las actas firmadas por los Presidentes de mesa, pero no fueron escuchados por el órgano electoral. Lo mismo ocurrió con Walter Guevara Arce, del MNRA.



Figura 12. Victor Paz Estenssoro asumió la presidencia de Bolivia por segunda vez en 1960.
Fuente: Lucio Flores Salinas.

En base a los resultados oficiales, en la distribución de bancas en el Parlamento se otorgaron 6 puestos de senadores y 32 de diputados al MNR. Durante la distribución de los cargos más importantes en las directivas del Parlamento se produjeron fuertes disputas entre las distintas tendencias que aún permanecían al interior del partido. Por otra parte, el Bloque de Parlamentarios Laborales se organizó ni bien conformado el nuevo Congreso Nacional. Este Bloque estaba compuesto por varios de los diputados pertenecientes a los fabriles, mineros, campesinos, ferroviarios, choferes y constructores. Saturnino Lima, Raúl Larrea, Humberto Lozano, Germán Claros, Germán Gutiérrez y Carmelo Padilla asumieron la dirección del Bloque.

Finalmente, los ministros del primer Gabinete de Paz Estenssoro fueron los siguientes:

Recuadro 25

### Gabinete de Paz Estenssoro en 1960

Relaciones Exteriores: Eduardo Arze Quiroga.
Gobierno: Coronel Eduardo Rivas Ugalde.
Hacienda: Augusto Cuadros Sánchez.
Salud: Guillermo Jaúregui.
Minas y Petróleo: Ñuflo Chávez.
Defensa: Arturo Fortún.
Trabajo: Alfredo Franco Guachalla.
Economía: Juan Hans.
Agricultura: Raúl Pérez Alcalá.
Obras Publicas: Mario Sanjinés Uriarte.
Educación: José Fellman Velarde.

Se iniciaba así la tercera gestión de gobierno del MNR, y la segunda de Víctor Paz Estenssoro. En el ambiente popular flotaba una confianza de que el anterior mandato del MNR –considerado como desastroso– iba a quedar atrás. Paz Estenssoro había recuperado el apoyo popular, y Lechín mantenía una gran influencia en el movimiento obrero. Paralelamente, los partidos opositores habían sido electoralmente vencidos, hecho que le otorgaba mayor legitimidad al nuevo Gobierno.

## Políticas económicas y relaciones internacionales del tercer Gobierno movimientista

Al momento de asumir la Presidencia, en agosto de 1960, Paz Estenssoro presentó al país un Plan

de Gobierno que tenía los siguientes planteamientos económicos:

Recuadro 26

### Plan de Gobierno en el campo económico para 1960-1964

1. Fomento y desarrollo a la minería privada, estimulando sus propias capacidades de trabajo y rendimiento, mediante una política adecuada en materia de créditos, de inversiones y comercialización de sus productos.
2. Puesta en vigencia un nuevo Código de Minería que facilite la movilización del esfuerzo público y privado para el fortalecimiento y expansión de la industria minera.
3. Funcionamiento de plantas de concentración de minerales en zonas estratégicas. Instalación de hornos de fundición de toda clase de minerales, particularmente estaño, plomo, antimonio, plata, cobre, etc.
4. Estímulo a las industrias complementarias y subsidiarias de la minería.
5. Fomento de la explotación de minerales no metálicos, particularmente el azufre.
6. Vigorización del Banco Minero de Bolivia (…), facilitando su mayor especialización y reorganización técnico-administrativa.
7. Conveniencia de promover la libre comercialización de minerales con excepción de los sujetos a convenios o contratos internacionales.
8. Desarrollo de la inventariación y evaluación de recursos naturales, con objeto de determinar las riquezas potenciales y reales susceptibles de aprovechamiento económico.

Fuente: Presencia, 10 de agosto de 1960.

Como se puede advertir, el Plan se centraba casi exclusivamente en el rubro minero. En 1960 ya no quedaban dudas de que la diversificación económica planificada durante el primer Gobierno del MNR no había alcanzado los resultados esperados, y el país continuaba dependiendo preponderantemente de la minería, que generaba más o menos el 75% de las divisas. Durante los dos primeros gobiernos también se había acrecentado nuestra dependencia de la ayuda norteamericana. De hecho, en mayo de 1958, Richard Nixon había llegado a La Paz para señalar que "Bolivia tendrá y tiene una posición de alta prioridad en la ayuda económica norteamericana y en créditos" (La Nación, 5 de mayo de 1958). Un poco antes de que Paz Estenssoro asumiera el poder por segunda vez, una misión del FMI arribó al país para verificar que los sueldos y salarios sigan congelados –como lo exigieron para apoyar la estabilización monetaria. Sus miembros reiteraron que se debía incrementar la producción agrícola, impulsar las inversiones extranjeras y equilibrar el presupuesto nacional, que en 1959 había sido deficitario (Presencia, 6 de febrero de 1960).

La gran injerencia de los Estados Unidos en nuestra economía continuó y se amplió durante el tercer Gobierno del MNR, lo que permitió resolver problemas urgentes –como el pago de sueldos en la administración gubernamental. Pero esto también tuvo sus aspectos negativos. Para empezar, nuestra deuda externa creció aún más. El Gobierno se vio cada vez más condicionado a permitir el ingreso de nuevas empresas norteamericanas que explotaron nuestros recursos naturales. Pero lo peor fue la imposición de políticas internas que rebasaban el orden económico, como fue el caso de las condiciones exigidas para la implementación del Plan Triangular.

Ya desde el último año al mando del presidente Siles Zuazo se comenzó a dar importantes incentivos para la participación de capitales privados en la explotación minera. Hasta hace poco esta había sido rotundamente rechazado por el propio partido de Gobierno, que supuestamente tenía su mira en la minería estatizada. Pero en diciembre de 1959 fue presentado al Parlamento un proyecto de nuevo Código de Minería, en el que se aducía que el país carecía de una "legislación que permita al inversionista realizar las prospecciones y exploraciones en gran escala" (La Nación, 7 de diciembre de 1959).

Sin que éste fuese aprobado aún, la South American Placers comenzó a operar desde ese año en Teoponte, bajo un contrato que le permitía extraer oro y entregar al Estado el 20% de sus ganancias. Además, en 1960 ya estaban en funcionamiento otras importantes empresas mineras privadas, que recibieron concesiones y que se agruparon en la autodenominada "minería mediana". Entre las más importantes estaban las siguientes: International Minning Co., Fabulosa Minning Co., Tihua Mines, Industria Minera Cerro Grande, Bolivian Tin Corporation, Empresa

Minera Porco, Empresa Minera Totoral, Empresa Minera Ocurí y Empresa Minera Avicaya.

Algo similar ocurrió en el ámbito de los hidrocarburos. El Código de Petróleo (o Código Davenport) había sido aprobado en 1957, y con eso se abrieron las puertas a las transnacionales para explorar y explotar petróleo en suelo boliviano. YPFB manejaba esos contratos, y las condiciones para su desarrollo fueron dadas a partir de la transferencia de divisas generadas por la minería. La gran beneficiada fue la norteamericana Gulf Oil Company, a cuyas manos pasó gran parte de la explotación petrolífera y los campos descubiertos y preparados por YPFB, como el de Yacuiba.

De todos modos, Paz Estenssoro continuó propugnando el Capitalismo de Estado, y en noviembre de 1960 aprobó el Plan de Prioridades para el Desarrollo. Este Plan fue presentado por la Junta de Planeamiento y avalado por los representantes del Gobierno de los Estados Unidos que arribaron al país. En él se planteaba que debían conseguirse 30 millones de dólares con carácter de urgencia, y con ese monto efectuar un cambio total de la maquinaria con la que se trabajaba en COMIBOL. También se debía solucionar el problema de los supernumerarios a través del retiro de trabajadores y:

> ...poner a las minas nacionalizadas en condiciones de recuperar un nivel de producción que le permita aumentar sus exportaciones, pasando de una situación de pérdida a la obtención de utilidades (Presencia, 4 de noviembre de 1960).

Mientras Paz Estenssoro iniciaba conversaciones con el FMI y otras entidades financieras para obtener los recursos señalados, el Gobierno soviético, dirigido por Nikita Kruschev, ofreció a Bolivia un crédito de 150 millones de dólares. Este monto iría destinado a la compra de maquinaria para COMIBOL, la construcción de hornos de fundición y lixiviación de minerales, la construcción de caminos y el desarrollo de YPFB, entre otras cosas. Pese a resistencias internas y externas al MNR, el Gobierno movimientista envió una comisión presidida por Juan Lechín a Moscú, con el encargo de entablar conversaciones. Poco después –y a pesar de la inexistencia de relaciones diplomáticas entre ambos países– llegó una misión de la URSS a Bolivia.

Como era de esperar, los Estados Unidos reaccionaron positivamente frente a la inesperada ofensiva soviética en Bolivia, y prometieron al Gobierno el envío inmediato del crédito ofrecido de 10 millones de dólares. Además, aseguraron que el BID y el Gobierno de la República Federal Alemana aportarían con otros 15 millones de dólares. Así nació el llamado Plan Triangular.

Pese a las buenas relaciones con la potencia del norte, el Gobierno del MNR mostraba su simpatía con la reciente revolución cubana. Por ejemplo, el 26 de agosto de 1960, el Senado boliviano publicó la siguiente resolución camaral al respecto:

1. Expresar su solidaridad con la lucha heroica que actualmente libra el pueblo cubano por lograr el triunfo de su Revolución Nacional.
2. Reiterar su adhesión a los principios de no intervención, de respeto a la soberanía popular y de autodeterminación de los pueblos.
3. Invitar al Gobierno de la hermana República de Cuba a solucionar fraternalmente sus diferencias con otras naciones hermanas del hemisferio en el seno de la OEA (Presencia, 26 de agosto de 1960).

También hubo manifestaciones de las bases populares movimientistas y de izquierda boliviana, todas en apoyo a la revolución cubana y en desprestigio de la arremetida de Estados Unidos contra esta –principalmente después de que se declarara socialista. Pero el apoyo popular que recibió la revolución cubana no frenó a los sectores pazestenssoristas del Gobierno, que comenzaron a acusar al embajador cubano en La Paz de inmiscuirse demasiado en la política interna. Este tenía frecuentes reuniones con la COB y la FSTMB, así como con algunos dirigentes campesinos que, a partir de ese momento, se vincularon con organizaciones de izquierda. Toribio Salas y Paulino Quispe, del pueblo de Achacachi, son dos ejemplos de esta influencia. De todos modos, Bolivia mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba hasta casi el final del gobierno de Paz Estenssoro –puntualmente hasta el 23 de agosto de 1964–, aun cuando en América Latina muchos países ya se habían alineado a Estados Unidos en su política de aislar al régimen castrista.

El primero de enero de 1961, el periódico Presencia publicó una encuesta realizada a

diferentes dirigentes políticos sobre la marcha del Gobierno. La encuesta incluía la siguiente pregunta: "En su concepto, ¿cuál es la posición de nuestro país en el terreno de la política internacional?" Las respuestas de los líderes de oposición fueron las siguientes. La FSB, a través de Mario Gutiérrez, respondió:

> El régimen actual es decididamente pro-soviético y tolera a los EE.UU. en la medida en que precisa de sus dólares para mantenerse en el poder. Si se concreta la ayuda rusa la Revolución Nacional sería impulsada con criterio rojo.

El MNRA, a través de Walter Guevara Arce, respondió algo similar:

> La posición del MNR en el terreno internacional es dual, desconcertante. Por una parte mendiga la ayuda de Estados Unidos porque sabe que no puede sobrevivir sin ella y, por otra, coquetea con la Rusia soviética con la esperanza de obtener algo más de los americanos. Semejante juego para un pequeño país es el más riesgoso en el que puedan embarcarse sus gobernantes.

Más allá de la opinión de los opositores, la política internacional de Paz Estenssoro fue todo un éxito, pues le permitió al Gobierno mantener el aval norteamericano, tal como había ocurrido durante su primera gestión. Pero esto también se debió a que el presidente John F. Kennedy desarrolló un nuevo estilo de relacionamiento entre Estados Unidos y los países de América Latina. Su embajador en Bolivia, Ben Stephansky, declaró que nuestro país seguía siendo una prioridad y añadió que la Alianza Para el Progreso ayudaría con proyectos para el desarrollo rural, entre otras cosas. Lógicamente, detrás de ello había nuevas condiciones que facilitarían el ingreso de empresas norteamericanas a nuestro país.

Por su parte, el Gobierno condecoró con el Cóndor de los Andes al principal ejecutivo de la Gulf Oil y siguió concediendo excesivos privilegios a dicha empresa. A eso se sumaron los negociados, la evasión de impuestos, el incumplimiento de acuerdos y otras irregularidades que, poco a poco, fueron saliendo a la luz, y mostraron a las claras que Bolivia había perdido su soberanía frente a la gran transnacional. Paralelamente, como el mismo jefe de Estado lo reconoció en un mensaje a la Nación de enero de 1961, YPFB estaba atravesando por una situación financiera sumamente difícil, y no contaba con el capital suficiente para trabajos de prospección. Por otra parte, la venta de sus productos en el mercado interno estaba sujeta a precios inferiores a su valor real.

El Plan Triangular –cuyo objetivo era sacar a COMIBOL de su endémica crisis– fue financiado por Alemania, Estados Unidos y el FMI con unos 15 millones de dólares como compromiso inicial. El plan fracasó por la resistencia de los sindicatos obreros, que se opusieron a las consabidas exigencias que violaban sus conquistas. Aun así, el haber recibido apoyo de la potencia norteamericana, el principal organismo financiero mundial de aquel entonces y un poderoso país europeo muestra la capacidad que el Gobierno movimientista tenía para negociar el apoyo financiero del otros países.




Figura 13. El Plan Triangular buscó sacar de su crisis a COMIBOL, pero fracasó.
Fuente: Lucio Flores Salinas.

Hay diversos artículos de los principales periódicos internacionales –compilados en el archivo de la Cancillería– que reflejan la visión positiva que el mundo en general tenía de Paz Estenssoro, quien era considerado un estadista de fiar. Ciertamente, estas percepciones tuvieron mucho que ver con lo hecho en su primera gestión, pero también es destacable que permanecieran hasta su caída –y la de su partido– del poder.

Una última muestra de ello fue el recibimiento que el jefe del MNR tuvo en Estados Unidos, durante una visita oficial al Presidente Kennedy, en octubre de 1963 (muy poco antes de que este último fuera asesinado). Los relatos periodísticos y las fotografías hablan por sí mismas de un hecho que significó un importante triunfo internacional para su Gobierno.

Con su capacidad habitual para moverse en distintos mundos cuando así le convenía, Paz Estenssoro convenció al presidente Joseph Tito, el gran mariscal revolucionario, conductor de Yugoslavia y de los países no alineados, a que viaje a La Paz. La visita fue concretada en 1963, y significó un estrechamiento de los lazos de Bolivia con el mundo detrás de la cortina de hierro. Sin embargo, aunque estas relaciones nunca se perdieron del todo, tampoco derivaron en acuerdos importantes. Como era de esperarse, en ello influyó la permanente vigilancia norteamericana sobre el rumbo político en nuestro país.

## ¿Por qué cayó el MNR?

Como vimos en la introducción, los doce años de gobierno del MNR han sido analizados y evaluados por la historiografía y las ciencias sociales desde múltiples puntos de vista. Por otra parte, los mismos actores involucrados –tanto políticos como sociales– han hecho sus propias interpretaciones y balances sobre el proceso abierto por el 52, y estos también dan cuenta de la complejidad de las lecturas, representaciones y visiones que se tenían sobre el mismo. Finalmente, las distintas coyunturas políticas –marcadas por determinadas ideologías dominantes o emergentes– han desplegado, una tras otra, sus propias miradas y discursos sobre el significado histórico de la Revolución Nacional, llegando incluso hasta el presente.

Nuestro trabajo ha privilegiado un relato histórico, uno que pueda dar cuenta de la trama de acontecimientos en las distintas dimensiones de la realidad. También hemos intentado mostrar los distintos posicionamientos –y cambios de posicionamiento– de los actores políticos y sociales, según los contextos o coyunturas en los que tuvieron que desenvolverse. En este último punto nos interesa indagar sobre los hechos acaecidos hasta el desmoronamiento final del Gobierno movimientista e interpretar ese momento histórico.

Pero, antes de hacerlo, primero es necesario señalar que partimos de la hipótesis de que la caída del MNR se debió más que a un desgaste natural, ocasionado por muchos años de ejercicio del poder, al hecho de que las bases constitutivas del momento fundante entraran en una profunda crisis. Claro está que dicha crisis no emergió de la noche a la mañana, pues sus síntomas se notaron ya con fuerza durante la gestión Siles Zuazo. Sin embargo, creemos que Paz Estenssoro desperdició una oportunidad de oro para reorientar el proceso de la Revolución Nacional. No olvidemos que su triunfo electoral en 1960 fue aplastante y que ya se había conseguido reestructurar –aunque sea en parte– la alianza política y social que en primer lugar hizo posible el triunfo de la insurrección de 1952.

Un primer aspecto a tomar en cuenta es el del proyecto económico que emergió de este Gobierno revolucionario. Se trata de la definitiva puesta en marcha del modelo de Capitalismo de Estado, cuyas primeras expresiones databan de la postguerra del Chaco, con los gobiernos del socialismo militar, y que el MNR retomó y profundizó. Tomando en cuenta que el trabajo de José Peres Cajías se refiere detalladamente a este modelo, sus alcances, logros y contradicciones, aquí apenas señalaremos algunos aspectos puntuales, que salieron a la luz sobre todo durante la última gestión de gobierno del MNR.

Como vimos, el programa de la fórmula Paz Estenssoro-Lechín para las elecciones de 1960 tenía como uno de sus objetivos fundamentales y prioritarios el ordenamiento de la economía. Para esta nueva propuesta económica se tomó en cuenta que la etapa de las grandes transformaciones ya había terminado, que la crisis de 1955 y 1956 había sido en gran medida superada y que las condiciones para encarar los problemas no resueltos estaban dadas.

Las ideas de tipo desarrollista planteaban la necesidad de la modernizar el país y de finalmente

llevar a cabo su siempre postergada industrialización. Como es lógico, esto obligaba al Gobierno a realizar nuevos –y profundos– ajustes a las políticas iniciales de la Revolución Nacional. Todo ello encajaba muy bien con la política de la Alianza para el Progreso, propugnada por el presidente John F. Kennedy desde principios de la década de 1960, y con el discurso interno sobre la necesidad de diversificar la economía –principalmente agroindustria e industrialización básica. En cuanto a la diversificación, hay que decir que si bien tuvo algunos avances, estos nunca fueron los suficientes.

Pero la realidad se presentó de manera muy distinta, pues la mentalidad extractivista y minero-centrista no pudo ser superada. Una vez más, la atención se centró en qué hacer con la minería nacionalizada, cuya crisis se estaba volviendo endémica, pero que, aun así, era la mayor productora de divisas para el país. Paz Estenssoro planteó como su principal política económica el llamado Plan Triangular, cuyo nombre se debe al triple financiamiento externo: Estados Unidos, Alemania y el FMI. Este Plan fue el peor de los fracasos de la segunda gestión de Paz Estenssoro como Presidente.

Se tiende a pensar que la razón fundamental de que esto ocurriese fue la tajante oposición obrera a la aplicación del Plan. Es cierto que el rechazo de parte del sector obrero fue rotundo, por las mismas razones por las que ya había rechazado la Estabilización Económica de 1956. En ambos casos, la condición para que los financiadores del proyecto realicen el desembolso era el recorte de los derechos laborales que la propia Revolución Nacional les había otorgado a los trabajadores. Para recibir el apoyo financiero, el Gobierno movimientista tuvo que atacar directamente el papel de los sindicatos en la minería nacionalizada, lo que llevó a la muerte final del ya anteriormente debilitado control obrero.

Entonces, si bien es cierto que las posiciones obreras jugaron un papel central, también influyó mucho el hecho de que el propio MNR ya no estaba convencido de su política minera inicial. En otras palabras, el partido de Gobierno ya había dejado de creer que el mejor camino para el sector era centrar los esfuerzos en convertir a la COMIBOL en una empresa nacional estatal realmente rentable. Para ello no solo debía invertir en maquinaria, en prospección de nuevas vetas y en disminuir personal supernumerario –entre otras medidas que señalaba el Plan Triangular. Había otros problemas, igualmente importantes, que también era necesario atacar radicalmente. Uno de estos era la corrupción a gran escala que se había instalado en la COMIBOL desde su misma creación, así como la enorme burocracia que se creó para dar puestos a sus militantes. Pero quizás el mayor problema –y el más difícil de enfrentar– haya sido su constante descapitalización.

Ya vimos que durante el gobierno de Siles Zuazo comenzó la constante desviación de recursos de la COMIBOL para el fortalecimiento de YPFB y otras empresas estatales. Pero, además de descapitalizarla con frecuencia, el favoritismo del Gobierno con la minería privada se hizo cada vez más notorio. Entonces, si bien los recursos monetarios del Plan Tringular sirvieron para mejorar algunas de las carencias de la empresa, las prácticas dañinas que el Gobierno mantuvo le ocasionaron más daños que beneficios. También hay que recalcar que el dinero del Plan Triangular entró a cuenta gotas, ya que los tres financiadores chanteajaban permanentemente al Gobierno para que controle totalmente a la oposición de la FSTMB y de los sindicatos locales.

Ahora bien, es cierto que la negativa de los trabajadores de las minas a aceptar el Plan Triangular iba más lejos. Para ellos, el Plan no solamente atacaba sus principales conquistas sociales y laborales, sino que atentaba decididamente contra la nacionalización de las minas, logro al que ellos le adjudicaban un significado mucho mayor que el propio Gobierno o la sociedad civil. Para las dirigencias y las bases del movimiento minero, así como para la COB y para el conjunto del movimiento obrero y popular, la nacionalización de las minas representaba mucho más que un nacionalismo económico. La minería nacionalizada tenía una dimensión política y social distinta, pues ellos consideraban que desde entonces las minas les pertenecían. Para todo el sector obrero, pero sobre todo para los mismos mineros, las minas eran espacios en los que podían intervenir y tomar decisiones, espacios donde sus sindicatos podían actuar con libertad e, incluso, con cierto grado de autonomía, como clase social cohesionada y altamente combativa.

Por tanto, aunque para ellos también era vital superar la crisis de la COMIBOL, este logro perdería su significado si debía lograrse a costa

de lo que habían conseguido como actor social, como clase con dimensión política y con cierta voluntad de poder al interior de la empresa estatal. Se puede decir, entonces, que su resistencia al Plan Triangular no fue un hecho irracional –así como cierta bibliografía ha querido mostrarlo. Es evidente con ello que impidieron que se concreten las reformas, pero dichas reformas no podían entenderse sin su concurso en los términos con que se inició la Revolución Nacional: bajo el control obrero. Ni qué decir si estas iban en contra de sus conquistas laborales, sindicales y económicas, asumidas por ellos como irrenunciables.

El movimiento obrero no tardó en darse cuenta de que la presencia de Lechín en el tercer Gobierno del MNR no garantizaba aquello, y los conflictos estallaron de forma paralela a la implementación inicial del Plan por parte de Paz Estenssoro, con todos los costos sociales que esto implicaba. Para entonces, el cogobierno MNR-COB de los primeros años de la Revolución Nacional ya había sido dejado. Por un lado, el MNR ya no veía conveniente recuperar la alianza con la clase obrera; por el otro, los obreros ya no confiaban en sus alcances. Por otra parte, durante el gobierno de Siles Zuazo había vuelto a asomar lo que Zavaleta Mercado (1972) describió como la implantación del "poder dual" –que no es lo mismo que cogobierno– en los primeros momentos postrevolucionarios. En otras palabras: los sindicatos obreros se separaron de las esferas del poder y construyeron su propio poder desde la sociedad y contra el Estado.

Ante la insuperable reaparición de conflictos durante aquel periodo, la FSTMB y la COB se vieron obligadas a asumir la defensa de los intereses obreros y populares que el Gobierno desconocía. Esto hizo que se desataran numerosas huelgas y movilizaciones. Pero estas organizaciones matrices también tuvieron que enfrentarse con los sectores internos que se habían dejado captar por el silismo: los Bloques Reestructuradores. Al final vencieron al afán reestructurador, y tanto la FSTMB como la COB recuperaron la unidad al final de aquel periodo.

En aquel momento, las visiones ideológicas que consideraban que la Revolución Nacional había sido traicionada y que era necesario pasar a una etapa más avanzada de implementación del socialismo ganaban cada vez más adeptos en la clase obrera, especialmente entre los mineros. Esto se vio claramente en 1961, cuando –en el marco del Plan Triangular– el Gobierno determinó tomar una serie de medidas "antiobreras", como despedir a más o menos una quinta parte de los trabajadores mineros, cerrar varias minas deficitarias, descongelar los artículos básicos de las pulperías, disminuir la injerencia de los sindicatos y abolir definitivamente el control obrero, entre otras medidas. Los sindicatos mineros reaccionaron con fuerza inusitada y, a tiempo de decretar medidas al concluir un ampliado, señalaron lo siguiente:

> El Gobierno de Paz Estenssoro tiene rasgos de profunda diferencia con el primer Gobierno de la revolución, pues es la acentuación radical a posiciones pro-imperialistas y, por tanto, reaccionarias. (…) [El Plan Triangular] constituye una medida contraria a los intereses nacionales y, en particular, a los de la clase obrera (SIDIS, XVI Ampliado Nacional de Mineros).

La mina Siglo XX, ubicada al norte de Potosí, era considerada la vanguardia del sector, y sus dirigentes estaban vinculados desde hace años con el PCB y el trotskismo del POR. Acaudillados por Siglo XX, los demás sindicatos mineros entraron en la lógica del enfrentamiento. El Gobierno hizo lo propio. Así, en junio de 1961, cuando estalló una huelga minera, los principales dirigentes del sector fueron apresados, entre ellos Simón Reyes, Arturo Crespo, Sinforoso Cabrera, Irineo Pimentel, Oscar Salas y Federico Escóbar. Se dictó el estado de sitio y se aprovechó esta coyuntura para detener también a unos sesenta líderes políticos de la izquierda.

Buscando la libertad de los detenidos, las amas de casa mineras entraron en acción y, por primera vez, se trasladaron a La Paz, en agosto de ese mismo año. Ni bien llegadas a la Sede de Gobierno, instalaron una huelga de hambre y lograron la solidaridad de amplios sectores de la población. Fue entonces cuando nacieron los Comités de Amas de Casa Mineras (Norberta de Aguilar, Olga García, Alicia de Escóbar, Jeroma de Romero, Flora de Quiroga, María Careaga, Angélica Osorio, Cinda de Santisteban, Simona de Lagrava y más adelante Domitila Chungara son algunas de sus legendarias dirigentes). En aquella oportunidad lograron que los dirigentes sean liberados, además de otras conquistas. A partir de ese momento, la organización de las

amas de casa, identificada plenamente con la lucha reivindicativa y política de los trabajadores, cobró notoriedad.

Los conflictos no cesaron en los siguientes años, y ello causó graves problemas económicos al Estado, ya que cada día de paro en las minas estañíferas significaba cuantiosas pérdidas de divisas. Para cuando el XII Congreso de Trabajadores Mineros se reunió en Colquiri, en diciembre de 1963, la ruptura entre el movimiento obrero –aglutinado en la FSTMB y la COB– y el MNR ya era prácticamente irreversible. Esta ruptura arrastró incluso al propio Lechín, a quien Paz Estenssoro envió de embajador a Europa para quitárselo de encima. Curiosamente, Lechín aceptó la determinación, provocando las profundas críticas de sus bases. Pero él, ni bien retornado al país para asistir al congreso, se alineó sin contemplaciones a las posiciones radicales que se expresaron allí. La tesis política que emergió del congreso habla por sí misma de dicha ruptura.

Recuadro 27

### Fragmentos de la Tesis Política del Congreso de Trabajadores Mineros de Bolivia, realizado en Colquiri en 1963

"Denunciamos al Gobierno como antiobrero, como sirviente del imperialismo, como traidor de los intereses del pueblo boliviano. (…) El Gobierno antiobrero tiende a resolver todos los conflictos sociales mediante la despótica intervención de las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que en el futuro será utilizada la violencia para acallar las justas demandas de los trabajadores. Los mineros solo podemos tener una respuesta concreta: armarnos y disciplinarnos a nuestro turno para rechazar la violencia gubernamental. (…) Emplazados a luchar contra un régimen antisindical y entreguista, empujados a tener que medir nuestras fuerzas con el Ejército, no tenemos más remedio que colocar en primer plano la acción directa de masas. Todas las otras formas de lucha deben subordinársele".

Fuente: SIDIS, Tesis de Colquiri, 1963.

Concluido el XII Congreso, ante el temor de un nuevo movimiento huelguístico, Federico Escóbar e Irineo Pimentel, dirigentes de la mina Siglo XX, fueron apresados y trasladados inmediatamente a La Paz. Esta arbitrariedad del Gobierno provocó el más grave conflicto desde que el MNR llegó al poder, ya que las bases mineras de ese distrito tomaron rehenes en represalia a los apresamientos. Se trataba de cuatro súbditos norteamericanos y toda la plana mayor de la administración de la mina.

Estados Unidos exigió a Paz Estenssoro que consiguiese la inmediata liberación de los siguientes rehenes:

Recuadro 28

### Lista de rehenes cuya liberación Estados Unidos demandó al presidente Víctor Paz Estenssoro

- Thomas Martin, jefe de Informaciones sobre Asuntos Laborales de USIS,
- Mike Kristula, jefe de Informaciones de USIS para la Alianza para el Progreso,
- Bernard Rifkin, jefe Técnico para Asuntos Laborales de USAID,
- Robert Fergerstrom, ingeniero miembro del Cuerpo de Paz,
- Cornelius Blott, gerente general de Catavi,
- Kurt Baumeister, superintendente de superficie,
- Marcelino Jofré, superintendente de minas,
- Juan Escalera,
- el ingeniero González,
- Raúl Borth,
- Javier Claros,
- José Arze,
- Fernando García,
- Ernesto Kutil,
- Walter Zeballos,
- Mercado (sin nombre).

El 9 de diciembre, las fuerzas militares se acantonaron en la ciudad de Oruro –a 100 km. de Siglo XX aproximadamente–, y desde allí se desplazaron en unos 40 camiones cargados de milicianos campesinos de Ucureña. Todo estaba preparado para reprimir a Siglo XX. Tras algunos días de gran tensión, Pimentel y Escóbar pidieron a sus bases que den libertad a los rehenes a través de una carta enviada desde su celda. La carta fue publicada en el periódico Presencia.

Recuadro 29

### Fragmentos de la carta de Irineo Pimentel y Federico Escóbar a las bases mineras de Siglo XX

"El sacrificio de ustedes, compañeros mineros, es muy reconocido por todas las fuerzas patrióticas del país (…). Y por eso, en este conflicto creado por el Gobierno, nosotros les invocamos a todos, hombres y mujeres, dejarnos llevar todo el peso de las injusticias a los dos, que nos encontramos en el Panóptico de esta ciudad. No entiendan mal, no deseamos ser los mártires y los héroes (…), les saludamos revolucionariamente, sin arriar la bandera de nuestras reivindicaciones sociales, económicas y del trabajo" (Firman los dos dirigentes).

Fuente: Presencia, 14 de diciembre de 1963.

El pedido de los dirigentes para que se entregue a los rehenes no fue aceptado por los trabajadores sino hasta la intervención de Lechín, quien se trasladó a Siglo XX y argumentó ante una multitudinaria asamblea que debía evitarse el derramamiento de sangre. Las mujeres que custodiaban a los rehenes fueron las últimas en ceder. Esto indujo a Lechín a decir que era más fácil entenderse con cientos de trabajadores que con un puñado de amas de casa, tal como posteriormente Domitila Chungara relató en su famoso libro testimonial.

Finalmente, el 17 de diciembre de 1963, los rehenes fueron liberados. Al momento de su entrega, el dirigente Simón Reyes leyó un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional, que en una de sus partes expresaba lo siguiente:

> Declaramos que la retención de los norteamericanos ha sido una medida justa de repudio al imperialismo, planificador de la detención de nuestros dirigentes. Destacamos la valiente actitud de la clase obrera, de las compañeras amas de casa, que ha merecido el aplauso, y las muestras de solidaridad de nuestros compañeros del interior de Machacamarca, Japo, Colquiri, Huanuni, San José y de organismos laborales internacionales de Chile, Cuba, Brasil, Perú, México (Presencia, 18 de diciembre de 1963).

Poco después, miles de militantes mineros del MNR renunciaron públicamente al partido, en numerosos actos locales en los que se quemaban las credenciales y se lanzaban "mueras" a los líderes a los que antes se lanzaban "vivas". Había llegado el fin de la alianza entre el partido populista y la clase obrera sindicalizada, que a partir de entonces se convirtió en su principal oposición social e, incluso, coadyuvó a la oposición política que tramó su caída.

Otro aspecto central para entender el final del MNR en el poder es, sin lugar a dudas, la presencia de insuperables contradicciones al interior del partido. Estas se expresaron tanto por las diferencias de clase y de posiciones ideológicas como por intereses y rivalidades personales. Si en 1960 Guevara Arce creó el partido MNRA, en diciembre de 1963, después de la ruptura de los trabajadores de las minas con el MNR, Lechín creó el suyo: el Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional (PRIN).

Pero las cosas no se limitaban a estos extremos, sino que las pugnas también se daban al interior del grupo de militantes pazestenssoristas. A principios de 1964, cuando Paz Estenssoro hizo conocer su intención de volver a candidatear para las elecciones de ese año, estas pugnas se desataron y adquirieron dimensiones insospechadas. Para entonces, la figura del líder estaba profundamente desgastada y ya no contaba con el consenso del que siempre gozó dentro de las bases de su partido, ni qué decir del consenso popular. Para contrarrestar esa situación, Paz Estenssoro cometió un error que le costaría muy caro: indujo a una mayor politización de las Fuerzas Armadas, algo que, como vimos, venía ocurriendo desde los tiempos de Siles Zuazo. La cosa llegó a tan caótico punto, que los militares aparecieron pugnando por la competencia desatada entre los pazestenssoristas, inmiscuidos en la polémica sobre quién acompañaría a su líder en la fórmula presidencial a elegirse para las elecciones de 1964.

Entre tanto, la falta de cohesión al interior del Ejército no fue un obstáculo para su paulatino fortalecimiento, el que se alcanzó principalmente a raíz del apoyo recibido de los Estados Unidos, tanto en armamento como en adoctrinamiento. Así, desde inicios de la década de los sesenta, la famosa Doctrina de Seguridad Nacional –impulsada por la potencia norteamericana en toda Latinoamérica– se convirtió en una parte esencial de la formación de los nuevos y viejos militares.

Esto le dio al Ejército una nueva faz, que muy pronto sería ampliamente revelada.

Entre los militares que buscaban intervenir en la vida política se encontraba el General René Barrientos Ortuño, quien desde julio de 1960 ocupaba el cargo de Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Boliviana. Él era bien visto por el Departamento de Estado, pues era la figura militar ligada al poder que mejor defendía los intereses del Ejército. Como alumno de la Escuela de las Américas de Panamá, había introducido sin objeciones el furioso anticomunismo de la DSN.

Ya prontas las elecciones, a mediados de enero de 1964 se inauguró la Novena Convención Nacional del MNR, con aproximadamente 300 delegados. Aunque ya había roto con el MNR, el sector de izquierda se hizo presente. Sin embargo, muy pronto sus delegados abandonaron el cónclave, calificándolo de antidemocrático. Según Alberto Jara, se había "suplantado a las representaciones genuinas del país mediante maquinaciones burocráticas" (Presencia, 15 de enero de 1964).

En medio de disputas entre los candidatos a la Vicepresidencia, el 28 de enero se proclamó el binomio Paz-Fortún. Paralelamente se eligió al Coronel Rivas Ugalde como Secretario Ejecutivo del CPN. Pero la alegría de Fortún duró muy poco, ya que René Barrientos usó una estrategia maquiavélica para desplazarlo. En marzo de ese año, Barrientos sufrió un atentado –en realidad un auto-atentado– que lo dejó herido en un brazo. Llevado a Estados Unidos para ser curado (en un avión que la embajada norteamericana puso a su disposición), el General consiguió que el jefe movimientista anulara la decisión de la Convención y lo nombrara a dedo como a su acompañante de fórmula.

Inmediatamente, Barrientos movió sus hilos para lograr el apoyo de los dirigentes campesinos de la Confederación Nacional de Campesinos, que se había mantenido fiel al partido. También consiguió el aval de importantes líderes locales, como el del cochabambino José Rojas. Es importante señalar que, pese a que la Reforma Agraria siguió adoleciendo de muchos problemas y que los proyectos impulsados por la Alianza para el Progreso para el área rural fueron muy poca cosa, el sector campesino se mantenía fiel al partido de Gobierno. Claro está que sus dirigentes no eran ajenos a los enfrentamientos de las distintas tendencias del MNR. Es más, algunos dirigentes –principalmente de La Paz– eran más cercanos a Lechín que al MNR en sí; sin embargo, la gran mayoría de las bases eran pazestenssoristas. Buscando ampliar su apoyo popular, poco antes de la conclusión de su tercer Gobierno –y en gran medida por la influencia de René Barrientos–, el líder movimientista firmó un pacto de alianza con los campesinos. Dicho sea de paso, aquel pacto es el antecedente más directo del futuro Pacto Militar Campesino.

Mientras tanto, la oposición política y social llamó "prorrogismo" a la pretensión de Paz Estenssoro de candidatear a una reelección, y lo acusó de violar la Constitución Política del Estado que él mismo había firmado en 1961, tras ser aprobada en el Parlamento. Poco a poco, las diferencias ideológicas entre los distintos partidos y grupos opositores fueron olvidadas frente a un objetivo común: impedir que se realicen las elecciones. Así nació la alianza entre partidos tan disímiles como FSB, PRIN, PRA, PURS, PCB, PSC y otros menores, quienes propugnaron por la abstención. Sin embargo, aún eran débiles respecto a la convocatoria popular del MNR, situación que los llevó a impulsar una huelga de hambre pocos días antes de las elecciones –en la que también participó Hernán Siles Zuazo–, que igualmente fracasó.

Finalmente, las elecciones se realizaron el 31 de mayo. Los otros dos contendientes al MNR fueron el Frente Boliviano Anticomunista y la Unión Cívica Nacional. Estos partidos ni siquiera entregaron listas completas, lo que llevó a la oposición a denunciar que no eran más que "partidos fantasmas", creados rápidamente por el propio MNR para dar la impresión de que existía una auténtica pugna democrática. Según las informaciones oficiales, un millón de personas votaron, y Paz Estenssoro obtuvo mayoría absoluta. Pero el fraude electoral fue tan evidente, que las cifras de los votos que existen se contradicen permanentemente y carecen de toda confiabilidad, motivo por el cual no las citaremos en este trabajo.

Aun ganador, Paz Estenssoro cayó en su propia trampa, pues su nuevo Gobierno nació débil. Muy pronto, el caos político y social se apoderó del país. Entre agosto y noviembre de 1964, cuando finalmente fue derrocado, el Presidente no tuvo un solo día de descanso. Por un

lado, debía combatir a las guerrillas falangistas que estallaron en Santa Cruz, casi paralelamente a su reasunción del poder. Si bien estas guerrillas no tuvieron gran alcance, obligaron al Gobierno a enviar tropas militares a la zona de San Ignacio y a imponer el "auto de buen gobierno" en todo el Departamento –es decir, un estado de sitio disimulado. Finalmente, en septiembre, los casi ochenta falangistas fueron cercados por la octava división del Ejército, y muchos de ellos cayeron presos. Los que lograron huir al bajo Paraguá resistieron un tiempo más, ganándose el título de héroes en la sociedad cruceña. Mientras tanto, en la región crecía el profundo rechazo al partido de Gobierno.

Los obreros impulsaron constantes amagos de insurrecciones, confiados en repetir la gesta de 1952. Esta vez, paradójicamente, se enfrentaban al partido con el que habían combatido juntos en contra de la oligarquía hasta derrotarla. Fue para reprimir a estos obreros –antiguos aliados– que el Gobierno usó por primera vez el Ejército. En la Masacre de Sora Sora (Oruro), durante el mes de octubre de 1964, murieron varios trabajadores.

El país atravesaba un periodo de permanentes manifestaciones y protestas callejeras de los diferentes sectores sociales –incluida la clase media–, huelgas de hambre impulsadas por los partidos de oposición, enfrentamientos en el campo y el descontento generalizado. En medio de ese caos, las Fuerzas Armadas vieron la oportunidad de tomarse la revancha. Mientras las bases obreras movilizadas pensaban que una vez derrocado el MNR sobrevendría un Gobierno obrero-popular, René Barrientos organizó un típico golpe de Estado militar que estalló el 4 de noviembre de 1964.

Cuando los obreros del interior del país conocieron que había estallado el golpe, condujeron a Juan lechín en hombros hasta el palacio de Gobierno, dispuestos a reeditar las jornadas de abril de 1952. Pero allí fueron interceptados por los miembros del Ejército, que no los dejaron pasar. La Junta Militar dispuso la llegada inmediata de Barrientos a la Sede de Gobierno, y él rápidamente se hizo del poder. Para evitar mayores reacciones, en su primer discurso prometió retomar las banderas iniciales de la Revolución Nacional y respetar las libertades sindicales y políticas. Los pocos milicianos del MNR que aun combatían en el cerro Laikaqota y en el Montículo huyeron derrotados. Quizá algunos de ellos eran los mismos que, 12 años antes, habían vencido militarmente al Ejército.

# II. La implantación del poder militar y el retorno de la democracia (1964-1982)

Magdalena Cajías

## Sentidos generales del periodo

Desde inicios de la década de 1960, en América del Sur se vivió intensamente la influencia de la revolución cubana, principalmente a través de la aparición de grupos políticos que propugnaban la lucha armada para la construcción del socialismo. La utopía socialista recibió un baño de optimismo con los espectaculares logros sociales que comenzaban a conocerse de la Cuba de Castro; mientras tanto, Ernesto Che Guevara incitaba al desarrollo de la "revolución continental".

En ese periodo comenzó a diferenciarse entre la llamada "izquierda tradicional" (estalinismo, maoísmo, trotskismo y nacionalismo progresista) y los nuevos grupos de izquierda, en muchos casos conformados por gente desprendida de la visión tradicional –a la que criticaban. Los nuevos grupos creían en la lucha armada; querían hacer los cambios de manera inmediata, pues consideraban que las condiciones objetivas y subjetivas estaban dadas.

Conformadas en gran medida por jóvenes de las clases medias, las nuevas organizaciones pasaron rápidamente a la acción. En pocos años se instalaron focos guerrilleros en el área rural, se difundió la "propaganda armada" a nivel urbano, se llevó a cabo la preparación político-militar y se buscó el apoyo de Cuba y de otros países socialistas.

El debate ideológico-político fue también intenso y apasionado en esos años. Las influencias fueron diversas y complejas, algo que puede advertirse en el propio Che Guevara. Los modelos de revolución trascendieron a la Unión Soviética y se nutrieron de las propuestas teóricas y las acciones prácticas de la revolución cultural china, la vietnamita, las experiencias de descolonización y los socialismos africanos. Se incluyó la perspectiva del humanismo socialista, que proponía la construcción del hombre nuevo. Incluso se recuperaron las experiencias guerrilleras nacionales, que se remontaban a los tiempos de la lucha por la independencia de principios del siglo XIX –como es el caso de la recuperación de Artigas por los tupamaros.

De todos modos, el marxismo-leninismo fue la ideología matriz de estos nuevos grupos políticos. Sin embargo, lo que los diferenciaba de la vieja izquierda era justamente la posibilidad de contrastar, criticar y discutir la teoría general a la luz de las experiencias de su aplicación en los países donde se había instaurado el socialismo –como alternativa al capitalismo– y en aquellos donde se estaban librando ese tipo de luchas.

Algo muy significativo para este continente fue la influencia de la teología de la liberación sobre estos movimientos. Esta teología fue una de las dos corrientes propiamente latinoamericanas que marcaron a la generación de 1960 y 1970; la otra fue la teoría de la dependencia. Muchos sacerdotes y monjas se involucraron en la lucha guerrillera o, al menos, la secundaron. El caso más emblemático fue el de Camilo Torres Restrepo, en Colombia.

Por lo general se considera que las revoluciones juveniles y las nuevas izquierdas de Europa y Estados Unidos, así como la lucha del movimiento negro en este último país, fueron algo muy distinto de las guerrillas de América Latina. Sin embargo, es importante rastrear la influencia latinoamericana en estos fenómenos en, al menos, tres sentidos: el primero es la creencia de que era posible que la juventud se rebele contra el

"sistema" y todas sus manifestaciones (la iglesia, la familia, la escuela, la universidad, el consumo, etc.), así como no había ocurrido nunca antes. El segundo es el surgimiento de una contracultura que removió mentalidades y transformó las visiones de mundo y las expectativas frente a la vida a través de las expresiones culturales como la música, el cine, el teatro, la literatura y otros. El tercero es el auge del feminismo, un avance muy significativo de la transformación de las mujeres, que de dependientes y/o subordinadas al patriarcado pasaron a ser mujeres más libres y autónomas en muchos campos.

Menos conocida –o al menos tratada de manera casi siempre colateral– es la influencia del viejo anarquismo (a través de sus varias ramas) en la nueva generación. Pero esta ideología, que había sido muy influyente a finales del siglo XIX y principios del XX, tuvo un importante rol en la transmisión de experiencias de lucha de sus antiguos militantes, que contactaron a los jóvenes guerrilleros y se relacionaron con ellos de diversas maneras. Eso sí, a nivel ideológico, el peso del anarquismo no fue mucho. Destacaron en todo ello los exiliados españoles de la Guerra civil de 1936-1939.

Un elemento central a tomar en cuenta es que los jóvenes revolucionarios, involucrados en la lucha armada de distintos países de América Latina en general –y del Cono Sur en particular–, encontraron variadas formas de conocimiento e intercambio mutuo. El viejo anhelo del "internacionalismo proletario", aunque fue asumido desde una perspectiva planetaria, tuvo sus expresiones más prácticas en los países latinoamericanos. Muchos jóvenes de uno u otro país se trasladaron a lugares donde consideraban que era importante estar, luchar e incluso dar la vida. Pero la cooperación fue más allá, llegando a institucionalizar la solidaridad revolucionaria a través de la creación de la Junta de Coordinación Revolucionaria, en 1972. Entre los grupos miembros de la Junta se encontraban el MIR de Chile, el PRT-ERP de Argentina, el ELN de Bolivia y el MLN-Tupamaros del Uruguay. Además, era raro encontrar que esos jóvenes no estuvieran vivamente interesados en –y por lo tanto bien informados de– lo que ocurría con las luchas revolucionarias de otros continentes, como en la guerra del Vietnam y a las luchas descolonizadoras de África.

Para fines de la década de 1960, la crisis económica de la región era generalizada, y esto hizo que los gobiernos autoritarios y populistas perdieran legitimidad y, en cambio, las luchas populares y sindicales se fortalecieran. El contexto internacional deslumbraba por la generalización –o globalización– de las protestas, al punto que estas alcanzaron al mundo detrás de la Cortina de Hierro, especialmente con el levantamiento de la Primavera de Praga. Esta situación global hacía creer que también América Latina estaba lista para luchar por utopías de transformación radical de sus sociedades.

Paralelamente, muchos movimientos sociales latinoamericanos se fueron decantando hacia posiciones de izquierda, e iniciaron un periodo de vigorosas luchas campesinas, obreras y de sectores urbanos empobrecidos. Paralelamente, importantes grupos de las clases medias –como universitarios, intelectuales y activistas políticos y culturales– impulsaron movimientos progresistas de todo tipo. Estos, junto a la emergencia de las primeras guerrillas latinoamericanas, crearon un ambiente de revuelta, insurgencia, revolución y utopía más o menos generalizada.

Si bien en Chile también hubo grupos radicales –como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)–, su experiencia más emblemática fue la llegada del socialismo al poder por la vía democrática, algo hasta entonces inédito en la región. Salvador Allende encabezó este proceso. Cientos de militantes de izquierda de los países del Cono Sur, Centroamérica e incluso de Europa y Norteamérica se trasladaron a este país para ser parte de un acontecimiento que tuvo inmensas repercusiones en América Latina. Era a inicios de la década de 1970.

Desde fines de la década pasada, la confrontación armada contra los gobiernos establecidos estalló por todas partes. Algunos de los grupos guerrilleros estaban compuestos por no más de algunos cientos de miembros; sin embargo, sus acciones lograron impactar profundamente al conjunto de sus sociedades por igual. La fuerza de este movimiento se sintió principalmente en Argentina y Uruguay. En Chile, los grupos más radicales comenzaron a sobrepasar los marcos que Allende había intentado delimitar para no provocar el descontrol generalizado. No obstante, él mismo impulsó medidas que afectaron en

mucho a los sectores dominantes, que reaccionaron airadamente.

Las pequeñas clases altas, que seguían sustentando el poder político y económico de sus países, se organizaron para defender sus intereses. Para ello acudieron a las fuerzas militares, deseosas desde hacía tiempo de intervenir para cortar de cuajo lo que consideraban la "amenaza comunista y subversiva". Adoctrinados en la DSN y apoyados por los gobiernos norteamericanos –en especial el de Richard Nixon, cuyo brazo derecho en la tarea fue Henry Kissinger, Ministro de Relaciones Exteriores–, sus embajadores y la CIA, los militares entraron en escena.

El tristemente célebre terrorismo de Estado nació con el derrocamiento sangriento de Allende en Chile, el 11 de septiembre de 1973, y la instauración del Gobierno de facto de Augusto Pinochet. Poco después se manifestó en Uruguay, pero alcanzó su máxima expresión de violencia y arbitrariedad en Argentina, a partir de marzo de 1976. Los métodos para derrotar a la izquierda armada fueron feroces. Torturas, asesinatos, desapariciones, cárceles clandestinas, campos de concentración, exilio forzado y violaciones sin precedentes a los derechos humanos fueron el pan de cada día.

El Plan Cóndor, estructurado para unir fuerzas entre los gobiernos represores –Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia–, se encargó de borrar todo vestigio del poder y las simpatías que los movimientos guerrilleros alcanzaron; fue el fin de toda expresión progresista. La represión indiscriminada tuvo como trágica consecuencia, además de miles de ciudadanos torturados, asesinados y desaparecidos, la instalación del miedo, el silencio, las delaciones, las mentiras y la ausencia de solidaridad con los vencidos.

Tal como en su momento expresó Charly García en su famosa canción "Los dinosaurios", nadie estaba al resguardo de las arbitrariedades:

> Los amigos del barrio pueden desaparecer,
> los cantores de radio pueden desaparecer,
> los que están en los diarios pueden desaparecer,
> la persona que amas puede desaparecer.

Las familias se dividieron; los poderosos recuperaron el lugar que siempre habían detentado. Fueron los años en que todo volvió atrás. Mientras en Chile se devolvían las tierras entregadas a los campesinos con la reforma agraria, en Argentina se conculcaban las conquistas alcanzadas en el periodo peronista. En todas partes, los empresarios capitalistas y los tradicionales grupos de poder consiguieron todo tipo de beneficios y prebendas. Ni qué decir de los militares.

El retorno a la democracia política fue un anhelo que creció conforme las arbitrariedades y abusos fueron cada vez más percibidos como insoportables. Pero no se trataba de cualquier democracia. En general, la población no solo esperaba el retorno de la institucionalidad en el sistema político, sino la implantación de una democracia económica y social; es decir, una democracia que consiguiera atacar y abolir todas las injusticias y desigualdades. Muchos se movilizaron –a riesgo de sus vidas– por ese ideal, realizando huelgas de hambre, defendiendo la vigencia de los derechos humanos y presionando a las dictaduras para que abandonen el poder.

La democracia política fue difícil y paulatinamente alcanzada. Sin embargo, los nuevos partidos políticos, no tan afines a la izquierda, se apropiaron de lo que en verdad había sido una lucha popular, y no fueron contundentes al momento de juzgar los crímenes cometidos por sus antecesores. Más adelante, ya instalados en el poder, se olvidaron de las otras dimensiones fundamentales de la lucha. Sin embargo, consiguieron algo muy importante: que los militares se retiren a sus cuarteles. Desde mediados de la década de 1990, las luchas populares buscaron corregir los olvidos y quisieron participar más directamente para alcanzar los objetivos que faltaban.

En Bolivia, el golpe de Estado de 1964 fue la inauguración de un ciclo militar que duró –con algunas interrupciones– hasta 1982, momento en que volvió la democracia que se mantiene hasta nuestros días. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, en el caso boliviano, los gobiernos militares no fueron homogéneos ni actuaron bajo las mismas premisas ideológicas.

La toma del poder por parte de Barrientos fue el inicio del periodo de influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, emanada desde Estados Unidos hacia los ejércitos latinoamericanos. Sin embargo, su Gobierno no dejó de tener tintes populistas y una base social popular importante –fundamentalmente

la de los campesinos. Tampoco se desmarcó totalmente del Capitalismo de Estado, hecho que sin embargo no significó el alejamiento de las empresas transnacionales, que de hecho ingresaron al país con mayor ímpetu que antes, haciendo prevalecer los intereses norteamericanos. Barrientos actuó duramente contra la izquierda y el movimiento sindical radicalizado, pero sobre todo contra la guerrilla que surgió en el sudeste del país. Sin embargo, favoreció los intereses de distintos sectores de la clase media, cuya organización y capacidad de movilidad social provenía del periodo movimientista. Así, mientras el Gobierno seguía entregando tierras a los campesinos del Altiplano y los valles, paralelamente impulsó el crecimiento de los nuevos latifundistas en las tierras bajas, especialmente en Santa Cruz.

Pese a ser el militar vinculado al MNR de mayor rango, pese a haber guiado la reconstrucción del Ejército de 1953 hacia una alianza con la revolución, Ovando participó en el golpe de Estado de 1964. Aunque era institucionalista y estaba convencido de que los militares debían transformar la imagen de su carácter represor –durante el periodo anterior a 1952– Ovando no dejó de ser fuertemente influido por las doctrinas anticomunistas de la DSN, y la represión que ordenó contra los guerrilleros de Teoponte fue inhumana y brutal. No fue solamente un nacionalista de palabra; de hecho, yendo en contra de las advertencias norteamericanas, nacionalizó la Gulf Oil. Sin embargo, terminó cediendo a la presión de Estados Unidos e indemnizó a la empresa. Salpicado de corrupción y asesinatos nunca aclarados, mantuvo sus ambiciones personalistas hasta el final de su corto paso por el poder –ambiciones que lo llevaron a un indeseado final.

Juan José Torres no era uno de los militares que más resaltaba, tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas, y así se mantuvo casi hasta el momento de acceder al mando de la Nación, en octubre de 1970. Ya posesionado, Torres adquirió un protagonismo inusitado, que lo llevó a ocupar un lugar crucial en la historia social y política de Bolivia y Latinoamérica del siglo XX. Si bien Torres no pudo comprender totalmente el momento que le tocó en la conducción del país, sí fue capaz de tolerar la creación de la Asamblea Popular, que se organizó como poder paralelo de la izquierda social y la política radicalizada.

Pese a que su Gobierno surgió de facto, Torres respetó las libertades democráticas y no ejercitó la represión contra obreros, campesinos, estudiantes y clases medias, grupos que lo presionaron constantemente para que responda a sus demandas. Además, atacó los intereses de los sectores dominantes del país y de las empresas extranjeras, algo que hizo crecer su popularidad. Sin embargo, también fue acusado de tener constantes dubitaciones e inseguridades. Su asesinato en Buenos Aires –donde se encontraba exiliado– impactó a toda la sociedad boliviana, pero nunca fue instalado en el panteón de los héroes de la izquierda boliviana.

Hugo Banzer fue el militar que expresó más nítidamente la ideología anticomunista y la defensa del sistema capitalista, de los grupos económicos y empresariales poderosos y de los intereses imperialistas. Utilizó constantemente las prácticas represivas contra sus adversarios políticos e intentó liquidar las fuertes tradiciones sindicalistas, ganarse al campesinado e introducir el conformismo en las clases medias. Participó en el Plan Cóndor y durante su gobierno hubo asesinatos, torturas, desapariciones y exilio forzado. Le fue bien en la economía, pero, a raíz del derroche y las malas políticas, no pudo sostener el auge de los precios de las materias primas. Durante sus siete años de poder, Banzer no dejó de enfrentar conflictos sociales. La oposición de los sectores obreros, aún aglutinados en la COB, fue incesante, al punto que terminó por derrocarlo.

La dictadura de Luis García Meza es la manifestación de la decadencia absoluta de las Fuerzas Armadas bolivianas, que aceptaron y apoyaron su llegada al poder mediante un sangriento golpe de Estado y lo mantuvieron allí a pesar de sus enormes y evidentes vínculos con el narcotráfico y otras formas de corrupción. Pese a contar con un eficiente sistema de inteligencia y “contrainsurgencia” –fue apoyado por asesores argentinos y brasileños–, apenas alcanzó a gobernar un poco más que un año. Asimismo, sus continuadores fueron obligados a entregar el poder unos meses después. Tras su caída, Bolivia quedó sumida en una grave crisis económica, y fue en ese difícil momento que las mayorías nacionales decidieron apostar por un inequívoco retorno a la democracia. Tras todos estos años de gobiernos de facto, los militares habían perdido

toda su legitimidad; ya no importaba ni siquiera cual fuese su color político.

Es cierto que el periodo del nacionalismo revolucionario fue un momento histórico y fundamental para la clase obrera y los sectores populares, que acumularon experiencia política, participaron en el ejercicio del poder y consolidaron a las organizaciones sindicales como sectores contestatarios. Sin embargo, fue durante los gobiernos militares que estos grupos afirmaron su capacidad de resistencia y de planteamiento de alternativas revolucionarias para el país. Los trabajadores de las minas, que venían demostrando por qué eran considerados la vanguardia del movimiento obrero y popular desde la década de 1940, sustentaron un orgullo de clase generalizado, irradiaron una imagen de fuerza y coraje y fueron actores fundamentales de la resistencia a la dictadura y el retorno a la democracia.

La clase obrera fabril rompió con la debilidad de los años del nacionalismo revolucionario, periodo en el que fue un actor de poco protagonismo. Las grandes fábricas de textiles de La Paz, Santa Cruz y la Manaco de Cochabamba se convirtieron en espacios de formación de líderes sindicales de gran trascendencia. Durante el periodo de dictaduras militares, las acciones colectivas de este sector fueron muy importantes en la resistencia a los golpes de Estado, el fortalecimiento de la COB y la lucha por el retorno a la democracia.

Durante los 12 años de Gobierno movimientista, los campesinos del Altiplano, los valles cochabambinos y el sur del país se subordinaron a la conducción del partido. Sin embargo, a partir de 1964, retomaron sus viejas aspiraciones de recuperar su antigua autonomía organizativa, ya plenamente conscientes del lugar que ocupaban en la sociedad y despojados de una visión partidaria. La emergencia del katarismo fue central para la constitución del proyecto indianista, pero también para su vinculación con otros sectores, especialmente con el movimiento obrero y el universitario.

En sus manifestaciones, los campesinos colonizadores –tanto del Oriente boliviano como del norte de La Paz–, los que trabajaban eventualmente en las cosechas del azúcar y el algodón y otros grupos de trabajadores rurales expusieron las condiciones de pobreza y explotación a las que eran sometidos. Asimismo, hicieron notar las grandes desigualdades que había en estas regiones en cuanto a la distribución de la tierra. Se involucraron con posiciones radicales y realizaron acciones colectivas que, aunque aisladas, fueron muy significativas para su fortalecimiento interno.

Las clases medias, representadas por universitarios, intelectuales, promotores de cultura y activistas de los barrios populares de las ciudades capitales, se radicalizaron. En ese intenso proceso, sus representantes se acercaron a los sectores sociales desfavorecidos que antes no habían tomado en cuenta. Muchas veces intentaron arrogarse la representación de sus intereses, pero también actuaron honestamente en la decisión de servir a sus causas y de conseguir libertades democráticas.

El sector dominante tuvo en las dictaduras de Barrientos, Banzer y García Meza las condiciones más favorables para afianzar su poder económico; sus miembros obtuvieron distintas prebendas, privilegios y concesiones de parte del Estado. Aunque instigaron a la represión contra los sectores populares, no lograron evitar la resistencia social ni erigirse como una clase burguesa con legitimidad en la sociedad. Si este sector apoyó el retorno de la democracia fue porque sus representantes comprendieron que podían sacar ventajas. Fue así que crearon nuevos partidos políticos –o sacaron de la crisis a otros– para pugnar por votos en las elecciones.

En todo caso, hay que remarcar que ninguno de los sectores sociales estuvo exento de divisiones internas. La mayoría de estas nacieron de diferencias estructurales o coyunturales, propias de una realidad "abigarrada" –como Zabaleta Mercado describe a la boliviana– y altamente compleja. Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970, la COB logró representar –más que antes– los intereses de la mayoría de los grupos que buscaban el cambio en el país. A su vez, estos grupos estaban organizados sindicalmente a nivel nacional, departamental y local. La mayor fortaleza del sector fue la consolidación de un gran bloque de oposición y resistencia. Eso sí, la visión obrerista fue negativa en momentos cruciales. Esto se hizo evidente durante el proceso de la conformación de la Asamblea Popular, ya que le impidió al sector un acercamiento más contundente con el campesinado, que había comenzado a desmarcarse del pacto con los militares y su alianza con los gobiernos de turno.

La acción política quedó –casi exclusivamente– en manos de altos cargos de los sindicatos, quienes superaron la instancia de la lucha meramente reivindicativa. Los partidos políticos de izquierda –tanto los tradicionales como los que surgieron en esas décadas– influyeron ideológicamente en las organizaciones sindicales, logrando la adhesión a sus filas de muchos de sus miembros que, sin embargo, no lograron convertirse en sus conductores. Por lo general, estos actuaron detrás de las iniciativas de las masas, y solo cuando retornó la democracia consiguieron fortalecerse y conseguir logros electorales.

## Los militares en el poder: entre el nacionalismo y la Doctrina de Seguridad Nacional

> Los trabajadores proclamamos que nuestra misión histórica, en el presente momento, es aplastar al imperialismo y a sus sirvientes nativos. Proclamamos que nuestra misión es la lucha por el socialismo. Proclamamos que el proletariado es el núcleo revolucionario por excelencia de los trabajadores bolivianos. Asumimos el papel dirigente de la revolución como genuinos representantes de los intereses nacionales. La alianza de los obreros y campesinos con la gente pobre de las ciudades y con todas las fuerzas antiimperialistas (Tesis política del V Congreso de la Central Obrera Boliviana, 1970).

### Barrientos concentra el poder, arremete contra el movimiento obrero y se apoya en el Pacto Militar-Campesino

El golpe de Estado de Barrientos, llevado a cabo el 4 de noviembre de 1964, fue el segundo de América Latina –después del de Brasil, que se produjo en abril de ese mismo año– que estuvo enmarcado en la Doctrina de Seguridad Nacional. Tal como relató Zavaleta Mercado en su corto libro Así cayó el MNR (1964), el golpe fue claramente apoyado por Estados Unidos. En la preparación de la asonada militar en Bolivia, los norteamericanos tuvieron como instrumento decisivo a su embajador en La Paz y a la propia CIA.

Barrientos le sacó provecho a la grave crisis social y política que enfrentaba Paz Estenssoro desde su elección fraudulenta. Sin embargo, para aparentar un carácter popular, prometió retornar a los "orígenes" de la Revolución Nacional y recuperar las "banderas de abril". Según sus propias palabras, estas habían sido traicionadas por el MNR y su jefe –del que hacía poco Barrientos era Vicepresidente.

Poco después del golpe, los presos políticos salieron de las cárceles; entre ellos, los dirigentes mineros Escóbar y Pimentel. En relación a ello, es evidente que los conflictos en las minas –muy fuertes desde 1962, graves en 1963 y de carácter insurreccional en 1964– ayudaron a debilitar al gobierno movimientista. Tan es así que el movimiento obrero, aglutinado en la COB y la FSTMB, jugó un rol significativo en su caída. En apariencia, Barrientos les reconoció ese papel a los obreros, pero se cuidó muy bien de mostrar que no le debía nada a nadie. Así, anunció inmediatamente que iba a desarmar a las milicias, tanto mineras como campesinas.

Con los partidos políticos que estuvieron en la conspiración anti pazestenssorista –como FSB, PRA, PRIN, PDC, PL y otros menores– fue un poco más benigno, ya que algunos de sus militantes accedieron a cuotas de poder en el nuevo Gabinete y otros espacios políticos. Los que se sintieron más desplazados se alinearon paulatinamente con el grupo opositor, aunque con poco éxito. El MNR fue catalogado como el principal enemigo del régimen, y sus militantes fueron sañudamente perseguidos; sus principales líderes salieron al exilio. Paradójicamente, los partidos de izquierda –incluido el PRIN– mantuvieron cierta expectativa en los primeros momentos, pero pronto cayeron en cuenta que solo habían sido utilizados.

En la estructuración de su Gabinete, Barrientos también posesionó a militares. Al respecto, es importante recordar que el mandatario realizó una maniobra que acarrearía graves consecuencias para el futuro de las Fuerzas Armadas y de todo el país. Mediante un decreto, reincorporó a sus filas a los militares que en 1952 habían sido expulsados por haber sido parte de la defensa del régimen oligárquico y contra los revolucionarios. La mayoría de ellos –entre los que se encontraban varios de los futuros golpistas– se alineó con el ala derecha de esa institución. Este es el caso de Luis García Meza y Juan Pereda Asbún. A los recién llegados, que habían sido expulsados cuando empezaban sus estudios, se les reconocieron 12 años de Carrera Militar que nunca habían cursado. Esta medida generó mucho malestar en los oficiales de alto

rango, que sí habían realizado la Carrera. Fue una especie de revancha por la humillación sufrida en los años de la Revolución Nacional.

Así, a pocos meses de su ascenso al poder, Barrientos ya había dejado en el camino a la mayoría de sus antiguos aliados y limitado el acceso a cuotas de poder a los pocos que aún quedaban a su lado (como la Falange Socialista Boliviana). Pronto creó su propio partido, el Movimiento Popular Cristiano (MPC), e intentó llamar a elecciones para convertir su Gobierno en constitucional. Finalmente, para evitar fricciones con el General Alfredo Ovando Candia, un antiguo rival que estaba al mando de las Fuerzas Armadas, inventó la copresidencia, que fue ejercida por ambos hasta la postulación de Barrientos como candidato para las elecciones nacionales, que recién se realizaron en 1966.

Sin embargo, muy pronto comenzaron a surgir conflictos de diverso tipo y que pusieron a prueba al nuevo régimen. La primera protesta importante fue justamente cuando Barrientos anunció su intención de postularse como candidato a las elecciones, que debían realizarse –inicialmente– en 1965. El Primer Mandatario no accedió a renunciar a la Presidencia de facto, tal como lo establecía la CPE para validar una postulación electoral. El PRIN y el PCB, junto a los sectores sociales –aglutinados en la COB y la FSTMB–, iniciaron una campaña contra esas actitudes inconstitucionales. Para anular esa y otras protestas políticas, en varias oportunidades el Gobierno realizó masivas detenciones, ensañado particularmente con los movimientistas que aún se encontraban en el país.

Por su parte, la COB cuestionó cada vez más airadamente a Barrientos por no tomar las medidas necesarias para resolver la crisis económica, la desocupación, los bajos salarios, la contracción del mercado, el encarecimiento del costo de vida, etc. Barrientos había atribuido todos estos problemas al régimen anterior, bajo promesa de resolverlos cuando accedió al poder. Cuatro medidas contribuyeron a acrecentar las protestas de la COB: 1) la cancelación del control obrero con derecho a veto; 2) se permitió que la Reforma Agraria siga siendo torpedeada por ex-latifundistas; 3) los mecanismos del control político del antiguo régimen permanecían vigentes; y 4) se estaba intentando conculcar el fuero sindical.

En realidad, como certeramente escribió Sergio Almaraz en su famoso libro Réquiem para una República (1980), el barrientismo no solamente dejó de lado los postulados populares iniciales de la Revolución Nacional –que había prometido retomar–, sino que llevó a su extremo la conculcación de las conquistas obtenidas por los sectores obreros y populares después del 52. Como vimos, estas ya habían comenzado a ser arrebatadas por los dos últimos gobiernos del MNR.

Ahora bien, no haríamos mal al preguntarnos hasta qué punto y en qué sentido la política económica del nuevo régimen se inscribió en el tipo de Estado que nació con la revolución de 1952. En el ámbito económico, la concepción general del nuevo régimen estaba orientada por dos medidas relativamente opuestas. Por un lado, dar continuidad al capitalismo de Estado, pero disminuyendo su carácter "protector". Por el otro, abrir por completo las puertas al ingreso de capitales extranjeros e impulsar el desarrollo de la minería mediana privada.

En cuanto al ingreso de capitales extranjeros, Barrientos continuó con la política de los dos últimos gobiernos del MNR. El Estado entregó la explotación de recursos mineros e hidrocarburíferos a consorcios extranjeros, bajo el argumento de que el Estado boliviano carecía de recursos para encarar nuevos desafíos en esos rubros. La Ley de Inversiones y el nuevo Código de Minería, ambos de 1966, le permitieron conceder la explotación de grandes yacimientos a firmas internacionales. La Mina Matilde, importante productora de zinc, quedó a cargo de una firma norteamericana; varios yacimientos de oro fueron explotados por la South American Placers; la explotación de las colas y los desmontes de Catavi fueron otorgados a la Internacional Metal Procesing Corporation (IMPC); la Gulf Oil obtuvo mayores concesiones para la exploración y explotación de petróleo y gas.

En relación a los sectores de la economía que continuaban bajo el control del Estado, la lógica minero-centrista siguió primando. Esto se puede advertir claramente en las declaraciones del entonces Ministro de Economía, Julio Sanjinés Goitia, quien en una oportunidad dijo las siguientes palabras:

> ...la realidad económica del país muestra que la principal fuente de riquezas y con inmediatas

posibilidades es la minería, que por muchos años será la actividad preponderante de nuestra economía (Presencia, 14 de febrero de 1965).

Apostando nuevamente a este sector, las políticas que se implementaron no fueron creativas ni novedosas. Al contrario, significaron la continuidad de las ya iniciadas por el MNR a partir de la aplicación de la Estabilización Monetaria (1956) y el Plan Triangular (1961), que habían producido muy pocos resultados favorables y provocado el enfrentamiento con los trabajadores de las minas.

A mediados de 1965, el Gobierno militar planteó la reorganización de COMIBOL y la aplicación de la que se llamó "tercera fase del Plan Triangular". Pero, como no encontró una rápida respuesta a su demanda de recursos externos, el 24 de mayo de 1965 dictó un Decreto Ley que determinó la rebaja de los salarios de los trabajadores y el despido masivo de los obreros considerados supernumerarios. La reacción en las minas ante el anuncio de estas medidas fue inmediata, y los graves conflictos que se desarrollaron en los campamentos iniciaron el rompimiento total entre el movimiento minero y el régimen militar.

Por ejemplo, en Kami, Milluni, Viloco, Corocoro y las minas del Consejo Central Sur, los trabajadores reaccionaron con violencia, volando puentes con explosivos, apresando técnicos, tomando puestos policiales, disparando sus dinamitas, etc. En todos los casos, cuando el Ejército ingresó a los campamentos para imponer el orden, lo hizo con gran violencia. En Milluni, su ingreso fue apoyado incluso por aviones Mustang de la Fuerza Aérea (El Diario, 26 de mayo de 1965). En las minas grandes, la violencia desatada produjo numerosas bajas. Varios dirigentes y mineros de base fueron apresados, y el Gobierno decidió dejar tropas acantonadas de manera permanente en la cercanía de las minas, y sus miembros siguieron cometiendo innumerables abusos.

Mientras en las minas se desarrollaban los enfrentamientos, los fabriles de la ciudad de La Paz salieron a las calles, en una acción solidaria con los mineros que pocas veces fue registrada. Tal como había sucedido en las jornadas de mayo de 1951, los obreros de las fábricas tomaron las zonas de Munaypata, Pura Pura, Villa Victoria y otras con acciones violentas. Al igual que en las minas, el Ejército actuó sin contemplaciones. Los enfrentamientos fueron de tal magnitud que, el 26 de mayo, la prensa lanzó la cifra de 19 muertos y 80 heridos (El Diario, 26 de mayo de 1965).

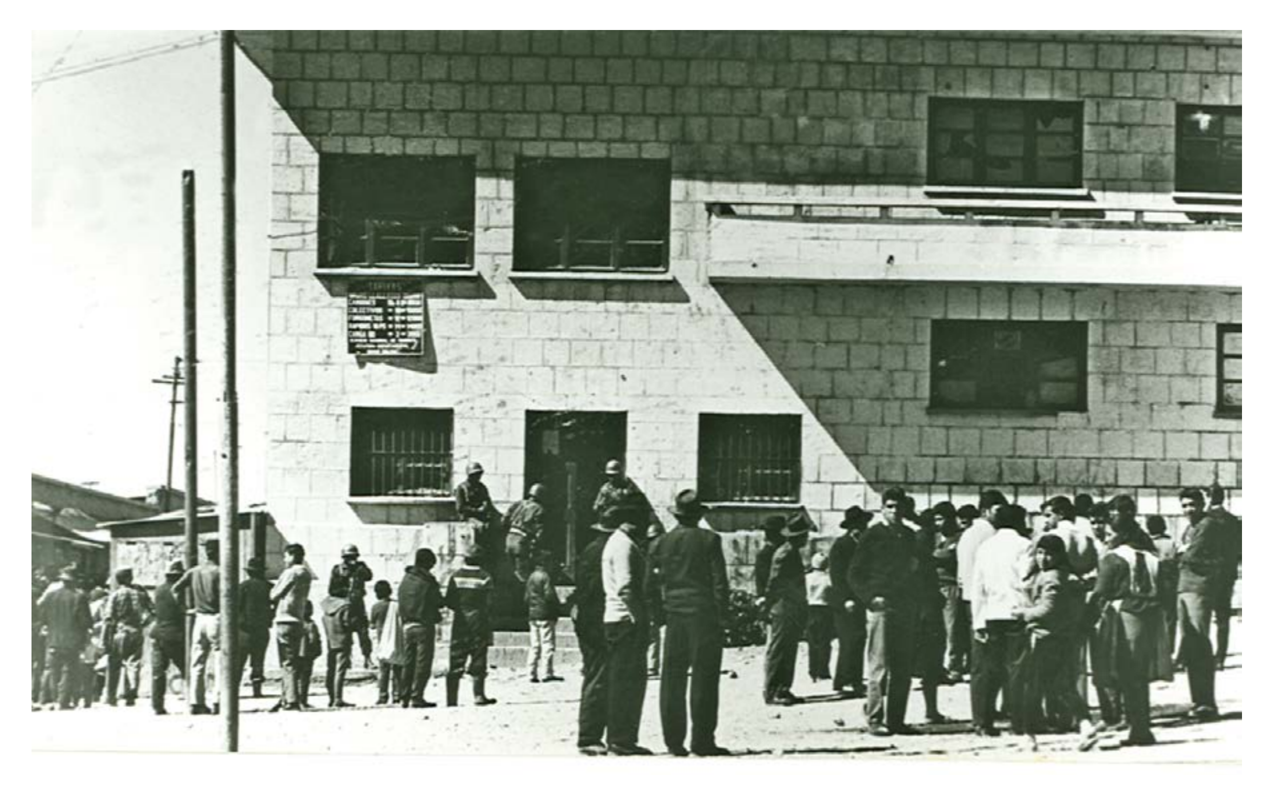


Figura 14. Campamento de siglo XX bajo presencia militar.
Fuente: Periódico Presencia.

Frente a los acontecimientos, Barrientos dijo que estaba dispuesto a combatir con todas las armas la posibilidad de que se desate una Guerra Civil. Además, amenazó con la movilización de 10.000 campesinos para aplastar a los rebeldes en La Paz y ordenó numerosas detenciones de líderes políticos y sindicales. Entre ellos se encontraba el máximo dirigente de la COB y la FSTMB, Juan Lechín.

En los siguientes meses, varios dirigentes de la FSTMB entraron en la clandestinidad, organizando el Comité Sindical Clandestino. Una dirigencia combativa de Siglo XX, hegemónicamente compuesta por poristas –César Lora, Filemón Escóbar e Isaac Camacho– y comunistas de PCML –Federico Escóbar e Irineo Pimentel–, encaró la lucha desde la clandestinidad con mucha decisión.

El 1 de septiembre de 1965, el Ejército inició una "nueva operación de limpieza" en las minas nacionalizadas, concentrando sus efectivos (unos 400 hombres entre soldados del Ranger y de los batallones Bolívar y Méndez Arcos) en Siglo XX, Catavi y Huanuni. Los trabajadores determinaron organizar la resistencia armada, y los enfrentamientos estallaron el 19 de septiembre. Al día siguiente, los combates entre tropas y trabajadores fueron librados calle a calle y casa a casa, con un saldo de una treintena de obreros muertos y casi cien heridos. Según Filemón Escóbar, "la represión posterior fue más terrible que el combate: del 22 al 30 de septiembre se expulsó a más de 600 familias: una parte al confinamiento y la otra a Oruro" (1986: 54). La operación de desarme se realizó en medio de innumerables abusos al conjunto de la familia minera. La dirigente de las amas de casa, Domitila Chungara, también fue apresada y maltratada (Veizzer, 1979).

Si bien la derrota sufrida por los mineros en septiembre provocó un reflujo organizativo, al mismo tiempo generó una profunda radicalización de las bases. Así surgió el llamado "sindicalismo revolucionario". Con esta calificación se pretendió afirmar la dimensión política contestataria del sindicalismo minero después de su rompimiento con el régimen militar, lo que agudizó la represión. César Lora, Federico Escóbar e Isaac Camacho, dirigentes mineros de Siglo XX, fueron asesinados en diferentes momentos de la dictadura de Barrientos.

Mientras tanto, tal como había ocurrido desde la dictación del Decreto de Reforma Agraria, en 1953, el sector agropecuario tradicional fue totalmente descuidado. Pese a las constantes promesas y a la preparación de ambiciosos planes, el Gobierno militar solamente implementó políticas paliativas, prebendalistas y coyunturales. Lógicamente, dichas medidas no terminaban de hacer frente a las ya evidentes limitaciones del minifundismo poco productivo y tampoco ofrecían soluciones capaces de revertir las condiciones de pobreza de las mayorías campesinas. Sin embargo, también es cierto que, durante la gestión presidencial de Barrientos, el Gobierno siguió entregando tierras y dictó un Decreto Supremo que autorizaba la inscripción definitiva en derechos reales de los títulos ejecutoriales conseguidos por los campesinos. Tal vez fue por ello que el Presidente contó con la lealtad de la mayor parte de ese sector.

Es cierto que la permanencia del militarismo en el poder se debió en alguna medida a la dispersión y la debilidad de las fuerzas políticas y sociales que consiguió derrocar –entre ellas al movimientismo. Pero también fue gracias a que contó con una importante base social entre la clase media y, sobre todo, el campesinado. Para garantizar esta última alianza, Barrientos reactualizó, perfeccionó y amplió el Pacto Militar-Campesino, instrumento con el cual ejercitó políticas prevendalistas y de corte populista que le permitieron contar con un amplio apoyo durante todo su mandato.

En todo caso, eso no quiere decir que no hubiese voces disidentes en el sector campesino, tal como ocurrió durante los años del MNR. Por ejemplo, el 18 de febrero de 1965, un grupo de campesinos dirigido por Tomás Lobera y Paulino Quispe suscribió un pacto intersindical con Alberto Pato Paredes, principal dirigente de la COB. Paulino Quispe, también conocido como el Wilasaco, era acusado de haber matado al ex ministro Vicente Álvarez Plata. En el discurso de circunstancia, Paredes habló de la "lucha por la asunción al poder de un Gobierno obrero-campesino", hizo críticas al Gobierno militar y manifestó su apoyo a Juan Lechín Oquendo. Además, los asistentes determinaron no devolver las armas que habían ido obteniendo desde 1953 ni desmovilizar a sus milicias, pues existía el "peligro que nuestras tierras nos sean arrebatadas por los ex latifundistas" y porque las "armas son nuestro único medio de defensa" (Presencia, 18 de febrero de 1965).

Por su parte, el 3 de agosto de 1965, en un acto por la conmemoración del "día del indio", el dirigente oficialista de Ucureña, Jorge Soliz, dijo que el campesinado no devolvería el armamento que tenía en su poder "hasta que se consoliden nuestras conquistas". De todos modos, 4.000 campesinos de la zona recibieron a la comitiva encabezada por Barrientos y Ovando. Los líderes del Gobierno fueron recibidos en medio de vivas y muestras de aprecio.

Poco después, el Gobierno anunció que la aplicación del Plan Trienal Agropecuario costaría 18 millones de dólares. El Plan comprendía 7 programas y 47 subprogramas, entre ellos: mejoramiento de los cultivos alimenticios autóctonos, manejo y conservación de suelos, programas de cooperativas de mejoramiento agrícola, sanidad animal, protección a la vicuña y otros servicios importantes como, por ejemplo, estadísticas de comercio exterior, creación de inspectorías para protección de recursos naturales y programas de preparación de proyectos.

Finalmente, como el Gobierno no pudo desarmar a los campesinos, las milicias siguieron siendo utilizadas para dirimir problemas internos. El 1 de julio de 1965, como resultado de las rencillas entre caudillos campesinos de Punata y Cliza –otra vez el valle alto de Cochabamba era el lugar de las pugnas–, hubo dos muertos y varios heridos de bala. Según el periódico Presencia, allí también intervinieron algunas mujeres –armadas con piedras– que consiguieron desarmar a algunos soldados. Luego, el 5 de septiembre de ese mismo año, los dirigentes de la Federación Especial de Campesinos de Ucureña acusaron de varios crímenes a José Rojas Guevara, ex dirigente sindical, y a Macedonio Juárez, en ese momento Secretario General de la Central 2 de agosto de Cliza y hombre de confianza del General Barrientos.

Finalmente, el 7 de septiembre (apenas dos días después de que se presentaran las acusaciones ya mencionadas), Barrientos rechazó la oferta de los campesinos del valle cochabambino para crear el partido político Movimiento Revolucionario Campesino y asumir su jefatura. Esta era la primera vez que el sector campesino planteaba construir un instrumento político desde su seno, lo que demuestra que no siempre estuvieron dispuestos a servir de furgón de cola del régimen.

Cuando en 1966 se inició el proceso electoral, los considerados partidos de derecha –como el PRA, el PL y el PDC– se unieron a la candidatura de Barrientos. En cambio, los partidos considerados de izquierda –como el PRIN, el PC y el POR–, aunque desde diferentes perspectivas, se mantuvieron en la oposición. Entre tanto, los diferentes intentos de las distintas fracciones del MNR por lograr su reunificación fracasaron.

El Gobierno lanzó distintas declaraciones, afirmando que se iban a otorgar las garantías para que todos los partidos políticos concurran a las elecciones en igualdad de condiciones. Sin embargo, la represión contra los opositores, en vez de menguar, recrudeció en los momentos previos al verificativo electoral, todo bajo el pretexto de que se estaban preparando actos subversivos.

Los partidos más afectados fueron el MNR, el PRIN y el PC (en sus dos fracciones). Los tres, después de fracasar en un intento por organizar un frente opositor con otras agrupaciones menores, optaron por proclamar la abstención electoral y amenazaron con luchar hasta lograr el derrocamiento del Gobierno. Pero nada pasó. El triunfo de Barrientos en las elecciones de julio de 1966 fue bastante amplio, aunque no faltaron voces que señalaron que se había practicado un fraude electoral. En las minas, la votación favorable al candidato oficial estuvo entre las más bajas del país, y la convocatoria a la abstención electoral tuvo un relativo éxito. En cambio, el voto campesino a su favor fue ampliamente mayoritario.

## La guerrilla del Che Guevara en Bolivia

Muy poco después del triunfo electoral de Barrientos, la aparición de la guerrilla comandada por Ernesto Che Guevara en Santa Cruz tuvo un gran impacto sobre la política gubernamental, que centró sus esfuerzos en combatirla y derrotarla. Desde el momento en que esta fue descubierta, a mediados de marzo de 1967, el Gobierno constitucional puso en vigencia la Ley de Seguridad del Estado y otras medidas anticonstitucionales, dictadas como Gobierno de facto. Reafirmó el rol "tutelar de la patria" de las Fuerzas Armadas y permitió la abierta injerencia de los Estados Unidos en el combate a la guerrilla.

Como se sabe, el Che planificó su presencia en Bolivia con varios meses de anticipación, lo

que hace muy posible que los miembros de PCB, con quienes tomó contacto, le fueran poniendo al tanto de la situación. Durante la planificación de la guerrilla, la relación de Ernesto Guevara con cuatro miembros de la juventud del PCB fue permanente y estrecha: Roberto (Coco) Peredo, Jorge Vázquez Viaña (Loro), Rodolfo Saldaña y Julio Luis Nieto (Ñato). Todos ellos fueron preparados militarmente en Cuba y asignados para colaborarlo estrechamente.

La zona elegida para el estallido de la guerrilla fue el área de Ñancahuazú, una región de exuberante vegetación, ubicada a 1000 metros de altura y en la frontera entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca. El Che eligió esta región del Chaco boliviano después de haber descartado el Chapare (departamento de Cochabamba) y el Alto Beni (norte del departamento de La Paz). Guevara y los suyos la eligieron, entre otras cosas, porque la carretera Santa Cruz-Cochabamba les permitía mayor movilización y las cadenas montañosas y las profundas cañadas les otorgaban oculte y un desplazamiento que pasaba desapercibido.

Sin entrar a discutir las razones estratégicas de la elección del terreno, es evidente que, desde el punto de vista sociopolítico, esta fue poco acertada. Para empezar, en la región había muy pocos pobladores, la mayoría campesinos dispersos. Por otra parte, a diferencia de las regiones mineras, las del Altiplano boliviano y las de los valles cochabambinos, los pequeños pueblos de Ñancahuazú no tenían tradición política.

En todo caso, como los testimonios actuales han permitido esclarecer, la falta de colaboración de sus pobladores a los guerrilleros no se debió tanto a una actitud consciente contra ellos como a la confusión e inseguridad que su presencia en esas aisladas y lejanas tierras creaba. Por supuesto que la distorsionada propaganda del Gobierno también jugó en su contra. Por su parte, Barrientos seguía negando públicamente la presencia del Che en Bolivia. De hecho, señaló a la prensa que no era posible que guerrilleros estén en el país porque, de ser así, ya habrían asaltado tierras, a sus pobladores y cometido asesinatos a mansalva, tal como lo hacían en otras partes (Presencia, 22 de marzo de 1967).

Como se sabe, Guevara ingresó en Bolivia los primeros días de noviembre de 1966, con un pasaporte uruguayo a nombre de Adolfo Mena González, bien disfrazado bajo la fachada de un experto de la OEA. En los meses anteriores habían llegado al país algunos de sus colaboradores, como los cubanos José Martínez Tamayo (Ricardo), Carlos Coello (Tuma), Harry Villegas Tamayo (Pombo) y Alberto Fernández Montes de Oca (Pacho), así como el teórico francés Regis Debray. Tamara Bunke (Tania) fue la única extranjera vinculada a la guerrilla que llegó al país con mucho tiempo de anticipación, en noviembre de 1964, y se instaló en La Paz.

A fines de 1966 retornaron los bolivianos que el PCB había enviado a Cuba a que reciban entrenamiento militar. Entre ellos se encontraba Coco Peredo, que en junio de ese año compró a su nombre la finca de Ñancahuazú a la que se dirigió el Che. En enero de 1967, los guerrilleros peruanos dirigidos por el "Chino" anunciaron su incorporación a la lucha, al igual que el grupo del minero Moisés Guevara, vinculado al PC pro-China.

El 31 de diciembre de 1966 estalló la ruptura entre Mario Monje y el Che Guevara. El boliviano no aceptó que fuera el guerrillero argentino-cubano quien tuviera a su mando la dirección militar de la guerra. Frente a esta situación, la cúpula del PCB le retiró su apoyo a la guerrilla, pero los bolivianos que habían sido formados para ella y que ya se encontraban en Ñancuahuazú decidieron quedarse, rompiendo de hecho con su partido. Por su parte, Loyola Guzmán, dirigente de la Juventud Comunista, decidió continuar con sus tareas de apoyo a la guerrilla en el área urbana. En su decisión influyó de forma definitiva la entrevista que sostuvo con el Che en enero.

En esas condiciones, unos cuarenta combatientes –entre extranjeros y bolivianos– comenzaron los preparativos finales para poner en marcha la guerrilla. Sin embargo, esta se inició antes de lo previsto por un choque accidental con una patrulla del Ejército y por la actitud negativa de dos desertores del grupo de Moisés Guevara, que delataron su existencia.

Recién el 21 de marzo, al no poderse ocultar la primera baja que sufrió el Ejército, se confirmó oficialmente la presencia de guerrilleros castrocomunistas en Bolivia. Se anunció que los guerrilleros se movían en la zona de Monteagudo. El 23 de marzo, luego de producirse el primer combate entre el Ejército y los guerrilleros, el Che fundó

el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al día siguiente, el jeep de Tania fue descubierto en Camiri. Ella lo había dejado en un garaje antes de ingresar una vez más en la zona guerrillera con el francés Regis Debray y el argentino Ciro Bustos. Sobre el papel que desempeñó la única mujer en la guerrilla existen diferentes visiones, algunas bastante críticas, como la del historiador Gustavo Rodríguez (2006).

En ese momento, el grueso de las tropas que el Gobierno envió a la zona del conflicto estaba asentado en la población chaqueña de Camiri, donde regía el toque de queda y donde el propio Presidente de la República se desplazó a mediados de marzo. En las siguientes semanas, tropas del CITE fueron enviadas desde Cochabamba, además de helicópteros, paracaidistas y aviones Mustang. A fines de marzo, los aviones lanzaron bombas incendiarias (napalm) y lanzaron incesantes ráfagas de metralleta a la zona selvática. El 28 del mismo mes se inició la llamada "acción envolvente", para la que fueron destinados 2000 efectivos militares. Se pensó que con esta acción se derrotaría rápidamente a la guerrilla. Sin embargo, la prensa informaba día a día de nuevos combates en los que los guerrilleros parecían estar llevando ventaja al Ejército nacional, situación que este ya no podía ocultar.

Paralelamente, ante el temor del avance guerrillero, las poblaciones civiles cercanas comenzaron a organizar su defensa. Un ejemplo de esta organización es el pueblo de Muyupampa, donde se combatió a los guerrilleros. Meses después, cuando cuadrillas de guerrilleros ya habían estado presentes en algunos de esos pueblos, se organizaron grupos de defensa civil. El 1 de julio se formaron los Comités Cívico-patrióticos en Camiri, Vallegrande, Charagua, Cuevo, Carandaití, Boyuibe y otras poblaciones de la provincia Cordillera. Los Comités fueron organizados por los responsables militares y conformados por profesionales, ex combatientes de la guerra del Chaco y otros sectores de la población.

El estallido de la guerrilla fue un excelente pretexto del Gobierno para perseguir y reprimir a sus opositores políticos, a quienes acusó de estar vinculados con la lucha. En ese contexto, a fines de marzo fueron apresados 41 ciudadanos; luego los confinaron a poblaciones alejadas, como Riberalta (Beni), Ixiamas, San Buenaventura (ambas en el norte de La Paz) y Pekín (Pando). La mayoría de los detenidos eran militantes y dirigentes de los partidos opositores (PRIN, MNR, PC, PCML), pero también había numerosos líderes sindicales y, sobre todo, dirigentes mineros. Como ya vimos, el Gobierno tenía especial recelo contra este último grupo. El PCB y el POR fueron declarados fuera de la ley.

El 31 de marzo se creó un Consejo de Guerra que determinó que la principal ofensiva antiguerrillera debía centrarse en la neutralización del apoyo que la guerrilla pudiera recibir de otros sectores. Paralelamente se desplegó una propaganda ideológica que buscaba descalificar a los guerrilleros vinculados al castro-comunismo. Los argumentos utilizados eran los mismos que se encontraban en la propaganda norteamericana, que los describía en toda América Latina como inhumanos, delincuentes, etc.

Al respecto, Estados Unidos comenzó a tomar más cartas en el asunto, enviando asesores, paracaidistas y armas y apoyando con tareas de inteligencia. En todas estas acciones estaban involucrados el Departamento de Estado y la CIA. Sin embargo, la contribución norteamericana más importante a la "contrainsurgencia" fue la preparación de un destacamento Ranger compuesto de unos 650 hombres. En su preparación, iniciada en mayo de 1967, intervinieron oficiales y sargentos norteamericanos fogueados en Vietnam y bien preparados para tareas de ese tipo en las academias de la zona del canal de Panamá, en ese momento bajo control norteamericano.

Paralelamente, los países fronterizos acordaron colaborar con la represión a la guerrilla, vigilando sus fronteras y tomando otras medidas para prevenir su expansión a esos países. Dentro de ese acuerdo de colaboración, varios jefes militares de Argentina, Brasil y Paraguay arribaron a Santa Cruz a principios de abril. Allí buscaron informarse sobre las proyecciones del movimiento guerrillero. Un hecho que el Gobierno boliviano siempre negó es la solicitud de colaboración militar a Argentina y Brasil.

El hecho que la guerrilla fuese descubierta antes de tiempo ocasionó varios problemas a sus miembros. El contacto con los enlaces urbanos se dificultó, y esto perjudicó gravemente las cuestiones de orden logístico, las comunicaciones con el exterior y la incorporación de nuevos combatientes. Por otra parte, salir de la zona guerrillera se hizo cada vez más complicado, al

punto que quienes debían hacerlo por lo general lo hacían en condiciones que provocaban su inmediata detención. Tania no pudo abandonar más el campamento guerrillero desde que ingresó con Debray y Bustos, lo que frustró el vital papel que debía desempeñar en el ámbito urbano, realizando tareas de enlace y comunicación que eran fundamentales para la guerrilla.

El 18 de abril, Regis Debray, Ciro Bustos y George Roth fueron apresados por el Ejército en la región de Muyupampa, cuando se disponían a abandonar la zona (pues su participación en el combate no estaba prevista). Esto significó un duro golpe para la guerrilla, sobre todo por la información que el Ejército pudo obtener de ellos. En manos del Ejército, Debray confirmó la presencia del Che y dio otras informaciones valiosas, como la identificación del movimiento guerrillero con la lucha continental, la presencia de cubanos y el papel de los hermanos Peredo. Por su parte, Ciro Bustos realizó dibujos de distintos guerrilleros –entre ellos Moro, Ñato, Rolando y Pacho– que posteriormente sirvieron para su identificación.

Aún no se habían producido muchas bajas entre los guerrilleros cuando se presentó el problema que mayores consecuencias tendría para la posterior derrota de la guerrilla: la separación entre la vanguardia, comandada por el Che, y la retaguardia, dirigida por Joaquín, ocurrida a mediados de abril. Ambas columnas no volvieron a encontrarse, y debieron invertir los siguientes meses en la consecución de ese objetivo.

Por su parte, el Gobierno continuó con la ofensiva y ratificó que quienes directa o indirectamente coadyuvaran a grupos irregulares armados en el país serían sometidos a las máximas sanciones establecidas en los Códigos Penal Militar y Penal y en el Decreto de Ley de Seguridad del Estado (Presencia, 12 de abril de 1967). El 19 de mayo, Barrientos señaló que “por cada gota de sangre de los soldados bolivianos, nosotros cobraremos cien”. El 21 del mismo mes pidió que la pena de muerte fuera restituida y añadió que “todos esos bandoleros serán sancionados oportunamente, de acuerdo a la magnitud de sus delitos” (Presencia, 21 de abril de 1967).

A pesar de todo ello, los guerrilleros continuaron con acciones exitosas que revelaban las grandes limitaciones del Ejército boliviano. Una clara muestra de ello fue la emboscada de Iripití, el 10 de abril, donde se produjeron 11 bajas y 30 prisioneros del Ejército. Otra se dio el 16 de ese mes, cuando los guerrilleros apresaron al Coronel Rubén Sánchez y a otros 50 soldados. En ambos casos, todos los soldados presos después fueron puestos en libertad. El 19 de junio, la guerrilla tomó el pueblo de Morocos con el objetivo fundamental de reestablecer el contacto con la ciudad, pero no tuvo éxito.A partir de ese momento comenzaron a internarse más hacia el Norte, hacia el Río Grande, con la intención de encontrar a la retaguardia.

Mientras esto ocurría en la zona guerrillera, en las minas volvía a vivirse un clima de agitación. Hacía ya tiempo que los sindicatos permanentemente demandaban la reposición de sus antiguos salarios, rebajados desde mayo de 1965, la libertad de sus dirigentes apresados y confinados y la vigencia de las libertades político-sindicales, entre otras cosas. Ante la falta de respuestas del Gobierno a estas demandas, el 6 de junio Huanuni se declaró “territorio libre” y Siglo XX convocó a un ampliado obrero de carácter nacional, que debía realizarse en esa mina. El Gobierno respondió con la inmediata dictación del estado de sitio.

Los delegados de las diferentes minas comenzaron a reunirse en Siglo XX. La noche el 24 de junio, mientras los obreros y sus familias celebraban San Juan, reunidos alrededor de las tradicionales fogatas (al día siguiente iban a comenzar sus deliberaciones), tropas del Ejército atacaron el campamento. Aunque los obreros intentaron resistir, la sorpresa fue tal que los militares rápidamente lograron reducirlos. Ese día, el Ejército perpetró una masacre que dejó como saldo decenas de muertos y heridos. Además, procedió a la detención de los delegados al ampliado, dirigentes intermedios, dirigentes de las amas de casa y los demás obreros de base que fueran considerados peligrosos, todo en medio de grandes abusos y arbitrariedades.

Barrientos justificó la masacre señalando que los mineros no se habían reunido a discutir problemas sociales, sino para dar su apoyo a la guerrilla del Che. De este supuesto respaldo hizo responsables a “los agitadores extremistas”. Luego agregó dos frases que dan una clara muestra de la postura radical que él también había asumido: “con la patria o con el comunismo, no hay otro dilema” y “soy el único responsable del ingreso de

las tropas a las minas" (Presencia, 26 de junio de 1967). Aunque es cierto que estos se pronunciaron solidariamente con la guerrilla, el Gobierno utilizó esa coyuntura como un pretexto para seguir atacando a su principal adversario social.

En julio, para terminar de una vez con la guerrilla, el Gobierno decidió aumentar el presupuesto de defensa. Hasta ese momento, la lucha antiguerrillera le había costado al país 30 millones de pesos, gastados fundamentalmente en movilización de tropas, armamento nuevo y víveres. También se retomó la ofensiva internacional contra la guerrilla, comenzando acciones diplomáticas para que la OEA inicie una acción militar contra Cuba.

Mientras tanto, en la Habana se realizó la Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS). Allí se respaldó la revolución en todo el continente, con la consigna guevarista de crear dos o tres Vietnam, y nombró a Ernesto Che Guevara como su presidente honorario. Las 27 naciones asistentes manifestaron su respaldo a los comunistas de Vietnam, al movimiento racista negro Black Power y a los guerrilleros de Colombia, Bolivia, Venezuela y Guatemala.

El ELN combatiente envió un mensaje a esa Conferencia –que aparentemente se elaboró para que se conozca su voz de manera directa–, pues sus líderes no quedaron contentos con el papel cumplido por la delegación boliviana. El mensaje, que llegó tarde pero que fue difundido por la prensa mundial, saludaba: "a todos los pueblos patriotas que en las montañas de América Latina han emprendido la lucha liberadora". También expresaba su decidido apoyo a los pueblos cubano y vietnamita y llamaba a todos los pueblos de América Latina a expulsar al imperialismo yanqui. El mensaje incluía la denuncia de la intervención militar directa de los EE.UU. y de la introducción de mercenarios cubanos en Bolivia por la CIA. Concluía señalando que el grupo guerrillero boliviano estaba conformado por hijos de mineros, campesinos, maestros y estudiantes.

El 6 de julio, la vanguardia de la guerrilla, compuesta por 28 hombres, dio un golpe audaz: tomó por una hora el pueblo de Samaipata. Allí las autoridades fueron apresadas, entre ellos varios militares, se tomó una camioneta de la GULF, y los guerrilleros lograron abastecerse. Además, el Che y Peredo hablaron con varios pobladores y los incitaron a unirse a su lucha. Así, a pesar de que la vanguardia de la guerrilla estaba enfrentando grandes dificultades, lograba mantener latente la lucha.

Sin embargo, la retaguardia estaba totalmente desorientada, y pronto sería aniquilada. El 31 de agosto, sus miembros fueron acribillados mientras cruzaban el Río Grande en un lugar llamado Vado del Yeso. Entre las víctimas se encontraban Joaquín (Juan Vitalio Acuña), Tania (Tamara Bunke), Braulio (Israel Reyes), Moisés (Moisés Guevara), Negro (José Restituto Cabrera, médico peruano), Alejandro (Gustavo Machín), Ernesto (Freddy Maimura), Polo (Apolinar Aquino Quispe) y Walter Arancibia. Sólo sobrevivió Paco (José Castillo), que fue apresado por el Ejército. Su aniquilación quedó en manos del General Vargas Salinas, quien se sirvió de la delación de Honorato Rojas, un campesino que en un primer momento se había mostrado como amigo de Paco. Poco tiempo después, el Ejército encontró las cuevas estratégicas de la guerrilla, que tenían provisiones y abundante documentación. Los datos extraídos provocaron la caída de los enlaces urbanos claves, como Loyola Guzmán.

Ambos acontecimientos no solo significaron duras derrotas militares para la guerrilla, sino que, al ser conocidos por los que aún peleaban, provocaron un profundo impacto moral y psicológico. Paralelamente, la represión a nivel nacional alcanzó su clímax, y cientos de ciudadanos fueron apresados bajo el paraguas de la Ley de Seguridad del Estado. Esta Ley establecía diferente tipos de penas, la mayoría de entre tres a seis años de cárcel para los que atenten…

> …contra la acción de fuerzas del exterior o interior, que ataquen la integridad o soberanía nacional, así como la vida de la población, la estabilidad institucional, la paz y el orden público como bases fundamentales de convivencia y progreso (Presencia, 10 de septiembre de 1965).

El 8 de octubre, el Che fue rodeado cerca de la Higuera, cuando varios de sus hombres que aún lo acompañaban hasta un rato antes no se encontraban con él. Posteriormente, este desencuentro les permitiría huir, ya que casi una decena de ellos pudo llegar a la frontera con Chile en febrero de 1968; entre ellos Inti Peredo.

Herido, Guevara fue trasladado al pueblo de La Higuera, junto a otros dos guerrilleros. El minero Simeón Cuba lo ayudó a sostenerse en pie cuando los militares que los custodiaban los obligaron a caminar hacia esa localidad desde el lugar donde se había producido el desigual combate. Allí, Guevara y los guerrilleros restantes fueron colocados en la escuelita, en habitaciones separadas. Arribados a La Higuera, Guevara quedó en manos de los mandos militares de la contrainsurgencia y, bajo la imposición de la CIA –y por consentimiento del propio Presidente de la República, el General Barrientos–, fue asesinado al día siguiente, poco después de que sus dos compañeros sufrieran el mismo final. Era el 9 de octubre. Su cadáver fue trasladado en un helicóptero a la localidad de Vallegrande, donde fue expuesto en el hospital del lugar. Miles de pobladores se aproximaron para observarlo en silencio.

La fotografía del cadáver del Che, tomada por el periodista Fredy Alborta –con los ojos abiertos y con la apariencia de aún estar con vida–, fue publicada al día siguiente en primera plana por el diario Presencia, y dio la vuelta al mundo. El guerrillero había muerto, pero el mito ya había nacido.

## Inestabilidad política, revolución universitaria y guerrilla de Teoponte: 1968-1970

En abril de 1969, el avión que llevaba a René Barrientos Ortuño cayó a pique. El incidente, supuestamente accidental –pues la posibilidad de un atentado nunca fue descartada–, ocasionó su muerte y le permitió a Luis Adolfo Siles Salinas, el Vicepresidente en gestión, ocupar la Presidencia de la República. Aun siendo Vicepresidente, Siles Salinas prácticamente no había aparecido en el escenario público, hecho que en cierta forma hizo que la opinión pública no lo vincule con las acciones represivas de Barrientos. Además, contaba con la simpatía de importantes sectores de la población, principalmente de la clase media alta, poco proclive a aceptar que los militares estén indefinidamente en el poder.

Tanto por sus propias convicciones como por las crecientes presiones populares y de la opinión pública en general, Siles Salinas inició rápidamente un proceso de reapertura de las libertades democráticas. El permiso para la reorganización de los sindicatos, el retorno de buena parte de los exilados políticos y el cese de las persecuciones a los opositores del anterior Gobierno eran parte del cambio. Los mineros y otros sectores obreros y populares vivían un proceso de lenta recuperación. Por su parte, los partidos políticos proscritos durante el gobierno de Barrientos avanzaron más rápido en su recomposición, y tomaron como bandera de lucha inmediata la demanda de una nueva convocatoria a las elecciones nacionales que Siles Salinas había prometido.

Sin embargo, las acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque pequeñas, habían dejado su marca en la opinión pública. Pronto el Ejército comenzó a atacar al Gobierno de Siles Salinas, acusándolo de débil e ineficaz





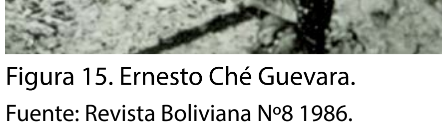


Figura 15. Ernesto Ché Guevara.
Fuente: Revista Boliviana Nº8 1986.

para combatir a los continuadores del movimiento guerrillero creado por Guevara. En verdad, los guerrilleros apenas alcanzaron a realizar pequeñas acciones de propaganda armada en el ámbito urbano, pero el trauma fresco de la guerrilla de 1967 puso en alerta a los militares. Por otra parte, aunque debilitado, el ELN continuaba en pie bajo la dirección de Inti Peredo, un combatiente boliviano que, burlando el cerco militar, había logrado huir de la zona después de la muerte de Guevara. Esta acción lo había convertido en un mito y héroe revolucionario dentro y fuera del país que, en 1968, retornó clandestinamente a Bolivia para continuar la lucha.

Paralelamente, la conflictiva emergencia de dos corrientes al interior de las Fuerzas Armadas de la Nación se hizo evidente. La primera era la institucionalista, encabezada por Alfredo Ovando Candia y cuyo origen se remonta a la segunda gestión de gobierno del MNR. La segunda corriente, conservadora o de extrema derecha, surgió al inicio del periodo barrientista, con la penetración de la Doctrina de Seguridad Nacional en el Estado y el Ejército boliviano. Esta última corriente se consolidó y fortaleció durante la guerrilla guevarista.

Contrariamente a lo esperado, la fracción del Ejército que se encargó de derrocar a Siles Salinas, el 26 de septiembre de 1969, fue la institucionalista. El General Alfredo Ovando Candia, quien hasta unos días antes ejercía el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y se aprestaba a presentarse para las elecciones, asumió como Presidente.

Inesperadamente –ya que sin dudarlo había avalado todas las posturas antipopulares de Barrientos–, Ovando inició su gobierno con un discurso moderado. A través del "Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas", planteó al país un programa de gobierno en cuyos principales puntos resaltaba la intención de retomar los postulados básicos de la Revolución Nacional. Durante la llamada a la concertación nacional, el Gobierno se centró en el cumplimiento de los objetivos del Mandato Revolucionario.

Dentro de su posición nacionalista, la medida más importante que tomó Ovando fue la derogatoria del Código del Petróleo (Davenport) y, como corolario, la nacionalización de la Gulf Oil Company, en octubre de 1969. Esta acción fue bien recibida por el movimiento obrero y popular. En la toma de la medida fue

Recuadro 30

### Objetivos principales del "Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas"

1. Asegurar la soberanía de la Nación sobre las fuentes de producción del país. En resguardo de este objetivo, recuperar las riquezas naturales enajenadas en condiciones lesivas al interés nacional o disponer una justa participación del Estado en la explotación de las mismas.
2. Consolidar, extender y diversificar la industria minera; asegurar el establecimiento de fundiciones y refinerías para los minerales de producción nacional y procurar el establecimiento de la industria pesada.
6. Proteger el capital nacional y otorgar garantías a la inversión extranjera privada cuando esta contribuya real y efectivamente al desarrollo de la economía nacional y en estricta observancia de nuestras leyes.
7. Proteger la industria nacional y extender la política de sustitución de importaciones.
8. Adoptar medidas responsablemente eficaces para elevar los sueldos y salarios de los trabajadores mineros y estudiar el pronto mejoramiento y la racionalización del régimen salarial del país.
13. Reestructurar la economía rural con la organización cooperativa y mecanizada de la explotación agropecuaria y la popularización del crédito agrícola de fomento.
16. Sostener el Sagrado Derecho de la Nación a la reintegración marítima.
17. Movilizar al país para la lucha contra el analfabetismo, comprometiendo en esta empresa el mayor esfuerzo del Estado.
18. Defender la cultura del país, exaltando los valores de la cultura popular y de la tradición india y mestiza, orientándola hacia la formación de una sana conciencia de independencia y orgullo nacional.

Firman [entre otros]: General de Brigada Juan José Torres, General de Brigada César Ruiz Velarde, León Kolle Cueto, Rogelio Miranda, David Lafuente Soto, Fernando Satori y Contralmirante Alberto Albarracín.

fundamental el papel jugado por Marcelo Quiroga Santa Cruz. En todo caso, es importante señalar que en las universidades, algunos intelectuales –como Sergio Almaraz, René Zavaleta Mercado y Mario Miranda, entre otros– y los sectores populares presionaron durante meses para que fuera tomada.

Entre otras medidas nacionalistas del nuevo Gobierno estuvo el decreto que determinó que las empresas privadas de minería mediana entreguen su producción a ENAF, la empresa fundidora nacional, y den al Estado el 100% de las divisas obtenidas por sus exportaciones. Otras medidas importantes fueron: la derogatoria de la Ley de Seguridad del Estado, la abolición del Reglamento Sindical, la reincorporación de los trabajadores de la minería nacionalizada que habían sido despedidos por causas político-sindicales y el restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con la URSS, Rumania, Hungría y Yugoslavia (Sandóval: 1979). En el ámbito social destacó el impulso dado a la alfabetización popular.

Pese a su inclinación popular, las notorias contradicciones del Gobierno –como haber cedido rápidamente a las presiones externas para la indemnización de la Gulf– fueron creando un ambiente de descrédito en torno a su discurso nacionalista y revolucionario. Esto hizo que Ministros independientes de mucho prestigio, como el propio Marcelo Quiroga Santa Cruz, abandonaran el Gabinete.

Ovando era permanentemente criticado por su falta de definición política (al punto que la gente tarareaba "izquierda izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás, un dos tres" para referirse a él). Paralelamente, algunos sectores de la población –principalmente los universitarios– expresaron muy nítidamente su radicalización ideológica, fuertemente influenciados por la presencia y muerte del Che Guevara en nuestro país y por las luchas de los obreros de las minas.

En los primeros meses de 1970, miembros de la juventud de la Democracia Cristiana y otros militantes de distintos partidos de izquierda iniciaron un proceso de desplazamiento de los falangistas de los puestos de dirección universitaria. Esta movida cobró mayor relieve en las facultades de Medicina y Humanidades, en la Federación Universitaria Local (FUL) y en la Confederación Universitaria Boliviana (CUB). Con las organizaciones estudiantiles bajo su mando y con un gran respaldo de las bases, los activistas impulsaron el estallido de la Revolución Universitaria, que finalmente ocurrió en abril de aquel año.

El Gobierno no se animó a cuestionar la autonomía universitaria o a atentar contra ella, y esa actitud les abrió el camino a los estudiantes para tomar las riendas de sus instituciones. Desde las Casas Superiores de Estudio de la mayoría de los departamentos del país –encabezadas por las de La Paz y Cochabamba–, en pocos meses lograron transformar y democratizar la estructura académica de las universidades. Los catedráticos considerados reaccionarios fueron expulsados y se proclamó la adhesión institucional a la causa popular y socialista e incluso –en algunos momentos– a la lucha armada.

A nivel interno se produjeron cambios de profundo alcance, tanto en aspectos administrativos como académicos. Así, en la UMSA se conformó el Consejo Supremo Revolucionario, máximo organismo de dirección universitaria, bajo cogobierno paritario docente y estudiantil; esta estructura se repetía en cada una de las facultades y carreras. En el Consejo se aprobaron nuevos planes de estudio y se instaló la cátedra libre y paralela, con el objetivo de lograr que los contenidos formativos encajen con la visión transformadora de la sociedad y las necesidades del país y del pueblo oprimido.

Experiencias muy ricas se vivieron en facultades como las de Arquitectura y Humanidades, que fueron denominadas como de "interacción social". Todos los universitarios debían aprender un idioma nativo, ya fuera quechua o aimara; la actividad cultural creció exponencialmente. Para ayudar a los estudiantes de bajos recursos se impulsó el área de bienestar estudiantil y se fortaleció el comedor universitario. También se creó el Seguro Social Universitario para la atención médica de los profesores y sus familias.

En los siguientes meses, el Gobierno reprimió en varias oportunidades a los universitarios movilizados. La represión estatal de una multitudinaria manifestación ocurrida en La Paz ocasionó una muerte y dejó un saldo de varios heridos. En aquella oportunidad, los estudiantes se habían manifestado para exigir que se esclarezca la muerte de dos guerrilleros del ELN, que habían sido encontrados en la laguna Alalay de Cochabamba: Jhenny Kohler y Elmo Catalán.

Apoyado por un grupo de falangistas –que a su vez recibían el respaldo de los "marqueses", una pandilla famosa por sus desmanes–, el Gobierno organizó la toma de la UMSA. Sin embargo, estos fueron rápidamente desalojados por la acción contundente de las dirigencias y bases universitarias.

En ese contexto se produjo la aparición de un nuevo movimiento guerrillero, organizado por el Ejército de Liberación Nacional y liderado por Inti Peredo, su principal dirigente. El 5 de septiembre de 1970, Peredo anunció una nueva campaña guerrillera a través de una proclama al pueblo que fue distribuida a los medios de comunicación y que titulaba "Volveremos a las Montañas". Entre otras cosas, en la proclama se afirmaba lo siguiente:

> La guerrilla boliviana está en plena marcha, y no vacilaremos en darle, como epílogo brillante, el triunfo de las fuerzas revolucionarias, que instaurarán el socialismo en América Latina (…). La lucha guerrillera es, sin embargo, la única esperanza de victoria, y haremos la guerra no por mentalidad guerrerista sino porque, como decía el Che, nos empujan a la lucha, no hay más remedio que prepararla y decidirse a emprenderla.

A pesar de que Peredo fue asesinado muy poco después por la policía –que lo acorraló en una vivienda de La Paz–, muchos de los jóvenes que ya estaban vinculados con el proyecto decidieron seguir adelante. Esta vez lo hicieron bajo el mando del hermano menor de Inti y Coco Peredo, Osvaldo, comúnmente conocido como Chato. La guerrilla estuvo compuesta por jóvenes provenientes de una generación que no había vivido en carne propia la revolución de 1952. En cambio, la habían visto con ojo muy crítico por su incapacidad para concretar cambios estructurales y por haber generado nuevas formas de dominación interna y de penetración imperialista. Denunciaron acremente las grandes desigualdades sociales, la pobreza extrema y el racismo o colonialismo interno, realidades lacerantes que se acrecentaron bajo el mando de Barrientos, despertando su rebeldía.

Varios grupos e instituciones aportaron a la formación de esta nueva columna de la lucha armada: la juventud de la Democracia Cristiana (partido con el que finalmente rompieron), el Ejército de Liberación Nacional (que pugnaba por reorganizarse y tenía a La Paz y Cochabamba como principales focos de reclutamiento) y las dirigencias universitarias (como la Federación Universitaria de La Paz y la Confederación de Universitarios de Bolivia). También recibieron el apoyo de la música de protesta (donde Benjamín Coronado –o "Benjo Cruz"– afiló su guitarra, para luego marcharse a la guerrilla) y de los revolucionarios de las tierras vecinas: Chile, Brasil, Colombia y Perú.

Los dirigentes de la Confederación de Universitarios de Bolivia (CUB), al momento de ingresar a la guerrilla, hicieron conocer públicamente un documento del cual resaltamos algunos párrafos:

Recuadro 31

### Fragmentos del documento: "A la juventud revolucionaria de Bolivia y América"

"Abandonamos la dirección del movimiento estudiantil universitario para incorporarnos como simples soldados del glorioso Ejército de Liberación Nacional, instrumento liberador que fundaron el CHE y el INTI y al cual concurren combatientes de todos los sectores sociales y organizaciones políticas, después de comprender que la única forma de ser consecuentes con la Revolución Boliviana es pasar por encima de las poses declarativas a la acción, es destruyendo los impedimentos del sectarismo político y asumiendo la responsabilidad y el honor de empuñar las armas que, junto al CHE y al INTI, dejaron muchos compañeros por la Liberación Nacional de nuestro pueblo. (…) Hasta ahora el pueblo no ha contado con una organización política que canalice sus luchas, no existió partido político capaz de convertirse en vanguardia revolucionaria de la clase obrera".

Firman: Adolfo Quiroga Bonadona, Presidente CUB; Mario Suárez Moreno, Vicepresidente CUB; Hugo Rodríguez Román, Secretario de Vinculación; Horacio Rueda Peña, Secretario de Prensa; Norberto Rodríguez Silva, Presidente FUL de Trinidad; Carlos Suárez Coimbra, FUL Trinidad; Antonio Figueroa Guzmán, FUL Sucre; Juan José Saavedra, Comité Central Revolucionario de la UMSA.

Fuente: Quiroga Bonadona, 2005.

El 18 de julio, los 70 combatientes se dirigieron a Teoponte desde los Yungas de La Paz, haciéndose pasar en un principio por alfabetizadores.

Su primera acción fue tomar como rehenes a unos alemanes que trabajaban para una empresa norteamericana en Teoponte. A cambio de los alemanes exigieron la liberación de 10 de compañeros suyos, apresados durante la represión a la guerrilla de Ñancahuazú. Ellos eran: Enrique Ortega, Gerardo Bermúdez (en realidad Mario Stamponi), Félix Melgar Antelo, Oscar Busch, Víctor Córdoba, Roberto Moreira, Loyola Guzmán, Rodolfo Saldaña, Juan Sánchez y Víctor Cortez.

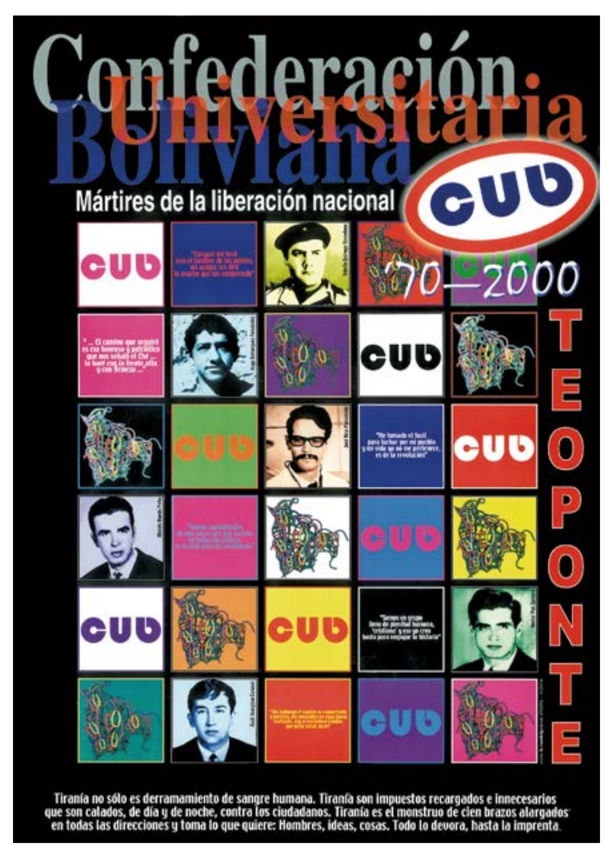


Figura 16. Afiche de Homenaje Guerrilleros de Teoponte 2000.

Entre los dirigentes universitarios que fueron a Teoponte se encontraban: Adolfo Quiroga Bonadona, Mario Suárez Moreno, Juan José Saavedra, Hugo Rodríguez Guzmán, Horacio Rueda Peña, Antonio Figueroa Guzmán y Carlos Suárez Coimbra. Los universitarios de base eran: Ricardo Justiniano, Darío Busch Barbery, Álvaro Urquieta Paz, Adolfo Huici Alborta, Luis Letelier Aráoz, Alberto Revollo Olmos, Carlos Suárez Soto, Hugo Bohórquez Fernández, Alberto Caballero Medinaceli, Norberto Rodríguez, Edgar Soria Galvarro, Carlos Navarro Lara, Rafael Antezana y Gonzalo Rojas Paredes. Los chilenos Miguel Feliz González, Hernán Ampuero Ferrada, Julio E. Sambrano Acuña y Julio de la Cruz. El peruano Arturo Callapiña Hurtado, el argentino Oscar Ricardo Puente, el brasileño Luis Renato Pires Almeida y el colombiano Fabián Barba también se unieron al grupo guerrillero (Quiroga Bonadona, 2005).

Como la primera acción había sido coronada con un triunfo –ya que los 10 militantes del ELN salieron a Cuba y los rehenes volvieron a sus hogares–, era difícil imaginar que en los siguientes meses la guerrilla sería aniquilada sin casi entablar combates. La columna fue dividida desde un principio en varios frentes, lo que causó varios problemas. Pero además, tal como señala Gustavo Rodríguez Ostria en Teoponte (2006), su importante libro sobre esta guerrilla, la lucha careció de estrategia y fue mal concebida militar y políticamente. Además, los guerrilleros estaban insuficientemente armados; cada uno contaba con una metralleta, revólver o pistola, 6 granadas de fusil tipo tromblón (cubanas) y dos granadas de fabricación chilena o casera (según declaraciones de Osvaldo Peredo a la prensa).

Con su decisión, los guerrilleros de Teoponte expresaron el idealismo de una parte de la juventud de clase media. Muy pronto se hizo evidente que su causa no iba a lograr expandirse ni contar con la incorporación de cuadros del sector obrero y campesino. El Ejército tomó la iniciativa, y de los pocos combates que se registraron, la mayoría fueron favorables a las fuerzas militares. En varios de estos combates, como por ejemplo en el del Pajonal, grupos enteros de combatientes fueron fusilados.

Para fines de agosto de 1970, la guerrilla estaba dividida en dos grupos, uno comandado por Chato Peredo y el otro por Alejandro, y a ambos solamente les quedaba internarse cada vez más en el monte para huir del Ejército. La prensa informaba permanentemente sobre la muerte de guerrilleros. Un caso emblemático fue la muerte del conocido cantante de protesta Benjo Cruz, cuyo nombre apareció entre los de los fallecidos; luego se supo que había sido fusilado. Los periódicos también mencionaban la aparición de cadáveres esqueléticos de guerrilleros que habían muerto de hambre.

A principios de octubre, los pocos combatientes que quedaban en la zona de Teoponte deambulaban en busca de algo de comer para sobrevivir. Este fue el caso de Néstor Paz Zamora,

quien murió de inanición el 8 de octubre –según se dice, sin haber disparado un solo tiro. La dramática situación de la guerrilla provocó grandes muestras de solidaridad de distintos sectores de la población. Sin embargo, tal como se expresó en el multitudinario entierro de un grupo de guerrilleros, realizado el 30 de septiembre de 1970, la ayuda tenía un sentido más humano que político. En esa oportunidad, miles de universitarios cantaron "Zamba para no morir" con el puño izquierdo en alto y lágrimas en los ojos.

La dureza de las acciones del Ejército fue criticada por amplios sectores de la población. Seguramente por ello, pero también porque las circunstancias de la subida al poder de Juan José Torres así lo ameritaban –tema al que nos

Recuadro 32

## Fragmentos de escritos de combatientes en Teoponte

Enrique Farfán Mealla, también conocido como "Adrián" o "Chapaco", nació en Tarija y murió durante la guerrilla de Teoponte. Sus restos fueron entregados sin pies y sin brazos. Estos son algunos fragmentos de lo que escribió durante la guerrilla:

**La conciencia social**
"La gente demuestra muy poca sensibilidad y gran escepticismo. (…) Para los más, la vida no exige más que el afán de poseer dinero, aún a costa de traicionarse y traicionar. Mucha gente sufre con gran resentimiento. (…) Tengo fe en que puede nacer un nuevo concepto de la vida en sociedad, en el sentido espiritual y material. Creo que no podré dejar de preocuparme por ello y actuar cuando sea necesario."

**La construcción del hombre nuevo**
"Construir un nuevo mundo es demasiado complicado y trae como consecuencia tocar los aspectos más delicados y profundos de la vida. Penetrar en el espíritu, observando todo lo que se presenta al paso, descubriendo los defectos y males que uno lleva adentro, vivir con toda intensidad los sentimientos y creencias que también están en la intimidad. Descascararse para salir limpio. Luchar por la purificación y luego ver con amargura lo que es la verdadera realidad del mundo."

**Confianza en el triunfo revolucionario**
"Mucha gente cree que nuestro esfuerzo puede ser estéril. Nosotros creemos que no es así, porque creemos en el pueblo, en una nueva moral y en una nueva sociedad. Las condiciones son difíciles, pero esto nos hace más fuertes. Cuando un hombre está convencido de tener la razón, no es débil. Nuestros enemigos son fuertes, pero en otro sentido, la guerra será cruel y larga. El grito de rebelión es el inicio de la libertad para todos. Incluso aquél que caerá en el combate, lo hará ya LIBRE."

Néstor Paz Zamora nació en Sucre y murió de hambre en Teoponte. Los siguientes escritos muestran fragmentos de su experiencia guerrillera y de su pensamiento revolucionario:

**La entrega de la vida a la causa revolucionaria**
"Allá donde todavía corra sangre en nuestras venas, haremos sentir lacerante el grito del explotado. No importan nuestras vidas si conseguimos que esta Latinoamérica, la patria grande, sea territorio libre, de hombres dueños de sus destinos. (…) No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos."

**La opción de la lucha armada**
"Por eso tomamos las armas. Para defender a la mayoría analfabeta y desnutrida de la explotación de una minoría, para devolverle dignidad al hombre deshumanizado. Sabemos que la violencia es dolorosa porque sentimos en carne propia la represión violenta del orden establecido, pero estamos despiertos a liberar al hombre porque lo consideramos hermano. Somos el pueblo en armas, es el único camino que nos queda."

**El hombre nuevo**
"No queremos dejar a nuestros hijos una vida basada en la competencia como medio de posesión o en la posesión como medida valorativa del hombre. Creemos en un hombre que vale por lo que es, no por lo que tiene. En un hombre liberado enteramente que viva y construya una estructura amable donde pueda amar."

referiremos más adelante–, se permitió la creación de una comisión, compuesta por la Cruz Roja y miembros de la Iglesia Católica y de la UMSA, para que se interne al monte. Se trataba de encontrar a los sobrevivientes para salvarlos, lo que solamente fue posible con siete de ellos que, desde hace algunos días, estaban siendo cobijados por los mineros de Tipuani. Entre ellos se encontraba Oswaldo Chato Peredo, quien fue obligado a salir del país. Las mayores críticas por la mala conducción de la guerrilla recayeron sobre Peredo, sobre todo porque se consideró que había cometido muchos errores durante la preparación y el desarrollo de la guerrilla. Uno de estos errores fue el fusilamiento de dos combatientes que comieron a escondidas unas sardinas en momentos en que todos sufrían de hambre.

Más importante que todo ello es saber qué pensaban los propios combatientes sobre su lucha y sobre la decisión de entregar la vida por una Bolivia más justa bajo la utopía socialista. Esto nos ayudará a comprender mejor que, más allá de su derrota en Teoponte, ellos dejaron un ejemplo de consecuencia con sus profundas convicciones revolucionarias para las generaciones futuras.

## El movimiento obrero y popular propugna la tesis socialista y lucha por la autonomía campesina

El proceso de reorganización de la COB se produjo durante el gobierno de Siles Salinas. Juan Lechín Oquendo y otros dirigentes importantes retornaron al país del exilio y se dieron a la tarea de poner nuevamente en pie a la organización matriz de los obreros. Para ello contaron con el apoyo de la Federación Universitaria de la FUL de La Paz y de la CUB.

A los pocos días de constituido el Gobierno de Ovando, la COB señaló que este debía ser nacionalista y revolucionario. Según el movimiento obrero, el alineamiento del Gobierno con esos postulados iba a significar lo siguiente:

> …habrá llegado el momento de unificar todas las fuerzas representativas de obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesionales, sacerdotes y militares de avanzada en un poderoso frente antiimperialista (Presencia, 29 de septiembre de 1969).

Yendo aún más lejos, el 6 de octubre, en un ampliado de la COB, la mayoría de los presentes optó por declarar la independencia de clase frente al Gobierno, emitiendo un comunicado que decía: "El actual proceso debe ser democrático y nacionalista, encaminado a una revolución y no hay revolución sin el papel de vanguardia del proletariado" (Presencia, 8 de octubre de 1969).

Pocos días después, la COB publicó una "Plataforma de lucha" que, según sus aspiraciones, iría más allá del "Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas" que propuso el Gobierno. Entre sus reivindicaciones económicas de alcance nacional estaban los siguientes puntos: nacionalización de la Gulf y de la Bolivian Power; anulación de los contratos para la explotación de Matilde; reversión de las colas y desmontes de Catavi; expulsión del grupo asesor de COMIBOL; derogatoria del Código de Minería; la oposición a la vigencia del Impuesto Único Agropecuario, que afectaba a los pequeños campesinos; puesta en práctica de la revolución agraria –que implicaba la radicalización de la Reforma Agraria. Además, la COB exigió el retiro de las fuerzas del Ejército de los distritos mineros, amnistía general e irrestricta para todos los perseguidos, detenidos y desterrados políticos y sindicales, reincorporación a sus labores de todos los trabajadores retirados, aumento de salarios para los sectores laborales del país y reposición de los salarios de la clase minera.

En medio de ese tenso ambiente de demandas, los trabajadores de las minas convocaron al XIV Congreso Nacional Minero, que se inauguró el nueve de abril de 1970. Este contó con la presencia de 800 delegados y 77 organizaciones laborales. Lechín envió un mensaje al Congreso, a través del cual expresó su desconfianza hacia el nuevo Gobierno:

> …desgraciadamente para el país y en especial para los trabajadores, todo el Alto Mando, incluido el General Ovando, está comprometido en los hechos sangrientos de mayo y septiembre de 1965 y la noche de San Juan. Es inútil, pues, convencer a la gente sensata y con memoria en el país que, por arte de magia, los enemigos de antes se conviertan en los amigos de ese mismo pueblo por efecto de un "Mandato" de ese Alto Mando Militar (Presencia, 10 de abril de 1970).

La posición antimilitarista de Lechín fue compartida por la mayoría de los delegados mineros asistentes al Congreso. Ya en el análisis de

los sucesos de los años anteriores, identificaron a Ovando como coautor de las masacres y la represión desatada contra ellos, también responsable de la rebaja de sus salarios. Paralelamente, en los discursos iniciales de los delegados fraternales –algunos universitarios, otros miembros de la COB y de otros sectores laborales–, se pidió a los mineros a que asuman la conducción de un proceso prerrevolucionario que, según la percepción general, ya se estaba iniciando:

> …los mineros son la vanguardia del pueblo, y su misión es cumplir victoriosamente con ese papel que es, sobre todo, un papel de conducción política a la cabeza del frente de las clases oprimidas contra el enemigo común: el imperialismo yanqui y la oligarquía capitalista cipaya (Actas del XIV Congreso de Mineros).

La aprobación de la tesis socialista, ya al final del congreso, expresó la acumulación ideológica histórica de los grupos más radicalizados del sindicalismo minero. Tanto en los distintos párrafos de la tesis como en las discusiones que se produjeron, los mineros realizaron un balance prácticamente final del significado y los resultados de su alianza con el MNR, después del triunfo de la revolución de 1952. La percepción generalizada de que la Revolución Nacional había sido traicionada y de que los gobiernos de turno habían arrebatado a los obreros sus legítimas conquistas fue central para la perspectiva radical que se adoptaría. Asimismo, la percepción de que el Estado –ya fuera administrado por movimientistas o por militares– se había tornado en su adversario se generalizó.

Como resultado de ello, se reafirmó la autonomía ideológica y política frente al Gobierno nacionalista de Ovando. También se proclamó que los partidos de izquierda, que ejercían una importante influencia y presencia en el seno del movimiento minero, debían subordinarse a los principios e intereses de la clase obrera. La plataforma de lucha que acompañó a la tesis socialista fue concebida para desempeñar el papel de impulsora en la construcción del socialismo y ruptura de la dependencia frente a los Estados Unidos.

Al momento de elegirse una nueva dirección, una fuerte corriente de renovación total del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) anterior hizo sentir su peso. Sin embargo, finalmente Lechín fue reelecto, lo que permitió que los antiguos dirigentes, que habían sido fuertemente cuestionados, vuelvan a ocupar importantes puestos. Pero también los jóvenes dirigentes, que en los años del barrientismo habían acumulado experiencia y conseguido representatividad, accedieron a la FSTMB.

La aprobación de la tesis socialista causó un fuerte impacto en la opinión pública. Varios sectores, como la prensa sindicalizada, los fabriles y los ferroviarios, se adscribieron a algunos –o varios– de sus postulados en sus propios congresos, que se realizaron muy poco después. En ese marco de radicalización ideológica, la COB convocó a su V Congreso Nacional para los primeros días de mayo de 1970. En el futuro, este evento sería considerado como uno de los más importantes en la historia de ese organismo laboral.

Sin embargo, como un punto en contra, la presencia de la delegación campesina fue limitada, pese a que ya se hablaba profusamente de efectivizar la alianza obrero-campesina. Esta delegación representaba a los grupos de ese sector que se habían desmarcado del Pacto Militar-Campesino, como por ejemplo la Confederación Independiente de Campesinos, constituida en 1968. En un intento por abrirse hacia ese y otros sectores, la plataforma de lucha también incorporó demandas como la abolición de aquel Pacto, la profundización de la Reforma Agraria y reivindicaciones particulares para artesanos, gremiales, maestros y otros. El V Congreso de la COB expresó más nítidamente que nunca la decisión de mantener la supremacía proletaria, que, con todas sus ventajas y desventajas para encarar la lucha popular, se mantuvo como tradición de esa organización laboral.

De todos modos, dentro de la coyuntura en la que se desarrolló el Congreso, los campesinos hicieron una importante defensa de sus reivindicaciones e intereses. Esto es algo que ya habían comenzado a hacer en tiempos de Barrientos, cuando se les quiso imponer el Impuesto Predial Rústico por las tierras entregadas (aplicando una vieja idea de la embajada norteamericana). Aunque no se había conseguido imponer dicho Impuesto, ellos sabían que la amenaza seguía latente. A eso se sumaba la cada vez mayor conciencia respecto a los defectos y las limitaciones de la Reforma Agraria y las políticas de colonización. Estas circunstancias impulsaron a muchos campesinos a orientar su lucha hacia el objetivo de separarse de las organizaciones del sector,

tradicionalmente vinculados con los gobiernos de turno. Esta actitud amistosa con los Gobiernos la encabezaba la Confederación Nacional de Campesinos, de línea oficialista.

Las acciones campesinas de mayor repercusión fueron las que se desarrollaron en el norte del departamento de Santa Cruz. Esta región era ocupada por latifundistas y campesinos migrantes del Altiplano, algunos de los cuales eran colonizadores permanentes y otros trabajadores agrícolas temporales. El 23 de octubre de 1970, la Federación Especial de Campesinos de las provincias del norte de Santa Cruz proclamó la Revolución Agraria de facto, disponiendo la ocupación de todas las tierras de los latifundistas.

Su primera acción real fue la toma de la hacienda Chané-Bedoya, que se encontraba sobre el río Grande. En esta acción tomaron parte más de 150 campesinos armados de rifles, palos y picotas, que iban acompañados de sus esposas e hijos. El movimiento, secundado por una decena de universitarios y dirigido por Óscar Zamora Medinacelli, un tarijeño de clase media, fue inicialmente concebido como un nuevo frente guerrillero por parte del Gobierno. Sin embargo, muy pronto fue evidente que la presencia de jóvenes de izquierda ligados al PCML era reducida y, en cambio, la participación campesina en la toma de la hacienda había sido masiva. Además, el pedido generalizado de reivindicación de tierras y mejora de sus condiciones de vida era típicamente campesino, no guerrillero.

A partir de la toma de la hacienda Chané-Bedoya, actitudes de este tipo se repitieron en varias provincias del norte de Santa Cruz. Un claro ejemplo de esto es lo sucedido el 28 de octubre de 1970 en la provincia Ñuflo Chávez. Aquella vez, varios funcionarios del Instituto Nacional de Colonización fueron tomados como rehenes por los colonos de San Julián, que exigieron al Gobierno la apertura de caminos, la instalación de postas sanitarias y otras demandas de carácter social.

Ante la arremetida campesina y las presiones de los latifundistas, el Gobierno determinó que fuerzas militares retomen Chané Bedoya, hecho que se produjo el 3 de noviembre de manera pacífica. Poco después, el control militar de la zona, que quedó a cargo de la VIII División del Ejército, se reforzó. Zamora Medinacelli, identificado como incitador principal de la toma de tierras, fue apresado y posteriormente exiliado del país. Sin embargo, decenas de jóvenes y campesinos armados lograron huir al monte. Finalmente, luego de varios meses de pequeñas acciones aisladas, en julio de 1971 la Unión de Campesinos Pobres (UCAPO) declaró públicamente la "guerra contra el latifundio" y advirtió que serían ocupadas "todas las propiedades hechas con negociados al amparo de gobiernos y sectores políticos desde 1953" (Presencia, 14 de julio de 1971).

A partir de ese momento –y nuevamente dirigidos por Óscar Zamora Medinacelli, que había ingresado al país clandestinamente–, campesinos armados de escopetas, hachas y machetes protagonizaron decenas de tomas de tierra en la región; denominaron sus acciones como revolucionarias. También se produjo el bloqueo de caminos y la toma de rehenes para llamar la atención del Gobierno, cada vez más confinado a controlar la situación.

Contrariamente a lo esperado, las acciones de UCAPO no fueron secundadas por la Asamblea Popular –de la que hablaremos más adelante–, y esto se debió en gran parte a que el movimiento fue identificado políticamente con el PCML. Así, cuando un delegado a la Asamblea pidió solidaridad con esa organización, esta determinó, luego de una larga e importante discusión, que no podía parcializarse con los métodos de lucha de ninguna organización política. Más adelante, ya con Juan José Torres derrocado, el Gobierno militar dirigido por Hugo Banzer Suárez envió tropas a la zona, tomó cientos de presos y no dejó vestigio de las ocupaciones de tierra. Para los campesinos del Norte de Santa Cruz la toma de tierras había sido la forma de asumir su propio proceso de radicalización.

En la región del Altiplano de La Paz y Oruro, ya a fines del gobierno de Ovando, surgió la Federación de Campesinos Independiente, que proclamó la ruptura del Pacto Militar-Campesino. Esto ocurrió el 20 de junio de 1969 (mucho antes de las acciones narradas en los párrafos anteriores), cuando los representantes de 18 provincias paceñas asistieron al VI Congreso Departamental del Bloque Independiente Campesino. Durante el gobierno de Torres, este Bloque fue cobrando mayor fuerza y, por su vinculación con el movimiento obrero, fue la única representación campesina aceptada por la Asamblea Popular. Incluso –aunque solamente para alivianar las presiones ejercidas por el sector– la Vicepresidencia

de dicha Asamblea fue ocupada por su principal dirigente, Casiano Amurrio.

Paralelamente –también en la región altiplánica–, otro sector de campesinos aglutinados alrededor de Jenaro Flores, dirigente de la Provincia Aroma, llegó a ganar mayor representatividad entre las bases. En su discurso, Flores se desmarcó del sindicalismo tradicional y comenzó a abogar por reivindicaciones de carácter étnico. En enero de 1971, en un Ampliado Departamental, Flores fue elegido Secretario Ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz. En esa ocasión, su grupo planteó distintas reivindicaciones campesinas: adoptar la independencia sindical y política; luchar contra las fuerzas opresoras nacionales y foráneas, alineando a los campesinos junto a mineros y fabriles; sostener el Pacto Militar-Campesino, con la esperanza de que los militares adopten el indianismo como la verdad suprema para la salvación de la patria (Presencia, 15 de enero de 1971). Era el inicio del katarismo, que tuvo entre sus principales exponentes a Jenaro Flores. Pero también aportaron al surgimiento del indianismo el pensador e ideólogo Fausto Reinaga y distintos los líderes campesinos. Entre estos últimos fue fundamental el trabajo de Luciano Tapia, del que da cuenta la autobiografía que publicó con el nombre de Ukhamawa Jakawisaxa ("así es nuestra vida"), en 1996.

A pesar de la convulsión generalizada del sector, las direcciones de la Confederación Nacional de Campesinos continuaron siendo manejadas mayoritariamente por dirigentes de larga trayectoria colaboracionista y servil hacia los gobiernos de turno. Esto permitió que la Confederación se alineara rápidamente con el recién ascendido presidente –de facto– Hugo Banzer Suárez.

## Caída de Ovando y radicalización generalizada durante el gobierno de Juan José Torres

El Presidente Ovando, que desde mediados de 1970 enfrentaba cada vez más la presión de los sectores de derecha del Ejército para frenar el avance del movimiento obrero y popular, calificó a la tesis socialista, aprobada en el V Congreso de la COB, de antinacional y subversiva. Por su parte, los obreros advirtieron que estaba a punto de consumarse un golpe militar reaccionario, y se aprestaron a movilizarse contra él.

El 4 de julio de ese año, un pronunciamiento de los mineros de Siglo XX, Catavi, Llallagua y Uncía propuso lo siguiente: "la organización de las masas obreras en Comités de Defensa (…) para desechar los afanes golpistas de la reacción derechista, la CIA y el barrientismo desplazado". Luego se añadió:

> Los trabajadores no podemos contemplar impasibles los acontecimientos que se suscitan en el país. El panorama político nacional está cargado de nubes, de tormentas, amenazando con cerrar la "apertura democrática" (Presencia, 4 de julio de 1970).

Ovando, que ya era visto con malos ojos por el sector dominante, también perdió la confianza de los sectores obreros y populares. Además, otras causas contribuyeron al deterioro de su imagen. Una de estas fue la acusación de estar comprometido en las muertes de los esposos Alexander y del abogado Jaime Otero, ocurridas durante la ola de atentados terroristas y la toma de la UMSA por un grupo de falangistas.

Finalmente, la crisis de legitimidad del Gobierno de Ovando terminó de estallar con el brutal asesinato de los guerrilleros de Teoponte. Paradójicamente, la existencia de la guerrilla fue el mejor pretexto de facción derechista del Ejército para acusarlo de debilidad. Ni siquiera la expulsión enérgica de varios sacerdotes tercermundistas –José Prats, Pedro Negre, José Aguiló, Mauricio Lefebre y Aníbal Guzmán–, a quienes acusó de ser los autores intelectuales de la guerrilla, bastó para sanear su imagen en aquella facción. Por su parte, los universitarios respondieron al apresamiento de los sacerdotes con combativas movilizaciones y graves enfrentamientos con las fuerzas del orden en Sucre, Cochabamba, Oruro y La Paz. Las confrontaciones dejaron un saldo desconocido de muertos y heridos. Mientras tanto, la propaganda golpista se incrementaba constantemente, bajo el argumento de que se estaba viviendo en "plena anarquía".

Por un lado, la COB calificó de dictatoriales las medidas del Gobierno y señaló que "si no se corrigen las cosas será inevitable la insurrección popular, como única alternativa histórica de salvación del país" (Presencia, 21 de septiembre de 1970). Del otro lado, las Fuerzas Armadas presionaban a Ovando para detener la agitación o renunciar. Cuando las manifestaciones de la COB,

la CUB, la FES, los estudiantes de la Normal Superior, la FSTMB y las de otros sectores estallaron casi simultáneamente en todo el país, los militares en retiro plantearon el relevo de Ovando. El 26 de septiembre, luego de una reunión del Alto Mando con el Presidente, se decidió ratificarlo. Sin embargo, esto se hizo a condición de que reestructure el Gabinete Ministerial, defina una política "esencialmente nacionalista" y aleje a "todos los elementos de tendencia marxista, que actualmente ocupan altos cargos en reparticiones estatales" (Presencia, 27 de septiembre de 1970).

El 28 de septiembre, cinco partidos renunciaron a sus siglas políticas (PRA, PIR, MPC, ANR y PRB) para conformar la Unión Popular Nacionalista, que brindó respaldo civil a Ovando en ese momento de crisis. A pesar de este intento, a esas alturas el golpe de Estado ya era algo inevitable, y finalmente estalló el 5 de octubre. En un primer momento se organizó un triunvirato conformado por el General Efraín Guachalla, el Contralmirante Alberto Albarracín y el General de Brigada Aérea Fernando Sattori. Pero al día siguiente, el General Rogelio Miranda –principal propulsor del golpe– asumió la Presidencia y anunció la constitucionalización del país para 1972.

La COB repudió inmediatamente el golpe y se declaró en estado de emergencia. Sin embargo, aclaró que esta decisión en ningún momento implicaba apoyo al Gobierno derechista de Ovando. El 6 de octubre, bajo la iniciativa de Lechín y con la participación de varios partidos políticos –MNR, PRIN, POR, PDCR, PCB, FARO– y del Grupo Revolucionario Espartaco, se organizó el Comando Político de la COB, que decidió tomar acciones para conjurar el golpe.

El 7 de octubre se decretó la huelga general indefinida, a partir de las 0 horas. Esta huelga incluía la "ocupación de fábricas, talleres y lugares de trabajo". Luego, ante el anuncio de que los golpistas eran combatidos por fuerzas rebeldes al interior del Ejército comandadas por Juan José Torres, varios grupos de civiles y obreros salieron a las calles a brindar su apoyo. Se produjo un enfrentamiento armado entre la población y la II División del Ejército que duró unas cinco horas, provocó la muerte de 7 personas y dejó 50 heridos. Tal como lo relata Jorge Gallardo en su libro testimonial De Torres a Banzer (1972/1991), la contundencia de la movilización popular finalmente obligó a los golpistas a deponer su actitud "para lograr unidad en las Fuerzas Armadas".

Recuadro 33

### Aspectos centrales del "Mandato Obrero de Participación en el Gobierno del General Torres"

1. Reconocimiento del Comando Político de la clase trabajadora, la Universidad, los partidos políticos populares y el pueblo, en la condición de Parlamento Obrero y Popular.
2. Expulsión del país de los grupos militares y civiles fascistas, así como de las misiones y agencias imperialistas.
3. Amnistía general e irrestricta.
4. Inmediata reposición salarial de los mineros y mejoramiento del nivel de vida de todos los sectores laborales.
5. Reversión al Estado de la mina Matilde y de las colas y desmontes.
6. Derogación del Decreto de indemnización a la Gulf.
7. Reposición del control obrero con derecho a veto, ampliándolo a todas las empresas del sector público y establecimiento del control obrero en las empresas privadas.
8. Vigencia de las milicias obreras y populares para resguardar, junto con las Fuerzas Armadas patriotas, los derechos e intereses de la Nación.
9. Plenas garantías a la libertad sindical irrestricta.
12. Respeto a la Autonomía Universitaria y participación de la Universidad en los planes nacionales, departamentales y municipales.
13. Atención preferente a la educación fiscal, con vistas a la organización de la Escuela Única.
14. Profundización de la Reforma Agraria, a través del fortalecimiento del sector de las comunidades y las cooperativas.
18. Política internacional independiente y relaciones con países socialistas que aún faltan.
20. Atención prioritaria al pliego de 26 puntos de la COB conforme a la resolución del IV Congreso Nacional.

La participación obrera y popular en el derrocamiento de los golpistas de derecha volvió a demostrar el ascenso político de estos sectores y la recuperación de su capacidad de movilización. Sin embargo, también marcó el límite de sus acciones, pues se repitió la coyuntura pasada en la que no fueron ellos quienes ascendieron directamente al poder.

De todos modos, cuando aún se encontraba en la base aérea de El Alto, Torres declaró su "decisión indeclinable de llegar a conformar un Gobierno de obreros, militares y universitarios", como un reconocimiento a su papel. Ya como Presidente de la República, Torres se reunió con los líderes del Comando Político de la COB para ofrecer oficialmente a esa organización y a los universitarios y campesinos el 50% de participación en el Gobierno. Tras varias reuniones realizadas por el Comando Político de la COB para analizar la propuesta, se decidió condicionar su presencia en el gabinete a la aprobación de radicales propuestas.

En respuesta a la radicalidad de las exigencias, importantes sectores del Ejército amenazaron con dejar de apoyar a Torres si este las aceptaba; lo mismo si acataba el pedido del Comando Político de la COB de aumentar al 51% su participación. Por otra parte, la actitud de ciertas corrientes políticas –como la del POR– fue de oposición al cogobierno, por considerarlo un colaboracionismo con los militares. La presencia de tantas posturas e intereses opuestos llevó al inmediato hundimiento de la posibilidad de un cogobierno. El Comando Político de la COB señaló que la negativa a cogobernar no significaba un rompimiento con la facción "antifascista" de la Fuerzas Armadas. Sin embargo, y a pesar de todas las coincidencias entre la postura de Torres y la del movimiento obrero, pronto la COB y el Gobierno comenzaron a desarrollar propuestas políticas paralelas.

El 1 de enero de 1971, Torres anunció que se convocaría a elecciones, y que una nueva constitución sería aprobada por el pueblo mediante un referéndum. A través de un documento público, el Presidente en ejercicio planteó lo siguiente:

> …sustituir la democracia aparente, formal y simulada con la democracia real y efectiva, en la que el pueblo boliviano, con sus más amplios sectores de trabajadores, se integre decididamente al Estado, ejercitando constantemente sus derechos políticos (Presencia, 1 de enero de 1971).

Luego agregó que la nueva Constitución debía permitir "una auténtica participación del pueblo" y que el nuevo Estatuto Electoral debía basarse en:

> …la importancia y función política de agrupaciones e instituciones realmente populares, alimentadas por el verdadero 'demos' de trabajadores, campesinos y clase media. (…) [Todo ello] en función de un nacionalismo revolucionario plenamente identificado con las mayorías bolivianas (Ibíd.).

Los militares de derecha, descontentos con el curso que tomaban las cosas, ensayaron un golpe de Estado el 11 de enero de 1971. Se amotinaron en el Cuartel General de Miraflores, y desde allí pidieron la renuncia del Presidente. Torres instó a la población a "salir a las calles en defensa de las conquistas revolucionarias en la lucha contra las fuerzas fascistas hasta la victoria final". La masiva manifestación popular y la falta de apoyo de otras guarniciones impidieron que el movimiento rebelde prospere. 16 oficiales fueron dados de baja de las Fuerzas Armadas, entre ellos los coroneles Hugo Banzer, Edmundo Valencia y Mario Adett Zamora, el Teniente Coronel Mariano Nagashiro y los mayores Humberto Cayoja y Jorge Echazú.

Inmediatamente después de que el intento de golpe fuera frustrado, la COB propuso la profundización del proceso revolucionario, el cumplimiento fiel del programa del Comando Político y la entregada de armas. Con estas medidas, la central matriz del movimiento obrero buscaba liquidar el poder económico y político de la burguesía agroindustrial cruceña, comprometida con el golpe, depurar las filas de las Fuerzas Armadas y desahuciar definitivamente el Pacto Militar-Campesino. En todo caso, su medida más importante fue la determinación de instaurar la Asamblea Popular, que tendría "facultades de fiscalización del Gobierno nacional y de iniciativa en materia legislativa". Una inmensa manifestación minera y popular, que pidió que se defina a Bolivia como país socialista, dejó a Torres sin más opción que señalar que reconocería el funcionamiento de la Asamblea Popular.

La coyuntura social y política que se vivió durante el gobierno de Ovando hizo que varios

sectores de la población boliviana se inclinaran por una postura idealista y una efervescencia revolucionaria que, ya durante el mandato de Torres, se canalizaría de diferentes formas. Por ejemplo, gran parte de la juventud de clase media expresó su identificación con los pobres e inició un proceso de revalorización de la cultura popular e indígena. Los festivales de música de protesta, de poesía revolucionaria y los actos de homenaje al Che Guevara abundaban. Los conjuntos folclóricos como Los Jairas rescataban y difundían por primera vez a niveles comerciales –incluso internacionales– la música de origen indígena, alcanzando gran aceptación. En las ciudades se puso de moda el uso de las chompas de alpaca y otras prendas de vestir que, en el pasado, solamente habían identificado a la población campesina.

Diversos sectores de la población asumieron un militante antiimperialismo. En una clara muestra de esta postura, los universitarios tomaron el Centro Boliviano Americano, bajo el argumento de que allí –donde se impartían clases de inglés– se camuflaban miembros de la CIA. Por su parte, distintas entidades cívicas y religiosas protestaron hasta conseguir que Torres expulse a los Cuerpos de Paz, presentes en Bolivia desde 1962. Para ello argumentaron que los Cuerpos de Paz se estaban entrometiendo en asuntos políticos internos y ejecutando el plan Mac Namara sobre el control de la natalidad. También fue expulsado el Centro de Transmisiones Estratégicas, ubicado en El Alto, al que solamente tenían acceso los técnicos y dependientes de la embajada norteamericana (Gallardo, 1972/1991:105). En sí, siempre que se realizaban marchas se aprovechaba para lanzar consignas antiimperialistas frente a las dependencias de los marines, que se ubicaban en el centro de la ciudad en La Paz.

Por su parte, los universitarios transformaron las Casas Superiores de Estudio en centros de difusión y debate de la ideología marxista en todas sus derivaciones. También coparon las organizaciones estudiantiles y se relacionaron ampliamente con los sectores obreros y populares, a cuya lucha pretendieron secundar de diferentes formas. Algo similar comenzó a ocurrir entre jóvenes que cursaban la secundaria –principalmente en los colegios fiscales–, que pasaron a fortalecer las FES.

La efervescencia revolucionaria se tradujo también en el fortalecimiento de los partidos de izquierda, tanto de los antiguos como de los nuevos. Entre los primeros, los partidos comunistas moscovita y pekinés contaron con una fuerte representatividad en sectores obreros, estudiantiles e incluso campesinos –en este último sector sobre todo para los "chinos". Pero también otros partidos, de posiciones más extremas –como el Ejército de Liberación Nacional– o de reciente creación –como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Socialista (PS)–, cooptaron numerosos militantes.

El ELN reivindicó sus métodos de lucha armada y consideró al Gobierno de Torres como reformista y, en última instancia, representante de la burguesía boliviana. Bajo esta percepción, sus miembros realizaron distintas acciones militares, en su mayoría inofensivas. Por ejemplo, hacían estallar bombas mientras izaban la bandera de su Ejército. Pero, no contentos con eso, en mayo de 1971 radicalizaron sus medidas y realizaron el sonado secuestro del industrial Johnny von Berger, gerente de La Papelera.

Luego de cobrar un rescate de 50 mil dólares para poner en libertad al empresario, el ELN expresó que el monto sería "empleado contra la conspiración reaccionaria" (Presencia, 8 de mayo de 1971). Poco después, el 11 de junio, se le atribuyó la muerte de un militar llamado Zacarías Plaza, conocido en las minas por haber dirigido varias masacres, entre ellas la de la noche de San Juan de 1967. Su cuerpo fue encontrado descuartizado y chamuscado; en su cabeza cercenada estaba la sigla ELN, escrita con un objeto punzocortante. Esta acción, de gran impacto en la opinión pública, puso en alerta a las fuerzas de la derecha.

El 26 de mayo de 1971, varios grupos de izquierda anunciaron su unión en un nuevo partido: el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). Los grupos que lo conformaron fueron el Partido Demócrata Cristiano Revolucionario, el movimiento Espartaco y otros grupos de marxistas independientes. Entre sus principales fundadores se encontraban Jaime Paz Zamora (marxista independiente), Jorge Ríos Dalenz (PDCR), Pablo Ramos, Antonio Aranibar y Adalberto Kuajara (Espartaco). En el manifiesto de su creación, el MIR señaló que la organización del movimiento respondía al imperativo de hacer "frente a la crisis actual de dirección

revolucionaria". El MIR descartó cualquier tipo de futura participación en gobiernos pequeño burgueses y afirmó que la teoría marxista leninista había "calado hondo en nuestro pueblo".

El MIR planteó la necesidad de:

> ...fusionar la doctrina socialista con el movimiento obrero, superar la ideología nacionalista de la pequeña burguesía y avanzar en la organización político-militar de las masas para alcanzar la revolución socialista y el poder proletario (Presencia, 26 de mayo de 1971).

Con estas declaraciones, el MIR se hizo rápidamente fuerte en los medios universitarios. Pese a que también planteaba la lucha armada, su carácter de movimiento lo diferenció drásticamente del ELN y le permitió contar con una militancia más amplia, aunque también mayoritariamente de clase media urbana.

Por esas mismas fechas –el 1 de mayo– nació el Partido Socialista (PS). En su creación estaban comprometidos varios intelectuales de clase media con cierta trayectoria política: Marcelo Quiroga Santa Cruz, de la Unión de la Nueva Izquierda Revolucionaria (UNIR); Alberto Bailey Gutiérrez, de Acción Popular Boliviana (APB); Guillermo Aponte Burela, de Acción Revolucionaria Obrera (FARO); y Mario Miranda Pacheco, del Frente de Liberación Nacional (FLIN). Así como lo indica su nombre, la posición principal del partido era la lucha por el socialismo. Propugnando esta ideología, el PS se ganó la importante simpatía de algunos sectores de clase media y de organizaciones sindicales.

Así, a mediados de 1971, las condiciones estaban dadas para que el anunció de creación de la Asamblea Popular encuentre eco en los movimientos sociales radicalizados, en los partidos de izquierda tradicionales y en los recientemente creados.

## Cogestión obrera en COMIBOL y funcionamiento de la Asamblea Popular

A pocos días del triunfo popular contra los golpistas de derecha, el 14 de octubre de 1970, la FSTMB anunció que comenzaría a experimentar la cogestión obrera en algunas de las minas nacionalizadas. Torres respondió que iba a estudiar la propuesta para luego emitir una posición oficial al respecto. Sin esperar el aval del Presidente, la FSTMB llevó a cabo acciones de hecho en las minas. Una de sus primeras –y más importantes– acciones fue la intervención de las oficinas de COMIBOL, ubicadas en Oruro. El sindicato de dicha oficina explicó que se había tomado la COMIBOL para "reorganizar la empresa y disminuir los sueldos de la burocracia a niveles racionales". En otras minas, los obreros procedieron a clausurar la policía minera "por sus antecedentes de organismo represivo y por significar cuantiosos gastos". En algunas de ellas se nombraron autoridades locales provisorias.

Las acciones de hecho se detuvieron el 18 de noviembre de 1970, cuando Torres firmó el Decreto que garantizaba la reposición de los salarios básicos y los precios de contrato de los trabajadores de COMIBOL, que volvieron a los niveles vigentes en mayo de 1965. A fines de ese mes, en una gira por las minas, el Presidente logró convocar multitudinarias manifestaciones en las que los obreros de base, menos determinados por las posiciones político-partidarias, le manifestaron abiertamente su confianza y gratitud. En esas visitas, el Presidente se expresó por medio de discursos radicalizados, al punto que, en Huanuni, anunció que iba a eliminar el fascismo de las Fuerzas Armadas "para que nunca más ignoren el sufrimiento de la clase trabajadora" (Presencia, 28 de noviembre). Un dirigente minero le respondió lo siguiente: "si se desvía nos alzaremos" (Ibíd.).

En los siguientes meses, Torres continuó tomando importantes medidas en el campo de la minería nacionalizada, respondiendo positivamente a los anhelos constantemente manifestados por los trabajadores del subsuelo. El 10 de enero de 1971, el Presidente inauguró la planta fundidora de estaño en Vinto; el 12 de ese mismo mes, las colas y desmontes de Catavi fueron revertidas al Estado; el 1 de mayo, la Mina Matilde fue nacionalizada.

Este tipo de medidas fortalecieron mucho la alianza entre Torres y los mineros. Así, cuando los coroneles Banzer y Valencia protagonizaron ese fallido golpe de Estado, miles de obreros de diferentes centros mineros se trasladaron a la ciudad de La Paz en 95 camiones. Esta fue una clara muestra de cuán dispuestos estaban a defender al Gobierno y a sus propios intereses con su movilización. En una demostración de fuerza, muchos de ellos marcharon armados, hicieron disparos al aire, reventaron dinamitas y,

desfilando ordenadamente con el puño izquierdo en alto, lograron que la población los aplauda en reconocimiento a su combatividad.

Cuando llegaron a la Plaza Murillo, vitorearon al socialismo y lanzaron consignas como "los obreros al poder" y "queremos armas", arrancando de Torres –que salió a recibirlos a los balcones del Palacio de Gobierno– la promesa de que iba a entregarlas cuando llegara el momento preciso. Sin embargo, Torres no quiso definir a su Gobierno como socialista. En cambio, planteó que debía producirse una alianza entre obreros, campesinos, Fuerzas Armadas e intelectuales progresistas. Con estas palabras hizo notoria una vez más su orientación nacionalista y populista (Presencia, 12 de enero de 1971).

La propuesta final de cogestión obrera, planteada por el Gobierno a través de un Decreto oficial, no satisfizo plenamente a los obreros mineros. Según esta propuesta, el directorio de COMIBOL sería conformado por tres delegados del Gobierno, tres del sector minero y uno del Ministerio de Minería, lo que daba supremacía a la representación estatal. La FSTMB señaló que, desde su perspectiva, la participación de los mineros en la empresa estatal era "el inicio del desarrollo socialista de la producción" (Presencia, 3 de abril de 1971). Poco después, la FSTMB determinó elaborar una contrapropuesta, que incluía lo siguiente: "la completa responsabilidad de los trabajadores de los problemas de COMIBOL" y una coparticipación capaz de "superar los errores y los vicios del control obrero" y de convertirse en una autogestión (Presencia, 23 de mayo de 1970). A partir de esta postulación, las diferencias de posiciones entre la COMIBOL y de la FSTMB –ratificada unos días después por la Asamblea Popular– se convirtieron en insalvables.

Mientras la FSTMB purgaba por la coparticipación obrera, los otros sectores sindicalizados de la COB reafirmaron su adscripción a la "tesis socialista" una y otra vez, en los diferentes eventos desarrollados a lo largo de 1970. Pero en algunos casos se fue aún más lejos. Este es el caso del congreso de la Central Obrera Departamental de La Paz, llevado a cabo en noviembre de 1970, donde se proclamó la lucha armada como única vía para llegar al socialismo. En aquel congreso se declaró la independencia de la clase obrera respecto al Gobierno "burgués y reformista" y se hizo énfasis en la necesidad de construir una Vanguardia Política Revolucionaria y un Frente Popular Revolucionario Antiimperialista que pudieran tomar en sus manos la revolución social (Presencia, 16 de noviembre de 1970).

En marzo de 1971, durante su II Congreso, los trabajadores de la prensa enmendaron la aseveración de la tesis del congreso anterior, cuando le atribuyeron a la prensa el rol de "líderes espirituales" de los obreros. La enmienda consistía en delegar a los obreros la dirección total de la revolución proletaria. Además, considerando que las masas populares estaban próximas a la victoria final, dijeron que la prensa debía participar activamente en esa lucha.

Frente a esta avalancha de radicalización, el presidente Torres intentó mantener vigente el Pacto Militar-Campesino, que seguía siendo desconocido en varios puntos del país. En el IV Congreso Campesino, realizado en los primeros días de agosto de 1971, los seguidores del Presidente consiguieron que se deje en suspenso una decisión final al respecto, bajo el argumento de que Torres era un militar involucrado con los intereses populares. Pero más allá de eso, el IV Congreso fue una muestra más de que estaban ocurriendo transformaciones importantes en el sector campesino. La tesis votada allí propugnaba la unidad de todos los sectores revolucionarios, el acercamiento con el movimiento obrero y el seguimiento de una línea socialista "netamente boliviana" y "a la manera de Manco Capac" (Presencia, 9 de agosto de 1971).

Las contradicciones que surgieron entre el Gobierno de Torres y el Comando Político de la COB terminaron por distanciar a las dos partes; la posibilidad de llegar a acuerdos que satisfagan a ambas partes había quedado lejos. El país ingresó en un periodo de auténtica crisis política que se agudizó bastante más con la puesta en marcha de la Asamblea Popular.

El primer paso para su constitución fue la definición de los sectores que la conformarían. Como se podrá observar en el recuadro que viene a continuación, la base de sectores participantes era muy amplia; de hecho, abarcaba todo el abanico social y político de grupos que en ese momento se identificaban con la necesidad de transformar profundamente a la sociedad boliviana. Sin embargo, aquí es importante señalar que, como veremos más adelante, hubo actitudes excluyentes y obreristas en torno a la representación campesina.

Recuadro 34

### Sectores sociales y políticos convocados a conformar la Asamblea Popular

- FSTMB,
- Confederación de Fabriles,
- Confederación de Ferroviarios,
- Confederación de Constructores,
- Confederación de Harineros,
- Federación de Gráficos,
- Confederación de Choferes,
- Federación de Petroleros de clase media,
- Confederación de Bancarios,
- Federación de Maestros Urbanos,
- Federación de Maestros Rurales,
- Federación de la Prensa,
- Confederación de Telecomunicaciones,
- Federación de Sanitarios,
- Confederación de Universitarios,
- Federación de Trabajadores en Universidades,
- Confederación de Gremiales,
- Confederación de Trabajadores Particulares,
- Confederación de Trabajadores del Estado,
- Federación de Gastronómicos,
- Federación de Radialistas,
- Federación de Artistas,
- Federación de Trabajadores Municipales,
- Federación de Comerciantes,
- Confederación de Profesionales,
- Confederación Independiente Campesina,
- Federación de Siringueros.

Los partidos políticos aceptados para formar parte de ella fueron el PRIN, PCB, PCML, POR, PDCR, Espartaco y el MNR. Un poco más adelante, las fracciones “de derecha” de este último partido fueron excluidas.

Un primer documento de la Asamblea Popular, emitido en enero de 1971, se señaló que esta no podía ser “una variante del parlamento burgués, tanto en su contenido como en sus funciones”. En cambio, debía “constituirse como órgano del Comando Político de los Trabajadores y del Pueblo, surgido por decisión popular en las jornadas del 7 de octubre de 1970”. Por otra parte, tenía que “tomar en sus manos la solución de los problemas nacionales populares y obreros” (Presencia, 22 de enero de 1971).

En los estatutos para su funcionamiento, aprobados el 21 de abril de 1971, se planteó lo siguiente:




Figura 17. Marcha del 1 de mayo de 1971 en la ciudad de Sucre.
Fuente: Periódico Presencia.

Recuadro 35

### Aspectos centrales de los estatutos de la Asamblea Popular

- La A.P. se constituye como dirección y Centro Unificador del movimiento antiimperialista, y su fin fundamental consiste en lograr la liberación nacional de la opresión imperialista y la instauración del socialismo.
- La A.P. tomará en cuenta para casi la totalidad de sus decisiones las recomendaciones y objetivos contenidos en la Tesis Política del IV Congreso de Trabajadores de Bolivia.
- La A.P. reconoce como su dirección política al proletariado y declara que su programa es la tesis del IV Congreso.
- Todas las resoluciones de la A.P. tienen carácter ejecutivo.

Fuente: Presencia, 21 de abril de 1971




Figura 18. Marcha del 1 de mayo de 1971 en la ciudad de La Paz.
Fuente: Periódico Presencia.

Finalmente, en el documento Bases de Constitución de la Asamblea Popular, publicado días antes de su instalación, se lee lo siguiente: "Si [la Asamblea Popular] logra ser un poder real es a través de que expresa la fuerza de las masas y el hecho de que dichas masas constituyan la dualidad de poder" (Presencia, 20 de junio de 1971).

Por un lado, el Comando Político de la COB y los sectores laborales reafirmaban la idea de convertir a la Asamblea Popular en un instrumento para la posterior toma del poder por el proletariado y el pueblo boliviano. Pero del otro lado crecía la conspiración de militares y partidos políticos de derecha, apoyados por la Confederación de Empresarios Privados e, incluso, por la embajada norteamericana.

A principios de abril de 1971, cuando se enteró de estos afanes golpistas, Torres tomó como primera medida la detención de una treintena de políticos pertenecientes al MNR y a FSB. Además, ratificó la decisión de su Gobierno de promulgar una nueva Constitución, destinada a "institucionalizar" las conquistas logradas por la Revolución Nacional. Sin embargo, esta Comisión –constituida bajo la dirección de Hugo Poppe– nunca funcionó, y la propuesta del Gobierno de democratizar el país no tuvo ningún asidero. La vía democrática ya no tenía sentido ni para la Asamblea Popular, que quería ejercer un poder dual, ni para los conspiradores, que querían derrocar a Torres.

El 3 de mayo de 1971, la COB anunció formalmente que sus deliberaciones se iniciarían el 22 de junio. Ese mismo día hizo conocer su nueva determinación: los delegados de la clase obrera debían representar indefectiblemente el 60% del total, manteniéndose la misma proporción en sus organismos de dirección y en las asambleas y comités que tuvieran lugar en las capitales de Departamento y en los lugares de trabajo. Con esa posición se pretendió reafirmar la "supremacía obrera" y, en consecuencia, la subordinación de los otros sectores a la dirección e ideología proletarias.

Respecto a los partidos políticos que ingresarían a la Asamblea Popular, se señaló lo siguiente:

> …toda organización que pretenda incorporarse a la Asamblea demostrará que es popular,

> revolucionaria, que está de acuerdo con el programa de la COB y que posee estructura nacional (Presencia, 21 de abril de 1971).

Bajo esas orientaciones, la Asamblea Popular se inauguró el 1 de mayo de 1971, en las instalaciones del Palacio Legislativo. Ese día contó con la presencia de 221 delegados, entre los cuales 132 eran proletarios, 24 eran campesinos, 55 de clase media y 13 de los partidos revolucionarios. Detrás de la testera asomaban carteles con fotografías de líderes políticos mundiales, como Mao Tse Tung, Che Guevara y Lenin. Durante todo el acto, los asistentes dieron vivas a la clase obrera y a la revolución socialista con los puños izquierdos en alto. A su conclusión se produjo una multitudinaria y combativa marcha por el centro de la ciudad de La Paz. El poder obrero parecía incontenible.

Por razones difíciles de entender, la Asamblea Popular atrasó sus primeras deliberaciones, que debían tener un primer periodo de 60 días hábiles, hasta el 22 de junio. Para la primera reunión se plantearon los siguientes temas de discusión: aprobación de estatutos, elección de la mesa directiva, cooperativización de El Diario, desburocratización de COMIBOL, YPFB, ENFE y CBF, integración de toda la minería en una sola institución, aclaración de los asesinatos perpetrados contra dirigentes obreros y otros. La cantidad de asuntos que se pretendía tratar muestra la gran dispersión de temáticas, expectativas e intereses que existía al interior de la Asamblea Popular. Sin embargo, en esta primera sesión, sus miembros se abocaron únicamente a analizar la crítica situación del país, que enfrentaba una inminente amenaza de un golpe de Estado. Al respecto se determinó que la respuesta ante un golpe sería la huelga general y la ocupación inmediata de los lugares de trabajo.

La elección del Presidium tomó más tiempo del esperado. Este fue uno de los puntos que provocó mayor debate, pues los representantes campesinos demandaron ocupar la Segunda Vicepresidencia, lo que finalmente fue aprobado. El 26 de junio, luego de dos días de negociaciones, el Presidium quedó conformado de la siguiente manera:

Recuadro 36

### Presidium de la Asamblea Popular

- Secretario Ejecutivo: Juan Lechín (minero),
- Primer Vicepresidente: Víctor López (minero),
- Segundo Vicepresidente: Casiano Amurrio (campesino),
- Secretarios: Oscar Eid (CUB), Alfredo Llanos (petrolero), Miguel Verástegui (constructor), Félix Callapa (harinero) y Guido Quezada (maestro).



Figura 19. Delegados obreros de la FSTMB a la Asamblea Popular, 6 de agosto 1971.

Fuente: Periódico Presencia.

Del segundo día es importante resaltar la discusión acerca del carácter de la participación de los partidos políticos en la Asamblea Popular. El debate surgió a raíz de la solicitud de solidaridad con UCAPO –que, como vimos antes, estaba impulsando la toma de tierras en Santa Cruz–, planteada por la Central Obrera Departamental de Tarija. En esa oportunidad, los mineros defendieron a rajatabla la posición de que los representantes políticos se subordinen a la clase obrera. De todos modos, aunque se limitó la participación de los delegados de los partidos políticos, estos influyeron en las decisiones a través de sus militantes, que también actuaban como representantes de la clase obrera.

La amenaza de un golpe de Estado por parte del sector de derecha del Ejército siguió en el centro de los debates. Para hacer frente a esta amenaza, la Asamblea Popular ratificó la determinación del 20 de junio, emanada del Comité Ejecutivo de la COB, que disponía la reorganización de las milicias armadas de la clase trabajadora "ante los empeños de la derecha de desencadenar una guerra civil en Bolivia". Se aprobó que la Secretaría de Milicias organice los grupos armados obrero-campesinos a escala nacional y se preocupe del armamento de los cuadros obreros.

Luego de algunos días más de funcionamiento en plenaria, la Asamblea Popular se desconcentró para dar lugar al trabajo de las distintas comisiones que se organizaron. Paralelamente, se constituyeron las Asambleas Populares en los distintos departamentos del país. La última en crearse fue la de Potosí, que nació el mismo día en el que estalló el movimiento subversivo militar en Santa Cruz, durante el mes de agosto de 1971.

El 16 de julio, ante el "recrudecimiento de las tensiones provocadas artificialmente por la derecha y el fascismo", la directiva de la Asamblea Popular se reunió para decretar el estado de emergencia. La oposición estaba usando como pretexto los avances de la Comisión de investigación sobre crímenes al pueblo, que debía someter sus resultados a los "tribunales populares", para derrocar al Gobierno de Torres y aplastar a la Asamblea Popular.

Por su parte, Torres manifestó públicamente que el origen común de su Gobierno y de la Asamblea Popular debía permitir que se enfrente conjuntamente a la conspiración de derecha. Sin embargo, su reunión con la COB para debatir las medidas a tomar en caso de producirse un golpe se aplazó hasta el 13 de agosto.

Según Jorge Gallardo (1972/1991), quien entonces ocupaba el cargo de Ministro del Interior, el Presidente no actuó con la debida decisión cuando los obreros le pidieron que les entregue las armas para la defensa popular contra el inminente golpe. En su texto, Gallardo también se refiere a la forma en que se desaprovechó –con lamentables consecuencias– el hecho que desde su despacho ya se habían realizado varias maniobras para contar con un importante número de armas cortas y fusiles. En todo caso, la caída del Gobierno y el aplastamiento de la Asamblea Popular por parte del Ejército no deben ser atribuidos únicamente al indeciso e ingenuo comportamiento del presidente Torres.

## Golpe de Estado y resistencia popular en agosto de 1971

Aparentemente, el pretexto final para que se produzca el golpe militar fue la aparición de un documento público emitido bajo la firma de "clases y subclases" del Ejército, que propugnó una revolución total en la estructura de las Fuerzas Armadas. Este fue inmediatamente rechazado por la jerarquía militar, así como un segundo documento firmado por suboficiales autodenominados "Vanguardia del Pueblo", publicado el 14 de agosto. En él se planteaba "instaurar la justicia social frente a las mayorías humilladas de las que somos parte".

Otro elemento importante en la determinación de los conspiradores fue que, muy pocos días antes del golpe, el Gobierno detuvo a varios políticos y militares identificados con los afanes subversivos, entre ellos al Coronel Hugo Banzer Suárez. Antes de ser descabezados totalmente, los que aún se hallaban en libertad, iniciaron sus acciones subversivas en la ciudad de Santa Cruz. Corría el 19 de agosto de 1971.

En la ciudad oriental, civiles encabezados por militantes del MNR y FSB convocaron a una manifestación que concluyó con la toma de la Prefectura. A las ocho de la noche de ese día, el Regimiento 12 de Infantería Ranger, acantonado en Montero bajo el mando del Coronel Andrés Selich, llegó a Santa Cruz, donde su comandante exigió la renuncia del presidente Torres. Hubo

una fuerte resistencia de parte de los obreros y los demás sectores populares, así como de los universitarios. La superioridad en armas de los golpistas determinó la caída de la Central Obrera Departamental y, más adelante, de la Universidad, donde los estudiantes resistieron durante tres horas hasta que fueron cercados y tomados presos.

Al día siguiente, los golpistas, organizados en el Frente Popular Nacionalista (FPN), celebraron su triunfo dando encendidos discursos desde el balcón de la Prefectura. Pero a las cuatro de la tarde estalló una bomba que produjo varios heridos. Selich decidió tomar inmediata "venganza". Mientras reinaba el desconcierto en la plaza 14 de Septiembre, el Coronel ordenó el inmediato fusilamiento de las personas capturadas el día anterior en la Universidad. A consecuencia de esta brutal decisión murieron 24 personas, salvándose milagrosamente ocho universitarios. Los heridos que estaban en el Hospital San Juan de Dios fueron rematados en sus propias camas.

Recuadro 37

### Testimonio de un sobreviviente de la masacre de Santa Cruz

"Al principio éramos sólo 32 presos, los que habíamos defendido el edificio de la universidad. Luego alcanzamos a aproximadamente 200, repartidos en tres aulas, en el último piso del edificio. La guardia estaba a cargo de civiles armados (…). Desde el principio fuimos amenazados con fusilamiento, particularmente cuando nos negábamos a declarar que "en este Departamento y en la ciudad de Santa Cruz se encontraban cubanos" (…). Selich ordenó (después del atentado en la plaza) eliminar a todos los detenidos y dijo: "No quiero presos ni heridos". Se inició el asalto del edificio universitario, haciendo volar las puertas con granadas de mano (…). Lo único que hicimos fue tirarnos al suelo.

Fuente: COB. Violación de los Derechos Humanos en Bolivia, 1976, págs. 126-127.

En la misma ciudad de Santa Cruz se constituyó una Junta de Gobierno, conformada por el General Jaime Florentino Mendieta y los coroneles Hugo Banzer Suárez y Andrés Selich. En un primer decreto, designaron como Ministros de Estado a Mario Gutiérrez (FSB) y Ciro Humboldt (MNR), anunciando que Banzer se integraría a la Junta cuando pueda estar presente. Como paso siguiente, las guarniciones de Beni y Pando se plegaron al movimiento.

En las ciudades de Cochabamba, Oruro y Potosí, las Asambleas Populares locales y las organizaciones obreras y estudiantiles realizaron movilizaciones de repudio al golpe. En La Paz la concentración fue multitudinaria y concluyó en la Plaza Murillo. Durante la manifestación, Oscar Eid –dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB)– llamó a la lucha a muerte contra el imperialismo norteamericano. En todo el país se decretó la huelga general indefinida.

Juan José Torres pidió el apoyo de la población a través de un Mensaje a la Nación en el que afirmó: "repetiremos junto a las mayorías populares las acciones contra el fascismo y aplastaremos sus intentos revanchistas". Convocó al pueblo para que, "en demostración de su invencible poderío, se movilice junto al Gobierno en defensa de la Patria", y decretó lo siguiente:

> …estado de emergencia revolucionaria en todo el país contra la derecha reaccionaria y antinacional, (…) que está en contra del orden social que representa el Poder Revolucionario erigido en base a la clase obrera, campesinos, clase media verazmente revolucionaria y las Fuerzas Armadas (Presencia, 20 de agosto de 1971).

Ese mismo día, la Asamblea Popular propuso la "movilización de piquetes y escuadrones de seguridad de las milicias armadas de la COB en cada uno de los sindicatos y a escala nacional". Por su parte, las Asambleas Populares regionales y las CODES debían realizar las siguientes acciones:

> …[preparar] minuciosamente los planes militares regionales para este periodo de guerra civil, con el fin de responder adecuadamente a las necesidades de la lucha revolucionaria, el aplastamiento de la reacción interna y la expulsión definitiva del imperialismo del territorio nacional (Ibíd.).

A su vez, los campesinos, dirigidos por Jenaro Flores, decretaron la "movilización del campesinado para aplastar definitivamente la reacción fascista y antinacional" y resolvieron implementar bloqueos de caminos.

> [Se debía] buscar la alianza de los obreros y de las Fuerzas Armadas, principalmente sus clases y suboficiales, para de manera conjunta tomar medidas radicales contra los que participaron y alentaron la contrarrevolución (Ibíd.).

El grupo de suboficiales y clases de las Fuerzas Armadas que había emitido el documento citado se reunió con Torres para brindarle su apoyo (Ibíd.).

El segundo Departamento en caer bajo control de los golpistas fue Potosí, donde el Regimiento Pérez venció la resistencia popular dirigida por los mineros de la Empresa Unificada. En Tarija, un comando civil-militar conformado por dirigentes falangistas y movimientistas tomó la ciudad y apresó a varios miembros de la Central Obrera Departamental y la FUL.

El 21 de agosto, ante la crítica situación, la Asamblea Popular –presidida por Lechín– se reunió en el Palacio Legislativo desde las diez de la mañana. A las 12:30 se determinó la concentración de las fuerzas populares en la plazoleta del estadio Hernando Siles, lugar desde donde se organizaría la resistencia. Para ese momento contaban con algunas armas, entregadas por el Ministerio de Gobierno la noche anterior (Gallardo, 1971/1991). Sin embargo, la cantidad era totalmente insuficiente como para combatir a los regimientos que, en La Paz, se habían plegado a los sectores golpistas.

Paralelamente, el General Reque Terán, Comandante del Ejército, traicionó la palabra empeñada a Torres y, lejos de defender a su Gobierno, le dio un ultimátum para que se rinda. En cambio, el Mayor Rubén Sánchez, Comandante de los Colorados de Bolivia, se mantuvo leal al Presidente y comandó la planificación del ataque al Estado Mayor de Miraflores, defendido por el Regimiento Castrillo. En este ataque participaron tanto sus subordinados como los grupos de civiles que se habían concentrado en el estadio.

Entre los grupos de civiles destacaron los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) –único grupo con formación militar–, que intentaron dar orden a la tenaz lucha de universitarios, obreros y otros sectores populares. Muchos de ellos se ubicaron en el cerro de Laikaqota de la ciudad de La Paz, desde donde se dominan los barrios de San Jorge, Villa Armonía, Miraflores y otras zonas de la ciudad y desde donde se podía disparar al Cuartel General. Sin embargo, a las 15:30 horas, el Grupo Aéreo de Combate de la Base de El Alto –que anunció que retiraba su apoyo a Torres– comenzó a ametrallarlos desde el aire.

Los primeros muertos de la sangrienta jornada cayeron en los tres focos de enfrentamientos: en el ataque fallido al Cuartel de Miraflores, en el cerro Laikaqota y en las inmediaciones del Ministerio de Defensa, ubicado en la Plaza Abaroa. Allí llegaron varios jóvenes que, portando rifles de salón, tenían como objetivo tomarlo. Pese a la inferioridad de las fuerzas que resistían al golpe, los civiles siguieron combatiendo de manera dispersa en los barrios de San Pedro Alto, Sopocachi, Agua de la Vida, el Calvario y otras zonas periféricas de la ciudad de La Paz.

A las cinco de la tarde se conoció que el regimiento motorizado de Viacha, hasta hace poco leal al Gobierno, se movilizaba a La Paz en apoyo al golpe. A las 18:15, dos Mustang y dos AT-6 iniciaron la última operación de ametrallamiento sobre los focos que aún luchaban en Laikaqota y Villa Armonía; sus varias incursiones surtieron efecto.

Conocida la paulatina retirada de los civiles de sus puestos estratégicos, Torres, que permanecía en el Palacio de Gobierno acompañado de los Ministros y dirigentes sindicales que aún eran fieles al proceso, emitió un dramático mensaje por radio:

> Pueblo revolucionario de Bolivia: Apoya a los obreros, universitarios, soldados y campesinos que combaten denodadamente contra el golpe falanjo-gorila-movimientista. La victoria será más fácilmente nuestra si el pueblo participa activamente de las acciones. La victoria revolucionaria está próxima y yo, como Presidente de los bolivianos, me siento orgulloso de la valentía y la decisión de soldados revolucionarios, universitarios y trabajadores. Para ellos, a nombre de la Patria, mi gratitud. Adelante pueblo heroico, invencible e inmortal. Viva Bolivia (Presencia, 22 de agosto de 1971).

A las nueve de la noche la resistencia ya había sido derrotada en toda la ciudad. Una hora después, Torres abandonó el Palacio de Gobierno. Radio Illimani, su voz oficial, se despidió así del éter: "Los tanques ingresan ya a la Plaza Murillo. Damos el último adiós a los revolucionarios y nos

sumamos a ellos para seguir la resistencia en las calles". Sonó un último huayño y, finalmente, la emisora calló (Ibíd.).

Al día siguiente, domingo 22 de agosto, mientras muchas familias paceñas lloraban a sus muertos, autos y camionetas cargadas con falangistas y movimientistas rompían el silencio con sus gritos de victoria. Pero aún faltaba acabar con el último foco de resistencia: la UMSA. Allí estaban atrincherados desde la noche anterior cientos de jóvenes que habían decidido defender ese espacio hasta las últimas consecuencias. El Regimiento Andino había rodeado la zona con tanques, y los aviones de la FAB lanzaron ráfagas de ametralladoras. Eso sí, no se atrevieron a entrar en sus predios, ya que esto implicaba violar la autonomía universitaria.

Esa mañana, mientras muchos paceños se dirigían o retornaban de la misa en diferentes barrios, en la Universidad se vivían horas dramáticas. A las diez de la mañana llegó el Coronel Joaquín Zenteno, quien fue recibido por una fuerte rechifla lanzada por grupos de universitarios que habían llegado desde tempranas horas para solidarizarse con los que se encontraban adentro. En una maniobra distractiva, Zenteno ordenó el retiro de las tropas y de los carros blindados, prometiendo garantías. Los universitarios que estaban afuera ingresaron confiados a los predios de la UMSA. Pocos minutos después, las tropas retornaron a sus anteriores puestos. Se produjo así una encerrona que dejó rodeados por fuerzas militares a cientos de jóvenes.

Los primeros disparos se lanzaron al aire. Luego, los aviones Mustang descendieron en picada y ametrallaron los techos del edificio. Desde los pisos superiores de la Universidad se respondió con tiros hacia los aviones. Tres francotiradores, presumiblemente del ELN, hicieron lo propio desde edificios cercanos. Los carros blindados acribillaron la fachada de la UMSA y se tiró una bazooka al octavo piso. Las municiones de los pocos universitarios que tenían armas se acabaron. Tuvieron que rendirse.

Los aproximadamente 200 estudiantes, de los cuáles veinte eran mujeres, salieron del edificio con las manos en alto o detrás de la nuca. Fueron conducidos en fila hasta el Ministerio del Interior, distante a unas tres cuadras del lugar. Muchos fueron golpeados con armas y golpes de puño y fueron obligados a gritar "¡Patria o muerte!". Sólo una quinta parte recobró la libertad en las siguientes horas, de los cuales algunos después salieron al exilio; otros pasarían meses o años detenidos. La universidad fue cerrada por más de un año. Durante la ocupación militar, miles de libros de la Biblioteca Central fueron quemados.

Estos no eran más que los primeros síntomas de la violencia que el régimen banzerista imprimiría durante sus siete años de gobierno. Según registros de la Cruz Roja, en las dos jornadas de represión a quienes defendieron al Gobierno de Torres y –sobre todo– a la Asamblea Popular murieron 98 personas y 560 resultaron heridas. Entre ellos había 36 universitarios y estudiantes de secundaria, 3 mineros, 1 abogado, 11 obreros, 14 empleados, 17 artesanos, 2 amas de casa, 1 ex combatiente de la Guerra del Chaco, 3 conscriptos y 2 soldados (Presencia, 26 de agosto de 1971).

El derrocamiento del Gobierno de Torres y la caída de la Asamblea Popular significaron una derrota militar y política de vastos alcances, tanto para el movimiento obrero y popular como para la izquierda boliviana. El dramático episodio significó una ruptura profunda con la autopercepción de que el pueblo podía derrotar a sus enemigos cuando salía a las calles en actitud insurreccional; es decir, con los imaginarios creados por el 52. Pero también fue un duro golpe a la utopía socialista, que nunca más alcanzaría el consenso de esos años. Por lo demás, la memoria histórica sería ingrata con una generación que sufrió muchos años las consecuencias de su lucha por cambiar la sociedad boliviana.

## Del septenio banzerista a la implantación de la democracia

> A ustedes, hermanos campesinos, voy a darles la consigna como líder: el primer agitador que vaya al campo, yo les autorizo, me responsabilizo, pueden matarlo. Si no, me lo traen aquí para que se entienda conmigo personalmente (Hugo Banzer Suárez, enero de 1974).

> Nosotros los campesinos quechuas y aimaras (…) nos sentimos económicamente explotados y cultural y políticamente oprimidos. (…) Bolivia ha vivido y está viviendo terribles frustraciones. Una de ellas, quizá la mayor de todas, es la falta de participación

real de los campesinos quechuas y aimaras en la vida económica, política y social del país (Manifiesto de Tiwanaku, 2 de agosto de 1973).

## El Frente Popular Nacionalista asume el poder con Banzer a la cabeza; se desata la represión contra sus "enemigos"

El Frente Popular Nacionalista (FPN) estaba compuesto por los militares golpistas aglutinados en torno a Hugo Banzer, el MNR –conducido por Víctor Paz Estenssoro– y la Falange Socialista Boliviana (FSB), por aquel entonces un pequeño partido de ultra derecha. Recién el 23 de octubre las Fuerzas Armadas, la FSB y el MNR firmaron un pacto político formal. A principios de marzo de 1972, Banzer decidió asumir la conducción plena del frente, al tiempo que se aprobaban sus estatutos.

Varios meses antes, en agosto de 1971, todos los miembros del FPN mostraron estar de acuerdo con que sea el Coronel Hugo Banzer quien asuma la máxima jefatura del Gobierno, tras la sangrienta victoria alcanzada contra los opositores al golpe. Al asumir la Presidencia, el 23 de agosto, el militar golpista señaló: "Seguiré los pasos de Busch, Villarroel y Barrientos". El 13 de octubre de ese mismo año definió su ideología como de "nacionalismo social, revolucionario y popular", sobre la base de una "concepción cristiana, la dignidad del hombre y el esfuerzo para superar el subdesarrollo del país" (Mensaje a la Nación, Presencia, 13 de octubre de 1971). Más adelante resumió los principios que guiarían la acción de su Gobierno: "Orden, Paz y Trabajo".

El 29 de diciembre de 1971 se produjo la primera crisis de Gabinete, la cual derivó en el llamativo ingreso de Mario Adett Zamora como Ministro del Interior, en reemplazo de Selich. Nueve meses después, en septiembre de 1972, se produjeron otros cambios y el ingreso de cinco nuevos ministros: dos de FSB –Jaime Tapia Alípaz en Educación y Arturo Cronenboldt en Urbanismo y Vivienda–, dos civiles –Carlos Iturralde como Secretario General y Alfredo Arce Carpio como Ministro de Estado– y un militar –Guido Humérez como Ministro de Asuntos Campesinos.

Recuadro 38

### Primer Gabinete de Banzer

- Mario Gutiérrez: Relaciones Exteriores.
- Dr. Raúl Lema: Finanzas.
- Dr. Ciro Humboldt: Trabajo y Asuntos Sindicales.
- Dr. Augusto Mendizábal: Educación.
- Sr. Ambrosio García: Transporte, Industria y Comercio.
- Coronel José Gil Reyes: Asuntos Campesinos y Agricultura.
- Dr. Carlos Valverde: Salud.
- Dr. Carlos Serrate Reich: Minas y Metalurgia. Planificación y Coordinación.
- Arq. Sergio Leigue: Urbanismo y Vivienda. Energía e Hidrocarburos.
- Florentino Mendieta: Defensa.
- Andrés Selich Chop: Ministro del Interior.
- Sr. Hugo Gonzáles Rioja: Informaciones y Deportes.
- Sr. Alfredo Arce Carpio: Ministro Secretario General de la Presidencia (nombrado recién el 28 de agosto).

Para los movimientistas, la alianza con su antiguo archienemigo, la FSB, y el haber optado por apoyar un golpe de Estado de los militares de derecha les trajo algunos problemas internos. Víctor Paz Estenssoro, principal artífice de esa alianza desde su exilio en Lima, intentó mantener unido al partido. Al llegar a Bolivia, el 24 de agosto, justificó su participación en FPN señalando que un acuerdo con los falangistas ya había sido proyectado desde la época del Gobierno de Villarroel. En noviembre de 1972, sus leales correligionarios Ciro Humboldt y Guillermo Bedregal fueron elegidos primero y segundo subjefes del MNR, respectivamente.

Pero un sector del partido, comandado por Hernán Siles Zuazo, mantuvo una actitud crítica y decidió separarse del partido bajo la sigla de Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI). Fue una decisión histórica y llamativa, ya que hasta entonces este líder había sido considerado como de tendencia de derecha dentro del partido. El rumbo de su fracción cambiaría radicalmente desde entonces, y muchos de los miembros del MNRI fueron perseguidos, apresados o tuvieron que abandonar el país, incluido su jefe. Curiosamente, Juan Ayoroa y

Guillermo Bedregal –del ala pazestenssorista– fueron apresados y maltratados en noviembre de 1972. Además, Bedregal fue acusado por Banzer de ser un "elemento disociador", y ni la defensa de Paz Estenssoro pudo evitar que partiera exiliado al Brasil.

En el bando civil del Gobierno, los falangistas gozaron de mayor simpatía del Presidente, quien declaró en reiteradas oportunidades que los consideraba sus "hermanos de sangre"; en cambio, otros líderes políticos fueron despreciados por él. Tal es el caso de Luis Adolfo Siles Salinas, quien en enero de 1972 planteó la necesidad de crear una organización de civiles que no pertenecería al FPN, pero que debía colaborar con el régimen. Nadie le hizo caso y poco después se convirtió en un opositor importante del banzerismo.

En el seno de las Fuerzas Armadas las cosas tampoco fueron sencillas. Después del golpe, Remberto Iriarte fue nombrado como su Comandante en Jefe, aunque el Teniente Coronel Humberto Cayoja consideraba que ese cargo le correspondía a él. Cayoja tenía la ilusión de asumir la Presidencia por su papel en el golpe de Estado, pero su figura cayó en desgracia y Banzer lo relegó a un segundo plano. Otro militar que perdió terreno fue Luis Reque Terán, quien había traicionado a último momento a Torres como su Ministro de Defensa para apoyar a los golpistas en un momento decisivo. El 13 de enero de 1972 fue dado de baja del Ejército por "infidencia y deslealtad" junto a Antonio Arnez y Jaime Paz Soldán (Presencia, s.f.).

Pero los casos más emblemáticos, que mostraron mejor hasta qué punto podía llegar Banzer para combatir la disidencia interna y/o contra sus potenciales rivales fueron los de Joaquín Zenteno Anaya y Andrés Selich. El primero había jugado un papel clave en el esquema represivo golpista, especialmente por su actuación en la UMSA, por lo que inicialmente fue nombrado como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en reemplazo de Iriarte. Pero más adelante, ya alejado del esquema banzerista, fue primero enviado como embajador a Francia y después mandado a asesinar en ese país, hecho que tuvo lugar en 1976.

Por su parte, Selich molestó profundamente el ego del Presidente cuando declaró que él –y no Banzer– había sido el verdadero artífice del



Figura 20. Banzer utilizó a paramilitares civiles en la represión bajo su gobierno.

Fuente: Periódico Presencia.

golpe de agosto de 1971 en Santa Cruz, golpe que, como vimos en un punto anterior, significó la muerte de numerosos civiles, principalmente universitarios. Banzer decidió enviarlo a ocupar la embajada del Paraguay, cargo que aceptó a regañadientes en enero de 1972. Sin embargo, ni bien llegado a la capital paraguaya comenzó a conspirar contra el Presidente, por lo que fue acusado de dirigir un "complot subversivo". En 1973, llamado a declarar a la Sede de Gobierno después de ser destituido de su cargo, recibió una dura golpiza que le costaría la vida en la casa de Alfredo Arce Carpio. Otros militares que lo apoyaron en la conspiración, como José Azurduy, Armando Moreno, Carlos Balcázar y Hugo Baldivieso, escaparon de Tarija hacia la frontera con Argentina.

Finalmente –y por razones obvias–, Banzer consideraba como sus archienemigos a los militares Juan José Torres y Rubén Sánchez. El Presidente de facto hizo perseguir a Torres ni bien este llegó a Lima como asilado; lo mismo ocurrió cuando fue expulsado del Perú y enviado a Chile. Pero llegó mucho más lejos cuando el ex Presidente se instaló en Argentina, donde, como veremos en otro punto, en 1976 fue mandado a asesinar como parte del Plan Cóndor. Al igual que Torres, Rubén Sánchez vivió un proceso de radicalización y se identificó con opciones de lucha armada. De hecho, estableció estrechos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Argentina, país donde vivió varios años. Aunque fue perseguido y vigilado por Banzer, nunca cayó preso. Sin embargo, la represión se ensañó contra su hija, también del ELN; Sánchez ya había perdido un hijo en las sangrientas jornadas de agosto de 1971.

Banzer contaba con el respaldo mayoritario de las Fuerzas Armadas y de los jefes y principales dirigentes intermedios de los partidos del FPN. Debido a ese respaldo, su verdadera preocupación política fue combatir desde un primer momento a los militantes de la izquierda, a la COB, a todos los que habían participado en la Asamblea Popular, a los líderes sindicales de los diferentes sectores obreros y populares, a los dirigentes independientes del movimiento campesino, a los periodistas e intelectuales progresistas, a los universitarios, a los estudiantes de secundaria y maestros que fueran revoltosos, a los sacerdotes tercermundistas y monjas revolucionarias, a los artistas y músicos de protesta, a los oficiales leales a Torres, etc. En síntesis, Banzer combatió a todos los que, para él, no eran más que "subversivos", "comunistas" o "vende patrias".

Así, el nuevo Gobierno actuó rápidamente para eliminar toda posible resistencia a su consolidación y ejercitó una amplia e indiscriminada política represiva. Se implantó el toque de queda, y los militares patrullaron las calles incluso varios días después de consolidado el movimiento golpista; similares situaciones se vivieron en todas las capitales de Departamento. En el campo, los regimientos acantonados en algunas localidades se aprestaron a controlar cualquier acción sospechosa de los campesinos y vigilar a quienes se refugiaban allí o querían pasar a los países vecinos.

El 16 de septiembre de 1971, para darle un tinte simbólico a su política represiva, el Gobierno dispuso la demolición del cerro Laikaqota, donde los combatientes revolucionarios habían resistido heroicamente al golpe. Se suspendieron las clases en algunas universidades y otras fueron cerradas indefinidamente, situación que duró hasta fines del año siguiente. También se dio por concluido el año escolar (cuyas clases se encontraban paralizadas desde el 19 de agosto), lo que supuso un grave perjuicio para el sistema educativo nacional. Todas las sedes sindicales del Magisterio fueron intervenidas y cientos de maestros fueron echados de sus trabajos por sus vínculos con el "extremismo"; otros tantos fueron apresados y/o exiliados.

Se implantó una fuerte censura de prensa. Decenas de periodistas fueron detenidos y se recuperó el periódico El Diario, que había sido cooperativizado por sus trabajadores durante el gobierno de Juan José Torres. Las organizaciones gremiales del sector fueron ilegalizadas e incluso se quiso controlar a las agencias internacionales en el envío de sus despachos.

Todos los representantes sindicales que participaron en la Asamblea Popular y los líderes de la COB y la FSTMB fueron declarados fuera de la ley. Juan Lechín Oquendo, junto a muchos otros, salió al exilio en Chile. Sin embargo, contrariamente a lo que se podría esperar, en este primer momento Banzer no fue tan duro con el movimiento obrero como lo fue con la izquierda política, por lo que varios de sus dirigentes pudieron permanecer en el país.

En los días que siguieron al golpe, miles de ciudadanos bolivianos fueron detenidos, golpeados y torturados en interrogatorios totalmente ilegales, con una violación flagrante de sus Derechos Humanos. Algunos fueron liberados, pero los considerados peligrosos permanecieron en las celdas de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) –que después pasó a llamarse Departamento de Orden Público (DOP)–, en la cárcel de San Pedro de La Paz o en otras cárceles departamentales. Otros fueron enviados a campos de concentración en regiones alejadas, como la isla de Coati en el Lago Titicaca, e Ixiamas y Alto Madidi en el norte de La Paz. Finalmente los militantes de los partidos de izquierda radical fueron llevados a las cárceles improvisadas de Achocalla, Viacha, Chonchocoro y otras de menor importancia. Varios de ellos murieron fusilados o como consecuencia de la tortura.

Muchos perseguidos buscaron asilo en embajadas, de donde saldrían a cuenta gotas en los siguientes meses para trasladarse a distintos países, y no sin antes tener que pasar por un verdadero vía crucis para obtener los famosos salvoconductos. Los que no tuvieron la posibilidad de conseguir el apoyo diplomático pasaron las fronteras a pie –especialmente a Perú y Chile– tras penosas travesías. En Perú gobernaba el militar nacionalista de centroizquierda Juan Velasco Alvarado; en Chile el socialista Salvador Allende. En este último país, cientos de bolivianos recibieron la solidaridad de los partidos que conformaban la Unidad Popular. Otros prefirieron irse a Argentina y unos pocos a Paraguay y Brasil.

La Iglesia también tuvo su cuota de sufrimiento y represión. Según informaciones del periódico Presencia, el Obispo de Corocoro sufrió el allanamiento al templo local y a su residencia el 2 de octubre de 1971. El 23 de ese mismo mes, el convento de las Carmelitas de Santa Cruz fue allanado por 15 agentes del DIC. El 12 de marzo de 1972 fue intervenida una residencia de padres jesuitas ubicada en la calle Illampu, donde se detuvo al sacerdote Luis Alegre. Otros jesuitas, como Xavier Albó y Luis Espinal, fueron catalogados de extremistas. Por su parte, el padre Mauricio Lefevre murió en los acontecimientos de agosto de 1971, tratando de auxiliar a un herido.

Los grupos de base de la Iglesia católica que pertenecían a la corriente tercermundista se manifestaron en distintas oportunidades, criticando las políticas gubernamentales; estos también fueron catalogados como enemigos del régimen. La jerarquía de esa Iglesia, que en un principio guardó silencio frente a los constantes atropellos a los Derechos Humanos, se manifestó por primera vez en febrero de 1972, cuando los obispos pidieron que se ponga fin a las detenciones indiscriminadas. Un año después, en enero de 1973, los sacerdotes de base difundieron un importante documento que fue avalado por la Conferencia Episcopal de Bolivia.

Recuadro 39

### Resumen del documento "Evangelio e Iglesia"

Inician el documento señalando: "Hemos callado por miedo y cobardía (…), hemos callado por comodidad y falta de solidaridad. Como cristianos no podemos seguir callando".

Denuncian como "no cristiano e inhumano" los asesinatos y fusilamientos, las violaciones, torturas físicas, detenciones arbitrarias, el rechazo sistemático del Ministro del Interior al desarrollo del Habeas Corpus y la defensa legal de los presos políticos, los atentados a la libertad de expresión que incluye exilio de periodistas y los graves y repetidos atentados al derecho a organizarse en sindicatos, entre otros.

Señalan la falta de autonomía del poder judicial, negociados y desfalcos de empresas públicas, armamentismo clandestino tanto de derecha como de izquierda, violación de la correspondencia, masacres blancas, instrumentalización política del campesinado, sucesivas depuraciones en la universidad, injerencias de otros países, persecución de ciudadanos por sus ideas y no por actos ilegales, apresamiento y amedrentamiento a religiosos, obispos y pastores evangélicos y la penuria económica que afecta a la mayoría del pueblo boliviano.

En la conclusión, dicen: es "necesaria la vigencia de un régimen democrático e institucional".

Entre los firmantes están Edmundo Abastaflor, Xavier Albó, Luis Alegre, Ana María Ajuria, Mauricio Bacardit, Pedro Basiana, Joseph Barnadas, Roberto Durette, Luis Espinal, José Gramundt, Gregorio Iriarte, René Pereira, Rafael Puente, Eduardo Pérez Iribarne, José Subirats, Julio Tumiri, Alfonso Vía Reque, Jaime Zalles, Ignacio Zalles y muchos más.

Fuente: Presencia, 23 de enero de 1973.

El 21 de enero de 1973, la Comisión de Justicia y Paz –creada hace muy poco y avalada por la jerarquía católica– planteó numerosos recursos de Habeas Corpus en favor de varios detenidos ante la Corte Superior del Distrito y contra el Ministro del Interior y los jefes de Investigación Criminal. Desde ese momento, su papel fue altamente significativo en la defensa de los Derechos Humanos y en la obtención de la libertad de algunos presos, tarea en la que coadyuvaron el ex presidente Luis Adolfo Siles Salinas, el abogado Manuel Morales Dávila, el sacerdote extranjero Eric de Wassaige, el pastor evangélico Julio Tumiri y otros.

Pero poco pudo hacer la Comisión cuando se trató de militantes de los partidos de izquierda catalogados como "extremistas", contra los cuáles el Gobierno practicó una política represiva selectiva tendiente a su total aniquilación. Esos fueron los casos de los comunistas pro-chinos vinculados a la Unión de Campesinos Pobres (UCAPO), los miristas y, principalmente, los combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En relación a UCAPO, ni bien consumado el golpe las fuerzas antiguerrilleras del destacamento Rangers de Santa Cruz y del Regimiento Manchego realizaron un cerco al lugar donde, meses antes, esa organización había impulsado la toma de tierras. Detuvieron a decenas de campesinos y asesinaron a varios de ellos. El 9 de septiembre de 1971, Presencia informó que los muertos fueron enterrados cerca la población de Mineros, pero nunca se inició una investigación sobre los hechos, por lo que lo realmente ocurrido en esos días sigue en la oscuridad.

En cuanto al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Adett Zamora catalogó a este partido y al ELN como "las principales fuerzas de subversión roja" (Presencia, 11 de enero de 1973). El Ministro del Interior acusó a Jaime Paz Zamora, Antonio Araníbar, Oscar Eid, Marcel Ramírez, María Esther Ballesteros, María Esther Navarro, Carlos Bayro y otros miristas de participar en un supuesto plan llamado Zafra Roja, que pretendía el asesinato de Banzer y de muchos otros más consignados en una lista. Con ese pretexto, decenas de miristas fueron apresados y torturados; Carlos Bayro murió por causa de esos procedimientos.

Pero la organización que sufrió mayormente la furia banzerista fue el ELN, que desde fines de la década de los sesenta había optado abiertamente por la opción armada para la victoria revolucionaria y había luchado en ese sentido en las jornadas de agosto de 1971. Desde agosto de 1971 y durante todo el año de 1972, este Ejército soportó la embestida que provocó la pérdida de militantes de gran trayectoria, ya sea por tortura o porque se les aplicó la "ley de fuga". Entre ellos se encuentran José Carlos Trujillo, Ipsen Cárdenas Reiner, Enrique Ortega, Ivo Stambuck, Cecilia Ávila, Félix Melgar, Oscar Núñez, Ana María Spaltro, Pedro Morant y Lisímaco Gutiérrez. También fue asesinado el argentino Oscar Pérez Betancourt, y figuras emblemáticas –como Loyola Guzmán– estuvieron presas durante varios años.

Por las características de su proceso y por la mayor repercusión mediática, el caso de Pedro Morant y Lisímaco Gutiérrez despertó gran indignación en la población. Ambos fueron detenidos cuando intentaban cruzar la frontera con Chile, en mayo de 1972. Según las informaciones oficiales, se les había aplicado la ley de fuga porque quisieron escapar, pero el Prefecto de Oruro denunció a la prensa que Morant había sido llevado vivo a La Paz. Luego se supo que murió allí por causa de las torturas. Igual suerte corrió Gutiérrez, quien fuera decano de la Facultad de Arquitectura de La Paz y un profesional ampliamente comprometido con los sectores populares.

La represión contra el ELN se manifestó también en la muerte de Mónika Ertl. Esta guerrillera fue perseguida incluso por el FBI luego de asesinar en Alemania al militar Roberto Quintanilla, quien participó en la represión de los militantes de esa organización y quien le habría cortado las manos al Che Guevara. Fue muerta en La Paz junto al guerrillero Osvaldo Ukasqui. Desde 1974, la represión contra el ELN se enmarcó en el Plan Cóndor, con casos como los de la argentina Graciela Rutilo, el uruguayo Lucas López y el argentino Luis Stamponi, que ocurrieron en 1976. La represión al Ejército de Liberación Nacional continuaría así hasta el final de las dictaduras en Bolivia.

Tampoco hay que olvidar que esta política alcanzó a miembros de los partidos de izquierda más tradicionales –como el PCB y el POR– en sus distintas corrientes. El militante comunista Roberto Alvarado murió en la cárcel, al igual que los movimientistas cruceños Félix Sandóval Morón

y Alcides Sandóval Morón, quienes siempre habían actuado con independencia de las cúpulas partidarias y se habían acercado a posiciones de izquierda.

De acuerdo a información de los organismos de Derechos Humanos de Bolivia, entre octubre de 1974 y fines de 1977 hubo al menos 200 muertos, 14.750 prisioneros (la gran mayoría sin juicio previo) y 19.140 exiliados políticos (Lavaud, 2013: 56). Los desaparecidos se calculan en unos 150, pero a pesar del tiempo transcurrido aun no existen investigaciones más completas sobre los alcances de la represión en los años del banzerato. Tan poco se conoce sobre los números de víctimas como sobre las características de los organismos represivos y de los siniestros personajes que actuaron en esos años, gozando de una total impunidad, como el Jefe de Inteligencia Coronel Rafael Loayza, Abraham Baptista, y el exguerrillero arrepentido Víctor "Coco" Balvián, entre otros.

Por último, en diferentes publicaciones se ha señalado el apoyo a las tareas represivas internas que brindaron los gobiernos de los países vecinos –como Brasil, Paraguay, Argentina y Chile– en los distintos momentos de la dictadura de Banzer. A partir de los primeros meses de 1972, la prensa diaria informó de los encuentros de Banzer con los presidentes Stroessner del Paraguay (en febrero) y Emilio Garastazú del Brasil (en abril), así como sobre su estrecha amistad con Videla, cuya participación en el Plan Cóndor se haría muy notoria años después. Paralelamente, se enemistó con los países socialistas. Por ejemplo, en marzo de 1972, expulsó del país a 119 soviéticos. Además, acusó permanentemente a los cubanos y al Chile de Allende de intervenir en la política interna, brindando apoyo a los comunistas y extremistas bolivianos.

## Militarización de la dictadura: la represión se vuelca a los movimientos obrero populares y campesino indígenas

El primer conflicto social serio que tuvo que enfrentar el gobierno del FPN ocurrió en octubre de 1972, y fue provocado por la decisión gubernamental de devaluar la moneda a 20 Bs. Hasta ese entonces, el tipo de cambio vigente era de 12 Bs. por dólar americano.

La nueva medida de estabilización monetaria se tomó junto con otras de corte similar, como: libertad de operaciones cambiarias, congelamiento de sueldos y salarios por un año (luego de un incremento inmediato de 135 Bs. mensual en general, y de 150 Bs para trabajadores de interior mina), congelamiento de los precios de artículos de primera necesidad y severas sanciones para el acaparamiento, la especulación, la ocultación y la suspensión de los servicios básicos. Banzer anunció que contaría con un crédito de 24 millones de dólares de Estados Unidos y un stand by de 30 millones de dólares del FMI para estabilizar la economía. En otras palabras, se disponía de 54 millones de dólares para darle solidez a la moneda boliviana.

Se argumentó que la devaluación tenía que ver –¡una vez más!– con la problemática minera. Los argumentos planteados fueron los siguientes. Por un lado, el valor real del dólar producido por el sector minero era muy superior al de la COMIBOL, que entonces vendía –obligada– al Banco Central de Bolivia (BCB) un total de 11.885 pesos. Este monto era utilizado para subvencionar a otros sectores de la economía. Por otro lado, había una irracional cotización de las divisas, a la que se sumaba a un menor ingreso fiscal, azuzado por el contrabando.

Como se temía una reacción negativa a las medidas de parte de los sectores laborales, a tiempo de hacerlas conocer por los medios de comunicación, el Gobierno determinó que ese 27 y 28 de octubre debían suspenderse todas las actividades, funcionando solamente los servicios de salud, transportes, comunicaciones y escuelas. Sin embargo, inmediatamente conocida la devaluación, se produjo una alarmante subida de precios de artículos de primera necesidad, y los primeros tumultos populares estallaron el 30 de octubre en la ciudad de La Paz, encabezados por el sector fabril.

Ese día se produjeron violentos disturbios. En algunas calles se levantaron barricadas con piedras y adoquines. Muchos barrios fueron centro de escaramuzas entre manifestantes y fuerzas policiales. Las fábricas dejaron de operar desde muy temprano, pero los obreros permanecieron en sus centros de trabajo, desarrollando una "huelga de brazos caídos". Por medio de masivas asambleas, Said, Forno, Soligno y otras fábricas se convirtieron en espacios de debate y de participación de las bases en la toma de decisiones.

Más tarde, los fabriles fueron convocados por Radio Continental (perteneciente al sector) para

una concentración en la plaza San Francisco. Los trabajadores llegaron allí desde sus fábricas en grupos de 5 a 10 personas, pero cuando comenzaban a reunirse la policía lanzó gases lacrimógenos que los separaron. Sin embargo, la gente dispersa formaba barricadas en varios puntos de la ciudad, como la Avenida Buenos Aires, la Max Paredes y la Garita de Lima. En esos lugares las fuerzas del orden dispararon armas de fuego, haciendo caer heridos a algunos civiles. La nómina publicada por el periódico Presencia consignó 32 heridos entre carpinteros, obreros, estudiantes y otros.

En la plaza Alonso de Mendoza se produjo un violento choque entre policías y manifestantes, en medio de piedras y gases. En la noche continuaron los disturbios en Vino Tinto, en la zona del Cementerio General, en la céntrica Avenida Mariscal Santa Cruz y en los barrios obreros de Villa Victoria, Munaypata y Callampaya. Los policías usaron gases y perros amaestrados. También se produjeron asaltos a almacenes de la Buenos Aires por parte de delincuentes.

El 31 de octubre, el Gobierno convocó al diálogo a las organizaciones laborales. Sin embargo, los disturbios se prolongaron por varios días más; esta vez, los cabecillas del movimiento popular fueron los fabriles. Ante la ausencia de la COB, el 7 de noviembre se creó el Comité de Defensa de los Trabajadores, "en vista de no tener actualmente una matriz que pudiera hacerse cargo de los reclamos de la clase trabajadora del país" –tal como dijo a la prensa Nicolás Araníbar, Secretario Ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB).

El Comité estaba compuesto por la CGTFB, la Federación de Fabriles de La Paz, la Confederación de Constructores, la Confederación de Bancarios y Ramas Anexas, la Federación de Trabajadores del Comercio, la Federación de Gráficos y los trabajadores de caminos, radio, TV y prensa de La Paz (Presencia, 7 de noviembre de 1972). En el comunicado de creación de la entidad se afirmó que "el sindicalismo es el único instrumento eficaz de defensa de los derechos laborales". Esta determinación, que rompía con el tradicional vanguardismo minero, nació como un fruto del reflujo que vivía el movimiento minero, como consecuencia del debilitamiento de sus sindicatos y sus organizaciones matrices: la FSTMB y la COB.

La movilización popular de fines de 1972 no logró el objetivo de que las medidas dictadas sean suspendidas. Sin embargo, los sectores obreros sindicalizados mostraron importantes signos de recuperación con estos acontecimientos. Esto también pudo advertirse en las combativas marchas el 1 de mayo de 1973, en las que miles de obreros, venciendo el temor a la represión, recorrieron las calles céntricas de La Paz y otras capitales de Departamento, gritando mueras al Gobierno "hambreador, antiobrero y proimperialista" y vivas a la COB y a la FSTMB. Poco después comenzó un lento proceso de reorganización de los sindicatos, principalmente en las minas, donde se realizaron procesos electorales internos.

A mediados de 1973 comenzaron a surgir nuevos pronunciamientos de los sindicatos de base del sector minero, que incluyeron demandas de carácter sindical y político. Así, en junio hubo un paro de 24 horas en Huanuni para exigir el funcionamiento de la COB; el paro fue declarado ilegal por el Gobierno. En julio, los 400 trabajadores de la sección Zink and float de la mina de Siglo XX se declararon en huelga; pronto esta se generalizó a todo ese centro minero y se convirtió en huelga general indefinida. Importantes minas como San José, Matilde y Colquiri elevaron sendos pliegos de peticiones a la COMIBOL y realizaron paros de protesta en esos mismos meses. Mientras tanto, la FSTMB exigió que se libere a los dirigentes que continuaban detenidos.

Paralelamente, el Gobierno de Banzer intentaba congraciarse con el sector campesino. Eso sí, primero quería tener presos o en el exilio a los dirigentes del sector que hubieran participado en la Asamblea Popular o que pertenecieran a corrientes que, desde fines de la década de 1960, buscaban desprenderse del pasado de subordinación a los distintos gobiernos. Entre estos se encontraban los campesinos que formaron la Confederación de Campesinos Independiente –Paulino Quispe y Casiano Amurrio, entre otros– y los kataristas de la Federación de La Paz –liderados por Jenaro Flores.

El 21 de septiembre de 1971, Banzer ratificó el Pacto Militar Campesino, acción que fue aplaudida y avalada por la Confederación Nacional de Campesinos, de carácter oficialista (y dirigida por ex movimientistas y ex barrientistas, como Jorge Soliz). Siguiendo los pasos de Barrientos, quiso ganar al sector con promesas de mejoras sociales, entre ellas la implantación de un seguro social campesino –que nunca se aplicó– y la construcción de escuelas y otras

pequeñas obras. De todos modos, los campesinos lo proclamaron como su líder y realizaron numerosas concentraciones cada vez que el Presidente golpista se desplazaba al campo y se animaba a colocarse un "lluchu" en su cabeza.

Pero años después, en enero de 1974, las nuevas medidas económicas dictadas por el Gobierno militar provocaron un quiebre histórico en su relacionamiento con el sector campesino. A principios de enero fue dictado un nuevo paquete económico que determinó el aumento de los precios de la gasolina. Esto, como se sabe, obligaría al aumento de los precios de los productos de la canasta básica familiar, perjudicando sobre todo a los sectores populares, principalmente a los campesinos.

Es importante señalar que, como distintos estudios lo han demostrado, el sector rural venía subvencionando al mundo urbano desde hace mucho tiempo atrás. Mientras los precios de sus productos se mantenían bajos, el azúcar, el arroz, la leche, los cuadernos escolares y toda clase de productos elaborados que se vendían en los pueblos vecinos de las comunidades rurales subían continuamente de precio. Por otra parte, los verdaderos beneficiados por el comercio de los productos agrícolas (papa, arveja, oca, quinua, etc.) eran los transportistas y los intermediarios mayoristas de los mercados de las ciudades.

Esta nueva elevación de los productos de la canasta básica familiar –mientras los productos agrícolas permanecían a bajos precios– ocasionó una protesta generalizada en el sector campesino, que se expresó con mayor fuerza y contundencia en el valle alto de Cochabamba. Allí, miles de indígenas salieron a bloquear distintos puntos de la carretera que unía los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. El Gobierno no dudó en enviar fuerzas militares y al Ministro de Asuntos Campesinos Natusch Busch, quien, después de una serie de engaños y promesas de entablar negociaciones, dejó que los militares dispararan a mansalva contra los campesinos. Decenas de ellos cayeron heridos y muchos otros murieron. Esta masacre fue documentada por la organización Justicia y Paz, que publicó un libro pocos meses después. La organización contaba con el respaldo de la Iglesia católica, ya que correspondía a una iniciativa del Vaticano.

La Masacre de Tolata demostró que el régimen no estaba dispuesto a tolerar ningún tipo de protesta, venga de donde venga y sea cual sea el costo político. Es verdad que el campesinado oficialista siguió siendo el único sostén popular de su régimen, asentado sobre todo en el apoyo de la empresa privada (en todas sus vertientes), el de la región de Santa Cruz y el de los militares. Pero las bases campesinas del eje central del país vivieron un proceso de desmarcamiento silencioso que, a fines del Gobierno de Banzer, ya era prácticamente irreversible.



Figura 21. El Frente Popular Nacionalista, conformado por el MNR, la FSB y las FFAA se desintegró en 1974.
Fuente: Periódico Presencia.

Recuadro 40

### Fragmentos del libro “La Masacre del Valle”, *Cuaderno Justicia y Paz, Cochabamba, enero de 1975*

“3. La masacre de Tolata: (martes 29 de enero, 5:00 p.m.)

Cuando el convoy militar se fue acercando al bloqueo de Tolata creyeron en su ingenuidad que el Presidente Banzer se acercaba para dialogar con ellos. Nadie huyó. Con ingenua curiosidad veían acercarse las máquinas de guerra.

Un oficial que iba al frente de la columna se dirigió a la multitud en términos soeces instándoles a que se apartaran del camino. Sonrisas burlonas y actitudes estoicas fue la única respuesta que encontró. Según alguna versión una mujer lanzó una piedra al oficial descortés y fue la chispa que prendió el incendio. Se oyeron tres ráfagas de ametralladora, sin duda procedentes de un blindado. Algunos hablan de una cuarta ráfaga. Fue, sólo cuestión de minutos. Parece que algunos soldados más bien dispararon al aire. Ante la inesperada realidad de la masacre la gente empezó a huir. Uno de los soldados presentes, al ser interrogado sobre el número de muertos nos dijo: ´Hemos visto montones de cadáveres de campesinos amontonados como leña´. La mayoría de los muertos y heridos que han podido ser recuperados tenían heridas en el estómago y piernas. Los cadáveres localizados se encontraban a cierta distancia del asfalto”.

La Fuerza Aérea se hizo presente con varios aviones modernos de combate en una acción combinada con el Ejército. (…).

Finalizada la operación militar en Tolata el grueso de la columna siguió adelante por la carretera dejando un contingente de tropas en esta población (págs. 29 y 30).

Ahora bien, si la represión se agudizó durante todo el año de 1974, esta tuvo su claro acto corolario en la dictación del famoso Decreto Nr. 11947, el 9 de noviembre de aquel año. A través de dicho Decreto se inició una nueva etapa del régimen dictatorial. Un primer paso para ello fue exigir la salida del Gobierno de los partidos políticos MNR y FSB, con el objetivo de militarizar completamente al Poder Ejecutivo. Esta decisión se sustentaba en el argumento esgrimido en un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el cual decía que “la Institución Tutelar de la Patria está por encima de las ideologías y los partidos políticos”.

El Decreto estableció que todos los partidos políticos sin excepción dejaban de funcionar, y se señaló el año de 1980 para la realización de nuevas elecciones. También se creó el Servicio Civil Obligatorio, que permitía obligar a cualquier ciudadano boliviano a cumplir con las funciones asignadas por el Gobierno, y se planteó la reorganización del Poder Judicial.

En cuanto a las organizaciones sindicales, el famoso Decreto 11947 determinó que cesaba indefinidamente el mandato de los dirigentes de los sindicatos y otras organizaciones sociales. El Decreto prohibía la paralización de las actividades laborales bajo pena de sanciones y pretendía la eliminación de las cuotas sindicales que en el pasado habían contribuido al funcionamiento de la COB, la FSTMB y las demás organizaciones laborales con el aporte de sus afiliados. También se determinó que el sector patronal no podía realizar el lock out o cualquier otro cierre de sus empresas. Finalmente, se redujeron drásticamente los feriados y días festivos.

El aspecto que provocó más reacción de parte de los trabajadores fue el artículo del Decreto que facultaba al Ministerio de Trabajo a designar “coordinadores laborales” en diferentes sectores de trabajo. Esto implicaba una directa intervención gubernamental en el ejercicio sindical; más aún, le permitía al Estado romper con la independencia sindical que siempre fue celosamente defendida.

El Decreto vino acompañado de una larga lista de dirigentes que debían cumplir esa función. Curiosamente, varios de ellos ya estaban cumpliendo con esas actividades antes de la promulgación del Decreto, lo que elevó sospechas sobre un intento de cooptación de los mismos. Al mismo tiempo, se dejaron sin efecto todas las declaratorias en comisión de las diferentes confederaciones y federaciones del país.

MANACO y FLEX, dos grandes fábricas cochabambinas –ubicadas en Quillacollo y Sacaba respectivamente– que ya despuntaban por su combatividad, paralizaron labores en protesta por el Decreto. Frente a esta medida, el Gobierno señaló que se había desatado la “agitación extremista”. El Prefecto del departamento de Cochabamba, Miiyav Eterovic, dijo que si continuaban los paros se aplicarían medidas drásticas. Estas fueron llevadas a la práctica con el despido de decenas de trabajadores.

Por otra parte, desde mediados de noviembre se comenzó a detener a los dirigentes que se negaban a cumplir el servicio civil obligatorio como coordinadores de sus sectores laborales. A fines de ese mes, los presos fueron pasados a un juzgado. En las minas, la respuesta a la imposición fue doble. Por un lado, los dirigentes que no habían perdido la confianza de las bases siguieron ejerciendo sus funciones, aun habiendo sido nombrados coordinadores. Por el otro lado, se organizaron Comités de Bases para contrarrestar la presencia de coordinadores no deseados.

Frente a ello, el Gobierno anunció que las zonas del país que se encontraran convulsionadas serían declaradas zonas militares, lo que implicaba que las Fuerzas Armadas podían intervenirlas en cualquier momento. Esta determinación fue llevada a la acción en enero de 1975, cuando se desató una avalancha de detenciones de líderes políticos. En efecto, el día 4 de ese mes tuvieron lugar numerosos allanamientos a domicilios particulares de políticos opositores. Por su parte, el Ministro del Interior acusó a Hernán Siles Zuazo de ser uno de los cabecillas de un movimiento subversivo. También fueron detenidos dos miembros de la cúpula de la FSB.

Semanas después (el 23 de enero) se produjo el ingreso a las minas de fuerzas policiales y paramilitares –también llamados "funcionarios de seguridad del Estado". En cuatro camiones irrumpieron en las minas Siglo XX y Catavi y en la población civil de Llallagua, y su primera acción fue clausurar violentamente cuatro emisoras mineras de ese distrito en horas de la madrugada. Ante estos hechos, la sirena de Siglo XX comenzó a ulular insistentemente desde las 5:30 a.m., poniendo en alerta a los trabajadores y a la población. Mientras tanto, varias personas fueron detenidas durante el allanamiento de sus domicilios. La Iglesia católica –a través del Arzobispo de La Paz, Jorge Manrique, y numerosos religiosos de base– alzó su voz de protesta. La radio Pío XII, de la orden de los Oblatos, quedó afectada y Roberto Durete, su director, recibió una brutal golpiza.

Los 4.831 obreros de la empresa Catavi no se dejaron amedrentar y, pese a la presencia de las fuerzas represivas en su distrito, decretaron una huelga general. Después de once días de paro indefinido, los mineros consiguieron la solidaridad del movimiento universitario, que salió a las calles pidiendo la salida de las fuerzas represivas de las minas. Decenas de universitarios fueron apresados; hubo mucha violencia de parte de la policía y la UMSA volvió a ser cerrada por un tiempo. Sin embargo, la alianza entre los dos sectores –que ya se había dado en el pasado– se fortaleció, y se mantendría consolidada y activa hasta el final de la dictadura.

Para el movimiento minero, la huelga de enero fue un importante paso en la recuperación de su organización y su combatividad tradicional. Nuevamente los otros sectores populares los reconocieron como a su vanguardia, aspecto que el proletariado minero no defraudaría en los siguientes meses ni hasta que finalmente se consiguió el retorno a la democracia en Bolivia.

Por su parte, en marzo de 1974, la organización Justicia y Paz lanzó su "Campaña de las 1000 firmas". Los adherentes a la carta solicitaban lo siguiente al Gobierno: respeto a los Derechos Humanos, vigencia de los sindicatos, que se acabe con la manipulación de sindicatos campesinos, auténtica libertad de prensa, reapertura inmediata de radios mineras, cese de detenciones, exilios y arbitrariedades, rechazo al control extranjero sobre la natalidad y reingreso al país de los padres expulsados del país.

Por la cantidad de firmas conseguidas, la campaña fue un éxito. Pero el Gobierno respondió que las detenciones no cesarían "en tanto los subversores del orden constituido quieran traer el país ideologías importadas por guerrilleros" (Presencia, 13 de marzo de 1975). De acuerdo a informaciones oficiales, en ese momento existían 70 detenidos políticos, pero en realidad eran al menos el doble. Esta situación se supo en diciembre, cuando se elaboraron listas en función del pedido de amnistía general.

Pese a la prohibición oficial, el 1 de mayo de 1975 se celebraron multitudinarias manifestaciones en todo el país. En cambio, los actos deportivos y folklóricos preparados por el Gobierno para distraer la atención tuvieron poca concurrencia. Las masas aglomeradas gritaron a todo pulmón consignas como "amnistía general" y "democratización del país". Sin embargo, la dictadura no solamente hizo oídos sordos, sino que siguió incrementando la represión.

El 14 de julio de ese año, el Gobierno le asestó un durísimo golpe a la Central Obrera Boliviana (COB) y a los dirigentes políticos de izquierda, que se encontraban reunidos clandestinamente en las

afueras de la ciudad de Oruro (Agua de Castilla) con el objetivo de definir los siguientes pasos a tomar. Según información oficial, se detuvo a 31 dirigentes y a 3 religiosas. Entre los detenidos figuraban el dirigente cobista René Higueras del Barco, la dirigente del Magisterio Mirna del Río, los dirigentes campesinos Casiano Amurrio y Miguel Veizaga, los dirigentes mineros Félix Muruchi y Corsino Pereira, los dirigentes universitarios Edgar Luján, Luis Caballero (ambos de la UMSA) y Jorge Fernández (de la Universidad Católica) y la monja Ana María Orue Ajuria. Además quedaron presos varios miembros de los siguientes partidos políticos: PCB, PCML, POR, ELN, MIR y MNR de Izquierda. Los detenidos fueron "residenciados" en regiones aisladas del país. Pero las bases obreras no cesaron en su lucha: volvieron a levantar sus organizaciones, y la disputa contra el Gobierno militar por el retorno a la democracia y otras demandas ya no pararía más.

## Bonanza económica y proyecto desarrollista bajo el banzerismo

En la década de 1970, Bolivia continuaba siendo un país predominantemente rural, sector donde solo la agroindustria, que comenzaba a despuntar en Santa Cruz, podía considerarse como perteneciente a una economía moderna. Paralelamente, la extracción de minerales –especialmente el estaño– y de hidrocarburos –en ese momento más petróleo que gas– eran las fuentes principales de las exportaciones.

La agroindustria cruceña logró abastecer el mercado interno en productos como el azúcar y el arroz, pero el intento de diversificarse hacia el algodón fracasó pronto. Por su parte, el departamento del Beni aportaba con el mejoramiento paulatino del ganado vacuno, logrando abastecer con carne de buena calidad a distintas regiones del país, pero principalmente a las del eje central del país: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Pero en el Occidente, la agricultura no solo estaba estancada, sino que ya mostraba signos claros de lo que posteriormente se denominaría como "surcufundio". La productividad continuaba en un nivel muy bajo, y los productos no se habían diversificado en el Altiplano ni en los valles.

En relación a la producción minera, durante gran parte de la década de 1970 (1971-1978, exactamente el periodo que abarcó el septenio banzerista) esta generó entre el 7% y el 11% del PIB, proporcionó entre el 20,9% y el 36% de las recaudaciones fiscales del Estado y representó entre el 59,5% y el 80,2% del total de exportaciones del país y casi la mitad de las divisas. El petróleo generó el 5,7% del PIB (Datos del Banco Mundial, citado en Lavaud: 2003: 36).

Bolivia continuó siendo uno de los países más atrasados de América Latina en cuanto al desarrollo del sector industrial, que siguió limitándose a la fabricación de productos alimenticios y livianos. En cambio, la construcción creció mucho en esos años, producto de la implementación de importantes obras arquitectónicas –como el edificio del Banco Central de Bolivia, en la ciudad de La Paz. Los sectores de la industria y la construcción generaban cerca del 20% del PIB. El sector terciario, que incluía finanzas, comercio, transporte, comunicación y servicios, contribuía con cerca del 55%. Hay que señalar que, durante el septenio banzerista, el subsector del transporte fue ampliamente beneficiado con distintas medidas que tomó el Gobierno (como la liberación de impuestos para importar repuestos) y experimentó un importante incremento (Lavaud: 2003, 37).

Jean Pierre Lavaud da otros datos interesantes, extraídos del Censo Nacional de 1976, como el que señala que la proporción entre asalariados y no asalariados era de 18.4% y 81,6%, respectivamente (Ibíd.: 38). Esos datos muestran que el sistema de producción capitalista (que, como vimos, era principalmente extractivista) no estaba ampliamente desarrollado.

El 12 de diciembre de 1971, muy poco tiempo después de haber asumido el Gobierno de facto, Banzer dictó la Nueva Ley de Inversiones. Esta Ley tenía la intención de atraer mayores capitales privados –tanto nacionales como extranjeros–, disminuir la participación del Estado en la economía –cambiando así la orientación respecto a Ovando y Torres– y fortalecer a las distintas expresiones de la burguesía nacional (como la minería mediana, la burguesía financiera y comercial, la burguesía agroindustrial emergente y, en menor medida, la industrial).

Sin embargo, en noviembre de 1974, el Gobierno militar anunció la puesta en marcha de un "Plan Quinquenal" cuyo objetivo principal, entre otros, era el fortalecimiento de COMIBOL. Esto se debió en gran parte a la subida de precios de los minerales a nivel internacional. También es cierto que, pese a que hay claros indicios de que tenían la intención de hacerlo, tanto Banzer

como los siguientes gobiernos militares no se arriesgaron a plantear la desnacionalización de la minería estatizada en 1952 y se limitaron a insistir en señalar los problemas que le causaba al país su permanente crisis.

Respecto al contexto internacional, que influía bastante en las decisiones económicas internas, durante buena parte del septenio banzerista, tanto los precios de los hidrocarburos como los de los minerales vivieron importantes incrementos. Esto fue una consecuencia de la crisis mundial que estalló en 1973, cuyos principales afectados fueron Estados Unidos y los países europeos.

En cuanto a las exportaciones petroleras, según el economista Pablo Ramos, los mayores ingresos de las ventas petroleras se registraron en los años 1974, 1975 y 1976. Los altos precios del petróleo, que pasaron los 18,2 dólares el metro cúbico en 1972 a 95,5 dólares en 1974, beneficiaron enormemente al Gobierno militar (Ramos, 1980:138).

En relación con la minería del estaño y de otros minerales, en esos mismos años se produjo "un extraordinario mejoramiento de los precios". Sin embargo, según el mismo autor, estos "no sirvieron para capitalizar a la minería, y especialmente a COMIBOL", pues la empresa estatal "fue obligada a pagar enormes sumas por regalías e impuestos sobre exportaciones, sin tener en cuenta la difícil situación económica que ella confrontaba". Ramos añade que, pese a que el precio por libra de estaño pasó de 1,69 dólares a 5,72 dólares entre 1972 y 1978, con el consiguiente aumento del valor de las exportaciones mineras, la deuda de COMIBOL subió exageradamente (Ibíd.: 139).

Veamos ahora el siguiente recuadro, dedicado a todo el periodo señalado:

Cuadro 1. Cotización oficial de los precios del estaño
(En dólares americanos)

| Años | Cotización |
|---|---|
| 1972 | 1,69 |
| 1973 | 2,11 |
| 1974 | 3,60 |
| 1975 | 3,11 |
| 1976 | 3,40 |
| 1977 | 4,78 |
| 1978 | 5,72 |

Fuente: Ramos, 1980: 140.

El aumento de los precios se debió en gran parte a las acciones tomadas por el Cuarto Convenio Internacional de Estaño, que tuvo lugar en julio de 1971. Este Convenio dio lugar al funcionamiento de una entidad anexa, el Buffer Stock, que duró hasta 1976. Paralelamente, en 1975 fue negociado el Quinto Convenio Internacional de Estaño, cuyo fin era enfrentar la situación de aguda disminución de la demanda mundial de estaño. En aquel periodo los precios nuevamente habían comenzado a caer, pero diversas medidas produjeron un nuevo incremento a partir de 1977.

Los otros minerales que se producían en el país, como el cobre, el plomo, el zinc, el bismuto, el wólfram, el antimonio, el oro y la plata, también vivieron importantes incrementos en sus cotizaciones. En todo caso, el más beneficiado de todos fue el estaño, que continuó siendo el principal rubro de exportaciones mineras de Bolivia, con el 63,3%, mientras que el zinc y el wólfram, segundo y tercer puestos, representaban el 9,5% el 7,5% respectivamente (Ibíd.: 141).

En el recuadro presentado a continuación veremos los ingresos generados por las exportaciones de estaño en esos años.

Cuadro 2. Exportaciones de estaño
(En millones de dólares)

| Año | Minerales | Concentrado metálico de estaño |
|---|---|---|
| 1972 | 88.9 | 24.6 |
| 1973 | 98.7 | 32.3 |
| 1974 | 174.5 | 55.6 |
| 1975 | 120.0 | 51.4 |
| 1976 | 142.1 | 74.2 |
| 1977 | 192.9 | 133.8 |
| 1978 | 172.7 | 201.0 |
| Totales | 989.8 | 572.9 |

Fuente: Banco Central de Bolivia, 50a. Memoria Anual. Citada en Ramos, op. cit.: 141.

Por otra parte, Pablo Ramos señala que la cifra de 2.481,6 millones de dólares –que ingresó por divisas generadas por el conjunto de las exportaciones mineras entre 1972 y 1978– muestra que la minería seguía siendo la base de las exportaciones bolivianas.

En relación con ello, en una publicación oficial de 1979 se dijo que, pese a que el monto de divisas

creadas por el sector mineo había aumentado en términos absolutos durante la década de los 70, este había decrecido en términos relativos. Así, la máxima participación del sector minero en la generación de divisas habría tenido lugar en 1970, con un 87,32%, mientras que la mínima se dio en 1975, con el 52,33%. Ese año, la contribución del sector petrolero alcanzó su punto máximo, con el 35,18% (Ministerio de Planeamiento y Coordinación, Ministerio de Minería y Metalurgia y otros, 1979).

Por último, Ramos indica que, con el afán de exportar lo más posible y aprovechar el alza de precios, las reservas de los centros productores de las empresas de COMIBOL descendieron peligrosamente hasta diciembre de 1978, principalmente de minas como Catavi, Unificada de Potosí, San José y Caracoles. Por otra parte, en COMIBOL continuaban vigentes los antiguos problemas estructurales, como el agotamiento de los yacimientos superiores, los altos costos de producción y los altos costos de realización y fundición (1980: 143).

Durante el periodo que nos ocupa, las empresas mineras medianas también se vieron ampliamente beneficiadas por los altos precios. En 1978, del total de exportaciones, valorado en 240,9 millones de dólares durante el primer semestre de ese año, el aporte de COMIBOL alcanzó los 98,7 millones de dólares, equivalentes al 41% del total. La minería mediana alcanzó los 31,8 millones de dólares: una participación del 13%. La minería chica, con un valor de 17,9 millones de dólares, llegó al 8%. Por su parte, las fundiciones nacionales llegaron a producir 91,6 millones de dólares, el 38% del total (Ministerio de Minería y Metalurgia, 1978).

La bonanza de los precios de nuestros recursos naturales de exportación condujo a la convicción de que Bolivia podía salir de su atraso y subdesarrollo –usando los términos de la época. Pero, en realidad, el desarrollismo impulsado por Banzer –que quería imitar al vecino Brasil– careció de una orientación a largo plazo. Muchos recursos se dilapidaron en

Recuadro 41

### Lista agrupada de obras gubernamentales de inversión concluidas y en ejecución por el Gobierno de Banzer

Planta de Volatización de Potosí, escuelas rurales, autopista La Paz-El Alto, edificaciones en el aeropuerto El Trompillo, fábrica de aceites de Villamontes, planta lechera La Paz, refinerías en Cochabamba y Santa Cruz, ampliación fundición de estaño, ampliación stadium Hernando Siles, fábrica de azulejos, carretera La Paz-Apolo-Puerto Heath-Cobija, inventariación de la minería chica, prospección mineralógica de la Cordillera, agroindustrial Abopó-Izozog, planta de pesticidas, plantas de embajase de tricones, tractores y compresoras, obras de infraestructura social en área rural, planta de lubricantes, hilandería de algodón Santa Cruz, gasoducto Santa Cruz-Puerto Suárez, planta industrializadora de leche Sucre-Tarija-Santa Cruz, estación terrena de comunicaciones vía satélite, infraestructura hotelera, carretera asfaltada La Paz-Beni, aeropuerto Viru-Viru, planta de fundición de estaño de baja ley, polo del sudeste (siderurgia, cemento, electricidad, petroquímica), refinería de cinc, fundición de cobre, fábrica de cemento la Paz, ampliación fábrica de cemento Santa Cruz, ampliación fábrica de cemento Viacha, Desarrollo Rural Integrado en provincia Ingavi, proyecto múltiple Río Grande-Rositas, estudio de aprovechamiento de las aguas del desaguadero, planta de aromáticas BTX, planta de fertilizantes, carretera Bermejo-Tarija-Potosí-Sucre, conexión ferroviaria red oriental y occidental, complejo de la química básica, fábrica de papel de bagazo en Santa Cruz, fábrica de cadenas y rodamentos, planta de licuables de Río Grande, implementación de las asignaciones automotrices a COFADENA, consolidación área colonización Chimoré-Chapare, renovación y ampliación del Lloyd Aéreo Boliviano, rehabilitación ENFE, aeropuerto Tucsupaya, aeropuerto Trinidad, gasoducto Monteagudo-Sucre, fundición de Antimonio, primera fase canalización río Choqueyapu, coliseo Cerrado La Paz, resellado carretera Santa Cruz-Norte, plantas termoeléctricas de alta capacidad en Santa Cruz, fundición y refinería de Bismuto, gasoducto Sucre-Potosí, ampliación ingenio Guabirá, ampliación ingenio Bermejo, carretera Quillacollo-Confital, carretera Patacamaya-Tambo Quemado, riego en Villamontes, Red Nacional de Micro Ondas, Red Nacional de T.V., electrificación rural, exploración aurífera del norte de La Paz, fábrica de vidrio plano de La Paz, oleoducto Santa Cruz-Puerto Suárez, conexión vial Bolivia-Brasil, aeropuerto Tarija, complejo maderero del Beni.

Fuente: Presencia, Solicitada de la Presidencia de la República, 11 de marzo de 1976.

"elefantes blancos", como la famosa Planta de fundición de minerales de Karachipampa, ubicada en el departamento de Potosí, obra que, además, contó con un importante financiamiento alemán.

Para el Gobierno militar, la economía boliviana estaba viviendo uno de los momentos más importante de su historia reciente. La continuación de estas obras fue objeto de mucha propaganda en los distintos medios de comunicación. Veamos, como ejemplo, una solicitud de prensa en la que el oficialismo dio cuenta de lo realizado en los últimos años. Mantenemos el orden de la presentación en la publicación de Presencia.

El 9 de noviembre de 1975, cuando se cumplió un año de gobierno exclusivamente militar, Banzer se refirió en un extenso discurso de circunstancia a su política económica. Entonces señaló que uno de sus anhelos fundamentales era la industrialización del país. Entre lo que consideró los principales logros de su gestión, enumeró a los siguientes:

Recuadro 42

### Logros económicos de acuerdo al Presidente Banzer

- Estabilidad del signo monetario, como prioridad, en el mantenimiento del equilibrio general y de la paz social.
- Regulación progresiva de nuestra balanza de pagos y de la balanza comercial, lo que ha permitido substanciales repuntes.
- Incremento del producto interno bruto, a través de un acelerado crecimiento industrial y de otros sectores.
- Incremento de las inversiones y reinversión de capitales en campos productivos, especialmente en la metalurgia, la energía, la agricultura y la agroindustria.
- Fomento a la construcción, que absorbe mano de obra y que tiene efecto multiplicador en los servicios y otras actividades. Este hecho, al mismo tiempo, ha contribuido a resolver progresivamente el problema de la vivienda en todo el país.
- Inversión de los excedentes económicos generados por los sectores básicos de nuestra economía, en el loro de tecnología y bienes de capital.

Fuente: Boletín Informativo, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Nr.34/75, La Paz, 29 de agosto de 1975.

En otro discurso, emitido el 21 de agosto de 1975 en conmemoración del cuarto aniversario de su ascenso al poder, Banzer añadió a su tradicional consigna de "Orden, paz y trabajo" el concepto de "justicia social", indicando que la riqueza que generaba Bolivia debía alcanzar a todos. Además, dijo que la economía era "sana, dinámica y fuerte" y que las principales instituciones habían sido modernizadas. Banzer concluyó con un tono demagógico:

> En todos los confines del territorio nacional se levantan fábricas, talleres, escuelas y hospitales. Se construyen viviendas populares y caminos. El mercado ocupacional se amplía ofreciendo a los trabajadores cada vez mejores posibilidades (Ibíd.).

Si bien no es este el espacio para emitir conclusiones más definitivas sobre los verdaderos alcances de la política económica del Gobierno militar hasta su caída, en 1978, muchas de las supuestas realizaciones señaladas por el Gobierno fueron políticas carentes de un impacto estructural, y tuvieron un carácter fundamentalmente paliativo.

Lo que sí está claro es que Bolivia siguió basando su crecimiento en la economía extractiva, a través de la explotación intensiva de sus recursos naturales para exportarlos como materias primas, y sin dar el teórico salto histórico que muchas veces fue proclamado en torno a la industrialización –es decir: impulsar una economía con valor agregado. Además, el país sufrió las consecuencias típicas de la vulnerabilidad de una economía cuyos precios estaban sujetos a los vaivenes del mercado, ya que, después de la bonanza de 1974 y 1975, las cotizaciones de los hidrocarburos y los minerales comenzaron a descender.

Por otra parte, los ingresos extraordinarios logrados en tiempos de "vacas gordas" se evidenciaron, por ejemplo, en el crecimiento del PIB, que alcanzó un 4.2% en 1975. Sin embargo, los nuevos recursos fueron mal administrados. Hubo mucho despilfarro, la corrupción creció en las empresas estatales y la industria nacional debió enfrentar constantemente al masivo contrabando. Así, Bolivia continuó siendo uno de los países más pobres de América Latina. Finalmente, para 1976 la deuda externa de Bolivia era de 950 millones de dólares, y la contratada ascendía a la suma de 1.664 millones de dólares (Presencia, 28 de abril

de 1976). Fue justamente este último aspecto –es decir: el excesivo endeudamiento– uno de los temas que sería más criticado en el balance posterior del Gobierno banzerista.

En el libro El bumerán boliviano se señala que fines de la década de 1970 ocurría lo siguiente en el país:

> …la burbuja generada por los préstamos fáciles de petrodólares reventó: la producción en las minas y los pozos petroleros estatales se fue a pique, el crecimiento económico se estancó y el servicio de la deuda se disparó (Kohl y Farthing, 2007:102).

Pero, como ya señalamos, es importante recordar que la crisis económica que heredó la joven democracia boliviana a partir de 1978 –y que se agudizó por la crisis política del periodo 1978-1982– no se debió únicamente a causas externas. Como Marcelo Quiroga Santa Cruz demostró posteriormente en el Juicio de Responsabilidades que instauró contra Hugo Banzer, durante ese gobierno la corrupción y los malos manejos tuvieron mucho que ver con el debilitamiento de las empresas estatales COMIBOL y YPFB.

Paralelamente, con el afán de fortalecer a los sectores que se mantuvieron leales al esquema militarista del Gobierno, Banzer dictó medidas ilegales y muy dañinas para el erario público. Estas medidas iban en favor de las élites agrícolas exportadoras del departamento de Santa Cruz, de los mineros privados aglutinados en la Asociación de Mineros Medianos (ANMM) y de los banqueros e importadores que dominaban la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

Por último, durante su gobierno fue notorio el crecimiento del narcotráfico, en momentos en que la hoja de coca de uso tradicional comenzó a ser usada con mucha más frecuencia en la elaboración de cocaína. Muchos datos sobre la implicación directa del Presidente de facto en ese negocio, así como la de parientes cercanos y militares que ocupaban altos puestos bajo su mando, salieron a luz años después.

## Celebración del Sesquicentenario de la República y negociaciones marítimas con Chile

En noviembre de 1974, luego de haberse instaurado un Gobierno exclusivamente militar que ejerció una rápida y contundente represión contra diversos sectores sociales y políticos que se le opusieron en los siguientes meses, el presidente Banzer se sentía fuerte y consolidado. Como vimos, esto le permitió postergar el llamado a elecciones nacionales, desoyendo así los cada vez más insistentes pedidos que venían desde los diferentes sectores para retornar a la vida constitucional y democrática.

En 1975 debía conmemorarse el sesquicentenario de la República de Bolivia, coyuntura que fue aprovechada por el dictador para enarbolar un discurso triunfalista y patriotero. El objetivo de esta acción era el de proyectarse como un importante estadista e impulsor del desarrollo económico y la estabilidad política, proyección que intentó resumir en la consigna de "Orden, Paz y Trabajo" que enmarcó su gestión gubernamental. Como un aspecto fundamental de esa su pretendida imagen positiva, la mediterraneidad de Bolivia fue encarada con una inédita e importante apertura de negociaciones con el vecino país de Chile.

Pero vayamos por partes. En relación a la problemática del "retorno al mar", tema altamente sensible para el conjunto de los bolivianos, Banzer comenzó a proyectar su estrategia desde marzo de 1974, cuando tuvo un encuentro protocolar con el dictador chileno Augusto Pinochet en Brasilia. Aparentemente, durante aquel encuentro el mandatario chileno se había mostrado abierto a encontrarse en algún momento con su par boliviano para tratar el tema que, históricamente, separaba a ambos países. Al respecto, hay que recordar que en abril de 1972 se había producido un fuerte impase entre ambas naciones. Este se debió al desvió de las aguas del río Lauca por Chile para alimentar la central hidroeléctrica de Chapiquina, con el consiguiente reclamo boliviano y el aumento de las tensiones con ese país. Por lo demás, estas tensiones se repetían periódicamente desde hace un siglo, cuando entre 1879 y 1880, durante la Guerra del Pacífico, Bolivia fue invadida y acabó perdiendo su salida al mar y un extenso territorio en el Atacama.

Al retorno de su viaje a Brasilia, en el mismo mes de marzo de 1974, Banzer convocó a un grupo de ciudadanos bolivianos conocedores de la temática marítima –y expertos en el quehacer de las relaciones internacionales– a participar de una reunión a la que después se bautizó como Consulta de Cochabamba, en la que se trató el tema del retorno al mar. Poco después, el Gobierno creó

la Comisión Marítima, que recibió el mandato de estudiar el problema de la mediterraneidad de Bolivia en toda su amplitud y profundidad. Esta Comisión inició sus labores el 19 de abril de 1974, realizó 56 sesiones y concluyó sus funciones el 8 de noviembre de ese mismo año con la entrega de un informe final (Informe de Labores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Boletín Informativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Nr. 31/75, 11 de agosto de 1975).

Según ese informe, otro antecedente importante ocurrió en abril de 1974, durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada en Atlanta, Estados Unidos.

> …la delegación boliviana que concurrió al indicado evento presidida por el Canciller de la República, Gral. Alberto Soriano, obtuvo un resonante éxito al lograr que tan importante cónclave de naciones americanas reconociera en una Resolución expresa que es de interés fundamental para el Continente, la solución de los problemas que perturban la solidaridad, desvirtúan la cooperación entre las naciones americanas y amenazan la paz, y que significan obstáculos para su desarrollo económico y social, en clara referencia a nuestro problema de encierro geográfico (Informe citado, agosto de 1975).

El Informe añade que la representación boliviana "destacó que nuestra posición no entrañaba hostilidad hacia nadie y que está por encima de todo sentimiento negativo" (Ibíd.).

Tras meses de contactos secretos y gestiones de los ministerios de relaciones exteriores de ambos países, el 8 de febrero de 1975 se produjo la entrevista entre el Presidente de Bolivia Hugo Banzer Suárez y el de Chile, Augusto Pinochet. Este encuentro tuvo lugar en la localidad fronteriza de Charaña, situada en el departamento de Oruro, que entonces contaba con una población de apenas 150 habitantes, todos de origen indígena.

En el texto de la declaración conjunta suscrita por Banzer y Pinochet, el punto tres señala esto:

> …ambos mandatarios reafirman su plena adhesión a la Declaración de Ayacucho, con motivo del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, en el que se refleja fielmente un espíritu solidario y abierto al entendimiento en esta parte de América (Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia Nr.7/75, 20 de febrero de 1974).

Se estaban refiriendo aquí a la histórica declaración realizada un año antes por las autoridades de los países liberados por Bolívar, O´Higgins y San Martín. En febrero de 1974, cuando estos se reunieron para conmemorar el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho –considerada como fundamental para el triunfo final de las fuerzas independentistas contra el dominio español–, todos los países presentes firmaron un importante texto que sostenía el siguiente argumento:

> …la más amplia comprensión a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, situación que debe demandar la consideración más atenta hacia entendimientos constructivos

En consonancia con dicha declaración, en el punto cuarto de la de Charaña se lee lo siguiente:

> …ambos mandatarios (…) han resuelto que continúe el diálogo a diversos niveles, para buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan, como el relativo a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, dentro de recíprocas conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno (ïbid.).

En el quinto punto se señalaba que los dos presidentes "han resuelto seguir desarrollando una política en favor de la armonía y el entendimiento". La resolución del sexto fue "normalizar las relaciones diplomáticas entre sus respectivos países a nivel de embajadores", lo que ocurriría luego de trece años de haber estado interrumpidas.

Según Fernando Ortiz, uno de los miembros del Consejo del Mar, entre otros asuntos vitales, Banzer y Pinochet conversaron sobre diversos asuntos económicos, de cooperación y desarrollo para la planificación y ejecución de empresas conjuntas de mutuo beneficio. También trataron el tema de la preservación de la paz en el área del Pacífico sudamericano y el del equilibrio interdependiente de las soberanías. Finalmente, se refirieron a otros asuntos sociales y culturales que atañían a ambos países, como el intercambio de experiencias históricas que faciliten el progreso de ambas repúblicas, asuntos geopolíticos de envergadura para el aprovechamiento mancomunado de riquezas naturales y recursos energéticos y otros (Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nr. 6/75, 13 de febrero de 1975). Inmediatamente después del encuentro, Banzer hizo la siguiente declaración de prensa:

> Una vez más, Bolivia ha puesto de manifiesto su profundo espíritu pacifista y sentimiento de cooperación. El diálogo, que siempre hemos considerado como el instrumento más idóneo para el entendimiento entre las naciones, ahora ha sido fructífero (Ibíd.).

En un principio, la población boliviana se mostró parcialmente escéptica respecto a los resultados que se podían obtener de las negociaciones, ya que existía una larga experiencia de frustraciones en ese sentido. Por otra parte, la izquierda social y política señaló que Banzer estaba buscando distraer a la población de los problemas económicos, sociales y políticos con la promesa de retorno al mar. Al respecto, en el día del mar 1975, el Presidente boliviano dijo estas palabras:

> Los bolivianos olvidan los odios y hacen tregua a las disensiones internas, para jurar unidad y lealtad en la unánime decisión de retornar al mar (Boletín Informativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Nr. 12/75, 27 de marzo de 1975).

Los grupos opositores también dijeron que el encuentro se había producido entre dos dictadores, y que Pinochet en realidad buscaba salvar la pésima imagen que tenía en el mundo debido a la represión desatada en su país desde el golpe del 11 de septiembre de 1973. Ese día, el Gobierno democrático del socialista Salvador Allende –quien ante su inminente asesinato se suicidó en la casa de la Moneda– fue derrocado por la fuerza, y así se instauró el Gobierno militar e inconstitucional de Pinochet.

Pero el ajetreo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia continuó, lo que llevó al canciller Guzmán Soriano a convocar a una reunión de embajadores en La Paz. En la reunión, Guzmán Soriano señaló que Bolivia debía consolidar su situación de país nexo y que, por lo tanto, debía participar de los procesos de integración y desarrollo con los organismos internacionales en Sudamérica. Además, reafirmó que "el retorno al mar es el supremo objetivo de la política internacional de Bolivia". Finalmente, añadió las siguientes palabras:

> …nuestro problema marítimo no es cuestión exclusivamente tripartita entre Chile, Perú y Bolivia, sino que concierne a todo el Continente Latinoamericano (Boletín Informativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Nr. 12/75, 27 de marzo de 1975).

A nivel internacional, el "abrazo de Charaña" entre ambos mandatarios provocó inmediatas muestras de apoyo e interés, tal como lo demuestran las felicitaciones por su realización de parte de los gobiernos de Argentina, Brasil, México, Uruguay, Venezuela y Colombia. Este apoyo se hizo notar tanto a través de declaraciones oficiales como de editoriales y artículos de opinión, que fueron publicados de forma destacada en los principales medios de prensa de los respectivos países. Pero, sin duda, el más elocuente apoyo a la causa marítima boliviana provino del Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez.

Esto quedó totalmente evidenciado durante su estadía en nuestro país –del 4 al 8 de agosto de 1975– con motivo de las celebraciones del Sesquicentenario de la República de Bolivia. Durante su larga permanencia (que le permitió visitar Sucre y La Paz), Pérez recibió muchas muestras de simpatía popular, manifestando en cada encuentro con la población boliviana que apoyaba nuestra salida al mar.

Al final de su visita, el mandatario venezolano y Banzer firmaron la siguiente Declaración Conjunta:

Recuadro 43

### Fragmentos de la Declaración Conjunta firmada entre los presidentes de Bolivia y Venezuela, el 8 de agosto de 1975

PRIMERO
Ambos presidentes reiteran su adhesión a la Declaración de Ayacucho y a la comunidad latinoamericana para completar la emancipación de sus pueblos mediante la construcción de un destino propio (…) que promueva una efectiva cooperación entre ambos países dentro del Pacto Andino y con los demás países de América Latina y el mundo.

SEGUNDO
Refirman su decidido apoyo al proceso de integración del Pacto Andino (…)

TERCERO
(…) Asimismo, deciden prestar la mayor atención a la posibilidad de formar empresas multinacionales

de los países miembros del Pacto Andino y de otros países de América Latina, tendientes a impulsar el desarrollo de la región.

CUARTO
(…) el Presidente de Bolivia comparte la justa aspiración y reconoce el derecho soberano del pueblo y Gobierno de Venezuela de nacionalizar su industria petrolera.

QUINTO
Convienen en realizar esfuerzos tendientes a lograr precios justos y remunerativos para las exportaciones de los productos básicos de sus Estados (…)

SEXTO
(…) expresan su más decidido apoyo a la Reunión de Representantes Especiales de los Jefes de Estado y de Gobierno celebrada recientemente en la ciudad de Panamá, en la que sentaron las bases del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).

DECIMO SEGUNDO
Expresan su solidaridad con la Nación panameña en su justa aspiración a restituir la plena soberanía sobre la zona del Canal y manifiestan su preocupación por el estancamiento de las negociaciones que se llevan a cabo para concertar el nuevo Tratado sobre el canal.

DECIMO TERCERO
El Presidente de Venezuela, en cumplimiento de la Declaración de Ayacucho suscrita e Lima, el 9 de diciembre de 1974, *ratifica su pleno apoyo a las justas aspiraciones de Bolivia para alcanzar, a la brevedad posible, una salida soberana al Océano Pacífico mediante negociaciones inspiradas en el espíritu de solidaridad continental (cursiva nuestras).*

DECIMO CUARTO
3) El Gobierno de Venezuela reitera su decisión de ceder en favor de Bolivia, en las condiciones señaladas por su Plenipotenciario en el Acuerdo de Cartagena, la participación que le correspondería en el mercado subregional, como co-asignatario de polietileno de alta densidad (…)

4) El Gobierno de Venezuela constituirá un fondo en fideicomiso por diez millones de dólares americanos (US$. 10.000.000) a favor de Bolivia, para contribuir al financiamiento de proyectos agrícolas (…).

8) El Gobierno de Venezuela aportará el asfalto necesario para la pavimentación de la carretera Sucre-Potosí-Tarija.

Fuente: Boletín Informativo No. 31/75, del 11 de agosto de 1975.

A las celebraciones con motivo del Sesquicentenario, que consistieron en actos protocolares, desfiles cívicos, un acto central en la ciudad de Sucre –donde se firmó el Acta de la Independencia, en 1825, que fue realizado el 6 de agosto con bastante pompa–, asistieron diversas delegaciones extranjeras. Asimismo, los periódicos Presencia y Hoy realizaron ediciones especiales en las que decenas de intelectuales repasaron el pasado histórico y el presente de la nación boliviana. También fue muy importante la publicación de la Biblioteca del Sesquicentenario por parte del Instituto Boliviano de Cultura (IBC), que reimprimió obras fundamentales de historia y literatura bolivianas.

La población asistió masivamente a los actos, mostrando sincero fervor nacionalista, el que sin duda fue avivado por la posibilidad de solución a nuestro enclaustramiento, algo que el Gobierno se encargó de remarcar en cada uno de ellos. También hubo expresiones de sentimientos latinoamericanistas –en parte como gratitud a las manifestaciones de apoyo a la causa boliviana–, todo notablemente adosado de la retórica oficial. Carlos Andrés Pérez, en un discurso encendido en la Casa de la Libertad, se refirió con estas palabras a la causa marítima boliviana:

> Bolívar habla frente a las banderas unidas de Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. La escucha América. (…) Que hable de nuevo esta voz en nuestra América. La voz de la unidad y el desprendimiento. Que hable desde el mar de Bolivia (Boletín Informativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Nr. 32/75, 15de agosto de 1975).

Por su parte, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunido en Washington el 5 de agosto de 1975, emitió el siguiente comunicado con motivo del Sesquicentenario de la República de Bolivia:

> La situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia es motivo de preocupación continental, por lo cual todos los estados americanos ofrecen cooperar en la búsqueda de soluciones que, de acuerdo con los principios del derecho internacional y especialmente los contenidos en la Carta de la OEA, ayuden a Bolivia a remover las dificultades que ha acarreado la situación de mediterraneidad para su desarrollo económico y social, conciliando intereses recíprocos y promoviendo entendimientos constructivos (Ibíd.).

Concluida la celebración de agosto, aún continuaron ocurriendo importantes pronunciamientos favorables a la demanda boliviana. Entre estos destacaron dos. El primero, fue la llegada a Bolivia del Presidente de Panamá, Omar Torrijos, quien sostuvo una reunión con Banzer en Santa Cruz de la Sierra. El quinto punto de la declaración conjunta, firmada por ambos mandatarios, dice esto:

> El Jefe de Gobierno de Panamá reitera su solidaridad y apoyo a Bolivia en su lucha porque se asegure una salida propia y soberana al Pacífico como una contribución a la paz, la justicia y el buen entendimiento en esta parte del Continente Americano.

En cambio, en el cuarto punto Bolivia declaró su solidaridad "por la causa del gobierno y pueblo panameño en la cuestión del Canal de Panamá, que se orienta a ejercitar plenamente su soberanía y jurisdicción en todo su territorio sin exclusión alguna".

El segundo pronunciamiento fue la declaración del Canciller Miguel Ángel de la Flor Valle, del Perú, quien en una entrevista con su par boliviano Guzmán Soriano –realizada el 26 de noviembre de 1975– afirmó lo siguiente:

> Me es particularmente grato reiterar ahora, al llegar a esta querida patria Boliviana, la solidaridad y la más amplia comprensión del Perú a la justa aspiración de Bolivia para superar definitivamente el problema de su mediterraneidad (Boletín Informativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto N. 47/75, 28 de noviembre de 1975).

Pero las ilusiones boliviana comenzaron a desvanecerse en el mes de diciembre de 1975, luego de que comenzara a filtrarse en la prensa boliviana y chilena la noticia de que el Gobierno chileno cedería un corredor de 300 km en Arica a Bolivia, pero a cambio de que ese país realice compensaciones territoriales. La compensación señalada correspondía a la provincia de Lípez, ubicada en la región occidental del departamento de Potosí y que era muy rica en minerales.

Inmediatamente surgieron reacciones negativas en todo Bolivia, incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas, sobre todo de parte de militares en retiro. Pero los principales portavoces del disgusto fueron los partidos políticos opositores, como MNR, FSB, PDC. Por su parte, el MIR distribuyó miles de folletos que tenían el slogan "a canjear a su abuela, carajo". También protestaron airadamente los sindicatos clandestinos de diferentes sectores obreros, populares y campesinos. Mientras tanto, Banzer llegó a señalar que si las negociaciones fracasaban renunciaría a la Presidencia de la República (Mensaje a la Nación, Hoy, 15 de diciembre de 1975),

En medio de profusas especulaciones, el embajador boliviano en Chile, Guillermo Gutiérrez Vea Murguía, llegó a La Paz el 20 de diciembre de ese año, portando un sobre cerrado que contenía la respuesta oficial del Gobierno chileno al planteamiento boliviano para obtener una salida al mar. Suelto de lengua, el embajador pronunció la siguiente frase altisonante ante la prensa: "Con toda modestia, con toda humildad, le digo a mi pueblo que tiene su salida al mar" (Boletín del Ministerio de relaciones Exteriores y Culto Nr.51/75, 26 de diciembre de 1975).

Dos días después, Banzer se dirigió a la nación, y en su mensaje reiteró que su gran logro había sido "unificar el pensamiento nacional a través de la consulta realizada en Cochabamba", de la que resaltó lo siguiente:

> …se obtuvo la comprensión continental y se preparó, de esa manera, el encuentro de Charaña, como una de las vías prácticas que nos permita el diálogo y la negociación directa para identificar fórmulas de solución al enclaustramiento de Bolivia (Ibíd.).

Sobre la respuesta oficial chilena, que era lo que verdaderamente importaba, dijo textualmente:

> …el Gobierno de Chile ha decidido otorgar a Bolivia una costa marítima al Norte de Arica con un territorio que la conecte, con transferencia de soberanía (…). Debo informar también al pueblo de Bolivia que la respuesta chilena, como se esperaba, considera el canje de territorios equivalentes que no altere la extensión territorial de ambos países, ni su riqueza ni su seguridad.

Concluyó indicando que el Gobierno estudiaría "la proposición con responsabilidad", pero no rechazó explícitamente el tema del canje y, más bien, indicó que la propuesta chilena "constituye una base global aceptable de negociación" (Ibíd.).

Pero para el pueblo boliviano el canje territorial era totalmente inaceptable, y esa voz se

pronunció desde todos los rincones del país a través de las distintas organizaciones sociales, cívicas y políticas, además de los universitarios, intelectuales, exiliados y otros. En todo caso, las voces más radicales fueron las del departamento de Potosí.

La esperanza boliviana volvía a truncarse y, tras meses de desentendimientos entre las cancillería chilena y boliviana, finalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países volvieron a romperse. Esto ocurrió el 17 de marzo de 1978, y tuvo a Bolivia como el protagonista de ese hecho. Para aquel entonces, Banzer vivía sus últimos meses en el Palacio de Gobierno.

## La lucha por la autonomía universitaria y vinculación del movimiento universitario con los sectores populares

El fracaso de las negociaciones marítimas con Chile fue un duro golpe para el Gobierno de Banzer. El mandatario había confiado en que la solución de este tema histórico, altamente sensible para los bolivianos, iba a conseguir que el pueblo le brinde el apoyo mayoritario que no había podido lograr desde que ascendió al poder mediante el golpe de Estado de 1971.

En realidad, incluso contando con un fuerte respaldo del sector campesino en los primeros años de su gobierno, Banzer nunca gozó de la simpatía popular. Por otra parte, pese al ejercicio constante de la represión contra diversos sectores, tampoco tuvo tranquilidad para gobernar. Los años de 1975 y 1976 –sobre todo éste último– fueron decisivos para su deterioro en el poder, pues la acumulación del descontento social alcanzó expresiones más organizadas, y los conflictos desatados por el sector disidente fueron más contundentes y radicales. Y aunque universitarios, mineros y sectores populares en general sufrieron duras derrotas coyunturales, ya era evidente que el fin de la dictadura comenzaba a asomar.

Uno de los sectores sociales que contribuyó de manera importante al desgaste de la dictadura fue el movimiento universitario, que vivió una de sus etapas históricas más significativas. Este sector persistió en la lucha por la vigencia de la autonomía universitaria, cercenada por la dictadura, y se vinculó con los sectores obreros, campesinos y populares.

Como vimos en el primer punto de este capítulo, la represión gubernamental fue practicada contra este sector ni bien estalló el golpe de Estado, en agosto de 1971. Esta no solo se tradujo en la dolorosa pérdida de vidas de jóvenes estudiantes, en el apresamiento de decenas de ellos, en el exilio y la persecución de dirigentes y militantes políticos y otros abusos, sino que también tuvo profundas consecuencias en el plano académico.

Desde el golpe de Estado hasta octubre de 1972 –durante catorce meses–, las universidades estuvieron cerradas, con el consiguiente perjuicio para sus estudiantes. Cuando se reabrieron, todo lo logrado con la revolución universitaria de 1970 fue echado por la borda. El régimen se mostró decidido a cortar de cuajo la identificación de las Casas Superiores de Estudio con las diversas corrientes de izquierda y los intereses populares. Para garantizar ello, obligó a catedráticos y estudiantes a demostrar que no tenían un pasado "extremista" o "subversivo" para poder concurrir a sus aulas. Al respecto, el 1 de septiembre de 1972, el presidente del CNSS dijo que no serían recibidos los catedráticos que "destruyeron la Universidad, los que alteraron el orden natural de la vida y actividad académica" (Presencia, 2 de septiembre de 1972). Para ese momento, de todos modos, la gran mayoría de los profesores que habían sido parte de la revolución universitaria estaban presos o vivían en el exilio, al igual que las máximas autoridades del periodo previo al golpe. Entre ellos se encontraba Pablo Ramos, rector de la UMSA.

El 17 de junio de 1972, el Gobierno dictó la nueva Ley de Universidades y señaló que las clases se reanudarían gradualmente. Ese mismo día anunció la creación del CNSS, una instancia de coordinación de todas las universidades estatales a nivel nacional que estaba encargada de hacer cumplir las nuevas políticas universitarias. La CNSS fue dirigida por personajes nombrados a dedo que eran afines al Gobierno. Paralelamente, las organizaciones universitarias como la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y las federaciones universitarias locales (FUL), que en años anteriores se consolidaron como instancias democráticamente elegidas para ejercer el cogobierno docente estudiantil, fueron proscritas. En su lugar aparecieron grupos de dirigentes autonombrados y afines a la dictadura que se arrogaron la representación estudiantil –tal fue el caso del célebre del falangista Oscar Kellenberger en la UMSA–, pero que nunca alcanzaron legitimidad en la comunidad universitaria.



Figura22.ElmovimientouniversitarioseenfrentóalgobiernodeBanzerporlaautonomíauniversitariaysufriólarepresiónmilitar.
Fuente: Periódico Presencia.

Reabierta la UMSA bajo el mando de Felipe Hartman y Mario Aguilar Zenteno –quienes fueron posesionados el 12 de septiembre de 1972 como Rector y Vicerrector respectivamente–, la reacción estudiantil no se dejó esperar ante los diversos atropellos a la autonomía universitaria. Así, uno de los primeros y más importantes conflictos surgió en los primeros días de julio de 1973, y tuvo que ver fundamentalmente con la exigencia de reorganización de los organismos estudiantiles conculcados. Pese a que este fue negado, la CUB y la FUL oficialistas fueron desconocidas por asambleas estudiantiles realizadas contra viento y marea. En estas asambleas se constituyó un Comité Interfacultativo a partir de la organización de comités de base de cada carrera, que fueron elegidos democráticamente. Si bien ni los comités de base ni el Comité Interfacultativo fueron reconocidos por las autoridades, pronto se constituyeron en los organismos estudiantiles apoyados y legitimados por las bases del movimiento universitario.

A los pocos días, el ejemplo de la UMSA ya había cundido en otras universidades del país, y así se consiguió reestructurar la máxima instancia estudiantil a nivel nacional (CUB), logro alcanzado en una reunión realizada en La Paz, el 7 de julio de 1973. De allí surgieron los objetivos de lucha que guiarían el accionar del movimiento universitario hasta el fin de la dictadura. Entre estos objetivos se encontraban el desconocimiento de la nueva Ley de Universidades, la restitución del cogobierno paritario docente-estudiantil, la plena vigencia de la autonomía universitaria, la realización de elecciones democráticas para las autoridades universitarias, la vigencia de la CUB y las FULes, respeto a la carrera docente y elección de catedráticos por concurso de méritos, entre otras. Además, los estudiantes volvieron a manifestar su total identificación con la lucha de los sectores obrero-populares, lo que llevaron a la práctica en los siguientes años. Pero a esto nos referiremos más adelante.

Entre 1974 y 1975, al mismo tiempo que siguieron desatándose conflictos relacionados con las demandas propiamente universitarias, el movimiento estudiantil mostró amplia consecuencia y solidaridad con todos los sectores sociales que se vieron enfrentados a la dictadura. Su manifestación práctica y discursiva en apoyo a los campesinos masacrados en el valle alto de Cochabamba, contra la intervención militar a las minas a inicios de 1975, por la vigencia de la FSTMB y la COB, por el respeto a las organizaciones independientes de campesinos y a favor de las demandas específicas de otros sectores populares, entre otros, fue una de las que más se hizo sentir a nivel nacional. Al mismo tiempo, el movimiento universitario incorporó con fuerza la demanda del retorno a la democracia, el cese de las persecuciones políticas, la amnistía política y la vigencia de las libertades ciudadanas. Esto, como veremos, le permitió ser un actor central en los acontecimientos de diciembre de 1977 y enero de 1978 a los que nos referiremos más adelante.

En diciembre de 1975, luego de que el Gobierno militar decretara –por la presión generalizada– una amnistía política que resultó

ser totalmente insuficiente, el movimiento universitario volvió a la carga. El 22 de enero de 1976, una centena de presos políticos –de los cuáles 24, como José Ortuño Herbas, Fernando Alvarez Plata, Jaime Burgos, Edgar Herbas y Luis Barrios, eran universitarios– inició una huelga de hambre en sus respectivos centros de detención, exigiendo su liberación. Inmediatamente, los centros de estudiantes de la UMSA les manifestaron su solidaridad y decretaron un paro activo, que consistió en la realización de bloqueos de la avenida Villazón –situada frente a la UMSA– y movilización permanente.

El movimiento universitario, aglutinado en el Comité Interfacultativo, se anotó un importante triunfo al conseguir que, el 3 de febrero de 1976, el Gobierno ponga en libertad a 14 universitarios. Pero como aún otros continuaban detenidos –por ser considerados de mayor peligro para el régimen–, el conflicto continuó con paros escalonados, manifestaciones y bloqueos de calles que cada vez contaban con mayor participación estudiantil. Frente a ello, la CNSS apeló al Ministerio del Interior, que se encargó de la represión policial en las calles. La intervención de la policía fue brutal; se usaron abundantes gases lacrimógenos, agua colorada, perros e incluso alambres utilizados para golpear a los jóvenes.

Al considerar que las autoridades habían violado flagrantemente la autonomía universitaria al pedir la intervención directa del Ministerio de Gobierno, el 13 de febrero el movimiento estudiantil exigió la renuncia del Rector y el Vicerrector y decretó un paro de 48 horas. Frente a esta determinación, la policía intervino los predios de la UMSA y buscó impedir la realización de asambleas estudiantiles, ocasionando varias lesiones y dejando a decenas de detenidos (Presencia, 14 de febrero de 1976).

Los excesos policiales y la legitimidad y justicia de las demandas estudiantiles no solo provocaron la solidaridad de otras universidades del país, sino la del movimiento minero y de otros sectores populares. Para evitar que el conflicto adquiera mayores proporciones, el 19 de ese mismo mes, las autoridades dispusieron el cierre de la UMSA hasta que, según ellos, se restablezcan las condiciones propicias para su apertura.

Pero nada amedrentó a los estudiantes, que –al estilo de las "sentadas" practicadas por el movimiento negro y estudiantil en los Estados Unidos a fines de la década de los sesentas– todos los días centenas de estudiantes llegaban al Monoblock de la UMSA para manifestarse pacíficamente. Claro que cuando eran atacados por la policía se defendían con piedras o devolviendo los gases arrojados por sus represores. La combatividad alcanzada era también alimentada por una nueva generación de dirigentes, la gran mayoría de los cuales estaban vinculados a los partidos de izquierda, que actuaban desde la clandestinidad.

Similares situaciones se vivieron en otras universidades, como en las de Cochabamba, Potosí, Oruro, Beni y Santa Cruz. En la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba, el 22 de febrero hubo choques violentos entre estudiantes y policías, tras lo cual decenas de jóvenes decidieron ingresar en una huelga de hambre (Presencia, 23 de febrero de 1976). En Santa Cruz, los estudiantes movilizados debían volver a sus casas acompañándose en grupos, ya que constantemente sufrían el amedrentamiento y golpizas de parte de grupos de paramilitares de derecha, en gran medida compuestos por militantes falangistas. Además, por primera vez desde que se iniciaron los conflictos entre el Gobierno de Banzer y el sector universitario, los estudiantes de la Universidad Católica, considerados hijos de la élite y jóvenes despolitizados, intervinieron en la lucha. Para ellos las cosas eran más difíciles, pues carecían de experiencia organizativa de las universidades públicas, y sus autoridades académicas actuaban con mayor rigurosidad, tomando decisiones como la expulsión de revoltosos de sus instalaciones o el establecimiento de diverso tipo de sanciones.

A fines de ese mes, Banzer determinó la libertad de 53 de los 60 universitarios detenidos en las últimas semanas. Unos días después, el 3 de marzo, aceptó que el CNSS inicie el diálogo para atender el pedido de democratización interna, que consistía en el libre funcionamiento de los organismos estudiantiles y la vigencia de los Consejos facultativos y universitarios. Era notorio que el conflicto se le estaba yendo de las manos. Concluidas las negociaciones, se acordó que esa democratización se iniciaría con la renovación de los centros de estudiantes de carreras y facultades a partir de junio, el descongelamiento de los fondos estudiantiles, la entrega de bienes y locales estudiantiles expropiados desde 1971. También se dieron garantías para el funcionamiento de las representaciones estudiantiles, el concurso de

méritos para docentes provisorios con participación estudiantil, la continuidad de Politécnicos, Humanidades y Ciencias de la Educación y otros puntos favorables al movimiento estudiantil (Presencia, 10 de marzo de 1976).

Los acontecimientos de inicios de 1976 se convirtieron en un resonante triunfo para el movimiento universitario, que consiguió el fortalecimiento de sus organizaciones. Ello le permitió seguir movilizándose en torno a demandas particulares, así como intervenir en acontecimientos sociales y políticos de carácter nacional. En junio de 1976, durante la huelga de los trabajadores mineros, el movimiento estudiantil manifestó su solidaridad con la causa. Además, los estudiantes de secundaria en rechazaron el Decreto de Obligatoriedad del Servicio Militar y pidieron la repatriación de los restos del expresidente Juan José Torres, asesinado en Buenos Aires, pues entendían aquella gesta como algo fundamental para el retorno a democracia.

En cada una de esas luchas, el movimiento universitario tuvo que enfrentar la represión, las constantes detenciones, la clausura de las actividades académicas y las intervenciones policiales a sus predios, todo en flagrante violación de la autonomía universitaria. Pero, al interior de las universidades, aquellos eran tiempos de mística, de entrega a los ideales y de unidad por encima de las naturales divergencias ideológicas que estaban presentes.

El enemigo común era uno solo: la dictadura banzerista. Contra ella este sector de clase media utilizó todos los medios a su alcance; más aún, su lucha fue a favor de la libertad de expresión, del derecho a la asociación, de una educación liberadora y de la posibilidad de construir un país más justo para todos los bolivianos.

## El fin de la dictadura comienza a asomar: Congreso minero de Corocoro y muerte de Juan José Torres

Desde 1975, en los diferentes distritos mineros ya estaban en pleno funcionamiento los Comités de Base, que trabajaban clandestinamente para contrarrestar a los coordinadores laborales que impuso el oficialismo. La conciencia de clase de este combativo sector había resistido los embates de la dictadura. Así, cuando el XV Congreso de Trabajadores Mineros de Bolivia se llevó a cabo, durante el mes de noviembre de 1975 en la ciudad de Potosí, el Secretario General de la FSTMB, Víctor López, dijo estas palabras en el discurso inaugural:

> El proceso revolucionario del pueblo, pese a quien pese, sigue su curso y pese a los altibajos que siempre se le presentan, seguirá adelante, porque el espíritu nuevo del hombre de las minas, de las fábricas, de los talleres, del campo, de todos los confines de la Patria, está inspirado en un contenido revolucionario (…). [Sostenemos] la voluntad de permanecer en nuestras trincheras de combate, manteniendo siempre en nuestra mente y en nuestra voluntad el anhelo indeclinable de ir hacia la consecución de una sociedad más justa, más libre (SIDES, XV Congreso de Trabajadores Mineros de Bolivia).

Un año después, en abierto desafío a Banzer, el primero de mayo de 1976 logró reunirse el XVI Congreso de Trabajadores Mineros de Bolivia –uno de los más importantes de la historia de ese sector–, que fue realizado en la mina de Corocoro. Los delegados decretaron el "estado de emergencia" mientras duraron las deliberaciones con el siguiente argumento:

> …preservar el derecho de los trabajadores a deliberar amplia y democráticamente los problemas que interesan y preocupan a los trabajadores mineros bolivianos frente a las limitaciones imperantes (Presencia, 3 de mayo de 1976).

Sus conclusiones y su Plataforma de Lucha fueron tomadas como una guía para todos los sectores afiliados a la COB y para los partidos de izquierda. El Congreso fue, además, visto como un momento fundamental en la recuperación de las libertades sindicales, pues se realizó pese a la tajante oposición gubernamental, y ratificó a los mineros como la vanguardia del movimiento obrero y popular.

En la Comisión Política del Congreso se propuso mantener vigente la tesis socialista aprobada en el V Congreso de la COB de 1970, noción que fue aprobada por la mayoría –aunque contó con algunas voces disidentes, especialmente provenientes de los sindicatos de Huanuni, Colquiri y Matilde. Aprbada por el plenario, pasó a discutirse la Plataforma de Lucha, que fue aprobada por unanimidad. Dicha Plataforma fue elaborada con base en los puntos presentados por varios sindicatos, y también recogía el debate de la Comisión Económica.

Recuadro 44

## Plataforma de lucha aprobada en el Congreso Minero de Corocoro de 1976

1. Aumento de sueldos y salarios, escala móvil de acuerdo al costo de vida.
2. Amnistía general e irrestricta para perseguidos, encarcelados y retorno de exilados.
3. Defensa de las riquezas naturales como el gas, petróleo, hierro del Mutún, reversión de todas las reservas concedidas a los monopolios. Defensa de la nacionalización de las minas. Ante amenaza de despidos y masacre blanca en minería privada, plantear su estatización.
4. Solidaridad con la lucha de nuestros hermanos campesinos contra el impuesto único agropecuario y contra el Pacto Militar-Campesino. Fortalecimiento de la alianza de obreros y campesinos.
5. Lucha por el restablecimiento de la autonomía universitaria, el cogobierno paritario, la cátedra libre y demás conquistas democráticas. Fortalecimiento del Pacto Minero-Universitario-Estudiantil.
6. Rechazo de toda negociación por una salida al mar que comprometa a un nuevo desmembramiento territorial. Denuncia de toda diplomacia a espaldas del pueblo.
7. Retiro del Ejército de los centros mineros de Catavi, Siglo XX y otras aledañas a estos, por ser causa constante para la intranquilidad de la familia minera.
8. Lucha por la real vigencia de los sindicatos en todo el país: la FSTMB, la COB. Rechazar toda intromisión paternalista, vertical o corporativa. Lucha contra el "sindicalismo libre" amarillo de la ORIT. Rechazo de los coordinadores.
9. Rechazo a las medidas emanadas de los decretos del 9 de noviembre de 1974; Ley del Servicio Civil Obligatorio, Ley de Seguridad del Estado.
10. Solidaridad con la Iglesia católica progresista y por el restablecimiento de la Comisión Vaticana Justicia y paz.
11. Solidaridad con todos los pueblos del mundo contra el fascismo, el imperialismo y las oligarquías nativas.
12. Ratificar como secretario Ejecutivo al compañero Juan lechín Oquendo y dirigentes compañeros Simón Reyes y Filemón Escóbar en el CEN de la FSTMB y exigir garantías al Gobierno para su inmediato retorno al país.
13. Rechazar el nuevo Código del Trabajo que pretende imponer el Gobierno, al margen de la voluntad de la clase trabajadora y con el claro propósito de corporativizar al movimiento obrero.
15. Luchar por la derogatoria del Decreto por el que levanta las reservas fiscales.

Fuente: SIDES.

En cuanto a la elección de un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, como se puede advertir en el punto doce, Lechín, Reyes y Escóbar fueron reelegidos por consenso. El Congreso finalizó el siete de mayo, a las 7:30 de la noche, luego de resolver fijar 30 días de plazo para que las empresas de la minería estatal y privada atiendan su pedido de nivelación salarial –de 30 a 80 Bs.–; de lo contrario, irían a la huelga. Pero cuando estaban a punto de iniciarse las conversaciones con COMIBOL, ocurrió un hecho inesperado que transformaría la coyuntura y precipitaría la huelga minera: el asesinato en Buenos Aires del ex presidente Juan José Torres, que, como ya vimos, cogobernó el país entre 1970 y 1971 junto a la Asamblea Popular.

El 4 de junio de 1976, toda la prensa nacional anunciaba su muerte, luego de haber sido secuestrado –en situaciones poco claras y que, evidentemente, el régimen banzerista quería ocultar– para posteriormente ser arrojado debajo de un puente, ya sin vida. Al conocerse la noticia, la FSTMB decretó inmediatamente un paro de 24 horas como repudio al hecho, publicó un documento en el que resaltaba el comportamiento a favor de los sectores populares durante su mandato y pedía a su viuda, Emma Obleas, que su cuerpo sea traído a Bolivia para ser enterrado en las minas.

Pocos días después se informó que Juan José Torres había abogado en Buenos Aires por la organización de:

> [Una] gran alianza de izquierda nacional" para luchar contra el régimen de Banzer, en un llamamiento dirigido a las "organizaciones obreras y

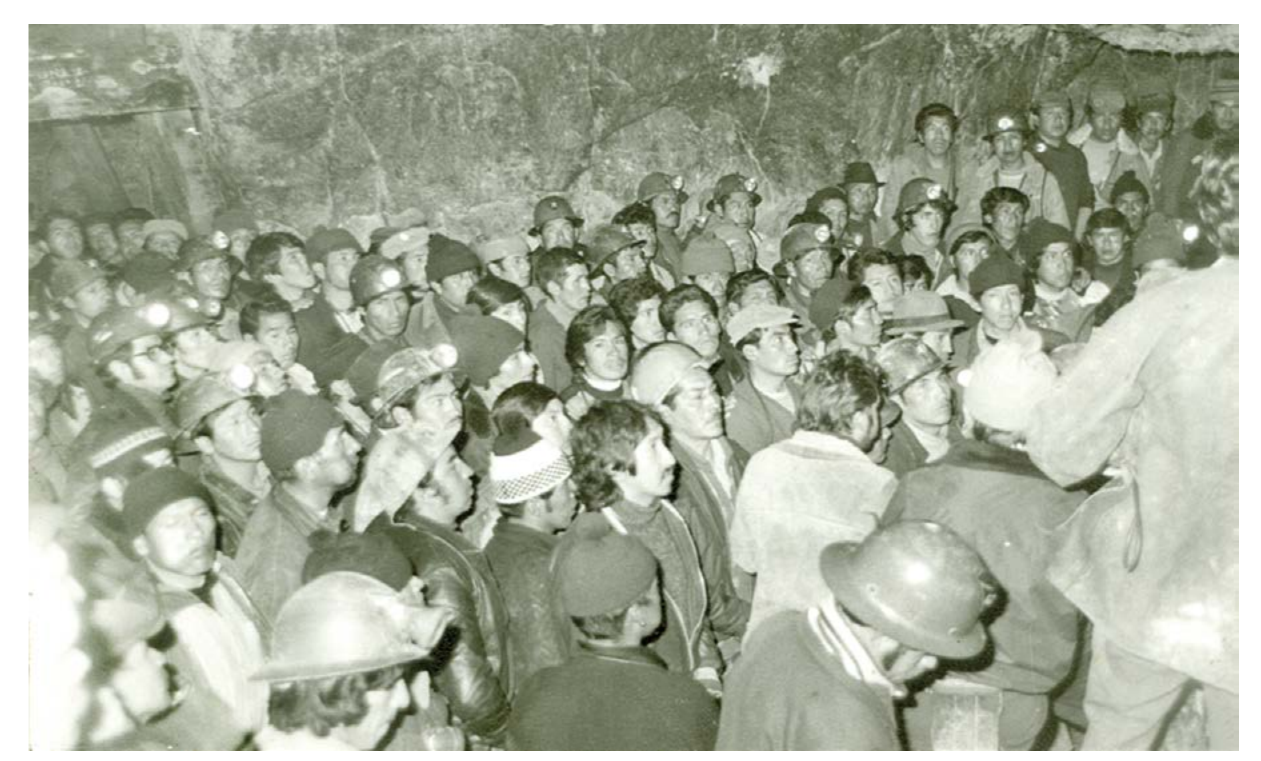


Figura 23. El movimiento minero fue protagonista en el retorno a la democracia.
Fuente: Periódico Presencia.

> populares, al campesinado, a mis camaradas de las FF.AA. y a los partidos políticos verazmente revolucionarios, (…) contra el régimen proimperialista [y para viabilizar el ascenso de un] Gobierno democrático, popular y revolucionario.

Torres había llegado a Argentina a principios de esa semana y mantenido una entrevista con Cámpora. Allí también había ratificado su posición respecto al que "el proletariado debe constituirse en la clase hegemónica de la revolución democrática nacional" y que era necesario el concurso progresista de las Fuerzas Armadas (Presencia, 21 de mayo de 1973).

La investigación de Martín Sivak, publicada bajo el nombre de "El asesinato de Juan José Torres" (1997) confirma lo que se sospechó desde el momento en que se conoció su muerte, es decir, que Hugo Banzer había tenido que ver directamente en ella. El 2 de junio de 1976, dos días antes de la confirmación de su muerte, la viuda de Juan José Torres había denunciado en Argentina la desaparición de su esposo desde las 8:30 de la mañana del día anterior. Dos días después se hallaron sus restos con tres tiros en la cabeza, en un lugar ubicado a 100 km de Buenos Aires. De acuerdo a algunas versiones, cuatro individuos lo habían ultimado debajo de un puente. Tenía 55 años y cuatro hijos. Vivía en Argentina desde 1973, y se convirtió en la cuarta figura extranjera asesinada en ese país; después del chileno Carlos Prats y su esposa y de dos legisladores uruguayos.

En un principio, Banzer anunció la repatriación de sus restos a Bolivia. Sin embargo, pronto endureció su posición, posiblemente temiendo que se produzcan masivos actos políticos, ya que campesinos kataristas, sindicatos obreros, sectores de clase media, organismos de Derechos Humanos y otros sectores habían pedido que sea velado en la Federación de Mineros y en la Universidad Mayor de San Andrés. Así, el 6 de junio, Banzer afirmó que los condicionamientos eran "inadmisibles" (Presencia, 6 de junio de 1976). Torres fue enterrado en México, donde se juntó medio centenar de exilados latinoamericanos y bolivianos para recibir su cadáver.

Aunque es evidente que el popularmente llamado "J.J." contaba con la simpatía de los trabajadores mineros, su muerte fue también utilizada como bandera política en un momento crucial de confrontación con el Gobierno que se abrió en el Congreso de Corocoro. Las dirigencias sindicales

no midieron cabalmente sus fuerzas y precipitaron un movimiento huelguístico que, aunque heroico y cargado de combatividad, los llevó a una de las más duras derrotas de su historia.

El Gobierno aprovechó la huelga de 24 horas para militarizar –desde el 10 de junio– a seis distritos mineros: Huanuni, Colquiri, Catavi, Siglo XX, Corocoro y Quechisla, detener a 32 trabajadores mineros –entre los que se encontraban los dirigentes Víctor López, Sinforoso Cabrera, Arturo Crespo y Oscar salas– y allanar abusivamente numerosos domicilios de los campamentos mineros. Esta intervención militar provocó la declaratoria de huelga general indefinida en Siglo XX y Catavi. Los dirigentes del sindicato y de las diferentes secciones de la mina –tal como durante el gobierno de Barrientos– decidieron permanecer en el interior de esta, en completa oscuridad (por el corte de energía realizado por los militares) y sin alimentos.

Desde allí emitieron un documento que, en algunas de sus partes, dice:

> Firmeza y unidad alrededor de las direcciones sindicales y delegados de base: acatamiento a las instrucciones de los cinco sindicatos en huelga; protección a los perseguidos y ayuda a los familiares de los apresados (…). Confraternización con los soldados y oficiales jóvenes, explicarles nuestra causa, ayudar a la tropa con alimentos, hacer saber a las ciudades sobre la huelga, pidiendo la intervención de la Iglesia y la Cruz Roja Internacional: ahorrar víveres y exigir avío normal (Presencia, 13 de junio de 1976).

Al conocer el hecho, los soldados del regimiento Challapata resguardaron las bocaminas de Siglo XX, impidiendo el ingreso o salida de los dirigentes y obreros que permanecían allí desde el miércoles 9 de junio. Recién en ese momento reaccionaron con fuerza los otros distritos mineros y, el 14 de junio, la huelga general e indefinida fue decretada en toda la minería nacionalizada a partir de las 0 horas de ese día. Los lameros, locatarios, cooperativistas y sindicatos de la minería privada fueron convocados para unirse a la medida. Los planteamientos eran los mismos, aunque remarcaron el rechazo a los coordinadores laborales y pidieron una vez más "mantener la unidad serena en esta hora difícil y no responder a la provocación de los agentes del Gobierno incrustados en las filas obreras" (Ibíd.).

El 15 de junio, todas las minas nacionalizadas fueron declaradas zona militar ante la "acción disociadora y subversiva de elementos al servicio del extremismo internacional". A tiempo de acusar a los obreros del subsuelo de atentar contra la economía nacional, se advirtió que no se pagarían los días no trabajados. Pese a ello, el 16 de junio, los mineros de Catavi, Siglo XX, San José, Unificada, Huanuni, Quechisla, Corocoro, Caracoles y Bolívar cumplieron disciplinadamente la huelga indefinida. Por su parte, los militares llamaban persistentemente a través de las sirenas y radios en su poder para que los trabajadores reanuden sus labores. En el Norte de Potosí, impulsaron la concentración de campesinos oficialistas para que rodeen los centros mineros, con la advertencia de ingresar en ellos si continuaba la medida. También se anunció que 1.500 desocupados estaban dispuestos a ingresar a trabajar y reemplazar a los 7.000 obreros en huelga en ese distrito.

El 17 de junio, los titulares de prensa anunciaron la militarización de las capitales de los departamentos de Oruro y Potosí, la aplicación desde ese momento de la Ley de Seguridad del Estado y el Código de Justicia Militar. Por otra parte, el Gral. Gastón Gambarte asumió la autoridad máxima de ambos distritos (Presencia, 17 de junio de 1976).

Como parte de las medidas, se dictaron distintas disposiciones para la zona militar: prohibición de portar armas, control de documentos de identificación, intervención de los militares ante desórdenes, prohibición de expendio de bebidas alcohólicas y actos públicos de 24 horas a 06 de la mañana, control a bancos, control del transporte público, etc. (Ibíd.). Desde ese momento se produjeron nuevos apresamientos, allanamientos, abusos y amenazas, lo que comenzó a provocar el retroceso paulatino del movimiento.

La FSTMB clandestina solicitó la mediación de la Cruz Roja, la Iglesia Católica, el Acuerdo Prensa-Radio y la Confederación de Profesionales. Al mismo tiempo, envió notas a la Asamblea General de la OEA –que se realizaba en Chile– y a la OIT, reclamando por su situación, y obtuvo algunas muestras de solidaridad. Pero el Ministro del Interior rechazó toda mediación el 19 de junio y, el de Trabajo –el General Vargas Salinas– viajó a Siglo XX, Catavi y Huanuni para entablar un "diálogo amistoso" con los obreros.

La huelga decretada tras la finalización del diálogo, que se puso en práctica unas semanas después, fue respondida con una nueva ola represiva. Decenas de dirigentes fueron encarcelados, residenciados en zonas alejadas de la geografía nacional o expulsados del país. Cientos de trabajadores de base fueron echados de sus fuentes de trabajo, sin derecho a indemnización. Los Comités de Base fueron prohibidos; las sedes sociales y las radios sindicales fueron intervenidas, allanadas y destruidas. Finalmente, el Ejército ocupó las minas, instaurando en ellas un auténtico régimen de terror que fue soportado valientemente por las familias mineras que, contra viento y marea, encontraron formas de seguir resistiendo. El golpe final fue dado por Banzer el 20 de junio de 1976, cuando 112 personas fueron detenidas en todo el país con el objetivo de conjurar el "último plan subversivo".

Pero a pesar de la derrota, si se mira en perspectiva, los acontecimientos de junio de 1976 –sobre todo a raíz de la escalada represiva desatada por el régimen– fueron determinantes para que el movimiento obrero centre desde ese momento su lucha en el retorno a la democracia. En torno a ese objetivo, y con una persistencia admirable en la reestructuración de sus organizaciones sindicales y en la búsqueda de alianzas con otros sectores populares –sobre todo con los universitarios pero incluso con la Iglesia católica y la protestante–, a fines de 1977 acaudilló la huelga de hambre que se convertiría en el fin de la dictadura banzerista.

## En pos del retorno a la democracia y elecciones nacionales de 1978

Cuando, a fines de 1975, el Gobierno anunció que iba a dictar una amnistía política, se publicó en la prensa una lista de 119 detenidos políticos a ser liberados. De ellos, 30 estaban en el Panóptico, 17 en Chonchocoro, una (Mirna del Río) en la cárcel de mujeres, 42 presos en el DOP, 19 en Viacha y 5 cumplían con arresto domiciliario (Presencia, 10 de diciembre de 1975). No cabe duda de que la amnistía no expresaba al conjunto de las personas privadas de libertad en todo el país, cifra que el régimen ocultó celosamente. Por otra parte, la lista estaba llena de errores intencionados e, incluso, se denunció que en ella figuraban niños y fallecidos en años anteriores. Como sabemos, de todos modos algunos detenidos fueron liberados en esa Navidad.

En una información posterior, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) señaló que, entre 1974 y 1977, el Gobierno había asesinado al menos a 200 personas, había apresado a 14.750 y 19.140 habían salido al exilio. Por su parte, en un spot televisivo de 1994, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) ajustó y completó los datos, indicando que durante el septenio banzerista se habían producido 57 asesinados, 33 desapariciones forzadas, 14 campesinos muertos en enero de 1974 en Tolata, 3 militares asesinados, 37 bolivianos desaparecidos en Argentina, 6 bolivianos muertos en Argentina y 4 bolivianos desaparecidos en Chile. Los asesinatos y desapariciones en el exterior ocurrieron dentro del marco del tristemente célebre Plan Cóndor. Durante el mismo periodo, 68 periodistas se vieron obligados a dejar el país y 32 fueron detenidos. Por otra parte, 17 radios, un diario y un semanario fueron clausurados, penalizados o sus instalaciones fueron destruidas (Lavaud, 2003:176).

En relación al sector de los periodistas, es importante remarcar que tanto la Asociación Nacional de Prensa (ANP), que agrupaba a los propietarios de los periódicos, como la Asociación Nacional de Radiodifusión (ASBORA), tuvieron una destacada actuación de denuncia durante la dictadura, o al menos ofreciendo información más objetiva en torno a las situaciones de represión, conflictos sociales y otras conflictos. Una tarea más consiente y arriesgada en ese camino fue encarada por las diez escuelas radiofónicas católicas, agrupadas desde 1965 en la red de Escuelas Radiofónicas Bolivianas (ERBOL). Ni qué decir de la labor que cumplieron las cadenas de radioemisoras mineras, que existían desde tiempos de la Revolución Nacional y que pertenecían a los sindicatos de trabajadores del subsuelo. Por el contrario, desde 1974, cuando el sistema de televisión fue traído a Bolivia por el régimen, el único canal en funcionamiento –obviamente de carácter estatal– buscó desinformar permanentemente a la población. El discurso que manejó era contrario a los intereses populares, y los términos "subversivo", "extremista" y otros fueron utilizados frecuentemente para descalificar a los opositores sociales y políticos del Gobierno.

Para fines de 1977, luego de un año más calmado para el Gobierno –calma ganada a través

del control represivo a los movimientos sociales durante 1976–, un nuevo elemento se sumó a la demanda irrenunciable de retorno a la vida democrática: la presión del Gobierno estadounidense de Jimmy Carter. Como es ampliamente conocido, este Presidente demócrata abogó por la restauración de los Derechos Humanos en todo América Latina, poniendo énfasis en aquellos países –Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia– que estaban gobernados por militares que continuaban ejercitando la violencia, la intimidación, la tortura, las desapariciones forzosas y otros abusos de toda laya.

El 18 de junio de 1977, a consecuencia de la llegada a Bolivia de un emisario de Carter, Banzer anunció que el país sería indefectiblemente institucionalizado en 1980. Pero muy pocos estaban dispuestos a esperar dos largos años más para que cese la dictadura, y finalmente las presiones sociales recobraron impulso.

Como primer paso, el 21 de diciembre de 1977, la FSTMB clandestina decretó un paro general de labores de 24 horas. En un comunicado, señaló las razones de la medida:

> Los trabajadores mineros estamos convencidos de que el paro es el único recurso que tenemos para demandar el restablecimiento de todos nuestros derechos y conquistas, actualmente desconocidas, desde la ocupación militar de los distritos mineros (Presencia, 20 de diciembre de 1977).

Aquella huelga quizá hubiera sido una más de tantas, pero la decisión de que, paralelamente, cuatro mujeres mineras se trasladen a la ciudad de La Paz a iniciar una huelga de hambre, acompañadas por sus 14 hijos menores, le dio mucho más realce. Las cuatro mujeres eran Nelly de Paniagua, Aurora de Lora, Luzmila de Pimentel y Angélica de Flores, quienes ingresaron al local del Arzobispado de La Paz el 18 de diciembre. Allí señalaron que su lucha era por cuatro puntos: 1. Amnistía general e irrestricta para todos los presos, exiliados, residenciados y perseguidos por causas político-sindicales; 2. Reposición en sus trabajos de todos los que por las mismas causas fueron despedidos; 3. Vigencia de todas las organizaciones sindicales; 4. Derogatoria del decreto que declara zona militar los distritos mineros y retiro de las tropas de los mismos (Ibíd).

Las fiestas de fin de año habían relegado la importancia de esa acción, pero algunas personas comprometidas con la demanda de las cuatro mujeres mineras abrieron otros piquetes de huelga que se instalaron hasta el 31 de diciembre en el periódico católico Presencia, en la iglesia de María Auxiliadora de La Paz y en el paraninfo de la UMSA. En ellos participó la legendaria líder de las Amas de Casa Mineras, Domitila Chungara. Los sacerdotes Luis Espinal y Javier Albó, representantes de organismos de Derechos Humanos, las activistas aglutinadas en la Unión de Mujeres de Bolivia (UMBO) y otros grupos se sumaron.

Poco a poco, la instalación de la huelga de hambre despertó un apoyo popular insospechado. A los siete días de iniciada, ya los huelguistas alcanzaban a 61 personas; a los catorce, a 500; a los 16 días, a 1.000; a los 20, a 1.200. En los primeros días de enero, los 28 grupos de huelguistas esparcidos en todo el territorio nacional estaban constituidos por obreros, amas de casa, universitarios, religiosos y otros sectores de la población (Presencia, 7 de enero de 1978). Surgieron similares piquetes en el exterior del país, donde los residentes bolivianos y algunos extranjeros tomaron también la decisión de ayunar.

Paralelamente, la solidaridad con el movimiento iniciado por las cuatro mujeres mineras se volcó a las calles. Desde los primeros días de enero de 1978, universitarios, fabriles, campesinos, profesionales, organismos de Derechos Humanos, organizaciones de mujeres, prensa y otros sectores se manifestaron a través de múltiples comunicados, en movilizaciones callejeras cotidianas y con todo tipo de apoyo a quienes cumplían la extrema medida.

En un momento crucial del movimiento, la COB y la FSTMB decretaron la huelga general e indefinida, como un paso fundamental para hacer retroceder al Gobierno, que estaba viviendo el momento más complejo desde que llegó al poder. Las protestas eran generalizadas, y en el aire se respiraban sentimientos de esperanza de que, esta vez, el Gobierno sí iba a ser doblegado.

Con intermediación de la Iglesia Católica, cuya jerarquía –alejándose de la gran mayoría de los sacerdotes de base– se había mostrado muy cauta a tiempo de apoyar la medida (habiendo incluso manifestado que la huelga era contraria a los valores cristianos porque se ponía en riesgo la vida de personas adultas e incluso de niños), las

conversaciones se iniciaron. Pero la torpeza del Gobierno impidió que un acuerdo alcanzado a mediados de enero entre ellos y aquella jerarquía –cuya promesa era dictar una amplia amnistía política– se frustró. Esto obligó a un cambio de comportamiento dentro de la cúpula católica, que protestó enérgicamente por la represión cotidiana.

Banzer se jugó una última carta y decidió intervenir por la fuerza los piquetes de huelga de hambre. Advirtió públicamente que si hasta el 17 de enero a las 12 de la noche la medida no era abandonada voluntariamente, el Estado procedería en ese sentido. Así, al amanecer del 18 de enero de 1978, luego de más de 20 días de iniciada la huelga de las cuatro mujeres mineras, militares y policías se dieron a la tarea de ingresar en todos los recintos, maltratar a los huelguistas –muchos de los cuáles se encontraban postrados por la debilidad de tantos días de ayuno– y apresarlos. Hombres y mujeres fueron separados, y las cárceles de todo el país se llenaron de ciudadanos convencidos que de que su acción pacífica era la única posibilidad de conseguir la democratización del país, por lo que decidieron seguir ayunando en los recintos penitenciarios.

Ese mismo día, la Iglesia Católica echó el grito al cielo. Una de las voces más importantes fue la del Nuncio Apostólico, Nino Marzoli, quien condenó la intervención de los recintos católicos. También el Monseñor Rodríguez, obispo de Santa Cruz, declaró en ese sentido. Pero quien fue más lejos fue el entonces Arzobispo de La Paz, Monseñor Manrique, quien advirtió que si el Gobierno no liberaba a los detenidos se iba a llevar a la práctica la medida de excomunión contra el Presidente. A las 13 horas del 18 de enero de 1978, el Gobierno retrocedió y anunció la liberación de los presos. Lo más significativo fue el anunció de que aceptaba tres de los puntos que habían provocado la huelga de hambre; eso sí, el Gobierno se negó a admitir el retiro de los militares de las minas (Lavaud, 2003: 220).

La huelga general indefinida decretada por este sector continuó hasta el 20 de enero. Finalmente se decidió ceder en ese punto para evitar que se pierda lo logrado hasta ese momento: la declaración de amnistía general e irrestricta y el anuncio gubernamental de que se realizarían elecciones nacionales en junio de ese año.

El movimiento, que tuvo un carácter defensivo, había conseguido sus principales objetivos, y con ello abrió el camino para la democratización del país. Esta realidad política generó grandes esperanzas y expectativas de cambio. En el ambiente primaba la idea de que una nueva etapa se abriría para Bolivia, y los sectores populares confiaban en que la democracia iba a resolver la mayoría de sus problemas.

Sin embargo, la democracia se instauraba en un país en el que ya se habían consolidado las bases del sistema capitalista, en el que se habían empezado a desmantelar eficazmente las políticas sociales y el estatismo económico del periodo del nacionalismo revolucionario y en el que habían surgido nuevos y sólidos grupos de dominación, que querían una democracia a su medida. Además, las Fuerzas Armadas poco después mostrarían que no estaban dispuestas a dejar tan fácilmente el poder.

Ahora bien, desde los primeros días del mes de enero de 1978, habiendo sido restituido el derecho a la asociación sindical, los sindicatos de la COB iniciaron una febril actividad para convocar a procesos electorales que permitieran su renovación democrática lo más rápido posible. El Decreto establecía plazos mínimos: 30 días para los sindicatos, 60 para las federaciones y 90 para las confederaciones. El derecho a la agrupación sindical fue restituido el 24 de enero de 1978, al cabo de tres años, dos meses y dos semanas de suspensión.

Mientras tanto, muchos dirigentes exiliados se preparaban para retornar al país. Los coordinadores laborales fueron desconocidos en concurridas asambleas y se les negó que llevasen a la práctica la disposición gubernamental de organizar los plebiscitos respectivos. Las directivas clandestinas se declararon como las legítimas organizaciones de los trabajadores y asumieron esas funciones en todas las minas de COMIBOL.

Por otra parte, desde fines de enero de aquel año comenzaron las presiones para la restitución de los trabajadores que, desde 1976, habían sido expulsados de sus fuentes de trabajo por causas político-sindicales. En total, los trabajadores por quienes se reclamaba eran 450. Sin embargo, la continuidad de la presencia militar en la mayoría de los campamentos mineros traía problemas a los procesos electorales y al funcionamiento normal de los sindicatos.

Mientras tanto, los partidos que se oponían al régimen banzerista formaron o consolidaron coaliciones políticas para presentarse a las elecciones. La Unidad Democrática y Popular (UDP), considerada de centro izquierda y conformada por el MNR-I, el PCB y el MIR, con Siles Zuazo y Paz Zamora a la cabeza, era la más grande. También estaba el Frente Revolucionario de Izquierda, respaldado por el PRIN –de Juan Lechín Oquendo–, el PCML y algunas fracciones del POR, que propuso como candidatos a Presidencia y Vicepresidencia a los líderes sociales Casiano Amurrio, dirigente de la Confederación de Campesinos Independiente, y Domitila de Chungara, dirigente de las Amas de Casa Mineras. El Partido Socialista, comandado por Marcelo Quiroga Santa Cruz, anunció que iría solo a las elecciones. Otra noticia relevante fue que, primera vez en la historia de Bolivia, se organizó un partido netamente campesino indígena para terciar en las elecciones: el MITKA, que colocó como candidato a la Presidencia de la República a Luciano Tapia.

Cuando se produjeron las elecciones nacionales, el 9 de julio de 1978, después de 12 años de receso democrático, fue la UDP la que recibió el más amplio apoyo popular. Pero su triunfo fue desconocido por el candidato auspiciado por Banzer, quien dio un nuevo golpe de estado calificando a las elecciones de fraudulentas.

Esto se debió a que el oficialismo había montado un gran fraude electoral. Cuando comenzó a salírsele de las manos –pues de todos modos los recuentos parciales daban el triunfo a Hernán Siles Zuazo–, decidió usar todo tipo de maniobras para evitar su derrota. Los datos fueron cambiados, aparecieron nuevas ánforas y se secuestraron otras. La CNE anunció que el frente oficialista de la UNP había obtenido el 51.32 % de los votos, lo que a todas luces era falso.

La coalición FRI, liderada por Juan Lechín Oquendo, y Marcelo Quiroga Santa Cruz, del PS, reconocieron el amplio triunfo del candidato de la Unidad Democrática y Popular. Por su parte, los observadores internacionales denunciaron el fraude electoral, que calificaron de desvergonzado. Aun así, Pereda Asbún quiso aparecer como la víctima del proceso y presionó para que la Corte Nacional Electoral anulara las elecciones, lo que finalmente ocurrió el 20 de julio.

Hernán Siles Zuazo se declaró en huelga de hambre, exigiendo que se cumpliera "el veredicto popular" del 9 de julio, apelando a que "las Fuerzas Armadas no se hagan cómplices de dicha suplantación de la voluntad del pueblo" e instando a los partidos políticos de oposición a defender los resultados (Presencia, 19 de julio de 1978).

No obstante el llamado directo del líder de la UDP, la respuesta de los partidos –así como del movimiento obrero y popular– fue tímida. Esta debilidad fue aprovechada por Pereda para denunciar un plan subversivo de "la extrema izquierda" y, finalmente, dar un golpe de Estado. El golpe estalló el 21 de julio, se decretó el estado de sitio en todo el país y las fuerzas militares se movilizaron en varias capitales de Departamento. Finalmente, se nombró una Junta Militar y se prometió que llamaría a elecciones en mayo de 1980.

En todo caso, el régimen de Pereda permitió el libre funcionamiento de los sindicatos obreros. En octubre de ese año, Lechín afirmó que todos los sectores ya se habían reorganizado –con excepción de los campesinos, que confrontaban una división interna– y que se estaba preparando la realización del Quinto Congreso de la Central Obrera Boliviana (Presencia, 20 de octubre de 1978). Además sus dirigentes seguían vigentes.

Mientras el Gobierno intentaba mantener buenas relaciones con los mineros, el ambiente político volvió a caldearse cuando, a fines de octubre, Pereda anunció que la constitucionalización del país sería definitivamente en 1980 y no antes. Además, el líder de la Junta denunció que existía un complot subversivo contra su persona, lo que le sirvió de pretexto para apresar a distintos líderes políticos en La Paz y Cochabamba.

Esta vez sería desde dentro de las Fuerzas Armadas desde donde se cambiaría nuevamente el curso de los acontecimientos, pues un sector favorable a esa medida dio un nuevo golpe de Estado y colocó al general David Padilla en la Presidencia, con el mandato de que condujera las elecciones a ser convocadas para julio de 1979. En estos hechos también influyó la convocatoria realizada por la UDP a una manifestación popular que debía realizarse el 24 de noviembre, con el objetivo de exigir elecciones para ese año.

Tras instalarse en Palacio de Gobierno sin que se hubiera disparado un tiro, Padilla prometió que se mantendrían las libertades sindicales y

que se reestructuraría la Corte Nacional para garantizar la limpieza del nuevo proceso electoral. (Presencia, 25 de noviembre de 1978). Además, aseguró que las Fuerzas Armadas no patrocinarían ninguna candidatura oficial.

## Entre procesos electorales y golpes militares, la democracia se instaura en Bolivia

Convertido en líder demócrata después de fundado su partido, la Acción Democrática Nacionalista (ADN) –cuyos principales dirigentes provenían del esquema dictatorial anterior– Banzer anunció su candidatura el 29 de noviembre. Días después, Víctor Paz Estenssoro, que acaudilló el proceso de recuperación del MNR histórico, hizo lo propio, lo que demostró que la derecha estaba recomponiéndose rápidamente. Mientras tanto, para los sectores obreros y populares, la UDP apareció como la mejor opción, dado que el FRI, inexplicablemente y por decisión del PCML, decidió apoyar al MNR de Paz Estenssoro y a la Democracia Cristiana, que unieron fuerzas para terciar en las elecciones.

Por su parte, ante el anuncio de la candidatura de Banzer Suárez, el Partido Socialista de Marcelo Quiroga Santa Cruz -que volvió a presentarse en estas nuevas elecciones sin ninguna alianza-, planteó que era necesario enjuiciar a éste por los siete años de gobierno dictatorial, posición a la que se sumaron la COB y la FSTMB. En noviembre esta última planteó que el ex dictador debía responder por los siguientes hechos:

Recuadro 45

### FSTMB plantea enjuiciar a Banzer

"ATENTADOS A LOS DERECHOS HUMANOS: Las masacres de obreros, de campesinos (Tolata, Epizana, Siete Suyos), de universitarios (Santa Cruz, agosto 1971); el asesinato de ciudadanos en las cárceles políticas (Prof. Roberto Alvarado, Cnl. Selich, etc.), de cientos de desaparecidos denunciados por la Comisión de Justicia y Paz y la Asamblea de Derechos Humanos, así como el Informe documentado de la COB en el exilio; persecución.

ATENTADOS CONTRA LOS TRABAJADORES: Hubo una consciente y permitida explotación de los trabajadores, en beneficio de grupos minoritarios privilegiados. La represión y el terror acallaron las voces de protesta. Miles de mujeres campesinas fueron sometidas a experimentos de esterilización, a título de planificación familiar, que significa un genocidio contra la nación.

ATENTADOS CONTRA LA ECONOMÍA: A la irracional e impune explotación de los recursos forestales y del petróleo, se añade que el gobierno del Gral. Banzer ha manejado más de cuatro mil millones de dólares de ingresos extraordinarios, "sin que se haya expresado en un desarrollo real e independiente del país y menos en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías nacionales.

Una deuda externa de 2.500 millones de dólares es motivante de la crisis económica que se vive y es una carga que tendrá que ser pagada por las generaciones venideras, además de que la inmoralidad en numerosos negociados ha sido norma del gobierno del Gral. Banzer.

Pero el Presidente Padilla no estaba dispuesto a enfrentarse con el sector "duro" del Ejército, que se mantenía en posiciones de poder importantes, por lo que rechazó la posibilidad del juicio a Banzer. Además, se negó a retirar a las Fuerzas Armadas de los centros mineros, dijo que era inadmisible anular el Pacto Militar-Campesino, así como que dirigentes sindicales candidateen en elecciones ("Mensaje de fin de año del presidente David Padilla", Presencia, 1 de enero de 1979). De todos modos, en marzo de 1979 varios generales fueron pasados a retiro, entre ellos Hugo Banzer, René Bernal Escalante, Guillermo Jiménez Gallo y Raúl Tejerina Barrientos. Y Quiroga Santa Cruz inició poco después el juicio de responsabilidades anunciado en el Parlamento Nacional, el que tendrá amplia resonancia al interior y exterior del país.

Para los primeros meses de 1979, aun estando confirmada la fecha de elecciones, la democracia en Bolivia seguía sin consolidarse. Esto se debía fundamentalmente a los permanentes temores de nuevas asonadas militares, ya que parte de este sector no había aceptado su retorno a los cuarteles. Lo más grave fue que, utilizando los aparatos represivos que quedaron intactos del periodo banzerista, se organizaron grupos paramilitares para amedrentar a la sociedad.

Paralelamente, el proceso preelectoral se vio sacudido por algunos hechos violentos, como enfrentamientos entre grupos políticos en momentos de realizar propaganda y actos públicos, aunque éstos, en general, no pasaron a mayores. Un hecho de mayor trascendencia fue el del 20 de mayo de ese año, cuando el derechista Comité

Pro Santa Cruz impidió la llegada de Siles Zuazo a Santa Cruz. En el otro bando, la violencia alcanzó importantes niveles el 30 de mayo, cuando el candidato por Acción Democrática Nacionalista (ADN), Hugo Banzer, llegó al centro minero de Huanuni para una proclamación y se produjeron disturbios con numerosos heridos.

Pese al clima descrito, las elecciones se realizaron con total tranquilidad a principios de julio de ese año y el resultado fue un triunfo de la UDP con mayoría relativa. Sin embargo, por las características del sistema político boliviano, que obligaba a realizar una votación en el Parlamento entre los dos candidatos más votados –cuando ninguno hubiese alcanzando el 50 por ciento más uno de los votos–, se escamoteó una vez más el triunfo udepista.

Esto se debió a que se produjo un "empantanamiento" en la votación parlamentaria que obligó a una transacción totalmente inesperada: la elección como Primer Mandatario de Bolivia del presidente del Congreso, doctor Walter Guevara Arce, del MNR. Él fue nombrado Presidente interino, con el mandato de convocar nuevamente a elecciones en 1980. Tamaño error, además de mostrar la inmadurez del régimen democrático boliviano, tendría nefastas consecuencias en el futuro inmediato.

Por su parte, luego de consultas con diversos asesores y sobre la base de lo discutido en el Quinto Congreso, la COB elaboró un planteamiento para salir de la crisis económica, que pasó a ser conocido como Propuesta de Política Económica de la Central Obrera Boliviana, el que se constituye en uno de los documentos más ricos, completos y representativos del sindicalismo obrero boliviano. Éste fue ampliamente discutido en diferentes eventos obreros desarrollados en octubre de ese año, enriquecido y paulatinamente asumido por el conjunto de los sectores obreros y populares afiliados a la central sindical.

Las demandas de carácter laboral se concentraron en la aplicación de una nueva escala salarial, la congelación de precios de los artículos que componen la canasta familiar, el incentivo al productor agrícola y el establecimiento de dos fondos de inversión: uno agrícola y otro industrial y de vivienda popular (COB. Frente a la crisis. Propuesta de política económica, IESE, Cochabamba, diciembre de 1979).

El documento criticó duramente el modelo económico banzerista que habría impulsado un proceso de inversión privada basado exclusivamente en el crédito externo, que entre 1972 y 1978 recibió préstamos de largo plazo que ascendían a 1.000 millones de dólares. Se refirió también al déficit del presupuesto fiscal, que en 1979 era de 250 millones de dólares, así como al hecho de que el presupuesto dependía en un 60 por ciento del comercio exterior, es decir, en forma de impuestos a la importación, exportación, regalías mineras, de petróleo y de gas (Ibíd).

Sin embargo, cuando el movimiento obrero se aprestaba a presionar para que su propuesta económica fuera tomada en cuenta por el gobierno transitorio de Walter Guevara, nuevamente estallaron problemas políticos, ya que el 14 de octubre de ese año se produjo un levantamiento militar en la ciudad de Trinidad, el que, aunque fracasado, irritó a los sectores populares que se movilizaron masivamente en todas las ciudades del país.

No era para menos, pues como vimos, desde 1978 la democracia, conquistada en gran medida por el movimiento obrero y popular, seguía permanentemente amenazada por los sectores fascistas de las Fuerzas Armadas bolivianas, azuzados por fuerzas empresariales y grupos de poder económico que se habían consolidado durante el régimen banzerista.

Unos y otros no cejaron en su obsesión por volver a tomar las riendas del poder político, por lo que tras el fracasado movimiento golpista de mediados de octubre, volvieron a la carga. Así, un nuevo golpe militar, esta vez comandado por el teniente coronel Alberto Natusch Busch estalló en la madrugada del 1 de noviembre de ese año.

A las 04.30 de ese día, unidades blindadas del Regimiento Tarapacá, con asiento en El Alto y compuestas por tanques, carros de asalto dotados de ametralladoras y cañones, así como un numeroso contingente de infantería que portaba fusiles automáticos, había ocupado la plaza Murillo.

Aunque algunos sectores militares se habían opuesto al golpe, como el general David Padilla; el general Edén Castillo, comandante de la Tercera División; y el coronel Humberto Cayoja, comandante de la Escuela de Estado Mayor de Cochabamba, quienes pasaron a la clandestinidad, la mayoría de las unidades militares del país lo secundaron. Además contó con la participación

de la Policía Boliviana y ¡vaya sorpresa!, con la del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) a través de figuras importantes de ese partido, como Guillermo Bedregal Gutiérrez y José Fellman Velarde, quienes apoyaron abiertamente el golpe militar; mientras que Víctor Paz Estenssoro, que avaló internamente esa decisión, se mantuvo a la sombra esperando cómo se desarrollaban los acontecimientos.

Como para confirmar la delirante irracionalidad a la que habían descendido las Fuerzas Armadas bolivianas, el golpe fue dado unas horas después de que la OEA, reunida en La Paz, había apoyado, a través de 25 votos a favor, la posición boliviana de lograr una salida soberana al Océano Pacífico sin canje territorial, cuyos delegados, además, firmaron la –en ese momento paradójica– Declaración de La Paz, documento consensual que por primera vez unió las firmas de los 27 países de la organización en apoyo a los principios democratizadores en el continente y que fue producto de una iniciativa del gobierno boliviano. Por otra parte, la administración de Guevara había adquirido el compromiso de ratificar la constitución del Parlamento Andino, cuyo tratado había sido suscrito la semana anterior junto con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La creación del Parlamento Andino se había considerado como una fórmula para crear un compromiso internacional en los cinco países del grupo, a la hora de plantearse situaciones de marcha atrás en sus vidas constitucionales.

Como una vergüenza nacional, los asistentes a dicha reunión tuvieron que abandonar inmediatamente el país, hecho que generó una visión auténticamente negativa de la política boliviana en toda la prensa mundial y en diversos organismos internacionales, incluso en Estados Unidos de Norteamérica.

Al concluir la posesión de su gabinete ministerial, que se produjo al anochecer de ese día tras reiteradas demoras, Natusch expresó lo siguiente: "El Parlamento, que debía jugar una tarea protagónica en la consolidación democrática, se ha estructurado en el marco de una acción incoherente y ajena a las verdaderas angustias nacionales y a la solución de la crisis que afecta al país. Igual acción enervante ha gestado el depuesto presidente Guevara, renegando de su mandato o siendo renuente a tomar las medidas necesarias para solucionar los graves problemas nacionales. Ante esa grave emergencia que adquirió caracteres de violencia estéril e innecesaria, las FF. AA. de la Nación y los partidos nacionalistas revolucionarios han convenido proponer a la patria, la retoma de la ruta histórica de la revolución nacional, popular y democrática. Se trata de un proyecto renovador que emerge de las luchas inconclusas de Busch y Villarroel, de la hazaña histórica de 1952 y, lo que es sustancial: la proyección de esas tareas incumplidas hacia el progreso nacional" (Presencia, 2 de noviembre de 1979).

Al mismo tiempo, prometió la protección de la propiedad estatal, retomar las banderas de la Revolución Nacional, convocar a la elección de una Asamblea Constituyente y adoptar inmediatas medidas para conjurar la crisis económica, en un intento de evitar la movilización de la COB en su contra. En ese camino, dijo que el obrero boliviano representaba la conciencia de toda organización política y que había alcanzado un alto nivel de madurez y capacidad, por lo que era interés de su gobierno "proponer la cogestión en el ámbito de la minería nacionalizada y nombrar a un obrero para la Presidencia de COMIBOL" (Ibíd).

El Parlamento constituido tras las elecciones de junio reaccionó contra el golpe. Así, a pesar de que el gobierno golpista lo había clausurado y había dictado estado de sitio, logró reunirse y emitir una declaración de apoyo incondicional al depuesto presidente Guevara, quien desde la clandestinidad declaró que seguía gobernando Bolivia "desde algún rincón del país".

Por su parte, una treintena de partidos políticos publicaron extensas solicitadas y comunicados en la prensa para condenar el golpe, entre los que se encontraban el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), el Partido Comunista de Bolivia (PCB), la Unión Democrática y Popular (UDP), el Partido Socialista-1 (PS-1), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido Obrero Revolucionario (POR), el Partido Revolucionario de Izquierda Nacional (PRIN), Vanguardia Obrera, Vanguardia Comunista del POR, Ofensiva de Izquierda Democrática, POR Combate y el Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA).

Pero fue la COB la que decidió pasar de los discursos a los hechos e inmediatamente organizó

el Comité Democrático Antifascista (CDA), que convocó a una resistencia movilizada en defensa de la democracia y decidió realizar un paro nacional de 24 horas con suspensión total de actividades en todo el país. Desde ese momento, la sede de la FSTMB y de la COB en La Paz se convirtió en el punto de encuentro de partidos políticos y organizaciones sindicales para coordinar los siguientes pasos a tomar.

También es evidente, que la central sindical actuó ante la respuesta espontánea y directa de los sectores populares, que en cuanto supieron del golpe militar salieron a las calles, principalmente en la sede de gobierno y en Cochabamba, y se enfrentaron con las fuerzas militares. Las imágenes de jóvenes de los barrios populares lanzando palos y piedras a los tanques recorrieron todo el mundo. A escala nacional, la prensa actuó valientemente pues describió los hechos tal como estaban ocurriendo. En uno de esos artículos se escribe:

Recuadro 46

### Descripción de la resistencia popular en La Paz

Nunca antes, en La Paz, se había visto un despliegue militar como el de ayer: tanques, tanquetas y fuerzas de infantería en tierra, mientras por el aire sobrevolaron en varias oportunidades aviones jet y un helicóptero. Las fuerzas militares se apostaron principalmente en la Plaza Murillo y calles adyacentes, en la Plaza San Francisco, en la Plaza Pérez Velasco, en toda la calle Comercio, en la Avenida Mariscal Santa Cruz, alrededor de la Universidad y el Ministerio del Interior. Grupos populares enfrentaron a las tropas militares, primero con expresiones de repudio y luego con piedras y palos que lanzaron a los tanques y tanquetas.

Fuente: Presencia, 2 de noviembre de 1979.

En muchos puntos de la ciudad se levantaron barricadas con los adoquines arrancados de las calles y con materiales de construcción, mientras se daban vivas a la democracia, a Bolivia y se condenaba el golpe de Estado. Los paceños mostraban una franca hostilidad a los efectivos militares, los apedreaban y les lanzaban insultos, llamándoles especialmente “asesinos” y “chilenos”, y gritándoles a viva voz: “Militares a la frontera”. Pero los carros de asalto y las tropas militares de a pie comenzaron muy pronto a disparar contra ellos, el saldo fue numerosos muertos y heridos.

Al respecto, el mismo periódico relata: “Anoche continuaban escuchándose ráfagas de ametralladoras y algunas ambulancias recorrían las calles de la ciudad, pero no se pudo comprobar si hubo o no más víctimas” (Ibíd.). Parecida fue la situación en Cochabamba, donde grupos de estudiantes universitarios y trabajadores fueron reprimidos por las fuerzas militares.

En las movilizaciones callejeras ocurridas en esas dos ciudades y, en menor medida en las otras capitales departamentales del país, participaron junto al pueblo llano universitarios, maestros, fabriles, mineros y, como un hecho novedoso, los campesinos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) conducidos por el dirigente katarista Genaro Flores, comenzaron a realizar bloqueos esporádicos de carreteras y apoyaron todas las decisiones de la COB. De esa manera quedaba evidenciada la falta de efectividad del Pacto Militar-Campesino al que Natusch pretendió apelar.

Éste convocó a la COB a dialogar en Palacio de Gobierno, pero como las movilizaciones continuaron, el gobierno de facto procedió a realizar detenciones de políticos y dirigentes sindicales, allanando sedes sindicales de varios sectores y de la propia COB, que el 4 de noviembre fue tomada por grupos militares y paramilitares, quienes utilizaron cargas explosivas. Y luego del allanamiento a su sede, la central sindical determinó la declaratoria de “huelga general indefinida”, el paso a la clandestinidad de una parte de los dirigentes y seguir apoyando la movilización popular en las calles. Ésta continuó por varios días, pero el aumento de la represión, que causaba más muertos y heridos, obligó a la COB a suspender la huelga el 7 de noviembre “para evitar que corra más sangre”, al tiempo que aceptó dialogar con el gobierno.

Tanto mineros como fabriles, al no estar de acuerdo con la decisión de la COB, continuaron con la paralización de sus labores “en señal de duelo por los muertos en aras de la democracia” y hasta que ésta sea reinstaurada. Paralelamente, las radios mineras -que constituyeron por primera vez una cadena conformada por Pío XII, de Siglo XX; 21 de Diciembre, de Catavi; Nacional,

de Huanuni; Vanguardia, de Colquiri; Ánimas, de Siete Suyos, Radio Viloco y otras- pidieron seguir con la resistencia. Ante esta situación, tropas militares fuertemente pertrechadas fueron movilizadas para rodear los distritos mineros.

Finalmente, el 18 de noviembre se produjo la renuncia del Presidente de facto, quien, completamente aislado en el Palacio de Gobierno, no pudo continuar con su aventura. Las transacciones políticas determinaron que Lidia Gueiler Tejada, hasta ese momento Presidenta del Congreso, sea posesionada como Presidenta de Bolivia.

Aunque es evidente que las dubitaciones de la COB y de la FSTMB, frente a la defensa de la democracia en otros momentos de peligro para ésta, habían sido completamente superadas y de que su participación en la resistencia fue determinante, también es cierto que las definiciones finales quedaron otra vez en manos de los partidos políticos y el Congreso.

Por ello, aunque compartimos la tesis de Zavaleta Mercado planeteada en su libro "Las Masas en Noviembre" (1983) de que la resistencia al golpe de Natusch marcó un cambio fundamental en el comportamiento de la clase obrera, siendo su significado más importante el hecho de que se comprometió intensamente en la defensa de la democracia, también es cierto que "la puntada final" se escapó una vez más de sus manos.

Así, la primera mujer en ocupar la Presidencia de Bolivia dijo ante miles de bolivianos reunidos en la plaza Murillo que gobernaría "sin odios ni rencores", lo que en los hechos significó dejar intacto el poder de las fuerzas militares de derecha, al punto de que Luis García Meza y Luis Arce Gómez, comprometidos permanentemente con afanes golpistas, permanecieron en sus altos cargos, los que utilizarían meses después para volver a truncar la joven democracia boliviana.

Como previeron los sectores obreros, las medidas fondomonetaristas fueron dictadas a principios de diciembre por Lidia Gueiler, quien determinó una devaluación del peso boliviano y el congelamiento de los salarios. Esto provocó airadas protestas en las ciudades, las minas y el campo. Los paros, huelgas y bloqueos que la COB logró articular y acaudillar continuaron durante varios días, lo que paradójicamente causó la agudización de los problemas económicos del país que pedían resolver.

Desde los primeros meses de 1980, por otra parte, la COB y los sindicatos mineros volvieron a girar su atención a los problemas políticos ante la amenaza constante de un nuevo golpe militar. En marzo de ese año convocaron a la Unidad Democrática y Popular y a otros partidos políticos para organizar la resistencia, ante la posibilidad de otro golpe militar, "mediante un acuerdo que abarque a todas las organizaciones sindicales, entidades regionales, de carácter popular e instituciones relacionadas con la problemática socio-económica de la nación" (Presencia, 6 de marzo de 1980).

Los aprestos golpistas de la ultraderecha militar tuvieron su primera expresión unos días después, con el asesinato del padre jesuita Luis Espinal el 21 de marzo, el que en ese momento dirigía el semanario Aquí, a través del cual denunciaba permanentemente la existencia de grupos paramilitares y los aprestos golpistas de Luis García Meza y Arce Gómez. Este acontecimiento obligó a acelerar la coordinación entre la COB y los partidos políticos, los que el 12 de abril conformaron el Comité de Defensa de la Democracia (CONADE), que integró, además de partidos políticos y organizaciones sindicales, a organismos religiosos y de derechos humanos.

El 31 de mayo de 1980, ante declaraciones del comandante del Ejército, general Luis García Meza, quien amenazó con la intervención militar en el país, el CONADE convocó a "la resistencia civil" y a responder con una huelga general indefinida y bloqueo de caminos en caso de producirse el golpe.

En ese clima enrarecido, el 29 de junio se realizaron las elecciones nacionales prometidas por la presidenta Gueiler, en las que volvió a triunfar la UDP, aunque nuevamente con una mayoría relativa. Pero el tan mentado golpe de Estado se produjo antes de que el Congreso pudiese reunirse -el 6 de agosto de ese año- para definir la elección del nuevo Presidente de Bolivia.

Así, el fatídico 17 de julio de 1980, los golpistas arremetieron contra la sede de la COB –donde se encontraba reunida CONADE– y asesinaron al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, al líder obrero Gualberto Vega y al militante izquierdista Carlos Flores. Decenas de dirigentes que se encontraban reunidos allí y en allanamientos domiciliarios fueron tomados presos, imponiéndose un régimen de terror posiblemente nunca antes visto en Bolivia.

La huelga general indefinida dispuesta por la COB fracasó a los pocos días cuando el propio Juan Lechín, detenido por los militares, pidió al pueblo que la levantara. En realidad, la represión ya había debilitado la resistencia y sólo quedaban los trabajadores mineros, tradicionalmente combativos y capaces de llegar "hasta las últimas consecuencias" en sus trincheras de lucha: los campamentos mineros. Éstos comenzaron a sufrir la arremetida de fuerzas del Ejército, mientras la cadena de radios mineras informaba sobre sus avances y llamaba a la resistencia sin claudicaciones.

En Siglo XX, los campesinos del norte de Potosí decidieron resguardar la vida de sus hermanos mineros tendiendo un cerco alrededor de toda la localidad, lo que intimidó a los uniformados. Aun así, hubo muertos, abusos y detenciones. En Viloco y Caracoles, centros mineros del departamento de La Paz, la arremetida militar fue sangrienta ante la valentía de los mineros, que se defendieron hasta que finalmente fueron vencidos.

En la mina de Huanuni, situada en el departamento de Oruro, inmediatamente que se tuvo noticia del golpe militar, los trabajadores decidieron organizarse para responder a los golpistas estableciendo comandos de resistencia, formando piquetes de vigilancia, grupos para fabricar elementales instrumentos de defensa y comisiones para suministro y reparto de alimentos. Además, al igual que en los otros centros mineros se bloquearon todos los caminos de acceso a la mina, mientras las amas de casa mineras organizaban "ollas populares" (CAEP, 1983: 189-190).

Mientras en las combativas minas del norte de Potosí, como en Siglo XX y Catavi, la resistencia minera era paulatinamente vencida por la brutal represión, en dos minas de La Paz, Viloco y Caracoles, los trabajadores del subsuelo se enfrentaban a una arremetida de fuerzas combinadas del ejército compuestas por los regimientos Bolívar, Max Toledo de Viacha y un regimiento llegado desde Oruro" (SIDES, Congreso de Trabajadores Mineros, Huanuni, 1982).

En relación a Viloco, trabajadores de ese distrito relataron años después los dolorosos hechos vividos, en un documento que presentaron al Congreso Minero de Huanuni de 1982 en el que se dice que "os trabajadores mineros de Viloco, Locatarios, Campesinos y pueblo en general hicimos la resistencia a escasos kilómetros del distrito, donde está ubicada la mina privada de Atoroma, durante un día y una noche, en principio bloqueamos los caminos de acceso al distrito, con lo que pudimos en gran medida frenar el avance del Ejército que en más de 14 "caimanes", tanques y artillería incluso pesada, empezaron a masacrar a los compañeros que se encontraban en los piquetes de vigilancia; durante el enfrentamiento citado, cayeron víctimas de la bala asesina muchos compañeros heridos, así como otros fueron apresados y finalmente murieron los compañeros Santiago Huanca Quispe y Rigoberto Calle Jiménez, previamente fueron torturados en forma brutal. También murió el dirigente sindical Modesto Trujillo Sárate" (íbid).

La nueva dictadura militar se consolidó y García Meza llamó a su gobierno de "Reconstrucción Nacional". Vaya paradoja, pues hasta el retorno de la democracia en 1982 Bolivia vivió una de las más nefastas fases de su historia.

Muchos miembros de ADN participaron en su gobierno, aunque Banzer terminó por alejarse del nuevo caudillo militar, no sin antes haber contribuido a la llegada de represores argentinos y brasileños a Bolivia, los que munidos de amplia experiencia coadyuvaron a que los métodos represivos alcancen en Bolivia una fiereza y sofisticación nunca antes vistos.

La economía entró en una profunda crisis, no sólo por la alarmante corrupción y el despilfarro, sino porque los Ministros militares carecían a todas luces de conocimientos adecuados en los campos de su competencia. Pero el país pudo seguir funcionando ya que el narcotráfico de cocaína estuvo manejado desde Palacio de Gobierno. El Ministro del Interior, Luis Arce Gómez fue su principal artífice.

Sin embargo, el pueblo boliviano volvió a mostrar su capacidad de rearticular sus organizaciones, las que desde la clandestinidad y articulándose con los partidos políticos opositores lograron que la democracia sea retomada en octubre de 1982.

# III. Crisis del Estado de 1952, consolidación de la democracia y emergencia de nuevos movimientos sociales (1982-1999)

Jorge Ocsa Laime

## Sentidos generales del proceso democrático en Bolivia y sus dinámicas

Durante las décadas de 1980 y 1990 del siglo XX, el mundo en su conjunto sufrió grandes y rápidos cambios. El neoliberalismo se implantó como sistema económico mundial; los principales impulsores del nuevo credo económico fueron Estados Unidos, Inglaterra y, en menor medida, Alemania y Europa occidental. Paralelamente, el proyecto del comunismo planteado por la Unión Soviética (URSS) y el bloque del pacto de Varsovia empezó a resquebrajarse con la caída del Muro de Berlín, en 1989. Durante décadas, dicho Muro había sido el símbolo de la Guerra Fría y la separación de los dos bloques mundiales.

Desde la década de 1970, las diferentes regiones de Latinoamérica pasaron por distintos procesos. Centroamérica sufrió con las luchas guerrilleras. En Nicaragua y otros países se instauraron gobiernos revolucionarios que contaban con un amplio apoyo popular, pero que terminaron derrotados por los movimientos paramilitares financiados desde Estados Unidos. En el Cono Sur, las crisis económicas estuvieron presentes en todos los países; los ajustes económicos y sociales fueron realizados con medidas de shock. En Chile, estas se implementaron dentro de la dictadura militar de Augusto Pinochet; en países como Argentina, Brasil y Bolivia, se realizaron como parte del proceso de estabilización de los nacientes gobiernos democráticos.

En la década de 1990, la idea de la globalización se convirtió en el eje principal del proyecto desarrollista. Dentro de esa dinámica económica, China y los Tigres Asiáticos se abrieron al mundo capitalista, alcanzando un gran crecimiento económico. Al mismo tiempo, los conflictos bélicos en el Oriente se agudizaron con la invasión soviética de Afganistán (1979) y, algunos años después, la Guerra del Golfo 1990 –debido a la invasión que hizo Irak a Kuwait– y la Guerra de los Balcanes (1991) –que acabaría con la desintegración de Yugoslavia. Otro de los acontecimientos más significativos del periodo fue la lucha por la desaparición de la segregación racial –conocida como apartheid– en Sudáfrica, liderada por Nelson Mandela.

Al final del siglo, Estados Unidos alcanzó la hegemonía mundial. Mientras tanto, muchos países de la Comunidad Económica Europea y la Unión Europea se inclinaron por gobiernos conservadores. En Latinoamérica se consolidaron los gobiernos democráticos. Sin embargo, los fuertes cuestionamientos al sistema político partidista y a los ajustes que estos realizaron para contrarrestar la crisis económica desataron mayores desigualdades y conflictos sociales en cada país. En México surgió el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional (EZLN), con el subcomandante Marcos como su principal figura. Los movimientos como el EZLN manifestaron su absoluto repudio a los tratados como el de Libre Comercio de 1994 (TLC-ALCA) entre México, Canadá y Estados Unidos, que fueron la base para lograr acuerdos económicos entre el Norte y los países latinoamericanos. El objetivo de estos tratados era conformar bloques económicos regionales dirigidos y subordinados a los intereses de Estados Unidos.

En ese contexto internacional, Bolivia recuperó la democracia el 10 de octubre de 1982, luego de un largo proceso de resistencia a las dictaduras militares y una creciente inestabilidad económica y

social. Sin embargo, luego de tres años de ejercicio conflictivo del poder y el desarrollo incontenible de la crisis, la Unidad Democrática y Popular (UDP) dejó el Gobierno, cerrando así el largo ciclo de relación estatal con los sectores populares. El Gobierno entrante le dio un giro trascendental al sistema político, orientándolo hacia una política de derecha, proponiendo el Ajuste Estructural como solución a la crisis agobiante.

Los grandes actores políticos del pasado, como los mineros y la COB, fueron debilitados y experimentaron un gran quiebre. Por su parte, los sectores campesinos e indígenas dieron sus primeros pasos hacia un mayor protagonismo político: hicieron frente a la crisis y a las medidas neoliberales de los gobiernos de turno, pero a costa de vivir una fuerte represión. Pese a ello, los lineamientos de la Nueva Política Económica (NPE), asumidos en 1985 –y que se mantuvieron hasta los primeros años del siglo XXI–, lograron permear a toda la sociedad boliviana, profundizando la ruptura con la construcción del Estado del 52 y el gran ideologema del Nacionalismo Revolucionario (Antezana, 1983).

Este proceso de transición fue ampliamente analizado con la premisa de tratar de entender qué sucedió durante las décadas de 1980 y 90 en Bolivia. Sobre todo se intentaba develar las posibilidades de un país latinoamericano en medio de una transformación propia de la economía mundial y del sistema-mundo a finales del siglo XX. Los análisis de importantes escritores e instituciones –ya fueran nacionales o internacionales–, partiendo desde los más diversos enfoques, buscaron hallar las características de las transformaciones del movimiento societal boliviano. Entre los escritores destacan René Zavaleta, René A. Mayorga, Jorge Lazarte, Fernando Calderón, Herbert Klein, Roberto Laserna, J. A. Morales, H.C.F. Mansilla, Silvia Rivera y G. Sandoval. El aporte de las fundaciones, ONGs, partidos políticos y universidades también fue fundamental para entender mejor el periodo.

Sin embargo, y pese a estos bosquejos, durante dos décadas la realidad nacional se movió más rápidamente que las más optimistas proyecciones. Lógicamente, esto permitió que también se plantearan nuevas perspectivas para comprender a Bolivia. Sin embargo, las políticas concretas que los gobiernos de turno realizaron, así como las respuestas –de todo género– de la propia sociedad boliviana, tomaron otro rumbo ni bien se inició el siglo XXI.

Pese a la estabilidad macroeconómica conseguida desde 1987, las consecuencias de la aplicación de la NPE en sus distintos ámbitos fueron cada vez más negativas para la población, lo que generó un desencanto popular que, pronto, se tradujo en una oposición de acción y discurso. Durante los 20 años en que este proceso se desarrolló, la COB se desvaneció como órgano de poder, algo que no había sucedido en sus más de 30 años de existencia. Simultáneamente, otros sujetos políticos fueron tomando fuerza y se constituyeron en alternativas a esa democracia "desde arriba" –o democracia formal del sistema político. Dichos sujetos plantearon la potencialidad de una democracia dinámica "desde bajo", una democracia más real y que, pese a su complejidad y diversidad, poco a poco fue transformando profundamente el propio sistema político nacional.

Este escrito no pretende ser un recorrido por toda la historia nacional, sino plantea ejes de discusión de nuestra gran y compleja historia.

## La transición democrática y la crisis del Estado del 52 – La UDP

> Este pueblo es el que ha realizado la hazaña sin par de la transición pacífica de la dictadura hacia la democracia… Este es un tiempo de sacrificio. Para eso, será necesaria sobriedad y, si hay un pan, sea el mismo en la casa de los que tienen mucho que en la casa de los que tienen poco… (Fragmentos del discurso de Hernán Siles Zuazo a su retorno del exilio, el 9 de octubre de 1982).

### Condiciones que permitieron el retorno a la democracia

El régimen dictatorial que gobernó el país entre 1980 y 1982 desató una crisis no solamente económica, sino también social y política, que generó un descontento generalizado. Los distintos gobiernos que asumieron el poder en ese corto tiempo se presentaron como los "salvadores de la patria" y los "precauteladores de la unidad de la nación". Sin embargo, pronto –al resquebrajarse el Pacto Militar-Campesino y al hacerse evidente la creciente corrupción de su administraciones– quedaron sin fundamento. Los hechos

más repudiados, además de la represión, fueron el desvío de la piedras preciosas de La Gaiba y el de los vidrios ray ban destinados a la piscina olímpica de la ciudad de La Paz, que acabaron en manos y/o viviendas particulares. Pero sin duda lo que más deslegitimizó al régimen fue la ilícita administración de la producción y comercialización de cocaína ocurrida durante el gobierno de facto de Luis García Meza.

A nivel internacional se produjo un viraje de apoyo político a las democracias y el respeto a los derechos humanos, como una forma de gobierno adecuada para el mundo libre. Este viraje se expresó sobre todo en la política exterior oficial de Estados Unidos con América Latina, a partir del gobierno de Jimmy Carter. Sin embargo, aunque de forma oculta, la potencia del norte siguió interviniendo en algunos países dentro de sus antiguos parámetros. Por ejemplo, Estados Unidos financió el armamento de los grupos opositores de la revolución sandinista en Nicaragua –los llamados Contras– y también de Irak, que entró en guerra contra el Gobierno de la revolución islámica en Irán. El conocimiento del caso Irán-Contra, el agotamiento del discurso militar, y la resistencia a las dictaduras cívico-militares, llevaron a exigir de forma masiva una salida democrática a la crisis.

En Bolivia, las organizaciones sociales fueron encabezadas por la COB. La organización matriz del movimiento obrero, junto a la universidad, las nuevas federaciones campesinas (CSUTCB), los sectores populares, los comités cívicos, los partidos políticos e incluso algunos sectores de empresarios privados, se movilizaron cotidianamente para presionar por la renuncia de los generales Celso Torrelio y Guido Vildoso, los últimos dos presidentes militares de Bolivia antes del retorno a la democracia. La intención de estas manifestaciones era conseguir una nueva convocatoria a elecciones como solución provisional.

En los primeros días del mes de julio de 1982, el Gobierno militar –en ese momento a la cabeza del Gral. Torrelio– organizó el Consejo Nacional Político y Social (CONAPOL), con el objetivo de gestionar un diálogo político capaz de lograr el retorno del país a la democracia. Ese consejo estuvo compuesto por cuatro jefes militares de las Fuerzas Armadas y tres miembros de la COB. Las negociaciones estuvieron marcadas por opiniones divergentes respecto al camino para un retorno a la normalidad democrática. Por un lado, el sector obrero pretendía convocar al Congreso elegido en 1980, pero que no se logró posesionar por el golpe de Luis García Meza. Los representantes de las FF.AA. plantearon como opción más favorable la realización de nuevas elecciones y reformulación de la Ley Electoral, de modo que la nueva democracia fuera "duradera y permanente". La COB veía en su propuesta mayores posibilidades de solucionar la crítica convulsión del país. El Gobierno militar pugnaba por llevar adelante su plan de reordenamiento político. Finalmente no se llegó a un acuerdo.

El 2 de junio de 1982, a través de medios de prensa como Presencia, varios partidos políticos enviaron una carta al Ministro del Interior; este documento reflejaba su intención de aceptar los resultados de 1980:

Recuadro 47

### Carta de los partidos políticos al Ministro de Interior

"…los partidos políticos que suscribieron el presente documento expresan su voluntad y decisión patriótica de actuar conjuntamente con el propósito de buscar la solución a la crisis nacional en el marco de la institución y el respeto de la voluntad popular, asegurar amplio *consenso* y participación del pueblo boliviano, institucionalizar los poderes públicos, instaurar el pleno ejercicio del régimen democrático y encarar las cruciales exigencias políticas, económicas, sociales y morales de la hora presente (…). Destacamos que en las actuales circunstancias, como nunca en nuestra historia, se da la posibilidad inmediata de restablecer el orden constitucional y las instituciones públicas, mediante la convocatoria al Congreso Nacional electo en 1980. Esta solución, sustentada en la decisión de respetar la voluntad popular mayoritaria expresada en las últimas elecciones, permitirá evitar enfrentamientos inútiles, mayor deterioro de la economía e incertidumbre y sacrificios al pueblo boliviano. Al mismo tiempo, recuperar en el ámbito nacional e internacional la dignidad y el crédito de la Nación".

Fuente: Presencia, 2 de junio de 1982

Estos planteamientos fueron parte del análisis que finalmente se impuso: regresar al Congreso de 1980, donde "la voluntad popular se hizo manifiesta en las elecciones", a través de

una participación masiva. Según este punto de vista, la base del ejercicio de la democracia era la participación a partir del voto y el respeto a los resultados de las urnas. En el futuro próximo, este argumento exploraría límites que entonces aún eran impensados, con gobiernos electos con porcentajes muy reducidos y con una bajísima participación.

El 16 de julio de 1982, ante el enfriamiento de los diálogos con la COB y los partidos políticos y la agudización de la crisis política, el General Torrelio convocó a elecciones generales para el 24 de abril de 1983. Esto cerraba la posibilidad a cualquier otra decisión política consensuada, como la de retornar al Congreso de 1980 o elegir una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución Política del Estado. Esta última alternativa había sido planteada por el Gobierno militar –al igual que se hizo en la dictadura de Chile– para salvaguardar sus intereses y sellar su impunidad. Simultáneamente, sucedió una crisis en la Jefatura de Gobierno que hizo que Torrelio ponga a disposición su cargo y que el General Guido Vildoso asuma transitoriamente la conducción de la nación, hasta la posesión del gobierno democrático.

Esta nueva Jefatura de Gobierno tuvo que enfrentar la misma crisis que su antecesora. En los primeros días del mes de agosto de 1982 surgieron graves problemas de transporte a nivel nacional, y el Gobierno asumió medidas económicas "de emergencia" para el día 5 de ese mes, algo que provocó un clima de tensión durante varios días. A todo eso, faltando apenas nueve meses para que se realicen las elecciones, el Gobierno decidió convocar a la Corte Electoral para organizar la elección del 24 de abril del año siguiente. Durante el mes de agosto, siete partidos políticos (MNR, PDC, ADN, PRA, FRI, PS, MNRU) ratificaron abiertamente su voluntad de volver al Congreso elegido en 1980, contradiciendo la propuesta de las elecciones en 1983. Incluso buscaron al ganador de aquellas elecciones, Hernán Siles Zuazo –asilado en el Perú–, para que acepte esa posibilidad.

Pese a que algunos sectores de la UDP se oponían a esa decisión, el razonamiento común fue que, aun realizándose nuevas elecciones, estas no cambiarían en mucho el resultado de las tres elecciones anteriores (1978, 1979, 1980), en las que había ganado esta fórmula. Por ese motivo, los partidos exhortaron al Gobierno a que se respeten los resultados de la última elección:

> Además del Congreso de 1980, estarían también dispuestos a acatar el triunfo electoral de la UDP… el ganador en las urnas en 1980 debe ser elegido presidente constitucional de la República (Presencia, 5 de agosto de 1982).

Según el análisis de Siles Zuazo, era imprescindible realizar un "Acuerdo de Salvación Nacional" que permitiera al Gobierno entrante contar con las condiciones legislativas para ejercer su cargo.

En el campo sindical, la COB y sus principales representantes planteaban que se convoque a elecciones inmediatamente para agosto o septiembre de ese año. El sector campesino estaba ocupado en una disputa de liderazgo entre dos facciones que se trató de resolver en Ampliados sectoriales. Entre los resultados de esta disputa, en junio de 1982, la Federación de Campesinos de La Paz rechazó el Pacto Militar-Campesino y demandó al Gobierno por precios justos para sus productos y por la rebaja en los fletes de transporte.

Por unos pocos días, las manifestaciones sociales se concentraron en pedidos particulares y las movilizaciones por la democracia pasaron a un segundo plano. Si en los meses de abril y mayo estas movilizaciones habían sido masivas, los problemas económicos del sector de transporte y la devaluación del Peso Boliviano hicieron que los sectores enfoquen su trabajo en solucionarlos. Sin embargo, poco a poco volvió a imponerse el razonamiento de que la democracia podía ser la salvación para la crisis acuciante que vivía el país.

Durante el mes de septiembre de 1982, la situación económica se agravó. De paso, las movilizaciones y las huelgas mineras –estas últimas encabezadas por el centro minero de Huanuni– se incrementaron. La COB convocó a la huelga general indefinida y, junto con la CSUTCB, pidió la constitucionalización de la nación aceptando al Congreso de 1980. Paros de transporte, marchas y movilizaciones se dieron a lo largo y ancho de todo el país. Un titular en Presencia, del día 12 de septiembre de 1982, decía lo siguiente: "una normalización inmediata de la vida institucional del país contribuirá a la solución de la crisis que vive el país (…), solo se superará la crisis en el marco democrático".

El 15 de septiembre, la presión y la movilización de la sociedad y de los sectores sindicales fue de tal magnitud, que las Fuerzas Armadas –luego de una reunión interna– decidieron convocar al Congreso elegido en 1980, planteamiento que había ganado el mayor respaldo. Producto de esa decisión histórica, la COB suspendió las huelgas y, paralelamente, la UDP aceptó la responsabilidad de hacerse cargo del gobierno democrático. Los partidos con mayor votación en 1980 (además de la UDP), el MNR y el ADN, apoyaron la medida.

Cuadro 3. Composición del Congreso de 1980

| Partido | Representantes para el congreso (Senadores y Diputados) |
|---|---|
| UDP | 57 |
| MNR | 44 |
| ADN | 30 |
| PS-1 | 11 |
| FDR | 5 |
| FSB | 3 |
| PARA | 3 |
| MNRU | 2 |
| MITKA | 1 |
| MIRKA-1 | 1 |
| TOTAL | 157 |

Fuente: Presencia, 11 de julio 1980.

A partir del 1 de octubre de 1982, el Congreso Nacional volvió a sesionar. Una comisión ad hoc de poderes trabajó para realizar la entrega de credenciales y los debates correspondientes. Ya en sesiones oficiales, el Gobierno militar hizo las invitaciones internacionales para la posesión del 10 de octubre. El 6 de octubre, el Congreso reunido emitió la ley que proclamó como ganadora de la elección de 1980 a la fórmula de la UDP: Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora, como Presidente y Vicepresidente de la República respectivamente. Inmediatamente se iniciaron los preparativos para su juramentación.

Dos días antes de la posesión, el viernes 8 de octubre, Hernán Siles Zuazo llegó al país luego de dos años de exilio en el Perú. Fue recibido por la guarnición militar de las tres fuerzas y con los honores presidenciales correspondientes en el Aeropuerto de El Alto. Las poblaciones de La Paz y El Alto acompañaron al nuevo Presidente durante todo el trayecto hacia la plaza San Francisco, manifestándole su respaldo. Ya en ese recinto, frente a una gran multitud reunida, realizó su primer discurso público, en que planteó el plazo de cien días para solucionar la crisis económica:

Recuadro 48

## Fragmentos del discurso de Hernán Siles Zuazo

"Este pueblo es el que ha realizado la hazaña sin par de la transición pacífica de la dictadura hacia la democracia (…). Este es un tiempo de sacrificio. Este sacrificio está recibiendo su recompensa. En los próximos 100 días, la situación económica empezará a ser aliviada. Para eso, será necesaria sobriedad y, si hay un pan, sea el mismo en la casa de los que tienen mucho que en la casa de los que tienen poco. En estos 100 días vamos a desmantelar la corrupción y vamos a inaugurar un nuevo periodo de la Revolución Nacional, porque esta reunión y otras que vengan en el futuro son posibles por abril de 1952, por la incorporación de los campesinos a la vida nacional, por la organización de los grandes sindicatos, que constituyen con la Federación de Mineros la vanguardia más esclarecida del pueblo boliviano".

Fuente: Presencia 9 de octubre de 1982.

El domingo 10 de octubre de 1982, Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora tomaron posesión de la presidencia del país de manos del General Guido Vildoso, el último de los gobernantes militares. A partir de ese momento se dio inicio al periodo democrático más largo en la historia de nuestro país. En el acto fue relevante la presencia de los presidentes Fernando Belaúnde Terry (Perú), Belisario Betancur (Colombia) y Osvaldo Hurtado (Ecuador), que asistieron en una expresión de respaldo internacional a este proceso.

En la opinión de un columnista del periódico Última Hora, ese momento de 1982 era muy parecido al de 30 años atrás, luego del triunfo de la revolución de abril de 1952:




Figura 24. Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora posesionados como Presidente y Vicepresidente de Bolivia 1982.
Fuente: Periódico Presencia.

Recuadro 49

## Similitudes entre las posesiones de 1952 y 1982

"El éxito de la Revolución boliviana radicaba en colocar en su justo medio a los principales factores de poder del país: los partidos políticos, las FF.AA., los sindicatos, el empresariado (…). Hoy día [1982], el nuevo Gobierno de Siles tiene un problema similar. Debe colocar en su justo medio a los militares, mantener en su recuperación a los sindicatos, fortalecer a los partidos y dar su lugar a los empresarios. Este nuevo equilibrio y armonía significan dar a cada cual sus específicas responsabilidades en la enorme tarea de reconstruir la Nación (…). Siles tiene una visible y grande calidad humana. Sencillez, honestidad sin tacha, valentía, generosidad, son cualidades que solo se le pueden negar apelando al egoísmo".

Fuente: Última Hora, 19 de octubre de 1982.

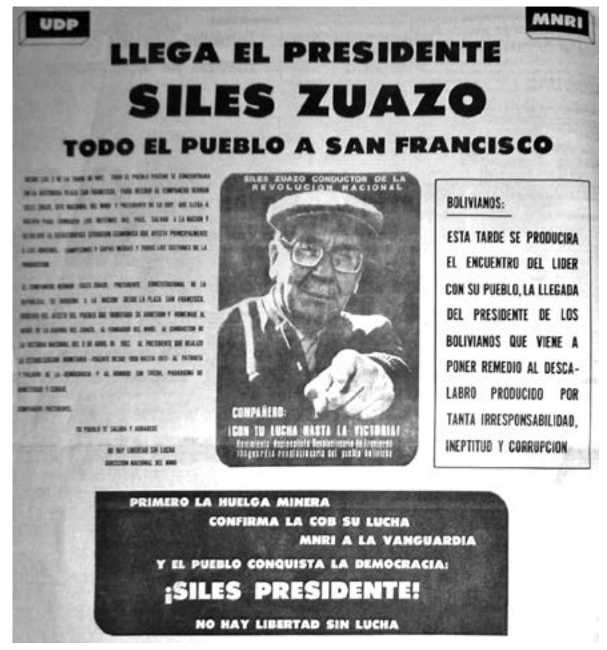



Figura 25. Hernán Siles Zuazo.
Fuente: Periódico Presencia.

## El gobierno de la UDP, la democracia y la agudización de la crisis (1982-1985)

La Unión Democrática y Popular fue una alianza de varios partidos: el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partico Comunista de Bolivia (PCB) ysectores del FRI, PCML y sectores del PRIN, del POR junto a otros grupos pequeños. En la representación congresal, dicha fórmula –asumida de la elección de 1980– solo contaba con 57 de los 157 parlamentarios. Los demás diputados y senadores eran del MNR y del ADN y de otros pequeños partidos.

El gobierno democrático asumió de manera inmediata medidas urgentes para la estabilización de la economía y la creación de condiciones para su reactivación. Sin embargo, más allá de la crisis, las condiciones eran de por sí muy complejas. Al no tener el Congreso apoyando sus decisiones, el presidente Siles Zuazo tuvo que gobernar a partir de decretos presidenciales, lo que limitó la posibilidad de realizar transformaciones estructurales. La primera medida, asumida el 6 de noviembre, fue un Paquete Económico que consistía en 30 decretos presidenciales que planteaban la nueva orientación de la política económica del Gobierno. El objetivo del Paquete Económico era paliar

la crisis, y entre sus puntos más importantes se encontraban los siguientes:

Recuadro 50

### Puntos más importantes del Paquete Económico

- Restablecimiento de una tasa de cambio fija y única y devaluación del valor del Peso Boliviano en más del 400%. El dólar pasa a equivaler 200 pesos y las empresas tienen la obligación de vender sus divisas por exportaciones al Banco Central.
- Prohibición de las transacciones en dólares americanos al interior del país y conversión de todas las deudas contraídas en dólares en Pesos Bolivianos al cambio de 145,40 pesos por dólar.
- Aumento de los precios de bienes y servicios para aumentar el pago de salarios de sus empleados. Entre lo que controla el Estado están la producción de arroz, leche, pan, carne, café, fideos, azúcar, aceites, energía eléctrica, derivados del petróleo como gas natural, gasolina, kerosene y otros más.
- El salario mínimo en 8.490 pesos bolivianos, [esta cifra equivale un 30% de lo que se pagaba hasta ese entonces].
- La creación de una comisión que proponga las modalidades de cogestión paritaria de las empresas productivas.
- Creación de la Empresa Nacional de Transporte Automotor (ENTA) para suprimir el monopolio sindical del transporte urbano y rural.
- Reversión de los terrenos fiscales y adjudicación a personas naturales y jurídicas luego del 17 de julio de 1980 (día del golpe de Estado de Luís García Meza).
- Suspensión del pago de la deuda externa durante tres meses.

Fuente: Presencia, noviembre 1982.

Estas medidas tenían la intención de frenar la hiperinflación y mejorar la producción. La Asociación de bancos (ASOBAN) fue la que mostró más escepticismo frente a estas medidas, junto a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que criticó el hecho de que se mantenga el intervencionismo estatal en la economía. Para ellos, el control estatal había sido una de las principales causas de la profundización de la crisis. De la misma forma, Juan Lechín Oquendo, secretario ejecutivo de la COB, desestimó la posibilidad de participar en el Gobierno si no se planteaba un programa económico que permita la liberación del país respecto al Fondo Monetario Internacional. La COB también demandó una estructura gubernamental que le otorgue el control de la mitad de los ministerios al sector obrero.

Al no tener la mayoría en el Parlamento, cualquier tipo de medida que el Gobierno quiso asumir fue trabada por el resto de partidos. Esta situación actuó muy en contra del presidente Siles Zuazo y mostró inmediatamente que, pese a que el Gobierno tenía a la opinión pública a su favor, no tenía posibilidad alguna de gestionar leyes en el Legislativo. Esto obligó al Gobierno a establecer diálogos directos con los diferentes sectores que lo habían apoyado, buscando mayor representación. Los partidos de derecha no desaprovecharon esta oportunidad y criticaron duramente las acciones de la UDP, ya sea menospreciando su impacto o alegando la falta de radicalidad de las medidas.

Ya pasados los 100 días del plazo solicitado por el Presidente, durante los primeros meses de 1983 se empezó a pedir resultados al nuevo Gobierno. Lo más visible fue que, aunque se intentó aminorar la inflación, no se pudo fortalecer la producción, por lo que las críticas volvieron a caer sobre las decisiones asumidas. Junto a estos problemas, la UDP tuvo que enfrentarse a las primeras demandas de la COB y de los mineros, que en los últimos meses del 1982 plantearon soluciones al enorme desabastecimiento de sus pulperías y los bajos sueldos.

El primer gran conflicto que la UDP enfrentó, en 1983, fue interno: la salida de los ministros del MIR, que abandonaron la coalición gobernante. Como argumento mencionaron la imposibilidad de gestión, a raíz de los cambios realizados en relación a los planteamientos previamente acordados en el Programa de Gobierno, elaborado por los partidos de la coalición. La desdolarización y el intercambio comercial como política económica para reducir la inflación afectaron la relación del MIR con los demás miembros del Gobierno, pero el centro de la discusión fue el presidencialismo en la toma de decisiones, que dejaba sin margen de acción al partido. Esto se hizo particularmente evidente en la designación de cargos intermedios en ministerios y departamentos.

Recuadro 51

## Gabinete del Presidente Hernán Siles Zuazo, octubre de 1982

| | |
|---|---|
| MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | : Mario Velarde Dorado |
| MINISTRO DE INTERIOR, MIGRACION Y JUSTICIA | : Mario Roncal Antezana |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | : José Ortíz Mercado |
| MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACIÓN | : Arturo Nuñes Del Prado |
| MINISTRO DE FINANZAS | : Ernesto Aranibar Quiroga |
| MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA | : Alfonso Camacho Peña |
| MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | : Hernando Poppe Martinez |
| MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | : Jorge Crespo Velasco |
| MINISTRO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL | : Roberto Arnez Villarroel |
| MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA | : Mario Argandoña |
| MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA | : Carlos Barragan Vargas |
| MINISTRO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS | : Zenon Barrientos Mamani |
| MINISTRO DE ENERGIA E HIDROCARBUROS | : Jorge O'connor D'Arlach |
| MINISTRO DE URBANISMO Y VIVIENDA | : Jaime Ponce Antezana |
| MINISTRO SECRETARIO | : Horacio Torrez Guzmán |
| MINISTRO DE INFORMACIONES | : Jorge Gonzáles Roda |
| MINISTRO DE INTEGRACIÓN | : Hormando Vaca Diez |
| MINISTRO DE AERONÁUTICA | : Gnl. Brig. Aé. Oscar Villa Urioste |

- Gral. de Div. Alfredo Villarroel Barja: Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación.
- Gral. de Div. Simón Sejas Tordoya: Comandante General del Ejército
- Gral. de Brig. Aé. Juan Muñoz Revollo: Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana.
- Vicealmirante Wilfredo de la Barra Saavedra: Comandante General de la Armada Boliviana.

Fuente: Gaceta de Bolivia, Decreto Presidencial 19230, 19231 y 19236.

Durante el año de 1983 se desató una extrema sequía en el Altiplano, que contrastó con las lluvias torrenciales del Oriente. Ambas situaciones complicaron muchísimo la situación rural del país, tanto en la producción de alimentos como en su comercialización en la ciudades –debido a la especulación de los intermediaros y los transportistas. Este problema fue uno de los causantes de la elevada tasa de migración desde el campo a los centros urbanos, fenómeno que se continuaría desarrollando durante toda la década. La UDP tuvo que lidiar con esta grave crisis rural, pues la producción agrícola cayó en un 25% ese año, lo que afectó fuertemente en el abastecimiento de alimentos. El Gobierno trató de organizar su distribución durante todo ese año y sufrió las acciones del principal grupo benefactor de la crisis: los comerciantes grandes y pequeños, que ocultaron productos e hicieron inflar más la demanda de la canasta familiar y la especulación.

La UDP, apoyada en diferentes organizaciones que lucharon contra la dictadura, también asumió la importante política de fortalecer los Derechos Humanos y desmantelar el antiguo aparato de represión. Un caso conocido fue el de la extradición de Klaus Barbie, jefe nazi de la GESTAPO en Lyon (Francia) durante la Segunda Guerra Mundial. Desde la década de 1950, Barbie vivió en Bolivia con el nombre de Klaus Altman, y fue asesor militar e instructor en técnicas de tortura de los gobiernos dictatoriales. También formó parte del grupo cívico-militar que conspiró para el golpe de García Meza, consiguiendo la subvención del narcotráfico para un Gobierno que, finalmente, estuvo ligado a la producción de cocaína. El proceso de extradición se realizó en el

más absoluto secreto, aunque ya para mediados de octubre de 1983 la prensa lo hizo público.

Antes de este llamativo caso internacional, existió otro –también de extradición– relacionado con el terrorista Pierluigi Pagliai, que era buscado por la justicia italiana. Pagliai era miembro de un grupo cruceño de traficantes de cocaína que formaba parte de la red de represión llamada Los novios de la muerte, que actuó violentamente en distintas dictaduras. Lo paradójico es que Pagliai tenía consigo una credencial de Coordinador Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico. Junto a él se encontraba Stefano Della Chiaie, que también estaba involucrado en la producción de droga y era buscado por narcoterrorismo; él no pudo ser capturado. Cuando salieron a la luz, ambos casos mostraron cuán fuerte era presencia del narcotráfico en los distintos niveles del Gobierno militar y su influencia en las élites del país. Esta situación obligó al Gobierno de la UDP a intervenir las oficinas de lucha contra el narcotráfico.


**NARCOTERRORISTAS.-** Los organismos de inteligencia de paises afectados por el tráfico de estupefacientes y la Policía Internacional, INTERPOL, recopilaron ésta y otras fotografías sobre "los grupos armados irregulares que se dedican al tráfico de estupefacientes y al terrorismo". Según un informe de esos organismos, "ésta es sólo una de las fotografías recopiladas en el último tiempo y que son pruebas que identifican a algunas de las personas que se involucraron en estas actividades". En la fotografía se ha identificado como asesor de estos grupos, el alemán Stellfeldt (cuarto de la derecha). Algunos de los otros son calificados como "terroristas internacionales" buscados en sus paises: Francia, Argelia, Bélgica, Italia.

Figura 26. Grupo de paramilitares internacionales en Bolivia 1982.

Fuente: Periódico Presencia.


# ALTMANN INDESEABLE EN BOLIVIA

## DECLARACIONES A "NEWSWEEK"

Nueva York, 18 de octubre (DPA).- El nuevo Presidente de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, ha anunciado la extradición del ex-comandante de las SS.SS. en Lyon, Klaus Barbie (alias Altmann), condenado a muerte en ausencia por un tribunal militar francés por crímenes de guerra.

En una entrevista publicada en el último número de la revista norteamericana "Newsweek", Siles Zuazo especificó cuál sería su postura en caso de que los gobiernos de Francia y Alemania Occidental presentasen solicitud de extradición: "lo entregaremos".

El Presidente boliviano recordó en la entrevista que Barbie, hoy en día de 68 años, había participado en el pasado en la elaboración de cocaína. "No tenemos interés alguno en proteger a aquéllos que actúan en contra de los intereses del pueblo boliviano" reproduce "Newsweek" las declaraciones de Siles Zuazo.

Agregó el Presidente que su gobierno redoblaría la lucha contra el tráfico de drogas. Ante todo la juventud de Norteamérica se ve afectada seriamente por el floreciente tráfico de cocaína en Bolivia, concluyó Siles Zuazo.

"Frente a la sede de la COB, aguardando un taxi, acompañado por un guardia personal, Altman exterioriza su impaciencia.

Figura 27. Klaus Barbie en una calle de La Paz.

Fuente: Periódico Última Hora.

Pese a los intentos de estabilización, la inflación volvió a aumentar debido a las precarias condiciones de la economía y al comportamiento de los distintos actores sociales, políticos y económicos, que prefirieron sus intereses particulares. Esto le cortó al Gobierno toda su capacidad de acción. La exigencia del pago de la deuda externa, asumida durante la década de 1970 con organismos internacionales, fue un peso que también recayó sobre el Estado. La cooperación internacional, comprometida por el FMI, Banco Mundial y los créditos bilaterales, no se cumplieron. Esta falta de apoyo jugó desfavorablemente contra el Gobierno y el país. Las entidades multilaterales, que en un principio habían apoyado el regreso a la democracia, exigieron que el Gobierno realice ajustes a la política económica de acuerdo a sus lineamientos e intereses para otorgar los créditos que necesitaba el país, del mismo modo procedió en los demás países de Latinoamérica.

En junio de 1983, la CSUTCB celebró su Segundo Congreso, y de allí salió la propuesta de implementar un cogobierno UDP-COB-CSUTCB. Las duras medidas de presión que ambas instituciones tomaron en los meses previos hicieron que el Gobierno no accediera a la propuesta. Dos meses antes, el 19 abril de aquel año, las dirigencias de la FSTMB y de la COB habían tomado físicamente las instalaciones de la COMIBOL, como manera de hacer efectiva la "cogestión obrera mayoritaria", concepto que el Gobierno manejaba discursivamente. Esta también fue una medida de presión para que las necesidades del sector minero sean atendidas. Sin embargo, la inmediata respuesta del Gobierno fue el rechazo de esta acción, que fue calificada como anarcosindicalismo. Al final, lo que se produjo fue un distanciamiento entre la COB y el Poder Ejecutivo.

La cogestión obrera paritaria, pese a haber sido creada una Comisión Nacional que estudie y proponga las bases y formas de aplicación en las empresas públicas productivas (D.S. 19264), se hizo efectiva en COMIBOL por presión de los trabajadores. Sin embargo, las dificultades técnicas, económicas y políticas del momento laceraron la posibilidad de éxito de esta importante acción que llevó a la paradójica situación de hacerse huelga a sí mismos, pues su administración estaba en manos de la organización minera. Finalmente, el propio Gobierno se alejó de su intensión abierta de implementar la cogestión en otras empresas; así, en ese momento, se perdió la oportunidad de implementar una forma novedosa de gestión gubernamental-sindical. En esa ocasión, y en los posteriores sucesos, se vio cómo las anteriores actitudes de resistencia y estrategias políticas del sector obrero frente a la dictadura, dificultaron una lectura constructiva del contexto de un gobierno democrático.

Posteriormente, la COB retomó el Plan Económico-Social de Emergencia, que en agosto de 1983 se convirtió en una alternativa para el Gobierno de Siles Zuazo. Sin embargo, esta fue rechazada porque, más que programática y de soluciones estructurales viables, esta tenía una fuerte carga salarialista. Es importante aclarar que tanto los partidos de derecha como los sectores empresariales privados ejercieron una evidente presión para que no existiera entendimiento entre los organismos de los trabajadores, la COB y la UDP. A partir del rechazo, el sector obrero pasó de la propuesta a la demanda del "Salario mínimo vital con escala móvil" (planteado por los trotskistas) y de la aplicación inmediata de su Plan de Emergencia como única alternativa. Irónicamente, el propio Congreso Nacional –donde la UDP era minoría– también aprobó el salario mínimo, como una declaración abierta de oposición a Siles Zuazo (Escobar, 2008, 118).

En una entrevista del periodista Ted Córdova y el Presidente, este reflexionó sobre el proceso político del país, planteando la dificil tarea de mantener una práctica de la democracia sin restricciones como la que llevó adelante su Gobierno. Señaló que él y sus allegados enfocaban su esfuerzo en detener cualquier acto de corrupción y designar a las mejores personas como ministros; también dijo que intentaban cambiar la prebendal práctica política de los anteriores gobiernos. En concordancia con estas declaraciones, a fines de 1983 expresó su intención de hacer un gran Acuerdo Nacional con los partidos políticos y sectores sociales –incluso con la Iglesia. También rescató la intención de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, que se identificó con el proceso institucional democrático. En su momento –y en el entendido de que si el Gobierno caía ellos también caían con él–, este grupo se constituyó en la base de sustentación de la UDP (Córdoba, 1986).

En los primeros meses de 1984, el Gobierno tuvo que soportar una huelga de hambre convocada por la COB y 48 horas de paro de los

empresarios privados; ambos grupos exigían soluciones a una crisis que aún no se había logrado superar. En marzo se crearon los mercados campesinos con el objetivo de llevar de manera directa los productos del agro al consumidor urbano. Pero, debido a la corrupción de los funcionarios del MNRI y a la presión de los intermediarios, comerciantes y transportistas especuladores, esta medida no logró tener el éxito pensado. Contrariamente, lo que hizo fue incrementar la especulación y el ocultamiento de productos, hecho que a su vez generó más paros y huelgas. El mercado negro del dólar hizo que se llegara a cotizar extraoficialmente hasta en 3250 $b, mientras que el oficial llegó a 2000 $b.

Los partidos conservadores –como Acción Democrática Nacionalista (ADN), del ex dictador Hugo Banzer, y el Movimiento Nacionalista Revolucionario Histórico (MNRH), de Víctor Paz Estenssoro– generaron una opinión que debilitó en gran medida la imagen del Gobierno. Su argumento fue que la UDP profundizaba la crisis por el "desgobierno y el caos interno". También lo calificaron como un agente del imperialismo de izquierda –en alusión a la presencia del PC prosoviético. La presión de estos partidos en el parlamento profundizó las pugnas internas que tenían los partidos miembros de la coalición gobernante. Por su parte, el movimiento obrero adoleció de una falta de autoridad que se hizo muy evidente cuando, en Santa Cruz, los trabajadores firmaron un pacto con los empresarios. El Gobierno, buscando superar la crisis, desautorizó la medida a través del CEN de la COB un día después (27 de marzo). Sin embargo, las protestas con paros y huelgas se incrementaron tanto que duraban hasta 72 horas.

En abril de 1984 se realizó el XX Congreso de la FSTMB. Ese mismo mes, el MIR volvió a formar parte del Gobierno, luego de pactar una distribución en las cuotas de los ministerios. Otra vez reunida la UDP, se decretó un plan de estabilización que implicó el control de precios, lo que –nuevamente– incrementó el costo de vida. Como veremos más adelante, un nuevo intento de diálogo con la COB fue truncado por el secuestro del Presidente, pocos meses después.

Durante los meses siguientes, la parálisis del país fue mayor. Los funcionarios de la administración pública –Banco Central, YPFB, Ministerios, Renta, Aduana, y otros sindicatos de trabajadores del Estado– también se declararon en huelga. La imposibilidad de parte del Gobierno de generar una salida diferente a la crisis económica se hizo latente. Incluso se manifestó de la forma más inimaginable, demostrando la absoluta fragilidad de la coyuntura política en la que se vivió.

El secuestro del presidente Hernán Siles Zuazo sucedió el 30 de junio de 1984. Los implicados eran parte de un grupo de policías y militares que, junto a varios políticos de partidos como el MNR y el ADN, pensaron en que otro Gobierno sería la mejor solución. Sin embargo, al no encontrar apoyo ni en las Fuerzas Armadas ni en la sociedad civil, decidieron entregar al Presidente luego de asilarse en la embajada de Venezuela. Si bien este suceso hizo muy notoria la fragilidad del Gobierno, mostró cuán fortalecida era la posición de la sociedad boliviana, que no estaba dispuesta a apoyar ningún intento golpista. Todos los sectores –por diversas que pudieran ser sus posturas e intereses– manifestaron su apoyo incondicional a la democracia.

Durante el mes de septiembre, en el VI Congreso de la COB, se formó la Dirección Revolucionaria Unitaria (DRU) dirigida por partidos de izquierda radical. En esta Dirección participaron varias tendencias mineras, obreras y universitarias que elevaron la consigna del "salario mínimo con escala móvil" a calidad de máximo planteamiento. Además, el slogan "Ni reformismo ni fascismo" fue una clara muestra de que no apoyarían al Presidente. En aquel Congreso se decidió el camino que tomaría el movimiento obrero, considerado por los propios como la vanguardia de la liberación nacional y los genuinos representantes de los intereses del pueblo trabajador.

Aquí se puede observar una de las grandes discusiones de ese momento: el problema del partido-sindicato. Este dilema planteaba la pregunta sobre si la COB, desde su concepción como órgano de poder, era capaz de hacerse cargo de la conducción del Estado. ¿O acaso la Central Obrera debía quedarse con su labor sindical y de representación social de los sectores laborales, campesinos y capas medias empobrecidas, bajo la dirección inequívoca de un partido? Finalmente, desde la visión sindicalista se decidió mantener el interés centrado en obtener respuestas a sus demandas y en presionar al Gobierno para obtenerlas.

Debido a la crisis política y a la ingobernabilidad provocada por el Parlamento, en octubre y noviembre de 1984 se llegó a otro extremo

inusitado: el propio presidente Hernán Siles Zuazo se declaró en huelga de hambre como protesta contra la falta de voluntad política en el Congreso para lograr que se realicen acuerdos entre las diferentes bancadas parlamentarias. Dentro la UDP, el PCB se alejó de la coalición, dejando solos al MIR y al MNRI. Fue en ese momento de gran tensión política que apareció una las figuras importantes del campo político, como mediador de conflictos: la Iglesia católica.

## El final de la UDP

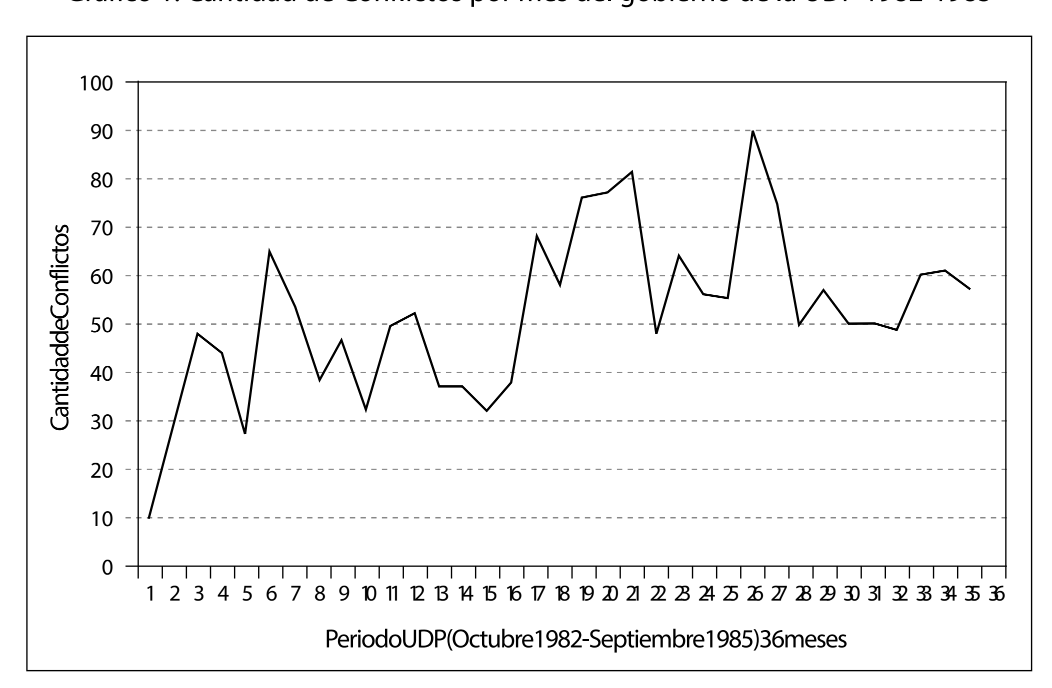
El gráfico Nº 1 es una muestra de la cantidad de eventos conflictivos que se desarrollaron durante los 3 años del gobierno de Hernán Siles Zuazo y la UDP.

En noviembre de 1984, el Gobierno tuvo conflictos en tres frentes. Por un lado, en el congreso se le opusieron las otras fuerzas partidistas y la oposición llegó a pedir el adelanto de las lecciones; por el otro, la COB declaró la huelga general indefinida que duró nueve días por sus pedidos de aumentos salariales, mejor abastecimiento de productos y control de los precios de artículos de primera necesidad, también advirtieron de la actividad de grupos subversivos de derecha y militares duros. Pero el tercer frente de conflicto, al interior de la propia UDP, contribuyó especialmente a crear un clima de mucha incertidumbre política. En ese momento la Iglesia, a través de monseñor Jorge Manrique advirtió sobre los peligros que corría el Estado de Derecho, por lo que asumió la posición de mediador para el diálogo y logró, en diferentes reuniones, facilitar acuerdos para encontrar salidas políticas a la crisis. Una de estas salidas –una sorpresa absoluta para todos– fue la aceptación del Presidente de adelantar las elecciones para junio de 1985. Sin embargo, para optar por esta salida la UDP planteó tres condiciones mínimas:

> Aceptación por consenso de la propuesta presidencial; (…) Concertación, por consenso, de una tregua política que asegure el normal desenvolvimiento del proceso electoral y el encaramiento de la crisis económica durante este periodo, preservando los intereses nacionales y populares; (…) y que el Gobierno continuará ejerciendo sus labores con la plenitud de las facultades que le asigna la Constitución Política del Estado (Presencia, noviembre de 1984).

Luego de llegar a ese acuerdo político, la crisis económica se profundizó con la baja en la cotización de los metales –sobre todo del estaño– de principios de 1985. Este golpe, desestabilizador para Bolivia, tuvo importantes reflujos en la crisis política. Como respuesta a las medidas de ajuste que el Gobierno asumió para intentar estabilizar

Gráfico 1. Cantidad de Conflictos por mes del gobierno de la UDP 1982-1985




Fuente: Adaptación del gráfico "ACCIÓN COLECTIVA Y COYUNTURA DEMOCRATICA" Roberto Laserna, 1985. Pag. 12.

la situación económica, la COB decretó una huelga general indefinida. El "paquete económico" tensionó más la economía, al punto que se calificó de "antipopular" y de "desgobierno" a la labor de la UDP. Sin embargo, fue recién en las jornadas de marzo de 1985 que la verdadera magnitud de la oposición obrera se hizo visible. Durante las jornadas, miles de mineros tomaron por 16 días la ciudad de La Paz, protestando cada día con el detonar de sus dinamitas, pidiendo la mejora de sus salarios y de la dramática situación que vivian en las minas. En medio de ese caos, al presidente Siles Zuazo no le quedó más margen de acción que la paciencia de una situación acorralada manteniendo el sentido popular de su gobierno y evitar una crisis mayor de violencia por lo que no usa ni a la policía ni a las FFAA. Al final, los mineros regresaron a las minas sin conseguir lo pedido pero con los gritos de "los mineros volveremos".

En términos económicos, la inflación fue la mayor de Latinoamérica y una de las más grandes en el mundo, con un 8.170,5%. El cambio del dólar, con un tipo oficial y otro paralelo o del mercado negro, hizo que en 1982 fuera de 200 pesos bolivianos por dólar en el primero y 283 en el segundo. Pero eso no sería nada, pues terminando el mandato de la UDP, en agosto de 1985, el cambio oficial era de 75.000 $b por dólar, y el del mercado negro llegó a 1.050.000 $b.

Cuadro 4. Cuadro de cotizaciones del dólar 1982-1985

| Año | Mes | $ Oficial | $ Paralelo |
|---|---|---|---|
| 1982 | Diciembre | 200 | 283 |
| 1983 | Diciembre | 500 | 1,244 |
| 1984 | Junio | 2,000 | 3,250 |
| | Diciembre | 9,000 | 22,100 |
| 1985 | Enero | 9,000 | 60,100 |
| | Febrero | 50,000 | 120,000 |
| | Marzo | 50,000 | 121,000 |
| | Abril | 50,000 | 156,600 |
| | Mayo | 75,000 | 248,500 |
| | Junio | 75,000 | 448,000 |
| | Julio | 75,000 | 801,000 |
| | Agosto | 75,000 | 1,050,000 |

Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/bo/Sabino-bolivia.htm

Un acto singular, que mostró la actitud comprometida de Hernán Siles Zuazo con el país, fue la devolución de 300.000 dólares que había recibido como gastos de representación por parte del BCB. Alegó que los devolvía por no haberse ejecutado o por haber sido suspendidos los motivos de dichos gastos.

Esta actitud se contrapuso, por ejemplo, a la acción de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) que jugó un importante rol desestabilizador durante el gobierno de la UDP. Esta entidad se encargó de ocultar los productos de consumo básico que escaseaban, aportando mucho al alza de precios y a la especulación. LA CEPB aprovechó muchas medidas que le eran favorables, como el manejo de la divisas –dólares dados por el Gobierno– que no fueron destinadas a la producción, sino al mercado negro. También tomó parte en la desdolarización de la economía nacional, una de las primeras medidas que asumió la UDP y que terminó beneficiado a CEPB de sobremanera con sus deudas y arruinó al pequeño ahorrista de banco.

En noviembre de 1984, luego del fuerte momento vivido tras la huelga de hambre del Presidente, los miembros de la CEPB pidieron su dimisión. En los momentos del reajuste económico, ya con las medidas asumidas por el MNR –con Paz Estenssoro como Presidente–, un miembro de la CEPB planteó lo siguiente:

> El empresariado privado está dispuesto a prestar su decidido concurso. Sin embargo, para que su aporte sea significativo y real, sería indispensable que sus iniciativas encuentren una receptividad constructiva (Última hora, 13 de septiembre de 1985).

Uno de los resultados positivos de la transición iniciada por la UDP fue la garantía del inicio de los procesos electorales de la democracia partidaria, algo que continúa hasta hoy. Luego de que Siles Zuazo aceptara acortar su mandato, la elección fue programada para el 14 de julio de 1985. Esto permitió que, por primera vez desde que se había vuelto a la democracia, la actividad política electoral se unificara por seis meses. También significó la ruptura definitiva de la UDP, pues uno de los acuerdos del anterior año fue posibilitar que el vicepresidente Paz Zamora también pueda presentarse como candidato para las elecciones mediante la renuncia de su cargo. Así, el MIR dejó la coalición, y el MNRI de Siles y el PCB se quedaron solos.

Existen varias interpretaciones sobre cuáles pudieron ser las principales causas para la caída de la UDP. Una de ellas es que las disputas internas por espacios de poder y liderazgo generaron su fractura. Otra es la constante postura antagonista de todas las organizaciones y sectores con los que debía dialogar y negociar la UDP. En un primer grupo se encontraban la COB, la FSTMB y la DRU, cuya visión salarialista no dejó gobernar al partido. Al sector obrero se sumaron las constantes trabas que puso el Congreso, impidiendo cualquier tipo de legislación y dificultando en gran parte la salida de situaciones complejas. Otro sector que imposibilitó algún tipo de coordinación y gobernabilidad fue el de los partidos de derecha. También la especulación de los sectores empresariales, productores y comerciantes de las ciudades causó grandes baches en la economía, comprimiendo la canasta familiar y el acceso a determinados productos. Incluso la cooperación internacional le restó apoyo haciendo que su Gobierno mostrara lo más flaco de la izquierda desprestigiando la gestión, algo que no había logrado demostrar durante las dictaduras militares. Finalmente, la conjunción de todos estos y otros problemas más hizo que la UDP no termine su gestión de gobierno.

Luego de las experiencias de 1978, 1979 y 1980, coartadas por los militares, a partir delmes de marzo de 1985 se reeditaron las campañas electorales en democracia, con partidos libres de acción política, sin vetos y con elecciones limpias. Sin embargo, ese proceso se desarrolló con fuertes dificultades. Una de ellas fue la huelga de los trabajadores del BCB, que no permitió que la Corte Electoral disponga de fondos de manera inmediata para la preparación de laselecciones. A esta se sumaron las protestas de la CSUTCB, cuyo pedido era la suspensión de la elección debido a la poca inscripción para votar en el área rural. Esta medida de presión fue tildada como una maniobra para que los campesinos no participen. A su vez, el Gobierno planteó que las elecciones sean postergadas y solicitó una sesión extraordinaria del Congreso para cambiar la fecha. Sin embargo, esta no se realizó por falta de quórum, lo que llevó a que la fecha de votación se mantenga para el 14 de julio de 1985.

Pero en estas cruciales elecciones no solamente estaba en juego el triunfo del partido que en adelante se haría cargo del Gobierno nacional. La crisis económica del país puso de manifiesto problemas estructurales del Estado boliviano, que habían agotado y vaciado de sentido el discurso del nacionalismo revolucionario. El partido que saliera electo, junto con todas las instancias gubernamentales, debía responder al vacío político, económico y social dejado y a la urgencia de un modelo de Estado que, tanto en lo discursivo como en lo práctico, supere las limitaciones de aquel Estado que emergió de la Revolución Nacional de 1952 y la crisis.

Justamente, en este crucial acontecimiento se marcaría la manera posterior del hacer político en Bolivia. En otras palabras, con la experiencia de la UDP se comprendió que no era posible caer en ese grado de inviabilidad en el ejercicio del Gobierno. De hecho, a partir de entonces se comenzó a tomar como algo legítimo "hacer lo que fuera necesario" para asegurar la gobernabilidad dentro del sistema político, incluso llegando más allá de los intereses de la nación y la opinión popular.

Los gobiernos que sucedieron a la UDP hicieron alianzas, pactos, amarres, acuerdos, etc., todo en nombre de la gobernabilidad y la democracia. Sin embargo, la crisis que vivió el país entre 1982 y 1985 engendró un "trauma de la gobernabilidad" que sellaría la forma de hacer política en el futuro, con la llamada "democracia pactada". A la larga, por este trauma se pagó un alto costo: no ver la gobernabilidad más allá de los acuerdos entre partidos y/o, en caso necesario, más allá de la coptación de las dirigencias de las organizaciones sociales, lo que trajo consigo el grave auge del clientelismo político. Durante los 20 años de democracia que siguieron a la UDP, ese fue el ritmo que se instauró en la política boliviana. Pero esta forma de gobierno venía con un aditamento muy problemático: quienes hacían los acuerdos siempre recibían algo a cambio, ya fueran ministerios, cargos de jerarquía, participación en el Gobierno, cuotas de poder u otro tipo de favores.

## Crisis del Estado y de la institucionalidad del 52

El anterior desarrollo mostró cómo se generó una condición de crisis dentro del Estado, no por su constitución como tal –o por lo menos de manera directa–, sino por su institucionalidad y capacidad de gestión. Durante los casi 20 años en que la administración del Estado estuvo en manos de gobiernos dictatoriales (1964-1982),

las formas de gestión fueron trastocadas por lógicas que se alejaron de la mínima eficiencia burocrática, lógicas en las que el prebendalismo y la corrupción abundaron. Por otra parte, los grupos de poder que se engendraron continuaron actuando durante el período de transición y en los años posteriores.

Paradójicamente, la fuerza de los sindicatos, en su gran mayoría afiliados a una postura de izquierda, hizo que el Presidente tuviese en ellos, más que a un aliado, a sus propios detractores, que le impidieron generar políticas que pudiesen paliar la situación económica. Antes de su llegada para asumir el mandato del país, Siles Zuazo propuso asumir una economía de guerra para enfrentar la crisis. Sin embargo, semejante decisión requería del apoyo de todo el país, algo que estuvo lejos de suceder.

La inestabilidad fue tan grande que, en una combinación de aprendizaje y trauma político-social, la percepción de parte de la población relacionara la estabilidad con el periodo en que gobernó Banzer. Así, la ingente cantidad de dinero que el dictador recibió por préstamos de petrodólares –situación que contribuyó a elevar la deuda externa– fue olvidada o relegada a un segundo plano. Esa imagen tuvo sus réditos cuando, décadas después el ex-dictador fuera elegidos por urnas y lo llevaran a asumir nuevamente el Gobierno, esta vez de forma democrática.

En cambio, el gobierno de la UDP quedó en la memoria como la acumulación de varios factores negativos: inseguridad, falta de alimentos, incapacidad de gestión, falta de soluciones concretas al problema de la sequía, hiperinflación, largas filas, etc. En ese sentido, la izquierda quedó estigmatizada por una vinculación directa con el riesgo y la incertidumbre, lo que llevó a la gente a pensar que el caos tenía mayores posibilidades de expandirse con un gobierno de izquierda (el viejo fantasma de la expropiación comunista).

El aprendizaje para el sistema político fue que el Estado no podía empantanarse en una lucha antagónica de partidos a nivel parlamentario. Esta confrontación de fuerzas había trabado toda posibilidad de generar mínimos acuerdos, lo que contribuyó en gran manera a desencadenar la crisis.

La opción de la estabilidad y la gobernabilidad congresal se impuso frente a la visión de que era necesario tener una relación directa con la sociedad y sus organizaciones. En otras palabras, se creó una separación artificial que elevó los problemas políticos a la esfera del sistema de partidos –relacionados institucionalmente con los poderes–; su solución ya no pasaba por las instancias gubernamentales, tanto a nivel nacional como local. Esa relación hizo que lo que estuviera fuera de ese micro-espacio tuviese menos presencia o importancia para ser tratado políticamente. Los posteriores años mostrarían cómo esa lógica de diferenciación terminó alejando mucho a lo político de lo social, constituyendo no solo una elitista y negativa clase política, sino una distinción que privaría a las organizaciones sociales y populares del quehacer político nacional.

## La predisposición social al cambio político

La experiencia de la UDP fue la de un Gobierno de transición que tomó por sorpresa a todos, sobre todo por la crisis incontrolable que tuvo que solucionar y las condiciones muy adversas que tuvo para hacerlo. El primer elemento a tomar en cuenta: el presidente Siles Zuazo propuso asumir una economía de guerra para estabilizar un país en un plazo de cien días. Sin embargo, la crisis no era solamente económica, sino de sentido y de subjetividad. Esto llevó a la gente a tener una sensación de desorden y caos absoluto.

Al respecto José Luís Roca dice lo siguiente:

> Quienes en 1982 abrigaron esperanzas de que Hernán Siles Zuazo condujera por buen rumbo la economía del país o que tomara medidas de fuerza para contrarrestar la indisciplina social y el desorden político, no conocían al Presidente de la República que entonces asumió el poder ni entendían al país que acababa de reingresar al cauce democrático (…). Hernán Siles Zuazo llegó al poder no para arreglar la economía ni para fortalecer la moneda, sino para demostrarles a los bolivianos la posibilidad de vivir en libertad y democracia. En Siles, esto último ha sido una especie de obsesión, y el autor de esta nota lo oyó repetir tantas veces durante el exilio: 'Yo lo que quiero son elecciones verdaderamente libres', y siempre subrayada 'verdaderamente'… (Última Hora, 8 de agosto de 1985).

Durante los tres años que la UDP gobernó el país, sus miembros tuvieron que enfrentar grandes problemáticas a nivel político y social.

El primero de ellos fue reaprehender la visión de un quehacer político acorde al nuevo periodo democrático. Por ejemplo, cuando en 1983, Jaime Paz Zamora explicó las razones de la primera separación del MIR de la coalición gobernante, hizo referencia a lo siguiente:

Recuadro 52

### El ejercicio del poder durante la UDP

"… los proyectos contradictorios que los distintos partidos políticos tenían en la UDP (…). La UDP desde el comienzo fue concebida por el MIR como un primer paso para llegar a un solo instrumento político, pasar de la dinámica frentista en el proceso a construir un nuevo gran instrumento político que pudiese reemplazar históricamente a lo que fue el movimientismo en la década de los 50 y 60 (…). [El MIR] llega con una mentalidad demasiado mitificada del ejercicio del poder político. Un poco ve un poder en estado puro y resulta que después, cuando llega, se encuentra con el poder cotidiano, prosaico, manchado, sucio, de todos los días, que es como se da (…), el mirismo, que ha llegado al Gobierno de esa manera, quiere ejercer un gobierno como frente, pero el realismo del poderprosaico dice que no, que aquí es el poder presidencialista (…). Esta fue la primera desazón para nuestro partido, y después el ejercicio del poder real, es decir cuando ese mirismo con todo entusiasmo y mística creía que se podía liberar de la inmoralidad de la noche a la mañana, que se podía ser operativo de la noche a la mañana, que se podía eliminar burocracias, que se podía luchar contra la desidia, contra los egoísmos, se encontró con un poder que no era así. Y entonces (…) vino el gran desencanto, la gran confusión, preguntándonos dónde estamos y adónde hemos llegado".

Fuente: Córdoba, 1986: 98.

Durante la UDP, las visiones particulares del quehacer político tuvieron que ser redimensionadas dentro de la coyuntura real. Esto sucedió así no solo por la necesidad de ejercer el gobierno, sino por el hecho innegable de que, al estar en una coalición, los horizontes para la construcción y la dirección del país nacieron de las distintas posiciones políticas que la conformaban. La pregunta por ¿cuál es la visión de país que el partido tiene? no solo era una posición política; se convirtió en el horizonte desde el cual se orientarían sus acciones para ejercer el poder. En el caso de la UDP, existieron tres horizontes de país distintos, todos atravesados por la propia singularidad histórica de cada partido componente, y en cuya carga cada uno expresaba la manera en que encaró el periodo dictatorial y su propuesta política. Los tres años de gestión de la UDP mostraron que no era posible despegarse de los moldes tradicionales del ejercicio político, de orientación conservadora y neoliberal, aun cuando se cuestionaron frecuentemente las consecuencias de esa opción política y social.

La otra gran problemática fue el desgaste de los principales sujetos políticos, figuras que, al enfrentarse a la crisis y al no poder darle una solución –o al menos salidas alternativas–, se resquebrajaron. Su fuerza, que había sido fundamental para la resistencia a las dictaduras, se paralizó en ese nivel, y no logró acceder al de la construcción un nuevo país. En el siguiente recuadro citaremos un texto de René A. Mayorga en el que se analiza la forma en que la acción política de la COB, muy importante durante el periodo dictatorial, tuvo un efecto distinto y contradictorio durante la apertura democrática:

Recuadro 53

### El rol contradictorio de la COB en el proceso democrático

"Nos interesa plantear contradicciones que consideramos importantes para entender el rol político de la COB en el proceso democrático: 1) La adhesión general al socialismo como estrategia esconde diversas posiciones que abarcan desde políticas estatizantes (…) hasta posiciones consejistas de autogestión obrera por encima del Estado y de los partidos (…). La COB se ha puesto al margen de una discusión sobre el tipo de socialismo que se busca (…). 2) La ambigua e incluso polivalente posición en relación a la democracia política y al rol de la democracia representativa, que emerge de la existencia de orientaciones populistas, sindicalistas, comunistas y trotskistas en el seno de la COB (…). 3) El principio fundamental de la autonomía política de la COB en relación a los partidos y al Estado, de extraordinaria eficacia en la lucha contra regímenes dictatoriales, conduce a una política escisionista y maximalista que reduce las posibilidades de mediación y transacción en coyunturas democráticas y produce 'efectos perversos' que

invierten los objetivos estratégicos de la COB (…). 4) Tiene una visión de sí misma en el sentido de ser la instancia fundamental de articulación de los intereses generales de la nación y se considera un contrapoder estatal (…). La concepción de la COB como sujeto político-representativo, nacional-popular y como órgano fundamental de poder tampoco repara en la ideología predominantemente defensiva y en la visión paternalista del Estado, que se manifiesta detrás de la política antiestatal de los sindicatos (…). 5) Las experiencias de lucha contra un Estado represor han llevado a la supremacía de una 'lógica militar' en la acción de la COB sobre una lógica propiamente política que requeriría el proceso democrático"

Fuente: Laserna, 1985.

La COB fue la expresión más evidente y significativa de la transformación en la constitución de los sujetos políticos. Desde su nacimiento, la COB conformó una base con mucha capacidad de movilización. Sin embargo, los cambios que en ella se produjeron y su transitoria desarticulación fueron también los fundamentos para que caiga todo un armazón discursivo y político. Esta caída afectó a la identidad y la subjetividad no solo de los obreros, sino de todo el movimiento popular que se gestó bajo la imagen de la vanguardia minera. Cuando se piensa en las décadas de 1980 y 90, se debe asumir que existió una transformación en la composición material de los sujetos que habían conquistado la democracia; ya no eran los mismos que resistieron a la dictadura ni los que, mucho tiempo atrás, emergieron con el nacionalismo revolucionario.

En el caso de los campesinos, la conformación de la CSUTCB, a la cabeza de Genaro Flores, fue el mayor acto de unificación de su posicionamiento político. Sin embargo, al trastocarse la coyuntura en la que esta entidad surgió, las transformaciones políticas la condujeron a optar por diferentes posiciones políticas, como el katarismo y la corriente del Movimiento de Campesinos de Base (MCB) ambos surgidos de la ruptura del Pacto Militar Campesino.

Durante la gestión de la UDP, el movimiento campesino se encontraba en tensión, pues, por una parte, se quería salir de una práctica altamente prebendal en relación al gobierno. Esta situación venía desde los primeros años de la dictadura, con el Pacto Militar-Campesino que

Recuadro 54

## El katarismo

"Con la consolidación de la CSUTCB, el katarismo se vio con la enorme tarea de representar al conjunto diverso y heterogéneo del campesinado nacional. En ese proceso, y ante los intentos del MNRI y el MIR por controlar la Confederación, el katarismo buscó nuevos aliados. Fue precisamente en el II Congreso de la CSUTCB, 1983, que se aliaron con el MCB. (…), el katarismo, convertido en MRTK, empezó a actuar como partido en el clásico estilo de la política criolla de izquierda. Receloso, entró en pugna por la hegemonía de la CSUTCB. (…) El MCB inició una campaña proselitista opositora a Jenaro Flores, aliándose con no importa quién con tal de restar influencia al katarismo. El MCB es, además, portador de una visión reduccionista de la izquierda en el problema campesino, que ve en el agricultor solo al productor y no toma en cuenta al campesino-indio como pueblo, como naciones que luchan también por su identidad cultural (…).

[Tampoco tomó en cuenta a las mujeres campesinas que se agruparon] en la FNMCB/BS, [quienes] solo deseaban manejar autónomamente sus propias finanzas. Los varones reaccionaron con una campaña de desprestigio, amedrentamiento e incluso represión contra las dirigentas que no eran 'leales' (…). En su propuesta de Ley Agraria Fundamental, plantearon la reorganización de la producción campesina en torno a unidades comunitarias asociativas de producción, la defensa de la soberanía territorial y la autonomía política de las comunidades (…).

Otro espacio de disputa fue la Corporación Agropecuaria Campesina (CORACA) creada con el objetivo de organizar la comercialización e impulsar el desarrollo agrícola y ganadero del campesinado (…), en lugar de empezar con pequeños proyectos a niveles de base, lo hizo creando un aparato burocrático administrativo, financiado por agencias internacionales de promoción y con la expectativa de ser apoyado por el Estado (…). CORACA es una fuente de corrupción para los dirigentes campesinos…".

Fuente: Hurtado, 1986.

se estableció durante el gobierno de Barrientos y que por casi 20 años se ejerció como el relacionamiento legítimo. Por la otra, emergió un horizonte que rescataba la singularidad de su identidad a través de un proyecto político: la reconstitución del Qollasuyu. Así lo planteaban los kataristas, que conformaron un movimiento que permitió la constitución de un Sujeto político que, más adelante, se expresaría duramente en luchas contra un Estado que pretendía negarlos.

El retorno a la democracia no fue solamente un hecho político de transición formal de gestión y de poder, sino que, como dijimos, implicó la reestructuración de los criterios del quehacer político. En un país marcado por la crisis, las pugnas entre los sectores de izquierda, los nacionalistas y los que tenían la intención de hacer del país parte de la modernidad occidental –introducirlo al sistema mundial– le restaron gobernabilidad al Estado y agrandaron el problema.

Ello implicó la debacle de la constitución popular del país. La UDP, que surgió como una solución a la crisis de las dictaduras, no pudo constituirse en una alternativa estratégica de corto y largo plazo a la crisis económica y social. Las propuestas neoliberales para salir de ella planteaban la reconstitución de un orden que tuviera bien presente la memoria de la revolución del 52, un orden en el que la fuerza del Estado esté muy presente.

La gestión de Hernán Siles Zuazo mostró que sí era posible vivir en democracia, pero que para aplicar soluciones sería necesario usar no solo la razón y la voluntad, sino la misma fuerza coercitiva del Estado. Y así sucedería. Durante la gestión siguiente (1985-1989), durante la aplicación del plan de estabilización, el MNR decretó estado de sitio en el país, cosa que Siles no hizo ni siquiera en las peores crisis. Con esto, resulta evidente que el no haber caído en el caos absoluto se lo debemos a la paciencia del presidente Hernán Siles Zuazo.

## La respuesta a la Crisis de Estado: el 21060 y el proyecto neoliberal (1985-1993)

> O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere
>
> (Fragmento del discurso de Victor Paz al dictar el 21060).

### El proceso de estabilización

El resultado de la elección del 14 de julio de 1985 reveló que la gente confió en que los partidos tradicionales realizarían un ordenamiento del país y superarían el caos y la crisis del período de la UDP. El triunfo del ADN (primer lugar) y del MNR (segundo lugar) fue el resultado de su masiva oferta de solución a la crisis precedente y de un buen manejo mediático, con el uso de los términos "estabilidad" y "progreso". Ambos candidatos, ya electos presidentes en el pasado, habían ganado su credibilidad durante aquellos mandatos. Banzer gobernó siete años como dictador, pero el préstamo de los créditos internacionales durante su gestión brindó cierta estabilidad económica al país, algo que los votantes de 1985 sin duda ponderaron. Por su parte, Víctor Paz Estenssoro hizo referencia permanentemente a la revolución de 1952 y su liderazgo en aquella transformación nacional que pervivía en la memoria de la gente.

Los resultados de la votación fueron los siguientes: el ADN ganó con 28.57%; luego estaba el MNR, con el 26.42%; el MIR salió tercero, con 8,86%. Los demás partidos no llegaron a tener una presencia significativa. Durante más de 20 días se realizaron negociaciones para elegir al Presidente. Como ningún partido obtuvo la mayoría absoluta –y pese a que ADN quiso que se respetara su primera mayoría–, la elección fue dejada en manos del Congreso, reunido entre el 4 y 5 de agosto. Luego de la primera votación, el MNR obtuvo 70 votos (el MNRI y el PDC lo apoyaron), el ADN consiguió 51 y el MIR tan solo 16; los demás pifiaron su voto. Con la eliminación del tercero, solamente faltaba elegir entre los dos primeros. Finalmente, en la madrugada de 5 de agosto, el MNR logró 94 votos, contra 51 del ADN. El MIR decidió dar sus votos al MNR, y argumentó que lo hizo en consideración de que esta candidatura tuvo mayor "consenso nacional".

El resultado de las elecciones marcó la fuerte presencia de los partidos políticos tradicionales. También dejó en claro cuáles eran los límites de sus posiciones políticas, que ante todo tuvieron la capacidad de configurar un escenario partidario explícito como accionar político.

Cuadro 5. Composición del Congreso de 1985

| Partido | Representantes para el congreso (Senadores y Diputados) |
|---|---|
| MNR | 59 |
| ADN | 51 |
| MIR | 16 |
| MNRI | 8 |
| MNRV | 6 |
| PS-1 | 5 |
| FPU | 4 |
| PDC | 3 |
| FSB | 3 |
| MRTKL | 2 |
| TOTAL | 157 |

Fuente: Presencia, 1985.

El 6 de agosto de 1985 se posesionó el nuevo Gobierno del MNR, con Víctor Paz Estenssoro como Presidente y Julio Garrett Ayllón como Vicepresidente. A partir del lunes 19 de ese mes, el Ministerio de Información del nuevo Gobierno empezó a realizar una sostenida campaña que hacía énfasis en la urgencia de paliar la crisis económica. Una de las formas en que estos mensajes aparecieron fue en las primeras páginas de los periódicos, ocupando planas completas con el siguiente mensaje:

> El país está en bancarrota, asfixiado por la corrupción administrativa, golpeado por los poderes duales y con los créditos externos congelados. Para acabar la crisis económica: paz social y producción (Periódicos Hoy y Última Hora, agosto de 1985).

Unos días después apareció este aviso:

> Bolivia está en quiebra, cuando un país está en quiebra sólo tiene dos alternativas: morir o luchar por la vida. Vivir significa paz social y producción ¡Afrontemos la crisis económica!" (Periódicos Hoy y Última Hora, agosto de 1985).

Estos mensajes fueron constantemente publicados durante el tiempo que duró la preparación de la Nueva Política Económica. Según explicaba el nuevo Presidente, las medidas a asumirse estarían caracterizadas por una mayor radicalidad estatal y serían ejercidas con autoridad, porque:

> …solo de esta manera podrá cambiarse el actual modelo y abrogarse una serie de aspectos y sectores que viven de las migas del Estado y especulan sobre las cansadas espaldas del pueblo boliviano (Última Hora, 28 de junio de 1985).

Ese mismo día surgió la noticia de que existía un crédito puente conseguido de Estados Unidos, Venezuela y Argentina que alcanzó a 100 millones de dólares. Este capital sería la base para ejecutar las medidas que, de hecho, se asumieron al día siguiente de concedido el crédito. Más adelante, el Gobierno tendría que lograr un acuerdo con el FMI, BM y otros organismos económicos internacionales.

El proyecto preparado, con el conjunto de acciones que lo componían –todas destinadas a estabilizar la economía del país–, fue denominado Plan de Estabilización. El Plan fue desarrollado por una comisión encabezada por Gonzalo Sánchez de Lozada, Presidente de la Cámara de Senadores, y por Guillermo Bedregal, Ministro de Planeamiento; Juan Cariaga, Eduardo Quintanilla, Fernando Romero y Francisco Muñoz acompañaron el planeamiento. Por su parte, Sánchez de Lozada también fue comisionado por Víctor Paz para gestionar los fondos para el plan.

La comisión que trabajó en el Plan de Estabilización estuvo dos semanas preparando las medidas en el más absoluto secreto. El día dispuesto para hacer público el D.S. 21060, Víctor Paz, la comisión, el secretario del MNR, el comandante nacional de la Policía y el comandante de las Fuerzas Armadas, entre otros, se reunieron en la casa presidencial. Solamente este selecto grupo de personas estuvo presente en la explicación del D.S. Tales fueron las medidas de seguridad, que solamente se sacaron diez copias del documento y se cortó cualquier tipo de comunicación con el exterior; incluso fueron cortadas las líneas telefónicas del lugar (Bedregal, 2002).

El miércoles 29 de agosto de 1985, a las 18:00 horas, en transmisión radial y televisiva, Víctor Paz promulgó el famoso D.S. 21060. En su discurso argumentó lo siguiente: "O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere".

Las medidas económicas y sociales más importantes que el Gobierno asumió mediante el D.S. 21060 fueron las siguientes:

Recuadro 55

### Principales puntos del Decreto Supremo 21060

- Establecimiento de un tipo de cambio "único y flexible".
- Legalización de todas las transacciones en dólares.
- Abolición de todas las restricciones contra la importación de bienes y servicios.
- Abolición del control sobre los precios de bienes y servicios.
- Descentralización de la COMIBOL y de YPFB, disolución de la CBF.
- Libre contratación del personal.
- Reducción del personal en todas las empresas del sector público.
- Fijación del salario mínimo en un monto que, en septiembre 1985, equivale a 30 dólares.

Al día siguiente de decretado el 21060, los comerciantes mayoristas y minoritas volvieron a asumir las prácticas acostumbradas durante el gobierno de la UDP: la especulación y el ocultamiento. El transporte público paralizó sus actividades por dos días. El conjunto de medidas, al ser aplicado de inmediato, produjo también la inmediata reacción de la COB, que convocó a un ampliado nacional para la semana posterior y el paro inmediato de las empresas ENTEL, TASA, COBEE y SAMAPA.

Uno de los sectores que apoyó la medida fue la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que paralelamente recibió una donación del 2 millones de dólares de USAID para crear el Instituto de Desarrollo Empresarial y Administrativo (IDEA). Con la creación del bolsín, el dólar se estabilizó en 1.062.281 Pesos Bolivianos por unidad, cifra que casi no varió durante los siguientes meses. La estabilización de la moneda posibilitó que en el mercado negro incluso bajara su precio en relación a la cotización oficial.

Para combatir la especulación y el alza de precios, el Gobierno planteó una Jornada Popular de clientes en diferentes días y lugares de las ciudades principales. Allí se vendía aceite, harina y fideos a la población con precios de mercado, y no al sobreprecio existente en los demás mercados. También se realizó una campaña masiva en medios de comunicación para combatir la subida de precios: "Compre lo que realmente necesite, no ayude a la especulación". En otros anuncios se pidió a la población que no fomente la especulación comprando desesperadamente, sino que espere a que el mercado regule los precios según la oferta y la demanda. Con el pasar de los días esta medida tuvo éxito; pronto se vio un normal abastecimiento en los mercados y en los abarrotes.

Las acciones de lucha contra el Plan de Estabilización –y sus consecuencias para los trabajadores– fueron resistidas por el Estado desde el primer momento. Se realizaron acciones escalonadas: paro de las minas, paro de fabriles y paros de otros sectores. Sin embargo, el Gobierno solamente negoció sectorialmente con ellos. Al igual que con Hernán Siles, los trabajadores del Banco Central de Bolivia entraron en paro, pero el Gobierno dispuso que quienes no se presentasen a trabajar el lunes 11 de septiembre sean destituidos inmediatamente y sus puestos fueran declarados vacantes. El 16 de aquel mes, luego de pasar dos semanas en huelga –asumiendo que la prolongación de las clases de recuperación perjudicaría sus vacaciones–, también los maestros retornaron a clases. (Última Hora, 17 de septiembre de 1985)

El 17 de septiembre, pocos días después de haber decretado la huelga general indefinida, la COB instruyó la huelga de hambre de todos los trabajadores del país como medida de resistencia al D.S. 21060. La huelga tendría que cumplirse desde el secretario general hasta los trabajadores de base sindical.

La respuesta del Gobierno, el jueves 19 de septiembre, fue declarar un estado de sitio a nivel nacional. Con esta medida se pudo "residenciar" a muchos de los dirigentes principales y dejar al movimiento obrero sin capacidad de respuesta política ni de movilización. Las demás huelgas, instaladas por otras organizaciones que se oponían al 21060, también fueron intervenidas. Los dirigentes de otros sectores también sufrieron la represión. En total, 174 dirigentes fueron confinados a lugares como San Joaquín o San Julián. A la par, se utilizó a las Fuerzas Armadas y a la policía para precautelar las instalaciones de YPFB y de otras empresas; los cuerpos militares y policiales usaron gases lacrimógenos contra las concentraciones de protesta.

Como medida paralela, el Gobierno hizo una campaña de propaganda contra los dirigentes de los trabajadores: "Hay gente que no se resigna

a perder una serie de privilegios. Son grupos de poder omnímodo que estaban por encima del poder del Estado". Poco tiempo después, en una declaración a los medios de prensa, el presidente Paz Estenssoro afirmó lo siguiente:

> Hemos dictado las mediadas, no porque estemos defendiendo intereses mezquinos o por un capricho. Los hemos dictado porque la situación era desesperante… no admitía otras medidas, no había alternativa. Había que colocarse en el nivel de la realidad de la economía para poder sanearla y evitar que cunda todo el cáncer que significa la hiperinflación (Presencia y Última Hora, 19 de noviembre de 1985).

A diferencia de lo que sucedió durante la gestión de la UDP, el MNR no permitió que el funcionamiento del Estado sea detenido. La experiencia del Gobierno anterior le permitió al actual saber que, sin el trabajo del BCB o de otras empresas con las que se debía llegar a acuerdos sectoriales, sucedería lo mismo que antes. El Estado, bien preparado para la reacción de los grupos opositores, organizó un aparato social que consistía en medios de comunicación, comités vecinales, empresarios, políticos y otros actores que respaldaron sus medidas. Este aparato permitió pacificar y asegurar el funcionamiento de distintos sectores campesinos y urbanos.

En octubre del mismo año, como aprendizaje de la inestabilidad de la UDP en el Parlamento, se firmó un "Pacto por la Democracia". Este consistía en un acuerdo entre el MNR y la ADN para que este último apoye sin restricciones las medidas que el Gobierno enviara para ser aprobadas por el Legislativo. Estas medidas formaban parte del Plan de Estabilización y reajuste que se aplicó durante esos meses.

La aplicación de estos ajustes hizo que, casi de manera paralela, el BM y el FMI otorgaran créditos al Gobierno para apoyar la implantación de la estabilización económica. Una de las acciones para paliar la medida de shock y sus consecuencias en el despido –o "relocalización"– de los trabajadores estatales fue la creación del Fondo Social de Emergencia. Este programa permitió la contratación eventual de personal para proyectos de asistencia y construcción muy específicos y de tiempo limitado. Sin embargo, esta y otras medidas asistencialistas no lograron paliar el despido de cerca de 27.000 trabajadores mineros –el 90% de los que trabajaban en la COMIBOL–, 10.000 trabajadores de las entidades estatales y alrededor de 25.000 maestros rurales (Khol y Farthing, 2007: 125). Con el tiempo, todos los desempleados fueron a parar a la economía informal y se trasladaron a ciudades intermedias como El Alto.

En los primeros meses de 1986, debido a la implantación de las medidas de estabilización, el país vivió una fuerte tensión. La mayoría de las acciones estatales en el Plan de Estabilización fueron apoyadas por los empresarios privados y los sectores medios de las ciudades, pues estas al menos les garantizaban una sensación de estabilidad y ordenamiento frente a la crisis económica que aún se mantenía. La capacidad de protesta de otros sectores fue mínima hasta que se realizó el XXI Congreso de la FSTMB en Oruro, durante la última semana de agosto. El evento era largamente esperado por los sectores obreros y contestatarios de la sociedad boliviana, que se resistían a aceptar las medidas de la Nueva Política Económica (NPE). Este Congreso fue determinante para marcar el horizonte político de las acciones a tomar, tanto por la COB como por ellos mismos.

En el Congreso de la FSTMB se aprobó el Plan de Rehabilitación para la COMIBOL y la Tesis de Catavi (9 de septiembre de 1986). Los principales planteamientos fueron estos:

Recuadro 56

### Principales planteamientos del XXI Congreso de la FSTMB

- El régimen del pazestenssorismo y el fascismo banzerista quieren liquidar la COMIBOL y todo el aparato productivo del país.
- Destrucción del "Poder Dual" que representan la COB y la FSTMB. Unión de ambos liderazgos.
- Defensa intransigente de la COMIBOL y del sector productivo, pues cuando una empresa se para su trabajadores se desmovilizan.
- Apoyar el Plan de emergencia para rehabilitación de la COMIBOL.
- Evitar el cierre de Catavi, evitar el cierre de COMIBOL, se contará con la solidaridad latinoamericana e internacional.
- Se logrará salvar la región occidental del país por su lazo económico con la minería.

Fuente: Escobar, 2008.

Para los dirigentes mineros era necesario impedir el cierre de alguna empresa con el pretexto de que no era productiva. El despido de los trabajadores –mineros en este caso– significaba acabar con la conciencia obrera y su fuerza efectiva, que le hacía frente al capital transnacional y al sistema económico. Por ello, en una gran asamblea con la gente de Siglo XX, Catavi, Huanuni, San José, Colquiri y otras minas, los mineros decidieron marchar de Oruro a La Paz junto a sus esposas y, en algunos casos, sus familias enteras.

La heroica Marcha por la Vida y la Paz, que realizaron cerca de 10 mil mineros, recibió un impresionante apoyo desde las ciudades. Además, durante los cinco días de trayecto, los campesinos y vecinos de los poblados por los que pasó –desde Oruro hasta Calamarca– también es mostraron su respaldo. En Patacamaya, el Ejército los obligó a ser revisados, pero al no encontrar dinamitas u otro tipo de armas, los dejaron continuar con la marcha. La madrugada del 29 de agosto de 1986, en la localidad de Calamarca –a 57 kilómetros de la ciudad de La Paz–, los mineros fueron detenidos por el Ejército, que estaba equipado con material de guerra y aviones que realizaban vuelos rasantes para atemorizar a los machistas. Esa misma mañana, al percatarse de lo peligroso que podría ser que esa marcha llegase a La Paz, el Gobierno decretó el estado de sitio; la orden a los militares era la imperiosa necesidad de que los marchistas no pasen.



Figura 28. Niño minero a la cabeza de la Marcha por la Vida, 29 de agosto de 1986.

Fuente: Archivo Magdalena Cajías.

Luego de anoticiarse que los mineros estaban detenidos por los militares, muchos sectores –sobre todo periodistas y representantes de la Iglesia católica– se trasladaron a Calamarca. Se realizó una asamblea entre los dirigentes y los marchistas. Pese a la voluntad de las bases mineras de resistir y enfrentarse contra el propio Ejército con algunas dinamitas y otras armas que llevaron a ocultas (o que les fueron dadas clandestinamente por sus grupos de apoyo en el camino), la decisión final fue evitar el derramamiento de sangre. Esta decisión la asumió la dirigencia de los mineros, utilizando el siguiente argumento:

Recuadro 57

### Argumentos de Filemón Escobar para evitar el enfrentamiento

"Compañeros marchistas, es imposible romper el bloqueo, el cerco militar. Ustedes lo ven, están armados hasta los dientes y nosotros, los trabajadores mineros, no llevamos un solo cartucho de dinamita; no tenemos ni una pistola. El intentar un enfrentamiento es suicida (…). Sabemos que cuando el minero tiene una buena cantidad de cartuchos, con su guía y fulminantes y fósforo, no hay dirección sindical ni política que los detenga en los enfrentamientos. Son ustedes los que toman la decisión. Este no es el caso ahora (…). Compañeros, si vamos al enfrentamiento no importa que entre nosotros mueran más de mil compañeros, pero la condición básica es que triunfemos sobre las fuerzas del Ejército. Salir con mil muertos y encima derrotados no vale la pena. Enfrentar, tener mil muertos bajo la bandera de la victoria vale la pena; de lo contrario, es una doble derrota"

Fuente: Escobar, 2008: 107.

Finalmente, los mineros decidieron retroceder. Este acto significó la caída material y efectiva del movimiento minero y de su subjetividad como vanguardia de los obreros.

Todo el proceso de "relocalización", tanto de mineros como de empleados públicos, se aceleró en los meses siguientes. Los dirigentes mineros alcanzaron un acuerdo con el Gobierno que, al final, no sería respetado. Esto les impidió a los trabajadores mantenerse en la COMIBOL. A los mineros no les quedó otra opción que aceptar la oferta apoyada por los sectores trotskistas de la liquidación de 1 a 3 (por año trabajado se recibió el triple de sueldo). La liquidación fue el paso final para la salida masiva de los mineros, desde sus centros hacia diferentes partes del país. Muchos se fueron de los centros mineros de Oruro a Cochabamba. Lamentablemente, la vida de ese "bono de despido" fue efímera; luego de unos meses, los mineros ya no tenían más dinero. La situación a la que muchos de ellos se acomodaron era inhumana, pues no tenían la costumbre de pagar por los servicios básicos que en los centros mineros eran gratuitos.

El 1 de enero de 1987 entró en vigencia la dolarización de la economía y el cambio de denominación del dinero: del Peso Boliviano ($b.) se pasó al Boliviano (Bs.), cuya conversión equivalía a 2.09 Bs. por dólar americano. En los meses siguientes, el MNR logró una renegociación de la deuda y obtener mayores créditos del FMI, el BM, el Club de París, etc. Con este capital, el país alcanzó una estabilidad macroeconómica que duró algunos años. Sin embargo, los costos sociales no tardaron en manifestarse. Una de las primeras repercusiones de la relocalización fue el incremento del sector informal de la economía, que se convirtió en la principal fuente de ingreso de muchos de los trabajadores que fueron despedidos.

En 1988 sucedieron varios acontecimientos que tendrían mucha importancia en el los años siguientes. El primero fue la llegada del Papa Juan Pablo II, durante el mes de mayo. El Papa visitó varios departamentos del país y tuvo emotivos encuentros con los jóvenes y con el pueblo en general. Algunos sectores sociales le manifestaron su tristeza y preocupación; entre ellos estaban los mineros, congregados en la ciudad de Oruro, quienes le regalaron un guardatojo.

Ese mismo año, luego de la masacre de Villa Tunari, las políticas de lucha contra el narcotráfico llegaron a su punto máximo. En el mes de julio se aprobó la Ley 1008, cuyas determinaciones fueron: tomar acciones de represión contra los cultivadores de coca; ejercer un control fuerte contra los estupefacientes y una política cerrada contra este flagelo. Esta última determinación permitió a brigadas estadounidenses realizar operaciones de interdicción, además de brindar asesoramiento y entrenamiento a las UMOPAR y a otras fuerzas especiales. En ese periodo se hizo importante la figura de Roberto Suárez Gómez, "El Rey de la cocaína", que contaba con el apoyo de importantes dirigentes del ADN. En una ocasión, Suárez Gómez realizó una llamada al programa dirigido por Carlos Palenque y ofreció pagar la deuda externa de Bolivia. Con este gesto, mostró cuán fuerte era la presencia del narcotráfico en los espacios de poder del país.

En 1988 también surgieron los partidos neopopulistas: CONDEPA, de Carlos Palenque, y UCS, de Max Fernández. Estos dos nóveles partidos marcaron una clara diferencia respecto a los partidos tradicionales, y por varios años representaron una alternativa política interesante, que contó con un buen número de adeptos. Sin embargo, nunca pudieron salir de la lógica caudillista de sus líderes.

Cuando Víctor Paz Estenssoro –en su discurso de promulgación del 21060– afirmó que "Bolivia se nos muere", lo dijo no solamente en concordancia con la crisis que se estaba atravesando, sino también en el entendido de que ya no era viable una Bolivia referida a lo nacional de mediados de siglo, de la Revolución Nacional. Bolivia estaba cambiando, y para sostener este cambio e integrarse a la política y la economía mundial también debía cambiar el Estado, superar la versión estatal que emergió de la Revolución Nacional de 1952. Hay que recalcar, sin embargo, que las medidas tomadas por el Gobierno de Paz Estenssoro, que marcaron el final del Estado del 52, tuvieron efectos desastrosos en la población.

Este cambio de dirección implicó tomar varias decisiones, algunas muy poco populares. La primera fue realizar la transformación del Estado para acomodarse al nuevo esquema mundial; por supuesto que esto implicó realizar medidas de shock que sacudieron con fuerza a Bolivia y al Gobierno. Pero no solo se trataba de medidas económicas, sino de medidas políticas, sociales y en medida menor culturales para reorientar el papel del Estado. Entonces, otra decisión que tuvo que ser tomada para darle gobernabilidad

al Estado fue la puesta en ejercicio de pactos político-partidistas. Con el Pacto por la Democracia del MNR y el ADN, en octubre de 1985, se inauguró la tradición de alianzas entre partidos para obtener la mayoría parlamentaria.

## El surgimiento de las ofertas "neo-populistas"

A finales de la década de 1980, un fenómeno alteró el sistema de partidos tradicionales (ya sean de izquierda o de derecha): el surgimiento de las ofertas "neo-populistas". Los partidos CONDEPA y UCS se formaron alrededor de la figura de dos carismáticos líderes (quizás el primer más que el segundo): Carlos Palenque y Max Fernández. Estos partidos pasaron a formar parte de las coaliciones de partidos, que se unieron para acceder al Gobierno y garantizar su mayoría en el parlamento. CONDEPA y UCS participación de los gobiernos electos en 1989, 1993 y 1997.

Conciencia de Patria (CONDEPA) fue fundada por Carlos Palenque el 21 de septiembre de 1988, en Tiwanaku, con un discurso altamente influenciado por nacionalistas de izquierda, que propugnaron el endogenismo. Su intención era mover a grandes sectores populares utilizando los medios de comunicación, como la radio Metropolitana y el canal Radio Televisión Popular (RTP). La influencia de CONDEPA fue muy fuerte en los departamentos de La Paz y Oruro. A partir de una relación de compadrazgo, el Compadre Carlos Palenque se convirtió en un ícono de solidaridad, pues ayudaba a personas de escasos recursos en su programa "La tribuna libre del pueblo".

Las aspiraciones políticas del Compadre nacieron con la clausura de su radio, tras recibir la llamada de Roberto Suárez Gómez –El Rey de la cocaína–, quien ofreció pagar la deuda externa del país si se le daba protección. En esa llamada, Suárez Gómez acusó a altos miembros del partido de Gobierno –MNR, comandado por Víctor Paz– y a varios jefes militares y policiales de estar vinculados con el tráfico de cocaína. La reacción a esta llamada fue la clausura inmediata del programa. Carlos Palenque y su equipo se declararon en huelga de hambre hasta que sus medios de prensa fueran reabiertos. En ese tiempo, el Compadre recibió un gran apoyo popular y de otros sectores. Así, junto a varios disidentes de otros partidos, organizó su participación en las elecciones presidenciales de 1989. Cuatro años más tarde, en las elecciones de 1993, CONDEPA llegaría al tercer lugar de la votación general. Su influencia política tuvo como fuertes bastiones a La Paz y El Alto –donde incluso consiguió las alcaldías en las elecciones municipales de 1993–, pero no fue más allá de este ámbito.

El líder murió en marzo de 1997, por un ataque al corazón. Para entonces, ya se había separado de su esposa y enfrentaba serios problemas políticos relacionados a la administración de la Alcaldía de la ciudad de La Paz. Su partido se mantuvo por varios años, pero perdió su influencia luego de formar parte de la coalición que llevó a Banzer a ser presidente en 1997, en cuya gestión se encargó de dos ministerios. En todas sus experiencias de gestión nacional y local, CONDEPA no logró mayores frutos debido a la poca capacidad de gestión efectiva, carga prebendal y la corrupción que se desarrolló en su gestión.

Max Fernández era un empresario de origen popular que, luego de acumular una riqueza considerable, se convirtió en el principal accionista de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN). Parte de sus ganancias las destinó a realizar obras sociales: escuelas, mejoramiento de calles, alumbrado público, etc. Estas acciones le permitieron tener gran receptividad en los sectores populares, pero también cierta antipatía de parte de los partidos tradicionales. Luego fundó el partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS), una apuesta política que se sirvió grandemente de su red de relacionamiento como principal accionista de la CBN. Durante algunos años, Max Fernández se convirtió en una fuerza política con mucho apoyo popular, pero dicho apoyo lo sustentaban más sus actos de padrinazgo que sus propuestas políticas concretas. Se presentó a la elección presidencial de 1993, logrando el cuarto puesto. En 1995 murió trágicamente, en un accidente aéreo ocurrido cerca del centro minero de Llallagua.

Al ser un partido familiar –y sostenido por una economía familiar–, el liderazgo fue asumido por su hijo Johnny Fernández, cuyo éxito en las elecciones municipales de 1995 lo llevó a ser Alcalde de la ciudad de Santa Cruz. Para las elecciones de 1997, UCS postuló a Ivo Kuljis para Presidente y sacó el quinto puesto en las urnas. Al igual que CONDEPA, este partido negoció su participación en el Gobierno con ADN.

Tanto en CONDEPA como en UCS, el componente populista fue muy fuerte. El grado de relacionamiento que lograron se debió principalmente a sus acciones de ayuda y colaboración directa con las personas que necesitaban su apoyo. Lógicamente, la retribución de la gente beneficiada fue su absoluta lealtad al partido. Sin embargo, aunque más evidente y directa, esta práctica no se diferenció en mucho de las campañas electorales de los partidos tradicionales, cuyos candidatos regalaban víveres o ropa, realizaban pequeñas obras y equipaban a las escuelas con algún material para ganarse el favor de los barrios y comunidades. Todos los partidos, fueran grandes o pequeños, cayeron en esta práctica y cambiaron obsequios por voto. No faltó el caso anecdótico de personas que recibieron de todos los partidos y votaron por uno diferente.

## Problemas sociales: el narcotráfico

En 1985 y 1986, lo político estuvo marcado por una sujeción a las políticas que asumieron las administraciones gubernamentales. A su vez, los gobiernos de turno fueron sacudidos por varios conflictos que, más que sociales en un sentido general, fueron parte de la reacción de las organizaciones sociales a las reformas y medidas de shock tomadas –como el 21060–, al reordenamiento de las finanzas públicas y a la llamada relocalización.

Pero también hubo otros problemas grandes que involucraron al país y mostraron los límites del gobierno. Un ejemplo es el juicio a la dictadura de Luis García Meza, que se desarrolló entre 1986 y 1993 y que agrupó en torno suyo a la Asociación de Familiares de Desaparecidos (ASOFAMD) y a los sobrevivientes de las dictaduras en Bolivia. Así se inició un proceso único hasta ese momento en Latinoamérica: llevar ante la justicia a quienes encabezaron los golpes de Estado y la represión. Otro grave problema fue el destape del narcotráfico en el Oriente boliviano. El caso Huanchaca, que en 1986 cobró la vida de Noel Kempff, y las ya mencionadas declaraciones del Rey de la cocaína, en 1988, fueron claves para que la presencia del narcotráfico –algo que no se ignoraba pero que frecuentemente se silenciaba– finalmente saliera a la luz pública.

Cuando el narcotráfico y la producción de coca para ese fin se convirtieron en un tema central para resolver en la agenda del Gobierno, se hizo evidente que el problema venía de mucho antes. Durante los gobiernos de dictadura, el narcotráfico se había convirtido en uno de los pilares de la economía nacional. Esto se remontaba al Gobierno de Banzer (1971-1978), pero el vínculo se hizo particularmente estrecho durante la dictadura de García Meza y Arce Gómez, que paradójicamente nacionalizaron la comercialización y producción de cocaína –hecho bien conocido y supervisado por la DEA norteamericana. En aquel momento, las élites del país vieron con buenos ojos que los militares cerraran las posibilidades de una salida democrática que posesionara a la UDP –fórmula ganadora de las elecciones de junio de 1980– en el Gobierno. Se formó un pacto cívico-militar en el que Klaus Barbie jugó un importante papel, como enlace entre los militares y las élites orientales relacionadas al narcotráfico. Roberto Suárez Gómez y otros narcotraficantes pesados entregaron cinco millones de dólares para comprar a los comandantes, que hasta entonces no estaban seguros de apoyar el golpe de Estado del 17 de julio de 1980 (Levy, 2012).

Recuadro 58

### Testimonio anónimo de un policía

La forma en que detectábamos un lugar desde donde se exportaba droga era identificando en el terreno una pista de aterrizaje, si había casas o contrucciones cerca era parte de una finca, etc., pero si solo estaba la pista de aterrizaje, era casi seguro que se trataba de una fabrica de estupefacientes…

Luego del retorno a la democracia, la profunda crisis hizo que la UDP no pudiera atacar el problema de forma directa y sostenida. Sin embargo, fue en aquel periodo que Roberto Suárez Gómez decidió retirarse del tráfico y producción de cocaína. El 11 de enero de 1986, el MNR presentó su Plan Trienal de Lucha Contra el Narcotráfico, donde asumió los objetivos de bajar el precio de la coca, erradicar las plantaciones ilegales y frenar la expansión de los cultivos en el área hasta ese momento cultivada. Este proyecto trató de implementarse durante dos años. Pero, a causa de la corrupción en la que el

Gobierno y el sistema político entraron durante esas décadas, los resultados fueron escasos y no hicieron mella en un sistema ya consolidado y poderoso. Los capos del narcotráfico llegaron hasta instancias ministeriales de influencia, y los lazos que generaron les permitieron sostener la producción de cocaína.

En 1988 se crearon mesas de diálogo entre los cocaleros del Chapare y los Yungas y los representantes del Gobierno, pero no se pudo llegar a ningún acuerdo. En junio de aquel año, cuando los cocaleros volvieron a movilizarse por una legislación especial para la coca, la UMOPAR cercó esa protesta y se produjo la masacre de Villa Tunari, que dejó un saldo de 16 muertos y muchos heridos. En julio, el Gobierno aprobó la Ley 1008, que clasificaba a la coca como una sustancia controlada y tipificaba tres zonas: "tradicional", "en transición" y "excedentaria de producción". Con esta Ley, la producción, el transporte y la comercialización de coca excedentaria quedaron penalizadas. Pese a las movilizaciones de los cocaleros, las fuerzas de represión fueron muy efectivas y contundentes con este sector campesino, generando un clima de tensión y conflicto en las zonas de los Yungas del La Paz, pero sobre todo en el Chapare cochabambino, donde los sindicatos colonizadores se fortalecieron políticamente con la presencia de los migrantes campesinos del Altiplano y mineros relocalizados.

Luego de la elección de Jaime Paz, en 1989, la política contra el narcotráfico fue re-direccionada. Para ello se apeló a la frase "Coca no es cocaína", que pretendía orientar la producción hacia el akullico y los productos alternativos. Sin embargo, los lazos del narcotráfico con los estratos más altos del Gobierno y con la UMOPAR –en los siguientes gobiernos rebautizada como FELCN– volvieron a presentar trabas insuperables.

En 1991, el entonces Ministro del Interior Carlos Saavedra Bruno ejecutó el Decreto de Arrepentimiento. A través de esta medida, el Gobierno del MIR ofreció a narcotraficantes que se entregaran, con la garantía de que no serían extraditados a Estados Unidos y cumplirían solamente 15 años de cárcel en el país. Esta determinación fue aprovechada por varios cabecillas del narcotráfico –incluido Roberto Suárez Gómez, quien luego moriría por mal de chagas.

Los posteriores gobiernos del MNR y ADN implementaron las medidas Coca Cero y Plan Dignidad. Sin embargo, estos tuvieron que enfrentarse con un nuevo sujeto político que ellos mismos crearon: los sindicatos de productores de coca del Chapare y de los Yungas. La dura formación política que estos sindicatos tuvieron, a cargo de ex dirigentes de la COB, sirvió para hacerle frente a la arremetida de fuerzas erradicadoras. Las disputas se saldaron con años de fuerte represión y muchos muertos y heridos. La salida política de este sector –y de otros sectores campesinos– fue el IPSP: Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.

## Elecciones de 1989

El domingo 7 de mayo de 1989 se realizó la votación para Presidente. El ganador en las urnas fue Gonzalo Sánchez de Lozada, candidato por el MNR; en segundo lugar quedó el ADN, con la candidatura del exdictador Hugo Banzer; en tercer lugar se encontraba Jaime Paz Zamora, del MIR. Los resultados finales recién se conocieron casi un mes después, ya que en varias mesas de distintas partes del país se tuvo que volver a votar. Posteriormente se vivió una de las esperas más largas para saber quién apoyaría a quién; al no haber una mayoría absoluta, las negociaciones para apoyos y acuerdos se extendieron por casi dos meses, hasta el 3 de agosto. Esta espera generó mucha inseguridad e inestabilidad en la sociedad civil, temerosa de una reacción militar.

Luego de muchos entredichos, en la votación congresal para elegir al primer mandatario, el ADN decidió realizar el Acuerdo Patriótico con el MIR. Este pacto puso en la Presidencia a Paz Zamora; Luis Ossio, del PDC –aliado del ADN–, quedó como Vicepresidente. Con este curioso Acuerdo, el partido que salió tercero en la votación accedió al Gobierno.

La decisión fue muy criticada porque, en la opinión pública, con esto se eliminaba la franja que antes dividía a los que resistieron el golpe de Estado militar (MIR) de los golpistas (ADN); se dijo que, con eso, se habían cruzado los ríos de sangre que alguna vez separaron a ambas partes. Esta medida fue una muestra del cambio que sucedió en la forma de hacer política en el país, con acuerdos y alianzas destinados únicamente

a garantizar la gobernabilidad legislativa. Esto también evidenció el desprecio que existía entre Banzer y Sánchez de Lozada, quien satirizó el Pacto por la Democracia con la frase "ahora mis mano ya no están atados", expresada con ese mal castellano de acento gringo que tenía.

En 1989 y 1990 se continuó con la política económica planteada durante el gobierno de Víctor Paz. La Ley de la Coca –o Ley 1008–, que le había ocasionado muchos conflictos a la anterior gestión de gobierno, fue complementada por una lógica de desarrollo alternativo al que muchas ONG's se adscribieron. Sin embargo, la falta de una verdadera estrategia de sustitución de las plantaciones de coca hizo que uno de los pocos logros plausibles en este campo fuera la consolidación de la erradicación de zonas ilícitas de coca, lo que ocasionó varios enfrentamientos con diferentes sectores cocaleros.

En 1991, el Gobierno intentó privatizar algunas empresas estatales, como LAB, y ENTEL (entre otras), buscando una mayor inclusión en el mercado. La decisión de facilitar el ingreso de empresas extranjeras para explotar litio, otros yacimientos minerales y gas natural –cuya explotación y fijación de precio ya había comenzado– respondía al mismo objetivo. Sin embargo, el Gobierno no tuvo la capacidad ni la fuerza para atraer inversionistas ni para establecer cierto control sobre los que sí invirtieron. Esto se debió en partes a la corrupción imperante, pero también a los enfrentamientos del Gobierno con los grupos que realizaron levantamientos armados y a atentados contra empresarios importantes, que fueron secuestrados y obligaron la reacción taxativa del Gobierno.

El caso Finsa, una sociedad privada que estafó a varios ahorristas, fue emblemático de los problemas económicos que el Gobierno de Paz Zamora enfrentó. Al final, el Estado asumió la responsabilidad de esta sociedad y de otros bancos que quebraron, generando una carga de endeudamiento más y manteniendo la política neoliberal de protección a los empresarios, aun cuando varios de ellos habían estafado al pueblo boliviano.

En septiembre de 1990, los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas realizaron la Marcha por el Territorio y la Dignidad, para pedir su reconocimiento por parte del Estado. A la Marcha como tal nos referiremos más adelante; de momento nos restringiremos a resaltar que, posteriormente, este pedido se articularía con las demandas de autonomía y de derechos de los pueblos. La solicitud de ayuda al Estado para mejorar sus condiciones de vida y el control de la explotación de sus recursos naturales fue central en ambas medidas, sobre todo en el departamento del Beni. Sin embargo, al final estas demandas no fueron acatadas por el Gobierno.

En la economía, los join ventures sirvieron para plantear una transformación en la producción. Esta era una modalidad de inversión a riesgo compartido que, lamentablemente, en muy pocos casos le dio beneficios al Estado, pues las empresas privadas acapararon la mayoría de las ganancias. La reactivación económica fue sustentada en buena parte por las maquilas, sobre todo en las actividades textiles.




Figura 29. Marcha por el Territorio y Dignidad 1990.

Fuente: Fotografía Periódico Presencia.

El Censo de 1992 mostró que en los 16 años que pasaron desde el anterior censo (1976), el país había sufrido una importante reconfiguración demográfica. La migración masiva a los espacios urbanos y a los departamentos orientales del país, algo que nadie ignoraba, recién adquirió su verdadera magnitud cuando los datos oficiales del censo fueron publicados:

Cuadro 6. Bolivia: población, superficie y dencidad de población, según censos nacionales de población 1950, 1976, 1992, 2001 Y 2012

| Censo | Población | Densidad (Hab./Km$^2$) |
|---|---|---|
| 1950 | 2 704 165 | 2,46 |
| 1976 | 4 613 486 | 4,20 |
| 1992 | 6 420 792 | 5,84 |
| 2001 | 8 274 325 | 7,53 |
| 2012 | 10 027 254 | 9,13 |

Fuente: INE-http://boliviaestadisticas.blogspot.com/2013_07_01_archive.html.

### Cuestionamientos armados al Estado (EGTK, FAL-ZW, CNPZ)

Entre 1988 y 1992, tres grupos armados se manifestaron contra el Gobierno, criticando los reacomodos que se habían realizado en la economía y sus efectos sociales y políticos. Sus formas de acción se enmarcaron en los métodos de guerrilla urbana y terrorismo con acciones de recuperación: atentados, secuestros, etc. Estos grupos recibieron una clara influencia de las luchas armadas de liberación que, a nivel continental, se suscitaron a partir de la década de 1950.

El primer grupo que apareció fue el de las Fuerzas Armadas de Liberación-Zárate Willka (FAL-ZW). Este grupo, claramente influenciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que en la década de 1960 comandara Ernesto Che Guevara, retomó el nombre del líder indígena de principios de siglo, Zárate Willka, para establecer su ideología de lucha. El primer hecho público del FAL-ZW fue un atentado contra la comitiva del secretario de Estado de los Estados Unidos. El 8 de agosto de 1988, cuando la comitiva bajaba por la autopista La Paz-El Alto, explotó una bomba que no llegó a afectar a la delegación. Más adelante, el 6 de diciembre, sus miembros fueron acusados de colaborar con el ajusticiamiento del agregado naval de la embajada peruana, realizado por un comando del grupo Sendero Luminoso. Al día siguiente, una explosión en las puertas del Parlamento también fue atribuida a este grupo. El 25 de mayo de 1989, dos misioneros mormones fueron asesinados a la salida de su casa, en la zona de Pura Pura (La Paz); el FAL-ZW se adjudicó el acto. El ataque con explosivos a la embajada americana, el 21 de diciembre de aquel año, también fue reconocido por el propio grupo.

Cuando los organismos de seguridad del Estado determinaron la composición del grupo, descubrieron que muchos eran de la Carrera de Sociología de la UMSA, entre ellos Jhonny Justino Peralta, quien fue acusado de ser el cabecilla de la organización. Con la detención de los hermanos Félix y Néstor Encinas, Constantino Yujra, Telma Salazar, Edgar Alarcón, Alberto Mendoza y Gabriel Rojas, el grupo fue finalmente desarticulado. Varios de sus miembros fueron liberados por falta de pruebas; otros fueron derivados a la cárcel mientras se realizaba el juicio que se inició en agosto de 1989. Por otra parte, el 21 de julio de 1990, al tratar de capturar a Jhonny Justino Peralta, los agentes encargados asesinaron a su hermano menor, Juan Domingo; este caso jamás fue aclarado.

La Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ), que compartía la influencia guevarista, surgió como la tercera generación del ELN boliviano –luego de la generación del Che y la comandada por el Inti Peredo. La Comisión se adscribió a la tradición de la lucha armada como forma de transformación política. Este grupo también fue integrado por una gran mayoría de estudiantes de la carrera de Sociología de la UMSA.

El 11 de junio de 1990, la CNPZ hizo su bautizo de fuego con el secuestro de Jorge Lonsdale, empresario dueño de Coca Cola, por quien solicitaron un rescate. De ese momento en adelante, la acción causó cada vez más revuelo y sorpresa, sobre todo por el absoluto desconcierto en el que la policía se encontró durante varios meses. El grupo recién volvió a manifestarse el 11 de octubre de ese año, atacando la residencia de los marines de Estados Unidos y dinamitando el monumento de Kennedy, ubicado cerca de la Estación de trenes en La Paz. La investigación de este hecho y la detención de Carlos Pacajes y Serafín Vargas, el 24 de noviembre de ese año,

permitió a la policía establecer la relación de Miguel Northfuster y otras personas con el CNPZ.

El 4 de diciembre, la policía capturó al peruano Alejandro Escobar –alias Evaristo Salazar–, quien luego de ser torturado y revelar información sobre una casa de seguridad del grupo, fue encontrado muerto al día siguiente. Ese 5 de diciembre, a las 8:45 de la mañana, la policía realizó la toma de la casa de seguridad, ubicada en la calle Abdón Saavedra, número 2035. La acción fue supervisada por el propio Ministro del Interior, Guillermo Capobianco. En el ataque a la casa de seguridad murieron tanto el secuestrado como los siete componentes del grupo CNPZ. Sin embargo, la investigación de organismos de Derechos Humanos mostró que el secuestrado habría salido vivo pero herido del rescate; y que los secuestradores fueron ajusticiados luego de haberse rendido, por órdenes del propio Ministro del Interior.

El Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), de línea foquista, tenía dos grupos componentes: los Ayllus Rojos y la Células Mineras de Base. Entre otras cosas, este Ejército realizó acciones de recuperación y atentados a torres de alta tensión eléctrica durante los años de 1991 y 1992. Por un lado, la línea seguida por este grupo estaba relacionada a la lucha histórica que los pueblos indígenas habían iniciado en la Colonia. Por el otro, se inspiró en las luchas obreras y mineras del siglo XX, lo que les permitió contar con una base mayor que los otros grupos. El EGTK inició su actividad el 21 de junio de 1991, con el colgamiento de tres gallos rojos en la Ceja de El Alto. Durante los siguientes meses, sus miembros se restringieron a realizar acciones de propaganda. El entonces Ministro del Interior Carlos Saavedra B. se refirió a este grupo guerrillero con estas palabras:

Creo que comparando el EGTK con los otros grupos que surgieron anteriormente, como el caso de ZW o el mismo CNPZ, este era de una conformación mucho más seria, un intento mucho más serio que se hacía en el país. En el caso del CNPZ, por lo que conocemos hoy en día, el problema es que termina en un drama, pero si no hubiera terminado así se hubiera visto lo pequeño que era, inclusive con extranjeros. En el caso ZW, este grupo era mucho menor todavía, (…) termina en nada: se apresa prácticamente a todos los involucrados de ese que fue un intento a mi entender fallido (Iturri, 1992: 103).

Luego de un seguimiento de inteligencia, los principales miembros del EGTK –entre los que destacaban los hermano Raúl y Álvaro García Linera– fueron capturados mientras trataban de comprar armas, el 9 de marzo de 1992. Durante los siguientes meses fueron cayendo otros componentes. Finalmente, el 19 de agosto de aquel año, Felipe Quispe fue detenido –luego de ser traicionado por un colaborador suyo. Felipe Quispe, también conocido como el Mallku, era el principal dirigente de los Ayllus Rojos.

En todos estos casos, la actuación de los encargados de la investigación fue muy criticada por los organismos de Derechos Humanos, que presentaron pruebas de sus métodos de torturas y de los abusos cometidos desde el Estado. Esto llevaría a una posterior acusación de terrorismo estatal de parte de los distintos gobiernos, no solo contra los grupos subversivos, sino también contra organizaciones y movimientos sociales. Otro de los resultados fue la retardación de justicia, que se expresó en la caducidad de los procesos penales contra muchos de los inculpados.

### Debacle de antiguos y surgimiento de nuevos actores políticos, cambio de relaciones de poder y reco posición del bloque popular, los 500 años de invasión

Las medidas asumidas en 1985, con el D.S. 21060, generaron una importante transformación respecto a la libre contratación. Además, le permitieron al Estado prescindir del servicio de trabajadores o cerrar fábricas que no rindiesen ganancias. En octubre de 1985, el costo de la libra fina de estaño cayó a 2,5 dólares, lo que hizo que su producción fuera insostenible para el Estado, quien debió asumir el despido inminente de miles de trabajadores estatales. En líneas generales, las consecuencias de la derrota de las organizaciones mineras –y en sí del bloque de trabajadores– fue la desestructuración de la identidad obrero-nacional que se constituyó con el Nacionalismo Revolucionario. Pero, a la vez, fue el inicio de un desplazamiento de saberes de organización y lucha minera hacia otros lugares, como el Chapare, la ciudad del El Alto, Cochabamba, etc.

En un sentido histórico, el origen del movimiento campesino se remonta a fines del siglo XIX, con formas de organización referidas a la exvinculación de tierras o, incluso, a las luchas de resistencia contra la Colonia. Pero, como

experiencia organizativa contemporánea, este se implantó recién a partir de la década de 1940, con la realización del I Congreso Indigenal –convocado por Gualberto Villarroel en 1945. De ahí en adelante, hasta 1952, este movimiento pasó por un primer proceso de organización y resistencia a la república señorial. Con la revolución se reposicionaron los diferentes actores políticos de ese momento, y la Reforma Agraria de 1953 fue el resultado de la toma de tierras que los campesinos llevaron adelante durante esos años.

Las células campesinas, parte del pacto que se produjo entre Estado y campesinado, posteriormente fueron usadas por las dictaduras militares, a través del conocido Pacto Militar-Campesino. Por un lado, estas células sirvieron como aparato de contrapeso frente a los grupos de obreros; por el otro, como una forma de legitimación política. Otras vertientes, más críticas e independientes, se presentaron insistentemente, ofreciendo otras alternativas a la fórmula oficialista. Entre estas se encontraban el Bloque Independiente Campesino, la Unión de Campesinos Pobres (UCAPO), los incipientes sindicatos colonizadores y los movimientos indianista y katarista. Estos dos movimientos plantearon una lucha más política e ideológica, que reivindicaba la reconstitución de las formas pre-coloniales de organización y de resistencia al dominio español y republicano, rescatando las figuras de los líderes históricos Túpac Katari, Bartolina Sisa y Zárate Willka principalmente. Esto les permitió articular un discurso tanto político como cultural, que tuvo fuerte influencia en los sectores urbanos, de migrantes y del área rural.

Entre el 25 y 26 de junio de 1979, luego de casi dos décadas de subordinación al Estado, el movimiento campesino organizó un Congreso de Unidad legitimado por la COB. Allí, la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB) cambió de denominación y estructura, constituyéndose en la vanguardia de un verdadero cambio político para el bloque, fusionando a los tres sectores campesinos: la Confederación Túpac Katari, la Confederación Independiente y la Federación Julián Apaza.

Fue así que se conformó la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en cuyo primer congreso el heroico dirigente Genaro Flores fue nombrado secretario ejecutivo. El 1 de mayo de 1982 –antes del retorno de Siles Zuazo al Gobierno–, al participar multitudinariamente de la marcha convocada por la COB, la CSUTCB hizo una importante demostración de su fuerza. Miles de campesinos con tractores se hicieron presentes en la ciudad de La Paz.

Ya con la vuelta de la democracia, la CSUTCB centró su atención en dos alternativas posibles. Por un lado, se podía volver a la lógica prebendal con el Estado, a través del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA). La otra era hacer un trabajo más enfocado en lo político, apoyada por el naciente –pero ya fortalecido– katarismo. Durante la década de 1980, la Confederación actuó sin posicionarse definitivamente en alguna de las dos alternativas. Sin embargo, luego de la consolidación de la democracia, su marco de participación política quedó muy reducido, y así se mantuvo hasta la promulgación de la Ley INRA, en 1996. Con esta decisión estatal, los grupos campesinos entraron en un proceso de movilización de emergencia por sus derechos comunitarios que fue encabezado por la CSUTCB.

Durante las décadas de 1980 y 1990, la Coordinadora de las seis federaciones de productores de coca del Chapare se convirtió en otro actor social muy importante. La gran migración minera que siguió a la relocalización, llevó a sus nuevos lugares de residencia no solo la fuerza de trabajo, sino todos los conocimientos de lucha política y resistencia de los mineros. Entre 1989 y 2002, durante los gobiernos de Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer, el Chapare fue la zona más presionada por la erradicación de la coca. Fue también en el Chapare donde fracasó el planteamiento del desarrollo alternativo como política estatal. Las luchas entre el Gobierno y la Coordinadora tuvieron consecuencias funestas, que arrojaron muchos muertos entre campesinos y varios militares.

La Federación Nacional de Mujeres Campesinas /Bartolina Sisa (FNMC/BS) surgió en 1980, bajo el liderazgo de Lucila Mejía. Luego de ser parte de la CSUTCB, las mujeres se separaron pues buscaban ser ellas mismas quienes administraran sus recursos, sin necesidad de la intermediación de los varones. Esta decisión produjo una gran molestia entre los hombres, pero esto no pasó de ser algo anecdótico. La formación de este ente autónomo hizo salir a la luz a un actor político que, en el futuro,

adquiriría la misma capacidad de organización y de resistencia que los otros. Eso sí, por muchos años los ámbitos formales de negociación con el Estado aún pasaron por la CSUTCB. Los objetivos principales de la FNMC/BS eran: organizar a las mujeres campesinas, indígenas y originarias en una entidad integrada y unitaria; lograr una estructura orgánica fuerte y de alcance nacional; trabajar permanentemente con mujeres de base de centrales, regionales y federaciones departamentales; responder a la disciplina sindical de los movimientos populares y democráticos; y desarrollar su acción conjuntamente con la CSUTCB y la COB (García, 2004: 505). La presencia de esta organización fue fundamental durante los conflictos por la defensa de la hoja de coca en el Chapare y en los Yungas. De hecho, en los espacios andinos su lucha se articuló con las de la CONAMAQ y la CSUTCB.

Durante la dos décadas de implantación de las reformas estructurales neoliberales, varios actores que se movilizaron contra esas medidas adquirieron mucha fuerza como bloque, principalmente aquellos a los que estas involucraba directamente (campesinos, mineros, maestros, los del sector de salud, juntas vecinales, comités cívicos, etc.). Todos ellos fueron trastocados por alguna ley, lo que les permitió tener un sentido de unidad y una oposición contra qué luchar.

En 1990 se desarrolló la primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad, que congregó la presencia de varios pueblos indígenas del Oriente boliviano: mojeños, chimanes, trinitarios, etc. Esta marcha se inició el 16 de agosto en la ciudad de Trinidad; 34 días después, los marchistas llegaron a la ciudad de La Paz en medio de un clima de sorpresa, pues esta fue la primera vez que los habitantes de la Sede de Gobierno vieron cuán precaria era la situación en que ellos vivían. Esta acción obligó al Gobierno de Paz Zamora a realizar varios decretos para reconocer su autoridad en la administración de su territorio y sus derechos ancestrales. Sin embargo, en la práctica fue muy complicado establecer una demarcación de potestades sin que existan instancias y espacios donde dichos acuerdos pudieran efectivizarse in situ. Pese a estos problemas, el recibimiento que los representantes aimaras y quechuas de la CSUTCB y CONAMAQ hicieron a los marchistas en la cumbre significó un importante reconocimiento de las tierras bajas, que en adelante no volverían a pasar desapercibidas por el Gobierno ni por la sociedad civil.

Las grandes organizaciones indígenas y campesinas, que tenían la capacidad de movilizar gente de forma masiva, articularon su lucha en torno a los "500 años de resistencia a la invasión española" como fue denominado el 12 de octubre de 1992. Con esta frase se le dio otro sentido a lo que tanto los gobiernos latinoamericanos como el de España habían asumido como una oportunidad para realizar políticas de acercamiento, propugnando los 500 años del "encuentro de dos mundos". Este momento marcó un punto de giro en la presencia de estas organizaciones a nivel nacional, pues ese día realizaron marchas y acciones de protesta en las diferentes capitales departamentales del país.

En los años siguientes se vería la acentuación del proceso de demandas del sector indígena. Se movilizaron para poner que en la discusión se incluyan temas como la participación política, la igualdad de oportunidades –también a nivel de género y generacional– y los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación. Este último punto generó el discurso más fuerte de su reflexión situacional. El pensamiento de izquierda, ya de por sí en crisis por la caída del bloque socialista, también fue duramente criticado. Entre las organizaciones que impulsaron el debate en torno a sus demandas destacan CIDOB, CPESC, CPEM-B y otras.

Otra grupo de organizaciones que se fortaleció –y luego aún más con las leyes de descentralización administrativa– fue el de las juntas vecinales. Estas agrupaciones se conformaron en la década de 1960, en las ciudades capitales de los departamentos. A partir del proceso de relocalización, iniciado en 1986, en las ciudades se contó con mucha población de mayor experiencia organizativa, ya sea proveniente de las minas o de otros centros de producción estatal. Un caso muy claro de este fenómeno es El Alto, porque allí la gran afluencia de migrantes fue una instancia decisiva para que, el 6 de marzo de 1986, sus habitantes decidieran separarse de La Paz, fundar una nueva ciudad y generar sus propias instancias de participación. Las juntas vecinales fueron importantes para viabilizar varios planes de apoyo del Fondo Nacional de Emergencia, pues se convirtieron en la contraparte de proyectos como "Alimentos por trabajo" o los clubes de madres.

Durante el periodo en cuestión, las organizaciones sociales –CSUTCB, FNMC/BS, CONAMAQ, CIDOB, COB, las juntas vecinales y otras más– se convirtieron en los nuevos actores sociales, suficientemente capacitados como para movilizarse efectivamente por sus luchas sectoriales. Su fuerza opositora al sistema político sirvió para conformar un bloque muy bien organizado con el que el Gobierno en más de una ocasión tuvo que negociar –y a veces incluso reprimir. Aunque no siempre ganaron las disputas, las organizaciones sociales siempre obligaron al Gobierno a responder a sus demandas, aunque sea de manera sectorial. Esto fue así tanto para los partidos tradicionales, con estructuras definidas y una historia de conducción del país, como para los nuevos partidos políticos creados en democracia, de corrientes más populistas en muchos casos. Los políticos de ambos cortes se enfrentaron a una fuerte base de movilización, con una gran volatilidad y con estructuras de rápida respuesta, pero que no tenían aún la proyección de unirse en las luchas de resistencia y reivindicación.

El desmantelamiento de las instituciones estatales –fenómeno común de los gobiernos neoliberales– afectó mucho a la autoestima e identidad nacionales. La constitución de la subjetividad boliviana cambió; ya no había más correspondencia entre Estado y sociedad. Las élites de la clase política y las élites económicas, pese a su disparidad, se enfilaron en un proyecto nacional de subordinación al capital internacional y a la modernidad occidental, proyecto que no alcanzó a todas las esferas sociales de Bolivia. La predominancia de esa visión elitista implicaba un duro acomodo a lo internacional y a la globalización, y esto acabó relegando la realidad nacional –lo que somos y lo que tenemos– a un segundo plano. Todo ello solamente sirvió para profundizar aún más las disparidades de una sociedad que, con el paso de los años, se identificó con la lucha llegó por los recursos naturales y por la dignidad nacional.

## La fuerza del Estado, la gobernabilidad y el institucionalismo democrático (1993-1999)

> "Sólo los hombres y los pueblos que asumen su identidad pueden volver a ser ellos mismos"
> (La nación clandestina. Jorge Sanjines)

> Y ¿qué es Bolivia? ¿Cuál su forma; cuál su esencia? ¿Bolivia tiene ideal? ¿Una ilusión?
> (Revolución India, Fausto Reinaga)

### La regularidad electoral: las elecciones nacionales de 1993 y 1997

Las elecciones de 1993 se realizaron el 6 de junio, en medio de una gran expectativa, pero sobre todo en medio de un impresionante gasto propagandístico sin precedentes. El resultado fue la victoria del MNR, a la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada, con una votación del 34%. Banzer y el Acuerdo Patriótico (AP) conformado por la alianza ADN-MIR-PDC, se quedaron con el 21% y CONDEPA con el 14%.

Para ir a la elección, el MNR formó una alianza con el Movimiento Revolucionario Tupaq Katari de Liberación (MRTKL), cuyo líder Víctor Hugo Cárdenas candidateó a la Vicepresidencia. Cárdenas era parte del grupo de intelectuales aymaras que formaron la base política para la conformación de la CSUTCB a finales de los años 70 y que fue elegido como diputado nacional en anteriores elecciones. La gran ventaja que el MNR sacó en las urnas frente al AP fue reconocida por este último, lo que llevó al Congreso a simplemente ratificar el resultado. Para tener mayoría en el Parlamento, el MNR hizo una coalición a la que ingresó el Movimiento Bolivia Libre (MBL) –una escisión del MIR de la época de la UDP– y la Unión Cívica Solidaridad (UCS) de Max Fernández. La UCS dejó la coalición meses después luego de recibir pocos espacios de poder.

La política que planteó el Gobierno de Sánchez de Lozada se caracterizó por la profundización de los cambios que se venían realizando desde la gestión de Víctor Paz Estenssoro, entre 1985 y 1989. Este proceso se había paralizado durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, entre 1989 y 1993.

El proyecto "Plan de Todos", bajo el que se conformó la coalición MNR-MRTKL-MBL-CONDEPA, planteó la llamada "capitalización de empresas estatales". Este programa consideraba la necesidad de inyectar capital a estas empresas y hacerlas rentables pero, dentro la lógica del mercado neoliberal, el Estado ni era capaz de hacerlo ni debía hacerlo. Para ello, el gobierno ingenió la fórmula del 50-50, lo que significó que el 50% de una empresa capitalizada sea del Estado boliviano

y el otro 50% de la empresa capitalizadora, además de otorgarle el control administrativo a esta última. Se trataba de una época en la que el capital internacional estaba ampliando sus espacios de acción con el discurso de la privatización en todos los países de Latinoamérica y el mundo. Así, el proceso de capitalización se convirtió en una "forma local" de adecuación que fue vista con mucho interés por otros países de la misma condición que Bolivia en Asia y África.

Todo este proceso fue duramente criticado y resistido por los sectores sociales, que fueron los directamente afectados, y que entre los años de 1995 y 1996 calificaron a la capitalización como una privatización encubierta. Con cada ley que promulgaba el Gobierno, no solo de capitalización sino también de modificación del Estado proteccionista hacia el proyecto estatal neoliberal, paradójicamente, también creó o fortaleció el sector de la población que era el afectado y se oponía, con mayor o menor éxito, pero que en ningún caso logró revertir la decisión "capitalizadora". Toda esta transformación institucional también creo todo un andamiaje administrativo que le permitió al Gobierno hacer esos cambios, respaldado en la propia Constitución Política del Estado que fue cambiada en el Congreso Nacional, donde era mayoría. Las principales empresas capitalizadas durante ese quinquenio fueron: la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Recuadro 59

## Leyes principales del gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997)

| Fecha | Nombre | Nº Ley |
|---|---|---|
| 7/9/94 | Ley Orgánica del Poder Ejecutivo | 1493 |
| 21/2/94 | Ley de Capitalización | 1544 |
| 20/4/94 | Ley de Participación Popular | 1551 |
| 7/7/94 | Ley de Reforma Educativa | 1565 |
| 2/8/94 | Ley de Reforma a la Constitución Política del Estado | 1585 |
| 29/10/94 | Ley del Sistema de Regulación Sectorial | 1600 |
| 15/12/94 | Ley de abolición de Prisión y Apremio corporal por obligaciones patrimoniales | 1602 |
| 21/12/94 | Ley de electricidad | 1604 |
| 22/12/94 | Reforma de Ley Tributaria 843 de mayo 20,1986 | 1606 |
| 7/5/95 | Ley de Telecomunicaciones | 1632 |
| 28/7/95 | Ley de Descentralización Administrativa | 1654 |
| 31/10/95 | Unidad de División Político-Administrativa | 1669 |
| 31/10/95 | Ley del Banco Central | 1670 |
| 15/12/95 | Ley sobre Violencia Domestica | 1674 |
| 15/12/95 | Ley de la Persona con Discapacidad | 1678 |
| 30/4/96 | Ley de Hidrocarburos | 1689 |
| 12/7/96 | Ley Forestal | 1700 |
| 18/10/96 | Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria | 1715 |
| 25/11/96 | Ajustes y modificaciones a la Ley 843 de Reforma Tributaria y la Ley 1689 de Hidrocarburos | 1731 |
| 29/11/96 | Ley de Pensiones | 1732 |
| 10/3/97 | Ley de Fletes de Transporte (elévese a rango de Ley el Decreto Supremo Nº 24327, de 28 de junio de 1996) | 1769 |
| 17/3/97 | Código de Minería | 1777 |

Fuente: Khol, 2007, pag 147.

El cuadro anterior muestra cómo, durante todo el periodo del gobierno del MNR con Sánchez de Lozada, se realizaron cambios –a través de leyes– que modificaron todo el panorama social y económico del país. Estos se dieron con el objetivo de conectarlo con los mercados internacionales y lograr una posición de Bolivia en la globalización mundial, desde la visión de que:

Recuadro 60

### Visión del gobierno de Sánchez de Lozada

"El Plan pretendió establecer un régimen hegemónico neoliberal a escala nacional que medie entre la economía global, específicamente las instituciones financieras internacionales y las empresas privadas, por un lado, y los ciudadanos bolivianos, por el otro lado. Se diseñó un nuevo Estado posmoderno, descentralizado y multicultural en reemplazo del Estado modernizante, centralizado y mestizo de 1952…".

En otras palabras, la idea central era profundizar y ampliar los objetivos de la NPE de 1985: la Democracia del Mercado. Paradójicamente, años más tarde se vería que el mercado no es democrático. La visión con la que actuó el Gobierno fue planteada en el Plan General del Desarrollo:

"… el Estado se excluirá de las actividades productivas y de la intermediación financiera directa, concentrándose en crear las condiciones objetivas para un buen funcionamiento de los mercados (…), que induzca el crecimiento de la inversión privada, en la inversión social en educación básica, el primer nivel de salud y la mejora de las condiciones de habitabilidad".

Fuente: Kohl, 2007: 147.

El gasto de esta transformación se hizo con un crédito del Banco Mundial de 357 millones de dólares. Del total, 126,4 fueron destinados a las reformas político-institucionales, 103,6 a reformas económicas y a la creación de instancias regulatorias como las superintendencias, 90 millones a la Reforma Educativa y la Descentralización, y 40 millones a los fondos de inversión social. Dichos fondos, junto a otros montos millonarios de la Cooperación Holandesa, USAID y a la Cooperación Alemana, permitieron al Gobierno paliar los costos sociales de esa transformación (Op.Cit.).

En 1994 se realizaron modificaciones a varios artículos de la CPE, entre ellos el Artículo 1 y los siguientes. Así, Bolivia se constituyó en un país unitario, "multiétnico y pluricultural", lo que –junto a planteamientos de descentralización y representación por circunscripciones– fue la base legal para generar la políticas de descentralización administrativa, participación popular, reforma educativa y reforma judicial.

En ese año, se promulgaron las leyes de Capitalización (Nº 1544), Participación Popular (Nº 1551) y Reforma Educativa (Nº1565). Estas leyes estaban destinadas a permitir el pretendido cambio económico y sociopolítico. La primera permitía una racionalización del personal de las empresas estatales, pero sobre todo la comercialización del paquete accionario de cada empresa a partir de sus bienes, que entraban en competencia para ser adquiridos por empresas extranjeras que permitan la obtención de ganancias por esa compra y su administración, al mantener la mitad de las acciones en "propiedad de los bolivianos", y que se destinaron al paso del Bonosol para los mayores de 65 años y a fortalecer el fondo de pensiones que estaba en crisis por la poca cantidad de trabajadores activos que aportaban.

La Participación Popular fue una medida para reestructurar la presencia de la burocracia estatal cuyo objetivo era permitir el acercamiento entre el ciudadano y el Estado con administraciones locales –como municipios y prefecturas–, con autoridades que puedan rendir cuentas directamente a la sociedad y con la elección directa de autoridades locales. Esta reestructuración despertó diferentes problemas como la llamada "descentralización de la pobreza" pues los municipios se hicieron cargo de los problemas sociales, el aumento de la corrupción en los niveles locales y el traspaso de la captación de impuestos. Otro problema fue la poca capacidad administrativa de la mayoría de los municipios y la eliminación de las nueve Corporaciones de Desarrollo. Un caso anecdótico es que, con esta ley, en el Chapare se conformó una alcaldía para el movimiento de los cocaleros, grupo que luego se convertiría en una voz fundamental de las demandas nacionales.

En el caso de la Reforma Educativa, los planteamientos de cambio partieron de la premisa de formar en los bolivianos "las destrezas básicas y conocimientos técnicos para desarrollar sus capacidades e insertarse en el mercado laboral de manera más adecuada" (Plan Nacional de Desarrollo: 1994, 27). También se planteó el

viraje hacia una educación bilingüe y multiétnica, pero centrada en una acomodación a la cultura occidental desde lo originario, bajo una visión multicultural que privilegiaba la educación occidental. En el ámbito pedagógico se propuso una transformación curricular que fuera más allá del profesor y que involucrase la participación de los estudiantes y de los padres de familia en el proceso de formación. La generación de materiales pedagógicos debía nacer de las propias culturas, poniendo énfasis en los contenidos y en los procesos curriculares.

Estos planteamientos se estrellaron con la realidad de la educación boliviana marcada por las diferencias, que se centraba en una pedagogía repetitiva y donde los contenidos de enseñanza estaban desarraigados y descontextializados, poca capacitación y actualización de los profesores, y una dificultosa situación de los bajos salarios, junto a que el gobierno tuvo que destinar gran parte de sus recursos a una reestructuración administrativa y no a solucionar directamente los problemas. La creación de asesores pedagógicos y el paso de la administración académica de las normales a las universidades no sólo permitió a la educación el acceso a mayores contenidos, sino que mostró las desventajas de la formación de quienes ingresaban y salían de las normales, todo ello generó jerarquías dispares y tenciones con el sector de la Universidad. Por otra parte, el magisterio se inclinó por resistir las medidas de transformación y en sus direcciones eligió a figuras trotskistas, que les garantizaban la lucha contra la Reforma y el aumento de los bajos sueldos que recibían.

El Gobierno de Sánchez de Lozada, además de plantear una transformación radical del Estado, también tuvo que enfrentar la crisis del sistema financiero. Banco del Sur, Banco de Cochabamba y Banco Boliviano Americano Internacional quedaron en bancarrota. Los dueños fueron acusados de estafa y, en una inexplicable medida judicial, la deuda fue asumida por el Estado, que hizo de garante, teniendo que usar recursos públicos para cubrir gastos de privados.

Finalmente, este Gobierno también operó tal como lo estipulaban los pactos políticos para obtener mayoría congresal: dio ministerios a los jefes de los partidos de la coalición y facilitó cuotas para la militancia que apoyó su campaña electoral.

## Conflictos con diferentes actores

Mientras el Gobierno implementaba estos paquetes de leyes y reformas, la sociedad boliviana vivía otra realidad en la que la economía generó mayores diferencias, mayores necesidades y pocas respuestas en empleos tanto para el área rural como urbana.

En 1992 se recordaron los 500 años del "encuentro de dos mundos", alusión con el que los gobiernos de España y Portugal celebraron el descubrimiento de América, o los "500 años de resistencia" que fue enarbolado por los pueblos indígenas y afrodescendientes que se fortalecieron con la construcción de un discurso de lucha y una identidad visible, surgida de las diferentes posiciones que nacieron en torno a esa fecha y los fuertes debates de la sociedad.

Los sectores urbanos, aunque más ligados al proyecto modernizador, también protestaron por la conculcación de sus derechos. La forma en que el Gobierno se impuso a los sectores que resistieron a las medidas de transformación fue con la constante utilización de la fuerza, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, llegando a cometer crímenes de Estado contra los Derechos Humanos, reprimiendo a las protestas y deteniendo a los líderes sindicales.

Entre 1994 y 1997 se registraron fuertes movilizaciones sectoriales, como las del magisterio y la COB; esta última, pese a su disminuida fuerza, mantuvo su capacidad de movilización de los sectores –principalmente con marchas de los fabriles. En los otros departamentos, las movilizaciones se dieron principalmente por asuntos administrativos, como la Participación Popular o la Ley de Descentralización, planteada desde Santa Cruz como un reto que iba acompañado de la propuesta de un modelo autonómico estatal.

Un problema muy fuerte que enfrentó el Gobierno fue la denuncia de la explotación minera. La explotación cobró matices de violencia en Amayapampa y Capasirca a unos días de la fiesta de navidad en 1996, en un día conocido por la memoria histórica como "La Masacre de Navidad". Los comunarios que vivían alrededor de esta mina –que era parte de consorcio de propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada– plantearon tomarla; el objetivo era establecer un régimen de producción que beneficiara a las comunidades y al Estado. El Gobierno, en su política de garantizar

las inversiones extranjeras, mandó a las Fuerzas Armadas a retomar la mina. Estas acciones desembocaron en un enfrentamiento que dejó a varios comunarios indígenas muertos. Fue uno de los casos más evidentes de uso discrecional de los aparatos represivos del Estado para fines personales. Los organizamos de Derechos Humanos –como la APDHB– tuvieron que intervenir para velar por la correcta investigación, sin embargo sigue siendo un caso que no tiene responsables.

## Las elecciones de 1997 y el Gobierno de Hugo Banzer (1997-1999)

Las elecciones de 1997 dieron como resultado la victoria del exdictador Hugo Banzer Suárez, con un 22,7%. Segundo salió Juan Carlos Duran, del MNR, con un 18,2%, y tercera la candidata Remedios Loza, de CONDEPA –quien asumió la candidatura luego del fallecimiento de Carlos Palenque, unos meses antes de la votación–, con 17,2%. Este resultado fue ratificado por el Congreso, que eligió a Banzer como Presidente, otra vez mediante el sistema de alianza de partidos para conseguir la mayoría en el Parlamento. Esta vez, la alianza la conformaron los partidos ADN, CONDEPA, MIR, UCS y el reciente Nueva Fuerza Republicana (NFR). La fórmula que tomó las riendas del país se apoyó en una administración diferente a la anterior y en un "Plan General de desarrollo" que planteaba la siguiente visión: "Bolivia XXI, país socialmente solidario". El plan se orientó en la construcción de 4 pilares: 1) oportunidad, que implicaba generación de empleos y mejores ingresos para los trabajadores; 2) equidad, traducida en políticas que permitirían la reducción de la pobreza; 3) institucionalidad, con una visión de la administración eficiente del Estado de derecho y los poderes locales, además de los objetivos de luchar contra la corrupción y establecer a Bolivia como puente de Sudamérica; y 4) dignidad: lucha contra el narcotráfico, pero siempre bajo los acuerdos firmados con los otros países. En este caso, la política de erradicación violenta de la coca que reclamaba Estados Unidos se mantuvo. En teoría, estos cuatro pilares y su ejecución permitirían: más empelo y menos pobreza, un país más justo y sin drogas, y la lucha contra la pobreza e igualdad de oportunidades.

El Gobierno del General Banzer se caracterizó por mantener la política de privatización de empresas públicas, medida que alcanzó a los demás componentes de YPFB –sobre todo las refinerías. De igual manera actuó con la red del gasoducto hacia Brasil, que terminó de construirse en 1999. La venta del emblema de la aviación nacional, el Lloyd Aéreo Boliviano, terminó de realizarse con la empresa VASP, que ese mismo año fue acusada de vender los repuestos de la línea aérea para pagar parte de lo ofertado en su privatización. En 2001, la administración de la empresa aérea paso a manos del propietario de la cervecería Taquiña de Cochabamba, Ernesto Asbún. Todo ese proceso administrativo llevó a la quiebra al Lloyd, hecho que finalmente ocurriría en 2005.



Figura 30. Banzer y los representantes de la Megacoalición 1997.

Fuente: Periódico Digital El Día, 12 de enero de 2015.

Una de las principales dificultades que afrontó el gobierno fue el cumplimiento del programa de erradicación de coca, compromiso asumido ya desde la Ley 1008 en la década de los 80. Esta medida fue resistida con fuerza por la organización de los cocaleros, tanto en la región del Chapare en Cochabamba como en los Yungas de La Paz (quienes se habían fortalecido políticamente), el Estado continuamente usó la violencia para reprimir al sector cocalero en el objetivo de cumplir sus compromisos internacionales de erradicación. Fue en esa disputa que las organizaciones sindicales cocaleras llegan a la conclusión de que no basta con resistir, sino que es urgente el proyecto político como es la toma de las alcaldías en elecciones municipales, como en el caso de la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) que formaron la base de lo que años después sería el MAS-IPSP (Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos).

Si bien el Gobierno institucionalizó varios de los puntos que formaban parte del gran proyecto de modernización del Estado iniciado en 1994, entre los principales logros se encuentra la consolidación de la figura del Defensor del Pueblo como instancia mediadora entre el Estado y la sociedad civil. Esta entidad fue creada para defender a los ciudadanos en casos de uso arbitrario de la fuerza estatal. Además, apoyó la formación del Tribunal Constitucional y, posteriormente, la del Consejo de la Judicatura, cumpliendo los acuerdos de separación de poderes –aunque, en la realidad, la presencia del Ejecutivo siempre estuvo presionando esas instancias.

El Gobierno de Banzer también tuvo que enfrentar la crisis económica que dejó el anterior gobierno al no haber logrado que el "Plan de Todos" y la capitalización genera más empleos y mejore la economía nacional. Una forma de paliar la crisis fue relacionarse con los Objetivos del Milenio de la ONU y el Plan de Condonación de Deuda Externa HIPC I y II, cuya política fue promovida por países pobres, incapaces de pagar su deuda externa. Bolivia fue uno de los principales beneficiados de esta acción junto varios otros del África. El plan propuso la reducción de la pobreza a través de la condonación de partes de la impagable deuda externa y que esos recursos se destinen al financiamiento estatal para programas sociales.

Para hacer efectivos estos proyectos, fue requisito convocar a mesas de diálogo que negociaran con la sociedad civil respecto a lo que se podría hacer con los recursos condonados. Fue en ese periodo que una grave enfermedad obligó a Banzer a dejarle provisionalmente el mando de la República al Vicepresidente Jorge Quiroga. Fue entonces que surgió una diferencia entre los llamados "pitufos" y los "dinosaurios" del partido ADN. Finalmente, ante el evidente deterioro de su salud por un cáncer al pulmón, en 2001 Banzer tuvo que dimitir, dejando en manos del Vicepresidente el gobierno de Bolivia.

## La modernización del Estado y los cambios estructurales neoliberales

Durante la década de 1990 se planteó modernizar el Estado, hacerlo más eficiente y con menos grados de corrupción. Sin embargo, no había correlación entre los proyectos que se plantearon y la realidad nacional.

Existieron dos dimensiones del proyecto de modernización del Estado, una referida a lo administrativo interno y la otra a las leyes del país en su aparato jurídico y de construcción de nación. Entre las medidas de esta última clase se encontraban: la Ley de Participación Popular, la de Descentralización, la de Reforma de Pensiones y la de Política Social. Otros de los grandes proyectos fueron la Reforma Educativa, la Ley Inra y la Reforma a la CPE. Este proceso fue seguido por una fuente de financiamiento del Banco Mundial que, luego de dar los créditos para la estabilidad –en el primer momento del ajuste estructural, durante 1987 y los siguientes años–, planteó la necesidad de estas reformas de segunda generación para aplicarlas al país.

Dentro las medidas internas de modernización del Estado, se planteó el Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB) con fondos de un crédito de 12 millones de dólares del BID. El sentido del Programa era fortalecer la institucionalidad administrativa burocrática de las instancias del Gobierno, como el Poder Legislativo, la Vicepresidencia de la República, las cámaras de senadores y diputados, la Corte Nacional Electoral, la coordinación entre los diferentes partidos políticos y otras instancias menores de esos poderes. El Programa, por ejemplo, ayudó

a mejorar las condiciones de la Corte Nacional Electoral, modernizó el registro de personas y de los procesos electorales; también se encargó del equipamiento del congreso nacional y las oficinas correspondientes.

Es interesante ver que dentro de las prioridades de los proyectos que apoyó el BID estaban:

1) Fortalecer el sistema democrático mediante el desarrollo de los sistemas de representación, participación y división de poderes, asegurando la vigencia efectiva de contrapesos y equilibrios entre los mismos.
2) Consolidar el Estado de derecho, asegurando la existencia de instituciones que garanticen la seguridad jurídica y física de personas y bienes.

Fuente: http://ppikas.files.wordpress.com/2009/06/estrategias-de-modernizacion-del-estado-bid.pdf

Estas prioridades se plasmaron en las siguientes sugerencias de campos de acción del BID que planteo para toda América Latina:

Es relevante notar cómo cada uno de los cambios que se hicieron, no solo con el PRONAGOB sino con otras instancias, fueron ejecutados en plena consideración de las recomendaciones del BID. Este trabajo con los poderes del Estado permitió la creación de nuevas instituciones –como el Defensor del Pueblo– y la aplicación de las reformas al Nuevo Código de Procedimiento Penal, a la Ley de Participación Popular y las reformas a la administración de justicia, los funcionarios públicos, el aparato del Estado, etc. Todos estos son elementos que se fueron implementando en mayor o menor medida. Sin embargo, se partió del criterio de mejoramiento institucional, a modo de brindar un servicio que alcance la sociedad y que garantice su inserción en el modelo político.

Las consecuencias de esa manera de entender la política, completamente alejada de las acciones populares, se plasmó en una falta de confianza de la sociedad hacia los procesos electorales. Este sistema no permitió la participación más allá del voto, creó una élite política que automáticamente alejó al Estado del resto de la sociedad. Así, más allá del proceso de empadronamiento electoral,

Recuadro 61

## Sugerencias de campos de acción del BID:

1) Apoyar la independencia del poder judicial y, a la vez, fortalecer los mecanismos de responsabilización de jueces y tribunales.
2) Apoyar la modernización de los órganos legislativos, para que ejerzan adecuadamente sus funciones de legislación, control y representación.
3) Apoyar el establecimiento de sistemas electorales independientes y técnicamente capaces, abordando la modernización de los mismos y su fortalecimiento institucional.
4) Promover la descentralización del Estado que, desde el equilibrio y la responsabilidad fiscal, sirva de cauce al incremento de la participación y el control democrático de los ciudadanos y a una prestación más efectiva de servicios.
5) Desarrollar instituciones que promuevan la transparencia, la responsabilidad y la integridad en el comportamiento de todos los agentes y funcionarios públicos.
6) Promover la participación de los ciudadanos mediante el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.
7) Promover la objetividad y capacidad técnica de las instituciones de control externo del desempeño de los poderes públicos, como contralorías y tribunales de cuentas fiscalías, defensorías, etc.
8) Promover la modernización de la administración de justicia, aprovechando las nuevas tecnologías, con la finalidad de asegurar la neutralidad, transparencia y agilidad de los procesos.
9) Desarrollar la capacidad de las instituciones de fiscalía, defensoría y procuraduría, así como de las profesiones jurídicas que participan en el sistema de justicia.
10) Apoyar la modernización de la legislación procesal y sustantiva.

los índices de afluencia en la votación bajaron. Se constituyó una gobernabilidad de la Megacoalición que no permitía solucionar la crisis económica ni política, y más bien seguía manteniendo los niveles de corrupción y prevendalismo, lo que hizo desconfiar más a la población del sistema político de partidos. Sin embargo, empezó a surgir una dinámica desde el ámbito local, desde abajo, donde las organizaciones sociales y sindicales se plantearon asumir el control municipal para las elecciones de 1995 y 1999.

## Conflictos de fin de siglo

Luego de un sistema político que mantuvo una misma política de administración durante 15 años, rondando el año 2000, el pueblo boliviano se enfrentaba a una fuerte crisis económica y social. Las expectativas de mejoramiento cada vez se iban desvaneciendo; paralelamente, el incremento de los casos de corrupción y mal manejo de lo público, la profundización de la pobreza y los conflictos sociales hicieron tambalear el sistema.

En 1997 el gobierno boliviano tenía un déficit fiscal de 470 millones de dólares por la reestructuración del Estado, además de perder los ingresos de las empresas capitalizadas y del gas y petróleo. Esto obligó a recortes presupuestarios del TGN tanto en personal como en los sectores de salud y educación. Se implementaron medidas que apoyaron la generación de microempresas debido a que existía una fuerza laboral sin ocupación al no existir fuentes de trabajo desde un Estado debilitado y poca iniciativa privada de gran envergadura.

El Gobierno de Banzer y Quiroga se enfrentó a tres grandes problemas entre 1997 y 1999: La erradicación de la hoja de coca en los sectores del Chapare en Cochabamba y en los Yungas de La Paz, con el plan de "Coca Cero" que asumió desde el principio el gobierno utilizando a las Fuerzas Armadas para lograr llegar a las 12 000 hectáreas autorizadas de consumo tradicional que fueron condicionadas por el gobierno de Estado Unidos y la comunidad internacional, en su lucha contra el narcotráfico. Este conflicto enfrentó a que la economía regional del Chapare y de Cochabamba se redujera drásticamente lo que tuvo influencia en todo el país. El segundo problema internacional que afecto el ingreso de divisas fue la crisis de la Argentina en 1999, desde donde los migrante bolivianos enviaban grandes remesas de dinero, además de que ese país era el principal mercado de las exportaciones bolivianas. El tercer problema que afectó a la economía nacional fue la pérdida de las regalías del gas y del petróleo al privatizar los sectores de YPFB que no fueron capitalizados entre 1994 y 1997, disminuyendo los ingresos del pago de impuestos de este sector. Paralelamente, el gobierno boliviano mantuvo su dependencia económica para cubrir el gasto corriente y solicitar el apoyo de organismos internacionales para cubrir ese déficit profundizando la constante deuda estatal.

Las primeras movilizaciones de organizaciones y movimiento sociales no podían ser cooptados por el sistema de partidos. Los principales actores emergentes fueron: los pueblos indígenas del Oriente boliviano y Tierras Bajas, los productores de coca de Cochabamba y La Paz y las comunidades indígenas aymaras y quechuas, presentes tanto en el Altiplano como en los valles. A este nutrido grupo se sumaron los diferentes sectores magisteriales, gremiales, fabriles, mineros y populares; todos fueron afectados por las medidas asumidas por los gobiernos y se movilizaron sectorialmente tratando de mejorar su situación.

Las organizaciones vecinales o Juntas de Vecinos en las principales capitales de cada departamento tuvieron una gran migración desde sectores rurales y de mineros relocalizados que, como en El Alto, potenciaron su capacidad organizativa. Esto se mostró cuando lucharon por la creación de una Universidad en esa ciudad entre 1997 y el año 2000.

Otro eje de conflicto que se profundizó para el fin de siglo fue la Erradicación de la Coca en el Chapare y los Yungas, que no encontraba solución por el grado de violencia en el que se sometió y la resistencia de los sindicatos cocaleros usando casabobos y trampas contra UMOPAR y las FF.AA., lo que conllevo decenas de muertes durante esos años. Las principales organizaciones cocaleras que se constituyeron son: el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (COFECAY) y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba de donde surge Evo Morales Ayma como diputado nacional por el recientemente creado Movimiento Al Socialismo (MAS).

En noviembre de 1998, se convoca al 2do Congreso extraordinario de la CSUTCB donde

es elegido Felipe Quispe Huanca, ex guerrillero del EGTK y miembro de los Ayllus Rojos, como secretario ejecutivo; bajo su dirección se generaron las mayores movilizaciones de los campesinos indígenas solicitando mayores inversiones para el área rural, un trato digno y planteando el problema de "las dos Bolivias".

Como parte de las políticas de inserción de Bolivia a la globalización, se realizó la licitación de las empresas de recursos y servicios básicos a administraciones privadas, tanto comunicaciones, electricidad, transportes y otras como la gestión del agua también se privatizaron. Uno de los aspectos más conflictivos fue la promulgación de la Ley de Aguas que permitía a las empresas Aguas del Tunari en Cochabamba y Aguas del Illimani en La Paz, a realizar un aumento de tarifas por el cobro en el consumo de agua, el control del sistema de agua potable de la ciudad y de todas las aguas subterráneas, lo que implicaba el cobro del agua en pozos preexistentes, de los sistemas de irrigación superficiales y de las capturas de aguas de lluvia realizadas de manera privada y de las comunidades. A finales de noviembre de 1999 empezaron los bloqueos esporádicos de campesinos por el agua, conformándose la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, a la cabeza del fabril Oscar Olivera en la ciudad de Cochabamba.

Durante esos años los conflictos se fueron masificando, llegando al punto en que regiones enteras –y casi departamentos enteros– terminaban totalmente bloqueadas. Esto sucedió especialmente en Cochabambay el Chapare, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca. Junto con los bloqueos de carreteras, las marchas se convirtieron en la principal forma de movilización en las ciudades. En general, Bolivia se encaminaba a una gran marcha que era guiada por la pregunta ¿qué tipo de Estado queremos los bolivianos?

# SEGUNDA PARTE

## ¿Una revolución en la economía y en la tierra?

# IV. La dinámica económica del capitalismo de Estado (1952-1985)

José Alejandro Peres-Cajías

## Consideraciones generales

La revolución de 1952 trajo consigo una nueva estrategia de desarrollo económico que de ninguna manera implicó una ruptura con el capitalismo o con la idea de la modernidad. Más bien, esta estrategia consistió en alterar la importancia relativa de los agentes en la economía, con el fin de modificar la asignación y distribución de recursos. En efecto, la revolución de 1952 implicó la consolidación del Estado como su agente central. Así, por ejemplo, si antes de la revolución la importancia relativa del Estado se hallaba en torno al 10-15% del PIB boliviano, el ratio tendió a moverse en torno al 30-35% a lo largo de las siguientes décadas (Peres-Cajías, 2013).

Los nuevos dirigentes bolivianos apreciaban este cambio como un paso necesario para lograr una nueva redistribución de recursos, justificada tanto en términos de equidad como de eficiencia económica. Respecto a la equidad, la nueva estrategia económica explicitaba que el nuevo Estado debía ser capaz de quebrar las considerables desigualdades que habían caracterizado al país hasta antes de la revolución. Por ejemplo, se mencionaba la necesidad de modificar el hecho de que menos del 2% de los productores agropecuarios bolivianos controlasen más del 65% del total de la tierra boliviana (Censo Agropecuario de 1950).

En cuanto a la eficiencia económica, los nuevos dirigentes bolivianos veían que la redistribución de recursos era el canal adecuado para lograr la ansiada –y necesaria– diversificación económica. Por ejemplo, con la denominada "Marcha al Oriente", los nuevos dirigentes pretendían utilizar los recursos del Estado para integrar al Oriente en la economía nacional. Más allá de algunas modificaciones posteriores, esta nueva estrategia pervivió hasta 1985, y es conocida como "Capitalismo de Estado" por la historiografía boliviana.

El objetivo del presente capítulo es analizar la evolución de esta estrategia y ofrecer variables de análisis que permitan explicar algunas de las paradojas económicas surgidas con ella. En efecto, si bien luego de la revolución la concentración de la tierra disminuyó en el Occidente del país, esta no hizo más que incrementarse en el Oriente. Igualmente, si bien durante el Capitalismo de Estado se alcanzaron importantes resultados en términos de diversificación económica, es difícil negar que la suerte de la economía boliviana continuó íntimamente ligada a la del sector minero. Más aún, durante este periodo tuvo lugar un incremento sorprendente de la brecha entre la economía boliviana y las más desarrolladas –y esto a pesar de que las tasas de crecimiento del PIB y el PIB per cápita obtenidas durante este periodo se encontraron entre las más elevadas de la historia económica boliviana.

Con el fin de entender estas contradicciones, el trabajo parte de la premisa de que el crecimiento y desarrollo económico difícilmente son el resultado de estrategias económicas "puras", en las que el mercado o el Estado son condiciones necesarias y suficientes para el éxito económico. A nivel mundial, en la segunda mitad del siglo XX se presenciaron muchos casos de intervención estatal. En varios de ellos, dicha intervención generó mejoras sustanciales en las condiciones de vida de la población; en otros, los resultados obtenidos fueron más bien mediocres. Por ejemplo, resalta el contraste entre el éxito de Corea del Sur y el fracaso de Corea del Norte.

Igualmente, es importante recordar que, durante este periodo, el mercado no fue una condición sine qua non para obtener elevadas tasas de crecimiento económico. Por ejemplo, tanto en Estados Unidos –donde la asignación de recursos operaba básicamente a través del mercado– como en la Unión Soviética –donde esta operaba fundamentalmente a través del Estado–, las tasas de crecimiento económico fueron elevadas de forma sostenida entre 1950 y 1971. De esta manera, resulta evidente que ni la liberalización total de la economía ni la intervención estatal representan estrategias económicas exitosas en sí mismas. Tomando esto en consideración, el estudio que se presenta a continuación buscará entender las contradicciones del Capitalismo de Estado en Bolivia, tratando de responder cómofuncionó la economía durante este periodo –es decir, el análisis no se centrará en cuan "liberal" o cuan "estatista" era la economía de aquel periodo.

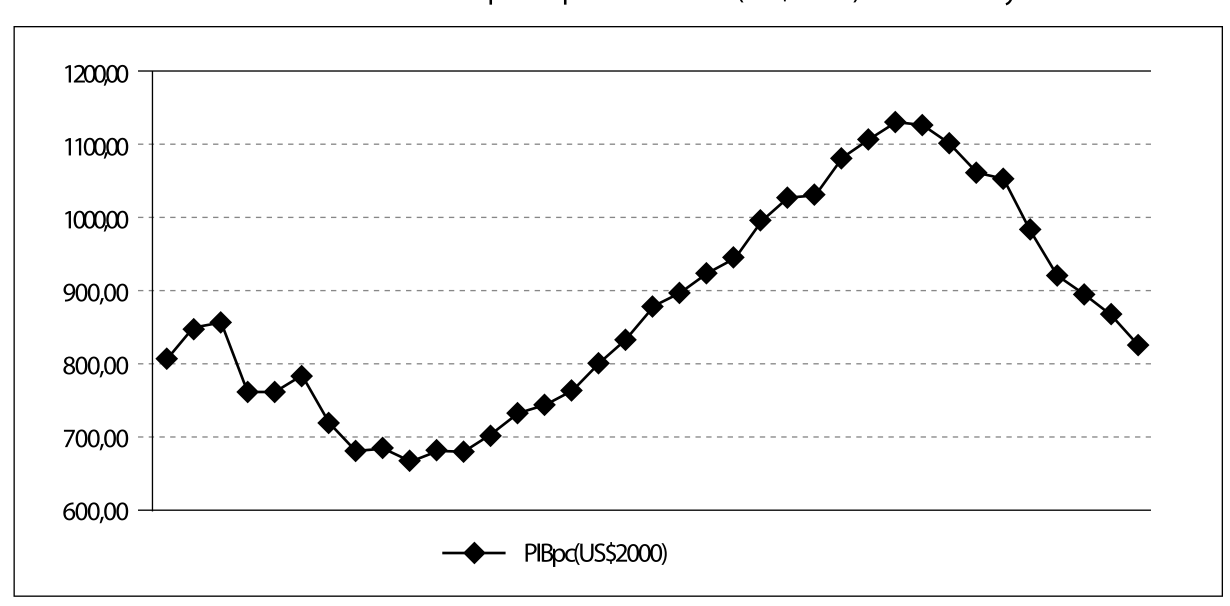
Este estudio será realizado en cuatro diferentes secciones. En la primera sección se presentará un análisis global de la economía boliviana durante el período 1952-1985. En él se resaltarán tanto los avances como los problemas sin resolver que dejó la nueva estrategia económica. En la segunda sección se investigarán las capacidades fiscales del Estado boliviano, es decir: las bases sobre las que se asentaba el éxito de la nueva estrategia de desarrollo. En la tercera sección se analizará la evolución de la minería, el motor de la economía antes y después de la Revolución Nacional. En la cuarta parte se observarán los avances y los límites de la diversificación económica. Finalmente, se presentarán algunas conclusiones que sinteticen las principales características, avances y limitaciones del denominado Capitalismo de Estado.

## El Capitalismo de Estado: ¿un retorno al punto de partida?

El PIB per cápita es sin duda una de las variables más comúnmente utilizadas por los economistas para analizar la evolución de una economía durante un periodo determinado. Si bien el uso de este indicador tiene sus limitaciones, este se ha extendido a nivel mundial, porque es una buena aproximación para entender la evolución de las condiciones de vida existentes al interior de una economía. En el caso boliviano, el análisis de esta variable entre 1952 y 1986 sirve para remarcar las contradicciones del Capitalismo de Estado (Gráfico 2).

En efecto, si bien el PIB per cápita boliviano se incrementó de forma continua entre 1959 y 1978, resaltan también dos bruscas caídas, una al inicio del periodo sujeto a análisis y otra al final. Igualmente, es verdad que las tasas de crecimiento del PIB obtenidas durante el Capitalismo de Estado estuvieron entre las más altas de la historia

Gráfico 2. Evolución del PIB per cápita boliviano (US$2000) entre 1950 y 1986




Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL (www.eclac.cl).

económica boliviana, con un promedio anual del 5,1% entre 1959 y 1978. Pero también es importante destacar que, tanto al principio como al final de este modelo, las tasas de crecimiento económico no solamente fueron bajas, sino negativas: un promedio anual de -1,4% entre 1952 y 1959 y de -1,5% entre 1978 y 1986. La magnitud de la caída final fue tal que, hacia 1986, el nivel del PIB per cápita boliviano no era tan distinto del nivel de existente antes de la revolución de 1952.

Esta especie de retorno al punto de partida se explica, tanto por la incapacidad de nuestra economía de lograr tasas de crecimiento sostenibles a lo largo del tiempo, como por la evolución de la población boliviana. Es importante recordar que, décadas antes de la revolución, el crecimiento de la población fue bajo, con un promedio anual del 0,6% durante el siglo XIX y del 1,1% durante la primera mitad del siglo XX. En cambio, desde la década de 1940 –y hasta finales del siglo XX–, las tasas de crecimiento de la población se incrementaron notoriamente, en torno al 2,2% anual. Así, mientras en 1950 la población total boliviana era de 2.8 millones de personas, hacia 1985 era de 5.9 millones.

La duplicación de la tasa de crecimiento poblacional generó presiones adicionales sobre la economía. Mientras el PIB creció con un promedio anual del 5% entre 1959 y 1978, el PIB per cápita lo hizo en torno al 2,8%. Igualmente, mientras el PIB se redujo en un promedio anual del 1,5% entre 1978 y 1986, el PIB per cápita lo hizo en torno al 3,3%. El Capitalismo de Estado resultó ser incapaz de mantener tasas de crecimiento positivas a través del tiempo, pero estas tasas ni siquiera eran lo suficientemente amplias como para poder sustentar a una población creciente.

Estas falencias en el modelo determinaron que muchos de los avances conseguidos antes de la Revolución Nacional fueran revertidos durante los primeros años del Capitalismo de Estado. Simétricamente, muchos de los avances generados por dicho modelo fueron revertidos en sus últimos años. A su vez, estos retrocesos permiten entender por qué, a pesar de la existencia de tasas de crecimiento elevadas durante muchos años, la economía boliviana no hizo más que divergir frente a las economías más desarrolladas del mundo. Por ejemplo, antes de la revolución de 1952, el PIB per cápita boliviano equivalía al 20% del PIB per cápita estadounidense; en 1959, una vez superada la crisis económica inicial de la revolución, el ratio decreció hasta el 15%. Luego, gracias al crecimiento sostenido de la economía, este valor se mantuvo más o menos constante hasta 1978. Sin embargo, con la crisis económica de los últimos años del modelo, el ratio comenzó un nuevo retroceso. Tal fue así que, en 1986, el PIB per cápita boliviano representaba tan solo el 9% del PIB per cápita de Estados Unidos.

El análisis de los componentes del PIB representa una primera estrategia útil para entender por qué la economía boliviana fue incapaz de conseguir tasas de crecimiento elevadas y sostenibles a través del tiempo. Antes de la Revolución Nacional, el PIB agropecuario representaba un tercio del PIB total; es decir, la economía boliviana era básicamente agraria. Con la declaración de la Reforma Agraria, en agosto de 1953, se tendió a redistribuir la tierra y eliminar los servicios personales, a los que los trabajadores campesinos muchas veces estaban obligados. Las medidas de la Reforma estaban justificadas en sí mismas, pero también por su utilidad desde un punto de vista económico.

En efecto, el reparto de tierras y la eliminación de servicios personales eran pensados como medidas tendientes a incrementar los intercambios monetarios en el agro. Al contar con un pedazo de tierra propio, el productor campesino ya no se vería obligado a intercambiar su producción con el patrón; en cambio, podría vender toda su producción –incluido su trabajo– libremente, en el mercado.

Sin embargo, tal como sugiere Cornelius Zondag (1968: 183), la Reforma Agraria representaba un enorme desafío económico, ya que debía destruir una vieja estructura agraria y construir una nueva al mismo tiempo. La significancia de este desafío y los problemas iniciales del Capitalismo de Estado determinaron un inicio poco auspicioso en este cometido. Entre otras cosas, la destrucción inicial de las propiedades de los grandes productores determinó un descenso en la producción de maíz y un considerable incremento en las importaciones de trigo y de harina de trigo. Así, en términos agregados, no fue hasta 1964 cuando se recuperaron los niveles de producción agropecuarios previos a la revolución.

Además de estos inconvenientes a corto plazo, la Reforma Agraria fue incapaz de quebrar una de

las grandes limitaciones del sector agropecuario boliviano: la baja productividad en comparación con la agricultura de los países vecinos. Por otra parte, si bien inicialmente la Reforma permitió una considerable redistribución de tierras, algunos resultados derivados de esta política tendieron a ser problemáticos a largo plazo. Por ejemplo, en muchas zonas del Occidente del país se tendió a una excesiva parcelarización de la tierra, hecho que volvió antieconómicas a muchas unidades agropecuarias. En contraste, más allá del considerable incremento de producción agrícola en el Oriente del país, la estructura agraria en esta región tendió a revivir las desigualdades previas a la Revolución Nacional. Hacia 1984, el 2,71% de las unidades agropecuarias acaparaba cerca del 72% de la tierra disponible en el departamento de Santa Cruz. Según Sandoval et al. (2003: 46-48), este proceso de reconcentración de la tierra se inició durante la revolución, pero estuvo en gran medida determinado por la asignación de tierras a discreción durante el gobierno militar de Hugo Banzer (1971-1978).

A pesar de estas limitaciones, es importante recordar que la Reforma Agraria fue pensada como una medida que permitiría aumentar los intercambios en el mercado nacional; esto aconteció por el incremento en la oferta de productos agrícolas y de mano de obra. Desde esta perspectiva, es evidente que la Reforma tuvo un impacto económico positivo desde el primer momento del Capitalismo de Estado, ya que incorporó al mercado a una porción considerable de población que antes se hallaba excluida. Gracias a esta "liberación de la mano de obra", la economía boliviana vivió un importante proceso de urbanización que, a su vez, incrementó la densidad de su mercado interno. Mientras en 1950 el 35% de la población boliviana vivía en el área urbana, hacia 1985 el ratio se incrementó hasta el 50%. Igualmente, fue gracias a esta "liberación" que se pudo reasignar la mano de obra disponible hacia otras actividades o sectores. Gracias a dicha "liberalización" y a la finalización de la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz (1954), el Oriente boliviano presenció una masiva llegada de flujos migratorios desde el Occidente del país.

La Marcha al Oriente también fue el resultado de un importante esfuerzo estatal que consistía en re-direccionar grandes flujos de capital hacia la región. A su vez, esta reasignación fue positiva para el conjunto de la economía nacional, pues permitió tres logros económicos fundamentales: la integración del mercado interior boliviano, la sustitución de diversas importaciones agrícolas y la consolidación de la industria petrolera. En 1950, el PIB petrolero no equivalía ni al 1% del PIB total boliviano; hacia 1985, esta importancia relativa se incrementó hasta el 5%. Gracias a la Reforma Agraria y la Marcha al Oriente, la revolución viabilizó una importante ampliación de los factores de producción en el Oriente del país. Esto supuso la reintegración de la economía oriental y la occidental, hecho que trajo consigo la formación de un mercado interno que, luego de más de 100 años de independencia, finalmente tendía a hacerse "nacional".

Pero reconocer lo anterior no implica desconocer la permanencia de diversas restricciones estructurales. Es verdad que la nueva producción agrícola podía competir en el mercado nacional frente a las importaciones, pero esta fue incapaz de asentarse en los mercados internacionales. Por otra parte, si bien la Marcha al Oriente permitió la consolidación de las exportaciones hidrocarburíferas –y con ello la ampliación de la oferta exportadora del país–, el proceso no fue capaz de modificar el patrón de inserción de la economía boliviana en los mercados internacionales. Así, alrededor del 90% de las exportaciones bolivianas estaban constituidas por recursos naturales no renovables: minerales o hidrocarburos. De hecho, las exportaciones mineras siguieron teniendo una importancia determinante en la oferta exportadora, pues rondaban el 70% del total de las exportaciones bolivianas, y el estaño el 60%.

Así, una de las grandes limitaciones del Capitalismo de Estado se halló en sus dificultades a la hora de modificar el patrón minero-exportador de la economía. Es cierto que, durante los primeros años de la revolución –gracias a la disponibilidad de divisas baratas–, el sector manufacturero pudo expandirse e incluso vender gran parte de su producción en las fronteras, a compradores de los países vecinos (CEPAL, 1958: 84). Sin embargo, una vez que estos privilegios fueron eliminados, dicho sector no fue capaz de quebrar las restricciones estructurales previas a la revolución.

Por un lado, en el sector se mantuvo la predominancia de lo que se denomina "industria liviana" (elaboración de productos finales con insumos de origen agropecuario y/o forestal). Por

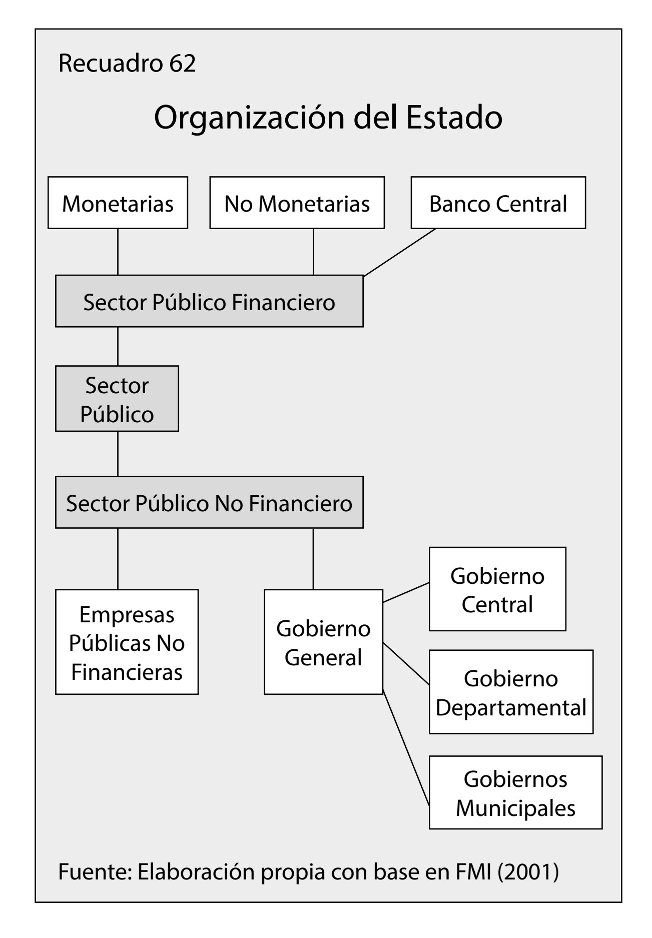
el otro lado, su sostenibilidad siguió dependiendo en gran medida de la existencia de medidas proteccionistas arancelarias y no arancelarias. Finalmente –y en parte como resultado de lo anterior–, el sector no pudo librarse de la fuerte dependencia de las importaciones de insumos y de bienes de capital (Luna, 1995: 149). Como consecuencia de todo esto, la importancia relativa de la industria durante las décadas de 1960 y 1970 no fue significativamente diferente a la existente antes de la Revolución Nacional: entre el 12 y el 15% del PIB.

Este estancamiento relativo contrastaba con lo que pasaba en otros países de la región. Por ejemplo, en países como México o Brasil, el sector industrial creció de forma considerable, llegando a representar a más del 20% del PIB. De hecho, la importancia relativa de la industria se incrementó de tal forma en algunos países centroamericanos, que alcanzó niveles cercanos al 18% del PIB (CEPALSTAT). Algunos de los problemas de la industria boliviana –como la estrechez del mercado interior, por ejemplo– no pueden ser del todo adjudicados a las fallas o limitaciones del Capitalismo de Estado. Responsable o no, lo cierto es que este modelo enfrentó enormes dificultades al momento de intentar consolidar la industria interna, y esto mantuvo a la economía boliviana en una situación de extrema dependencia del sector minero. Los efectos de esta dependencia serán explorados en las siguientes secciones.

## Las bases fiscales del Capitalismo de Estado (o cuando la realidad le puso freno a los deseos)

En los siguientes párrafos se mostrará el origen de las dificultades del Capitalismo de Estado a la hora de obtener tasas de crecimiento elevadas y sostenibles en el tiempo; en gran medida, estas nacen de la imposibilidad del Estado boliviano de asegurar fuentes sostenibles de financiamiento. Considerando que el Estado puede intervenir en la economía de diversas maneras (ver Recuadro 62), es importante reconocer que, durante el periodo en cuestión, el Estado boliviano priorizó algunos instrumentos de política económica frente a otros.

En lo que se refiere al Sector Público Financiero, la existencia de créditos subsidiados por diversos bancos de fomento –el Banco Minero, el Banco Agrícola o el Banco del Estado– no fue un fenómeno atípico durante el periodo analizado. Aun así, es difícil negar que el rol del Banco Central fue mucho más determinante. En lo que al Sector Público No Financiero se refiere, si bien todas las unidades estatales intervinieron, el rol de las empresas públicas –y en menor medida el del Estado Central– fue mucho más significativo. Así, a fines de la década de 1960, dos tercios del presupuesto del Sector Público No Financiero eran destinados a las empresas públicas, 20% al Gobierno Central, 11% a las instituciones descentralizadas y sólo el 5% a los gobiernos locales (ver las Memorias del Banco Central de Bolivia). Entre las empresas públicas más importantes destacaron sobre todo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (1936), la Corporación Boliviana de Fomento (1942) y la Corporación Minera de Bolivia (1952).




Por otro lado, es importante recordar que los Estados pueden financiarse a través de diversos mecanismos. Por ejemplo, es posible imponer impuestos sobre la población, cobrar rentas de propiedad a cambio de determinadas concesiones,

endeudarse –ya sea interna o externamente– y/o recibir créditos por parte del Banco Central. Tampoco se debe olvidar que la obtención de estos ingresos puede generar efectos adicionales sobre el resto de la economía. Dichos efectos pueden ser positivos –por ejemplo, cuando el incremento de impuestos directos facilita una distribución más equitativa de los ingresos–, pero también pueden ser negativos –como cuando el incremento de la deuda externa vuelve a una economía más vulnerable frente a los mercados internacionales de capitales.

La importancia económica de estos efectos colaterales se hizo evidente desde el principio mismo de la revolución (Zondag, 1968: 85-88). En efecto, el 2 de julio de 1952 se determinó que todos los productores mineros –grandes, medianos y pequeños– estaban obligados a vender toda su producción al Banco Minero; luego, este se encargaría de exportar la producción minera. Meses después, el 31 de octubre de 1952, se determinó la nacionalización de los tres grandes grupos mineros: Patiño, Hostchild y Aramayo, los que juntos representaban alrededor de tres cuartos de la producción minera boliviana. En coincidencia con este decreto se determinó que, a partir de entonces, la novel Corporación Minera de Bolivia se haría cargo de dicha producción.

Con base en esta nueva configuración, el Estado impuso un impuesto implícito sobre el sector. Este consistía en contabilizar las divisas generadas por la minería a un tipo de cambio sobrevaluado (brindando menos Bs. por cada dólar), e intercambiar estas divisas en el mercado boliviano con un tipo de cambio devaluado (obteniendo más Bs. por cada dólar). Esta medida incrementaba los ingresos del Estado, que ahorraba la cantidad de bolivianos que debía darle al sector minero y, con ello, incrementaba su disponibilidad de capital para invertir en otros sectores de la economía. Sin embargo, la nueva estructura tributaria también incrementaba los costos del sector minero. Al tener que vender sus divisas a un precio inferior al del mercado, el sector perdía dinero y no podía pagar sus costos internos. Además, el Estado determinó que la COMIBOL debía subsidiar la pulpería de los trabajadores mineros y absorber a todos aquellos trabajadores que habían perdido su puesto de trabajo en los últimos años. Todo ello determinó un incremento significativo en los costos de producción de la nueva empresa pública.

Esta nueva configuración tributaria y de costos es comprensible una vez que se conocen las restricciones económicas y políticas que debían enfrentar los dirigentes de la revolución. De hecho, el incremento de la presión fiscal sobre la minería era algo lógico de esperar, ya que este sector era el más productivo del país, el único capaz de incrementar en el corto plazo las disponibilidades estatales (Peres-Cajías, 2012). En cuanto a las restricciones políticas, es importante remarcar que los mineros fueron una de las fuerzas políticas más importantes durante y en la post-revolución. Por ese motivo, la sostenibilidad política de las nuevas autoridades dependía en gran medida de su capacidad de atender las demandas de los trabajadores mineros.

Más allá de sus causas, la reorganización inicial del sector minero tuvo consecuencias negativas sobre el conjunto de la economía nacional. En efecto, ante la reducción de sus ingresos y el incremento de sus gastos, COMIBOL entró rápidamente en un régimen de pérdidas. A su vez, dichas pérdidas tendieron progresivamente a ser atendidas por el Gobierno, mediante la concesión de créditos emitidos por el Banco Central. De hecho, durante los primeros cuatro años de la Revolución Nacional, entre el 63 y el 85% del incremento de las obligaciones del sector público en el Banco Central se debieron a la minería (CEPAL, 1958: 70-71). Sin embargo, dado que estos créditos fueron respaldados con la emisión inorgánica de dinero, el incremento de las pérdidas de la COMIBOL tendió finalmente a generar un alza continua en el nivel de precios de la economía boliviana. La tasa de variación anual de los precios rondó el 245% en 1953, y si bien esta disminuyó posteriormente, se mantuvo en torno al 100% en los tres años siguientes.

El incremento de los precios, derivado de los déficits del Sector Público No Financiero, dio lugar a diversos desequilibrios económicos. Estos, a su vez, no hicieron más que empeorar debido a la constante estipulación de políticas económicas erróneas. Uno de los primeros efectos de la inflación fue desencadenar una importante devaluación de la moneda boliviana. Ante la dependencia del país de las importaciones de alimentos y de materias primas críticas para la industria, el Gobierno decidió mantener congelado el precio de las importaciones a través de un tipo de cambio sobrevaluado.

Aprovechando esta coyuntura, muchos importadores obtuvieron ganancias extraordinarias, trayendo productos por los que pagaban un precio artificialmente bajo, y que luego reexportaban a los países vecinos. Consciente de esta situación, y buscando disminuir la disparidad entre el tipo de cambio oficial para los importadores y el tipo de cambio del mercado, el Gobierno estableció los denominados "revertibles". Con los "revertibles" se estableció que el tipo de cambio variaba según el tipo de producto importado y su destino. Lógicamente, esta medida no sirvió para frenar la reexportación de las importaciones; más bien, estimuló la corrupción entre quienes debían determinar los diferentes tipos de cambio. Así, la existencia de un tipo de cambio sobrevaluado sobre la minería no tendió tanto a diversificar la economía, sino a beneficiar a aquellos individuos que contaban con la capacidad para reexportar los productos importados a un tipo de cambio subvencionado.

Algo similar sucedió en el ámbito de la agricultura, pues la existencia de un precio interno artificialmente bajo desincentivó cualquier incremento en la producción. Las diferencias entre los precios bolivianos y los precios de mercado internacionales estimularon la reexportación de alimentos previamente importados, generando la escasez interna. El único sector beneficiado con el sistema de cambios múltiples fue la industria nacional, ya que obtenía materias primas a precios que la hacían competitiva frente a la extranjera. Sin embargo, el incremento en la producción industrial fue insuficiente como para compensar las caídas en los demás sectores. A todo esto hay que añadir la caída en los precios internacionales, situación que restringió definitivamente la rentabilidad del sector minero. Por tanto, la decisión de que la minería financie al Estado –mediante la estipulación de un complejo sistema de tipos de cambio múltiples y la emisión inorgánica de moneda– finalmente determinó la fuerte caída en el PIB que trajo consigo el Capitalismo de Estado.

Dada la gravedad de la situación, y ante el fracaso del Plan de Estabilización de 1953, el Gobierno decidió implementar un plan de choque. El plan, que contaba con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI), se ejecutó hacia finales de 1956. Considerando los diversos desequilibrios de la economía boliviana, se decidió eliminar el sistema de cambios múltiples y establecer un tipo de cambio libre. Se eliminó también el control de precios, se redujo el déficit fiscal del Estado a través de la restricción de créditos fiscales y de pulpería barata y, con todo ello, se redujo la inflación. Finalmente, con el fin de estabilizar el tipo de cambio y el déficit del Estado, se concertó la formación del Fondo de Estabilización, respaldado con créditos del FMI y de Estados Unidos.

Es importante resaltar que la ayuda de Estados Unidos fue decisiva para revertir los déficits fiscales y estabilizar la Balanza de Pagos, la cual había quedado maltrecha luego de la caída de las reservas internacionales durante la crisis. Pero, a su vez, la ayuda de Estados Unidos implicaba una modificación central en las alianzas políticas de la revolución. Así, mientras la influencia del Gobierno norteamericano se incrementaba, el Estado perdía los estrechos vínculos con el sector minero. En todo caso, esta apuesta no fue meramente ideológica, ya que la ayuda de Estados Unidos fue central para cubrir el déficit fiscal no solo inmediatamente después de la crisis, sino hasta fines de la década de 1960.

Durante las siguientes décadas, si bien el Estado boliviano siguió siendo incapaz de cubrir por sí mismo sus obligaciones, contó con una fuente adicional de ingresos: el endeudamiento externo. En efecto, al igual que los demás países de América Latina, el Estado boliviano se benefició de la abundancia de capitales en los mercados internacionales –abundancia determinada primero por los eurodólares y luego por los petrodólares. Si bien estos recursos algunas veces permitieron consolidar importantes proyectos para la economía boliviana –como facilitar las inversiones necesarias para iniciar la exportación de gas hacia la Argentina–, en otras ocasiones los resultados fueron insatisfactorios. Más aún, en algunos casos su uso se convirtió en un franco derroche de dinero (la construcción de dos fundiciones de minerales que nunca llegaron a operar son el ejemplo más patente de esta situación). Más allá de estos resultados concretos, no queda duda de que, mientras el Capitalismo de Estado estuvo en vigencia, la existencia de créditos externos baratos permitió al Estado boliviano persistir con su principal estrategia económica: utilizar la intervención estatal para redistribuir recursos en la economía.

Dado ese grado de dependencia, era de esperarse que cualquier cambio en el contexto

externo tuviese una fuerte incidencia sobre la economía boliviana. El primero de estos cambios está relacionado con la caída de la exportación del estaño, en 1978, y el posterior declive en el precio de este mineral, en 1981 (Luna, 1995: 152-155). Dada la composición de la canasta exportadora –acaparada por el estaño–, estas reducciones implicaron una caída sustancial en las exportaciones totales del país. Con ello se redujeron los impuestos a las exportaciones y a las importaciones, que representaban alrededor del 50% de los impuestos bolivianos.

Este descenso de los ingresos del Estado no pudo ser compensado con una caída similar en sus obligaciones corrientes. Es más, en realidad coincidió con el incremento del servicio de la deuda externa. Este incremento respondía al aumento de las tasas de interés internacionales y al vencimiento de la deuda con la banca comercial internacional (Otálora, 1995: 122). Este duro desfase entre los ingresos y los gastos incrementó el déficit de manera muy significativa. Así, a mediados de 1982, cuando la crisis internacional de la deuda se hacía manifiesta, el desarrollo de la economía nacional dejó de ser financiado con créditos externos.

En medio de este adverso contexto externo y de la debilidad de la hacienda pública, el Estado boliviano no tuvo más remedio que financiarse mediante el señoreaje. Según Morales y Sachs (1989: 70), la evolución de este ingreso entre 1982 y 1985 tuvo un comportamiento casi perfectamente inverso al de las transferencias externas. Sin embargo, la recurrencia a los créditos del Banco Central presionó una vez más los precios hacia el alza. En 1982, la tasa de variación anual de los precios rondaba el 123%. La situación empeoró hacia 1983, cuando los ingresos del Estado Central disminuyeron debido a la inflación (efecto Olivera-Tanzi) y a la caída en las exportaciones bolivianas (Ibíd.: 96-101). Igualmente, el ascenso del nivel general de precios determinó una devaluación de la moneda boliviana que, junto a la ampliación de la brecha fiscal y la financiación de éste mediante señoreaje, determinó una aceleración aún mayor en los precios. Así, hacia 1983, la tasa de variación anual de los precios se hallaba en torno al 275%.

Las cosas empeoraron aún más en 1984, cuando, mediante la presión de los "aliados políticos" del Gobierno, se determinó un incremento salarial con el objetivo de compensar la caída en los salarios reales de los empleados públicos. En marzo de 1984 se declaró la mora en el servicio de la deuda a los bancos multinacionales (Ibíd.: 114-115). A pesar de esta medida, la caída en los ingresos estatales y el incremento de las obligaciones salariales determinaron una ampliación en la brecha fiscal. Esta situación llevó al incremento de los créditos del Banco Central, lo que desató un proceso híper-inflacionario que tuvo lugar entre mayo de 1984 y septiembre del año siguiente. Como resultado, la tasa de variación anual de los precios se ubicó alrededor de 11.700% en 1985, una de las más grandes en la historia económica mundial.

Todos los anteriores desórdenes macroeconómicos impactaron sobre la economía real. En términos macroeconómicos, hacia fines de la década de 1970 se inició una fuga de capitales que, para 1982, se había convertido en una transferencia neta de recursos al exterior. Igualmente, dado que los ingresos por señoreaje eran superiores a los créditos del Banco Central (Ibíd.: 118), los continuos déficits fiscales implicaron una caída en las Reservas Internacionales del Estado. En términos sectoriales, la evolución de los precios y el control sobre las divisas determinaron un tipo de cambio sobrevaluado para el sector minero. Éste no hizo más que acelerar las pérdidas económicas iniciadas con la caída en los precios internacionales, y así la cantidad de minerales producidos se redujo considerablemente (Luna, 1995: 157-160). Las diferencias en los tipos de cambio y los controles de precios fomentaron, una vez más, el contrabando y la corrupción (Ibíd.: 202).

La industria, de por sí condicionada por la dependencia de las importaciones de insumos y su baja competitividad, sufrió duramente la caída de las importaciones, las variaciones en los niveles de protección efectiva y la caída de la demanda interna. Así, la industria nacional entró en una considerable crisis productiva. Los controles de precios y los problemas sociales no hicieron más que empeorar esta situación (Ibíd.: 168-176).

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, en 1982 se vivió una considerable sequía en el Occidente y en algunos valles del país, hecho que llevó a una caída sustancial en la producción agrícola. Por ejemplo, la producción de tubérculos de 1983 fue equivalente a no más del

40% de la producción de 1982 (Ibíd.: 165). La situación mejoró tímidamente en 1984, pero no fue hasta 1985 que el sector recuperó los niveles de producción previos a la sequía. Todos estos factores explican la caída sustancial del PIB y PIB per cápita bolivianos durante la primera mitad de la década de 1980.

## La minería boliviana durante el Capitalismo de Estado

Previamente se mencionó que, mientras duró el Capitalismo de Estado, la suerte del sector minero siguió determinando en gran medida la suerte de la economía boliviana. Así, en las épocas de bonanza minera la economía boliviana en su conjunto tendía a presentar mejores indicadores, pero las épocas de crisis minera tendían a afectar al conjunto de la economía. El objetivo del presente acápite es analizar la evolución del sector minero, con el fin de entender la evolución general de la economía boliviana durante este periodo.

Para alcanzar este cometido es importante analizar las condiciones en que el sector minero se encontraba al momento de la revolución. Por un lado, se puede observar que, hacia 1950, la industria estañífera vivía un periodo de incertidumbre. En efecto, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el dinamismo del sector se mantenía gracias a la continua prórroga del contrato entre Bolivia y Estados Unidos para abastecer la fundición de estaño de Texas (CEPAL, 1958: 31). Este contrato debía ser prorrogado anualmente, pero dependía de las negociaciones entre las autoridades bolivianas y las estadounidenses.

Por otro lado, Bolivia era el país productor de estaño menos competitivo del mercado internacional hacia 1950 (Ibíd.: 28-30). Hay tres razones que explican la poca competitividad de Bolivia en aquel entonces: 1) mientras los demás productores mundiales trabajaban a cielo abierto, los yacimientos en Bolivia eran de veta y debían trabajarse en minas subterráneas, que exigían mayores inversiones de capital; 2) los concentrados bolivianos habían bajado mucho de ley, y con ello los precios de venta del mineral; y 3) la inestabilidad política existente en Bolivia desde 1930 había congelado las inversiones en el sector.

Indudablemente, los dirigentes de la Revolución Nacional no podían solucionar ninguna de las restricciones impuestas por el medio natural. Pero sí podían alterar las condiciones de inversión, y así incorporar nuevas minas y nuevas tecnologías que permitiesen reducir las restricciones previamente señaladas. Ello no fue así durante los primeros años del Capitalismo de Estado, por motivos tanto exógenos al modelo económico como endógenos.

Entre los motivos exógenos resalta la caída del precio del estaño. En 1952, la libra fina CIF de estaño se cotizaba en US$ 1,21 en Nueva York; en 1953 el precio cayó debajo de un dólar y en 1954 se situó en torno a US$ 0,9 (Dirección Nacional de Informaciones, 1962: 37). Ante esta situación, el Gobierno, junto con otros países productores y consumidores de estaño, estableció el Primer Acuerdo Internacional del Estaño, con el fin de estabilizar el precio del mineral (Gómez, 1978: 112). Hacia fines de 1957, el fin del contrato de compra-venta de wólfram con el Gobierno de Estados Unidos fue un fenómeno exógeno adicional, que frenó duramente la evolución del sector minero. El fin del contrato supuso la paralización de la mayor parte de las minas de este mineral (Dirección Nacional de Informaciones, 1962: 37).

En cuanto a los factores endógenos, es indudable que la inicial reorganización institucional afectó negativamente la evolución del sector minero. La imposición de un tipo de cambio sobrevaluado, el crecimiento excesivo de la plantilla y el inicial derecho al veto de los trabajadores mineros incrementaron los gastos del sector, agrupado en la naciente COMIBOL, y tendieron a reducir considerablemente su productividad. Esta situación empeoró aún más debido a las malas gestiones administrativas de los nuevos gerentes mineros. Como resultado, durante los primeros años de la revolución la COMIBOL no solamente no pudo atender las inversiones que exigía el sector, sino que sufrió una importante reducción en sus disponibilidades. La consecuencia de todo lo señalado fue que la producción minera disminuyó no solo en valor –por la caída de los precios internacionales–, sino también en cantidad. Por ejemplo, en Catavi, recinto que acaparaba el 33% de la producción de minas de estaño de la COMIBOL, la producción disminuyó de 26.304 toneladas en 1953 a 14.829 en 1961 (Zondag, 1968: 111).

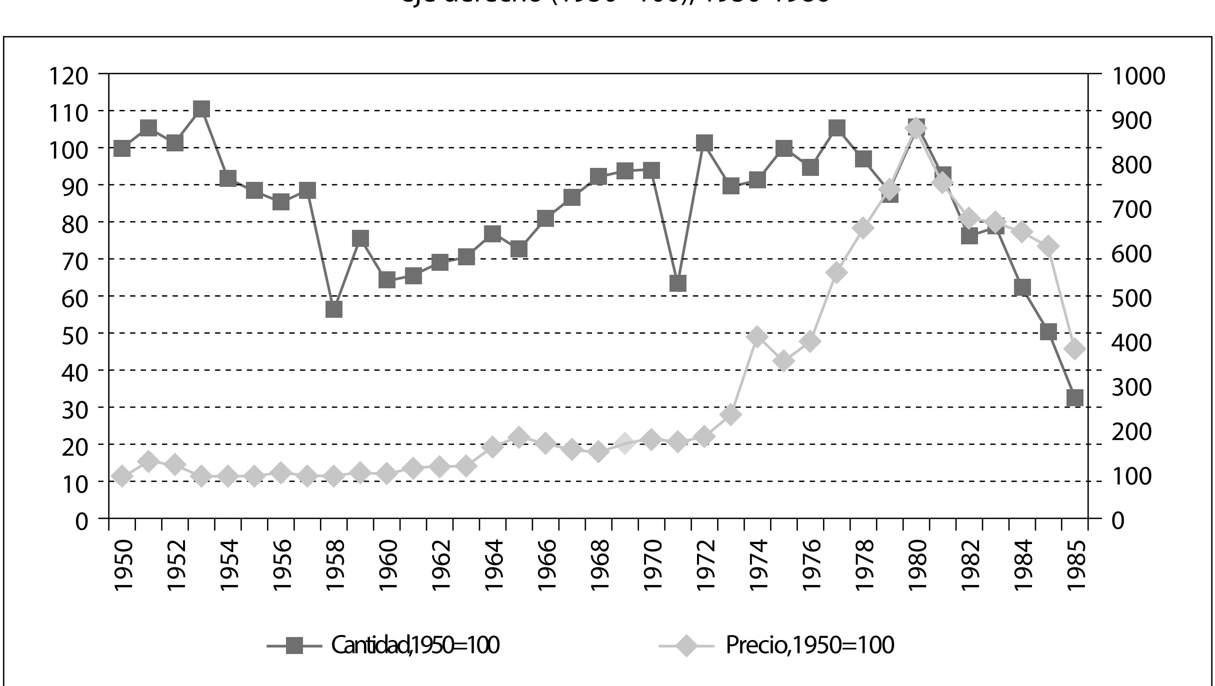
En lo relativo a la minería mediana y a la minería pequeña, el monopsonio del Banco Minero afectó duramente la sostenibilidad del sector por dos motivos. Por un lado, ante la sobrevaluación del tipo de cambio, muchas empresas fueron incapaces de cubrir sus gastos en bolivianos y no tuvieron más remedio que cerrar. Por el otro lado, depender tanto de los precios estipulados por el Estado incrementó la incertidumbre en el sector. De esta manera, durante los primeros años de la revolución, la producción de las minas medianas y pequeñas disminuyó incluso en mayor proporción que en las de la COMIBOL (CEPAL, 1958: 69).

Ante esta crisis generalizada, el Gobierno tendió poco a poco a modificar las bases institucionales que regían el sector. El 15 de febrero de 1956 se eliminaron los tipos de cambio múltiples y se instauró una única regalía minera. Igualmente, si bien el Plan de Estabilización (1956) mantenía al Banco Minero como el comprador exclusivo, estipulaba también que los productores mineros medianos podían exportar libremente su producción si conseguían precios superiores a los ofrecidos por el Banco (CEPAL, 1958: 61). En sintonía con esta medida, el 3 de febrero de 1961 se determinó el fin del monopsonio del Banco Minero sobre determinados minerales (Dirección Nacional de Informaciones, 1962: 39).

En 1961 también se decretó el denominado Plan Triangular, un plan de inversión en COMIBOL que era financiado por el Gobierno de Estados Unidos, el de la República Federal de Alemania y el Banco Interamericano de Desarrollo. El plan estipulaba que, a cambio de US$ 37,8 millones de inversión, la empresa estatal se comprometía a racionalizar los métodos de producción. Gracias a estos cambios, en 1961 la producción minera detuvo su caída y recuperó una tendencia al alza que perduraría hasta finales de la década de 1970. No obstante, las reformas tuvieron un efecto insuficiente. Por ejemplo, ni siquiera en la década de 1970, bajo un contexto favorable de precios, los niveles de producción pudieron superar los existentes antes la Revolución Nacional.

Para entender estos límites es importante considerar la composición del sector durante el Capitalismo de Estado. Durante los más de 30 años que este modelo estuvo en vigencia, el 55% de la producción provino de COMIBOL, el 35% de la minería mediana y apenas el 10% de la minera chica. Esta diferenciación es importante porque, mientras la minería mediana y chica

Gráfico 3. Evolución de la cantidad producida –eje izquierdo– y del precio del estaño –eje derecho (1950=100), 1950-1986




Fuente: Elaboración propia con base en Haber y Menaldo (2011) y MOxLAD.

tenían una canasta productora más diversificada –estaño, wólfram, plata, zinc, cobre–, la empresa estatal se dedicaba básicamente a la explotación de los minerales tradicionales: estaño y wólfram. Por otra parte, durante este periodo la minería mediana incrementó sus flujos de inversión y consiguió operar con nuevas tecnologías. En cambio, la empresa estatal se caracterizó por una constante descapitalización y por el trabajo con tecnologías obsoletas. Además, la mala administración y los conflictos laborales fueron particularmente perjudiciales para la empresa estatal.

Claramente, los límites del sector minero durante el periodo en cuestión se explican por la incapacidad que primó a la hora de revertir el agotamiento de las reservas mineralógicas, a través de nuevas inversiones de capital. Esta incapacidad fue particularmente notoria en el caso de la COMIBOL, y generó una extrema fragilidad del sector frente a los precios internacionales. La gravedad de esta restricción se hizo particularmente evidente desde 1981, y tuvo su máxima expresión en 1986. Aquel año, luego de la espectacular caída de los precios internacionales del estaño (Gráfico 3), la COMIBOL se vio forzada a despedir a 33.000 trabajadores mineros.

## La Marcha al Oriente: los alcances y los límites de la diversificación económica

Frente al relativo estancamiento de la industria minera, resalta el dinamismo económico en el Oriente del país. Como se mencionó anteriormente, este dinamismo debe abordarse en el marco de la denominada Marcha al Oriente. Los objetivos de la Marcha eran básicamente tres: 1) consolidar la formación de un mercado nacional, conectando el Oriente con el Occidente del país; 2) lograr la sustitución de diversas importaciones agrícolas, fomentando el desarrollo agrario en el Oriente; y 3) lograr la sustitución de las importaciones petroleras, invirtiendo directamente o facilitando la inversión en la industria hidrocarburífera.

Antes de la Revolución Nacional, el Oriente del país era una zona económicamente desintegrada del Occidente del país. Esta desintegración ya se había hecho palpable durante las primeras décadas de la independencia nacional, pero se agudizó hacia fines del siglo XIX y principios del XX. En efecto, frente a la conexión ferroviaria de los centros de consumo del Occidente del país con los mercados peruanos y chilenos, el continuo fracaso en la construcción ferroviaria entre Santa Cruz y Cochabamba restó competitividad a los productos orientales. Así, la región oriental quedó como una zona económicamente aislada hasta la década de 1940, periodo en el que se llevaron a cabo diversos proyectos ferroviarios y camineros. Fue entonces que se construyeron las vías férreas que conectaban a Santa Cruz con Brasil (ferrocarril Santa-Cruz-Puerto Suárez) y con Argentina (ferrocarril Santa Cruz- Yacuiba). Luego, gracias al financiamiento de Estados Unidos, se inició el proyecto caminero entre Cochabamba y Santa Cruz.

Más allá de estos antecedentes, no fue sino durante la década de 1950 que la región oriental comenzó a reintegrarse al mercado nacional boliviano. Ello fue el resultado de la finalización de los proyectos ferroviarios y camineros previamente mencionados y de la posterior vertebración de diversas regiones de Santa Cruz. Mediante estas obras, la capital oriental pudo conectarse progresivamente con Buena Vista, Montero, Portachuelo y Puerto Gether (Dirección Nacional de Informaciones, 1962: 94). Una vez finalizada la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la reintegración del Oriente al mercado nacional fue respaldada por la llegada de un importante flujo inmigratorio.

El flujo inmigratorio respondió a tres diferentes procesos de colonización: dirigidos, semi-dirigidos y espontáneos. La migración dirigida consistía en proyectos de colonización fomentados y ejecutados por el Estado, en estrecha colaboración entre la Corporación Boliviana de Fomento y las Fuerzas Armadas. La principal característica de la migración semi-dirigida era el respaldo parcial del Estado para los proyectos de colonización, pues este se restringía a definir las zonas hábiles y a repartir los fundos. El tercer proceso de migración nació de la respuesta espontánea de la población frente a los nuevos estímulos económicos generados en el agro del Oriente boliviano.

En términos cuantitativos, el flujo espontáneo fue el más importante. Por ejemplo, hacia 1980, dos tercios de la superficie agrícola de Santa Cruz eran ocupados por colonias espontáneas, mientras los grupos de colonización dirigida no

ocuparon más del 10% (Sándoval et al., 2003: 53). En todo caso, es importante recordar que estos flujos migratorios no solamente fueron realizados por pobladores del Occidente del país, sino también por población extranjera, básicamente japonesa y menonita.

Es evidente que, para el Oriente del país, la Reforma Agraria no consistía tanto en repartir la tierra entre diversos pequeños propietarios. Allí lo primordial era fomentar el desarrollo de empresas agrícolas, al punto de que fueran capaces de sustituir las importaciones agrícolas. Para ello era necesario transformar las haciendas tradicionales en empresas agrícolas, basadas en un uso intensivo del capital y en el trabajo asalariado (Ibíd.: 41-44). Así, una gran parte de los procesos de colonización fue pensada dentro de una estrategia de desarrollo que pretendía la mercantilización del trabajo agrario, la movilidad de la mano de obra y el incremento de la producción agrícola (Pacheco, 1998: 119, en Ibíd.: 50).

Además de mano de obra, el desarrollo agrario en Oriente requería de flujos de capital, una necesidad que pudo concretarse rápidamente gracias al apoyo estatal. Una gran parte de los créditos brindados por Estados Unidos al Gobierno de la revolución se dirigieron hacia esta región. Entre 1955 y 1960, Santa cruz recibió el 41% de los recursos del programa norteamericano de Crédito Agrícola Supervisado (Ibíd., 2003: 68). En general, del total de los créditos recibidos por Bolivia entre 1955 y 1961, un tercio fueron destinados exclusivamente a la región cruceña (Zondag, 1968: 197). Pero entre 1961 y 1971 esta situación se pronunció aún más, pues el 52.4% de los préstamos de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) fueron destinados a la región (Sándoval et al., 2003: 69).

Difícilmente podría entenderse el desarrollo agrario del Oriente del país sin considerar los créditos subsidiados por el Banco Agrícola y la propia intervención directa del Estado. Un ejemplo de esto es la industria azucarera, cuyo desarrollo sería incompresible sin la instalación del ingenio estatal de Guabirá, en 1956. La llegada de capital al Oriente también fue el resultado de un re-direccionamiento del ahorro interno. De hecho, el ahorro interno tendió a beneficiar notoriamente a la región hasta entrada la década de 1970. Entonces, un cuarto de las empresas y el 45% de las fuentes de empleo impulsado por las inversiones industriales estatales radicaban en Santa Cruz (Ibíd.: 122).

En términos de producción, los resultados de la ampliación caminera, de la llegada de nuevos flujos migratorios y del re-direccionamiento de los flujos de capital fueron positivos. Los dos productos que presentaron mejor desempeño fueron el arroz y el azúcar (Zondag, 1968: 193-1989). La producción interna del arroz se incrementó notoriamente desde 1952 (Gráfico 4). Luego, si bien el crecimiento se ralentizó hacia 1958, los avances conseguidos fueron suficientes como para fomentar la disminución en las importaciones.

En cuanto a la producción azucarera, los grandes avances recién sucedieron a partir de 1956 (Gráfico 5). El hecho que impulsó el crecimiento de la producción azucarera fue la instalación del ingenio de Guabirá. En los primeros años de funcionamiento del ingenio las importaciones no decrecieron; esto se debió al crecimiento del consumo, generado por la Reforma Agraria. De todas maneras, ya en 1960, el constante crecimiento de la producción interna había generado la caída de las importaciones. Así, diez años después de la revolución, la producción interna de arroz y azúcar era superior a las importaciones. Ello representaba un gran avance para el país, sobre todo si se considera que, antes de la Revolución de 1952, la seguridad alimentaria se veía constantemente amenazada.

En la década de 1960, junto a la producción arrocera y azucarera, también comenzó a despuntar la producción algodonera, y este proceso continuó a lo largo de toda la década de 1970. En el primer año de aquella década, la importancia relativa de la producción agropecuaria cruceña equivalía al 18.3% del total nacional. Pero para 1980, el ratio se había incrementado hasta el 22.5% (Sándoval et al., 2003: 119). Gracias al re-direccionamiento del flujo de capital y de la mano de obra –la denominada Marcha al Oriente–, el Capitalismo de Estado dio lugar a la consolidación de una zona agraria capaz de asegurar el abastecimiento del mercado interno.

Sin embargo, el desarrollo agrario del Oriente tuvo también algunas limitaciones. Por una parte, algunas veces estuvo ligado a un favoritismo político que inhibió el desarrollo de la economía nacional en su conjunto. Un ejemplo de esto es el reparto de tierras fiscales en la década de

1970, acción realizada entre los simpatizantes del Gobierno de Banzer, y que incrementó notoriamente la desigualdad de la tierra. Por otra parte, los acuerdos entre prestamistas y prestatarios determinaron que muchos de los créditos brindados por el Banco Agrícola terminasen impagados. Esta situación incrementó una mora que, para la década de 1980, ya era insostenible (Morales y Sachs, 1989: 68). También es importante resaltar que, a pesar de los múltiples intentos, nunca fue posible consolidar la exportación de productos agrícolas. Así, con la excepción de un breve lapso –desde fines de la década de 1960 hasta inicios de la siguiente–, los productos agrícolas del Oriente no pudieron hacerse competitivos en los mercados internacionales.

Más allá de los fracasos de exportación en el sector agrario, la Marcha al Oriente permitió ampliar la canasta exportadora por otra vía: fomentando y consolidando la industria hidrocarburífera.

Gráfico 4. Producción e importación de arroz (tons.), 1952-1961

Producción | Import.

30,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 0

1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961

Fuente: Dirección Nacional de Informaciones (1962: 178).

Gráfico 5. Producción e importación de azúcar (tons.), 1951-1961




Fuente: Dirección Nacional de Informaciones (1962: 165).

Los inicios de esta industria en Bolivia se remontan hacia finales del siglo XIX y principios del XX. A pesar de su temprano inicio, no fue sino en 1925 que comenzó la extracción efectiva de petróleo (Royuela, 1996). Los niveles de producción iniciales fueron sumamente reducidos, y se mantuvieron estancados hasta 1932, con 29.6 miles de barriles de promedio anual. Debido a la demanda generada por la Guerra del Chaco, a partir de ese año los niveles de producción comenzaron a expandirse.

Esta tendencia al alza se mantuvo de forma más o menos continua hasta finales de la década de 1940. Posteriormente, la producción se estabilizó en torno a los 600 mil barriles anuales. De todas maneras, esta cantidad aún era pequeña, y recién en 1954 la extracción de petróleo alcanzó una mayor relevancia. Ese año, gracias a la voluntad política del Gobierno del MNR –expresada mediante la transferencia de divisas desde la minería-, las inversiones en el sector se incrementaron notablemente, y con ello también los niveles de producción. El valor de la producción de 1954 triplicó el de 1953, permitiendo la autosuficiencia del país en términos petroleros.

Sin embargo, las limitaciones fiscales del Estado impidieron el incremento sostenido de las inversiones estatales. Esto hizo necesario abrir el sector a las inversiones externas. Respondiendo a esa necesidad, entre 1956 y 1958 se terminó de consolidar el denominado "Código Davenport". Esta medida, que para muchos representó la rendición de la Revolución Nacional frente al capital externo, sin duda fomentó en una gran medida el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en el país. Una muestra de esto es la relación entre la producción estatal y la privada durante la década siguiente. La producción petrolera de YPFB se mantuvo estable entre 1956 y 1968, en torno a los 3 millones de barriles anuales. En cambio, la producción privada, cuya expansión recién se inició en 1960, apenas tardó seis años en alcanzar a la estatal. Este incremento se explica básicamente por la presencia de una subsidiaria boliviana de la tercera empresa petrolera más grande del mundo: la Gulf Company. La producción de esta empresa creció de forma tan significativa en 1967, que su nivel de producción fue cuatro veces superior al de YPFB (Klein y Peres-Cajías, 2014).

Pronto surgieron tensiones entre la Bolivian Gulf Company (BOGOC) y el Estado nacional, pues este dudaba de la transparencia de la empresa y sus aportes impositivos. Finalmente, en 1969 se determinó la nacionalización de la BOGOC. Con esto, YPFB adquirió los campos de la empresa, lo que inicialmente se tradujo en un embargo temporal. El embargo trajo consigo una importante reducción en la producción nacional de petróleo. Pero, una vez solucionado, la fortalecida YPFB consiguió igualar y superar los niveles de producción generados por BOGOC.

Gráfico 6. Producción de petróleo (miles de barriles) y de gas natural (millones de pies cúbicos), 1952-1985



Fuente: INE (1997).

El incremento de la producción de YPFB tan solo fue temporal. Luego de alcanzar niveles récords en 1973, su producción petrolera tendió a reducirse de manera constante. El retroceso se detuvo hacia 1982, pero tampoco se produjo un incremento significativo, y la producción se estancó en un nivel similar al alcanzado antes de la nacionalización. Este estancamiento sucedió a pesar de un nuevo cambio en la legislación petrolera (1972), que permitía una vez más la llegada de capitales exteriores.

La consideración del crecimiento de la producción de petróleo es central, pues también indica la capacidad que tenía el país a la hora de producir productos derivados del petróleo, vitales para el funcionamiento de la economía –gasolina, diesel, etc. En Bolivia, si bien la producción de estos derivados fue limitada hasta mediados del siglo XX, esta experimentó un incremento constante a partir de 1954. Entonces, aun cuando el crecimiento se ralentizó un poco hacia la segunda mitad de la década de 1950, este volvió a acelerarse desde inicios de la década siguiente y se mantuvo hasta casi 1980. Sin embargo, a partir de ese momento –y en coincidencia con la producción de petróleo crudo– la producción se mantuvo estancada o, al menos, fue incapaz de superar los niveles alcanzados previamente (Klein y Peres-Cajías, 2014).

Los registros de la producción de gas natural comienzan en 1952. Su análisis (Gráfico 6) muestra que, a lo largo de la década de 1950, el nivel de producción fue bajo. Pero la producción lentamente comenzó a expandirse en la década de 1960, en sintonía con el inicio de pequeñas exportaciones hacia la Argentina. Este incremento no se explica tanto por la tendencia de producción creciente de YPFB, sino sobre todo por el incremento de la producción privada de 1966 –concretamente por la intervención de BOGOC. Por tanto, al igual que en el caso del petróleo, es posible afirmar que la apertura a la inversión privada permitió incrementar de forma muy notoria la producción de gas natural.

En 1967, BOGOC firmó un contrato de venta de gas por 20 años con Gas del Estado, de Argentina. Luego conformó la sociedad Bolsur con William Brothers & Co. Esta sociedad obtuvo la concesión para la construcción de un nuevo gasoducto a la Argentina (Miranda, 1999: 253). Con la nacionalización de BOGOC –gracias a una exitosa negociación con la Gulf Company y con los financiadores del gasoducto–, YPFB pudo hacerse cargo de todos estos proyectos. Con todos estos beneficios, YPFB fue el responsable exclusivo del considerable incremento de la producción de gas natural en la década de 1970. Sin embargo, la producción de gas natural tendió a reducirse hacia finales de aquella década; de hecho, no fue hasta 1986 que se recuperó la tendencia al alza.

## A modo de conclusión: el proceso entendido desde la interacción de los agentes y no desde su naturaleza

Al igual que sucede con varios aspectos relativos a la revolución de 1952, la valoración del impacto económico que esta tuvo sobre la sociedad boliviana se halla muchas veces impregnada de apreciaciones pesimistas. Las calificaciones como "la revolución inconclusa" o "la revolución traicionada" son particularmente elocuentes en ese sentido. Naturalmente, diferentes indicadores invitan a tal pesimismo, y el presente texto ha resaltado alguno de ellos. Por ejemplo, se pudo ver que, hacia 1985, el PIB per cápita boliviano se ubicaba en niveles muy cercanos a los de 1952. En otras palabras –y desde un punto de vista económico–, Bolivia se hallaba en los mismos niveles que la revolución había querido superar.

Sin embargo, en el presente texto también se han resaltado los importantes cambios económicos que esta "vuelta al punto de partida" generó, y que no pueden ser ignorados. Un ejemplo de esto es la liberalización de la mano de obra que trajo consigo la Reforma Agraria. Otro ejemplo importante es la diversificación de la economía, generada por las inversiones en el Oriente del país. Ambos procesos viabilizaron nuevas oportunidades económicas que complejizaron bastante el tejido económico, y que permitió el empoderamiento económico de muchos bolivianos.

En este sentido, en el texto se ha hecho énfasis en que una de las mayores limitaciones del Capitalismo de Estado no radicó tanto en la naturaleza de la nueva estrategia económica, sino en la imposibilidad de hacerla sostenible. En efecto, una de las particularidades de la expansión estatal en Bolivia durante este periodo radicaba en el fuerte contraste existente entre las responsabilidades

impuestas sobre el Estado y su débil capacidad fiscal (Sachs y Morales, 1989: 63-64). Paradójicamente, esta estrategia económica, que buscaba un desarrollo "hacia adentro", solamente fue sostenible cuando pudo acceder al financiamiento "desde afuera". El momento que las donaciones externas o el endeudamiento externo desaparecieron, el Estado tuvo que recurrir a los créditos del Banco Central. Pero estos, en lugar de dinamizar la economía, generaron una serie de desequilibrios macroeconómicos. Pronto, estos se tradujeron en una caída considerable de la producción y en la ampliación de la brecha entre la economía nacional y "economías desarrolladas".

Entonces, la pregunta que queda por responder es la siguiente: ¿por qué el Estado boliviano fue incapaz de cubrir esta brecha entre obligaciones y disponibilidades fiscales? Sin duda, una revisión de la historiografía boliviana o de los argumentos más frecuentes del saber común ofrecerá respuestas en las que determinados agentes económicos serán identificados como los culpables de esta brecha. Por ejemplo tanto los estudios y trabajos como las personas entendidas en el tema remarcan muchas veces que la brecha entre gastos e ingresos fue resultado de la evasión impositiva de las clases altas bolivianas. Sin embargo, en otros trabajos (Barragán y Peres-Cajías, 2007; Peres-Cajías, 2013) hemos demostrado que este tipo de acercamientos se basan muchas veces en supuestos, y no así en hechos comprobados.

Otro argumento dice que, dadas las particularidades culturales y étnicas de muchos de los habitantes del país, el Capitalismo de Estado era una estrategia económica destinada a fracasar. Sin embargo, creemos que este tipo de argumentos tienen la creencia errónea de que las culturas tienen una esencia que, además, es constante a lo largo del tiempo; olvidan también que las prácticas culturales pueden verse afectadas por los incentivos económicos que genera el mercado (Sen, 2000).

Así, los enfoques previamente comentados tienden a concentrar el análisis en el impacto de las decisiones que determinados individuos –o grupos de individuos– tienen sobre la economía. Si bien estos análisis son necesarios, creemos que también es crucial analizar el impacto que las decisiones de unos individuos tienen sobre las decisiones de otros individuos. También es necesario estudiar el impacto que esta interacción puede tener sobre la economía, pues toda estrategia económica se implanta en una sociedad en la que rige un campo de fuerzas –interactivo y dinámico a lo largo del tiempo–, y este campo bien puede facilitar el logro de determinados objetivos u obstaculizar el de otros.

En efecto, según varios economistas, el éxito de cualquier modelo económico puede verse determinado en gran medida por si se logran o no algunos "acuerdos mínimos" entre los diversos agentes que interactúan en ese campo de fuerzas. Por ejemplo, Crafts y Toniolo (1997) sostienen que, luego de la Segunda Guerra Mundial, el éxito de la economía europea occidental estuvo determinado en gran medida por los acuerdos alcanzados entre trabajadores, empresarios y el Estado.

¿Existió tal tipo de acuerdo entre la nueva clase dirigente de Bolivia, el fortalecido sector obrero/campesino y la nueva clase empresarial? ¿Fue un acuerdo creado en base a objetivos comunes de largo plazo, o más bien fue uno tendiente a corregir problemas de corto plazo? ¿Cuáles eran los incentivos políticos y económicos que aseguraban el cumplimiento de los acuerdos por parte de cada uno de los tres actores mencionados? Creemos que la respuesta a este tipo de interrogantes, en los que prima el análisis de la interacción de los agentes, brindará mayores luces para entender las diversas paradojas económicas generadas durante el Capitalismo de Estado.

# V. Reforma agraria: balances, perspectivas y nuevos enfoques

Carmen Soliz

## Introducción

El 2 de agosto de 1953, el Presidente de la República Víctor Paz Estensoro, líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), promulgó el decreto de Reforma Agraria. Este histórico decreto, que abolía el latifundio y el pongueaje, fue aprobado casi 16 meses después de que el MNR tomara el poder, como parte de un programa de reformas que incluía la nacionalización de las minas y el sufragio universal. El decreto se proclamó en un ambiente de masiva movilización en el área rural, en la que los campesinos –especialmente los del valle de Cochabamba y del altiplano de La Paz– tomaron el control de numerosas haciendas (ver, por ejemplo: Patch, 1961; Dandler, 1969; Malloy, 1970; Carter, 1971).

Numerosos trabajos, al referirse al proceso de la Reforma Agraria, han puesto especial énfasis en la firma del decreto o en los primeros dos años de la revolución, cuando se tenían noticias de la confiscación de haciendas en el campo. En este trabajo proponemos una mirada de más larga data sobre este proceso, partiendo de los debates políticos previos a la revolución de 1952 para analizar –desde distintas perspectivas– las políticas de aplicación de la Reforma.

Como vimos en la primera parte de este tomo (1920-1952), las luchas indígenas y campesinas por el acceso a la tierra tienen una larga historia previa a la revolución de 1952. De hecho, el lema "reforma agraria" fue ampliamente utilizado en los debates políticos de fines de la década de 1930, y especialmente de 1940. En el siguiente acápite analizaremos cuáles fueron los términos y las características de ese debate. ¿Qué significaba implementar una reforma agraria para los intelectuales nacionalistas (MNR) o izquierdistas (PIR) de la década de 1940? ¿En que se diferenciaban o asemejaban estas propuestas a la Reforma que se impondría en la década siguiente? En un tercer acápite, denominado "Celebraciones, avances y balances", analizaremos la valoración del MNR sobre sus primeros años en el Gobierno y, especialmente, su propia evaluación sobre la Reforma. Contrastaremos esta mirada con la evaluación de otros autores sobre este mismo proceso.

En el cuarto acápite, "Escudriñando paradigmas", intentaremos desentrañar cuáles fueron los ejes ideológicos y teóricos que ordenaron los propios estudios sobre Reforma Agraria. Así, en lugar de pensar los estudios de dicha Reforma como trabajos neutros u objetivos, en este acápite se explorarán las preguntas y las visiones políticas que inspiraron estos trabajos. Esta sección constituirá también un balance de los caminos que aún quedan por explorar sobre este tema.

En los dos últimos acápites, "Reforma Agraria en tres actos" y el "Baile de los números", revisaremos algunos aspectos menos explorados del proceso de Reforma Agraria. El penúltimo analizará con algunos expedientes de expropiación de latifundios (juicios agrarios), para así examinar el proceso de implementación del decreto. Cada una de la historias ilustra los distintos aspectos de las disputas entre hacendados y campesinos que siguieron a la Revolución Nacional y los dilemas que enfrentaron las autoridades estatales a la hora de consolidar el decreto. En el último se reflexionará sobre la manera en la que se han construido los datos en relación al progreso de la Reforma Agraria y se formularán preguntas sobre algunas cuestiones aún poco exploradas: ¿cómo operó la

redistribución al interior de las haciendas?, ¿qué lógica se siguió a la hora de la redistribución?, ¿quién o quiénes definieron los principios que seguiría la redistribución? Estas distintas entradas para estudiar la Reforma Agraria: revisión de los discursos, debates y proyectos de ley de Reforma, análisis de datos estadísticos y disputas específicas en algunas haciendas, constituyen una invitación para seguir reflexionando sobre este proceso que aún tiene una multiplicidad de aristas por explorar.

## Reforma agraria y "problema del indio" antes de 1952

La idea de promover una reforma agraria no nació con el MNR; de hecho, estuvo presente en el debate político boliviano mucho antes de la revolución de 1952. Por ejemplo, en la década de 1920, intelectuales radicales de izquierda –pioneros del movimiento socialista– como Tristán Marof (Gustavo A. Navarro) y Roberto Hinojosa, proclamaron la consigna de la reforma agraria en el país. Andrey Schelchkov apunta que muchas de estas reflexiones estuvieron influenciadas por las profundas transformaciones políticas que tuvieron lugar en la Unión Soviética: Así, este autor apunta que la idea de estatización de la tierra, como un paso transitorio a su socialización, era bastante popular. Al referirse a Tristan Marof, Schelchkov apunta que su aporte consistió en intentar adaptar la teoría marxista a la realidad boliviana al proclamar: "tierras al indio y minas al Estado." (2009: 7) Schelchkov continúa:

> Citando a Mariátegui, Marof subrayó que el problema indígena no consistía solamente en su educación o instrucción, sino en su liberación efectiva, devolviéndoles tierras que les habían sido usurpadas por blancos y criollos desde los tiempos de la Colonia hasta la actualidad (…). Marof expuso el programa marxista de la revolución, que consistiría en la reforma agraria, la liquidación del latifundio a través de la colectivización de la tierra, la socialización de los medios de producción y, finalmente, la industrialización." (2009: 12-13)

Otro texto fundamental, que debatió la cuestión agraria antes de la revolución, fue el de Alfredo Sanjinés, embajador de Bolivia en México durante la década de 1930. Sanjinés publicó La Reforma Agraria en Bolivia en 1932. En su libro subraya que dos de los mayores problemas de Bolivia residían en el acaparamiento de tierras en pocas manos y en el estancamiento de la agricultura. Sanjinés apunta que lo que Bolivia debía hacer era seguir las últimas tendencias en legislación agraria en Europa y América Latina, donde la propiedad de la tierra estaba sujeta al cumplimiento de una "función social". Aunque Sanjinés no se refiere explícitamente a México –es más, su texto se esforzaba en hablar de "las últimas tendencias agrarias" en el mundo–, es claro que su planteamiento fue influenciado por los debates alrededor del afamado Artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1927.

El texto de Sanjinés, que fue publicado por segunda vez en 1945, incluye una entrevista del autor con León Trotsky, realizada en México. Es probable que uno de los aspectos más interesantes de la entrevista resida en la lectura que el propio Sanjinés hizo del país a partir de las observaciones de Trotsky. Ante la propuesta de Trotsky de "usar" las estructura comunitaria indígena para colectivizar la tierra bajo tuición estatal, Sanjinés anota que, en Bolivia, esta colectivización no solamente encontraría sus límites entre la élite terrateniente, sino entre los propios indígenas, que él describe como profundamente arraigados a su sayaña (parcela de tierra). Para Sanjinés, el indio era "individualista, egoísta y excluyente" (1945).

Tal como sugiere Guillermo Lora, durante los años previos a la Guerra del Chaco (1932-1935) las planteamientos que proclamaban una reforma agraria tuvieron escasa repercusión entre los políticos e intelectuales bolivianos (1980, Tomo 4). Fue después de la guerra, con la crisis económica que sacudió al país, que las élites se vieron forzadas a repensar los modelos políticos y económicos sobre los cuales se había construido el país.

El contexto de la posguerra, el debate político se re-articuló alrededor de tres ejes. El primero incidía en la necesidad de que el Estado tuviera un mayor control del territorio, proponiendo políticas de colonización y poblamiento que desafiaran el andino-centrismo que caracterizaba al país. El segundo discutía la ampliación de la base económica para contrarrestar el peso de una economía mono-productora, fuertemente

trastornada con la crisis mundial de 1929. Y, el tercero enfatizaba la necesidad de frenar la masiva migración rural hacia áreas urbanas, fenómeno surgido en la posguerra.

Con la irrupción de los gobiernos militares socialistas de David Toro (1936-1937) y Germán Busch (1937-1939), las reflexiones de Tristán Marof y Alfredo Sanjinés –antes marginales– se transformaron en el centro del debate nacional. La mayor expresión de este nuevo escenario fue la Convención de 1938, en la que se reformuló la constitución liberal, que había regido al país por más de cuatro décadas. La historiadora Rossana Barragán subraya que el eje central de esta nueva constitución fue otorgarle un mayor rol económico al Estado (2006).

Pese a que en la convención la cuestión agraria fue objeto de arduo debate, el término "reforma agraria" apareció tan solo marginalmente, en el discurso de algunos convencionales como Walter Guevara y Ayala Gamboa. Otros dos convencionales, Gregorio Balcázar y Víctor Paz Estenssoro, plantearon por que la Constitución reconociera que "la propiedad de la tierra estuviera condicionada al cumplimiento de una función social". En el marco de un arduo debate, esta propuesta fue finalmente aprobada, lo que significó un duro golpe para los propietarios rurales (Barragán, 2006; Gotkowitz, 2011).

Por primera vez, la Constitución de 1938 incluyó el denominado "régimen campesino", que reconocía "la existencia legal de las comunidades indígenas". Esta figura jurídica desafiaba los principios liberales que habían regido al país desde la Constitución de 1880. Sin embargo, tal como señala Barragán, la Convención expresó también los límites y frenos políticos de la época. Walter Guevara Arze, influenciado por el pensamiento de Mariátegui, propuso incluir "la problemática del indio y su acceso a la tierra" (2006: 150). La moción fue rechazada en una tensa votación de 49 votos en contra y 36 a favor. Intelectuales y activistas de izquierda criticaron la tenencia improductiva de la tierra, pero se mostraron escépticos a que la solución pasara por su expropiación y redistribución a la población indígena, a la que consideraban en un estadio social, cultural y económico retrasado. Los propios discursos de los presidentes David Toro y Germán Busch y de los activistas políticos más progresistas no cesaban de usar las palabras "rehabilitación" y "civilización" para referirse a los indígenas en sus discursos.

El rol de intelectuales de izquierda en las primeras décadas del siglo fue fundamental para visibilizar la situación de explotación de los indígenas y denunciar las injusticias del modelo liberal, que había seguido el país desde fines del siglo XIX y que no había traído más que la concentración de la propiedad en manos de terratenientes. La crisis económica mundial de 1929 y la guerra del Chaco (1932-1935) lograron que esas denuncias –aún marginales en la década de 1920– sacudieran a las élites bolivianas. Sin embargo, estas denuncias no estuvieron ausentes de contradicciones y representaciones cargadas de racismo. Por un lado, se denunciaba abiertamente el abuso y explotación al que estaban sometidos los indios. Sin embargo, por el otro, se suponía que esta liberación vendría de la mano de la educación y de la superación cultural y moral. Se hablaba de la "redención del indio", pero se cuestionaba su capacidad jurídica y política.

A principios de la década de 1940, los partidos políticos recientemente formados –Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), Partido Obrero Revolucionario (POR) y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)– pusieron la idea de la transformación de la estructura agraria del país sobre la mesa de debate. En septiembre de 1944, los congresistas Víctor Paz Estenssoro y Walter Guevara Arze, del MNR, iniciaron una de las discusiones más interesantes sobre el problema de la tierra, planteando al Congreso una nueva reforma al Régimen Agrario inscrito en la Constitución. Primero, Paz y Guevara plantearon el derecho de los campesinos –especialmente de los colonos (peones sujetos al trabajo de hacienda)– a conformar sindicatos. Esta propuesta ya había sido aprobada en 1936 e instituida en la Constitución de 1938, pero el presidente Enrique Peñaranda la había revocado en 1943 (D.S. Agosto 23, 1943). Segundo, ambos congresistas propusieron que los colonos que estuvieran trabajando sus parcelas por más de tres años no pudieran ser desalojados por el propietario sin previa indemnización. Por último, propusieron un plan de promoción de las comunidades indígenas a partir de la conformación de cooperativas (El Diario, 28 de Agosto de 1944).

La propuesta fue debatida en el Congreso Nacional, y su más aguerrido opositor fue el

diputado Franz Tamayo, reconocido escritor y orador boliviano. Tamayo consideró que el proyecto sería "el primer paso a la disolución del pueblo boliviano". Arguyó que, aunque él siempre había defendido "la causa del indio", Paz y Guevara se equivocaban al impulsar políticas foráneas a la realidad del país, influenciadas por corrientes mexicanas o peruanas. Tamayo apuntó lo siguiente:

> …el indio está profundamente ligado a la tierra, pero carece de toda noción de propiedad (…), conformar cooperativas a partir de comunidades indígenas no traería otra cosa que el fracaso (La Calle, 30 de Noviembre, 1944).

Por su parte, Raúl López Videla, presidente de la Sociedad Rural Boliviana, advirtió sobre los nocivos efectos económicos que tendría la aplicación de una propuesta de estas características: "si los propietarios no cuentan con seguridad jurídica, la producción agrícola que abastece a las ciudades se verá seriamente comprometida". Para Videla, limitar el derecho de los propietarios a desalojar a los colonos era otorgarles a los campesinos tácitamente la copropiedad. Reconocer la propiedad comunitaria era desandar el camino que había consolidado Bolivia desde el siglo pasado, cuando el país emprendió un proceso de ex vinculación para otorgarles la propiedad individual a los indígenas (1874). Por último, argumentó que sindicalizar a los campesinos –una práctica copiada de afuera– no tendría cabida en una masa analfabeta (El Diario, 2 de Septiembre de 1944).

En noviembre de 1944, Víctor Paz Estenssoro defendió la propuesta ante el parlamento, arguyendo que el proyecto tan solo pretendía regular las relaciones entre propietarios y colonos. Paz aseguró que Tamayo y la Sociedad Rural Boliviana (SRB) magnificaban los alcances de la propuesta, pues esta no pretendía cuestionar el derecho de propiedad, sino simplemente limitarla para que cumpla una función social, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de 1938. Paz justificó su proyecto acudiendo a ejemplos del Imperio romano, en un denodado esfuerzo por desvincular su propuesta de un proyecto socialista y de sus posibles influencias apristas y mexicanas:

> La reforma agraria no implica implementar un programa socialista, sino más bien uno liberal porque de lo que se trata es de superar la etapa feudal, la cual ya ha sido abolida en otros países. Lo que propongo no es devolver la tierra a sus antiguos propietarios [de lo que Tamayo lo acusaba], sino dar la tierra a quien la trabaja. (…) No pretendo socavar el derecho de los propietarios, sino simplemente proteger el derecho de los pobres rentistas, lo que permitiría incrementar la productividad (Paz, 1955: 303-316).

Aunque la propuesta de Paz Estenssoro no tuvo éxito, su proyecto permite visibilizar los argumentos –tan conservadores– que predominaban el debate político en Bolivia tan pocos años antes de la revolución. Los proyectistas ponían énfasis en la necesidad de regular las relaciones entre patrones y propietarios, de defender los derechos de los colonos –a partir de la conformación de sindicatos en el campo– y de introducir regulaciones que limitaran el arbitrio de propietarios sobre los colonos. Sin embargo, no se referían en absoluto a una propuesta de redistribución de tierras.

La propuesta del MNR no prosperó. Sin embargo, un año más tarde, en mayo de 1945, el Gobierno del presidente Gualberto Villarroel promovió la organización de un Congreso Indígena. Como afirma Laura Gotkowitz, este fue un evento inusitado en Bolivia y en América Latina, pues era la primera vez que se realizaba congreso indígena a nivel nacional. Aunque en el pasado se habían realizado congresos indigenistas –como el de Patzcuaro, México en 1940–, estos eventos usualmente convocaban a intelectuales y activistas políticos para hablar sobre la situación de los indígenas. En cambio, el congreso indígena de 1945 convocaría a casi 1200 indígenas para debatir y exponer sus demandas (2007: 193-194).

A pesar de la intensa movilización en al área rural para la organización del congreso, la agenda fue preestablecida por el Gobierno. Los temas incluidos en el Primer Congreso Indígena Boliviano fueron: 1) Supresión de los servicios gratuitos; 2) Legislación indigenal y la cuestión comunal; 3) Educación Indígena; 4) Cooperativas agrícolas y ganaderas; 5) Policía Rural; y 6) Reglamentación del trabajo campesino (1945).

En conjunto, las ponencias daban cuenta de la agenda del Gobierno sobre la problemática indígena. Esta se concentraba, por una parte, en las condiciones de trabajo de los pongos en las haciendas; por otra, en propuestas para atender

"el atraso de las comunidades". En el corto plazo, la agenda de gobierno apuntaba a obligar a los propietarios a pagar por cada uno de estos servicios. En el largo plazo –y siguiendo el Código Laboral de 1938–, el Gobierno proponía elaborar un Código Laboral Agrario en el que se reglamentaran las relaciones entre propietarios y trabajadores. Como han anotado autores como Silvia Rivera (1984), Roberto Choque (2003) y Esteban Ticona (2003), esta agenda, hacía caso omiso de las demandas de líderes de comunidades indígenas que pedían la restitución de tierras de comunidad desde fines del siglo XIX.

El congreso provocó un enorme impacto en la sociedad. La revista Bolivia, que realizó una crónica del evento, entrevistó a Francisco Chipana Ramos –Presidente del Congreso–, que explicó el contenido de los decretos dictados por el Gobierno, que emanaban de dicho congreso. La entrevista permite ver el tono político de la época y la manera en la que los líderes indígenas percibieron los decretos y su relación con el Estado y el Gobierno.

El congreso fue recibido con escepticismo –e incluso con franca resistencia– por parte de los partidos conservadores, pero también por los partidos de izquierda. José Antonio Arze, jefe del PIR, criticó duramente el Congreso Indigenista. El título de su texto sintetiza bien la perspectiva que tenía sobre el Gobierno: Bolivia, bajo el terrorismo nazi fascista. Arze acusaba al presidente Villarroel de haber perseguido a la oposición, incluidos los líderes obreros, de quienes pregonaba su respaldo. Arze calificó al congreso como una comedia, una parodia que no sería capaz de resolver de forma real "la miseria feudal de los indios" (1945).

Por su parte, Ricardo Anaya, subjefe del PIR, publicó otro texto desde Santiago de Chile, en contra del que tildaba El demagógico Congreso Indigenal. Para Anaya, el congreso no era un esfuerzo real por entender la problemática campesina, sino un mecanismo para frenar la sublevación campesina:

> Ante la amenaza de una sublevación campesina, se apresuró a detenerla convocando de inmediato a un congreso indígena (…). Pero antes (…) los Ministros de Gobierno, Agricultura y Trabajo, acompañados de una numerosa cohorte de funcionarios, realizaron viajes a las provincias de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Sucre y Tarija,

Recuadro 63

### Fragmentos de la entrevista a Francisco Chipana Ramos, mayo de 1945

**Periodista:** ¿Estás satisfecho del Congreso que has presidido?

**Chipana Ramos:** Estoy feliz por los cuatro decretos firmados por el Presidente de la Republica… Ahora podremos trabajar tranquilos y sin molestias. Pero lo que más nos ha devuelto la confianza es que ahora seremos libres. Han hecho desaparecer nuestra condición de esclavos. Los cuatro decretos satisfacen nuestras reclamaciones que hacíamos desde cuando llegaron los españoles. Antes nos encontrábamos por cientos de años como animales. Sin leyes, sin garantías, solamente como bestias de carga y trabajo.

**Periodista:** ¿Cuáles son los decretos de que nos hablas?

**Chipana Ramos:** Son cuatro, señor: el primero que dice que habrá un Código de Trabajo Agrario que estará a cargo de los ministros de Trabajo, Salubridad, Previsión Social, Agricultura, Ganadería y Colonización. El trabajo obligado que teníamos en la hacienda no pasará de cuatro días semanales. No nos obligarán a trabajar gratis ni en otras haciendas. Los pastores no estarán obligados al trabajo de hacienda. Cuando el patrón desee que se hagan trabajos extras deberá pagar jornales. Esta ley de trabajo agrario estará lista a fin del año 1945. La segunda ley nos protege en los servicios del campesinado. Trabajaremos con gusto para la hacienda porque, siendo dueños de nuestras cosechas, podremos disponer de ellas. Ya no habrá entregas obligadas de corderos, de lana, aves de corral y otras en forma gratuita. La otra ley dice que tendremos escuelas por todas partes, principalmente donde hay empresas agrícolas… fundos o haciendas. Y la última ley, la más importante se refiere a la muerte del pongueaje. Esto quiere decir que ya no trabajaremos por semanas o meses en las casa del patrón como pongos en forma gratuita… Dese ahora nuestros servicios serán pagados como en cualquier otro oficio o trabajo.

Fuente: Revista Bolivia. Mayo, 1945: 29-31.

> como apaciguadores de la rebeldía campesina. En todos los lugares por donde pasaron, no se olvidaron de hacer promesas (…). Tampoco se descuidaron de dejar (…) en todos los sitios visitados piquetes de carabineros perfectamente armados para tener a raya a los campesinos y someterlos a la autoridad de los hacendados. Los personeros del Gobierno, al reconocer públicamente haber establecido la vigilancia policiaria en esos centros, la justificaron bajo el pretexto de que esos piquetes servirían para regular las relaciones entre patrones a indígenas colonos (1945: 39).

Para Anaya, el congreso había significado, en realidad:

> …el desahucio de las aspiraciones campesinas, pues los 1200 delegados indios (…) permanecieron celosamente custodiados por las autoridades de policía durante todo el tiempo que funcionó el congreso (Ibíd.).

Ricardo Anaya criticó que las ponencias del Congreso se hayan circunscrito a temas como: "la abolición del pongueaje, la creación de escuelas rurales en las haciendas y comunidades, definición de obligaciones y deberes entre patronos a indígenas y otras cuestiones de menor importancia" (Ibíd.: 39-40) pero que se hubiera eliminado una cuestión fundamental: "la cuestión de la tierra". (Ibíd.: 39-40).

Aunque la agenda formal del Gobierno de Villarroel efectivamente silenció las demandas indígenas por reivindicación de tierras, Laura Gotkowitz ha demostrado que la organización misma del congreso impulsó una agenda propia entre los líderes indígenas, que la usaron para articular sus intereses y reivindicaciones en torno a sus demandas por la tierra (2007: 268-306). La sola enunciación de un lenguaje de "reivindicación del indio" –respaldado oficialmente desde el poder central– se convirtió en un poderoso instrumento político para los más de 1200 líderes indígenas, que retornaron a sus comunidades con una postura de franca confrontación contra el poder que pregonaban los propietarios y las autoridades provinciales en el área rural.

Las conclusiones del Congreso Indígena de 1945 evidencian cuan impensable era para el Gobierno de Villarroel y para el MNR desafiar los principios que garantizaban la propiedad de la tierra. ¿Pero, tenía entonces el PIR una propuesta clara sobre la expropiación del latifundio? En 1945, Ricardo Anaya expuso lo que su partido consideraba una verdadera política agraria:

> El caso de nuestra agricultura es el de una reivindicación total, histórica o de época, desde el grande hasta el pequeño agricultor, que necesita la ayuda y la orientación del Estado. El problema del indio, como lo hemos dicho diez mil veces, es el problema de la tierra, y el problema de la reforma agraria es el de la superación del feudalismo, con un vasto plan de regadío y de tecnificación, que beneficie a todos cuantos poseen hoy tierras, grandes o pequeñas, pues, en esta etapa de la revolución democrática burguesa, la primera tarea consiste en poner los campos en condiciones de producir lo suficiente para alimentar a nuestra población, consiste en habilitar tanto a los propietarios individuales como a las comunidades indígenas para usar máquinas y aplicar los conocimientos científicos, en organizar las granjas colectivas, en otorgar a los pequeños campesinos facilidades para hacer más eficiente la explotación de la tierra. Cuando las comunidades, las granjas colectivas y las cooperativas de producción, con ayuda de los elementos que nos brinda el progreso, comiencen a producir en gran escala, intensifiquen el cultivo y rebajen sus costos de producción, los propios latifundistas se verán avasallados por este formidable proceso y tendrán que entrar al ritmo de la civilización (1945: 42)

Notablemente, el PIR tampoco parecía desafiar las relaciones de propiedad. Aunque al principio del texto Anaya anunciaba que el problema del indio era el problema de la tierra, su propuesta se difumina en referencias a la tecnología, el progreso y la ciencia, elementos que, se suponía, mágicamente resolverían el problema de acceso a la tierra y que transformarían a Bolivia: de una economía feudal en una economía moderna. En otras palabras, los intelectuales progresistas de 1940, que tan celosamente se disputaban las consignas de "reforma agraria" y "tierras al indio", en realidad tenían propuestas poco concretas sobre expropiación y redistribución.

En la década de 1940, las proclamas reformistas –como "la tierra para quien la trabaja"– se extendieron y se popularizaron no solo entre los miembros de partidos políticos, sino también dentro del movimiento campesino. Sin embargo, los alcances de esa redistribución o los

mecanismos de indemnización eran aún problemáticas sin respuesta. Un notable ejemplo de esto es el hecho de que el propio Partido Socialista, en su programa político, estableciera que la reforma agraria debería consistir en:

> La asignación de su auténtico rol económico social a la tierra, conceptuándola como la fuente básica y permanente de la riqueza. Autoabastecimiento agropecuario. Ayuda del Estado a la producción agraria en todas sus categorías, tanto en lo técnico como en lo económico, a cambio de la correspondiente participación de aquel. Expropiación, previo pago de su justiprecio, de tierras y fundos declarados de necesidad y utilidad sociales [cursivas mías]. Anulación del latifundismo en sentido de utilizarse el excedente de tierras cultivables para trabajo y sustento del pueblo. (Bases y programa de acción La Paz Bolivia, octubre de 1944).

La moderación de estas propuestas contrasta con la radicalidad del proceso que se iniciaría en 1953, en el que no solamente latifundios, sino incluso medianas y pequeñas propiedades –así como fincas con inversión en maquinaria agrícola– serían expropiados.

## Celebraciones, avances y balances

El decreto de Reforma Agraria, firmado en agosto de 1953, puso fin al sistema de pongueaje y colonato que regía en las haciendas y decretó la expropiación de los latifundios. La implementación misma del proceso de redistribución de tierras, requirió mucho más tiempo. En parte, la lentitud del proceso se debió en la necesidad del Gobierno de crear nuevas instituciones estatales que se harían cargo de poner en marcha el proceso de expropiación. A nivel nacional, el Gobierno creó el Ministerio de Asuntos Campesinos y el Servicio Nacional de Reforma Agraria. Los juzgados agrarios y juntas rurales estarían a cargo de los niveles provinciales. La sola implementación de esta estructura estatal tardó alrededor de un año, y fue recién en agosto de 1954 cuando las juntas rurales y los juzgados agrarios comenzaron a recibir demandas por expropiación.

De todas maneras, el Gobierno se esforzó por mostrar resultados inmediatos. Así, Víctor Paz Estenssoro, en su informe al Congreso de 1955, hizo una evaluación de los primeros años de aplicación de la Reforma Agraria. Su informe mencionaba el avance con relación a redistribución de tierras, pero principalmente fijaba su atención en las políticas dirigidas a potenciar planes de desarrollo y diversificación (Fundación Cajías, 2002). El informe dedicaba un solo punto a la problemática de redistribución de tierras y expandía su atención en otros temas, como el fomento agrícola y ganadero, la creación de granjas experimentales, ingenios, cooperativas, viveros y el fomento –vía créditos norteamericanos– a las políticas de colonización. El siguiente recuadro sintetiza algunos de los puntos que Paz Estenssoro subrayó con relación al desarrollo agrario en 1955:

Recuadro 64

### Informe de Paz Estenssoro al Congreso de 1955

**Principales puntos del informe:**

- *Entrega de 4.707 títulos,* que corresponden a una extensión de 42.265 hectáreas.
- *Aumento de la producción* de trigo, arroz, café, maíz, café, lana y cacao.
- *Incentivo a nuevos cultivos*: La Corporación Boliviana de Fomento, con fondos provenientes de la Ayuda Americana, inició los trabajos de riego en Villamontes para abrir al cultivo de algodón, soya y maní entre 5 y 9 mil hectáreas de tierra.
- Constitución de *cooperativas agropecuarias*. En el transcurso de 1955 se crearon 280.
- *Mecanización del agro*. Con cargo al Crédito Markus se importaron 50 equipos agrícolas para su utilización en el Altiplano. 230 tractores y las herramientas agrícolas fueron importados por el Ministerio de Agricultura.
- *Nuevos centros de población*: Patamanta, en la Provincia Los Andes; Irpachico y Sencata en la Provincia Ingavi, Loma Larga en la Provincia Vallegrande y Ana Rancho de la Provincia Sud Cinti.
- *Ingenios* La Bélgica, La Esperanza y Guabirá; planta alcoholera de San Aurelio.
- *Implementación de viveros* en Yungas y Santa Cruz para fomentar el cultivo del café.
- *Instalación de molino* de harina de trigo (Tarija) y molino de yuca (La Guardia, Santa Cruz).

- *Creación de las Estaciones Experimentales* del Servicio Agrícola Interamericano. SAI desbosçó 2.254 hectáreas en Santa Cruz.
- *Fomento ganadero* a cargo de la Corporación Boliviana de Fomento en Reyes, Beni.
- *Fomento ganadero* en provincias de Cordillera, Azero y Chaco, en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

**Fomento al Banco Agrícola:**

- Reorganización y recapitalización de Banco Agrícola con nuevos aportes provenientes de los fondos de contrapartida de la Ayuda Americana y que, a la fecha, alcanzan los Bs. 2.005.600.000.
- El Banco Agrícola concedió diversos préstamos a agricultores por un valor de Bs. 122.456.000 en Santa Cruz, Bs. 17.000.000 en Cochabamba, y Bs. 53.857.000 en La Paz.

**Proyectos de Colonización**

- Traslado de colonos voluntarios del valle de Cochabamba a la región de Montero y nativos del valle y del Altiplano combinados con un pequeño porcentaje de oriundos de Santa Cruz se han instalado en el área Norte de ese Departamento. Traslado de un nuevo grupo de colonizadores mineros y campesinos a la región de Cotoca, en Santa Cruz.
- Establecimiento de campesinos de Okinawa en la zona de Santa Cruz.
- La colonia de inmigrantes italianos instalada en la región de Guabirá, ha cumplido un año de vida extendiendo sus cultivos hasta las 150 hectáreas.

Fuente: Fundación Cajías, 2002.

Décadas después, esta mirada optimista sobre los avances de la Reforma Agraria, fue cuestionada por trabajos como los de Xavier Albó (1979) y Gregorio Iriarte (1979). Uno de los principales cuestionamientos fue el hecho de que el "crédito agrícola supervisado", controlado por la Agencia de Gobierno de los Estados Unidos, no favoreció a los pequeños productores, sino a los grandes empresarios agrícolas del Oriente boliviano. También cuestionaron que la denominada "ayuda norteamericana", que promovía la importación de alimentos desde Estados Unidos, hubiera terminado desincentivando el desarrollo agrícola nacional. Estos autores también criticaron que las políticas de colonización del Oriente no contaran con suficiente apoyo estatal; de hecho, los denominados campesinos colonizadores quedaban librados a su suerte. Por último, criticaron la cuasi-inexistente asistencia estatal en las zonas del altiplano y de los valles, donde se expandió el minifundio. Los campesinos cayeron bajo el control de los "rescatadores", prestamistas o compradores, que comercializaron sus productos y así dominaron la economía de los nuevos productores.

En su clásico trabajo, ¿Bodas de Plata? o Réquiem por una Reforma Agraria, Xavier Albó apunta los rasgos positivos y negativos de la Reforma. Entre los positivos, subrayó su evidente carácter redistributivo, llevado adelante con un costo relativamente bajo. También señala cómo la "élite terrateniente había quedado deshecha" después de la revolución y subraya el rol político protagónico que adquirieron los sindicatos campesinosa partir de la revolución (1979: 19). Finalmente, destaca el empuje que adquirió la educación rural a partir del ascenso del MNR al Gobierno.

Entre sus más agudas críticas, Albó apunta algunos de los objetivos que la Revolución Nacional y la Reforma Agraria fueron incapaces de alcanzar. Por un lado, el Estado mostró sus grandes limitaciones para impulsar el desarrollo de las cooperativas campesinas agropecuarias. Por el otro, los créditos del Banco Agrícola beneficiaron solamente a grandes y medianos propietarios del Oriente del país, excluyendo a los campesinos de tierras altas. En su texto, Albó criticaba la extrema parcelación de la tierra en los valles y el Altiplano del país –precisamente las regiones en las que se llevó a cabo la redistribución de tierras. Este minifundio vino acompañado de pobreza y de la continua migración del campo hacia las ciudades y el Oriente del país.

En síntesis, el principal desacuerdo de Albó con la Reforma Agraria es que, pese a que formaba parte del proyecto nacionalista revolucionario de modificar la estructura de clases del país, en los hechos estuvo muy lejos de hacerlo. Finalmente, el autor pondera los limitados efectos de la política de colonización, un fenómeno que resultó ser incapaz de generar el tan anhelado desarrollo agrícola y que, en muchos casos, conllevó más bien al maltrato de las poblaciones indígenas del Oriente (1979).

## Escudriñando paradigmas

En general, las discusiones en torno a las reformas agrarias en Bolivia y en América Latina estuvieron y están enmarcadas en debates políticos mayores, en proyectos, visiones e imaginarios de desarrollo y progreso. En este acápite nos interesa revisar algunos de estos debates, que delinearon los estudios sobre Reforma Agraria en Bolivia. Así, más que hacer una recuperación bibliográfica, recorreremos algunas de las preguntas que guiaron estos estudios.

En Bolivia, los trabajos sobre la Reforma Agraria estuvieron vinculados al menos con tres tipos de debates. Especialmente en la década de 1960, estos estudios analizaban la capacidad que esta había tenido para "integrar al indio a la nación". Los autores se preguntaban en qué medida la Reforma Agraria había logrado incorporar a los campesinos e indígenas al Estado. En la década de 1970 surgió un nuevo debate, centrado más bien en el rol del MNR o de los campesinos en promover la Reforma Agraria. Parte de esta critica tenía sus orígenes en tradiciones marxistas, que se preguntaban por el papel que ambas partes jugaron en la Revolución Nacional. A fines de la década de 1980 y 1990 surgieron nuevas preguntas y nuevas metodologías; estas, más que enfocarse en el partido y sus líderes, privilegiaron las voces de los sectores populares: líderes campesinos y de comunidades indígenas. Esta nueva mirada permitió descentrar el protagonismo del MNR y mirar a la Reforma Agraria como un proceso más complejo y de más larga data.

### Integrar el indio a la nación

A fines de la década de 1950 surgieron dos preguntas fundamentales para muchos de los trabajos que se escribieron sobre este tema:¿en qué medida la Reforma Agraria había sido capaz de transformar la sociedad rural?, ¿en qué medida el acceso de los indígenas y campesinos a la propiedad había logrado modernizar el campo? (ver, por ejemplo, los trabajos de Clark, 1968; LTC/CIDA, 1970; Peinado, 1969; Léons, 1967; Heyduk, 1974; McEwen, 1975).

Uno de los estudios seminales sobre los efectos de la Reforma Agraria en las comunidades del Altiplano fue el conducido por William Carter. En su reconocido trabajo Irpa Chico (1982), Carter compara los parámetros sociales, económicos y políticos entre dos tipos de comunidades: Irpa Chico, una comunidad libre (así eran denominadas las comunidades que nunca estuvieron sometidas al sistema de hacienda), y Vilirico, Huacullani y Rosapata, tres antiguas haciendas.

Tras comparar dichos parámetros, Carter concluye que, una vez puesta en marcha la Reforma Agraria, los parámetros de organización socioeconómica variaron muy poco entre las comunidades libres y las que antes estaban sometidas al sistema de hacienda. En ambos casos, las autoridades tradicionales jugaban un rol clave para la articulación entre la comunidad y el "mundo exterior"; es decir, la relación conlos hacendados, los funcionarios estatales, etc. Antes de la Reforma, los hacendados designaban a esas autoridades tradicionales al interior de la hacienda, pero solo después de consultar con algunos campesinos jefes de familia y de que dicho representante pasara todos los "cargos" religiosos en la comunidad. Según Carter, durante aquel periodo hubo un alto grado de involucramiento de los propietarios en la comunidad, pues estos estaban al tanto de sus costumbres políticas y religiosas (1964).

Pero después de la Reforma Agraria, este sistema tradicional de autoridades pervivió en las comunidades aimaras, y con él los parámetros de elección de estas autoridades. La mayoría de estas autoridades eran escogidas según el prestigio que adquirían al rendir el servicio a la comunidad y el patronaje de las fiestas. Carter observó que no solamente la Reforma Agraria, sino también la educación, lentamente comenzó a desempeñar un papel importante en el sistema de elección de autoridades dentro de las comunidades aimaras. En su evaluación general, Carter apunta que las comunidades seguían fuertemente orientadas a lo local y escasamente articuladas con la política a nivel nacional. En conclusión, Carter afirma que, en términos de incorporación de los indígenas a la nación, los alcances de la revolución y de la Reforma Agraria fueron limitados (1964: 59, 88).

En esta misma perspectiva, conviene mencionar a Daniel Heyduk, quien en su trabajo El sistema de hacienda y la reforma agraria en las tierras altas de Bolivia: un re-evaluación sostieneque, tras veinte años de aplicación de la Reforma Agraria, la estructura socioeconómica existente antes de la revolución se había mantenido casi invariable.

Heyduk apunta que, antes de 1952, algunas regiones –como los valles de Cochabamba y Yungas– estaban altamente articuladas al mercado. Las del altiplano estaban parcialmente articuladas al mercado. Finalmente, las de Tarja y Chuquisaca estaban prácticamente aisladas. Estos parámetros de vinculación con el mercado se mantendrían invariables hasta 20 años después de aplicación de la Reforma Agraria. Basado en esta constatación, Heyduk apunta el limitado efecto que esta tuvo en la transformación del sistema de propiedad de la tierra en la relación de los campesinos con el mercado.

Con relación a la organización política campesina, Heyduk subraya que la estructura de cargos en las comunidades indígenas se mantuvo similar durante y después del sistema de hacienda. Así, aunque los sindicatos se generalizaron (como la forma política de organización entre las comunidades campesinas de ex hacienda), el criterio de selección de autoridades mantuvo muchas similitudes con el sistema que reinaba antes de la Reforma. Como se observa, estos autores coinciden en que la Reforma Agraria fue significativa porque pudo liquidar el latifundio. Pero, a la vez, todos recalcan el escaso impacto que tuvo en la transformación de las condiciones socioeconómicas del área rural. En esa medida, estos autores coinciden en que el objetivo de integrar al campesino al mercado y a la nación tuvo un éxito relativo.

## Los debates sobre los orígenes de la revolución, conciencia política campesina y aculturación

Desde la promulgación del decreto de Reforma Agraria en 1953, los líderes del Gobierno –Víctor Paz, Hernán Siles, Walter Guevara Arze– pregonaron el rol que había jugado el MNR en la expropiación y distribución de la propiedad en el área rural. Sin embargo, desde la década de 1960, algunos investigadores comenzaron a cuestionar ese protagonismo. El historiador Richard Patch (1956), por ejemplo apunta que no fue la iniciativa del MNR, sino la presión de los campesinos –a partir de tomas y confiscaciones de tierras–, la que forzó y aceleró el proceso de expropiación de latifundios. Siguiendo esta misma perspectiva, Jorge Dandler (1969) subrayó que, mucho antes de la revolución (a fines de la década de 1930), líderes campesinos con apoyo de intelectuales del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR) fundaron el primer sindicato campesino en Ucureña. Dandler considera que este evento fue fundamental para demostrar la activa politización campesina antes de que el MNR llegara al poder.

Los trabajos de Patch y Dandler concentraron su atención en el valle alto de Cochabamba. Ambos coinciden en que las semillas de la Reforma Agraria nacieron en esta región, para luego extenderse a lo largo del valle y del Altiplano boliviano. Ambos concluyen que la Reforma no fue el resultado de una iniciativa del MNR, sino la respuesta del Gobierno ante la intensa presión social en el área rural. Para Patch, la temprana politización campesina en Ucureña fue el resultado histórico de un contexto regional muy particular. Este autor afirma que los campesinos quechua-hablantes habían mostrado –incluso desde el periodo colonial– una mayor aspiración al mestizaje, especialmente si se la comparaba con otras regiones, como el altiplano. Este carácter regional, tan particular, fue el que permitió un tipo de politización distinta (Patch, 1956).

En respuesta a esta perspectiva de la época, encontramos el estudio del antropólogo Dwight Heath, quien afirma que innegablemente la Reforma Agraria fue producto del liderazgo del MNR. Para precisar sobre este debate, Heath señala lo siguiente: "Es poco probable suponer que los indígenas, relegados a una vida de servidumbre y sin acceso a educación, pudieran haber liderado el proceso de reforma agraria" (1969). Además, Heath recuperó los debates políticos de la Constitución de 1938 y los del Congreso de 1944, en los que intelectuales como Walter Guevara y Paz Estenssoro ya habían comenzado a esgrimir propuestas para reformar el régimen agrario campesino. También subrayó que la sindicalización campesina generalizada fue un proceso post-revolucionario, liderado por el MNR a partir de 1952 (Ibíd.).

Ciertamente, Patch y Heath representan dos puntos de vista opuestos. En alguna medida, estas miradas contrapuestas se deben a que cada uno de estos autores estudió regiones diferentes. Mientras Patch basó su investigación en los valles de Cochabamba, donde se formaronlos primeros sindicatos campesinos, Heath se concentró en el altiplano paceño y

los Yungas, donde el florecimiento de los sindicatos tuvo lugar después de 1952. A pesar de las diferencias, existen argumentos comunes en ambas posiciones: ambas perspectivas coinciden en que la movilización campesina "masiva" no comenzó hasta después de la revolución. Patch postuló que la temprana politización ocurrió únicamente en Ucureña, y debido a características históricas y políticas muy particulares. Las características que Patch señala son un proceso previo de aculturación y un temprano contacto con grupos "no indígenas". Ambos hechos generaron una conciencia política en los campesinos que hubiera sido imposible para el resto de las comunidades indígenas y campesinas. Los trabajos de Patch y Heath encuentran una correlación entre "conciencia política" y "aculturación", pues circunscriben el espacio de la acción política al espacio del sindicato, y de esta manera hacen invisibles a otras formas de acción política.

El reconocido trabajo de Jorge Dandler El sindicalismo campesino en Bolivia, publicado en 1969,emergió como parte de esta polémica. En la misma línea que Richard Patch, Dandler apunta que en Ucureña se dio un proceso de temprana sindicalización. Según Dandler, fueron las características específicas de esta región las que impulsaron dicho proceso: una intensa densidad demográfica y una temprana politización del campo –después de la guerra del Chaco (1969: 45). La crisis económica de 1930 obligó a los grandes propietarios a vender sus tierras a los medianos y pequeños. Muchos de esos compradores eran campesinos que solían ser arrenderos en esas tierras.

Dandler apunta que estos cambios económicos ayudaron a resquebrajar antiguas distinciones entre blanco e indígena, distinciones muy rígidas que sí se mantuvieron en el altiplano. Después de la guerra, algunos campesinos aprovecharon los contactos que habían tejido con intelectuales de izquierda durante el conflicto bélico, y así demandaron la consolidación del primer sindicato agrario. Para Dandler, todo esto fue posible por el rol de mediadores políticos –maestros e intelectuales relacionados con el PIR–, que fueron claves para articular las demandas locales campesinas a nivel nacional.

Con este argumento, Dandler se distanció de Patch, que otorgaba a los campesinos un excesivo liderazgo en el proceso de la Reforma Agraria. Para él, ese liderazgo reposaba más bien en maestros rurales, funcionarios estatales, miembros del PIR y del POR.

Desde diversas perspectivas, y tomando en cuenta distintas regiones del país, gran parte del debate de las décadas de 1960 y 1970 estuvo centrado en los orígenes de la Reforma Agraria y la concientización política del campo. Este debate se enmarcaba en una discusión teórica mayor, en el que se intentaba discernir el rol del partido político (y sus líderes) y el de las masas en el proceso revolucionario. En el marco de este debate, conviene resaltar la mirada insistente de estos autores sobre el caso de Ucureña, la comunidad donde se organizaron los primeros sindicatos campesinos.

El problema con esta perspectiva radica en que estos autores equipararon la politización campesina con la sindicalización campesina. Esa mirada tornó invisibles otras luchas campesinas e indígenas que se expandieron en el área rural, pero que no estuvieron signadas bajo el rótulo del sindicato. Este es el caso, por ejemplo, de las luchas de las comunidades indígenas por la restitución de sus tierras, develadas recién en las décadas de 1980 y 1990. Este fue el rol fundamental de los trabajos del THOA y de historiadores como Roberto Choque, Esteban Ticona, Carlos Mamani, Silvia Rivera y otros posteriores, como los de Pilar Mendieta y Laura Gotkowitz. Como veremos en el siguiente acápite, estos autores –al ampliar los límites del campo político– hicieron visibles las múltiples luchas indígenas y campesinas previas a 1952.

## La revolución y el rol de los subalternos

Una de las críticas más contundentes a la Revolución Nacional de 1952 y a la Reforma Agraria de 1953 fue la establecida por la socióloga Silvia Rivera, en su renombrado trabajo Oprimidos pero no vencidos (1984). Rivera desafió la mirada complaciente que se tenía sobre los sindicatos campesinos y apuntó que, en lugar de ser un instrumento de politización, los sindicatos sirvieron como un medio de control político del área rural. Según Rivera, si antes de la revolución había un pongueaje económico, los sindicatos permitieron ejercer un pongueaje político; es decir, un

mecanismo de manipulación y cooptación de los campesinos.

Rivera también criticó la manera en que el impulso mismo del sindicalismo en el área rural permitió la desarticulación del sistema de autoridades tradicionales, especialmente en el altiplano de La Paz, Oruro y el norte de Potosí, regiones en las que las comunidades indígenas habían logrado sobrevivir hasta mediados de siglo XX. Según Rivera, la política homogeneizadora del MNR, en su intento de "integrar el indio a la nación", desconoció, negó y menospreció el carácter multiétnico de Bolivia (1984).

El trabajo de Rivera –apoyado en los estudios subalternos que surgieron en la década de 1980– cuestiona una escritura centrada en los líderes de la revolución y señala la urgencia por desentrañar la historia de esos actores que la historiografía tradicional había invisibilizado. En esta misma línea, en la década de 1990, autores como Claudia Ranaboldo (1987), José Gordillo (1998), Roberto Laserna, Gustavo Rodríguez y Esteban Ticona (2000), entre otros, publicaron una serie de biografías de los líderes campesinos de la revolución: Sinforoso Rivas, Miguel Veizaga, Juvenal Castro y otros. El objetivo de estos trabajos era rescatar la lucha política de voces y figuras que habían quedado opacados por la llamada "historia tradicional del MNR."

A la par de estas nuevas miradas surgió una nueva tendencia historiográfica en Bolivia, especialmente a partir de la década de 1980, desde el Taller de Historia Oral Andina (THOA). Esta tendencia cuestionó la propia centralidad de la Revolución Nacional y la manera en que la narrativa histórica, concentrada en 1952, había silenciado las luchas que las comunidades campesinas e indígenas habían llevado desde fines de siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

El preliminar trabajo del historiador Ramiro Condarco Morales (1966) narró la feroz insurgencia indígena de 1899 contra la expansión de la hacienda, liderada por Pablo Zarate Willca. Más tarde, Carlos Mamani y Esteban Ticona rescataron el rol político de los caciques apoderados que, durante las primeras décadas del siglo XX, buscaron la recuperación de tierras de comunidad. Por su parte, Roberto Choque develó la insurrección indígena de Jesús de Machaca en 1921 (1986, 2003); Rene Arze exploró el rol de los indígenas durante la Guerra del Chaco (1987). Desde diversas entradas, cada uno de estos trabajos demostró, en contra de la narrativa tradicional del MNR, que el activo rol político de indígenas y campesinos databa de mucho antes de la revolución de 1952.

En esta misma vertiente se apunta el reciente trabajo de Laura Gotkowitz, que analiza las demandas indígenas y campesinas desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Gotkowitz propone que las múltiples insurrecciones indígenas –1899, 1921, 1927, 1947–, las huelgas de brazos caídos en las haciendas y movimientos organizados indígenas –tales como el movimiento de caciques y el Congreso Indígena de 1945– resquebrajaron los cimientos del sistema de hacienda y del poder terrateniente antes de la revolución. Más que la sola insurrección en abril de 1952, fueron estas luchas de larga duración las que permitieron el desmantelamiento de la élite terrateniente. Además, esta autora demuestra que las luchas campesinas e indígenas, que buscaban acceso a derechos políticos y sociales dentro la sociedad boliviana, estuvieron fuertemente articuladas con los programas de líderes nacionalistas como David Toro, Germán Busch y Gualberto Villarroel. Tras observar esta larga lucha de las comunidades indígenas que precedió a 1952, Gotkowitz plantea que en Bolivia "hubo una revolución antes de La Revolución" (2011).

Finalmente, dentro de esta reevaluación de la revolución de 1952 y la Reforma Agraria de 1953, conviene también rescatar los trabajos de Gustavo Rodríguez Ostria y Robert Jackson, que cuestionaron la asumida generalización de problemas locales como realidades nacionales. Ambos autores apuntan que la Reforma Agraria tuvo efectos distintos en diferentes regiones del país.Consideran que los efectos de la Reforma fueron especialmente contundentes en el Altiplano (La Paz, Oruro, Norte de Potosí), pero menos evidentes en los valles de Cochabamba, pues allí hubo un temprano proceso de fragmentación de la tierra (Jackson, 1988; Rodríguez Ostria, 1995).

Los múltiples aportes arriba mencionados permitieron redimensionar la narrativa tradicional sobre la revolución de 1952. Por una parte, cuestionaron el protagonismo que los líderes

del MNR asumieron y pregonaron, como si tres días de insurrección y la firma de tres decretos fueran suficientes para lograr una transformación radical del país. Por otra parte, recentraron el rol –hasta entonces periférico– que el MNR les había otorgado a los campesinos e indígenas en el proceso revolucionario. Al analizar las luchas campesinas e indígenas desde fines del siglo XIX y mediados del XX, la revolución y la Reforma Agraria aparecieron por fin como el producto de una masiva movilización, que excedía la acción de los líderes movimientistas.

A pesar de estos cruciales aportes, existen numerosas preguntas sobre el proceso de 1952 que aún debemos repensar. Por ejemplo, no existen suficientes estudios de género y de élites. La excepción es el trabajo de Seemin Qayum, María Luisa Soux y Rossana Barragán, que en 1997 publicaron una mirada sobre las mujeres terratenientes de principios de siglo XX, en el libro titulado De terratenientes a amas de casa: mujeres de la élite de La Paz en la primera mitad del siglo XX. Existen números trabajos basados en la legislación sobre tierras y en los discursos de líderes del MNR, pero todavía queda mucho por recorrer en términos de una etnografía sobre la Revolución Nacional y la Reforma Agraria. Muchos de los estudios regionales se concentraron en lo ocurrido en los valles de Cochabamba o en el altiplano, pero aún se necesitan estudios comparativos, que permitan comprender la multi-dimensionalidad de este complejo proceso.

En el año 2000, la Revista Data, celebrando los 40 años de la revolución, incluyó una entrevista al reconocido historiador James Dunkerley, autor de Rebelión en las venas. En aquella entrevista, Dunkerley invitó a realizar estudios que "vayan más allá del relato político (…), estudios basados en fuentes primarias que sean capaces de establecer un balance de lo que ha pasado en el campo" (1992).

En esa línea de trabajo, José Gordillo emprendió un estudio de los sindicatos campesinos y su lucha en los valles de Cochabamba durante la década de 1950. En contra de la tesis de Silvia Rivera, Gordillo demuestra que el MNR tuvo notables dificultades para controlar y manipular a los sindicatos campesinos. Esto evidencia el alto grado de independencia que tenían los sindicatos, capaces de imponer sus propias agendas al partido nacionalista. En otras palabras, el masivo apoyo campesino al MNR no puede entenderse simplemente en términos de manipulación y cooptación (2000).

Indudablemente, los aportes arriba mencionados han enriquecido nuestra mirada sobre la revolución y las luchas campesinas que la precedieron. Sin embargo, aún existen mundos desconocidos. Conocemos poco, por ejemplo, del proceso político rural después de 1952.¿Qué significó la revolución en el campo?, ¿cómo operó allí la Reforma Agraria? ¿Cómo operó el proceso de redistribución de tierras? En el siguiente acápite exploremos la negociación entre élite, campesinos y autoridades locales que siguió a la firma del decreto de 1953. El objetivo es analizar precisamente las dinámicas entre la ley, el discurso y las prácticas.

## Reforma Agraria en tres actos

En este acápite nos concentramos en narrar los procesos de expropiación de tres haciendas de regiones distintas. La primera está ubicada en el valle alto de Cochabamba (provincia Germán Jordán); la segunda en el altiplano (provincia Omasuyos) y la tercera en los Yungas (provincia Sud Yungas). Cada una de las historias ilumina las tensiones, conflictos y disputas que siguieron a la firma del decreto de Reforma Agraria.

Por un lado, estas tres historias mostrarán las demandas campesinas y sus estrategias para consolidar legalmente la propiedad de sus tierras. Por el otro lado, analizaremos las estrategias desplegadas por antiguos hacendados para tratar de frenar ese proceso de expropiación. En este sentido, en lugar de pensar la Reforma Agraria como un evento –el 2 de agosto de 1953, día en que Paz Estenssoro firmó el decreto frente a miles de campesinos–, la pensaremos como un proceso que duró casi dos décadas.

### El caso de la hacienda Santa Lucía de Liquinas, ubicada en el valle alto de Cochabamba

Santa Lucía de Liquinas era una propiedad muy productiva que perteneció a Agustín Villegas hasta 1953. Antes de la Reforma, la propiedad alcanzaba las 399 hectáreas, y anualmente producía unas 540 cargas de papa, 5000 presillas de maíz y 500 cargas de trigo. Santa Lucía era una

hacienda excepcional en el contexto del mundo rural cochabambino, pues su propietario tenía un cuantioso capital invertido allí. Él era un ingeniero agrónomo –con título obtenido en Bélgica–, y alegaba haber utilizado sus conocimientos en el rubro para operar personalmente la propiedad. Aunque la productividad de Santa Lucía la asemejaba a una propiedad moderna, el régimen de trabajo que imperaba en la hacienda –el colonato– la convertía en una propiedad "de antiguo régimen" (INRA-CBBA, Germán Jordán, Caja 7).

En julio de 1954, el sindicato campesino presentó una demanda por la expropiación de Santa Lucía, pero la resolución final del conflicto no llegaría sino hasta 1961, siete años después. El juicio por esta hacienda fue muy disputado, pues los campesinos se empeñaron en demostrar que, por el sistema laboral que allí regía, la hacienda era un latifundio. Por su parte, Agustín Villegas (el propietario) intentó demostrar que, por su importante inversión de capital en la compra de herramientas, maquinaria agrícola e instalación de bombas de agua, la propiedad era una empresa agrícola progresista. Según él, la inversión hecha en Santa Lucía excedía los 25.000 $us.

Villegas no era un hombre dispuesto a hacer concesiones; estaba convencido de que la inversión realizada le otorgaba derecho a consolidar legalmente su propiedad, un aspecto que el Decreto de Reforma Agraria afirmaba defender y promover. Pero los campesinos tampoco estaban dispuestos a ceder. Para demostrar que Santa Lucía era un latifundio, optaron por evidenciar las duras condiciones laborales a las que estaban sometidos antes de la revolución. Los ex colonos afirmaron que, además de cultivar la tierra, servían como pongos en la casa de hacienda. Según sus declaraciones, los varones trabajaban como pongos y las mujeres como mitanis, todos bajo órdenes y vigilancia de "sañudos cancerberos, conocidos como mayordomos (…). El patrón se limitaba a observar y a rendir culto a Morfeo… el dios del sueño" (Ibíd.). Además los campesinos alegaron que, aunque era verdad que la propiedad tenía bombas de agua, éstas únicamente regaban a las tierras que eran producidas en beneficio del hacendado.

Agustín Villegas falleció en medio de esta aguerrida disputa legal, y la defensa fue asumida por su viuda, Lily Arze, quien argumentó en defensa de su esposo:

> Se alega que el sistema de trabajo era el colonato, pero (…) la hacienda se regía por las leyes de la época, que eran las de Villarroel, que permitían la utilización gratuita de la mano de obra de los campesinos siempre que fuera para tareas agrícolas (…) y (por supuesto) hacer acequias, caminos para que lleguen las maquinarias era parte del trabajo agrícola… (Ibíd.)

Contra la afirmación de que el dueño en la hacienda tenía solo una función decorativa en la hacienda, Arze alegó:

> …si el propietario (…) sólo rendía culto a Morfeo (…), ¿por qué entonces no funciona ahora una sola de las numerosísimas maquinas allí dejadas? (…) ¿Por qué se obtiene ahora la baja producción y (…) la ruina de todas las instalaciones de Liquinas? [Este es] un triste advertido a los profesionales de la demagogia (…) y a los agraristas de gabinete y escritorio (Ibíd.)

En ese momento de intensa pugna, tres nuevos grupos pidieron ser parte de la demanda de expropiación de la propiedad de Villegas: arrimantes, ex mineros y campesinos desplazados de sus parcelas por la construcción de la represa de la Angostura. Aunque no tenían asignada una parcela de tierra, 36 arrimantes reclamaban su derecho a contar con una, pues habían trabajado para la hacienda. Después de 1954, los arrimantes comenzaron a asentarse en los terrenos que el hacendado trabajaba directamente. Posteriormente, el Ministro de Minas y Petróleo, Juan Lechín Oquendo, arguyendo la demora en la aplicación de la Reforma Agraria, dispuso la afectación de terrenos de algunas haciendas a favor de los ex mineros (Decreto del 2 de septiembre de 1953). Liquinas fue incluida en el decreto, y a ello se debió la ocupación de dicha hacienda por cinco ex mineros. Finalmente intervino la Dirección Nacional de Riegos, una sección del Ministerio de Asuntos Campesinos, y determinó otorgar 94 hectáreas de la hacienda Liquinas a favor de los campesinos que habían sido damnificados por la construcción del embalse de la Angostura, en la provincia Germán Jordán (Decreto del 1 de diciembre de 1955). El decreto no especificó cuáles serían los terrenos destinados a los damnificados, y esto generó aún más tensión. En este estado de cosas, la más interesada en proseguir con el proceso de

afectación era la propietaria, pues ella pretendía que un fallo declarase ilegales los nuevos asentamientos.

En septiembre de 1959, después de cinco años de demandas y contrademandas, disputas, mediciones y contra-mediciones, la tan esperada sentencia finalmente llegó, y esta fue favorable para la propietaria. El juez determinó que la propiedad era una verdadera empresa agrícola, no solo por la inversión de capital a gran escala y "su espíritu de empresa", sino también por:

> …[el] ponderable trabajo personal del propietario en calidad de ingeniero agrónomo titulado en Bélgica (…), [que había] llevado al campo los adelantos de la técnica agronómica más avanzadas… (Sentencia, Afectación de Santa Lucía de Liquinas, Caja 7, Provincia Germán Jordán, Cochabamba).

El juez calificó de ilegales las ocupaciones de los arrimantes en los terrenos de la hacienda porque, según el Decreto de Reforma Agraria, las ocupaciones eran legales si habían sido establecidas al menos dos años antes de dictado dicho decreto. Asimismo, calificó como arbitrario e ilegal el decreto que garantizaba tierras a los campesinos damnificados por la construcción del embalse de la Angostura, señalando que una misma propiedad no podía ser afectada dos veces. A partir de estos criterios, el juez ordenó la siguiente redistribución de la hacienda Liquinas:

Cuadro 7. Distribución de la hacienda Santa Lucía

| | |
|---|---|
| Propietaria | 109 Has cultivables y 35 Has de tierras incultivables |
| Ex colonos y arrimantes | 95,8 Has |
| Ex mineros | 15 Has |
| Uso colectivo de campesinos y ex mineros | 10,8 Has |
| Área Escolar | 1,8 Has |

Finalmente, el juez ordenó que los ex colonos y ex mineros beneficiados pagaran una indemnización por las parcelas recibidas. La suma ascendía a Bs 6.822.195,monto que debían pagar los beneficiarios según la cuota que le correspondía a cada uno.

Los campesinos, que quedaron al margen de la decisión del juez –particularmente los desplazados por la construcción de la represa–, apelaron la decisión ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) y, posteriormente, ante el Presidente de la República, Hernán Siles Zuazo. Aunque el CNRA ratificó la decisión del juez agrario, el Presidente, encargado de firmar la última resolución, determinó –supuestamente sobre los mismos criterios técnicos y legales inscritos en el Decreto de Reforma Agraria– que Santa Lucía de Liquinas no era una empresa agrícola, sino una mediana propiedad. Esta determinación contradecía abiertamente lo establecido en el Decreto de Reforma Agraria, que fijaba 50 hectáreas como límite máximo de la mediana propiedad en la provincia Germán Jordán.

A partir de la calificación de Liquinas como mediana propiedad, el Presidente ordenó una nueva redistribución de esta propiedad: 95,8 Has. de tierras cultivables para 46 ex colonos y sitiajeros; 23 Has. para los campesinos arrimantes; 15 Has para 5 ex mineros; 10, 7 Has. de tierras cultivables para uso colectivo de campesinos y ex mineros; y 80 Has. de tierras incultivables para uso colectivo de campesinos y ex mineros. Además, sobre la base de su calificación como mediana propiedad, el Presidente decidió otorgar a la propietaria un total de 94 Has que volvería a expropiarmediante una nueva resolución, esta vez por considerarlas de utilidad pública. La nueva calificación permitía que las 94 hectáreas pasarían a manos de los campesinos desplazados por la construcción de la represa.

Mediante este enrevesado legal, el Estado se comprometió a compensar a la propietaria de forma directa por las tierras expropiadas. Es notable que, sobre la base de una misma valoración técnica y legal, el juez agrario de la provincia, el CNRA y el Presidente de la República dictaran fallos completamente distintos. Claramente, detrás de cada supuesta valoración técnica, pesaban valoraciones políticas. El Presidente reconocía que, más allá de la evidente inversión de capital que pudo haber hecho Agustín Villegas, convenía dar prioridad a las posesiones de arrimantes, ex mineros y damnificados, pues cualquier intento de desalojo hubiera creado un mayor clima de violencia. La decisión final aplacó las demandas de colonos, arrimantes, ex mineros y campesinos desplazados y la propietaria –en parte– a expensas de los recursos del Estado.

Cuatro años después de que concluyera el conflicto de Liquinas, y establecidos los límites de las parcelas de los nuevos propietarios, estalló un nuevo conflicto en la ex hacienda. Esta vez no se trataba de un conflicto entre hacendados y campesinos, sino de un conflicto entre el llamado Sindicato de Jóvenes Sin Tierra (que eran los hijos de los antiguos colonos) y el Sindicato de Campesinos Desplazados por la construcción de la represa de la Angostura. El primer grupo se oponía a la consolidación de tierras a favor del segundo. Sus representantes consideraban que los desplazados, ajenos a la historia de la hacienda, habían usurpado terrenos que a ellos, como hijos de antiguos colonos, les debían haber sido destinados.

En su demanda, los Jóvenes Sin Tierra acusaron a los campesinos damnificados de ser "los nuevos latifundistas", pues, además de las tierras recibidas, poseían otras en el embalse de la Angostura. Los demandados respondieron que, aunque era cierto que conservaban las tierras de la represa, estas se inundaban varios meses al año, lo que afectaba seriamente sus cosechas. Además, alegaban haber adquirido esos terrenos ya en 1955, por disposición del Ministerio de Asuntos Campesinos, y que su asentamiento databa de más de 15 años.

En junio de 1970, y a tan solo un mes de iniciado el conflicto, el Sindicato de Jóvenes desalojó con palos y armas de fuego a los campesinos del Sindicato de Desplazados. En este clima de violencia, el juez agrario de la provincia dictó su veredicto, luego respaldado por el CNRA. Ambos fallos calificaron como ilegal el asentamiento de los jóvenes sin tierra, pues aquellos terrenos habían sido legalmente otorgados hace 15 años. Las autoridades, aunque reconocían los justos reclamos de los campesinos jóvenes, cuestionaron el uso de la violencia. Sin embargo, ninguno de estos fallos apaciguó la situación, y las tensiones entre ambos grupos siguieron.

El Sindicato de campesinos damnificados, cansado de la ineficacia estatal para imponer el "imperio de la ley", amenazó con abrir las compuertas del embalse de la Angostura e inundar la ciudad de Cochabamba si el Estado no atendía sus demandas. En esa situación de conflicto, el Presidente dictó finalmente una Resolución Suprema, que rechazó los anteriores fallos y declaró que, en aras de solucionar el problema, se haría una nueva redistribución de los terrenos en conflicto. Donde 50 de las 90 hectáreas en disputa quedarían bajo el dominio de los campesinos damnificados, y las 40 restantes pasarían a pertenecer a los 107 jóvenes sin tierra. Esta Resolución –salomónica aunque ilegal– fue firmada el 27 de diciembre de 1971 por el presidente de facto Coronel Hugo Banzer Suarez, y con ella finalmente se logró apaciguar a ambas partes.

El caso de Santa Lucía de Liquinas es un claro ejemplo de cómo operó el Estado en su política de redistribución de tierras: a presión. Aun cuando el juez agrario y el CNRA veían que la propiedad se ajustaba a lo que la ley de Reforma Agraria denominaba como "empresa agrícola", la decisión presidencial –más allá del proprio marco de la ley– determinó la distribución de la propiedad a favor de los múltiples grupos de campesinos demandantes. Años después, cuando el juez agrario y el CNRA consideraron que los reclamos de los jóvenes sin tierra eran ilegales, el Presidente de turno volvió a encontrar una salida –distinta a la establecida por la ley– para aplacar las demandas de ambos grupos. Es notorio que, en ambos conflictos, la capacidad de presión y demanda de parte de los campesinos surtió efectos claros sobre las decisiones estatales.

El caso de Santa Lucía no es generalizable para toda la región –aunque hubieron algunas propiedades que demostraron inversión agrícola–, pues la mayoría de las veces los hacendados se sirvieron del trabajo de los colonos, pero sin hacer ninguna inversión. En cambio, Santa Lucía sí es representativa de la manera en la cual ambos grupos, hacendados y antiguos colonos, enfatizaron en ciertos artículos de la ley de Reforma Agraria (inversión, tamaño de la hacienda, condiciones laborales; acceso a agua, concentración de tierras) para disputar y renegociar el proceso de implementación de la Reforma.

Además, Santa Lucía constituye un notable ejemplo de que el conflicto agrario no concluyó con el Decreto de la Reforma –en 1953– o con las resoluciones presidenciales –en los años posteriores. Este conflicto continuó por al menos una década, y se fue tornando crecientemente más complicado en la medida en que surgieron nuevas necesidades y nuevos actores. Las disposiciones de Reforma Agraria se concentraron en la disputa entre hacendados y colonos, pero no debatieron cómo solucionar el acceso a tierra de otros actores igualmente importantes en el área rural, como los arrimantes o los hijos de ex

colonos. Los denominados arrimantes, yanaperos, agregados, sitiajeros –es decir: campesinos que antes de la Reforma no tenían establecida una parcela– tomaron posesión y consolidaron una parcela de tierra, expandiendo los alcances del proceso de redistribución más allá de los límites que el Gobierno del MNR había planificado.

## Un caso de la provincia Omasuyos: disputas entre campesinos, comunarios y hacendados

Así como en los valles de Cochabamba, en el altiplano se presentaron numerosas demandas de expropiación de latifundios apenas dictado el Decreto de Reforma Agraria. Junto con estas demandas, indígenas de numerosas provincias del altiplano paceño también exigieron la restitución de las tierras de comunidad. En lugar de proclamar "tierra para quien la trabaja" –como era el reconocido lema de líderes de los nacionalistas e izquierdistas–, los comunarios pedían "tierra para los que siempre ha pertenecido".

Los líderes indígenas de las regiones de Taraco, Tiwanacu, Los Andes y Camacho enviaron numerosas misivas al presidente Paz Estensoro, denunciando el despojo de las tierras de comunidad (ver, por ejemplo: "Los campesinos de Taraco piden la devolución de sus terrenos", La Nación, 22 de agosto de 1953; "Revisión de títulos originarios de la ex comunidad Collantaca", La Nación de 16 de abril de 1953; "Indígenas denuncian despojo y exigen restitución de tierras en la comunidad de Guancollo", La Nación, 8 de septiembre de 1953). Ante la insistencia de estas numerosas demandas, el Presidente incluyó un artículo sobre restitución de tierras en el Decreto de Reforma Agraria (Artículo 42). Posteriormente, el 19 de mayo de 1954, firmó un Decreto de Restitución de Tierras de Comunidad (D.S. 3732) que establecía que toda propiedad comunal que hubiera pasado a manos privadas después de 1900 seria restituida a las comunidades.

La decisión del Presidente al incorporar las demandas de restitución tierras de comunidad –algo que, sin duda, distaba de su proyecto inicial de implementar un sistema de tenencia de tierra de mediana y pequeña propiedad– fue una medida trascendental. Sin embargo, el proyecto se mostró cauteloso en relación a cuán lejos en el pasado alcanzarían estas reclamaciones. El límite impuesto por el Gobierno fue el año 1900, haciendo caso omiso los procesos de usurpación de tierras de comunidad que se habían disparado en el altiplano hacia fines del siglo XIX.

Un ejemplo de este tipo de demandas fue la disputa que se dio entre los herederos de los antiguos comunarios de la ex comunidad Challuyo, en la Provincia de Omasuyos, en contra de Jorge Cusicanqui y su esposa Ubaldina Mollinedo. Los hijos de los antiguos comunarios, apoyados por los colonos y basados en el decreto de mayo de 1954, presentaron una demanda de restitución de tierras de comunidad. El veredicto del juez agrario de Omasuyos fue favorable para los demandantes comunarios. Cusicanqui apeló la decisión, alegando que había adquirido esas tierras antes de 1900, motivo por el cual no se podía dar paso a la restitución.

Durante el juicio, el hacendado presentó títulos de propiedad de algunas parcelas, títulos que databan de antes de 1900. Sin embargo, los comunarios demostraron que Cusicanqui había expandido ilegalmente los límites de su propiedad en el curso de las primeras décadas del siglo XX. Sobre la base de estos testimonios, el CNRA y el Ministerio de Asuntos Campesinos (MACA) ratificaron el derecho de las comunidades a la restitución. Pero, además, la Resolución Presidencial dispuso que los "ahijaderos, la casa de hacienda y los terrenos enclavados" también fueran restituidos a la comunidad (INRA-LP, Omasuyos, Caja 10).

Una vez que se dictaminó la restitución de tierras, los herederos de los comunarios y los colonos –que solían trabajar para la familia Cusicanqui– comenzaron a negociar qué parcelas de tierra quedarían en manos de quién. Como el Decreto de Reforma Agraria privilegiaba a los campesinos ya asentados, las autoridades ordenaron que los colonos quedaran como propietarios de las parcelas que estaban ocupando y que pagaran una indemnización por la expropiación a los comunarios, quienes eran los legítimos dueños. Fue así que, por ejemplo, los herederos de Juan Cruz (comunario con título revisitario de 1882) quedaron con la mitad de su parcela. La otra mitad fue distribuida entre tres colonos, quienes pagaron una compensación a la familia Cruz. En otro caso, el comunario Florentino Aruquipa recuperó 61,5 hectáreas del total de su parcelay cedió 23 hectáreas a otros tres colonos. La distribución final operó de la siguiente manera:

Cuadro 8. Redistribución de la parcela en Omasuyos desde de 1953

| | | |
|---|---|---|
| Gregorio Mamani y Mateo Collque | Colonos | 16,5 Has. |
| Fernando y Abelino Mamani | Colonos | 4,5 Has. |
| Eugenio Larico 2,0025 | Colonos | 2 Has. |
| Dionicio, Jacinto y Sacarias Aruquipa | Herederos de comunarios | 61,5 Has |
| TOTAL | | 84,5 Has |

Conviene resaltar lo complejo que fue el proceso de implementación de la Ley de Reforma Agraria, pues esta no significó solamente una disputa de campesinos versus hacendados. Las distintas acepciones del vocablo campesino incluían a una multiplicidad de actores con intereses que no siempre eran convergentes, y esta disparidad complicó varios procesos de repartición y reclamación de tierras. También conviene subrayar que, por lo general, la superficie de tierra que se podía obtener a través del proceso de restitución era superior a la que se otorgaba por la sola expropiación. En promedio, los ex colonos en el altiplano obtuvieron entre de 5 a 10 hectáreas por persona (lo cual contrasta notoriamente con las 60 hectáreas que obtuvo la familia Aruquipa, arriba nombrada). Esto explica, en parte, el interés de los comunarios en presentar una demanda de restitución antes que una demanda de expropiación.

No todas las demandas de restitución se resolvieron tan fácilmente entre colonos y comunarios. Veamos por ejemplo el caso de la ex–comunidad Pongon Huyo, que estaba en manos del propietario Carmelo Mollinedo. Este hacendado disputó la demanda de restitución planteada por los herederos de los antiguos comunarios. El hacendado no solamente presentó documentos que respaldaban que habían vendido su propiedad a terceras personas antes de 1900, sino que, además, firmó un acuerdo con sus antiguos colonos para frenar su demanda. En este documento, Mollinedo alegaba que Pongon Huyo era una mediana propiedad.

Los colonos apoyaron la demanda de Mollinedo, pues temían que un fallo de restitución les privara del acceso a las tierras que ellos llevaban trabajando desde 1930. A partir de esta estrategia, el hacendado logró que las autoridades estatales desestimaran el pedido de los antiguos comunarios. Se desconoce el resultado final de este caso, pues la resolución presidencial desapareció en 1959. Lo que sí se sabe es que esa resolución no frenó los conflictos entre ambas partes. De hecho, hasta la década de 1970, ambos grupos presentaron demandas y contrademandas, acusando a sus oponentes de querer expulsarlos de sus terrenos con armas de fuego (INRA-LP, Omasuyos, Caja 25).

Fuera de la provincia Omasuyos, también se conocen otros casos de disputas entre comunarios y colonos. Algunas de ellas incluso llegaron a ser registradas por periódicos de la época:



**Revisión de títulos originarios de la ex Comunidad Collantaca**

Anteayer se ha celebrado la segunda audiencia del proceso investigatorio que se sigue en el Departamento Legal del Ministerio de Asuntos Campesinos, para establecer la denuncia formulada por más de cuatrocientos campesinos poseedores de cincuenta títulos originarios de propiedad de la ex comunidad "Collantaca" contra el señor Raúl Jáuregui heredero de Francisco Jáuregui, quien es acusado de haberse apoderado ilegalmente de esta comunidad haciendo uso de la violencia, el saqueo y una serie de abusos contra sus verdaderos propietarios cuyos derechos se remontan a la época del incario.

En la audiencia que estuvo presidida por el Dr. Jiménez Vega, director de aquella repartición, los ex comunarios propietarios plantearon al señor Jáuregui que exhiba los documentos legales que acrediten sus derechos de propiedad, como ser los títulos de compra-venta de las haciendas Cantuyo, Tumyo, Orque Piña y Ullajara. El abogado defensor de la parte emplazada, Dr. Daniel Gisbert, trató de hacer la defensa de los derechos de propiedad del hacendado Jáuregui, pero al no poder demostrar en forma fehaciente la documentación exigida se concretó a explayar una serie de argumentos que por su inconsistencia y falta de veracidad provocó el repudio vehemente de la parte contraria.

Al final de la audiencia, el directorio del sindicato de ex comunarios declararon que depositaban toda su confianza en que al final de este proceso quedará demostrado que es justa la reclamación que han iniciado con el exclusivo fin de llevar a cabo la primera reivindicación de la tierra a sus verdaderos propietarios.

**Campesinos de Independencia plantean reclamaciones**

El dirigente de Ayopaya, Juan Jáuregui, visitó nuestras oficinas juntamente con numerosos delegados campesinos de Independencia, Departamento de Cochabamba, para hacer pública su reclamación contra el Alcalde de ese distrito Alfredo Crespo, de quien dicen que continúa cobrando impuestos honerosos a la chicha, a los bailarines de las fiestas locales por cotejo de marcas, etc., gravámenes que en el resto del país ya no existen según declara Jáuregui. Sus planteamientos llevaron a conocimiento del Ministro de Asuntos Campesinos, quien se ha comprometido a gestionar la solución de sus problemas

Dijeron que las autoridades de aquella región no se preocupan por el abastecimiento del pueblo, pues no tiene un cupo de artículos de primera necesidad y este hecho coloca a los habitantes en difícil situación.

Figura 31. Revision de títulos originarios de la ex comunidad Collantaca.
Fuente: Periódico La Nación, 16 de abril de 1953.

**Indígenas Denuncian Despojo y Exigen Restitución de Tierras**

**En la Comunidad "Guancollo"**

Los comunarios de "Guancollo" cantón Tiahuanacu de la provincia Ingavi, nos han dirigido una nota en la que refieren el proceso de despojo de que fueron victimas en el periodo liberal por parte de Benedicto Goitia, quien luego de aglutinar diversas parcelas indebidamente tomadas de la comunidad, transfirió la "propiedad" a Juan Peroú. Este —señalan— cometió durante su señorío en las tierras los más incalificables abusos; nos arrojó de las sayañas, nos robó ganado y de ese modo quedamos sumidos en la miseria.

Los comunarios de "Guancollo" puntualizan luego que, como consecuencia del Decreto sobre la Reforma Agraria es lógico que se les restituya sus tierras, para lo cual iniciarán sus trámites, a la brevedad posible, ante el Servicio Nacional de Reforma. Anticipadamente los campesinos de "Guancollo" agradecen al Primer Mandatario, a sus Ministros de Estado y a los órganos ejecutivos de la Reforma por la justicia que merecerán sus requerimientos. Firman la nota llegada a este diario, los señores Antonio Chura, José Peña, Gabino Suxo y Dámaso Quispe.

**Periodista Italiano**

Figura 32. Indígenas denuncias despojo y exigen restitucion de tierras.
Fuente: Periódico La Nación, 8 Septiembre 1953.

**COMO FUERON ADQUIRIDAS LAS PROPIEDADES QUE INTEGRAN LA HACIENDA "TARACO"**

La familia Montes nos pide publicar la siguiente aclaración:

En la conferencia dictada el día jueves 8 del presente en el salón de actos del Ministerio de Educación, el señor Presidente de la República expresó que "el régimen liberal utilizó el Poder del Estado para apropiarse de las tierras de los campesinos impunemente" citando como ejemplo típico de esa clase de apropiaciones el caso de la finca Taraco de la familia Montes.

De venir de otra persona tal aseveración, quizá la hubiéramos dejado sin comentario en vista de su ninguna consistencia; pero expresada por tan alta autoridad, nos vemos obligados a hacer una aclaración para la opinión pública, explicando la forma como se adquirieron las propiedades que constituían la Hacienda Taraco.

He aquí esa explicación:

Los señores Mantilla y Policarpo Ordoñez propietarios de dos fincas a orillas del lago, las ofrecieron en venta al doctor Montes y señora, quienes las adquirieron con el derecho que asiste a toda persona de comprar una propiedad. Luego los indígenas propietarios de las seis fracciones que constituían la antigua comunidad de Taraco, adyacentes a esa finca, se dirigieron de motu propio al señor Montes ofreciéndole también en venta sus propiedades, cuatro de las cuales fueron adquiridas por los esposos Montes, no pudiendo hacerlo con la totalidad de la ex-comunidad por no disponer en ese momento del dinero suficiente. Ahora bien, la prueba de que en esto no se hizo uso de la fuerza ni del "Poder del Estado" reside en el hecho de que las dos fracciones restantes de la ex-comunidad situada en la península de Taraco: Jihuahui Grande y Jihuahui Chico, que no pudo comprar el señor Montes por la razón anotada, fueron adquiridas en ese mismo tiempo por las señoras Benita v. de Daza y Manuela Carrión, quienes, como es obvio, no disponían de "la fuerza ni del Poder del Estado" para obligar a esos excomunarios a venderles sus tierras.

En cuanto a lo expresado por el señor Presidente de que "el latifundista no invierte capital sino para la adquisición de la tierra, en algunos casos, mas no invierte capital adicional de explotación porque no paga al indígena por su trabajo", quizá convenga también hacer notar, muy de paso, en esta oportunidad, que por lo menos en lo que a la Hacienda Taraco se refiere, la familia Montes ha invertido importantes sumas de dinero en el mejoramiento de la propiedad, realizando entre otras cosas: la mecanización de los cultivos, la arborización en gran escala, importación de ganado fino, el mejoramiento en todo orden de las condiciones del colono y su alfabetización, dotando a la hacienda de una escuela particular que funciona desde hace treinta años. Además se ha instalado una planta para proveer de riego a las tierras de cultivo, como no existe otra semejante por su magnitud en propiedad agrícola alguna en Bolivia y que representa una inversión de varios millones de pesos bolivianos. De esta manera la familia Montes ha contribuído eficazmente no sólo al mejoramiento de una finca particular, sino también al progreso efectivo de una parte del país, por muy pequeña que ésta sea, lo que consideramos que es una de las mejores formas de hacer patria.

FAMILIA MONTES.

Figura 33. En 1953 los periodicos reflejan el agudo debate que se originó sobre el derecho de las comunidades a la restitución de sus tierras.
Fuente: Periódico El Diario,11 de enero de 1953.

Estos distintos ejemplos son una clara muestra del agudo conflicto que emergió entre comunarios y colonos desde de 1953. Además, en contra de lo que hasta ahora se conocía sobre estos procesos, vemos que hubo casos en que las demandas de restitución de comunidad que fueron exitosas. De hecho, de acuerdo a un reporte del CNRA de 1964, se conoce que, de los 64 casos de restitución que se procesaron, el 90% correspondía al departamento de La Paz.

El auge de las demandas de restitución nos muestra una perspectiva muy distinta de lo que fue de Reforma Agraria: en lugar de ver en él un proceso en que el MNR logró imponer un sistema de pequeña y mediana propiedad, vemos la manera en que comunidades indígenas y campesinas fueron moldeando la Reforma de acuerdo a sus demandas. Una vez más, esto nos obliga a repensar la distancia entre los discursos y las prácticas de la revolución.

## Naranjani: un caso de la provincia Sud Yungas

Héctor Lorini era dueño de una extensa propiedad de 1281 hectáreas en Huancané (Sud Yungas), denominada Naranjani. Lorini heredó la propiedad de sus padres Héctor Lorini y Doña Clotilde Alborta. En 1955, los 78 colonos que vivían en la propiedad presentaron una demanda por su expropiación. En el fundamento de su demanda, los campesinos alegaron que el propietario no tenía inversión en maquinaria agrícola, ni ganado y que el propietario intervenía en la propiedad solamente mediante un administrador (INRA-LP, Sud Yungas, Caja 1).

A pesar de su gran extensión, la propiedad tenía pocas hectáreas cultivadas. Un informe topográfico revela el tipo de distribución y uso de la tierra que había al interior de la propiedad. En dicho informe se observa que los terrenos cultivados por colonos y yanaperos constituían una tercera parte de la totalidad de la hacienda:

Cuadro 9. Redistribución de la hacienda Naranjani, en Sud Yungas

| | |
|---|---|
| Hacienda | 36,2 Has |
| Ex colonos | 244,1 Has |
| Yanaperos | 47,7 Has |
| Vacante | 9,5 Has |
| Residencia | 3,4 Has |
| Escuela | 1,4 Has |
| Cementerio | 0,2 Has |
| Cultivable | 356,3 Has |
| Bosque | 521,6 Has |
| Incultivable | 61,1 Has |
| TOTAL | 1281,3 Has |

Una vez comenzado el juicio, la junta rural, el juzgado agrario, el CNRA y el presidente de la Republica darian un veredicto sobre el futuro de la propiedad. Al mirar detalladamente este caso observaremos que cada una de estas instancias calificó la propiedad de manera distinta lo que implicaba un proceso de redistribución de tierras.

La junta rural, encargada de recabar los datos de la hacienda, calificó a la propiedad como latifun-

dio y recomendó al juez local que sea expropiada en su totalidad. Lorini respondió airado ante el informe: alegó que la junta no había tomado en cuenta su inversión en la instalación de agua para la propiedad ni en la apertura de caminos (Huancané-Naranjani) y sendas. Finalmente, Lorini agregó:

> …debe considerarse mi situación personal, pues he concurrido a la campaña del Chaco (…), mi hijo Javier Lorini Saenz –como ferviente nacionalista– combatió contra el funesto régimen del sexenio, ofrendando su vida por el triunfo de la causa de la Revolución Nacional en las jornadas del 9 a 11 de abril de 1952… (Memorial de Mayo 2, 1955).

Sobre la base de este alegato, Lorini pidió se le reconocieran al menos 150 hectáreas, lo que la ley determinaba como mediana propiedad.

En respuesta, el secretario general del sindicato agrario que representaba a los colonos de la hacienda Naranjani, el señor Cosme Huanca, argumentó:

> Se evidencia que la hacienda Naranjani es un latifundio de 1281 hectáreas, en el que 80 hombres e igual número de mujeres que hemos trabajado el sistema feudal (…), sin percibir un solo centavo de salarios. Como es latifundio de gran extensión, tenemos cabida todos los asentados (vivimos 400 personas), sin que haya excedente para más familias… (Ibíd.)

En respuesta Lorini alegó que la propiedad no era feudal, pues no tenía colonos, sino arrenderos:

> …todos ellos tienen una situación económica bastante bonancible, tienen buenas casas, cocales, huertos de árboles, sacando como provecho anualmente muchos miles de Bolivianos (…) algunos tienen sayañas en las comunidades (en el altiplano), casas en los pueblos y no han sido colonos sometidos a un sistema feudal (Ibíd.)

Además, Lorini arguyó que en la propiedad solamente había 50 arrenderos; los demás demandantes eran yanaperos, utawawas o allegados "que concurrían al trabajo de hacienda por cuenta del arrendero". Como prueba, Lorini mostró un contrato firmado por él y por uno de los arrenderos antes de la Reforma Agraria. En el siguiente recuadro transcribiremos el documento casi en su integridad, pues ofrece nutridos detalles respecto a las condiciones de trabajo previas a la Reforma en los Yungas. Curiosamente el contrato, más que demostrar que los demandantes eran arrenderos, evidencia las duras condiciones laborales a las que estaban sometidos los campesinos:

Recuadro 65

### Contrato entre Héctor Lorini (propietario) y Eduardo Sillo (arrendero)

PRIMERA.- Dirá Usted que yo, Héctor Lorini (…), por convenir a mis intereses (…), doy en arriendo por el término de cinco años forzosos y cuatro voluntarios un medio arriendo de terreno para el trabajo de cocales, casas, cachi, huertos, cafetales, etc., por el canon anual de cuarenta y nueve (Bs 49,50) por cato que se cancelarán proporcionalmente en cada mita, en jornales.

TERCERA.- El arrendero Eduardo Sillo se compromete a trabajar con la concurrencia semanal de tres jornales de hombre y tres jornales de mujer, con una obligación recíproca de la concesión del arriendo en beneficio de la hacienda por el previo de Bs 1 el jornal de varón y de 0,50 centavos el jornal de mujer. Además, cuantas veces lo solicite la hacienda, el arrendero nombrado (…) hará trabajos extraordinarios que se pagarán de acuerdo a lo establecido para estos casos, comprometiéndose igualmente a desempeñar las obligaciones de Ilacata, Camani, Mulero, Apiri, Semanero (este cargo) de hombre y de mujer y en la forma que indique el propietario.

CUARTA.- En caso de que el arrendero Eduardo Sillo quiera transferir el arriendo o mejoras a tercera persona, lo hará precisamente con consentimiento escrito del propietario o de su apoderado, siendo condición forzosa que la transferencia se haga en favor de un indígena apto para los trabajos, o sea un obrero dedicado a la agricultura y de experiencia, que reconozca y acepte las obligaciones del presente contrato. Toda transferencia que se haga y que no esté desacuerdo con las condiciones que anteriormente se detallan se considerará nula de pleno derecho, debiendo en este caso volver el arriendo –incluso sus mejoras– a poder del propietario, sin indemnización de ninguna clase y sin que el propietario tenga que reconocer ni pagar absolutamente nada del arriendo y las mejoras.

QUINTA.- El arrendero nombrado o su esposa no podrán subarrendar ni admitir chiquiña de ninguna clase y bajo ningún pretexto (…), si así lo hiciere, IPSO FACTO el arriendo –incluso las chiquinas y subarriendos– pasarán a poder del propietario y quedarán en beneficio de la hacienda, sin derecho a mejoras ni indemnización de ninguna clase, quedando el arrendero como el único responsable de todo daño o perjuicio que hubiera causado al propietario con cualesquiera infracción.

SEXTA.- Seis faltas consecutivas y diez discontinuas no justificadas, sean de hombre o de mujer, así como el incumplimiento de las obligaciones contraídas o el menor acto de insubordinación, dará lugar a la expulsión del arrendero Eduardo Sillo y al consiguiente desahucio, reputándose en este caso como abandono del arriendo y, por consiguiente, quedando cancelado este contrato de arriendo IPSO FACTO, revertido y consolidado en favor de la hacienda, sin lugar a ninguna indemnización de mejora ni derecho a reclamo alguno, sin perjuicio de la multa y el arresto que se impondrá por la Policía del lugar, a cuya jurisdicción se somete el arrendero, desde luego, fuera de la que legalmente tienen las autoridades administrativas, subprefecturas, intendencia o corregimientos.

SÉPTIMA.- Si el propietario no desahucia al arrendero Eduardo Sillo con anticipación de tres meses antes del cumplimiento de los términos estipulados, se entiende que se ha operado la tacita reconducción o arrendamiento, en las mismas condiciones del presente contrato.

OCTAVA.- El arrendero Eduardo Sillo se compromete a devolver la sayaña o arriendo en caso de desahucio o vencimiento del término en las mismas condiciones que recibe, o sea con valor estimativo (…) de la cantidad de [no aparece la cifra]. Igualmente se hace cargo de todo deterioro o desvaloración causados por su negligencia, falta de cuidado en los cultivos y reparaciones en la casa o habitación que reciba.

NOVENA.- Cuando el arrendero tuviera que cumplir el servicio militar obligatorio, tan solo usufructuará la mitad de los productos del arriendo, quedando la otra mitad en beneficio de la hacienda por concepto de jornales no trabajados y las demás obligaciones. En caso de fallecimiento del arrendero, el propietario o su representante verán lo conveniente.

DECIMA.- El propietario tendrá el privilegio de hipoteca sobre las mejoras del arriendo. El arrendero Eduardo Sillo no podrá contraer ninguna obligación hipotecaria sobre el arriendo ni sobre las mejoras, quedando en virtud de estas restricciones nulo de pleno cualquier contrato u operación de este género que grave el arriendo o las mejoras (13 de octubre de 1940 años). El trabajo de caminos, conducción de agua y demás que fueran de aprovechamiento común se harán en faena con la concurrencia de todos los arrenderos y peones, sin retribución por estos trabajos. Igualmente están obligados (…) para el encestado de la coca de hacienda en la forma acostumbrada.

Basado en ambos alegatos, el juez agrario de Sud Yungas dotó 150 hectáreas a Lorini expropio del resto de la propiedad. Asimismo, el juez otorgó tierras a los ex colonos, pero excluyó de la lista a los yanaperos (9 de diciembre de 1955).

Ambas partes objetaron el fallo del juez. Lorini afirmó que en la nómina de beneficiarios aparecían nombres de personas que nunca habían trabajado como campesinos en la hacienda. Dos de ellos, Isaac Tamayo y Jorge Villanueva, eran funcionarios de la Junta Rural de Chulumani, y los otros dos eran "sayañeros con propiedades establecidas en Chulumani". Por su parte, el secretario general del sindicato campesino denunció que la propiedad había sido injustamente calificada como mediana. El secretario general también reveló que el juez había impuesto a los campesinos una indemnización de 22 millones de Bs. En favor del propietario, "cuando el valor de la propiedad declarado ante la renta no excedía los 10 millones de Bs". Finalmente, notificó que el juez agrario se había olvidado de mencionar que Lorini era propietario de otras haciendas: Chicani –en la provincia Murillo–, Ticuyo y adyacentes –en la provincia Los Andes.

En diciembre de 1956, el CNRA reconsideró el veredicto del juez. En esta instancia se subrayó que el juez local había desestimado que Héctor Lorini era propietario de más de cinco propiedades y, calificó a Naranjani como latifundio. El CNRA determinó otorgar 36 hectáreas a Lorini –las hectáreas que estaban cultivadas anteriormente por la hacienda–, y ordenó la expropiación del resto, en favor de los 80 demandantes. Asimismo, ordenó que los beneficiarios pagaran una indemnización acorde al valor catastral de la propiedad –es decir: 10 millones de Bs. Lorini apeló la decisión, y para ello insistió en la filiación de su hijo con el MNR durante el sexenio.

El caso llegó finalmente a manos del presidente Hernán Siles Zuazo en 1957 y determinó dar 10 hectáreas a cada uno de los demandantes

y dejó "el resto" para el hacendado. La resolución final brillaba por su ambigüedad, pues dejaba conflictos cruciales irresueltos: ¿Cómo se distribuirían el área cultivable, las tierras incultivables y los bosques entre los beneficiarios? ¿Quién definiría esos límites y cómo? En todo caso –tal como señalaba un memorial–, la ambigüedad de la Resolución servía para proteger los intereses de Lorini, lo que implicaba una respuesta favorable debido a sus influencias con algunos miembros del partido.

Cada uno de los casos expuestos nos permite palpar las dinámicas de poder y las tensiones que se suscitaron en el área rural durante el periodo post-revolucionario. A las tomas de las haciendas siguieron varios años de disputa legal. Con el fin de consolidar tierras a su favor

Los campesinos abrazaron ciertos aspectos establecidos por la Ley de Reforma Agraria de 1953 y el Decreto de Restitución de Tierras de Comunidad de 1954. Por su parte, los hacendados utilizaron los criterios inscritos en la ley como inversión, tamaño de la propiedad para frenar el proceso de expropiación.

El criterio "condiciones laborales" fue crucial para que las demandas de expropiación afectaran no solo a las grandes propiedades improductivas, tal como inicialmente había establecido la ley, sino que se ampliara a propiedades productivas y las medianas. También conviene resaltar, al analizar estos tres casos, el alcance redistributivo que tuvo la Reforma Agraria en Bolivia. Además de los colonos, arrimantes, yanaperos, sitiajeros y ex trabajadores mineros (en algunas ocasiones) abrazaron el Decreto de Reforma Agraria, buscando consolidar alguna parcela. Los expedientes revisados evidencian que, en general, las decisiones presidenciales terminaron usualmente cediendo ante estas demandas campesinas, amplificando el carácter redistributivo de la Reforma.

La revisión de estos expedientes también nos muestra lo poco que conocemos sobre la complejidad del mundo agrario (que hemos homogeneizado bajo el rotulo campesino). Los distintos demandantes de tierras moldearon la reglamentación según su situación y conveniencia, lo que generó distintas formas de redistribución de la tierra. Todo esto dentro del contexto de una misma.

Es verdad que el poder de la élite terrateniente se resquebrajó después de la revolución. Sin embargo, cada uno de los arriba mencionados casos nos muestra que los hacendados pelearon individualmente en los juzgados agrarios, buscando la consolidación de, al menos, una parte de sus antiguas tierras. En muchos casos –como en el de Liquinas, en Cochabamba–, las propiedades fueron expropiadas en su totalidad, pero esto no significa que los hacendados no hayan logrado diversos mecanismos de indemnización.

Conviene, además, rescatar un tema que parece haberse opacado bajo los debates sobre la revolución y la conformación de los sindicatos campesinos. Este es el de la reivindicación de las comunidades indígenas, que parecería haber quedado silenciada bajo el discurso nacionalista. Una de las conclusiones más sobresalientes de esta sección es constatar que la red de caciques apoderados no desapareció con la revolución. De hecho, esta red presentó numerosas cartas al presidente Víctor Paz Estenssoro, pidiendo la restitución de tierras de comunidad.

El caso de Taraco ocupó numerosas columnas en la década de 1950. Sin embargo, lo más notable es que el Decreto de Restitución de Tierras de Comunidad, dictado por el Gobierno en 1954, fue un instrumento clave para que muchas comunidades –especialmente en el departamento de La Paz– lograran la restitución de tierras perdidas con la expansión del latifundio. Tal como vimos en la provincia de Omasuyos, muchas demandas fueron exitosas. Pero se requieren todavia estudios de otras regiones del Altiplano.

## El baile de los números

En 1963, el Gobierno publicó una serie de estudios que señalaban el avance de la Reforma Agraria a una década de aplicación. A principios de aquella década, las relaciones entre el Gobierno del MNR y el bloque minero la COB ya se habían deteriorado profundamente. Después del programa de estabilización monetaria de 1957, "los mineros perdieron mucho poder y el Estado logró usar la masa campesina para amenazar a los sindicatos mineros" (Harris y Albó, 1986: 7). Fue especialmente en el marco de esta coyuntura política, que el MNR comenzó a dar creciente importancia a sus logros en materia de

Reforma Agraria. Como parte de ese impulso, en 1963, Antonio García publicó el libro Diez años de Reforma Agraria en Bolivia con apoyo de la Dirección Nacional de Informaciones.

Los gobiernos militares –que a partir de 1964 se sucedieron en el poder por casi dos décadas–, a pesar de sus continuas críticas hacia el MNR, adoptaron el programa de la Reforma Agraria y se posicionaron como continuadores de ese proyecto. Durante los gobiernos del General Rene Barrientos, de 1964 y 1969, se publicó una serie de folletos que titulaba "El progreso de la Reforma Agraria". En la gestión del Coronel Hugo Banzer (1971-1978) se publicó "25 años de Reforma Agraria".

El proceso de redistribución de tierras en Bolivia convocó el interés de varios estudiosos nacionales e internacionales, pues se trataba de la segunda experiencia exitosa de reforma agraria en América Latina (después de la de México, que se inició en la década de 1910). En las décadas de 1960 y 1970, estudiosos latinoamericanistas estaban particularmente interesados en contrastar los resultados de la Reforma Agraria en Bolivia, que había emergido de una revolución, con las otras reformas en la región impulsadas por el programa de la Alianza para el Progreso.

A pesar del interés por obtener las cifras de la Reforma Agraria, en la práctica, el Gobierno –y más específicamente el CNRA– enfrentó numerosas dificultades a la hora de construir esas estadísticas. En la década de 1960, varios criticaron la incoherencia de los datos presentados por esa institución; otros expresaron su frustración al tratar de conseguir datos más fidedignos. El antropólogo Charles Erasmus, que estudiaba los efectos de la Reforma en los departamentos de Chuquisaca y Tarija, expresó:

> Nadie parece saber a ciencia cierta por qué unos expedientes se guardan en La Paz, algunos retornan a Sucre y otros son archivados en las capitales de provincia; pareciera una cuestión de azar (Heath, Erasmus et al., 1969: 102).

Xavier Albó, en su reconocido trabajo Réquiem para una reforma agraria, remarca que los datos presentados por el CNRA eran contradictorios e inconsistentes (1979: 32). De hecho, dos reconocidos estudios de la época, Antonio García y James Wilkie –ambos basados en estudios del CNRA–, difieren en sus resultados al hablar de la primera década de aplicación de la Reforma. El primero contabiliza 4 millones de hectáreas tituladas, el segundo, 6 millones.

Los conflictos que enfrentaba el CNRA para establecer las cifras del avance en el proceso de redistribución de tierras de la Reforma Agraria respondían, en parte, a problemas técnicos, pero también políticos. Para comenzar, para el Estado era difícil "mensurar su territorio". De acuerdo a ley, por cada demanda de expropiación, un topógrafo especializado debía medir la superficie de la propiedad. Sobre la base de sus resultados, el CNRA y el Presidente de la República dictaban sus veredictos. Al concluir el juicio, el topógrafo volvía al campo y entregaba los títulos de propiedad sobre la base de una Resolución Suprema dictada por el Presidente.

Cuando analizamos uno a uno los expedientes de expropiación, constatamos que los datos de un documento a otro casi nunca coincidían. Las denominadas "operaciones de replanteo" (el proceso por el que un topógrafo medía las tierras que el Estado le había dotado a cada beneficiario) duraban tantos años como los propios juicios agrarios. Los beneficiarios reclamaban que no había una relación entre la dotación firmada por el Presidente –desde su escritorio– y la redistribución actual de la propiedad. A menudo, hacendados y campesinos cuestionaban los criterios que había utilizado el topógrafo para determinar qué era tierra cultivable, incultivable o de pastoreo, definiciones cruciales a la hora de redistribuir una propiedad.

Por otra parte, autores como Wilkie (1974) y Turovsky (1980) anotaron la distancia entre la importancia que recibía la Reforma Agraria en los discursos gubernamentales y el presupuesto que en la práctica se destinaba para su implementación. Según Turovsky:

> El presupuesto que se otorgaba al CNRA oscilaba entre el 0.8% y 1.5% del presupuesto nacional en los dos primeros años de implementación de la Reforma Agraria, y luego de entre un 0.44% a 0.55% en los siguientes años en que gobernó el MNR. Este presupuesto se volvió incluso menos significativo durante los gobiernos de Barrientos y Banzer, en las décadas de 1960 y 1970. La falta de equipo básico y de mínimas facilidades y los bajos salarios proveían escaso incentivo para que los técnicos (especializados) trabajen allí (1980: 209).

Pero además del limitado presupuesto y de los problemas técnicos, la producción y la presentación de los datos estaba –a menudo– sujeta a manejo político. Para empezar, cada uno de los gobiernos presentaba resultados que afirmaban que durante su gestión se había avanzado más que en los gobiernos anteriores. Por ejemplo, el presidente Víctor Paz Estenssoro afirmaba que en su segunda gestión presidencial (1960-1964) se había entregado más títulos de tierras que durante el periodo anterior, aunque esto silenciaba el arduo trabajo técnico que precedía a la entrega de dichos títulos, llevado a cabo entre 1954 y 1960.

Otra maniobra política consistía en la presentación de los resultados de la Reforma Agraria como datos globales, sin distinguir si los "beneficiarios" eran campesinos o hacendados. Durante el proceso de Reforma Agraria, muchos hacendados perdieron gran parte de sus haciendas, pero no todo. Por ejemplo, algunos conservaron la antigua casa de hacienda y algunas parcelas de cultivo (tal como vimos en el expediente de los Yungas, en el acápite anterior). Sin embargo, al hablar de "beneficiarios", los resultados hacían invisible un dato crucial: ¿qué porcentaje de tierras quedó en manos de los hacendados? ¿En qué regiones?

Al cumplirse los diez años de Reforma Agraria, el Gobierno promocionó estos resultados:

Cuadro 10. Informe del CNRA sobre redistribución de tierras en 1962

| | |
|---|---|
| Número de hectáreas | 4.852.954,87 |
| Títulos | 226.544 |
| Cabezas de familia beneficiadas | 151.435 |

Es indudable que estos números pretendían hacer énfasis en "el avance de la revolución", pero incluían en una misma categoría actores tan diversos como ex–hacendados, comunarios, colonos, ex–mineros, arrimantes, yanaperos, etc. Como vimos en el acápite anterior, estos obtuvieron logros muy diversos en cada uno de los casos.

Además los datos de "titulación de tierras" presentados por el CNRA no señalaban si estos provenían de procesos de expropiación, restitución, consolidación o dotación. Conviene anotar paralelamente a los casos de expropiación y restitución, el Gobierno recibió numerosas demandas de dotación de tierras fiscales, especialmente en los Yungas, el norte de La Paz y el Chapare. Como el CNRA presentaba los datos de la Reforma por Departamento, se hace imposible discernir cuánto de la tierra titulada provenía de un proceso de expropiación o dotación.

Cada uno de estos temas analizados en este acápite nos muestra que los números y datos de la Reforma Agraria, más que una realidad concreta, eran la expresión de lo que cada gobierno pretendía demostrar. La generalidad con la que se presentaban estos datos permite conocer muy poco sobre los mecanismos y lógicas con las que operó la redistribución de tierras entre los campesinos. ¿Quién determinó cuánto recibía cada uno de los campesinos o beneficiarios?, ¿cómo se distribuían las parcelas entre los campesinos?, ¿fue capaz el Estado de imponer un mecanismo y un sistema de redistribución entre los antiguos colonos? En el siguiente acápite se esbozarán algunos lineamientos que nos permitirán repensar la forma en que operó la redistribución de tierras entre los campesinos después de 1952.

## Algunas notas sobre el proceso de redistribución

Varios estudios han mostrado que en las comunidades había una clara estratificación social expresaba en criterios el acceso a la tierra, al cumplimiento de labores y a los distintos montos de contribución al Estado. En el altiplano se distinguían dos tipos de habitantes: los originarios (familias nacidas de la comunidad) y los agregados (campesinos que no habían nacido en la comunidad). Por lo general, los originarios tenían el doble de tierras que los agregados (ver De Lucca, 1970).

Dependiendo de la región, estas distinciones adoptaban distintos nombres. Por ejemplo, en el altiplano existían las categorías de "persona" y "media persona". Los términos de "originario" y "agregado" también tenían plena validez en los Yungas. Además de estas dos distinciones, existían otras categorías, tales como "utawawas", "piquiñeros" y "yanaperos". De Lucca afirma que los yanaperos, yanapaques o sobrantes también eran llamados "ayudantes" porque, al no tener tierras, se ganaban la vida ayudando a los miembros de

las comunidades. Muchos poseían parcelas muy pequeñas, que la comunidad les había concedido con la condición de que prestaran sus servicios (1970: 65-66).

Tal como vimos en el caso de Naranjani, la estratificación tenía plena vigencia en las haciendas de los Yungas. Una de las aristas más críticas de aquel conflicto se debió a que el propietario se negaba a que su propiedad se expropiara para favorecer a los yanaperos. Según él, los yanaperos habían llegado a la hacienda "por cuenta de los colonos, no del hacendado".

Este sistema de redistribución de tierras al interior de las comunidades no se desmanteló con la expansión de las haciendas. De hecho, las distintas categorías implicaban al interior de las haciendas distintas cargas de trabajo. Así, por ejemplo, los pegujaleros trabajaban cuatro días a la semana para la hacienda. Para poder trabajar esta cantidad de días, el pegujalero debía contar con el apoyo de otros familiares, que en ese lapso trabajaban su propia parcela. En algunos casos, si los agregados si se comprometían a trabajar más días –y si había disponibilidad de tierra–, podían acceder a parcelas más grandes dentro de una hacienda. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, en algunos lugares del Altiplano, donde los hacendados se apropiaron de tierras de comunidad y consiguieron como colonos a campesinos ajenos a la comunidad. Esto permitió a los hacendados garantizar la expulsión de los antiguos comunarios de sus tierras.

La Reforma Agraria no borró esas diferencias. Cuando los campesinos presentaban una demanda formal por la expropiación de una hacienda, los demandantes debían incluir una lista de beneficiarios. Esta lista incluía la categoría de cada uno de los beneficiarios. Miremos, por ejemplo, la lista presentada por los demandantes de la hacienda Pongon-Huyo, en Omasuyos (Ver recuadro 66)

Estas listas se elaboraron en diversas regiones del altiplano, Yungas y valles de Cochabamba. En cada una de las ex haciendas, los campesinos pedían la redistribución de la tierra sobre la base del sistema de tenencia de tierras que operaba antes de la Revolución Nacional. Hubo numerosos casos en los que, durante el proceso de expropiación, arrimantes, agregados o utawawas, que poseían parcelas demasiado pequeñas, pidieron que se les ampliara el de sus parcelas. Sin embargo, estas nunca se asemejaron a la superficie que quedó en manos de los originarios.

Las autoridades estatales escasamente modificaron esta estructura. Cuando había suficiente tierra dentro de la hacienda, ordenaban que se expandieran las parcelas de todos los colonos o que se destinara ciertos terrenos como colectivos. Sin embargo, en muy pocos casos revertían –o incluso cuestionaban– la distribución pre-establecida por los demandantes (los campesinos). Miremos, por ejemplo, la redistribución que se hizo de la hacienda Chiquero, en Sud Yungas:

Recuadro 66

### Lista de demandantes de la ex -hacienda Pongon–Huyo, Omasuyos

| Máximo Collque | 1 Persona | Pascual Flores Aruquipa | 1 Persona |
|---|---|---|---|
| Santos Collque | 1 Persona | Feliciano 1ro Mamani | 1 Persona |
| Pablo Colllque | 1 Persona | José López | 1/2 Persona |
| Mariano Collque | 1 Persona | Hilarión Jallasi | 1/2 Persona |
| Casimiro Quispe | 1 Persona | Saturnino Mamani | 1 Persona |
| Anselmo Condori Saca | 1 Persona | Raimundo Collque | 1/2 Persona |
| Bonifacio Collque | 1 Persona | Nicolás Huasco | 1/2 Persona |
| Julián Collque | 1 Persona | Lorenzo Oraquine | 1/2 Persona |
| Feliciano Mamani Quispe | 1/2 Persona | Máximo Mamani | 1/2 Persona |
| Antonia Jallasi | 1/2 Persona | Mariano Mamani | 1 Persona |
| Balerio Collque | 1/2 Persona | Lucas Choquehuana | ½ Persona |

Fuente: INRA-LP, Omasuyos, Caja 25, Expediente Pongon Huyo.

Cuadro 11. Asignación y tamaño de las parcelas al interior de una hacienda después de 1953

| Hectáreas | Campesinos beneficiarios |
|---|---|
| Hasta 2 | 9 |
| Entre 2.1 y 4 | 20 |
| Entre 4.1 y 6 | 25 |
| Entre 6.1 y 8 | 10 |
| Entre 8 .1 y 10 | 5 |

Fuente: INRA-LP, Sud Yungas, Caja 2.

El cuadro muestra que, si bien hubo una mayoría de campesinos que recibió entre 2 y 6 hectáreas, un importante porcentaje quedó por debajo o por encima de ese promedio. Por lo general, las autoridades estatales, que debían atender simultáneamente cientos de demandas no tuvieron la capacidad de imponer un sistema de redistribución igualitaria o de desafiar el sistema de redistribución que ya estaba imperando al interior de las haciendas. Esto demuestra que las demandas locales que terminaron definiendo las lógicas de redistribución de la Reforma Agraria.

Además de estas diferencias individuales, al interior de las haciendas existía una clasificación distinta de la tierra. Existían terrenos colectivos para pastoreo o bebederos de agua, tierra no cultivada, tierra incultivable, caminos y acequias.

Antes de la Reforma Agraria, la redistribución y uso de la tierra al interior de las haciendas no era estándar. La lógica de organización variaba de hacienda a hacienda, dependiendo de sus características geográficas. En el caso de Pajchani Grande, por ejemplo, los terrenos de la hacienda estaban concentrados en un solo sector, pero había hacendados que tenían múltiples parcelas distribuidas entre las de los colonos.

La distribución de las parcelas entre los colonos tampoco era uniforme. Había casos en que los colonos tenían acceso a una parcela continua y otros en que los colonos tenían acceso a pequeñas parcelas en distintos lugares de la hacienda. Un ejemplo de esto es la hacienda Chiquero, en Sud Yungas, cuyas 363 hectáreas fueron distribuidas en favor de 71 beneficiarios. Cuando se concluyó el proceso de expropiación, los campesinos hicieron saber al topógrafo que, en lugar de una parcela continua, preferían recibir pequeñas parcelas distribuidas en distintos lugares. Por ejemplo, Eugenio Condori, uno de los beneficiarios de la ex Hacienda Chiquero, recibió 9.34 hectáreas distribuidas en 11 pequeñas parcelas.

Cuadro 12. Asignación de tierras para una persona en la hacienda Chiquero, Sud Yungas

| | |
|---|---|
| 0.6 Has | Maizal |
| 0.82 Has | Platanal |
| 1.18 Has | Platanal |
| 0.48 | Cocal |
| 0.38 | Cocal |
| 0.34 | Cocal |
| 0.1 | Cocal |
| 1.28 | Cocal |
| 2.1 | Cocal |
| 1.78 | Cocal |
| 0.32 | Huerta |
| 9.34 | TOTAL |

Esta forma de distribución no fue inusual. Al mirar en detalle los expedientes agrarios nos damos cuenta que cada uno siguió sus propias reglas en términos de redistribución, de acuerdo a las características del terreno y de acceso a recursos como: agua, pastizales, tierras cultivables, etc. Esto a su vez demuestra la escasa capacidad gubernamental de imponer una lógica homogénea. Así, ante la multiplicidad de demandas, el MNR se mostró más bien cauto a la hora de imponer un sistema de distribución y, en su mayor parte, ratificó los diseños y distribuciones locales.

Hubo numerosos reportes de topógrafos que indican que los campesinos se negaban a dejarlos entrar a sus terrenos, porque estaban en desacuerdo con el sistema de deslinde planteado por las autoridades estatales, las resoluciones supremas terminaron ratificando el diseño impuesto por los demandantes. Al final, aunque es evidente que la relación entre campesinos y autoridades estatales no estuvo exenta de conflictos, tampoco hubo un intento real de parte del Estado por imponer un diseño homogéneo.

La revisión de los expedientes de la Reforma Agraria evidencia la distancia que hubo entre los proyectos y diseños políticos de la Revolución Nacional –en el sentido de crear un sistema de mediana y pequeña propiedad– y la puesta en práctica de esos proyectos y sus negociaciones

cotidianas. Los gobiernos terminaron legalizando las diferencias entre originarios, agregados, yanaperos; legalizaron las parcelas individuales (sayañas) y parcelas colectivas (aynocas); terminaron expropiando medianas y pequeñas propiedades que la Ley de ReformaAgraria inicialmente decía proteger. Todos estos hechos hablan de un proceso más complejo. En el fondo, la Ley de Reforma se constituyó en un punto de partida para un proceso de negociación política mucho más complejo.

Aunque la problemática de la Reforma Agraria ha convocado la atención de numerosos estudios en Bolivia, muchos han prestado atención al Decreto Supremo, pero aún conocemos poco sobre la implementación misma del proceso. De hecho, muchas de las valoraciones que tenemos sobre este proceso se basan en datos emanados por el CNRA, pero poco hemos reflexionado sobre cómo y en qué contextos elaboraron esos números.

Uno de los objetivos de este artículo fue mostrar el contraste entre lo establecido por el Decreto de Reforma Agraria y la manera en que los diversos actores locales –ex colonos, comunidades indígenas y antiguos hacendados– negociaron y disputaron su aplicación práctica. Al analizar la aplicación de la Reforma Agraria observamos que, aunque cada una de las autoridades estatales decía regirse por los criterios técnicos inscritos en la ley, en la práctica, todas las decisiones estuvieron atravesada por profundas consideraciones políticas. Esto se hace particularmente evidente si se analizan los expedientes de Reforma Agraria y se observa que, frente a casos muy similares, las decisiones estatales podían ser muy distintas. Hubo muchos hacendados que enfrentaron expropiaciones sin compensación. Otros recuperaron montos menores, producto de la indemnización que los campesinos debían pagar por las parcelas recibidas. Finalmente, hubo algunos que encontraron modos indirectos de compensación.

Conviene anotar también que, mientras los discursos gubernamentales hablaban de realidades fijas –latifundios improductivos, por una parte, y pequeños y medianos productores, por la otra–, la realidad nos habla de un área rural con una diversidad y complejidad mayores. Antes de la revolución, a la par de grandes haciendas improductivas, hubo haciendas con una importante inversión de capital. Muchos hacendados de la zona del altiplano, al enfrentar la demanda por expropiación, apuntaron que las autoridades estatales habían declarado que la propiedad era improductiva sin siquiera tomar en cuenta la inversión en ganado o –en algunos casos– en las pequeñas fábricas ahí instaladas (de alcohol, tejas, vinos, mermeladas, etc.). Durante la implementación de la Reforma Agraria, las autoridades estatales encontraron que detrás del denominativo común "campesino" se escondía una pluralidad de personas con accesos a la tierra muy distintos.

Finalmente, varios estudiosos han subrayado la poca capacidad del Servicio Nacional de Reforma Agraria para producir datos coherentes. Sin embargo, pocos investigadores han reflexionado sobre lo que esos datos y su elaboración reflejan de la realidad social y política de la época. Un contraste entre la historia que narran los expedientes de la Reforma (los casos concretos) y los datos producidos por el Estado nos permiten repensar los conceptos de lo que el SNRA denominaba el "avance de la Reforma Agraria".

## El Oriente de Bolivia: la otra historia de la Reforma Agraria

La Reforma Agraria de 1953 fue el producto de demandas y disputas de larga data. Pese a su lentitud y sus contradicciones, la Reforma tuvo un efecto profundamente redistributivo en cuanto acceso y tenencia de la tierra. Pero sus efectos no fueron los mismos en todas las regiones. En lo que respecta a las tierras bajas (llanos y Amazonía bolivianos), la política agraria del MNR difirió poco de la mentalidad civilizatoria del siglo XIX. Los pueblos indígenas de la región fueron considerados como inhábiles y sujetos a tutelaje, así señala el artículo 129 de la Ley de Reforma Agraria: "los grupos selvícolas (…) que se encuentran en estado salvaje y tienen una organización primitiva, quedan bajo la protección del Estado (D.S. del 2 de agosto de 1953).

La política civilizatoria que caracterizó la ley de Reforma Agraria de 1953 en Oriente hacia las poblaciones indígenas no fue solo característica de Bolivia. Convenciones internacionales compartían principios muy parecidos. Así, el

Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indudablemente el documento con mayor relevancia a nivel internacional sobre pueblos indígenas, recomendaba en 1957 a los Estados Nacionales:

> …promover la integración de las poblaciones tribales y semi-tribales a la colectividad nacional (…), facilitar su integración progresiva en sus respectivas colectividades nacionales y el mejoramiento de sus condiciones de vida (1957).

Siguiendo esta lógica, que buscaba la integración/asimilación de los indígenas, el Gobierno del MNR y los gobierno sucesivos promovieron la colonización del Oriente, otorgando concesiones de tierra a ganaderos y madereros y trasplantando poblaciones campesinas de tierras altas hacia las bajas. Estas extensas dotaciones de tierra supusieron la expulsión de poblaciones indígenas de sus antiguos territorios.

Aunque estas políticas se pusieron en marcha desde fines de la década de 1950, "los anhelos colonizadores" del Oriente datan de varias décadas previas (ver, por ejemplo, el Plan Bohan de 1942). De hecho, desde fines de la década de 1940, los ímpetus de colonización contaron con la ayuda norteamericana, coordinada por el Servicio Agrícola Interamericano (SAI), que comenzó a operar en Bolivia en 1948. El Ministerio de Agricultura y la SAI impulsaron la creación de dos focos de colonización: Caranavi (en el norte de La Paz) y el Chapare (Cochabamba). Además, estas instituciones promovieron la creación de estaciones experimentales Santa Cruz; Riberalta (1952), y el Rancho Experimental Ganadero de Reyes (1956) en el departamento del Beni (Ministerio de Agricultura, SAI, 1960).

En la década de 1970, los gobiernos militares otorgaron dotaciones de tierra a privados como parte de favores políticos. Esto generó un nuevo proceso de expansión del latifundio. Paralelamente, la hoja de coca se convirtió en uno de los productos más atractivos del mercado, y la colonización espontánea del Chapare se incrementó poderosamente (Orozco, Linera, Stefanoni, 2006).

En 1982, tras décadas de avasallamiento, grupos indígenas de tierras bajas conformaron la Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB). En sus primeras demandas, los grupos indígenas se concentraron en el pedido de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria de 1953, que consistía en la dotación de tierras (Soliz, 2002). De hecho, en el primer y segundo encuentro de la CIDOB (1982 y 1983) se organizaron las comisiones de Tierra, Trabajo, Educación y Salud.

En estos encuentros, los participantes concluyeron que se debía: "fortalecer la organización de centrales intercomunales, con el objeto de mejorar las oportunidades de comercialización". La Comisión de Tierra demandaba la consolidación de un comité permanente, que se encargue de agilizar trámites agrarios en marcha y de atender a los nuevos trámites de dotación y ampliación de tierras –todo esto en el marco de la Ley de Reforma Agraria de 1953 (CIDOB, 1982).

Es notable el viraje del discurso de la propia CIDOB a partir de la participación de sus dirigentes en los encuentros internacionales, como El Noveno Congreso del Instituto Indigenista Interamericano y en el Primer Congreso de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), ambos celebrados en 1984. La participación de la CIDOB en estos encuentros además del compromiso de la OIT de "otorgar recursos materiales y humanos para ayudar a esta organización de base", fue fundamental en el replanteamiento de sus demandas. Así, a partir de la segunda mitad de la década de 1980, la CIDOB, en lugar de exigir la aplicación de la Ley de Reforma Agraria de 1953, comenzó a pedir una Nueva Ley de Tierras en la que se reconocieran Territorios Indígenas, y no únicamente parcelas de tierra (Encuentro CIDOB, 1982).

Existe una vasta bibliografía sobre la "emergencia indígena en América Latina", que muestra cómo este sector se convirtió en un nuevo actor político de la escena nacional e internacional durante las últimas dos décadas del siglo XX. Sin embargo, es notable cuán poco se ha escrito sobre la formulación de sus agendas políticas; cuán poco se han analizado los flujos de ideas entre el nivel local y el nivel internacional. La literatura que se ha escrito sobre este tema, tan enfática en el carácter local de las demandas de los pueblos indígenas (Clavero, 1994; Polanco 1991; Yashar 1997; Albó 2008; Van Cott 1994; Sieder, 2002), explica poco sobre cómo las propias demandas de la CIDOB se reformularon y transformaron a mediados de la década de 1980. Tampoco

menciona la forma en que las demandas locales lograron sintonizarse en una voz regional que, al unísono, comenzó a cuestionar las políticas asimilacionistas de los Estados nacionales de décadas previas.

Hablar de estos flujos e influencias nos ayudaría a comprender de mejor manera la formulación de propuestas y alternativas que no nacieron únicamente al interior de la CIDOB, sino en diálogo con otras organizaciones indígenas en América Latina y con el apoyo de distintas entidades internacionales. En el caso de Bolivia, la organización no gubernamental Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) jugó un rol muy importante en los primeros años de conformación de la CIDOB. De 1985 en adelante, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también desempeñó un papel preponderante. Sin embargo, fue a partir de 1990, después de la primera marcha indígena, que se generó una nueva ola de colaboración de parte de las organizaciones no gubernamentales. CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social), ALAS (Asociación Latinoamérica-Suiza) y CIDDEBENI (Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni) fueron organizaciones claves para canalizar las demandas de los pueblos indígenas en la agenda pública nacional.

## Las demandas por una nueva ley de reforma agraria

A principios de la década de 1990, a las crecientes demandas de los pueblos indígenas del Oriente se sumaron las de las comunidades indígenas de las tierras altas, que denunciaban el carácter disociador y fragmentador que había tenido la aplicación de la Reforma Agraria en sus comunidades. Algunas de estas comunidades re-articularon sus organizaciones originarias (los ayllus), remplazando a los sindicatos agrarios, que habían sido el modo de organización política promovido y privilegiado en el área rural desde la Revolución Nacional de 1952.

Hacia fines de la década de 1980 y principios de la siguiente, tres hechos –que se sucedieron en corto de tiempo– marcaron el fin del proceso de la Reforma Agraria iniciado en 1953. El primero fue la ratificación de un nuevo convenio internacional sobre pueblos indígenas, que remplazó el convenio 107. Se trataba del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que afirmaba los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el respeto a su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones y su derecho a territorio.

El segundo fue la realización de la primera marcha indígena en Bolivia, denominada "Marcha por el Territorio y la Dignidad", en 1990. La marcha forzó al Gobierno nacional a promulgar tres decretos que reconocían –por primera vez– los derechos a los territorios de los pueblos indígenas (D.S. 22609, D.S. 22610 y D.S. 22611). Pero, más allá de estos éxitos concretos, la marcha tuvo consecuencias más profundas. Ricardo Calla y Ramiro Molina, en el texto Movimientos indígenas y pactos de género (2000), se refieren a la marcha como un momento de quiebre epistemológico en el país, pues este acontecimiento cambió los parámetros del diálogo sobre la problemática indígena:

> La marcha interpeló al Estado y a toda la sociedad, evidenciado que una gran parte de la población había sido marginada de los procesos nacionales. [La marcha desafiaba las barreras legales] que consideraban impensable hablar de territorios, pueblos originarios, derechos colectivos (Calla y Molina R, 2000).

El tercero fue la crisis institucional que resquebrajó los cimientos institucionales del Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Instituto de Colonización. Esto sucedió cuando el Presidente de turno, Jaime Paz Zamora (1989-1993), frente a las crecientes denuncias de dotación ilegal de tierras, decretó la intervención de ambas instituciones.El decreto de intervención señalaba lo siguiente:

> …la institución no [cuenta] con estadísticas (…) que muestren a ciencia cierta el grado de distribución y redistribución de las tierras, lo que [ha] provocadoduplicidad en las demandas, superposiciones en las dotaciones y adjudicaciones, anomalías en la titulación, concentración de la propiedad y latifundio, comercio ilegal de la tierra y loteamientos clandestinos (D.S. 23331).

Con el decreto de intervención, el gobierno ordenó la suspención de todas las dotaciones,

adjudicaciones y reversiones de tierras y todos los trámites agrarios de colonización que a la fecha contaran con autos de vista o resoluciones de adjudicación (Art 2, D.S. 23331).

## La reforma después de la reforma

La crisis institucional que atravesaba el Consejo Nacional de Reforma Agraria hizo evidente un problema que las autoridades estatales habían silenciado por décadas: el mal manejo estatal de casi cuarenta años. En 1993, el líder del partido político Movimiento Bolivia Libre (MBL), Miguel Urioste, denunció que el desconocimiento e ilegalidad que había caracterizado la dotación de tierras había generado un nuevo proceso de concentración en pocas manos. A cuatro décadas de aplicación de la Reforma Agraria, el país parecía recomenzar el debate de la expansión del latifundio, pero esta vez en el Oriente del país.

La crisis sentó las bases para la promulgación de una nueva ley de tierras. En febrero 1995, el Gobierno –ya con Sánchez de Lozada a la cabeza– redactó un proyecto de ley y convocó a tres sectores sociales para su discusión: los empresarios privados, representados por agroindustriales y ganaderos de los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y el norte de La Paz; las comunidades campesinas, representadas por Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que aglutinaba también a los colonizadores; y los pueblos indígenas de tierras bajas, articulados bajo la fortalecida Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB).

El proyecto de ley presentado por el Gobierno refleja las tendencias políticas que habitaban en su interior. Un sector pugnaba por crear un mercado libre de tierras que lograría dinamizar el área rural. El otro sector buscaba consolidar un registro rural de tierras –catastro rural– que permitiera establecer la legalidad de la propiedad rural y revertir elproceso del neo-latifundismo. Ambas propuestas eran muy similares, aunque los motivos que las inspiraban eran distintos; ambos discursos apuntaban a sanear la propiedad rural y cuestionaban la acumulación improductiva. Sin embargo, ninguno de estos dos sectores prestaba demasiada atención a las demandas por los derechos colectivos, que los pueblos indígenas venían propugnando desde fines de los 1980.

En la ronda de negociaciones, los tres sectores convocados (empresarios, campesinos y pueblos indígenas) se opusieron ferozmente al proyecto de ley. Los empresarios se mostraron temerosos ante la idea de un saneamiento, pues este suponía la revisión de los supuestos derechos sobre tierras que muchos de ellos habían adquirido ilegalmente. Además, como denunció Miguel Urioste, muchos propietarios temían perder las tierras que mantenían como tierras de engorde y no cumplían con la función económica o social que establecía la Constitución (La Razón, 3 de abril de 1996).

Finalmente, los empresarios se oponían a un proyecto que proponía revertir la propiedad a quienes no pagaran impuestos por más de dos años. Notable y paradójicamente, los empresarios retomaron el lema que los indígenas y campesinos habían usado en su lucha desde fines de la década de 1930: "la tierra es de quien la trabaja". Bajo este slogan, denunciaron el intento del Gobierno de revertir la tierra de quienes no pagaran impuestos.


SOLICITADA

CONFEDERACION AGROPECUARIA NACIONAL

LA TIERRA es de quien la trabaja

Carta de los productores del agro al Presidente de la República

Sin otro particular, le reiteramos las consideraciones de nuestro respeto personal.

Presidente
Cámara Agropecuaria del Oriente

Presidente
Confederación Agropecuaria Nacional

Figura 34. La Confederación Agraria Nacional que representa a grandes y medianos propietarios publicaba una solicitada utilizando el slogan de "la tierra para quien la trabaja" para prevenir la promulgación de la Ley Inra en 1996.

Fuente: Periódico La Razón, 27 de agosto de 1996.

Los campesinos y colonizadores, articulados alrededor de la CSUTCB y de su máximo líder, Román Loayza, se opusieron a la propuesta de ley y denunciaron que este proyecto era una medida más del Gobierno neoliberal para privatizar la economía del país. Acusaron al Gobierno de que la nueva ley de tierras permitiría la libre mercantilización, privilegiando a terceros y en desmedro de indígenas y campesinos. En el marco de estas denuncias –de carácter más global–, el sector de los colonizadores tenía una demanda concreta: la legalización de tierras que los cocaleros estaban ocupando desde hace más de 20 años en el Chapare. La propiedad de estas tierras había quedado en entredicho a partir del reconocimiento del Parque Nacional Isiboro–Secure como territorio indígena, en 1990.

Finalmente, los indígenas de tierras bajas pidieron que la nueva ley incluyera la titulación de los Territorios Indígenas, que habían sido promulgados durante el gobierno de Jaime Paz. Además, demandaban el reconocimiento de 16 demandas bajo la figura jurídica de "Territorios" o su equivalente: "Tierras Comunitarias de Origen" (TCO).

En el marco de tres propuestas tan disimiles, la mesa de discusión que se abrió en febrero de 1995 pronto se convertiría en un verdadero campo de batalla. Inicialmente, campesinos, colonizadores y pueblos indígenas (CSUTCB y CIDOB) establecieron una alianza y denunciaron que el Gobierno pretendía aprobar una ley que abriría puertas al mercado de tierras. Esto favorecería a la empresa privada y desprotegería el derecho de campesinos e indígenas. En el marco de esta lucha, campesinos, colonizadores e indígenas emprendieron una marcha desde Santa Cruz hacia La Paz.

Sin embargo, la alianza inicial entre CSUTCB y CIDOB (campesinos e indígenas) se vio lesionada cuando las demandas de los grupos indígenas de tierras bajas encontraron mayor cabida en la esfera del Gobierno. Esta alianza se vio incluso más afectada cuando CONFEAGRO (el grupo de empresarios) se mostró más abierto y dispuesto a establecer acuerdos con la CIDOB, en el entendido de que esta era una manera implícita de frenar la incesante migración y las expectativas de asentamiento de campesinos e indígenas de tierras altas. Notablemente, durante las primeras negociaciones, los cocaleros y el sector agroindustrial –que parecían ser posiciones tan distintas– comenzaron a encontrar puntos de acuerdo. Este se evidenció aún más cuando el Gobierno propuso sanear y reconocer derechos para quienes estuvieran asentados dentro de áreas forestales y parques nacionales.

Como el Gobierno se vio imposibilitado de llegar a acuerdos con los tres sectores, decidió establecer mesas de negociación distintas con cada uno de los ellos. Al revisar la prensa de estos meses se hace evidente que el más interesado en promulgar la ley era el Gobierno. Según uno de los senadores de oposición, Fernando Kieffer –de Acción Democrática Nacionalista (ADN), el partido político que más simpatizaba con el sector agroindustrial–, el interés del Gobierno por poner en vigencia la nueva norma se debía a que los créditos del Banco Mundial tenían como condicionante la promulgación de esta norma (La Razón, 17 de Septiembre de 1996).

Después de casi dieciocho meses de intensa negociación, en octubre de 1996, el Vicepresidente de la Republica, Víctor Hugo Cárdenas, promulgó la nueva ley. Esta nueva ley de tierras –denominada Ley INRA– incluía por primera vez la figura jurídica de las "Tierras Comunitarias de Origen" (TCO) dentro de la legislación boliviana. Las TCO fueron declaradas "inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, inembargables e imprescriptibles", además de estar sujetas al derecho de consulta previa. Indudablemente, esta fue un notable logro para las poblaciones indígenas de tierras bajas.

Como una forma de acceder a las demandas de los empresarios, la ley redujo a la mitad los impuestos que se cobraban a los propietarios rurales y eximió del pago de impuestos a las siguientes propiedades agrarias rurales: "solar campesino, pequeña propiedad, comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias" (Artículo 41, Ley 1715 INRA, 1996). Los perdedores de esta nueva ley fueron los campesinos y la CSUTCB, quienes protestaron que ninguna de sus demandas había sido incorporada.

## A una década de aplicación de la ley la ley INRA

A fines de 1996, con la nueva ley de tierras ya aprobada, el Gobierno dio un plazo de diez años para concluir el proceso de saneamiento y

titulación de tierras. Sin embargo, una evaluación del año 2009 de Fundación Tierra muestra que, en más de una década, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) había culminado apenas con el 35% del proceso de saneamiento. Del total de esta cifra, alrededor del 40%, fue dotado a poblaciones indígenas, el 36% fue declarado fiscal y el 12% fue dotado a las comunidades indígenas de las tierras altas. Tal como lo evidencian estas cifras, poco se había avanzado en términos de dotación de pequeñas, medianas y grandes propiedades (Fundación Tierra, 2010). ¿Cómo explicar este evidente desbalance en los proceso de dotación de estos grupos?

Cuadro 13. Saneamiento y Titulación de la Tierra en Bolivia: 1996-2006

| Tipo de propiedad | Millonesdehectáreas saneadas y tituladas | Porcentaje |
|---|---|---|
| TCO | 15.6 | 41% |
| Tierra Fiscal | 13.7 | 36% |
| Solar Campesino | 4.6 | 12% |
| PequeñaPropiedad | 1.7 | 4.6% |
| Empresa Agrícola | 1.3 | 3.6% |
| MedianaPropiedad | 0.7 | 2 % |
| TOTAL | 37.7 | |

Fuente:Fundacióntierra,Informe2009:reconfigurandoterritorios

Los resultados del saneamiento fueron el producto de la particular disponibilidad presupuestaria que había en el Estado para atender las peticiones de un sector, en detrimento de los otros. Esta disponibilidad respecto a las demandas indígenas se explica mejor si miramos el presupuesto del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Por vía del Tesoro General de la Nación (TGN), dicha institución recibió un presupuesto limitado. En cambio, entre 1996 y 2006 recibió cuantiosos créditos y préstamos externos, principalmente del Banco Mundial, las Naciones Unidas y la Cooperación Danesa. Estos recursos arribaron al INRA con el objetivo de financiar las demandas de tierras de los pueblos indígenas de tierras bajas. Algunos de los créditos más representativos fueron los siguientes:

- D.S. 26557 del 19 Marzo de 2002. Se destinaron 4.800.000 Bs. al INRA, como crédito proveniente de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), Banco Mundial.
- D.S. 27778, sobre la base de un acuerdo del 15 de julio de 1995. Se destinaron Bs. 1.012.558 para la demarcación del área del TIPNIS, a través de un crédito del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Naciones Unidas.
- D.S. 27914 de 13 de diciembre de 2004. Se destinaron 285.581 Bs. para el desarrollo de pueblos del Beni, a través de un crédito del FIDA, Naciones Unidas.
- D.S. 28411 del 21 de octubre de 2005. Este crédito es otorgado por DANIDA, como apoyo para el saneamiento de pueblos indígenas.

Además de estos recursos, el proceso de titulación de tierras para pueblos indígenas de tierras bajas fue impulsado desde la misma sociedad civil, a través de varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) como OXFAM, GTZ, APCOB, CEJIS y ALAS, entre otras. Este apoyo financiero hizo que, a una década de iniciado el proceso, los resultados de estas políticas tuvieran efectos tangibles.

Evidentemente, no es posible pensar la cooperación como si se tratara de un todo homogéneo. Las organizaciones que financiaron estos procesos –Iglesia, partidos políticos, Banco Mundial, Naciones Unidas, Comisión Económica Europea– y la naturaleza política de dichas instituciones pertenecen a muy variada gama (para ver un estudio más detallado del financiamiento de Holanda a Bolivia ver, por ejemplo, Bebbington et al. 2002).

Los efectos de estas políticas en los diferentes países de América Latina también han sido muy distintos. En sus publicaciones, Assies y Clavero retratan la forma en que poderosas empresas madereras y agroindustriales frenaron las demandas indígenas en países como Perú, Chile o México (Assies, 2011). Sin embargo, en Bolivia estas distintas entidades lograron garantizar el acceso a tierra para poblaciones indígenas. Este proceso, ciertamente frenó –en parte– la expansión de ganaderos y madereros, pero también limitó el acceso a la tierra a los migrantes campesinos de tierras altas (colonizadores), lo que intensificó los enfrentamientos entre este grupo y los indígenas de las tierras bajas.

Una de las mayores expresiones de este conflicto entre poblaciones indígenas y colonizadores emergió en el norte de La Paz, cuando los

lecos y los quechuas que habitaban en el municipio de Apolo se enfrentaron. En una población eminentemente rural, compuesta por 86 comunidades campesinas e indígenas, 17 comunidades lecas demandaron la dotación de la TCO; dicha superficie tenía un total de 654.000 hectáreas. En el 2006, el INRA tituló un primer polígono de esa demanda, alcanzando las 238.162 hectáreas.

Según afirma Sotomayor, la titulación fue el detonante de la violencia entre quechuas y lecos. Los quechuas reclamaban que, antes de 1997, todos pertenecían a la misma organización campesina. Según ellos, los lecos habían aprovechado las posibilidades que les otorgaba la ley INRA para separarse de la organización sindical y demandar la consolidación de la TCO. El reconocimiento de la TCO Leco implicaba que el 80% del territorio estaría bajo el control de 17 comunidades, y las 69 comunidades campesinas quechuas tendrían acceso a nada más que al 20% restante (Sotomayor, 2010). Aunque la emergencia de la TCO Leco tiene rasgos particulares –y, por tanto, es difícilmente generalizable a otras demandas de dotación de TCO–, estudios como los de Sotomayor apuntan que las comunidades campesinas empezaron a percibir que los indígenas de tierras bajas se estaban convirtiendo en los "nuevos latifundistas" (Sotomayor, 2010).

Evidentemente existió un desbalance en la política de redistribución de tierras. Desde sus inicios, la Ley de Reforma Agraria de 1953 pensó en la redistribución de parcelas de tierra, mientras la Ley INRA de 1996 incorporaba la figura de territorios indígenas, la que a su vez incluía el acceso a territorios y recursos forestales. El lenguaje político de la década de 1990 operó alrededor de un imaginario de indígena que garantizó el acceso a tierra a poblaciones que habían quedado históricamente marginadas. Pero, a su vez, dejó irresueltas las demandas de otros sectores sociales, como los campesinos migrantes de tierras altas, que todavía forman parte de los grupos más empobrecidos del país.

El problema adquiere aún más complejidad si recordamos que los distintos gobiernos que sucedieron a la Revolución Nacional de 1952 fueron incapaces de responder a las crecientes demandas –en términos de educación, salud, derechos laborales, etc.– en el área rural. Conscientes de estas limitaciones, muchos gobiernos de la segunda mitad del siglo XX promovieron y utilizaron la colonización como un mecanismo barato para apaciguar las demandas de los campesinos en tierras altas. Así, la colonización se convirtió en una especie de política de seguro social sin costo y sin planificación estatal.

Esta "salida" adquirió incluso mayor centralidad a fines de la década de 1980, cuando, durante el tercer gobierno de Paz Estenssoro, se reorientó la economía nacional hacia el neoliberalismo. Esta medida trajo consigo la relocalización de cientos de trabajadores mineros, que no encontraron otra salida que la migración hacia las ciudades o hacia las tierras bajas. El grupo que optó por la segunda opción reforzó notoriamente el caudal de la colonización.

El debate sobre el nuevo proceso de distribución de la tierra se ha complicado aún más en los años recientes, a partir de la emergente denuncia de campesinos de tierras altas. Este grupo apunta que la economía de los grupos indígenas de tierras bajas –al interior de las TCO– se basa cada vez menos en la "caza y recolección" y se orienta cada vez más hacia la tala y comercialización de madera. Voces defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, a menudo, defienden a rajatabla el carácter comunitario, anti-mercantil y anticapitalista de los pueblos indígenas. Sin embargo, pareciera necesario discutir –en lugar de obcecados esquematismos– las dinámicas que empujan a las poblaciones indígenas a insertarse en procesos de comercialización de sus recursos, como único mecanismo de sobrevivencia.

Parte del problema tiene su origen en el limitado alcance de las políticas agrarias en Bolivia. La ley INRA de 1996, al igual de que la de Reforma Agraria de 1953, enfocó todos sus esfuerzos en el proceso de dotación y distribución de tierra, pero hizo poco por imponer políticas de gestión de esos territorios. Así, una vez que se consolidaron las demandas territoriales, fueron las dinámicas locales, nacionales e internacionales de poder –más que las políticas de gestión estatal– las que determinaron las opciones reales que los pueblos indígenas tenían sobre sus territorios. Se trata, entonces, de identificar limitaciones de las políticas agrarias desarrolladas en Bolivia y llamar la atención sobre cómo las políticas limitadas a la sola distribución no han logrado modificar las condiciones de pobreza de las poblaciones indígenas y campesinas.

## Evo Morales: en el cruce de múltiples tendencias

Evo Morales asumió el poder en 2006, en el marco de este complicado panorama en el área rural. Inicialmente, sus políticas intentaron mostrar un balance entre las distintas fuerzas sociales que lo había llevado al poder: campesinos, indígenas, originarios y colonizadores. En la primera fase de su gobierno, su discurso a nivel nacional se encontraba en plena sintonía con los discursos anticapitalistas y medioambientalistas, que habían convocado el apoyo de numerosas entidades a nivel internacional desde la década de 1990. En esa primera etapa, el presidente Morales promulgó la Ley de Reconducción Comunitaria 3545 (2006).

Esta ley, que Morales calificó como el eje del inicio de una Revolución Agraria, modificó algunos artículos de ley INRA de 1996, estableciendo ajustes más rigurosos para determinar el cumplimiento de la función económica social (FES). Por otra parte, determinó que:

> …todas las tierras fiscales disponibles hasta la fecha y las que aparezcan como resultado del saneamiento serán entregadas exclusivamente a pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias (Urioste, 2007).

Sin embargo, el aspecto más importante de la gestión de gobierno de Morales en cuanto a la tenencia de tierras fue la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), el año 2009. En lugar de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), la nueva Constitución estableció un concepto jurídico más amplio, denominado "Territorio Indígena Originario Campesino" (TIOC) a quienes se les reconocía:

> …derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios (Art. 403, CPE, 2009).

Este nuevo concepto jurídico permitió a las comunidades indígenas y campesinas de tierras altas acceder al mismo status jurídico que habían adquirido las poblaciones indígenas de tierras bajas bajo el concepto de TCO in 1996, garantizándoles a todas ellas el derecho a la consulta previa.

El derecho constitucional de consulta previa, otorgado a las comunidades campesinas e indígenas, puso a prueba al Gobierno de Morales en 2011. Ese año estalló un conflicto en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Las comunidades indígenas que habitaban el parque cuestionaron la decisión del Gobierno de construir una carretera, violando el principio de consulta establecido por la nueva CPE. El conflicto no solo confrontó al Gobierno con un sector de la sociedad, sino que enfrentó a dos sectores que inicialmente eran parte de la base social del presidente Morales: los indígenas de tierras bajas, a la cabeza de la CIDOB, y los colonizadores-cocaleros. Este último grupo, afiliado a la denominada Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), constituía la base social más sólida del Presidente. Los cocaleros defendían la construcción de una carretera que vinculara las poblaciones de Villa Tunari (Cochabamba) con San Ignacio de Moxos (Beni), atravesando el parque nacional. Por su parte, los indígenas de tierras bajas arguyeron que la realización de este proyecto devastaría el frágil ecosistema del área protegida.

Este conflicto –uno de los más severos que enfrentó el Gobierno de Evo Morales desde que asumió la Presidencia, en el año 2006– conmocionó la opinión pública a nivel nacional e internacional. No sin razón, varios analistas criticaron la contradicción entre el discurso de respeto a la naturaleza, liderado por el presidente Morales en el ámbito internacional, y los métodos poco democráticos que utilizó a nivel nacional para acallar las protestas y marchas en contra de la carretera. Los indígenas de tierras bajas, encabezados por la CIDOB, emprendieron una marcha hacia la ciudad de La Paz para manifestarse en contra de la construcción del segundo tramo de la carretera. El 26 de septiembre de 2011, el Gobierno intervino violentamente la marcha.

El conflicto del TIPNIS forzó al Gobierno a tomar abierto partido por uno de los sectores (los colonizadores). Pero, además, abrió las compuertas que permitieron a los colonizadores adoptar una actitud de abierta confrontación con los grupos indígenas de las tierras bajas.

En enero del 2012 el gobierno de Evo Morales celebró el Encuentro Plurinacional para

Profundizar el Proceso Cambio. Al comentar las conclusiones del encuentro, el analista Alejandro Almaraz, anteriormente ligado al gobierno de Morales, calificó las conclusiones del encuentro como "agresivamente anti-indígenas". En dicho encuentro se estableció:

a) Auditar a las TCOs para determinar si la cantidad de hectáreas dotadas a los indígenas corresponden a sus necesidades y para establecer el uso que se está haciendo de las TCOs,
b) Paralizar nuevas solicitudes de TCOs,
c) Instituir una pausa de cinco años a la verificación del cumplimiento de la función económica social (FES) (Pagina Siete. 18 de enero de 2012).

Este documento incrementó aún más la tensión entre las comunidades indígenas y campesinas. Según Almaraz,

> …e[l] satisfecho silencio del agro-empresariado cruceño [muestra que este grupo es] el principal beneficiario de la nueva agenda del cambio revolucionario del actual Gobierno (Almaraz, Alejandro. En Pagina Siete. 18 de enero de 2012).

En el 2012, el Gobierno logró neutralizar a las voces opositoras a través de un referéndum realizado entre las comunidades habitantes del parque. Con los resultados de esa votación, el Gobierno alegó que el 80% de 69 comunidades apoyaban la construcción de la carretera. En respuesta, las voces opositoras criticaron los mecanismos gubernamentales en la elaboración del referéndum, alegando que el Gobierno había comprometido el voto de varias comunidades indígenas a cambio de proyectos políticos. A pesar de las críticas, el Gobierno dio por terminado el conflicto con el referéndum. Sin embargo, en enero del año 2013, una última comisión de la Iglesia católica y la Asamblea de Derechos Humanos reportaron que los datos presentados eran tendenciosos, pues 30 de las 36 comunidades habían declarado estar en contra el proyecto. Hasta hoy el conflicto continúa irresuelto.

Al mirar las últimas décadas de disputa por el acceso y la tenencia de la tierra en Bolivia, es importante ponderar que el conflicto por el TIPNIS es el espejo de un conflicto mayor, que refleja el interés de varios actores con intereses contrapuestos: los empresarios privados, las comunidades indígenas y los campesinos/colonizadores. A su vez, es importante anotar que estos actores e intereses están articulados a visiones y proyectos políticos mayores. Por una parte, existe una mirada de país que ha hecho especial énfasis en términos de productividad, crecimiento, desarrollo económico. Otra mirada pone el dedo en los problemas de deforestación y protección del medio ambiente. Por último, hay una mirada que privilegia los objetivos de redistribución y acceso a la tierra.

Por supuesto, cada uno de los actores no representa mecánicamente una tendencia. De hecho, la disputa por la implementación y aplicación de las reformas agrarias en Bolivia –especialmente en las dos últimas décadas– dan cuenta de las aguerridas disputas entre los distintos actores rurales, pero también de las alianzas impensables. Estas visiones de país, estos proyectos políticos todavía están irresueltos, y representan dilemas de largo alcance que el país todavía deberá enfrentar.

# TERCERA PARTE

## La revolución y su herencia en las políticas y prácticas culturales

# VI. Cambio de paradigmas en las políticas culturales en Bolivia (siglo XX al XXI)

Beatriz Rossells

## Introducción

¿Por qué en los últimos años (desde la década de 1990 hasta la actualidad) han adquirido mayor importancia las discusiones sobre la gestión cultural y las políticas culturales? ¿Por qué se han movilizado más gestores culturales independientes y se han multiplicado los colectivos de arte en seminarios, grupos de activistas, redes sociales y digitales de cooperación y relación intersectorial del campo de la cultura?

En realidad, desde hace décadas –desde fines de los años 60– que se institucionalizó la gestión de las políticas culturales oficiales de manera internacional, principalmente por la UNESCO, como organismo mundial dedicado a la ciencia, la educación y la cultura. Desde entonces se han sostenido innumerables reuniones y han circulado miles de documentos, consolidando parte de este esfuerzo –especialmente en lo formal– por adoptar medidas de protección y crear instituciones, entre otras acciones. Pero aún quedan asuntos fundamentales, como los derechos culturales de los ciudadanos, que se encuentran sin ser valorados ni aplicados de forma plena.

En un mundo globalizado –como el que vivimos en el siglo XXI–, la creatividad cultural de la sociedad civil no puede esperar por décadas la voluntad y la decisión de los gobiernos de fomentar tal o cual actividad. La sociedad civil, principal destinataria de las políticas culturales, toma parte en las acciones, construye cultura –así como siempre lo ha hecho– e irrumpe en los espacios públicos y privados. En otras palabras, la sociedad civil tiene prisa para "tomar el cielo por asalto".

Hoy estamos a distancia de los tiempos en que se trataba de concientizar a los gobiernos sobre la importancia de la cultura y la educación para el desarrollo. Es verdad que esa asignatura todavía sigue pendiente, pero muchas concepciones han cambiado respecto a lo que se entiende por cultura, políticas culturales y relaciones de poder. Paralelamente a los actores fundamentales de la gestión y las políticas culturales –la sociedad civil y el Estado–, ahora intervienen la empresa privada y el mercado, como agentes centrales en la producción de los objetos y circuitos culturales del mundo contemporáneo (Vich, 2006). Hoy, las políticas estatales deben realizar más tareas para proteger el espacio público de la cultura,

> …el cual ha sido debilitado por el mercantilismo y la privatización de los consumos culturales propios de la globalización. Necesitamos redimensionar y trascender el papel del Estado Latinoamericano en relación con las políticas culturales (Jiménez, 2006: 63).

Actualmente, la hegemonía de Estados Unidos domina el universo cultural, sobre todo a través del cine, la televisión, las músicas de vanguardia y las redes sociales de Internet.

En este ensayo se hará una revisión de la gestión estatal de la cultura en Bolivia desde el año 1952. Por el espacio disponible, priorizaremos necesariamente algunas regiones y áreas culturales del país. El análisis de los distintos momentos por los que pasó dicha gestión mostrará la forma en que las clases gobernantes se relacionaron con este fundamental ámbito de la vida social de un país. Paradójicamente –y salvo escasas excepciones–, tanto los gobiernos de derecha como de izquierda han coincidido en su falta de comprensión de la creatividad cultural de la población. Primero analizaremos brevemente

la visión elitista liberal; luego revisaremos los programas estatistas del MNR, los del periodo de dictaduras, los del retorno a la democracia y, finalmente, las propuestas del nuevo régimen del siglo XXI. Solamente nos acercaremos a las acciones de la sociedad civil de las últimas décadas, pues es en este lapso cuando se encuentra en plena ebullición, con acercamientos y contradicciones.

Al interior de los países siempre circulan intereses muy diversos. En Bolivia, las políticas culturales han sido objeto de importantes cambios de paradigma a lo largo del siglo XX e inicios del XXI. En estos cambios han intervenido sobre todo los factores políticos y económicos. Pero también fueron muy importantes los factores sociales y culturales, tanto de orden interno como de influencia externa, más determinantes en algunos periodos que en otros.

Las políticas culturales están estrechamente vinculadas con los regímenes políticos y las ideologías hegemónicas de cada periodo histórico. De allí emergen sus contradicciones y complejidades, así como las consecuencias que traen consigo. En su momento, cada régimen se decidió por determinadas políticas de Estado para el país, interviniendo en la formación previa de la cultura ciudadana y ocasionando el surgimiento de una contracultura. Las políticas educativas también recibieron la impronta de la visión cultural "oficial", definiendo los contenidos y la reproducción de valores que los gobiernos creían importantes.

Desde la mirada del siglo XXI y la comprensión de la internacionalización de la historia, hoy se puede advertir de manera más diáfana cuánto han influido las sociedades metropolitanas en la constitución de las demás sociedades del planeta. También podemos observar la manera en que las visiones de mundo, especialmente en el campo de la cultura y lo simbólico, se van entrelazando: el fenómeno de la colonización europea, el de la posterior descolonización en Asia y África del Norte, después de la Segunda Guerra Mundial y la influencia norteamericana durante el siglo XX.

Las metrópolis siempre han actuado desde sus propias realidades, características e intereses, imponiéndose sobre distintas sociedades. Recuérdese que, aún después de la independencia del régimen colonial español, las nuevas repúblicas establecieron ligazones con otros poderes coloniales, tanto en lo económico como en lo político y cultural, tomando modelos de organización y valores culturales externos.

No es posible estudiar la historia contemporánea sin tomar en cuenta la presencia europea en los demás continentes, pues se trata de uno de los fenómenos centrales bajo la figura del imperialismo. Por debajo de la piel del colonialismo se encontraba la ideología racista –supuestamente científica (Wiewiorka, 2002)–, útil para considerar a los países europeos como racialmente superiores y, por ende, encargados de la misión de civilizar al resto de la humanidad.

## Las primeras décadas del siglo XX

La modernización en Bolivia fue restringida; no contempló grandes transformaciones sociales, pero fue adoptada en aspectos materiales y laborales. El darwinismo social establecía las relaciones dentro de la población, en función a los nuevos modelos sociales. En este contexto ideológico, las nociones de patrimonio cultural se dirigían únicamente a la cultura europea, alcanzando escasamente inmuebles y bienes tangibles.

El tradicionalismo patrimonialista dio mayor importancia a la salvaguarda de los monumentos y objetos arqueológicos, por considerarlos como parte del patrimonio cultural nacional. También le otorgó un creciente valor a las antiguas culturas andinas, pero esto iba en directa contradicción con la ideología oligárquica, que mantenía al indio en una ignominiosa situación jurídica y social. Entonces, aun cuando el Estado empezó a tomar medidas de protección del patrimonio cultural, todavía era predominante en él una concepción estrecha y reduccionista de la cultura. Dentro de esta concepción, las manifestaciones de arte elaborado dentro de los parámetros europeos ocuparon el centro de la atención pública y estatal –a través de la creación de bibliotecas, museos y el Conservatorio Nacional de Música (1908).

En 1936, después de la Guerra del Chaco, la Alcaldía Municipal de La Paz realizó actividades de mayor envergadura en el campo de la cultura. Fue así que se creó el Premio Anual "Municipalidad" de Literatura, Ciencia y Artes, para las obras consideradas como "la expresión más auténtica del espíritu de superación nacional". También se organizaron concursos de música vernacular y de danzas típicas. Entre 1944 y 1946, el primer

Gobierno Municipal del MNR puso mayor dedicación a la promoción de la cultura popular. Sus miembros veían la necesidad de crear un sentimiento y un pensamiento nacionales, basados en "lo auténticamente boliviano". Todas estas acciones de apoyo al folklore y a las manifestaciones populares son el antecedente de las políticas culturales que más adelante, ya como Gobierno central, el MNR desarrollaría en su plenitud. Uno de los principales logros de esta gestión fue la publicación de Nacionalismo y Coloniaje, de Carlos Montenegro (1944), producto de un concurso de ensayo convocado por la Alcaldía de La Paz. Durante el gobierno del Gualberto Villarroel se creó la Orquesta Sinfónica Nacional (D.S. 297, abril de 1945).

## La revolución de 1952 y la cultura

Hoy, a más de 60 años de la revolución de 1952, un acontecimiento histórico que abrió el paso a grandes transformaciones en el país, surgen algunas comparaciones con el periodo que vivimos en el siglo XXI, en el que se imponen nuevos cambios políticos y de diversa índole. Para evaluar algunos aspectos de las transformaciones culturales provenientes de la gigantesca trama que significó el 52, es necesario tomar en cuenta, por un lado, las políticas culturales específicas, llevadas a cabo por el régimen movimientista. Pero también es muy importante considerar los cambios culturales producidos como consecuencia de los procesos políticos y sociales de la revolución: la Reforma Agraria, la nacionalización de las minas, el voto universal, la migración rural-urbana, la movilidad social y la Marcha al Oriente, entre otros. Estos procesos sociales cambiaron la vida del país. Por eso, hay que partir del entendido de que todos ellos tuvieron una profunda vinculación con la cultura en el sentido antropológico, pues trastornaron la vida cotidiana de gran parte de la población (la situación social, la adquisición de la lengua castellana, las nuevas costumbres urbanas, etc.).

Durante aquel período, las temáticas esenciales de discusión fueron "cultura nacional", "identidad" y "conciencia nacional". Todas estas constituían el nervio del pensamiento de la revolución de 1952, pues esta, como creación intelectual, pretendía sustituir la construcción colonial de sujeción a una oligarquía y de continuación de la situación de dependencia.

Al respecto, Juan José Bautista sostiene el siguiente argumento:

> El movimiento del 52 fue revolucionario porque esa subjetividad egoísta, egocéntrica y solipsista de la rosca criolla oligárquica fue subvertida por otra subjetividad, ya no meramente egocéntrica, regionalista y ególatra, sino por primera vez con conciencia nacional. Por primera vez en nuestra historia aparecían en el escenario político sujetos sociales con pretensión de auténtica nacionalización de las fuerzas políticas sociales, los poderes económicos y la riqueza nacional (2010: 131).

Luego Bautista agrega:

> …la nacionalización es revolucionaria cuando intenta convertir a la nación toda (no solamente a una región, sector o parte de ella) en el "centro" de todos los esfuerzos económicos, políticos, sociales, educativos y culturales (Ibíd.: 131).

Los actores del MNR en el Gobierno no llegaron a ocuparse plenamente de la teorización de la cultura, las transformaciones y la reforma intelectual, aun cuando tener claras estas nociones era algo imprescindible para una revolución de la envergadura que se esperaba. La presión de la práctica inmediata venció a la reflexión. En otras palabras, no se pudo elaborar una propuesta específica sobre la recomposición de la estructura social ni sobre la revolución ideológica y moral que debía sustituir a la clase expulsada del poder –y a su pensamiento. Por otro lado, la concepción –acentuadamente economicista– del Gobierno acerca del tipo de desarrollo que debía seguir el país señaló, de principio, la prioridad de lo económico y la educación técnica. Esto se pudo ver claramente en los discursos de sus altas autoridades durante los primeros años del régimen movimientista. En 1956, cuando Víctor Paz Estenssoro recibió el título de doctor Honoris Causa de la Universidad Mayor de San Andrés, sostuvo que la primera meta en el proceso de la Revolución Nacional era el plan de desarrollo económico, y que recién después se aplicaría una gran política de fomento cultural (Revista Cordillera, 1, 1956: 9-10).

Es importante señalar que este déficit de atención al ámbito cultural también provenía

de las contradicciones ideológicas al interior del MNR. En el nutrido grupo de intelectuales, periodistas, abogados y sociólogos afines al partido convivían desde posiciones marxistas hasta el nacionalismo espiritual de Fernando Diez de Medina. Este intelectual se incorporó al partido después de abril de 1952; entonces fue nombrado Ministro de Educación, participó en la Reforma Educativa y elucubró una mitología andina inventada para el consumo de intelectuales y masas (Rossells, 2010). Este tipo de concepciones impidieron una mayor aproximación a las culturas nativas y su revalorización. Se dio más interés al pasado pre-colombino y al folklore; se priorizó el desarrollo y fomento de la cultura popular, pero esta no dejó de ser considerada como propia de "las masas" de una manera genérica, como el conglomerado heterogéneo de grupos humanos, sin distinción de particularidades étnicas.

De todas formas, el Gobierno inició una serie de actividades relacionadas con la cultura. Creó el premio de artes plásticas "Pedro Domingo Murillo", modelo de apoyo a la creación pictórica, con un premio pecuniario que ha consagrado a numerosos pintores y hoy, luego de más de 60 años, continúa siendo convocado. También otorgó un apoyo importante a la pintura mural revolucionaria de los maestros Walter Solón Romero y Miguel Alandia Pantoja. Su aporte también fue fundamental para el desarrollo de la cinematografía nacional. En el terreno de la gestión cultural y administrativa (como veremos más adelante), desde 1958 se inició la creación de instituciones culturales de larga duración, cuyo interés se fue ampliando hacia diversas manifestaciones del arte, la antropología y la lingüística.

Una de las características predominantes del Gobierno movimientista fue la hegemonía política del partido. Esto le permitió controlar los medios de comunicación, consolidando así su poder, priorizar el culto a la personalidad de Paz Estenssoro e instaurar el triunfalismo del partido desde un enorme aparato propagandístico. Según estudios del sociólogo José Joaquín Brunner (1988), los modelos de propaganda desarrollados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra tuvieron una notable influencia en los países de América Latina. El modelo fascista es el más próximo al que siguió el MNR, con una movilización general de masas y un conjunto de organizaciones que operaban con una ideología débil y un ethos militar/miliciano para mantener la identificación con el régimen, el Gobierno o el Jefe. La función propagandística sirvió mucho para controlar los medios, la prensa escrita, la radio, el cine y los documentales. También se usaron espectáculos, manifestaciones marchas, desfiles y presentaciones en estadios y plazas como medios de difusión de la propuesta movimientista: orientación e información de las masas. Por otra parte, el uso de determinados tipos de música y vestimenta, la exaltación de rituales patrióticos con banderas, la construcción de monumentos, etc., ayudaron a fortalecer esta idea.

Todos estos mecanismos fueron movilizados desde el Ministerio de Prensa y Propaganda, convertido luego en la Subsecretaría de Prensa, Informaciones y Cultura (SPIC). Esta Subsecretaría era dependiente de la Presidencia de la República, al igual que el Instituto Cinematográfico Nacional (ICB), cuyo fin inmediato era el de transmitir en imágenes –y mediante noticieros– la marcha de la revolución. Los símbolos relacionados con las culturas autóctonas fueron profusamente utilizados en actos, publicaciones, premios y logotipos, como el poncho, el ll'uchu, la chalina de vicuña y los símbolos tiwanacotas.

La labor de mayor relevancia del MNR, llevada a cabo en los tres períodos de gobierno, fue la creación de distintas instituciones culturales. En algunos casos, esta política se tradujo en el ordenamiento y la centralización de algunas dependencias en torno a una dirección; en otros, más bien sirvió para la constitución de entidades específicas. Así se cumplía con:

> …el deber del Estado (…) de conservar la tradición cultural boliviana como fuente de estudio y de experiencia, de fomentar el trabajo creativo y de difundir la obra de los valores contemporáneos y del pasado en todos los campos de la ciencia y del arte (Arte. Revista del Consejo Nacional de Arte. N° 2, 1961).

Todas estas instituciones, con ciertas modificaciones, se han mantenido como pilares de la vida cultural nacional. En el caso particular del Instituto Cinematográfico Nacional, su existencia le dio impulso al posterior nacimiento del cine boliviano.

Recuadro 67

### Instituciones culturales creadas en el período del MNR (1952-1964)

- 1953: **Instituto Cinematográfico Nacional**. Fue creado por el Gobierno con el objetivo de promover la cinematografía en Bolivia. Sirvió en primer término para registrar el curso de la Revolución Nacional con decenas de documentales y noticieros, y se convirtió en el espacio donde se formaron los principales realizadores del cine boliviano, como, por ejemplo, Jorge Ruiz.
- 1954: **Departamento de Folklore** (más adelante Departamento de Arqueología, Etnografía y Folklore, dependiente del Ministerio de Educación). Fue un amplio espacio de recolección y centralización de información dispersa. Realizó numerosos y pioneros trabajos de investigación del folklore del país y de las fiestas populares, incluso de investigación sobre comunidades indígenas (Irpa Chico).
- 1957: **Pinacoteca Nacional**. Conformación de la colección de obras de pintores altoperuanos de los siglos XVII y XVIII.
- 1958: **Museo Nacional de Arqueología.** Construido sobre la base del Palacio Tiwanaku de Posnansky, juntó una importante colección arqueológica, paleontológica y antropológica de las culturas andinas.
- 1958: **Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku**. Se creó con el afán de estudiar científicamente el sitio arqueológico de Tiwanaku, y contó con la presencia de arqueólogos bolivianos.
- 1960: **Museo Nacional de Arte**. Una vez restaurada la casa de los Condes de Arana, se constituyó ahí este Museo, con el fin de albergar las colecciones de Pintura colonial y la obra pictórica importante del territorio nacional.
- 1960: **Academia Nacional de Ciencias**. Se creó con el objetivo de fomentar la investigación científica y su difusión en el país en diversas áreas, iniciándose con el apoyo al laboratorio de física cósmica de la UMSA, en Chacaltaya.
- 1961: **Museo Nacional de Arte Popular** (hoy Museo Nacional de Etnografía y Folklore). Se formó como "institución viva y dinámica", para la preservación y difusión del arte popular.
- 1962: **Mercado Artesanal.** Fue creado en los predios de la Alcaldía Municipal, con el objetivo de fomentar, conservar y "rehabilitar" las artes e industrias populares, además de preservar la calidad de los trabajos indígenas (especialmente los tejidos) y servir de espacio de comercialización.
- 1962: **Escuela Nacional de Folklore.** Se fundó con la finalidad de formar estudiosos del folklore, como una disciplina formal que permitiera la investigación.
- 1962: **Ballet Folklórico Nacional.** Fue reconstituido con el fin de revalorizar los motivos autóctonos populares, formar bailarines y difundir las danzas nacionales al interior y exterior del país.
- 1964: **Instituto Nacional de Estudios Linguísticos**. En este instituto se iniciaron los estudios científicos de las lenguas nativas y la literatura oral nativa, especialmente el aimara.
- 1964: **Museo de la Revolución Nacional**. Este museo fue destinado a guardar los restos de los héroes de la Revolución.

Fue en el campo de la cinematografía donde se dieron los primeros frutos del fomento cultural del MNR. Varios trabajos de Jorge Ruiz, como Vuelve Sebastiana, cortometraje premiado en festivales internacionales, vieron la luz en aquel periodo. El trabajo posterior de este cineasta y su proyección a nivel internacional lo hicieron merecedor del reconocimiento de su obra como patrimonio intangible de la Humanidad por parte de UNESCO, en 2013. Con Jorge Ruiz trabajaron distintos guionistas y documentalistas, que más tarde formarían grupos independientes.

Tal como se había previsto, el Ministerio de Educación, a partir de fines de la década de 1950 e inicios de la siguiente, dio un máximo apoyo a la organización de instituciones, programas y actividades culturales. Con su apoyo se alcanzaron varios logros para la cultura nacional. Por un lado, se publicaron reediciones de los estudios sobre arqueología de Arturo Posnansky y del científico viajero Alcides d'Orbigny. También se organizó la Semana Folklórica, destinada a difundir la cultura nativa. Se promovió la participación de pintores bolivianos en muestras internacionales. Otra logro importante fue la reorganización de la Orquesta Sinfónica Nacional y el apoyo al Ballet Nacional; ambas entidades ofrecieron importantes presentaciones. Por último, también se brindó un importante respaldo a la Escuela Nacional de Teatro.




Figura 35. Portadas de Revistas Pututu.
Fuente: Archivo Historico Fundación Flavio Machicado Viscarra (FFMV).

Algunas de estas instituciones han sido estudiadas críticamente por diversos autores, especialmente las pertenecientes al ámbito de la arqueología y el patrimonio folklórico. A 60 años de distancia, es posible constatar la permanencia de varias de las instituciones proyectadas en la década de 1950, algunas con muchas transformaciones en las décadas posteriores, provenientes de diferentes ideas y visiones. Lo destacable es que los creadores de estos espacios y sus colaboradores tenían un vasto conocimiento de los avances internacionales experimentados en México y otros países latinoamericanos en el ámbito cultural. También poseían una acertada comprensión de las particularidades de Bolivia.

La mayoría de las instituciones creadas contaron con apoyo estatal. El Estado dotó de los fondos y presupuestos necesarios para la adquisición de colecciones, la compra o refacción de inmuebles y equipos, la contratación de personal y el establecimiento de espacios de administración.

En abril de 1958, cuando se celebró un desfile en homenaje al sexto aniversario de la Revolución Nacional, pudo apreciarse la adhesión de las masas revolucionarias. Allí asistieron los miembros del partido, los de la administración pública y los cuerpos organizados –como sindicatos, células, milicias y regimientos armados de obreros, mineros y campesinos. Así, el desfile fue copado por "las fuerzas vivas de la Revolución Nacional" (Revista de la Coordinadora de Historia, N° 6, 2003):

> A los acordes de bandas ubicadas frente al Palacio desfilaron con paso de parada el Colegio Militar Gualberto Villarroel, el Politécnico, el Regimiento Escolta Waldo Ballivián, la Escuela de ingenieros, el Escuadrón de Seguridad del Estado

> Mayor (…), fueron largamente ovacionados por el público que llenaba la plaza de armas. [Más tarde] el personal de la Prefectura de La Paz, con la mano derecha en alto saludando con la V del MNR (…). Un bosque de banderas y estandartes nacionales de los 45 comandos zonales del MNR a su paso por la plaza produjo estruendosas aclamaciones y vivas al MNR, a Hernán Siles Suazo y Víctor Paz Estenssoro (Ibíd.)

"Una vez terminado el grandioso desfile" (Ibíd.), se produjo la concentración en la plaza para escuchar a los mandatarios. Las bandas de música primero entonaron el himno nacional y, para finalizar, "Siempre", la canción del MNR, que también fue coreada por la multitud.

A nivel local, la Alcaldía de La Paz fue la institución oficial donde más prontamente se inauguraron numerosas actividades. Juan Luis Gutiérrez Granier fue nombrado alcalde de La Paz en 1953, y así se continuó con la tendencia nacionalista de la entidad municipal desde el periodo de la posguerra del Chaco. Desde ese puesto, Gutiérrez Granier impulsó la formación de una "auténtica cultura nacional". El mismo año se creó el Consejo Departamental de Cultura de la Alcaldía, constituido por sobresalientes personalidades que también participaban en las publicaciones de ese organismo. Se tomaron distintas medidas de promoción cultural, como la creación de la Radio Municipal, las bibliotecas vecinales, el Teatro al Aire Libre y la Biblioteca Paceña. También fue muy importante el concurso –y exposición anual– de artes plásticas Pedro Domingo Murillo, que otorgaba premios pecuniarios a los ganadores, así como la organización de la Discoteca Nacional y la grabación de música vernacular del país.

Varias revistas nacieron durante el periodo movimientista, algunas propagandísticas o de análisis doctrinario, como Pututu, Abril y Pucara. Otras revistas, como Cordillera, Revista Boliviana de Cultura y Arte y Revista del Consejo Nacional del Arte, se enfocaron en los temas culturales. Pero la revista de mayor relevancia fue Khana, Revista

Recuadro 68

### Organizaciones populares en la concentración política de celebración del MNR (1958)

Resulta ilustrativo mencionar a las organizaciones presentes en la concentración política festiva por las características –distintivas en algunos casos y parecidas en otros– de estas movilizaciones sociales respecto de otros períodos históricos:

"Continuaron el desfile la plana mayor de la alcaldía municipal y todas las células municipales. Portaban carteles en grandes tractores con armas pesadas. A continuación los sindicatos de trabajadores municipales y la policía urbana. Todas las células de la administración pública y entidades autárquicas y semi-autárquicas. El Ministerio de Higiene y Salubridad, con todas sus células de enfermeras de Obrajes y con el Sindicato Mixto de Trabajadores en Sanidad. Las milicias armadas del MNR, portando armamento liviano y pesado. Los comandos zonales de Villa Victoria y demás zonas de la ciudad."

"Los diferentes regimientos y sindicatos mineros, las palliris de Huanuni, portando ofrendas florales, el Regimiento Minero 9 de abril y la Juventud del MNR de ese centro minero, el Comando de Pulacayo, los Sindicatos de Trabajadores de Japo, Colquiri, Llallagua, Uncía, Cataricagua, Milluni, Corocoro, las Milicias armadas Mineras "Germán Busch" de Morococala, otros regimientos y cooperativas mineras, todos uniformados y con armas livianas y pesadas, el Sindicato de la Corporación Minera de Bolivia. La legión de Excombatientes, los Sindicatos de Trabajadores Petroleros y las células de YPFB. Todos los Sindicatos Fabriles de La Paz, los trabajadores ferroviarios, ramas anexas y transportes aéreos de Bolivia con sus respectivos sindicatos, la confederación de choferes 1 de mayo, la confederación de trabajadores en construcciones de Bolivia y otras organizaciones afiliadas. Finalmente los sindicatos y regimientos campesinos de las provincias de La Paz y varios distritos del país, algunos regimientos campesinos con bandas propias y pututus. Luego centenares de campesinos en bicicletas con su armamento al hombro."

"Para esta ocasión arribó a la ciudad de La Paz y estuvo presente en el desfile el Presidente del Paraguay, Stroessner."

Fuente: "El pueblo aplaudió el paso de los movimientistas" en: *Historias… de la revolución nacional, Revista de la Coordinadora de Historia*, N° 6, 200, 263, 268.

Municipal de Arte y Letras, sobresaliente por haber permanecido vigente por más de medio siglo (con varias interrupciones relativas a cambios políticos). Entre 1953 y 1959 se publicaron 34 números de Khana, hasta 1967, los números 35 a 37. De allí, en adelante fue suspendida por varios años, publicándose de manera irregular pocos números en las décadas de 1970 y 1990, llegando al N° 48 en 1999. Diez años después, en 2009, salió el N° 50. Ese año, la Alcaldía de La Paz preparó un número especial de la revista, dedicado al Bicentenario del 16 de julio (con el índice analítico de 50 números y toda la colección digitalizada).

Khana (se traduce como "luz y claridad"), bajo la dirección de Jacobo Liberman, aglutinó a varios intelectuales, que formaron la primera generación de personas comprometidas con la búsqueda de nuestras raíces culturales e históricas. Desde los primeros volúmenes de la revista –1953 y 1954– se cubrió diferentes áreas de la cultura nacional. La arqueología estuvo presente con los trabajos de arqueólogos extranjeros (Ibarra Grasso, Metraux y Nordenskiold) y bolivianos (Ponce Sanginés y Maks Portugal). Los artículos sobre literatura nacional fueron escritos por Jesús Lara, Augusto Céspedes, Raúl Botelho Gosálvez, Néstor Taboada Terán, los miembros de Gesta Bárbara y muchos otros poetas que se consagrarían algún tiempo más tarde, como Yolanda Bedregal y Alcira Cardona. Las publicaciones de los esposos José de Mesa y Teresa Gisbert abarcaron desde la historia del arte en Bolivia hasta los estudios dedicados al barroco mestizo. Las artes pictóricas fueron tratadas por el crítico de arte Rigoberto Villarroel. Además, a través de los trabajos de Antonio Gonzáles Bravo, Antonio Paredes Candia y Julia Elena Fortún, el área dedicada al folklore la música y la danza popular tuvo un importante espacio en la revista. Antonio Paredes Candia trabajó en el campo de la recopilación de literatura oral junto con Luis Soria Lens y otros investigadores. Este grupo inició una interesante recolección de relatos.

Este conjunto de intelectuales, además de aportar con artículos en Khana, difundió su obra en libros, conferencias, congresos, recitales y otros. Ellos formaron un núcleo básico de investigación sobre la cultura del país que pervivió por años, y fue continuado por nuevas generaciones. Por otro lado, una pléyade de artistas plásticos y escritores iniciaron la búsqueda de una pintura y literatura nacionalistas, capaces de abrir las puertas a la búsqueda y el reconocimiento de una identidad nacional. Dicha identidad estaba basada en lo indígena y lo mestizo –o al menos era próxima a estos grupos. Los nuevos artistas eligieron el muralismo para plasmar los efectos de la revolución del 52, plegándose a las ideas nacionalistas con la producción de obras fundamentales. En 1960 se creó el Consejo Nacional de Arte y se instauraron los "Grandes Premios Nacionales de Arte y Letras", de carácter pecuniario en las siguientes áreas: literatura, arte, arquitectura, música (elaborada, para bandas y coros y música indígena), artes populares y arte fotográfico (Arte. Revista del Consejo Nacional de Arte, N° 2, 1961).

El periodista y político Carlos Montenegro le confirió un papel central a la historia nacional, pues reconoció que solamente a través de su reescritura se la podía librar de la falsificación oligárquica a la que había sido sujeta la "historiografía antibolivianista". Montenegro consideró que era vital reestablecer los términos de la verdadera historia, como una lucha de clases sociales confrontadas, como la oposición entre la Nación y la Anti-nación.

La historia revisionista fue llevada adelante por los intelectuales nacionalistas y respaldada con la creación de la Comisión Nacional de Historia CNH), en 1954. Contrariamente a la labor de propaganda, los objetivos de esta comisión eran la búsqueda y recopilación de fuentes primarias de información –en archivos públicos y privados– y la adquisición de documentación para repositorios nacionales. De esa confrontación con las fuentes documentales objetivas emergería una historia nacional "científica". Paz Estenssoro nombró a Manuel Frontaura Argandoña como responsable de la Comisión que, como primera labor, realizó un censo nacional de archivos y bibliotecas. Más adelante, el Ministerio de Educación creó subcomisiones distritales de Historia. Estas subcomisiones debían remitir copias de los catálogos de las bibliotecas e informes de las colecciones de archivos públicos y privados a la comisión central.

Hay que recalcar que los esfuerzos del Gobierno no terminaron allí, pues entre 1954 y 1955 la adquisición de incunables, bibliotecas y colecciones de archivos privados recibió un fuerte apoyo estatal. Todas estas adquisiciones fueron depositadas en el Archivo Nacional de

Bolivia. El trabajo de catalogación de las nuevas colecciones –y de otras existentes– estuvo a cargo del reconocido archivista Gunnar Mendoza. La organización sistemática pronto rindió frutos, como la compilación de los Documentos inéditos para el estudio de la minería colonial en Potosí (1549-1825). A partir de 1957, a raíz de una crisis financiera, el proyecto fue perdiendo fuerza, hasta que en 1962 desapareció. Sin embargo, no hay duda de que este fue un impulso serio para la profesionalización de la historia en Bolivia (Gildner, 2013), que continuó luego desde otras instituciones (como el Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de la Alcaldía de La Paz).

La política cultural del MNR pretendió llegar a distintos lugares del país. Para eso creó distintos mecanismos, como los Comités Departamentales de Folklore, en los que estaban involucrados los maestros del sistema educativo. Estos comités organizaron festivales folklóricos y presentaciones de obras de teatro en fábricas y otros espacios de obreros, además de algunos centros mineros de La Paz y Oruro –por pedido de la COB–. En todo caso, hay que resaltar que estas políticas no tuvieron la misma recepción en todos los departamentos del país.

La música folklórica y popular alcanzó un alto nivel de desarrollo y reconocimiento durante las décadas de 1950 y 1960, al punto que este lapso fue conocido como el Periodo de Oro de la música nacional. Muchísimas composiciones e interpretaciones de muy elevada calidad emergieron y se popularizaron en aquellos años, merced a la radio y al impulso que el Estado le dio a la música. La gran intérprete cruceña Gladys Moreno fue el emblema de esta consagración nacional. Moreno recibió varias distinciones, entre ellas la nominación de "Embajadora de la Canción Boliviana" por parte del Gobierno de Paz Estenssoro. Para entregar esta distinción se organizó un acto oficial en la ciudad de Santa Cruz, en 1962. Por mucho tiempo, el nombre de Gladys Moreno estuvo ligado a la idea de la integración nacional.

## ¿Qué quedó de la Revolución Nacional?

Considerando la posterior frustración del movimiento revolucionario de abril, Juan José Bautista (2010) afirma que este más bien fue una especie de "proto-conciencia nacional". El cambio que impulsó el MNR giró especialmente en torno de la re-apropiación de los recursos naturales, que se encontraban en propiedad de empresas extranjeras, pero falló al no tener un proyecto para la nación toda. El Gobierno movimientista priorizó la explotación de los recursos naturales de Occidente –especialmente los minerales–, pero descuidó la del resto del país. También dejó de lado a la población originaria: no la incorporó plenamente en el nuevo proyecto de nación (Ibíd.: 132) y no tomó en cuenta su historia y cultura. Como consecuencia de esto, los símbolos autóctonos, mezclados con las aspiraciones de la modernidad que se buscaba adquirir para el pueblo boliviano, aparecieron como elementos desprendidos de su contexto social e histórico.

Por su parte, René Zavaleta señala que la Revolución Nacional tuvo "una suerte de superficialidad en cuanto al relevo ideológico, o sea la transformación de la ideología profunda del país" (1986). El político y sociólogo sostiene que ello se debió a que "la ideología del MNR era más antipatiñista que antiimperialista y más antirosquera que antiseñorial, plebeísta y democrática" (Ibíd.). Para Zabaleta, fue esa tendencia la que impidió el delineamiento de los fundamentos de una reforma intelectual y moral hiciera de abril "una revolución definitiva del espíritu y la materia del país" (Ibíd.). En 1952, el grupo dirigente de la revolución –en principio democrática– construyó una nueva clase dominante que, lentamente, tendió hacia la ideología clásica de lo señorial.

Con la llamada integración nacional con el Oriente, el Gobierno movimientista inició un flujo de migración que se ha mantenido hasta el siglo XXI, creando un nuevo polo de desarrollo y la constitución de nuevas identidades culturales. Se han observado múltiples y contradictorios efectos en las características culturales y lingüísticas de la población, y este es un producto de las medidas sociales y económicas tomadas a partir de 1952. Con la formación de nuevos pueblos, ferias, actividades organizativas y recreativas, entre otras, los patrones culturales de las ciudades se trasladaron al campo. Tal como ha detectado Xavier Albó, esto les cambió el rostro a las comunidades rurales. El MNR no logró una integración

mayor de la población como producto de sus políticas, sino que promovió el fortalecimiento de la cultura criolla mestiza, y esto impuso nuevas formas de discriminación a la población de origen indígena. En todo caso, hay que señalar que algunos sectores migrantes lograron el ascenso por el camino de la castellanización e integración, llegando incluso a las capas medias del ámbito urbano, pero manteniendo una doble cultura. A la larga, este grupo se convertiría en la nueva burguesía aimara citadina.

Desde otros puntos de vista, la apertura fue favorable para la sociedad civil, pues permitió el acceso a los instrumentos ideológicos y de formación profesional a los habitantes de las nuevas generaciones rurales. Las radios adquirieron un nuevo papel, muy significativo, que revitalizó los idiomas nativos como canal de comunicación de los migrantes en el mundo urbano. Lupe Cajías sostiene que las radios mineras se multiplicaron a partir de 1952.

## Los regímenes militares y la cultura

Fue con el caudillo militar, General René Barrientos Ortuño, que se inició el periodo de regímenes militares en 1964, merced a un golpe de Estado contra sus propios aliados del MNR. Durante su gobierno, Barrientos dio continuidad a algunas de las políticas nacionalistas de cuño desarrollista, pero con una dirección restauradora del antiguo régimen. Barrientos persiguió duramente al movimiento popular y, por otro lado, instrumentó –de manera más contundente y prebendal– el Pacto Militar-Campesino.

En 1967, a Barrientos le tocó inaugurar –tardíamente respecto a otros países– la televisión, que fue principalmente un órgano partidista, como en la mayoría de los gobiernos. ¿Qué cambió este régimen en materia de políticas y gestión cultural? En 1966 se creó el Ministerio de Cultura, Informaciones y Turismo, con relevantes personalidades opositoras al MNR, que promovieron las actividades culturales. Sin embargo, esto se dio en la medida de las escasas posibilidades del presupuesto asignado, un problema recurrente en todos los gobiernos. Mario Estenssoro (pianista y crítico musical) y Roberto Prudencio (ensayista y miembro de la corriente de la mística de la tierra) ocuparon el cargo de ministros, con la colaboración de Renán Estenssoro (periodista) y Alberto Crespo (político e historiador). Entre otras tareas, trataron de crear un fondo para la cultura con el apoyo de la empresa privada. Lamentablemente, dicho fondo nunca llegó a materializarse.

En este periodo de transición hubo serias contradicciones ideológicas entre los intelectuales. Por una parte, según la óptica de los opositores al MNR, al salir de escena el partido hegemónico se había abierto un período de libertad y revitalización de las actividades culturales. El poeta Pedro Shimose (1966) defendió esta postura, sustentado en el desarrollo de las artes plásticas, la música elaborada y la producción literaria y la apertura de librerías y galerías de arte. Otros intelectuales opositores al MNR-denunciaban el entreguismo de la revolución a los intereses norteamericanos. Entre estos se encontraba Sergio Almaraz, que desde 1957 escribió libros y artículos en defensa de los recursos naturales. Sus ensayos medulares, El poder y la caída (1967) y Réquiem para una república (1969) convirtieron a su autor en una figura central de la reconstitución de la izquierda.

¿Cuáles fueron los parámetros de la política cultural de este Gobierno, el primero en crear un Ministerio de Cultura? No debe pasar desapercibido que el sector de cultura fue parte de un ministerio tricéfalo que manejaba también informaciones y turismo. De ahí que, con la visión desarrollista del Gobierno, se privilegiara el fomento del turismo, que se encontraba en alza a nivel internacional. Las artesanías y el folklore se convirtieron en insumos importantes para una industria llamada "sin chimeneas". La visión de que el folklore debía ser preservado fue el argumento para la Declaratoria de Propiedad Estatal de la música folklórica producida por grupos campesinos y "folk", para impedir el uso indebido de otras personas o empresas (D.S. 08396, 19 de junio de 1968). Las artesanías nacionales y las obras de arte popular fueron protegidas legalmente, y se sancionó el Reglamento Orgánico de Turismo (1965). En 1968 se creó la denominación honorífica de "Fiesta de interés turístico" para aquellas fiestas tradicionales que reunieran ciertas condiciones. Para esta actividad se contó con el apoyo del Programa de Artesanías Bolivia, financiado por USAID (1968) para apoyar el Comité de Ferias y Exposiciones. Asimismo, se promulgaron disposiciones

legales de declaratoria de monumentos nacionales, construcciones arqueológicas, históricas y eclesiásticas. Para su protección se crearon comisiones departamentales en todas las capitales.

A la muerte de Barrientos se produjo un interregno y, a la cabeza del General Alfredo Ovando Candia, surgió un nacionalismo militar de postulados revolucionarios y de reapertura democrática. Durante el gobierno de Ovando Candia se promulgó la nacionalización de la Gulf Oil. En el escaso año que la vida política le permitió sobrevivir en el poder al General, la alianza de las Fuerzas Armadas y un grupo de jóvenes intelectuales de izquierda propusieron una "verdadera revolución cultural", capaz de superar la sumisión colonialista y la enajenación del país. La Casa de la Cultura Boliviana, el Banco del Libro, la Fototeca y los Servicios de la Televisión del Estado, entre otras instituciones, se crearon como medios para lograr esta transformación. Las políticas de educación, cultura y ciencia que planteó el Gobierno devolvieron al sector de cultura al seno del Ministerio de Educación.

En 1971, para quebrar un ensayo de la izquierda radical, el General Hugo Banzer tomó el poder mediante un golpe de Estado. De esa manera puso fin al barrientismo y aplicó una Ley de Seguridad del Estado muy similar a las aplicadas en otras dictaduras del Cono Sur. Gobernó bajo un modelo autoritario y antidemocrático. La política cambió de actores; surgieron los grupos de la burguesía agropecuaria del Oriente y la minería mediana del Occidente. El auge económico, la modernización y expansión de las principales ciudades trastornaron la relación de fuerzas a nivel nacional. La población misma había cambiado, convirtiéndose en un país de más de 4 millones de habitantes y con un gran crecimiento del bilingüismo (77%).

En ese entonces, la voz de protesta de los intelectuales opositores estaba representada por Sergio Almaraz, Rene Zavaleta y Marcelo Quiroga Santa Cruz; un grupo de resistencia ideológica al poder dominante. Inspirados en el marxismo, hicieron notar en su prédica y en sus obras escritas la influencia dominante del capital extranjero y la exclusión de la vida pública de la mayoría indígena.

Fue en este contexto de encontradas visiones que se creó el Instituto Boliviano de Cultura (IBC) (D.S. 12302 de 4.3.1975), durante el gobierno de Banzer. Este nació como una institución descentralizada del Ministerio de Educación. La constitución de este organismo puede entenderse como la culminación de las políticas y de las instituciones creadas por los gobiernos del MNR en torno a la cultura, pues el IBC reunió en torno suyo los núcleos de Arte, Arqueología y Folklore. En los hechos, la antropóloga Julia Elena Fortún y el arqueólogo Carlos Ponce Sanginés, dos personalidades sobresalientes en el ámbito cultural, conformaron las bases administrativas del proyecto elaborado por la primera. Desde allí se avanzó hacia nuevas doctrinas e ideologías, sobrepasando así el indigenismo mexicano, que había inspirado a una parte de la élite gobernante del MNR.

Ponce Sanginés, desde su lectura de la sociedad boliviana –a 20 años de la Revolución Nacional–, compartía la visión de dos autores peruanos sobre su sociedad. José Mattos Mar, con otros autores, escribió El Perú actual (sociedad y política) (México, 1970), obra en la que describe a aquel país como dualista en lo económico y social, repartido entre el sector moderno (Lima) y tradicional (provincias), y enfrentando continuamente lo mestizo y lo indígena. Fernando Fuenzalida, junto a otros autores, escribió Perú, hoy (México, 1971), y allí destaca que la sociedad peruana estaba conformada por dos segmentos desarticulados: el dinámico –y abierto a la innovación– y el estático –y pre-industrial.

Ponce Sanginés sostenía que, pese a la meta integracionista de la Reforma Agraria, la población nativa se había mantenido con su propia cultura y lenguas, contraponiéndose a la cultura criolla y occidentalizada. Por lo tanto, para él la solución pasaba por el respeto a esas culturas y la búsqueda de soluciones para contrarrestar la aguda división. Es así que propuso el "dualismo cultural", sumado a "la modernidad tecnológica sin perder el estilo propio" (1975: 26).

Por su parte, Julia Elena Fortún se resistió a la idea de acelerar la incorporación de los grupos marginales, tal como se proponía a nivel gubernamental. En cambio, planteó la necesidad de considerar una integración o interacción equilibrada de intereses y valores de ambas culturas, lo que no significaba la absorción total de uno de los segmentos. Los conceptos utilizados en el discurso de Fortún –coexistencia, interculturalidad, interacción, pluriculturalidad, descentralización

a nivel de las bases– (1975) tenían un acento de excentricidad en los medios oficiales de los años 70. Décadas más tarde, estos fueron utilizados por distintos organismos internacionales y gobiernos, además de la sociedad civil.

Recuadro 69

## Instituciones dependientes del Instituto Boliviano de Cultura

- **Instituto Nacional de Arqueología**,formado por los departamentos de prospección arqueológica, procesamiento de datos, cartografía, laboratorios, los centros de Investigaciones en Tiwanaku, Samaipata, Copacabana, Iskanwaya, Yungas, los Museos de Arqueología de La Paz y otros museos regionales.
- **Instituto Nacional de Artes Plásticas**, que englobaba al Museo Nacional de Arte y a otros museos regionales, al Centro de Investigación y al Departamento de Patrimonio Artístico Nacional. Las tareas del Instituto estaban dirigidas a la catalogación y documentación, conservación y restauración (taller), del patrimonio artístico, histórico y contemporáneo.
- **Instituto Nacional de Antropología**, del que dependían los Departamentos de Investigaciones Etnográficas y de Etnomusicología y Folklore, el Instituto Nacional de Estudios Lingüísticos y el Museo Nacional de Etnografía y Folklore.
- **Instituto Nacional de Música y Artes Escénicas**, conformado por el Departamento de Música y Danza, el Conservatorio Nacional de Música y otras academias y conservatorios fiscales o semifiscales, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Nacional, la Academia Nacional de Danza, el Ballet Folklórico Nacional y la Escuela Nacional de Folklore. El otro componente del Instituto era el Departamento de Teatro, con el Taller Nacional de Teatro, el Taller Nacional de Títeres y otras academias.
- **Instituto de Historia y Literatura**, constituido por los departamentos de Historia y Literatura, el Repositorio Nacional, el centro de Catalogación, la División Nacional de Derecho de Autor y el Banco del Libro. De este Instituto dependían el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.
- **Departamento de Educación Extraescolar**, encargado de las misiones itinerantes de grupos de arte, que visitaban poblaciones de diferentes lugares del país.




Figura 36. Actividades del Ballet Oficial, 1952.
Fuente:ArchivoHistoricoFundaciónFlavioMachicadoViscarra(FFMV).

Fortún, en su obra Política Cultural Boliviana (1976), plantea "un todo equilibrado, que englobe los altos valores de las culturas nativas, los productos del mestizaje y los aportes de la cultura universal". Según ella, las condiciones para conformar una sociedad multiétnica eran: un diálogo intercultural en igualdad de condiciones entre lo nativo y lo criollo, la metodología bilingüe en los programas educativos, la participación efectiva de las mayorías, la distribución igualitaria de bienes y servicios a los sectores urbanos y rurales, entre otras cosas.

Tres ejes estructurales fueron diseñados para el cumplimiento de las labores de este organismo centralizado. El primero fue la dinamización de todos los sectores de la población, implementando programas de cruceros, misiones y trenes culturales para visitar poblaciones marginales con cultura de alto nivel y transformarlas en espacios de movilización cultural. El segundo eje fue la consolidación de programas locales en Casas de Cultura Populares, para convertir a los pobladores en los actores de sus propios programas culturales. El tercero fue la descentralización de la acción cultural desde el Estado hacia unidades

operativas de capitales, cantones, comunidades campesinas y mineras y poblaciones de frontera, manteniéndose el organismo nacional con las funciones de coordinación, capacitación y asesoramiento por medio de Comités Departamentales.

En cuanto a la conformación de la parte académica, el Instituto Boliviano de Cultura organizó en cinco institutos todas las dependencias que, en algunos casos, se encontraban aisladas. Así se cubrió un enorme complejo institucional que, como estructura básica, se mantuvo hasta inicios del siglo XXI. Para cumplir con sus ambiciosos objetivos –y de largo plazo– se elaboraron planes y se aprobó la normativa correspondiente.

Fue en este contexto que se crearon los Comités Departamentales de Cultura, con la participación de instituciones de los gobiernos departamentales y locales (D.S. 14630 del 3.6.1977). Los Comités debían funcionar con fondos económicos propios y con el apoyo económico y la asistencia técnica del IBC. Su objetivo principal era garantizar el funcionamiento de las Casas de Cultura en las distintas localidades provinciales y comunidades campesinas del territorio nacional (Reglamento, 1976). El Estatuto Orgánico del IBC (Resolución IBC, 19 de marzo de 1977) estableció que la Carrera del investigador científico y técnico cultural sería sujeta a escalafón y ascensos por méritos, con el fin de lograr la estabilidad funcionaria y el reconocimiento al trabajo.

Al interior de sus dependencias especializadas, cada instituto realizó numerosos trabajos de investigación, catalogación y difusión del ámbito cultural que le correspondía. Los mayores avances se lograron en la investigación arqueológica de distintos lugares del país, como por ejemplo Samaipata, en Santa Cruz. Se organizaron reuniones especializadas en las distintas áreas, como ser arqueología, antropología, lingüística y otras. Los resultados de estas reuniones por lo general fueron libros y artículos para revistas científicas. Desde el Instituto se publicaron numerosos libros de literatura, historia y cultura. La labor de difusión desde los elencos artísticos fue trascendental, pues llevaron el arte a diferentes regiones de Bolivia. Asimismo, el IBC participó como representante del país en las reuniones internacionales especializadas en temas de patrimonio, políticas culturales, integración cultural y otros. Este fue un período de sólidos vínculos de interacción entre los institutos y las distintas áreas culturales.

Sin embargo, y a pesar de los logros mencionados, el IBC no pudo desarrollar a plenitud sus posibilidades, principalmente por la falta de apoyo económico. Pese a ser una creación del Gobierno, el Instituto no contó con presupuestos y gastos de operación que fueran medianamente aceptables. Al depender del Ministerio de Educación, el IBC fue siempre un apéndice incómodo. De hecho, en sus inicios, el local en el que funcionaba la administración central del Instituto era la parte trasera de un restaurante chifa en la avenida 6 de Agosto.

En todo caso, esta falta de atención política le permitió a la institución una relativa independencia ideológica. A ello se debe la participación de destacados profesionales, que hacia fines de los 70 retornaron al país. Jóvenes graduados –e incluso estudiantes– conformaron equipos de alto compromiso en el trabajo. En cierta forma, su trabajo puso en evidencia la ideología de la clase política, a la que poco o nada le interesaba el fomento cultural. Por otra parte, los intentos de descentralizar los organismos departamentales de cultura no prosperaron más que en dos reuniones, pues la débil respuesta y la falta de fondos de las regiones hacía difícil cualquier alianza y trabajo conjunto.

Por Decreto Ley 15604, el 27 de junio de 1978 se creó el Consejo Nacional Autónomo del Cine-CONACINE, encargado de regular toda la actividad cinematográfica en el país. Este Consejo antecede al actual Consejo Nacional del Cine de Bolivia (CONACINE), entidad descentralizada que tiene las funciones de apoyar, fomentar y desarrollar la actividad cinematográfica y audiovisual nacional. CONACINE Funciona bajo la tuición del Ministerio de Culturas (D.S. 367 de 25.11.2009). El directorio está conformado por representantes del Estado y de instituciones privadas vinculadas a la actividad audiovisual. Estos representantes provienen de la Asociación de Cineastas de Bolivia, el Movimiento del Nuevo Cine y Video Boliviano y la Cámara Nacional de Empresarios Cinematográficos.

La situación de anemia que el Instituto Boliviano de Cultura arrastraba al final de la década

de 1970 fue súbitamente interrumpida por el cruento golpe de Estado de Luis García Meza, en julio de 1980. La represión también llegó al Instituto. Muchos funcionarios fueron apresados y acusados de extremistas; las direcciones intervenidas por funcionarios del régimen.

## La cultura en el periodo democrático

El Instituto Boliviano de Cultura continuó sus labores una vez producido el retorno a la democracia, en 1982. Reconocidas personalidades del ámbito cultural, como Teresa Gisbert, Fernando Cajías, Ramón Rocha, Antonio Eguino y Mario Bedoya, tuvieron a la institución bajo su responsabilidad. En dos momentos de esta apertura democrática, el Instituto buscó fortalecerse con propuestas diferentes a las de 1975. El Plan de 1984, en consonancia con la visión política del régimen de la Unidad Democrática y Popular (UDP), sustituía la concepción dualista de la sociedad boliviana –urbana y rural– por una concepción pluralista, reñida con el colonialismo interno. Asimismo, establecía una fuerte relación entre política y cultura, incidiendo en la liberación, la lucha contra la dependencia y la democratización de la participación cultural. Para atender a estos proyectos se constituyeron el Consejo Nacional de Cultura y los consejos departamentales y provinciales, todos bajo la coordinación del IBC. Estos consejos involucraban a varios sectores de la sociedad: el sector estatal, el social (organizaciones de masas, COB, campesinos) las distintas nacionalidades (aimara, quechua y otras), los sectores regionales y el sector privado.

Continuando con uno de los antiguos objetivos del Instituto Boliviano de Cultura, se impulsó la creación de Casas de Cultura en algunas ciudades y se brindó apoyo a las caravanas culturales y a la catalogación del patrimonio cultural. No hay duda de que la apertura democrática favoreció el incremento de actividades culturales de la sociedad civil, tanto en el cine como en los numerosos grupos de artistas jóvenes de los diferentes rubros. Se realizaron varios festivales regionales y nacionales, como el Luzmila Patiño y un Festival del Charango en Cochabamba, un festival de Cueca en Sucre y el Festival Sombrero de Saó en Santa Cruz, entre otros.

Desde la década de 1980, diferentes gobiernos e instituciones de la sociedad civil lograron que la UNESCO otorgara las denominaciones de Patrimonio de la Humanidad a los siguientes lugares de Bolivia: la ciudad de Potosí (1987), las Misiones Jesuíticas de Chiquitos (1991), la ciudad de Sucre (1991), el Fuerte de Samaipata (1998) y el centro espiritual y político de la cultura Tiwanacu (2000). En 2001 se obtuvo la declaratoria para el Carnaval de Oruro, como "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad". La cultura Kallawaya obtuvo la misma denominación en 2003.

Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, entre 1989 y 1993, se continuó con la visión cultural que tenía el de Hernán Siles Suazo y la UDP, que duró de 1982 a 1985. En el período intermedio –1985 y 1989– estuvo en el Gobierno Víctor Paz Estenssoro, quien tuvo una política muy diferente que analizaremos en el siguiente subcapítulo. Así, en 1990, a 15 años de la creación del IBC, los directivos del mismo presentaron el texto Bases de la Política Cultural Boliviana. En este documento se especifica la finalidad de alcanzar y mantener la identidad nacional boliviana, sobre la base de la recuperación, concertación y unificación de la diversidad de valores culturales". El documento define el concepto de "cultura" como el sustento del desarrollo económico y social, en consonancia con las propuestas internacionales de acceso al goce de los derechos culturales fundamentales: reconocimiento de las potencialidades de cada comunidad, localidad y región de país, alfabetización, educación formal y profesionalización. Asimismo, se protegió el derecho a preservar la historia étnica, la lengua y las creencias religiosas, como parte fundamental de la memoria colectiva de cada pueblo.

El 20 de diciembre de 1991 se sancionó la Ley de Cine, con el objeto de normar, proteger e impulsar las actividades cinematográficas en general. Luego se inició un periodo de ampliación de la infraestructura del Museo de Arte y el Archivo de Santa Cruz, la restauración y entrega del "Palacio Chico" para sede del IBC y la apertura y ampliación de otras salas y museos. Sin embargo, una vez más los planes de extender las funciones del IBC –a partir de acuerdos y convenios con organismos regionales a nivel nacional– quedaron frustrados debido a las graves restricciones financieras. En un determinado

momento, las limitaciones llegaron a tal punto que dejaron sin luz ni agua a las dependencias culturales. Estas se debieron a la falta de interés de algunos ministros de Educación y Cultura del Acuerdo Patriótico. Durante este periodo, por la Ley N°. 1322 de 1992, fue promulgada la Ley de Derecho de Autor.

## La cultura durante el período neoliberal

En 1985 se produjo un cambio radical: la transición del modelo estatal del nacionalismo revolucionario –también llamado Capitalismo de Estado– a un modelo basado en la economía de mercado. La Nueva Política Económica se aplicó durante la cuarta gestión de Víctor Paz Estenssoro. El modelo estatizante había llegado a su total descomposición junto con las fuerzas protagónicas de la Revolución Nacional: el MNR y la COB. Los actores centrales del nuevo sistema fueron los partidos políticos, y su lógica fue la negociación y el consenso. Según Jorge Lazarte (1993), el espacio político estuvo marcado por la multipolaridad, y en ese contexto la Iglesia y la prensa jugaron un importante rol. Desde la sociedad civil aparecieron otros actores sociales de base regional: los grupos étnicos, los informales, la periferia urbana, etc. El mismo Lazarte sostiene que la de 1985 fue una revolución conservadora, invertida a la revolución progresista de 1952.

El Gobierno de Paz Estenssoro estableció como prioridad el saneamiento fiscal, con una serie de medidas drásticas apoyadas en el argumento "Bolivia se nos muere". El Instituto Boliviano de Cultura continuó sin grandes avances y algunos cambios y fusiones internos. En el campo de lo social, se dio a conocer el Libro Blanco y el Libro Rosado dirigidos a abrir camino hacia la Reforma Educativa.

En 1994, durante el siguiente gobierno del MNR , presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), se llevó adelante la Reforma Educativa, inspirada e incentivada por el Banco Mundial. La Reforma tuvo como un elemento novedoso la interculturalidad y la educación bilingüe, que reconocía el derecho de los niños a iniciar la educación en su lengua materna. Frente a la multiculturalidad existente, y con el fin de conducir a la población hacia una visión de interacción entre culturas, se adoptó la interculturalidad como enfoque para la Reforma. Mediante este enfoque se lograría desarmar la asimetría de la sociedad boliviana entre indígenas y no indígenas; una fuerte apuesta contra el racismo y la discriminación. Para la Reforma Educativa se tomaron en cuenta 36 pueblos originarios. Desde la escuela se administrarían planes, programas y textos en castellano, aimara, quechua y guaraní.

Una de las medidas de reorganización del Gobierno de Sánchez de Lozada fue el establecimiento del Ministerio de Desarrollo Humano, un megapoder que contenía los Ministerios de Educación, Salud y Urbanismo, además de una Secretaría de Cultura al interior del aparato gubernamental. Se mantuvo la estructura interna del IBC, solo que con algunos cambios como la creación de Subsecretarías, una dedicada al Patrimonio Cultural y otra a la Promoción Cultural. De esta última seguían dependiendo todas las unidades de formación artística y los elencos de arte. Sin embargo, la jerarquización administrativa en este rubro no equivalía al presupuesto destinado. El Gobierno tendió a transferir el apoyo de las instituciones culturales, dependientes del Estado, a la iniciativa privada. Fue por eso que se propuso la creación de un Fondo de Cultura Nacional –como base financiera para su funcionamiento– que, sin embargo, no llegó a crearse.

Lo que sí hizo aquel Gobierno, inspirado por organismos financieros internacionales, fue tomar una medida que resultó ser fundamental para sostener de los principales repositorios del país. Mediante Ley del Banco Central (1996) se estableció la Fundación Cultural del Banco Central, con la finalidad de proteger, mantener, administrar, promocionar y difundir los bienes culturales y arquitectónicos de los seis Centros Culturales que le fueron encomendados. Hoy, estos repositorios siguen guardando una parte importante del Patrimonio nacional, realizan actividades culturales que difunden los valores e identidades y son los de los creadores de nuevas y diferentes manifestaciones de la cultura nacional. En un principio, la Fundación Cultural tomó bajo su mando a cuatro grandes establecimientos que desde hace años venían recibiendo apoyo de otras entidades: la Casa de la Libertad, el Archivo Nacional de Bolivia y la Biblioteca Nacional de Bolivia (ABNB), la Casa de la Moneda de Potosí y el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF). Más tarde se incorporaron el Museo

Nacional de Arte y el Centro Cultural de Santa Cruz. En un capítulo posterior se incluirá una breve evaluación del alcance de esta Fundación para la cultura de Bolivia.

Por primera vez, el Banco Central entregó locales apropiados para el funcionamiento de las Academias de la Lengua, la Historia y la de Ciencias Económicas, además de un auditorio para los actos centrales. Bajo su administración se organizó, entre otras, una muestra de los Arcángeles de Calamarca en Europa y Estados Unidos.

## Globalización y cultura en el siglo XXI

A los primeros años del nuevo milenio corresponde la culminación de las luchas de los movimientos sociales por alcanzar el poder. Esto se plasmó en el derrocamiento del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, en cuya segunda gestión se dio una cruenta confrontación con sectores sociales que defendían los recursos naturales del país. El movimiento cocalero y otros sectores populares conformaron una alianza que, en 2005, llevó a la silla presidencial de la República –por primera vez en nuestra historia– a un indígena-mestizo: Evo Morales. Grupos políticos como el MIP (Movimiento Indígena Pachacuti) contribuyeron a obtener una centralidad indígena que llevó al país a un choque de paradigmas. De una identidad estatal dominante mestiza, como fue a partir de 1952, en el siglo XXI se buscaba pasar a un modelo ideológico con predominio de lo indígena. La globalización tuvo su parte en ello, permitiendo la ruptura de categorías identitarias del pasado y la conformación o reubicación de nuevas identidades, como efecto de procesos económicos, tecnológicos y laborales (Arnold, 2008).

Durante el primer decenio del siglo XXI, Bolivia fue objeto de grandes cambios en lo económico, político y social. Buena parte de ellos estaba relacionada con los efectos de la globalización que sufrió el mundo en su totalidad, merced del avance de la tecnología y la gigantización del mercado internacional. Los altos precios de las materias primas y los efectos perversos de la crisis económica parecieran haber dado la vuelta al planeta tal como una tortilla, mostrando a antiguas metrópolis europeas en desolados panoramas de desempleo y pobreza. Por otro lado, emergieron nuevas potencias mundiales, cuyas cifras de riqueza acumulada en pocos años –gracias a los juegos financieros– se multiplicaron a niveles de ficción, así como el número de supermagnates cuya religión era el goce individualista (Revista Forbes, 2013). Esto se dio sobre todo en países como China, Rusia e India, además de los países exportadores de petróleo.

Esta situación pervive, y es particularmente interesante en los casos de China y Rusia, que décadas antes habían liderado revoluciones socialistas a nivel mundial. El costo en vidas humanas sacrificadas en nombre de las ideologías superó los varios millones; las prácticas de terror en nombre de las revoluciones hicieron que inmensas fosas en lejanas provincias fueran rellenadas con los cadáveres de los subversivos.

En las últimas dos décadas, las transformaciones en el mundo han sido de tal magnitud en lo tecnológico, económico y comunicacional, que se han volcado por completo sobre el campo de la cultura, un espacio simbólico por excelencia. Aquí es donde se han producido las principales contradicciones entre la ideología y la práctica, produciendo choques y sobresaltos inocultables. Está por verse el impacto real de la globalización en Bolivia, donde han surgido los cines y centros comerciales en las tres ciudades más grandes del país, con patios de comidas y tiendas de objetos de moda que atraen especialmente a los jóvenes, como espacios para ver y ser vistos. Los medios masivos –la televisión, la prensa y algunas radios– promueven el consumo, ya sea de comida chatarra, de automóviles de lujo o de fiestas de quinceañeras.

En este contexto, la falta de programas educativos masivos –imprescindibles y urgentes– sobre temas de salud, nutrición, historia y cultura se hace notoria. Estos programas bien podrían ser difundidos desde medios estatales y privados. En la vida cotidiana urbana predominan las tecnologías y medios audiovisuales: Facebook, Twitter, Skype, Whatsapp; tablets, pantallas táctiles, teclados virtuales, conexiones wi-fi y 3.5G, entre otros artilugios. Hoy el rap alteño convive con la cumbia chicha de los grupos argentinos o mexicanos, invitados por los poderosos bailarines del Gran Poder. En La Paz y El Alto, en medio de otras tribus urbanas se han formado unos 30 clubs de fans del cantante pop surcoreano Kim Hyun Joong, un fenómeno que llena el Teatro al Aire Libre y tiene seguidores

por las telenovelas, la música de otros grupos similares y los peinados. Según la opinión de algunos críticos musicales, se trata más bien de una atracción por la cultura coreana y su forma de vida. Ante semejante situación, tiene sentido preguntarse lo siguiente: ¿quiénes están con la Pachamama y la descolonización?

## Descolonización e interculturalidad en el Estado Plurinacional

Son varios los países de América Latina que han superado la concepción del Estado-Nación, dejando atrás la idea de una sociedad homogénea, occidental, castellano-parlante y blanca. Estos países reconocen la existencia de pueblos indígenas y se autodenominan pluriculturales y diversos en términos étnicos y culturales. El primero en hacerlo fue Canadá, en 1984; le siguieron Guatemala (1985), Nicaragua (1987), Brasil (1988), Colombia (1991), México (1992), Perú (1993), Argentina (1994), Venezuela (1999) y Ecuador y Bolivia (2009).

Al respecto, la nueva Constitución Política del Estado sostiene lo siguiente:

> Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país (Artículo primero de la Constitución de Bolivia, 2009).

Este artículo expresa una especie de ideal múltiple de existencia para la población. El capítulo cuarto se ocupa del reconocimiento de 18 derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas originario-campesinos. De los 18 derechos, varios pertenecen al ámbito cultural: identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidad, prácticas, costumbres y cosmovisión –esta última entendida como la propiedad intelectual colectiva de sus saberes– (Art. 30). En efecto, todos estos derechos están profundamente imbricados en la vida social y la diversidad de los pueblos.

Es por esta razón que, en el capítulo sexto, después de normar la temática de Educación, la Constitución se refiere a la diversidad cultural como base esencial del Estado Plurinacional. Frente a esta realidad, la interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones (Art. 98. I). El Estado asume como fortaleza la existencia de culturas indígenas originario-campesinas, como un depositario de saberes, conocimientos, valores, espiritualidad y cosmovisiones. Por lo tanto, será responsabilidad fundamental del mismo Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país (Art. 98. II y III).

Con estos tres artículos, la Constitución Política de 2009 colocó a la población indígena como el centro, por cuyos intereses debe velar el Estado. Este fue un cambio transcendental en la historia del país, aun cuando en los artículos no se menciona a la población no indígena. En los hechos concretos, la Bolivia del nuevo milenio aún tiene una importante parte de su población viviendo en la pobreza. Sin embargo, en los últimos años se ha producido el incremento de una clase media y nueva burguesía, provenientes principalmente de la informalidad económica cocaleros y cooperativistas mineros en primer lugar. Estos grupos ascendieron gracias a distintos factores: los altos precios de minerales, la presencia soterrada del narcotráfico y el contrabando, la fluidez monetaria y el auge de la construcción.

Según informó el presidente Evo Morales, en base a los datos oficiales del Ministerio de Economía, el Producto Interno Bruto (PIB) en Bolivia subió a 2.794 dólares en 2013, debido al buen momento de la economía nacional. En el informe anual ante el Legislativo, el presidente Morales recordó que en la gestión 2005, un año antes de iniciar su primer mandado, el PIB per cápita en Bolivia era apenas de 1.010 dólares (ABI, La Paz, 23 de enero 2014). El incremento del índice per cápita coincide con la construcción de edificaciones de numerosos pisos en zonas que antes estaban restringidas. Los grandes centros comerciales se han convertido en los centros de recreación, los nuevos "templos sociales" de los que hablaba Beatriz Sarlo, al referirse al Buenos Aires de la década de 1990.

Ofrecer mayor acceso a la comunicación, educación, vivienda y servicios básicos urbanos a la mayor parte de los bolivianos es, sin lugar a dudas, un gran avance para el país. En el terreno de la salud, empero, Bolivia experimenta un gran déficit

de capacidad de recepción de pacientes, de eficiencia y de tecnología avanzada en los centros de salud, tanto urbanos como rurales. El Bono Juana Azurduy, creado por el Decreto Supremo 0066-2009, cumple la importante función de contribuir a la disminución de la mortalidad materno-infantil y la desnutrición crónica en niños y niñas menores de dos años en todo el país. Sin embargo, las personas que no están comprendidas en ese beneficio y las que no logran ser atendidas por falta de un mayor número de hospitales suman cifras muy elevadas. Mientras tanto, la medicina gratuita y el seguro universal de salud aún son utopías. Este tipo de problemas de la vida cotidiana generan dificultades para la consecución del paradigma "vivir bien" (qamaña en aimara y kawsay en quechua), en el que se basa el Gobierno.

La ideología indianista e igualitaria que se impone en Bolivia no coincide del todo con las aspiraciones de consumismo y apego a los gustos burgueses de los nuevos sectores adinerados de ascendencia aimara y de la propia dirigencia gubernamental.

El paradigma de respeto a los pueblos originarios y convivencia armónica con la naturaleza tampoco se toma en cuenta para la atención de los pedidos y requerimientos de algunos pueblos del Oriente del país. Los Ayoreos y otras tribus-naciones continúan viviendo en un deplorable estado de falta de las condiciones mínimas. El caso de los indígenas del TIPNIS es muy preocupante. El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) es un área protegida de Bolivia, convertida en Parque Nacional mediante DS 7401 del 22 de noviembre de 1965 y declarado Territorio Indígena a través del DS 22610 del 24 de septiembre de 1990, merced a las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas de la región. Se trata de la mayor reserva ecológica del país y de una zona de alta diversidad biológica. En los últimos años, las intervenciones gubernamentales para la construcción de una carretera que atravesaría el corazón mismo de la reserva han suscitado diversas protestas en su contra, tanto de los habitantes del lugar como de la población en general. Este tipo de acciones muestra que, aun cuando se invoca permanentemente a la Pachamama en los discursos, en la práctica se atenta contra su integridad, evidenciando lo contradictoria que es la posición del Gobierno respecto a algunos de sus propios postulados.

Más allá de estos problemas, el corpus constitucional actual se abre hacia un universo mucho más amplio. Es ahora que la administración y la gestión cultural deben tomar rumbos de mayor complejidad, entrelazando nuevos campos de acción y diversos conglomerados humanos. Tanto las culturas indígenas de diferentes regiones del país como la clase media y popular urbana deberían ser tomadas en cuenta y converger en nuevas propuestas culturales. El Viceministerio de Descolonización y el de Interculturalidad, brazos del Ministerio de Culturas, están destinados a luchar por la descolonización en las instituciones públicas y por la supresión del racismo en el país. Sobre esta última medida no hay discrepancias. En cambio, existe un amplio debate teórico sobre el concepto de descolonización, fundamental en esta estructura administrativa, pero este aún no alcanza acuerdos. De los varios encuentros, diálogos y publicaciones de los últimos años han surgido muy diversas posiciones, algunas irreconciliables, que incluso alcanzan el seno de los teóricos, los dirigentes del partido de Gobierno y las autoridades de los municipios.

La diversidad de significados y propuestas relativas al ámbito cultural se pudo observar en el Encuentro de 2010 que organizó la Alcaldía paceña, otro actor esencial a nivel local. En él se reconocieron por lo menos dos horizontes de transformación. El primero, planteado por filósofos y sociólogos como José Luis Saavedra, Javier Medina y Simón Yampara, fue entendido como la matriz civilizatoria del jaqi-qullana: ser "gentes con salud y dignidad humana, que viven procesando las energías de la materialidad-espiritualidad" de los ayllus y su "organización semillero, cultivadora de recursos naturales y riquezas" (Yampara: 14). Ellos consideraban el ayllu –aran/urin– como un modelo político insuperable, por el encuentro complementario de opuestos. El segundo horizonte fue planteado por Pedro Portugal, quien visualizó como centro descolonizador a "la sociedad de los Inkas" y su camino de integración y unidad, desestructurado a partir de la invasión española de 1532. Para él, la descolonización significaba "la creación de una nueva identidad nacional fundamentada en los derechos históricos del Tawantinsuyo" (Portugal: 2010: 188). Como se puede ver, había poca similitud entre ambas ponencias. Por

su parte, el horizonte de la sociedad occidental, predominante en los sectores urbanos, carecería de esta aptitud –según esta visión–, debido a su disposición a cultivar "la energía ch'ulla" (impar, suelta) de la que proviene la empresa privada, las leyes de derecho privado e individualizado y otras instituciones.

Los problemas de semejante confrontación de visiones, ideas y opiniones no se dejó esperar. Un ejemplo de ello es Tiwanaku, considerado como el centro espiritual sagrado de la cultura andina, y que es permanentemente utilizado como espacio de ceremonias políticas y sociales. Paralelamente, padece de serios problemas de administración, mantenimiento y conservación a cargo de autoridades comunitarias. Esto pone en peligro el título que ostenta como Patrimonio Mundial de la Humanidad. De hecho, la UNESCO ha enviado funcionarios para constatar estos hechos.

Los conceptos en discusión no son nuevos. El concepto "interculturalidad" fue ampliamente difundido y utilizado por los gobiernos y las ONG durante las décadas de 1980 y 1990, además de las agencias de desarrollo y los programas de educación. El complejo concepto de "descolonización" se ha heredado de los procesos de independencia de los territorios africanos y asiáticos tomados por las potencias europeas, proceso que se llevó a cabo sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX. Es un concepto que admite múltiples interpretaciones. Dada la diferencia de situaciones en que se aplican estos conceptos, José Luis Saavedra sostiene el siguiente argumento:

> ...la descolonización no consiste en el mero ejercicio de la diversidad (multiplicidad o pluralidad), esto es simple y llanamente multiculturalismo y, como tal, absolutamente funcional a la lógica cultural del capitalismo tardío (2010 b: 150).

Así como lo propone Saavedra, el discurso de la interculturalidad, de carecer de un correlato descolonizador, bien podría llevarse a cabo dentro de las lógicas culturales de la globalización neoliberal. Pero Saavedra continúa:

> La descolonización tampoco es la sola indigenización. No resolvemos nada, absolutamente nada, ni afectamos poder alguno vistiéndonos con ropas originarias, colgándonos ch'uspas, portando cruces andinas, mascando (que no akullicando) coca, hablando un idioma indígena u originario (Saavedra, 2010b: 150-151).

Con estos argumentos, Saavedra critica la postura del Viceministro de Descolonización, quien recomendó el uso de trajes folklóricos los días lunes, para ir al trabajo. La propuesta del senador Ávalos, quien sugirió reglamentar la vestimenta de las mujeres, le pareció igualmente criticable (2011: 119-120), así como los festivales de música autóctona, que eran parte de la estrategia central del Viceministerio de Descolonización. Lejos de todo esto, Saavedra plantea que "la verdadera descolonización supone esencialmente la transformación de las estructuras de poder y de las relaciones de poder" (2010a: 125). Esto quiere decir que la transformación debe darse en todos los ámbitos: económico, político y educativo. También implica que las naciones y pueblos históricamente subalternizados empiecen a asumir y a ejercer el poder por ellos mismos, sin la intermediación mestizo-criolla (2010b).

Para entender esta compleja temática de la descolonización en la formulación de políticas culturales es fundamental tomar en cuenta estudios recientes y específicos, realizados por especialistas desde el propio complejo cultural del Estado, del que forma parte el MUSEF. Se trata, por ejemplo, del excelente libro Iglesias y fiestas en el altiplano de La Paz y Oruro. Aproximaciones multidisciplinarias, cuyo "proyecto estuvo dirigido a generar insumos para la formulación de adecuadas políticas culturales sustentadas sobre datos verificables" (MUSEF, 2013). En esta publicación, más de 30 estudios de caso aportan información sobre las complejidades de la religiosidad, la memoria, la identidad étnica y regional y las negociaciones ancestrales en la conformación de los espacios simbólicos sagrados y festivos de la población altiplánica.

Con investigaciones de tanta riqueza, parece extraño incurrir en algunas ideas peregrinas o equivocadas, que emergen de este Viceministerio y de otras autoridades. Un ejemplo de este error es la intención de sustituir la Navidad Católica por la Navidad Andina, realzando la illa y el Ekeko. Contradictoriamente, el Ekeko, que significa prosperidad, abundancia y fertilidad, está totalmente alejado del espíritu de la Navidad Católica y más bien se parece al Papa Noel –y su carga de consumismo–, figura que se quiere expulsar y que también rechaza la fe católica.

## El Estado Plurinacional y la cultura

El Instituto Boliviano de Cultura, posteriormente denominado Secretaría Nacional de Cultura y luego Viceministerio de Desarrollo de Culturas, adquirió el rango de Ministerio de Culturas (D.S. 0001 del 10 de febrero 2009). Esta medida fue un importante avance, pues finalmente la cultura alcanzó representación en el gabinete ejecutivo, al mismo nivel que las demás ramas principales de acción e intervención del Gobierno. Dos Viceministerios conforman su estructura: Descolonización e Interculturalidad. El primero tiene por objetivo descolonizar las instituciones públicas y eliminar el racismo del país. Con este fin, a partir de la promulgación de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación (Ley 045/2010), se han implementado mecanismos y procedimientos destinados a combatir estos males desde la aplicación de políticas públicas. Por su parte, el Viceministerio de Interculturalidad está dirigido a la promoción de la interculturalidad como instrumento de desarrollo y herramienta de unidad e integración entre los bolivianos. Es este Viceministerio el que se dedica a lo específicamente cultural, actuando en dos direcciones simultáneamente: promoción cultural y artística y patrimonio cultural.

Se han dado cambios en relación a los vínculos que unían a algunas unidades existentes anteriormente. Un ejemplo de esto es el Instituto de Arqueología y Antropología, cuyo actual espacio se restringe a algunas habitaciones del Museo Nacional de Arqueología. A su vez, este Museo ha sido reabierto en 2014, después de varios años de remodelación y refacción. El Instituto de Antropología y Etnomusicología resguarda datos y numerosas grabaciones de campo, realizadas durante varios años de investigación en diferentes lugares del país.

Más grave es el caso del Repositorio Nacional, que guarda colecciones invalorables de libros, publicaciones, periódicos y discos. Todo este material ha sido recolectado por disposiciones vigentes sobre el Depósito Legal, cuya finalidad es conservar y proteger la producción editorial, bibliográfica y fonográfica del país y servir de fuente de consulta para los bolivianos. Estos objetivos nunca fueron cumplidos eficientemente; tampoco se llegó a realizar una catalogación completa ni la puesta en servicio de los materiales. Los discos de vinilo han sido guardados en bolsas de polietileno o en cajas de cartón durante muchos años. Esto ha llevado a que muchos gobiernos no valoren estos soportes del Patrimonio Cultural ni el inmueble en el que se encontraban varias oficinas de cultura. Este es el caso de la Casa Agramonte, que, pese a encontrarse en la misma Plaza Murillo –centro del poder político del país–, no recibió la atención que ameritaba. Hace unos meses, ante el peligro del derrumbe del edificio, sus bienes culturales debieron ser trasladados en cajas a otro inmueble.

Asimismo en el área de Música y Artes Representativas –basada en el antiguo esquema del IBC–, una dirección unía a los elencos artísticos con una unidad de Musicología dedicada a las investigaciones. Estudios de musicología y etnomusicología, imprescindibles en un país que valora con preeminencia las manifestaciones musicales, ya no son sustentados ni desde el Estado ni desde las universidades o centros privados. La diferencia con los países vecinos, que tienen instituciones sólidas en estas disciplinas, se vuelve cada vez más abismal.

El 3 de abril de 2009, mediante Decreto Supremo 064, se creó el Consejo Plurinacional de Culturas, así como los Consejos Departamentales de Culturas en los nueve departamentos. Estos Consejos se organizaron con el objetivo de tratar políticas culturales con la participación de los actores de ese ámbito, además de las instituciones oficiales locales y regionales. Sin embargo, la diversidad de intereses de los diferentes sectores dedicados a la cultura dificulta un trabajo conjunto entre el Gobierno, las instituciones privadas y los actores culturales o artistas. Otra dificultad que se ha experimentado es la irregularidad con la que las instancias de Gobierno, ya sean departamentales o locales, otorgan presupuesto para sus actividades.

En la actualidad no existen los mecanismos procedimentales adecuados para la coordinación entre las instancias públicas y los múltiples interesados de la sociedad civil (Argandoña, 2011). Con todo, se siguen realizando actividades como las Jornadas Culturales o el IV Encuentro Plurinacional de Consejos Departamentales de Culturas. Este Encuentro tuvo lugar en Sucre, en mayo de 2012, con el fin de consolidar el nuevo Plan Nacional de Cultura. La idea era que este documento guie el rumbo de la gestión cultural,

logrando finalmente una interacción positiva entre los actores culturales y el Estado a través de sus instituciones. El objetivo de fondo era la formulación de la futura Ley Marco de Culturas.

Analizaré ahora por temáticas la gran diversidad de cuestiones ligadas a la cultura que requieren la atención del Estado.

## Museos estatales

En la actualidad, la parte más sólida de la atención del Estado boliviano a la cultura tiene que ver con el respaldo a los más importantes repositorios del país a través de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (por medio de la Ley 1670, de 1996). El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), el Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), la Casa de la Moneda de Potosí y el Centro Cultural de Santa Cruz son administrados con eficiencia y financiamiento sólido y permanente.

A lo largo de los años, el ABNB y el MUSEF se han convertido en dos de los principales espacios de difusión y discusión de la investigación científica en diversas disciplinas –historia, antropología y sociología– y temáticas –cultura, identidad, racismo– y problemas atingentes a la sociedad boliviana e, incluso, latinoamericana. Actualmente el ABNB acoge (con excelente aprovechamiento de su infraestructura) a las Reuniones bianuales de Estudios Bolivianos. A estas reuniones asisten diferentes especialistas bolivianos y extranjeros. Las publicaciones impresas y digitales de estos congresos sirven para dar cuenta de los avances de las investigaciones. Desde 1998, el ABNB publica voluminosos Anuarios con rica información de investigadores tanto de Bolivia como de otros países.

Por su parte, las Reuniones Anuales de Etnología (RAE) se vienen celebrando en el MUSEF por más de 20 años. Estas ya se han convertido en una tradición que permite el intercambio de conocimiento entre diversos estamentos de la sociedad: investigadores extranjeros, personalidades reconocidas, investigadores poco experimentados y estudiantes, que también participan de las numerosas mesas dedicadas a las distintas problemáticas, desde históricas hasta etnomusicológicas. Estos eventos dan cuenta de un proceso de verdadera democratización del conocimiento.

Las publicaciones impresas y digitales que fueron naciendo de esa rica experiencia conformaron un archivo que benefició a más de una generación de investigadores y estudiosos que, debido al interés que generaron los múltiples temas a tratarse, asistieron en gran número a las reuniones. La nueva dirección del MUSEF ha cambiado totalmente esta modalidad, eligiendo una sola temática por año, con invitados expertos que disertan para el público. El 2013, la temática única elegida fue el tejido indígena en sus diferentes fases de producción, desde la materia prima hasta el acabado y sus significados.

La vigésima octava reunión del MUSEF de 2014 estuvo dedicada a la cerámica, y contó con la concurrencia de investigadores, académicos y empíricos. Las mesas temáticas que comprendían: la creación y tratamiento de la materia prima; los procesos de elaboración del objeto; el



Figura 37. Museo Nacional de Etnografía y Folklore. Fuente: www.musef.org.bo

uso, interrelación de materiales y significados; y la distribución y circulación de los objetos cerámicos. A través de esta nueva modalidad se puede advertir una visión cultural y académica distinta, y también un cambio de paradigma en las iniciativas del MUSEF, inclinado hacia la cultura indígena.

Durante 15 años, la Fundación Cultural del Banco Central publicó la Revista Cultural en números bimensuales. Entre 1997 y 2012 se alanzó la número 79. Los artículos fueron contribuciones de especialistas en diferentes temas de las ciencias humanas y sociales, sobre todo historia del arte, literatura, religiosidad, arquitectura, culturas andinas y del Oriente. Desde 2013, la revista cambió al nombre de Piedra de Agua, con una presentación parecida, de buen despliegue fotográfico, pero un mayor espacio dedicado a la museografía y a artículos sobre temáticas de mayor profundidad y longitud, presentados en forma de dossier. Además, la Fundación Cultural ha publicado varios libros relativos sobre todo al tema del patrimonio cultural del país. Dos libros ejemplares son el Álbum de paisajes, tipos humanos y costumbres de Bolivia (1841-1869), de Melchor María Mercado (1991), y la Historia de la Villa Imperial de Potosí, de Bartolomé Arzáns Orsúa y Vela (2013), en reproducción facsimilar de la única edición completa que existe de esta colosal y magistral obra.

A los museos nacionales de la ciudad de La Paz se añaden los municipales: el Museo Histórico Murillo, el de Metales Preciosos, el del Litoral, el de Tradiciones, el Tambo Quirquincho y el Museo del Niño, entre otros. En este último, gracias a la iniciativa privada, el 2012 se instalaron el Museo de los Escritores Paceños y el Museo dedicado a Franz Tamayo. Por su parte, la Alcaldía Municipal de La Paz ha aumentado los programas culturales, llevando a 22 barrios de la ciudad la Escuela Municipal de Artes. Esta institución, fundada el 2011, recibe a 1.800 niños, jóvenes y adultos en sus cursos de danza, teatro, nuevos medios, fotografía, literatura, artes plásticas y música. La Casa de la Cultura Franz Tamayo, de la Alcaldía de La Paz, cuenta con varios salones de exposición de artes –además la galería más antigua, denominada Cecilio Guzmán de Rojas.

El 2005, la Oficialía Mayor de Culturas de la Alcaldía paceña comenzó a publicar una agenda cultural, llamada Jiwaki (que significa "lindo" en aimara). Poco después, esta se convirtió en una revista informativa de pequeño y atractivo formato a colores, y que invita a los lectores a las actividades culturales y artísticas que se realizan en la ciudad. Con Jiwaki se pretende difundir la diversa vida cultural de la ciudad: conciertos, exposiciones, encuentros, festividades de cada mes –en otras palabras: "la movida artística" de la urbe. Por su carácter gratuito, esta revista es bien recibida por el público; sin embargo, no cuenta con un sistema eficiente de distribución.

Hoy, las ciudades más grandes de Bolivia están abarrotadas de nuevos atractivos y equipamientos culturales y de ocio, producto de la penetración de la sociedad de consumo. Esto ha obligado a los museos a adquirir el carácter de espacio público, a apropiarse de la calle, a salir de los espacios urbanos y a consolidar escenarios más democráticos y plurales, que permiten la libre expresión y discusión. Así, los museos están convirtiéndose en lugares de debate cultural democrático. "La Noche de los Museos", iniciada en La Paz y replicada en algunas de las ciudades más de Bolivia, convoca a una gran cantidad de público a estos espacios. Sin embargo, durante el resto del año las visitas disminuyen dramáticamente, lo que significa que aún no se ha logrado crear un hábito cultural en los visitantes anuales.

## La formación artística

La formación artística en Bolivia enfrenta graves problemas que llevan décadas sin ser resueltos, problemas que atañen tanto a escuelas formales como a los festivales. Hoy, las instituciones públicas y privadas intentan remediar esta carencia, pero muy pocos de estos intentos son integrales, serios y de largo plazo, pero quizás lo peor sea que no existe búsqueda de la excelencia.

Solo mencionaré el caso de la ciudad de El Alto, en donde se creó la Escuela Municipal de las Artes, el año 2001. Esta Escuela, dependiente de la Alcaldía Municipal de la ciudad, cuenta con diferentes carreras en música y artes plásticas. Durante las luchas sociales de 2003, esta institución fue defendida por los propios estudiantes del vandalismo. La Escuela Municipal de las Artes ha servido para recibir a cientos de jóvenes y niños ansiosos de recibir formación artística, y ya ha empezado a dar frutos, de los cuales la formación

de una orquesta sinfónica y de la joven –pero ya reconocida– pintora alteña Rosmery Mamani son los más destacados. Por la calidad de su pintura, en 2013 la pintora fue invitada a exponer en algunas ciudades europeas. El maestro que formó a Rosmery y a otros jóvenes es el eximio Ricardo Pérez Alcalá, quien terminó dando clases personales y gratuitas en su domicilio por falta de pago.

Pese a este extraordinario éxito de la Escuela –hay más de 3000 estudiantes interesados en seguir las distintas carreras–, esta ha estado en grave riesgo de cerrarse por la falta de regularidad, los cambios intempestivos de autoridades de cultura en la Alcaldía alteña y la falta de pago a los docentes. En 2013, la firma de un convenio con el Ministerio de Educación ayudó a que se regularicen las clases, pues a partir de entonces se ofreció otorgar títulos a nivel técnico medio y superior a sus estudiantes. Pero los problemas continuaron al iniciarse el 2014, cuando la propia Alcaldía pretendió tomar las aulas de la Escuela para otros usos y trasladar los cursos a distintos distritos de la urbe. La Escuela de Artes tiene un gran valor simbólico y funcional para la población alteña. Al tratarse de la carencia de infraestructura, seguramente será posible encontrar otras soluciones desde el propio Estado.

En 2012, la Orquesta Sinfónica Municipal de El Alto sufrió el alejamiento de sus componentes: 90 músicos entre 15 y 26 años de edad y el director, el maestro Freddy Céspedes, quien había dirigido a la orquesta desde su creación. La falta de espacios y el escaso interés por parte de la Alcaldía alteña fueron determinantes para que todos ellos tomaran la decisión de emprender un proyecto independiente: la Orquesta Filarmónica El Alto.

El trabajo que debe encarar el Ministerio de Culturas en el ámbito de la formación artística es complejo y delicado, y debería realizarse en conjunción con el Ministerio de Educación. Hace ya años que escuelas de arte de La Paz –como la Escuela de Arte Escénico, por ejemplo– están cerradas, sin profesores o sin directores. En la Escuela de Ballet y el Ballet Folklórico hay bailarines profesionales que trabajan sin remuneración. Año tras año, cientos de estudiantes en los distintos distritos reclaman por ítems para sus profesores, la ampliación de espacios y facilidades mínimas para la enseñanza de las especialidades a las que quieren dedicarse. Cientos y miles de niños y jóvenes en el país desean ser bailarines, actores pintores o escritores. El Estado debería responder de forma positiva a ese clamor, pero esta no es la situación actual.

La letra de la Constitución Política del Estado no solo se refiere a la defensa de las culturas propias, sino también al aprendizaje de las técnicas y conocimientos necesarios para alcanzar grados de excelencia en las artes. El Art. 90 II menciona muy sucintamente la obligación del Estado de promover la formación artística a través de institutos técnicos. Resulta increíble que, en pleno siglo XXI, este mandato no se cumpla.

En Bolivia, para conseguir que los niños desarrollen sus aptitudes y destrezas artísticas –como lo estipula el Art. 82, III de la Constitución– es necesario un peregrinaje por muchos destinos, tal como sucedía en el siglo XX. Si no se ofrece un acceso irrestricto a los diferentes grados de enseñanza artística será muy difícil que algo cambie, pues la exclusión de la mayoría de los niños y jóvenes bolivianos seguirá frenando el desarrollo de nuestras artes. En 2013, el Ministerio de Educación comenzó a realizar algunos esfuerzos –los esfuerzos iniciales– en esta dirección, organizando un congreso que elaborará los currículos académicos para las carreras artísticas de los Institutos y Academias de Arte de las distintas ciudades del país.

No se puede negar que el festival de música que el Ministerio de Culturas organizó en la ciudad de Santa Cruz en 2013, con la presentación del artista internacional Silvio Rodríguez, fue de enorme atractivo y asistencia masiva. Ya se tiene la experiencia de décadas anteriores –especialmente la de 1990, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora–, cuando se organizaron festivales en distintas ciudades del país, especialmente en Sucre y Potosí. Y, resulta claro que invitar a personalidades (como Eduardo Galeano, Rigoberta Menchú) o cantantes famosos como Charly García es algo muy distinto que organizar talleres, seminarios y otras actividades que involucren a la población y a la producción artística local.

Se necesita más festivales interactivos, que apoyen y promuevan la formación y creatividad propia. De hecho, los pocos que ha habido han ofrecido excelentes resultados año tras año. A este tipo de organización corresponde el Festival Internacional de Música Barroca, cuyos resultados son innegables. Fruto de este Festival han surgido

orquestas juveniles e infantiles que hoy, por su elevada calidad, son invitadas al tocar en el exterior. Este Festival también ha servido para que se vuelvan a fabricar de instrumentos musicales en las poblaciones de la Chiquitanía, tradición que se había perdido. Algo similar sucedió en los distintos años del Festival Internacional de Jazz (Festijazz), que se originó en La Paz en 1999, y cuyos beneficios se han extendido a varias ciudades del país. El Festijazz es un verdadero encuentro intercultural y espacio de diálogo, con talleres, invitados internacionales y presentaciones de grabaciones de grupos locales. El crecimiento del Festijazz como espacio de expresión tiene como punto culminante la presentación de grupos de jazz en barrios marginales de la ciudad de La Paz.

Otros seminarios, talleres y cursos en distintas ciudades del país han servido de escuela para que escritores, actores, cineastas, músicos y otros artistas jóvenes adquieran experiencia y formación especializada. También es importante resaltar que estos, en la medida que se fueron consolidando, llamaron la atención de cada vez más público. Todo esto permite que los artistas nacionales puedan lanzarse a proyectos internacionales, lo que ayuda a elevar el nivel de producción, aunque no basta para sustituir la falta de formación que todavía, pese a los esfuerzos, persiste a nivel local.

Esta clase de actividades se caracterizan por tener objetivos y acciones distintos, más cercanos a las políticas culturales –es decir: pensar a largo plazo, pensar en continuidad y sostenibilidad, etc. Los nuevos objetivos deben ser la institucionalización y formación de actores culturales a partir de la enseñanza especializada, la provisión de espacios e infraestructura adecuados y de tecnologías de avanzada y el apoyo económico sólido, que permita a los involucrados dedicarse a tiempo completo a sus tareas específicas.

La infraestructura que el Ministerio de Culturas proporcionó al cantante cubano Rodríguez (armado de escenario, tecnologías de sonido, grabación de videos, marketing, organización, etc.) bien podría ponerse al alcance de todos los bolivianos, con la sola credencial de los méritos artísticos. Sin embargo, este complejo de facilidades no está todavía al alcance de los actores culturales del país; ni qué decir la parte básica, que no es otra cosa que la alta formación artística. Resulta interesante recordar que, además de su talento personal, Silvio Rodríguez es producto de una de las políticas culturales más reconocidas internacionalmente. Cuba posee una institucionalidad cultural de alta especialización tanto en música y danza clásicas –incluso cuenta con un ballet reconocido en todos los continentes–. Esto ha permitido el desarrollo de intérpretes, grupos y corrientes de influencia mundial, además de la organización de seminarios, congresos y premios internacionales en diversas áreas desde la Casa de las Américas. Por otro lado, una adecuada legislación y práctica cultural cubana, vigente desde la década de 1970, ha permitido que la formación artística escolar y superior apunte siempre a la excelencia.

Vivian Velunza, la Viceministra de Cultura de Cuba, sostiene lo siguiente en el portal de la UNESCO:

> La escuela cubana, masiva y gratuita, tiene como fin supremo la formación integral y humanista de los escolares. Para lograrlo, el Ministerio de Educación ha situado a la educación artística como una de las líneas esenciales de los planes y programas de estudio. Ella no se reduce al plano curricular, el cual es de carácter obligatorio para la enseñanza primaria y secundaria con 2 y 3 frecuencias semanales respectivamente, sino que cuenta necesariamente con el componente extracurricular (…). Esta labor se desarrolla a través del trabajo conjunto de los Ministerios de Educación y de Cultura, y se expresa en un Convenio que ha permitido trazar políticas unificadas y coherentes mediante la aplicación de un programa de educación artística que se aplica en todas las escuelas e instituciones culturales del país, a través de comisiones de trabajo conjuntas, que se encargan de su puesta en práctica y medición del impacto (http://portal.unesco.org/culture/en/files/32035/11593674553PonenciaCuba.pdf/PonenciaCuba.pdf).

Es cierto que estamos muy lejos de esos logros que, valga la aclaración, no representan costos económicos inalcanzables, sino una organización seria y la ambición formidable de obtener la excelencia en el campo de las artes. Respecto a la ausencia de formación profesional en algunos elencos y actividades de arte, Julio Barragán, director del Coro Sinfónico Nacional (dependiente del Ministerio de Culturas), a tiempo de renunciar a su trabajo, alegó que "los

coros bolivianos están conformados por cantantes apasionados y no profesionales" (Página Siete, La Paz, 29 de mayo de 2014).

## Infraestructura y espacios para el arte

En cuanto al tema de infraestructura, es interesante anotar que, durante el periodo del MNR, algunas casas señoriales de origen colonial fueron expropiadas con el objetivo de albergar los principales museos. Tal es el caso de la casa de los Condes de Arana, donde se halla en Museo Nacional de Arte, y la casa de los marqueses de Villaverde, sede del Museo de Etnografía y Folklore.

Por la constante necesidad de contar con nuevos espacios para la expresión cultural, si no existen presupuestos específicos –como en 2002 fue el caso de la construcción del nuevo edificio para la Biblioteca y Archivo Nacionales de Bolivia en Sucre a cargo de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia–, una solución posible es la búsqueda de casonas patrimoniales y la recuperación de estas por el Estado. Dos ejemplos de que esto es posible son la casa Agramonte (sin restaurar) o el Palacio Chico, recuperado y restaurado en la década de 1990, y que ahora es la sede del Ministerio de Culturas.

También pueden ser muy útiles las edificaciones sin uso o las que están abandonadas. Una buena muestra de este último caso es el movimiento cultural mARTadero, en Cochabamba, que ha ocupado una casa abandonada. Esta solución ya tiene cuantiosos y muy exitosos ejemplos en numerosas ciudades del mundo. En la ciudad de El Alto se encuentra una ex fábrica de varios ambientes que actualmente se encuentra vacía. Este recinto es propiedad de la Fundación Cultural del Banco Central, y bien podría servir a estos fines. La otra alternativa es trasladar instituciones que ocupan grandes espacios en el centro de la ciudad –como la Cárcel de San Pedro– a edificaciones nuevas fuera del área urbana, y cederlas para fines artísticos y culturales.

En este período de excepcional bonanza económica en el país, ya no existen argumentos válidos para no atender los requerimientos de la cultura. Uno de los principales reclamos de los involucrados en la cultura es la escasez de espacios amplios para el teatro y las artes escénicas en general. Tampoco existen los suficientes espacios para la formación musical. De allí sale el pedido de los artistas para que los escasos teatros y escenarios con que cuentan las ciudades mejoren su infraestructura y los mecanismos de concesión a quienes los necesiten (incluyendo la suspensión del cobro por el uso de sus galerías de artes plásticas, de parte de la Alcaldía Municipal de La Paz. También existe el pedido para que se priorice la concesión del Teatro Municipal de El Alto a las actuaciones culturales, pues siempre está copado por actos cívicos, políticos, comerciales y de congregaciones religiosas.

En todo el país, tan solo ocho ciudades tienen teatros municipales; Trinidad y Cobija carecen de ellos, y en el mejor de los casos utilizan los auditorios universitarios para las presentaciones de este tipo. Como ya vimos, el Teatro Municipal de El Alto casi nunca está disponible. El teatro municipal de la Casa de la Cultura de Santa Cruz no tiene más de 250 butacas. Los dos teatros de Cochabamba no pasan de 800 butacas; el Teatro Municipal de La Paz, construido en 1845, llega a 700. Los de Oruro y Tarija tienen una capacidad máxima de 350 espectadores; el de Potosí de 150. Sucre posee el Teatro Universitario Mariscal de Ayacucho, cuya capacidad es de 600 espectadores.

Las exigencias de los artistas no son posibles de satisfacer en ninguna ciudad del país, pues los teatros importantes cierran programaciones con




Figura 38. MARTADERO, Cochabamba-Bolivia.
Fuente: www.martadero.org

un año de anticipación, dando pie a una lucha sorda entre los grupos musicales y los elencos teatrales por su ocupación. Se requieren con urgencia más escenarios, tanto grandes como pequeños. También se necesita habilitar áreas de mayor extensión, que puedan concentrar diversas actividades y procurar la interacción entre ellas. Esta es la razón por la que diversas agrupaciones culturales han solicitado que el penal de San Pedro de La Paz, de 8.257 metros cuadrados (un manzano entero), se convierta en un espacio cultural. Una infraestructura de ese tamaño sería capaz de cobijar a innumerables grupos de jóvenes artistas que deambulan en busca de sitios para exponer sus obras o para asistir a cursos de formación artística.

La Ley N° 1511 de 1993 sirve de apoyo a este pedido, pero autoridades del Gobierno central pretenden utilizar el espacio para instalar sus oficinas. Esta tensión entre Estado y sociedad civil en relación a espacios urbanos no es nueva. Un ejemplo de esto es el espacio Manzana Uno, en Santa Cruz de la Sierra, que fue conseguido con mucho esfuerzo por los artistas de aquella ciudad, que tuvieron que defenderlo con indignación ante el constante anuncio de desalojo por parte de los parlamentarios cruceños. En la actualidad, Manzana Uno aún no cuenta con el presupuesto suficiente para que sus salas atiendan de forma permanente. Otro ejemplo es el de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN), que dictaba talleres de Iniciación a la Música en el Conservatorio Nacional de Música. Dicha Orquesta, aun siendo respaldada por un Convenio de varios años, decidió suspender sus actividades el año 2014, básicamente por problemas de espacio.

Los espacios dedicados al arte deberían construirse con la misma asiduidad con que hoy se construyen canchas de fútbol de pasto sintético en todos los departamentos. Al menos, así deberían considerarlo el Ministerio de Culturas y el Gobierno en general. La opinión pública percibe la diferencia entre el énfasis que se dispensa a algunos proyectos de interés inmediatista y masivo, contra otros que son frecuentemente postergados porque el largo alcance supone mayor inversión y pocos frutos inmediatos.

En julio de 2014 finalmente fue entregada la infraestructura ferial en la ciudad de La Paz, que se inauguró con la Feria del Libro. La amplitud del espacio cubre con creces las necesidades de este rubro. Sin embargo, como ocurre muchas veces, el campo ferial fue inaugurado sin haber sido concluido aún. Una buena Feria del Libro cubre gran parte de las necesidades de uno de los ámbitos fundamentales de la cultura: la literatura, en la diversidad de sus manifestaciones. A la producción literaria se suma la demás producción bibliográfica boliviana: estudios y ensayos científicos, históricos, sociológicos, políticos, etc., y esta también se verá muy respaldada por la expansión de la Feria del Libro. Además de la Feria, son vitales los espacios que promuevan la lectura, sobre todo las bibliotecas.

En suma, la escasa comprensión de los beneficios y potencialidades de la cultura para los niños, jóvenes y adultos del país es algo palpable. Nuestras ciudades deberían tener escuelas y espacios como los parques que tienen las ciudades chinas, donde conviven e interactúan artísticamente desde los niños hasta los ancianos –que incluso bailan. Más que una diversión, se trata de un encuentro con la espiritualidad y la naturaleza. Hoy, desde el Gobierno boliviano se entrega infraestructura, fondos y vehículos para las sedes de movimientos sociales y federaciones sindicales. La Constitución Política del Estado garantiza los derechos culturales de todos sus habitantes, y este mandato debería garantizar que todos los sectores de la población sean atendidos en este aspecto. Las Academias de la Lengua, de la Historia y de Ciencias Económicas, que en el pasado recibieron sedes en un edificio propio del Banco Central de Bolivia, las han perdido con este Gobierno. Las mismas han tenido que retirarse a salones o aulas de universidades privadas, en un claro gesto del poco aprecio que en Bolivia se tiene por la actividad académica.

## Leyes

La Ley del Libro y la Lectura "Oscar Alfaro" fue sido sancionada en 2013 (Ley 366, 29. 4. 2013); es una Ley complementaria del Decreto Supremo 1768, que la reglamenta. Esta normativa, esperada durante mucho tiempo, determina lo siguiente en el Artículo Primero:

> …tiene por objeto promover el ejercicio del derecho a la lectura y escritura en condiciones de libertad, equidad social y respeto a la diversidad

> de expresiones culturales, generando políticas públicas, planes y acciones de fomento a la escritura, lectura y acceso al libro, la creación cultural, literaria académica y científica.

En consecuencia con lo especificado en este Artículo, se esperan muchas acciones positivas para bibliotecas archivos, lectores y editores de parte del Estado. Esta medida tendrá un fuerte impacto en el consumo cultural, pues modificará la tabla de aranceles para la importación de libros, eliminando el pago del impuesto al valor agregado (IVA) para los libros importados. Hoy, a un año de vigencia de esta ley, los beneficios se reducen al campo de lo impositivo; todavía no se ha conformado el Comité Plurinacional del Libro y la Lectura ni se ha avanzado en la creación del Fondo Editorial del Libro Boliviano.

El 27 de mayo de 2014 fue promulgada la primera Ley de Patrimonio Cultural Boliviano. Una de sus principales disposiciones es la creación del Sistema Plurinacional de Registro del Patrimonio Cultural Boliviano. Su objetivo es "almacenar y gestionar de manera coordinada la información referente al Patrimonio Cultural Boliviano existente" (Art. 22, III), para así ofrecer el libre acceso y consulta con fines investigativos y científicos.

El artículo 54 de la misma Ley dispone la creación del Fondo de Fomento del Patrimonio. La finalidad de dicho Fondo será gestionar y asignar recursos económicos para la conservación, preservación, restauración, promoción e implementación de los repositorios adecuados para el cuidado del patrimonio cultural boliviano. De acuerdo a su Artículo Primero, el objetivo de la ley es normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y salvaguarda del patrimonio cultural del país.

En el último tiempo, el Gobierno boliviano también ha avanzado en la materialización de la Ley de Culturas, presentando un anteproyecto para que lo analicen los gestores, artistas y colectivos culturales de los diferentes departamentos del país. El proceso para la elaboración de esta Ley se inició en 2013, cuando el Ministerio de Culturas, junto con la red Telartes, creó comisiones encargadas de su elaboración. En las comisiones participaron los consejos departamentales de Cultura y varios artistas, instituciones y colectivos culturales nacionales, todos agrupados en la red.

A través de un acuerdo inédito, la red Telartes decidió cooperar en la socialización y discusión de esta norma, con el fin de presentar el documento final a la Asamblea Plurinacional. René Antezana, coordinador de la red, señaló en una entrevista que la socialización de la Ley de Culturas es un proceso histórico para el país: "Bolivia carece de una ley estructural que norme e impulse los procesos culturales que se dan en el país" (Periódico digital El Deber, 9 de mayo de 2014). Luego añadió:

> Como sociedad civil consideramos que la ley debe estar a la altura de los procesos dinámicos de las culturas en el país y su perspectiva debe incluir de manera más clara a algunos actores y al tema de participación ciudadana en políticas y otros (Ibíd.).

La Ley del Mecenazgo y la Ley del Artista se encuentran en medio de un periodo de discusiones y anteproyectos. Pero para que esta última –propuesta por algunos sectores– tenga la trascendencia que se pretende, primero se requiere un cambio en la concepción que se tiene del valor fundamental del trabajo del artista, hoy erróneamente está situado en el nivel del entretenimiento. Los artistas no están incluidos en la Ley General del Trabajo ni gozan de seguro de salud o de la jubilación, cosa que sí sucede con otros trabajadores. Se trata de un problema social que debe ser resuelto perentoriamente; la labor enaltecedora de quienes dejan la vida en su entrega al público o padecen accidentes o largas enfermedades en ese afán artístico debe ser reconocido. Los artistas, compositores e intérpretes construyen la cultura simbólica del país.

Aún no existen acuerdos entre los sectores de la sociedad civil y los gubernamentales para trazar el proyecto de la Ley de Cine. Al respecto, un tema de discusión fundamental es el rol que debe jugar la Cinemateca Nacional en la promoción de la actividad cinematográfica.

## La información y comunicación

Debido a la excesiva cobertura mediática que se otorga a las actividades políticas –ya sean gubernamentales, de la oposición o problemas entre

sectores–, la información sobre las actividades culturales que se desarrollan en la sociedad civil ha sido siempre relegada a un segundo plano. La cobertura que tiene la política genera la sensación de que no ocurren otros hechos, a veces mucho más constructivos y creativos, como son los del campo de la cultura. Este tema ha generado mucha controversia en el ámbito cultural. De hecho, los propios periodistas de los medios –que por un lado pertenecen al Estado y por el otro a la empresa privada– reconocen que este fenómeno responde a las condiciones del mercado. Venden más la cobertura de escándalos, las denuncias de la vida política y el fútbol que la obra de creadores extraordinarios. Es así como las exhibiciones de los grandes maestros de la pintura que tiene este país, los conciertos o presentaciones de libros de nuestros reconocidos músicos o escritores, la apertura de nuevas escuelas o exposiciones, etc., pasan casi desapercibidos por la sociedad boliviana.

A todas luces, la difusión del arte se ha convertido en un problema de tipo mercantil. Hoy los medios de comunicación se sujetan a las noticias y la publicidad, que venden más y pagan más, sin tomar en cuenta que el poder de los medios debería estar profundamente comprometido con la defensa y la promoción de la cultura. Penosamente, los artistas dependen de la atención que les prestan los medios estatales o privados de comunicación, que a su vez piensan que cumplen su parte si les otorgan escasas páginas de revistas, espacios lineales en los suplementos dominicales o una página –e incluso menos– en la prensa escrita cotidiana. Estas restricciones son frecuentemente denunciadas por los artistas jóvenes y gestores culturales, que muchas veces ni siquiera logran introducir breves noticias sobre sus actividades. En sí, los medios escritos y audiovisuales aportan muy poco a la integración del país, pues permanecen aislados en sus ciudades o regiones de origen, de cuyas actividades culturales poco o nada se sabe en otros lugares del país. Esta información bien podría servir para generar vínculos productivos, que fomenten el crecimiento y la transformación más allá de lo local o regional.

Los medios tienen la responsabilidad de formar al público en sus preferencias, ofreciéndole buena y atractiva información cultural. Por el poder que tienen, debieran abrir sus puertas al reconocimiento y la validación de la creatividad de los bolivianos, pues es en la cultura donde se forman los valores de la sociedad y donde se alimentan las energías y la identidad de la población. Como bien señala Edwin Guzmán Ortiz:

> …lo que no termina de entenderse aún dentro de la lógica cotidiana es que la cultura es como el aire que se respira a diario, es el caldo vital donde la gente baña su humanidad y sus entrañables deseos, donde sufre crea, lucha y termina siendo lo que es, junto a los otros (2013).

Frente a esta situación, en los últimos tiempos se han producido cambios importantes. Por un lado, el empoderamiento de las tecnologías de la información por parte de las asociaciones de artistas y gestores culturales de la sociedad civil –tema que trataremos más adelante– es una realidad cada vez más palpable. Por el otro está la creación de Canal Cultural del Estado.

## La sociedad civil y la cultura

Como se puede observar a lo largo de la historia boliviana, las mayores acciones y la permanencia de las instituciones culturales del país fueron posibles gracias al aporte y la movilización de la sociedad civil. Prestigiosas galerías de arte de La Paz, como las galerías EMUSA –fundada en la década de 1970–, NOTA y TAIPINQUIRI –años más tarde–, han sido sustituidas por otros espacios de fundación más reciente, como Alternativa Centro de Arte, Galería 3S, Espacio de Arte Mérida Romero y Espacio Abierto Blanco, ubicadas en la zona Sur. En la actualidad se mantienen la Galería de Arte de la Alianza Francesa, el Instituto Goethe, el Centro Cultural de España, el Centro Iberoamericano de Artes Escénicas, el Círculo de la Unión, la Galería Arte Plaza y la Galería Salar, todas ubicadas en el centro de la ciudad o en el barrio de Sopocachi. Pero también han nacido nuevos espacios alternativos, en sus ambientes que albergan múltiples actividades. Este es el caso de “El Desnivel”, “El Bunker” y nuevas galerías de arte, además de numerosas cafeterías que están ansiosas por recibir a los artistas. De este estilo es el Centro Cultural (editorial y museo) El Aparapita, ubicado en Villa San Antonio, a cargo del activo gestor cultural Elías Blanco Mamani.

Los signos han cambiado, pero aún permanecen los objetivos de promover la cultura en nuevos formatos. En los últimos años se han abierto nuevos espacios en el centro y Sopocachi: el Café Cultural Mestizo, el Centro de Artes Mamani Mamani, la Galería Medinart, el Centro Cultural El Ombligo del Mundo, Almatroste, Expo Arcana y el Espacio IMA.

Las bienales de artes plásticas dieron un impulso fundamental a la creación artística. Un ejemplo de esto es la Bienal INBO, organizada por Inversiones Bolivianas, que se inauguró 1975 y se mantuvo durante dos versiones más, 1977 y 2000. A partir de 1999, se han organizado siete versiones la Bienal Siart, gracias a la acción de la gestora cultural Norma Campos. Inicialmente fue un Salón Internacional de Arte, pero a partir de 2005 se convirtió en Bienal Internacional de Arte. Desde entonces, se han realizado ocho versiones hasta 2014 y cada una contó con un programa distinto y complejo, con invitaciones a artistas nacionales y extranjeros, concursos y exposiciones internacionales y actividades enfocadas a la formación en el arte contemporáneo. Como bien dice Norma Campos, el Concurso Nacional de Arte Joven ha generado un impulso fresco y pleno dentro la expresión visual de la última década (http://www.arte-sur.org/es/bienales/bienal-internacional-de-arte-siart/).

Por su parte, el Salón Municipal de Artes Pedro Domingo Murillo, creado en 1953, ha convocado sin interrupciones hasta el presente a numerosos artistas, sirviendo de ejemplo a iniciativas de otras ciudades del país.

En 2014, en la ciudad de Santa Cruz se convocó a décima versión de la Bienal de Arte, dedicada especialmente al arte contemporáneo, y a la XIX Bienal de Artes Visuales Bolivia. En Cochabamba, con el auspicio del Centro Pedagógico y Cultural de la Fundación Simón I. Patiño, se ha convocado a la III Bienal de arte contemporáneo.

En la década de 1970 se gestó la Cinemateca Boliviana, una entidad dedicada a preservar el patrimonio fílmico boliviano que contaba con el apoyo fundamental de personalidades como Amalia de Gallardo (en esa época encargada cultural de la Alcaldía), Carlos Mesa Gisbert y Pedro Susz, quienes fueron los directores de este proyecto. Algunas instituciones también dieron su importante apoyo. En esa misma década surgió CONACINE, propiciando el desarrollo de la producción cinematográfica del país. En la actualidad, con el abaratamiento de costos al usar el sistema digital, se ha producido un gran número de películas nacionales, y si bien el nivel es irregular, hay algunas de gran calidad y que se han ubicado en un lugar expectante en el cine mundial. A nivel regional, desde 1997 existe el Fondo Iberoamericano de Ayuda del programa Ibermedia, que contribuye con financiamiento (con sistema de cuotas nacionales) para la formación y difusión de la industria audiovisual iberoamericana. A estos fondos acuden los productores y autores bolivianos de cine y televisión. Paralelamente, estos han creado programas como el Laboratorio Cinematográfico Bolivia Lab, que tiene convocatoria a nivel latinoamericano.

Distintas ideas progresistas y transformadoras se conjugaron de gran manera en el Movimiento Cultural "Para seguir sembrando. Para seguir soñando", que tuvo vigencia entre 1997 y 2002. Este movimiento, que se presentó como una agrupación multitudinaria, llegó a convocar a algunos miles de trabajadores culturales de diversos campos, con el objetivo de mostrar al Estado la necesidad de tomar acciones en relación a la cultura. En 2002, el Partido político Movimiento sin Miedo (MSM) entregó a ese movimiento ciudadano la conducción de la Oficialía Mayor de Culturas de la Alcaldía de La Paz.

La Orquesta Experimental de Instrumentos nativos, creada por Cergio Prudencio en 1979, es una propuesta innovadora. Esta Orquesta elabora música a partir de instrumentos nativos, lo que conlleva una filosofía de valoración de lo autóctono, y ha logrado la formación de una interesante generación de jóvenes músicos y el reconocimiento internacional. En el área musical se mantienen agrupaciones como la Sociedad Coral (1966) y la Sociedad Filarmónica (1972), entre otras. En los primeros años del siglo XXI se conformó el Centro Sinfónico Nacional, sede de la Orquesta Sinfónica Nacional. Este ambicioso proyecto pudo realizarse gracias al apoyo de la Fundación a las actividades de esta institución nacional. Por otra parte, la renovación de sus programas trajo consigo un importante incremento del público entre los años 2002 y 2007, conquistando principalmente a una audiencia joven. La Orquesta Sinfónica cuenta con apoyo oficial para el pago de sueldo de los músicos.

En el campo del teatro se han dado muchas transformaciones en los últimos 50 años. El

Teatro Universitario de los años 60, activo en algunas ciudades del país, tuvo mucha trascendencia en su tiempo. Cochabamba, con el teatro IBART y los Festivales Julio Travesí, fue un centro importante entre 1965 y 1980. Por su parte, el teatro en Santa Cruz creció a partir de la década de 1980, con el apoyo de la Casa de la Cultura y con Casa Teatro como su principal recinto. En La Paz, además de los talleres del Instituto Boliviano de Cultura entre 1970 y 1990, se cuenta –y se contó en el pasado– con grupos importantes, centrados en distintos directores y actores. Según Willy Muñoz, en algunos momentos la escena paceña se centró en torno a tres actrices: Rose Marie Canedo, Ninón Dávalos de Kushner y Maritza Wilde, actrices que llegaron a ser "las mejores directoras de teatro" (1992). En La Paz, el apoyo de las instituciones culturales fue fundamental para el desarrollo de este movimiento. En 1988 se celebró el "Primer Encuentro Nacional de Teatro", promovido por la Alcaldía de La Paz, en el que tuvieron lugar distintas presentaciones y talleres de teatro. Más tarde sobresalió el trabajo del actor David Mondaca, quien también ofreció múltiples talleres de formación teatral.

Ese tipo de organización, conformada por muchos actores y directores pero pocas instituciones, difícilmente alcanzó cierta continuidad en el pasado. Sin embargo, esto cambió desde fines de la primera década del siglo XXI, al conformarse distintos colectivos: En un colectivo los actores pueden trabajar un día con un director y otro día con otro. Esto ha permitido una mayor producción de obras en relación a la década de 1990 y principios del 2000, según la actriz Soledad Ardaya. El otro cambio trascendental es que, en los colectivos, gente con buena formación en teatro ahora se encarga de la gestión de sus propias obras. De ahí que en 2013, se ha realizado el "Primer Encuentro de Gestores Teatrales (…). [El colectivo] es un teatro de autogestión, en el que los artistas también hacen de productores" (Ardaya, 4 de marzo de 2013).

Además, los colectivos sirvieron para la creación de espacios alternativos. Según Soledad Ardaya, estos colectivos están inmersos en "búsquedas estéticas y dramatúrgicas", temas cotidianos cercanos a la sociedad y a una diversidad de posibilidades estéticas y propuestas sólidas (Ibíd.).

El Festival de Teatro de La Paz (FITAZ), dirigido por Maritza Wilde, organizó varios festivales teatrales en la ciudad de La Paz desde 1999. La Fundación Visión Cultural, a cargo de Norma Campos (una de las gestoras culturales más activas), trabaja en varias disciplinas, desde la organización de las Bienales de Arte mencionadas, los congresos dedicados al arte y literatura del barroco, que atraen al público internacional, hasta la formación de líderes y gestores culturales a nivel local. Por su parte, desde el 2005 que Acción Cultural se dedica a las artes visuales, y ha incursionado en la organización de exhibiciones y publicación de fotografías de Bolivia y el mundo bajo la dirección de Sandra Boulanger, con largas listas de fotógrafos bolivianos y extranjeros, que participan con exposiciones, foros y presentaciones. Este encuentro se lleva a cabo en diferentes centros culturales de la ciudad de La Paz.También es importante el trabajo de Radio Deseo, que tiene interesantes programas dedicados a las culturas y a temas alternativos, así como el de Martha Monzón, con grupos de teatro e investigación cultural.

Como instancia privada extranjera, el Espacio Patiño, dependiente de la Fundación homónima, con sede en Ginebra (Suiza), apoya las artes por medio de distintas actividades culturales. Esto lo hace especialmente desde sus galerías de exhibición, la biblioteca CEDOAL, especializada en literatura latinoamericana y boliviana y el Centro de Información de la Música Boliviana, que ofrece grabaciones de los grandes protagonistas de la música del país. Dos fundaciones privadas en La Paz, la Fundación Huáscar Cajías y la Fundación Flavio Machicado Viscarra (FFMV), están dedicadas a la difusión y formación en la cultura y las artes.

El espacio La Manzana sobresale en la ciudad de Santa Cruz, promoviendo el uso del espacio urbano en el mismo centro de la ciudad. La Manzana ha cambiado la concepción de arte, antes exclusivo para las élites, pues ahora las muestras se exponen en la plazuela que rodea el edificio, abriéndose a quienes transitan por la plaza principal y calles aledañas. La asociación civil Pro Arte destaca en la organización y promoción de los festivales internacionales de música barroca en la Chiquitanía, las orquestas juveniles y la formación de bibliotecas para niños y jóvenes. En Urubichá, Guarayos, se han creado una escuela de música y una orquesta sinfónica.



Figura 39. Música barroca boliviana: Orquesta Urubichá. Fuente: Periódico Los Tiempos, 25 abril de 2009.

El mARTadero en la ciudad de Cochabamba es un espacio que se dedica a las artes escénicas, visuales y a la música. Se trata de un megaproyecto integral de desarrollo artístico en proceso de consolidación, un "vivero de las Artes" para el cambio social. Según la información que brinda la página web:

> Hoy por hoy es el proyecto cultural más innovador y de mayor crecimiento de Bolivia, y un ejemplo en la región, gracias al trabajo de más de treinta personas que a lo largo de este tiempo han colaborado con su esfuerzo y capacidad de gestión. Parte importante de dicho logro son las siete áreas de creación artística que plantean como objetivo el fomento y desarrollo de su ámbito artístico en la ciudad de Cochabamba, no solo a través de exposiciones, sino, además, mediante la activación de dispositivos de formación y desarrollo con una especial inclinación hacia el arte emergente (http://www.martadero.org/arte-cultura/quienes_somos.html).

La organización trabaja desde 2008, y ya ha recibido más de 200.000 asistentes en un espacio que antes estaba en desuso, pero que ha sido completamente recuperado. Es un ejemplo de lo que se puede hacer en otras ciudades. Se trata del ex matadero de la ciudad, construido en 1924, que ha sido cedido por 30 años para el desarrollo autogestionario del proyecto. De la gestión cultural se encarga:

> …un equipo profesional multidisciplinario y abierto, altamente cualificado en la promoción intercultural en ámbitos locales, nacionales e internacionales, con autonomía de gestión y carácter asambleario (Ibíd.).

Pese a las dificultades que siempre acechan a las iniciativas de la sociedad civil, la creatividad cultural de los bolivianos permanece incólume, junto con la de los promotores y gestores. Un buen ejemplo de esto es la escuela y compañía de teatro Los Andes, organizada por César Brie en Yotala (Chuquisaca). Este es otro proyecto estrella más, que sirvió enormemente a la formación de jóvenes actores y creadores. Hoy, estos llevan sobre sus hombros la responsabilidad de mantener en alto el nombre de una compañía que ha conseguido una buena reputación internacional, y cuyo gestor principal abandonó el grupo y la ciudad por conflictos ideológicos. También existen nuevos grupos teatrales de trayectoria internacional, como Escena 163 y Textos que migran que se afirman en la escena paceña. Otro grupo valioso es ArtyNoa, formado por Wara Cajías, coreógrafa formada en Alemania y gestora cultural de grupos de actuación en las artes escénicas, como el Radio Teatro en vivo. ArtyNoa también realiza programas para formación en danza y teatro.

En la ciudad de El Alto, la Casa Juvenil de las Culturas Wayna Tambo, ubicada en el barrio Villa Dolores, es hoy una referencia ineludible, así como el Teatro Trono y el Museo Antonio Paredes Candia, de la misma ciudad. Este último fue conformado por el aporte realizado por este investigador folklorólogo, quien donó parte de su colección de pintura y escultura y de su biblioteca.

Para la cultura alteña fue inspirador el trabajo de Abraham Bojórquez –cuyo nombre artístico era Ukamau y Ké–, un músico rapero y compositor que falleció muy tempranamente, en 2009. Este artista lideró una corriente de hip hop contestatario, cargado de crítica social y fundamentalmente ligado al tema de la identidad andina en su ciudad. Esta corriente, que sigue en vigencia, es parte de la respuesta juvenil en relación a la posibilidad de unir o fusionar la música internacional y globalizada con las raíces de identidad aimara. Hoy, distintos jóvenes alteños seguidores de Bojórquez continúan con la práctica del break dance, el rap y el hip hop, y utilizan estos medios para reivindicar sus raíces y plantear sus esperanzas o su descontento por las desigualdades sociales y económicas del país, especialmente presentes en El Alto.

La falta de recursos y apoyo no ha impedido la organización de colectivos de comunicación alternativa a los jóvenes de barrios populares. Un ejemplo interesante de esto es la Escuela Popular para la Comunicación, ubicada en el barrio de Chasquipampa de la ciudad de La Paz, donde se ofrece formación en artes plásticas, cine, radio y teatro. Con el apoyo de otros colectivos de mayor experiencia, la Escuela Popular también exhibe películas y conciertos de rap, hip hop y espectáculos de break dance a los vecinos. Los grupos que se reconocen como "marginados de la dinámica del poder" funcionan de esa manera. En el Plan 3000, barrio popular de Santa Cruz, el obispo Castellanos ha creado –entre sus varias instituciones– la magnífica Escuela de Teatro que, por el momento, es la más importante de Bolivia.

Es inexcusable mencionar a las instituciones culturales que, por diversos motivos, desaparecieron en los últimos años. Una de estas es la Fundación Cultural Quipus, fundada en 1985 como organización sin fines de lucro. Su gestor, Peter Mac Farren, logró la creación del Museo del Niño El Kusillo, ubicado en la ciudad de La Paz. Dicho museo, una vez concluido el periodo de comodato, pasó a manos de la Alcaldía con renovadas propuestas. Mediante la gestión de Mac Farren, Quipus también instaló el museo para niños de Sucre. En aquella ciudad funcionaron por bastante tiempo tres espacios culturales de gran importancia, actualmente desaparecidos. Una de ellas era la Fundación La Plata, dependiente de una entidad crediticia y que se dedicaba a la promoción de la literatura y las artes a través de concursos y publicaciones. La Fundación Pachamama, creada y sostenida a partir de donaciones obtenidas en Cataluña (España), creó la Biblioteca Pachamama en un gran edificio construido en terrenos municipales. Sin embargo, la falta de apoyo estatal para solventar los salarios de los bibliotecarios provocó el cierre de un lugar que servía a ciudadanos de todas las edades. Finalmente, ASUR (Antropólogos del Surandino) trabajó por más de 20 años en conexión con comunidades rurales de Chuquisaca y Potosí, fomentando proyectos de etno-desarrollo y creando un museo de Arte Indígena. Pero, por decisión de la Gobernación de Chuquisaca, ASUR perdió el comodato de la Casa Capellánica, y fue así que 13 salas de exhibición de textiles etnográficos fueron cerradas, y las colecciones trasladadas a otro lugar.

Estos ejemplos muestran la contradicción que existe entre algunas acciones particulares y el propósito oficial de impulsar la iniciativa privada. La vocación, el trabajo y esfuerzo que por décadas pusieron ciudadanos bolivianos no son correspondidos por el Estado. Esto llegó al extremo de la pérdida de instituciones ya consolidadas, que brindaban un servicio muy importante a la comunidad.

Dentro de este tema es necesario anotar el cierre de la Radio Cristal, abierta en 1973 y que hasta su cierre, en 2013, dedicó sus cuarenta años de existencia al servicio de la cultura. Su fundador y director, el periodista Mario Castro, atribuye el fin de una larga y valiosa trayectoria a una decisión personal, pero también a las dificultades que atraviesan las radios tradicionales y la competencia que generan los medios digitales y el contrabando. En 1993, Castro fundó la Radio Cumbre, que emitió música clásica hasta el 2007, año en que cerró.

Con la renovación de los grupos culturales y la difusión de las nuevas tecnologías a nivel nacional, las redes son cada vez más necesarias en los ámbitos de acción cultural. Así nació TELARTES, bajo el concepto de cultura en red. TELARTES es la primera red de articulación del sector cultural en Bolivia, y funciona a través de una página web. Esta red fue impulsada por gestores culturales de ocho ciudades del país. En su plataforma se precisan algunos de sus objetivos más importantes: "…que los protagonistas del quehacer cultural desarrollen capacidades de gestión, de debate, de propuesta

y de presión para incidir en las políticas públicas que hacen a la cultura y el arte". El portal cuenta con el apoyo de la organización holandesa Hivos. Los siguientes colectivos forman parte de esta red:

Reuadro 70

Red TELARTES

| Ciudad | Instituciones y colectivos acoplados a la red TELARTES |
|---|---|
| Santa Cruz | Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), Fundarte, Manzana Uno y Animal de Ciudad |
| Cochabamba | mARTadero, Colectivo Katari, Gangocho, Red de Centros Culturales y Tapeque |
| La Paz | El Búnker y El Desnivel |
| El Alto | Compa y Wayna Tambo |
| Tarija | Casa Cultural y Centro Ágora |
| Oruro | Comité de Gestores Culturales |
| Potosí | Casa Cultural Phispawarmi |
| Sucre | Centro Pukañawi |

Los objetivos de TELARTES son: cerrar las brechas producidas por la dispersión, integrar a la diversidad de culturas y manifestaciones culturales y construir redes de cooperación y promoción intersectorial (página web: www.telartes.org.bo). Hoy, gracias a su trabajo, los artistas y actores culturales se encuentran más organizados y relacionados entre sí, y mantienen una actitud propositiva y crítica. Respecto de las diversas leyes pendientes en el campo de la cultura, ellos sostienen reuniones con las autoridades para dar a conocer sus observaciones. Los comentarios y resultados de las reuniones se difunden a través de correos electrónicos. El proyecto se inició con la participación en el Diálogo de artistas para la Ley del Mecenazgo de Bolivia.

Frente a las dificultades con que tropiezan todos los artistas y gestores para anunciar las actividades culturales, sometidos a los escasos y estrechos márgenes que otorga la prensa escrita o audiovisual, la gran revolución que se pone en marcha es la de la utilización cada vez mayor de los medios tecnológicos, dominados especialmente por los jóvenes. Facebook, Twitter y otras redes sociales de diversos géneros –en suma, las herramientas digitales– son los nuevos aliados de la difusión cultural. TELARTES ya mostró su eficacia bajo la conducción de mARTadero de Cochabamba, que ahora tiene una web con 5.000 visitas, al igual que en el Facebook. El Proyecto no solamente comunica sobre sus actividades culturales,

> …sino que ha creado una visión cultural y de construcción del futuro. La web nos permite poder hacer una gestión directa de nuestros eventos, talleres, convocatorias y noticias (Coordinador de Página Siete, 15 de septiembre de 2013).

Este ambicioso proyecto ofrece datos generales para el público: noticias y agendas artísticas de todo el país, legislación, mapeo de espacios culturales y mercado –oferta y demanda– de servicios artísticos. Esta es información imprescindible, pero que aún no ha logrado ser organizada, puesta en servicio del Estado y difundida por el mismo. En años pasados, la Agencia Gesta de Servicio Informativo Cultural (creada por el comunicador y gestor Elías Blanco Mamani, en 1994) ya había contribuido de manera excepcional a la organización de la información cultural, publicando numerosos trabajos –incluido el Diccionario Cultural Boliviano, con más de 2000 recopilaciones de personajes de este ámbito.

Con la perspectiva de contar con cifras descomunales de información y visitas en los portales web, en 2013 se creó la Red Boliviana de Periodismo Cultural (RBPC), que en el futuro potenciará las redes de artistas, transmitiendo por su cuenta twitter una serie de programas online, como entrevistas y videos en vivo. También se espera que organice Encuentros Nacionales De-Formando la Comunicación Cultural, con talleres libres y abiertos que se desarrollarán en distintas ciudades del país.

## Los últimos tiempos (2013-2014)

La descentralización, anunciada por el Ministerio de Culturas (con una oficina en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra), es una apertura necesaria y positiva para el desarrollo de nuestra cultura. La creación del centro de Interpretación Cultural y Turística, denominado Casa Grande de las Culturas, es otra excelente noticia, al igual que la asignación de un fondo concursable para

el diseño de un gran espacio cultural multifuncional en Sucre, en los predios de una antigua fábrica de sombreros. Pero, en los hechos, todas las regiones del país, sin discriminación y según sus necesidades, requieren de Casas Grandes de las Culturas, donde todos los ciudadanos puedan recibir formación adecuada y presentar sus aptitudes artísticas, ejerciendo su derecho a la cultura. La descentralización y la atención con presupuestos acordes a los requerimientos específicos son muy necesarias.

Otro acontecimiento muy positivo es el incremento en las asignaciones de fondos que han recibido los Premios Nacionales de Cultura Eduardo Abaroa y la ampliación a 8 categorías y 28 especialidades, tanto en ámbitos tradicionales como nuevos: investigación histórica, pintura, escultura, grabado, reportaje radiofónico y televisivo, cerámica, orfebrería, composición e interpretación de música con contenido social, teatro, textiles originarios, rescate de acervo musical originario, fotografía, cine, grupos de rock y de música originaria, interpretación, coreografía y vestuario en música popular, representación y coreografía en danza clásica, entre otros. El Concurso Eduardo Abaroa se consolidó definitivamente en la versión de 2013, galardonando a 75 artistas con una inversión de un millón y medio de bolivianos y premios que fueron desde los 10.000 (equivalente a 1.434 $us.) hasta los 30.000 Bs. Este notorio avance fue destacado por varios artistas de distintas especialidades.

Hoy también se destinan más fondos al premio de Poesía Yolanda Bedregal, que ha subido su monto a 31.000 Bs., y al premio a la Gestión Cultural "Gunnar Mendoza", cuyo galardón mayor alcanza los 40.000. Pero, más allá de estos ejemplos, aún hace falta la asignación de un rubro diferente: los fondos concursables. Estos fondos, de naturaleza específica, permitirán una mayor productividad, sostenibilidad y acceso a recursos, para que todas las personas interesadas puedan realizar trabajos en los distintos campos del arte y la investigación cultural.

Otros dos proyectos que cuentan con el apoyo del Gobierno tienen que ver con los libros. El primero data de 2012, y es la publicación de las "15 novelas fundamentales" de la literatura boliviana para su distribución gratuita. El proyecto se inició en 2009, a iniciativa de un grupo de escritores que sostuvo la necesidad de contar con una colección de novelas bolivianas. En la selección intervinieron numerosos expertos que llegaron a distintos acuerdos en relación contenido de los valores estilísticos y la profunda relación de las obras con la realidad de sociedad boliviana. Asimismo, se contó con la cooperación de la Carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz en la preparación de las introducciones y comentarios. El Ministerio de Culturas apoyó con el financiamiento.

Como una continuación de esa importante actividad, que permite democratizar la cultura, la Vicepresidencia de la República ha convocado en 2014 a un comité amplio de especialistas para seleccionar 200 libros importantes de las ciencias sociales y humanas.

Otro logro del Gobierno en este campo es la creación de un canal de televisión estatal dedicado a la cultura. Este canal, con una infinidad de proyecciones a futuro, hoy ya está al servicio de la difusión de las distintas formas de expresión artística y cultural y está libre de las interferencias políticas o mercantiles que abruman a la generalidad de los medios privados y estatales. La programación de TV Culturas abordará temas de interculturalidad, descolonización e inclusión social. Así, no será raro ver programación sobre pueblos indígenas, historia, turismo, ciencia y tecnología.

Esta pareciera ser la gran oportunidad para dar cabida a los actores e instituciones culturales sin restricción de colores políticos ni discriminación alguna, que hoy necesitan de estos medios masivos de forma ineludible. Sin lugar a dudas, la televisión es el medio más accesible y popular en el país. El Canal Cultural es una gran oportunidad para generar información compacta y valiosa para la población boliviana. Esperemos que, en una comprensión antropológica de la cultura, dicho Canal también incluya programas sobre la salud y la educación alimentaria (la buena alimentación, las forma de cultivar y preparar alimentos), un tema imprescindible para los habitantes del siglo XXI. Asimismo, debería tratar cuestiones como los derechos humanos y los valores éticos (respeto a las personas, a las leyes, a la naturaleza, etc.).

El Rally Dakar es uno de los eventos automovilísticos más importantes del mundo, y en el 2014 se corrió por primera vez en Bolivia, y por unos días el país recibió la atención de todo el

mundo a través de la televisión y el Internet. El Rally Dakar 2014 vino con la promesa de posicionar a Bolivia como atracción turística, y por eso recibió un apoyo estatal irrestricto. Pero la cultura tiene mayor profundidad histórica, y sus frutos son más duraderos que los de un evento deportivo. Con el mismo entusiasmo con que se apoyó el paso del Rally por Bolivia se debería convocar al país a ocuparse del patrimonio cultural de las diferentes regiones y de apoyar la creatividad de los bolivianos.

En 2012, la Ichapekene Piesta –fiesta Mayor de San Ignacio de Moxos, la Capital Folclórica del Beni– ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Los trámites para lograr esta declaratoria se han realizado desde la sociedad civil, a iniciativa del Cabildo Indigenal de San Ignacio de Moxos, con la participación de un equipo multidisciplinario y con el apoyo del Ministerio de Culturas (Carmen Beatriz Loza, El Deber, 22 de diciembre de 2012). Las declaratorias de la UNESCO conllevan una serie de obligaciones para las ciudades y países que las reciben. En primer lugar está la salvaguarda de los bienes culturales, pues de no cumplirse con los requisitos, el Patrimonio puede ser declarado como "de riesgo" o "en peligro". Por ejemplo, esto ocurrió en 2014 con el Cerro Rico de Potosí, debido al hundimiento de la cima del cerro. El hundimiento lo ocasionaron las continuas e incontroladas operaciones mineras que se llevan a cabo sobre el territorio patrimonial. La posibilidad de que pierda este título ha despertado la preocupación de los expertos. Ser catalogado como patrimonio "de riesgo" significa que la movilización de esfuerzos para conseguir la recuperación de los lugares es de primera necesidad.

Las denominaciones de patrimonio cultural estimulan el interés de la ciudadanía por obtener declaratorias para sus regiones o fiestas, fomentando el trabajo de preservación e investigación. Incluso algunas instancias oficiales las otorgan como diplomas, aunque por sí mismas no tienen sino un valor simbólico, pueden tener una proyección real en base a investigaciones serias y a la difusión de la información, acción financiada por el Estado.

Mientras tanto, en el ámbito de la producción artística, los artistas ya formados y los de la nueva generación no se dan tregua. Me referiré a los Festivales de Teatro de La Paz y Santa Cruz, como buenos ejemplos de este fenómeno. El 2013, el de Santa Cruz consiguió presentar más de un centenar de obras provenientes de 16 países. Por su parte, el festival de guitarra –en la misma ciudad– ha llegado a su cuarta versión. En La Paz, gracias a la iniciativa privada, se ha abierto el primer centro dedicado al grabado en metal, especialidad que se había experimentado en la década de 1970, en un taller auspiciado por el Centro Cultural Brasileño. En Cochabamba, la editorial Kipus recientemente ha anunciado la convocatoria a un premio de novela con 20.000 dólares para premios. Por el monto ofrecido, este premio es el más importante del país.

También se ha presenciado la inauguración de más espacios culturales, además de la renovación y ampliación de El Sótano, ubicado en el subsuelo del Centro Sinfónico, como espacio multidisciplinario. El grupo Ex Machina Casual, dedicado a las artes escénicas, a cargo de Patricia García, una actriz y profesora de teatro ha comenzado a operar en La Paz desde hace unos tres años, ofrece talleres de capacitación de jóvenes en las áreas de la escritura, actuación, gestión y producción de obras. En la calle 21 de la Zona Sur se ha abierto un espacio nuevo más para las artes escénicas, denominado Teatro Nuna.

Mediante decreto, el 2013 se aprobó la concesión de títulos de licenciatura a los egresados del Conservatorio Nacional de Música, entidad que durante años luchó por este beneficio. La música clásica también ha dado importantes señales de realce, como los concurridos conciertos del Espacio Sinfónico Nacional, el Festival de Música barroca de Santa Cruz, la consolidación de la Orquesta Sinfónica de El Alto y el Encuentro de Jóvenes Músicos Bolivianos. Este Encuentro ha permitido a compositores, músicos y gestores convivir durante un mes, en una especie de boom de conciertos, clases magistrales y otras experiencias de gran riqueza. A esto se añade la consolidación del proyecto Bolivia Clásica, iniciativa de la pianista Ana María Vera. El proyecto busca la profesionalización de jóvenes talentos, con el apoyo de grandes maestros que visitan Bolivia, y la creación de la Orquesta de Cámara Juvenil Bolivia Clásica.

Hoy, el mayor interés por crear agrupaciones de música clásica es notorio. Por su parte, Santa Cruz ha inaugurado la Orquesta Filarmónica

de Bolivia; otras ciudades, como Cochabamba, Tarija y Urubichá, tienen sus propias orquestas filarmónicas. En 2014, el Museo de San Francisco de La Paz abrió una Escuela gratuita de Música Clásica para niños con el apoyo de la Filarmónica de El Alto, el maestro Freddy Céspedes y Banco Sol. En todo caso, es muy importante mencionar que el creciente interés por la música clásica no significa el abandono del folklore y la fiesta popular, que son las formas más sólidas de sociabilidad de los bolivianos.

Una nueva corriente internacional se ha hecho manifiesta en nuestro país a través de la Red Latinoamericana de Actores y Colectivos Culturales, en un congreso denominado Cultura Viva Comunitaria que se celebró en La Paz en mayo de 2013. Las dos finalidades de este congreso eran, primero, ubicar la cultura de base y sus múltiples manifestaciones y hacerlas visibles para la ciudadanía. Segundo –y sobre todo–, consolidar el lugar estratégico que estas ocupan en el proceso de desarrollo de los pueblos.

A través del congreso, la unión de los civiles con los artistas, instituciones y gestores culturales se promovió con mucha fuerza, pero con especial énfasis en las capas sociales menos visibles –barrios, favelas, cordones marginales, villas miseria, comunidades marginales, indígenas. Así se conformó un movimiento continental que hoy demanda a los gobiernos una mayor atención a la cultura, especialmente en los ámbitos marginales. El reto es formar proyectos más grandes de transformación, proyectos que sobrepasen las limitaciones del localismo y lo micro. La fortaleza de esta iniciativa viene de la unión de estos diversos grupos, que interpelan a la sociedad, la desafían y le proponen maneras diferentes de entenderse a sí misma, al cambio y al propio Estado (Guzmán Ortiz, 2013). Esta vía para cobrar conciencia e interactuar cultural y artísticamente resulta muy interesante. Ya que este movimiento está tomando cuerpo en muchos países cercanos, bien podría involucrar a Bolivia de manera muy positiva.

En los últimos años se ha hecho latente la falta de espacio en los teatros u otros sitios –ya sean oficiales o privados– para albergar actividades culturales, así como el alto costo del alquiler de galerías de arte para exposiciones de artes plásticas. La comunidad artística –sobre todo la parte conformada por jóvenes– se ha enfrentado a estas limitaciones creando numerosos espacios alternativos. Siempre se ha dado el caso de artistas que dedican sus viviendas o parte de ellas a la exposición de muestras, e incluso a la realización de talleres. Esta es una clara muestra del compromiso que se tiene con la difusión del arte y con la formación de nuevas generaciones de artistas.

En la ciudad de El Alto, después de que la Escuela de Arte Municipal atravesara un periodo crítico (por falta de atención de las autoridades), los talleres dirigidos por el maestro Pérez Alcalá culminaron con éxito, y algunos de sus estudiantes alcanzaron reconocimiento a nivel nacional e internacional. Es probable que este reconocimiento haya ayudado a despertar un mayor interés por las artes plásticas en esa ciudad. Durante el 2014, al menos 500 jóvenes se inscribieron en las dos principales escuelas de arte: la Escuela Municipal y la Carrera de Arte de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

Algunos de los graduados de ambas escuelas y otros nuevos artistas han abierto talleres, algunos improvisados y algunos en sus propias viviendas, de una sesión por semana. Otros, más estables, tienen el objetivo de dar acceso a los estudiantes a una biblioteca artística, para mostrarles obras y enseñarles técnicas. Estos nuevos espacios, con denominaciones muy particulares, abren el mundo del arte a los jóvenes y a los vecinos desde una perspectiva diferente, con un tipo de relación más personal, un diálogo continuo entre artistas y aprendices y un trabajo asistido. Este tipo de iniciativas dan para soñar con una mayor presencia artística en la sociedad boliviana del futuro.

En cambio, el panorama de las artes plásticas tradicionales o consagradas no da para ilusionarse tanto. El poder económico, ahora también presente en nuevos sectores de la sociedad, como la burguesía aimara, los cooperativistas mineros o los afines al nuevo Gobierno. Estos sectores invierten en otro tipo de estética y a otras actividades culturales, como la arquitectura denominada “cohetillo” o “cholet” y las entradas folklóricas (por ejemplo, la fiesta del Gran Poder). Sin embargo, aún no han sido conquistadas por el arte de tipo clásico o moderno. Una excepción a esta regla es el pintor Mamani-Mamani, cuya apuesta de hace muchos años por una estética indigenista ha sido muy bien recibida por estos nuevos compradores y por los turistas. Mientras

tanto, la antigua élite se mantiene pasiva. Parece tratarse de un periodo de transición y reacomodo de parámetros estéticos que puede durar más de una década.

Según la opinión del público y de varios críticos, la Larga Noche de Museos, instituida en 2006 por la Alcaldía Municipal de la ciudad de La Paz, parece haber llegado a un punto sin retorno en 2014. Si en un principio las galerías y museos, abiertos al público durante una tarde y noche, eran concurridas por un interesante número de personas, en 2014 se vieron desbordadas, y las distintas actividades y obras llegaron a territorios más extensos y heterogéneos. Los esfuerzos de los grandes museos y de los gestores culturales, que sirvieron para ampliar las expectativas de este evento, en esta ocasión fueron sobrepasados por un público que literalmente tomó las calles como los espacios en los que se vive el arte, sea este formal o informal, de alta estética o popular.

Se ha producido una democratización activa y espontánea del arte y la cultura; el público se ha adueñado de la Larga Noche y ha superado la instancia de los museos.

Tal la apropiación y el disfrute que otorgan ocasiones como ésta al ciudadano, que se piden más "largas noches" de arte –porque lo de museos ya quedó superado–. Ojalá y así sea larga vida a estas largas y hermosas noches de puro arte (Isabel Mercado, Página Siete, 25 de mayo de 2014).

En efecto, la Larga Noche de Museos de 2014 abarcó una gran diversidad de propuestas de arte contemporáneo, conciertos callejeros, ballet clásico, teatro, danza folklórica, proyecciones de video, iluminaciones, intervenciones y performances. Esto y mucho más sucedió en 88 espacios distintos, desde los grandes museos y galerías de la zona central, hasta las mismas calles, pasando por los espacios culturales nuevos –y más pequeños– de otros barrios, sobre todo San Pedro, Miraflores, Sopocachi, San Miguel, Irpavi y Cota Cota. Muchos pintores y escultores prefirieron la calle a los museos, y allí mostraron sus técnicas y vendieron su obra al numeroso público que se dio cita. Este sector es el que más solicita ampliar la Larga Noche de Museos a dos eventos anuales, o incluso a noches mensuales.

Esta es la realidad de los últimos años: mayor participación y reconocimiento del público de las actividades más cercanas a lo popular. Un último ejemplo de esto es el enorme incremento de la atracción del público en general por los cuentacuentos o narradores. Y ellos, respondiendo a esta demanda, se han organizado en festivales y talleres que utilizan escenarios tradicionales y consagrados, por ejemplo: la Casa de la Cultura Municipal, en el mismo centro de la ciudad, o plazas y parques de villas y barrios marginales. En 2014 se organizó una reunión que convoca a cuentacuentos paceños, de otras ciudades del país e incluso de otros países, priorizando la interacción entre los artistas de todos estos lugares, vinculando lo local con lo nacional y lo internacional.

## Conclusiones: zampoñas y/o violines para los niños y niñas de Bolivia

La sociedad civil de este país, democrático y participativo, está centralizada en torno a un Estado que permanentemente debería entender y atender sus intereses –cosa que no siempre sucede–. Partiendo de esta noción de centralización, el campo de la cultura siempre pondrá las relaciones de poder entre Estado y sociedad civil en tensión. Más aún con la creciente influencia del tercer actor: la empresa privada y el mercado, que invaden a esta sociedad con una tendencia globalizadora. El Estado, como mediador y proveedor, es el encargado de defender y promover el patrimonio del país.

Es importante anotar que este patrimonio pertenece a todos los heterogéneos grupos locales o regionales. Y si se lo entiende ya no como un complemento del desarrollo, sino como una base, este podría convertirse en una matriz histórica y de identidad que sería muy favorable para el crecimiento humano. Pero, además, internacionalmente es considerado una riqueza invalorable, que también tiene mucho valor comercial por su capacidad de generar empleo y recursos.

Pese a no contar con las facilidades con que cuentan (o contaron) otros países para difundir su cultura y arte, la creatividad de la población boliviana está en permanente expansión, y debe ser sostenida y reforzada por políticas pertinentes. Esta visión coincide con la de algunos autores, que han puesto mucho énfasis en el alto valor de la creatividad. Es desde esta perspectiva que se debe abordar y comprender la economía

creativa –o "industria creativa"–, como el sector de la economía que involucra la generación de ideas y conocimiento. La cultura no solo es fundamental para la cohesión social y la búsqueda y fortalecimiento de la identidad, sino que tiene la posibilidad de convertirse en industria creativa (Florida, 2002).

Este breve balance de las políticas culturales de sesenta años es, claramente, parcial e incompleto. Pero, aun así, se pueden extraer ciertas conclusiones. Una de ellas es que durante el gobierno del MNR, durante los doce años que siguieron a la revolución de 1952, se produjo un periodo de conformación instituciones que, en su mayoría, aún se conservan –con la modernización necesaria.

Durante el mismo periodo del régimen movimientista y en los años de las dictaduras surgieron grupos de intelectuales y artistas críticos que, bajo las banderas de la libertad y el restablecimiento de la democracia, se constituyeron en una parte fundamental de la cultura boliviana, tanto en la literatura, las artes plásticas, como en la política.

Paradójicamente, a mediados de la década de 1970, durante el régimen militar del General Hugo Banzer, se produjo otro logro fundamental para nuestra cultura. La creación del Instituto Boliviano de Cultura (IBC) fue la culminación de la obra de intelectuales de pensamiento nacionalista. A su vez, este Instituto fue núcleo de lo que, tres décadas después, sería el Ministerio de Culturas.

Durante el primer periodo neoliberal (1985-1989) tuvo lugar la creación de la Fundación Cultural del Banco Central, que otorgó –por primera vez– estabilidad académica y económica, sólida y continuada, a los principales repositorios del país (archivos y museos nacionales).

El panorama de la producción cultural a fines del siglo XX e inicios del XXI es muy interesante, debido a la gran aproximación al mundo mestizo e indígena. Pese a que el patrón de discriminación racial no se ha disuelto, la sociedad boliviana se ha ampliado. En el ámbito de la gestión cultural se pueden anotar cambios progresivos a través de estos 60 años, tanto en las políticas gubernamentales como en las privadas. Quizás el principal cambio sea la constante innovación e inclusión de mayores sectores de la población y la búsqueda de una mayor democratización de las artes en su recepción y práctica.

Sin duda, la llegada del primer Presidente indígena-mestizo, con el apoyo principal de bases de trabajadores cocaleros, es el hecho que cambiará el país de forma irreversible, llevándolo hacia la inclusión de los indígenas y el rechazo a la discriminación. Estos objetivos fueron planteados por la misma Constitución Política del Estado. Para la parte operativa, con un Ministerio de Culturas bien consolidado, se propuso implementar una variedad de programas. Algunos de ellos fueron efectuados; tal es el caso de la creación del Canal Cultural. Pero, pese a los avances, estas propuestas aún no tienen una realización plena, pues, como ya lo mencionamos, una buena parte de los indígenas del país continúa en una situación de carencia económica. Por otra parte, hoy el Gobierno se encuentra en pleno ejercicio de un periodo constitucional, hecho que no permite obtener conclusiones definitivas, sino únicamente temporales.

Con el ascenso del MAS se ha producido un cambio de paradigmas fundamental, en el que la primacía de la identidad mestiza ha sido sustituida por la de la identidad indígena. La agenda nacional mestizo-criolla ya no era aceptada por todos los indígenas, que planteaban el reconocimiento a sus diferencias culturales. Esta forma de pensar ya se había difundido entre la población desde la década de 1970, a través de distintos proyectos políticos. Pero en siglo XXI se trata más bien de un posicionamiento enfrentado desde el oficialismo y las organizaciones frente a los q'aras (no indígenas).

En realidad, lo que los indígenas originarios desean son los beneficios de la modernidad. Un ejemplo específico de esta situación se presenta en el ámbito cultural, pues actualmente ellos requieren de tecnologías avanzadas para difundir los productos de sus culturas, por ejemplo realizar grabaciones en cassettes, CDs y otros medios más modernos. También anhelan que su producción cultural musical o textil sea reconocida y revalorizada más allá de los límites de sus comunidades.

El Ministerio de Culturas puede proveer fondos, materiales y personal capacitado para diseñar y ejecutar proyectos que hagan posibles estos requerimientos. Atenderlos no es una tarea fácil. Sin embargo, un ejemplo de que es posible atender estas demandas es el Canal Cultural del Estado, una gran iniciativa que juega un papel preponderante en la difusión, poniendo al alcance

de la población mucha información nueva. Definitivamente la opción más viable es la conjunción de trabajo entre la sociedad civil y el Estado y la suma de conocimientos, metodologías y voluntades para facilitar el cumplimiento de las normas vigentes. Lógicamente, esto incluye el uso de nuevas tecnologías de la comunicación para crear redes de artistas y trabajadores culturales que superen las trabas que plantea la administración oficial. También es urgente la implementación de una red de información desde el Ministerio de Culturas a través de todos los canales a su disposición para dar a conocer de manera permanente y eficaz las actividades artísticas de todas las expresiones que se presentan cotidianamente. Así se podrá evitar que valiosos conciertos o presentaciones carezcan de público, desperdiciándose así, recursos humanos y económicos.

El trabajo y esfuerzo de la sociedad civil deben ser apoyados de manera imprescindible, especialmente –como ya mencionamos– en las áreas de investigación, formación artística y difusión. Cabe anotar que las actividades artísticas y culturales de la sociedad civil refuerzan los objetivos del Gobierno de democratizar la educación y garantizar el cumplimiento de los derechos culturales de los ciudadanos. Pero para que esto se cumpla de forma plena es imprescindible el incremento sustancial del presupuesto asignado al rubro de cultura.

El uso de las tecnologías de la comunicación es un ámbito que diferencia en mucho a la sociedad civil del Estado. Si la primera consigue el mayor provecho posible, la burocracia administrativa debe adecuarse al ritmo y necesidades de los creadores culturales. ¿Será posible que el Satélite Túpac Katari, adquirido a un costo de 300 millones de dólares, en parte como préstamo de la República Popular de China, sirva a algunas de las múltiples necesidades del ámbito cultural? Según la información oficial, este tendrá diversas aplicaciones. Pero la población aún no tiene información específica ni suficiente de esta adquisición tan costosa. Existe, por ejemplo una necesidad básica de conexiones de calidad a Internet, un servicio simple pero fundamental, con muchas implicaciones en la educación, la ciencia, la educación y la cultura. Hoy por hoy, el servicio de Internet en Bolivia es uno de los más caros y lentos del mundo.

Más allá de las diferencias tecnológicas, Bolivia encarna la presencia múltiple e insólita de diversos rituales, creencias, vestimentas, formas de vida, fiestas y diversiones. Los distintos grupos que habitan el país son los constructores del rico patrimonio cultural de Bolivia, uno de los principales motivos de orgullo para la población. Pero ese patrimonio cultural, como construcción que sus habitantes llevaron adelante por siglos, está atravesado por el mestizaje. Todos los grupos de la sociedad están involucrados con la cultura. El Potosí Virreinal, la Casa de la Moneda, la Casa de la Libertad, las iglesias barrocas y la música folklórica, todos objetos de la acérrima defensa de los bolivianos y de gran atracción para los visitantes, son parte del patrimonio cultural tangible e intangible de una población en su mayoría mestiza o indígena, legado de varias generaciones.

Dejemos pues fluir y elevarse a la música indígena o mestiza, brillar a los tejidos autóctonos, conquistar el espacio a las danzas folklóricas y a la arquitectura prehispánica, colonial y moderna. Dejemos a los niños y niñas de Bolivia tocar zampoñas y/o violines.

# VII. La revolución artística y los sonidos rebeldes de tres décadas del siglo XX

Cristina Machicado Murillo

## Introducción

Desde principios de la década de 1950, la constitución del imaginario nacional fue un proceso complejo, lleno de contradicciones. Al igual que en la Revolución mexicana, sus postulados centrales se expresaron en torno a la figura del obrero y el campesinado indígena, desde la perspectiva marxista de la lucha de clases. Un sinfín de expresiones populares se materializó en diversas formas plásticas, como el dibujo, la escultura y el mural, evocando sucesos de la memoria y de la historia.

Como vimos en el Tomo V, los artistas bolivianos de las primeras décadas del siglo XX –como Cecilio Guzmán de Rojas y Marina Núñez del Prado– tuvieron una influencia muy importante en la reivindicación estética del indígena. Su influencia creció de manera contundente con el imaginario de la Revolución Nacional. La Guerra del Chaco y la "cuestión del indio" generaron nuevas preguntas e interpretaciones. La estética pasiva y contemplativa se transformó, poco a poco, en una representación participativa. El campesino era considerado el protagonista central de un nuevo futuro; la clase obrera era reclamada como la fuerza proletaria.

Los postulados de la Reforma Agraria, la nacionalización de las minas, el voto universal y la Reforma Educativa situaron a nuevos actores y paradigmas en la vida cotidiana. De esta forma, durante los siguientes doce años la revolución de 1952 se cristalizó en monumentos y edificios que se convirtieron en espacios de interpelación a la sociedad. El principal interés del Gobierno revolucionario fue construir una nación homogénea, incluyente y popular.

Posteriormente, la toma forzada del poder por el General René Barrientos, en 1964, marcó el inicio de un nuevo contexto nacional, ahora más unido a las fuerzas militares. Esto llevó a la paulatina transformación y reemplazo de los imaginarios artísticos. Sin embargo para la década de 1970, el contexto político de las dictaduras impuso un nuevo despertar de las manifestaciones creativas con características de rebeldía, folklore y resistencia. Estas nuevas formas interpelaron el proyecto de la modernidad desde una postura crítica.

El teatro, el cine, la pintura y la música se convirtieron en bastiones de resistencia de la sociedad boliviana. Principalmente experiencias colectivas y grupos universitarios independientes promovieron proyectos de autogestión que se convirtieron en actividades pioneras en América Latina.

## Nuevos imaginarios para la segunda mitad del siglo XX

Entre las décadas de 1950 y 1960, en Bolivia resaltaron diversas particularidades a nivel estético. La tradición y el paisaje iniciaron diferentes recorridos para los artistas de cada región del país. Durante la Revolución Nacional se abrió el camino a la emergencia de tres nuevos polos artísticos: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Los principales ideólogos del MNR plantearon una concepción teórica sobre el rol y la función de la cultura boliviana. En ese contexto revolucionario, el arte y sus diferentes manifestaciones iniciaron de manera profunda cambios estructurales que permitieron a las siguientes generaciones reflexionar acerca de su formación y

aprendizaje. El objetivo era "favorecer a las masas", extendiendo los beneficios de la educación y la cultura para luego plasmarlos en políticas estatales.

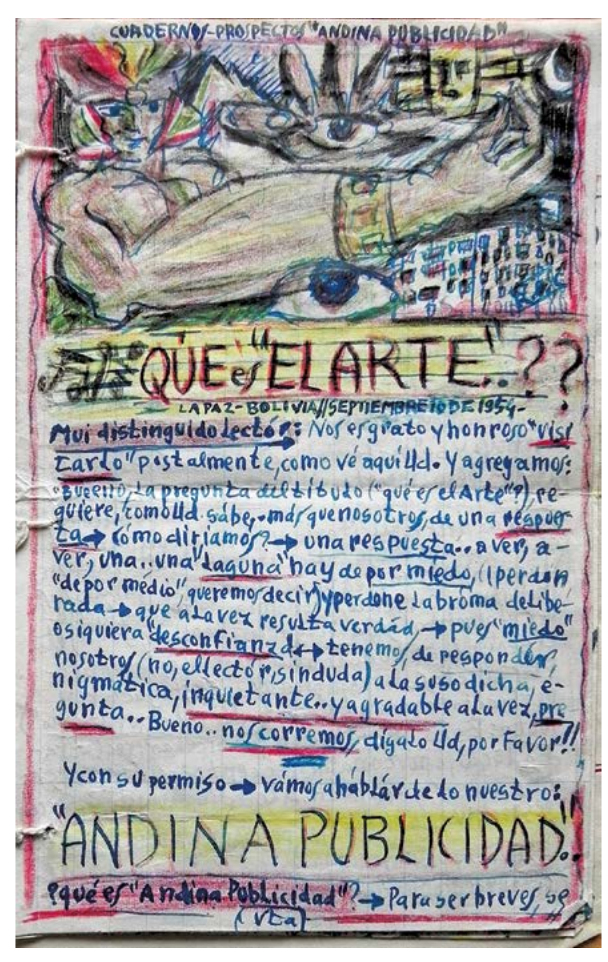



Figura 40. Portada cuadernillo Andina Publicidad, 1954.
Fuente: Archivo Historico Fundación Flavio Machicado Viscarra (FFMV).

Un acercamiento a este nuevo movimiento se hace posible al revisar una serie de manuscritos de Ramón Paz, quien en septiembre de 1954, bajo la denominación "Taller de Andina Publicidad", elaboró un cuadernillo de 9 folios con notas y dibujos. Alrededor de la pregunta "¿qué es el arte?", Ramón Paz refleja sus preocupaciones sobre tres temas: "la cultura nacional", el "alumbrar al pueblo" y "la industria social". De esta forma nos acerca a las demandas y ambiciones del ámbito artístico en aquella época:

> Una idea en marcha, la rebelión pacífica de los artistas y científicos, por su vida misma (siga leyendo con calma lector y colega), por sus ideales o sueños, nostigante-líricos por una mejor escuela de aprendizaje y práctica y ganancia equitativa-justa (ver leyes de trabajo, nacional, universal, vigente y futuro), por el pueblo todo, ¡en fin!, ya que ciencia y arte y cultura, solo son partes de un todo la humanidad, (…) y cuando se inicio? esta marcha de una idea concretamente hacen ya doce o catorce años con hoy, y se materializó alrededor de una pequeña pero importante institución particular que tiene por objeto ofrecer al público arte publicitario y libre (el primero abocando al dibujo, la caligrafía, arte literario y redacción) música, teatro, ciencia y propagandista industria, comercio, economía, finanzas nociones elementales y divulgación popular suya (…) por una verdadera cultura nacional basada principalmente en aquél mismo bienestar social de sus personajes (los de la cultura) o sea maestros, estudiantes, críticos, amateurs… (Manuscrito, folio 2, 1954, Archivo FFMV).

Claramente, las artes plásticas de este periodo se vieron ante el desafío de la creación de un universo simbólico. El gradual crecimiento y la transformación de los espacios urbanos –por la migración del campo a la ciudad– configuró un nuevo escenario urbano-mestizo. Las fiestas y la tradición se unieron como un ritual de encuentro.

El futuro de la patria se concretó en obras que se fueron involucrando progresivamente con la problemática del indio –ahora identificado como campesino– y su rol en la vida nacional. Ideas de progreso y modernidad buscaron asidero en la cultura. Fue entonces que el arte boliviano pudo representarse íntimamente unido al pensamiento ideológico de la Revolución Nacional, en una constante pugna de fuerzas alrededor de temáticas como la del mestizaje.

La revolución del 9 de abril de 1952 permitió convertir a la cultura y el arte en programas gubernamentales. Bolivia, al igual que otros países de América Latina, gestó artistas que destacaron con sus propuestas de arte mural, convirtiendo paredes en expresiones de diálogo, reflexión y confrontación. El Estado logró incentivar y conseguir que sus expresiones se junten con los ideales revolucionarios y promover ideales de conciencia y nación (Querejazu, 1989: 24).

Paralelamente, y menos ligados a lo popular, otros artistas tomaron la ruta hacia corrientes más vinculadas con Europa y Estados Unidos. María Luisa Pacheco (1919-1982) y Alfredo La Placa (1929) son los más importantes exponentes de la tendencia que se definió como abstracta, contraria a una pintura ideologizada. Estos

artistas encontraron su inspiración en la forma, la textura y el color, reinterpretando paisajes y leyendas bolivianas.

Desde el prisma de las montañas, el Altiplano y los valles, María Luisa Pacheco logró mostrar la armonía y los contrastes de esas regiones, y así revalorar la comunicación estética. En un artículo del libro Pintura Boliviana del Siglo XX, Leopoldo Castedo define el arte de Pacheco con las siguientes palabras:

> El aire diáfano del Altiplano trasciende en su luz inconfundible. Maria Luisa Pacheco reinventó una formula personal, en sus collages, maderas, papeles, pigmentos, arenas y superficies corrugadas, para lograr la representación americana de la "Petricidad" idealizada por Henry Moore. En sus "Trípticos Blancos" está el Illimani en plenitud (1989: 103).

Por su parte, Raúl Mariaca valoró la obra de Alfredo la Placa de esta forma:

> Alfredo La Placa crea sus magníficas composiciones apoyándose generalmente en la idea de objetos reales, los que tamiza a través de su crítico talento para reducirlos a formas elementales que adquieren características abstractas, enriquecidas por un tratamiento sistemático y meticuloso de las texturas (1982).

Para 1962, en Bolivia ya se habían configurado dos tendencias artísticas claramente diferenciadas: la indigenista y la abstracta. Sin embargo muchos artistas no necesariamente se adscribieron a una sola. De hecho, las nuevas generaciones viajaron constantemente entre ambas, generando un sinfín de particularidades aún poco estudiadas.

El valle, como escenario estético, permitió retratar la naturaleza y la quietud. Raúl G. Prada (1900-1991) y Mario Unzueta (1905-1984) fueron los principales exponentes cochabambinos de la época. Por su parte, el Oriente mostró una estética ligada íntimamente a la tradición local. La obra del pintor Armando Jordán (1900-1983) muestra claramente este cambio de paradigma artístico. Los personajes de sus cuadros se encuentran en rincones olvidados de la patria, en medio de distintas prácticas populares.

Finalmente, las condiciones con las que se tejió el imaginario artístico durante el periodo revolucionario permitieron dar paso a la generación nacida durante las décadas de los 1930 y 1940. Esta generación, conformada por un colectivo diverso de personalidades, alcanzó un éxito variado tanto dentro como fuera del país. Entre los principales artistas de esta generación podemos mencionar:

Recuadro 71

### Principales artistas nacidos entre 1930-1940

- **Fernando Montes** (1930-2007) dedicó muchas de sus obras a la quietud del Altiplano –o lo que él denominó "Los Andes Altos".
- **Lorgio Vaca** (1930), influenciado por los murales producidos en La Paz, se interesó por resaltar el imaginario de Santa Cruz en sus obras. Su obra cumbre es el mural del Parque El Arenal, denominado "Gesta del oriente boliviano" (1969-1971).
- **Enrique Arnal** (1932) se dedicó a temas sugerentes con espacios cotidianos de la misma ciudad.
- **Graciela Rodo Boulanger** (1935) hizo una retrospección hacia el arte colonial en su obra, entregando bonachones angelotes y tímidas madonas que flotan desde sus altares, para hacerse presentes ante nosotros como una nueva realidad.
- **Alfredo Dominguez Romero** (1938-1980) era músico y artista. Considerado uno de los mejores guitarristas, realizó obras inspiradas en las deidades prehispánicas.
- **Ricardo Pérez Alcalá** (1939-2013) fue un artista que logró consagrarse por su dominio, seguridad y destreza en el uso de la acuarela.
- **Raúl Lara** (1940-2011) fue reconocido por su vasta selección gráfica, principalmente de dibujos, acuarelas y grabados.
- **Luis Zilveti** (1941) fue un artista conocido por sus oleos y dibujos, que lograron crear una tensión y contrastes entre el color y las formas más simples.

Fuente: Querejazu, 1989:28.

## El primer colectivo de taller en Bolivia: Anteo

La agrupación Anteo nació en la ciudad de Sucre, en 1950, por una inquietud de amigos y artistas. Ese año, muralistas, fotógrafos, intelectuales, poetas y escritores de las distintas ciudades del país –La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz especialmente– se unieron para plasmar colectivamente sus constantes inquietudes artísticas. Aunque Anteo no se

conformó como una asociación formal, sí generó un ambiente artístico que permitió a las siguientes generaciones nuevas posibilidades y oportunidades.

Un vínculo estimulante para esta unión fue la Escuela de Artes Plásticas de Zacarías Benavides, creada en 1939. Esta Escuela, bajo la dirección de pintores como Juan Rimsa y Luis Walpher, consiguió abrir el cauce fecundo para posteriores avances (Mendoza, 1975: 186). Allí se formaron la mayoría de pintores que participaron en Anteo.

Recuadro 72

## Grupo Anteo

| | |
|---|---|
| Artista | Walter Solón Romero |
| Artista | Gil Imaná Garrón |
| Artista | Jorge Imaná Garrón |
| Artista | Goyo Mayer |
| Artista | Luis Chopitea |
| Artista | Lorgio Vaca |
| Escritor | Cesar Chávez Taborga |
| Poeta | Héctor Borda Leañó |
| Poeta | Lorgio Duchen |
| Poeta | Juan José Wáyar |
| Poeta | Eliodoro Aillón |
| Escritor | Hugo Poppe Entrambasaguas |
| Escritor | Humberto Diez de Medina |
| Escritor | Félix Orihuela |

Este colectivo tomó el nombre de uno de los personajes relevantes de la mitología griega: el colosal y fuerte Anteo. Tal como mencionó Gil Imaná durante un homenaje al colectivo –que el 2012 organizó el Centro Cultural Santa Cruz–, Anteo era "…fuerte como la roca, grande como el mar, cantando esta canción, cantamos al grupo Anteo cantamos a la amistad, que es canto de libertad".

Anteo fue el primer colectivo artístico de taller en Bolivia que introdujo el muralismo como un canal de expresión. En 1955, el periódico La Nación los denominó como la "Vanguardia de la Modernidad". Walter Solón Romero, su fundador, menciona en sus notas personales que Anteo representó el inicio del trabajo colectivo de taller en Bolivia, reviviendo la tradición del muralismo y evocando a episodios de la pintura mural colonial, como el de la iglesia de Carabuco en 1760:

> Anteo nace con la imperiosa necesidad que tiene el hombre de hablar al pueblo. Elije el andamio para transmitir su mensaje a través de la superficie de un gran muro a las grandes mayorías. Se une en lo material a la artesanía de los oficios y en lo espiritual a la conciencia de todos los hombres libres. Asienta sus pies en la tierra para comprender e interpretar con un lenguaje accesible la nueva realidad que respira un pueblo. Eso y algo más es Anteo (El Diario, 3 de diciembre 1955).

Claramente, este movimiento mural tenía una estrecha relación con los padres de la escuela muralista mexicana: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Sequeiros. El aporte de estos pioneros no fue solamente técnico, sino también temático. Al amparo de sus maestros, los artistas de Anteo promovieron una discusión de fondo sobre la construcción de la identidad nacional, inspirados en la raíz indigenista y en la adhesión a la causa socialista.

En la construcción del discurso artístico de Anteo también fue muy importante la influencia del artista lituano Juan Rimsa, que vivió en Bolivia entre 1930 y 1950. Rimsa fue profesor de muchos de los artistas del colectivo, contribuyendo a desarrollar nuevas técnicas en la plástica. La figura de Rimsa también es importante por haber marcado el quiebre entre una generación de pintores y la siguiente. Fue él quien, alejándose del "telurismo" impuesto por Guzmán de Rojas y de la tendencia indigenista que primaba en la Escuela de Bellas Artes de La Paz, dirigió su mirada al trópico. Su pintura, llena de color, se contraponía al monocronismo de la pintura altiplánica; incluso si pintaba con una temática andina introducía más color. En sus cuadros y murales son característicos los grupos danzantes indios en torno a una fogata, con polleras y ponchos, fuertemente iluminados y llenos de movimientos (Gisbert, 2012: 182-183).

En 1955, junto a escritores, historiadores, maestros, estudiantes y amigos, Anteo terminó una de las obras más importantes del colectivo: el mural del colegio Junín, en Sucre. El objetivo de esta obra era la recuperación de los personajes de la historia a partir de los textos del Archivo Nacional. En la testera está la obra del maestro Solón: Mensaje de Patria Libre. En el muro del fondo va la Trilogía de Bolivia, compuesta por: Los Charcas y la conquista, de Jorge Imana Garrón; Marcha hacia el futuro, de Gil Imana Garrón; y Juana Azurduy de Padilla y las Guerrillas, de Lorgio Vaca.

El trabajo inagotable y coherente de Anteo, realizado en diversas ciudades del país durante varios años, convirtió al colectivo en un grupo referente en la escena artística de los primeros años de la revolución. Aunque el mural fue su más importante expresión artística –y la de mejor acogida–, no era la única preocupación de los artistas del colectivo. Por ejemplo, Luis Chopitea, de tendencia izquierdista, incursionó en el teatro, abriendo nuevos enfoques y propuestas para dicha escena. La búsqueda de Chopitea fue muy distinta de la que manejó Guillermo Francovich, con obras más dirigidas a la recuperación histórica y a la reflexión filosófica.

Al finalizar la década de 1950, el grupo se dispersó y la mayoría de los artistas se fueron a vivir a La Paz. Allí iniciaron trayectorias artísticas individuales, en las que también alcanzaron grandes éxitos.

## Arte para la revolución

A partir de las jornadas de abril de 1952, en el país surgieron los primeros pintores comprometidos ideológica y políticamente con la revolución. La Generación del 52 promovió un cambio y un reencuentro del arte boliviano con su realidad política, económica y social. Fuertes ideas sobre el indígena y el obrero, especialmente de las minas, se vincularon a sus obras. También cuestionaron la educación extranjera y reflexionaron en torno al "ser boliviano".

Como ya mencionamos, la influencia de los muralistas mexicanos es clave para entender la formación de la Generación del 52. Inspirados por la consigna "la tierra es de quien la trabaja", los artistas intentaron dejar de lado los paisajes y la influencia europea para retratar imágenes que respondían a reflexiones sobre la identidad nacional.

Sirviéndose de las banderas de la Revolución Nacional, el presidente Víctor Paz Estenssoro promovió el desarrollo de las artes. Se incentivó la pintura de murales que resaltaran la preocupación histórica y que promovieran una nueva visión sobre el futuro de Occidente y Oriente a través de las reformas y logros alcanzados con la revolución. Los principales pintores, Miguel Alandia Pantoja (1914-1975) y Walter Solón Romero (1925-1999), se encargaron de realizar los murales más emblemáticos. Sus obras se titularon: Historia de la Revolución Nacional y Lucha del pueblo por su liberación, Reforma Educativa y Voto Universal.

Pero el muralismo de la época de la Revolución Nacional no solamente estuvo vinculado a los momentos claves de la historia nacional, sino que llegó a constituir una síntesis simbólica de la cultura nacional. Así, esta expresión artística se convirtió en un eficaz instrumento para transmitir las aspiraciones populares. Los muralistas, en su afán de poner el arte al servicio de los desposeídos, utilizaron su



Figura41.MuralColegioJunín, Sucre, 1955.

Fuente:PeriódicoLaPrensa,2011.

sensibilidad creativa en avenidas, universidades, sindicatos, hospitales, centros vecinales y oficinas públicas, como es el caso del Palacio de Gobierno.

La creación de un Monumento a la Revolución era parte del proyecto del MNR; la idea era instaurar un espacio en el que la ciudadanía pudiera cristalizar y magnificar el proyecto. El 17 de enero de 1955, la empresa constructora Adolfo Linares y CIA realizó entrega de la estructura de hormigón armado. El monumento, ubicado al centro de la Plaza Villarroel, tiene un volumen de más de 2000 metros cúbicos. La estructura rectangular cuenta con una gradería de piedra que levanta el monumento. La base de soporte, constituida por piedra arenisca roja de Botijlaca y tallada en alto relieve, evoca escenas de la vida y las culturas prehispánicas, principalmente de Tiwanacu. Dos pumas contrapuestos, uno arriba y otro abajo, forman un detalle artístico como un bordado alrededor del monumento. En la actualidad la piedra está pintada de color cemento, desvirtuando su forma originaria y el color rojo de la arenisca (Machicado, 2013: 80).

En la parte superior exterior se encuentra la alegoría a la revolución, tallada en alto relieve sobre la piedra granítica de Comanche. Las figuras representadas son la de un cóndor con las alas abiertas y la de trabajadores en acción. En el sótano se construyó una cripta para acoger los restos de los mártires de la revolución. La obra fue ejecutada por Hugo Almaraz (1912-1986), arquitecto y escultor, junto al industrial minero y ganadero Flavio Machicado Viscarra (1898-1986). Ambos realizaron varios monumentos con la noble piedra Comanche a lo largo y ancho de toda Bolivia.

El edificio se inauguró en 1956, pero los murales interiores recién se entregaron el 23 de agosto de 1964. Los restos de Villarroel y Busch nunca llegaron a ponerse en la cripta construida en el interior. Posteriormente, en 1984, el ex Presidente de la República Juan José Torres (1920-1976) fue enterrado allí. Más adelante, en el año 2001, se hizo lo mismo con los restos de Juan Lechín Oquendo (1914-2001) destacado líder sindical y secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Central Obrera Boliviana (COB).

A continuación revisaremos la vida y obra de tres artistas fundamentales para el periodo revolucionario: Miguel Alandia Pantoja, Walter Solón Romero Gonzales y Mario Alejandro Illanes.

### Miguel Alandia Pantoja

> El muralismo tomó mitos y leyendas populares y la vida misma de las masas mineras y campesinas en su lucha contra la vieja oligarquía minera terrateniente y mercantil, para expresar en un lenguaje plástico, remozado y rotundo el anhelo universal del hombre de nuestro tiempo: la revolución (Miguel Alandia Pantoja).

Nació en Potosí en 1914 y murió durante el exilio en el Perú, en el año 1975. Estudió en distintas escuelas de Oruro. Asistió como soldado raso a la Guerra del Chaco (1932-1935), donde cayó prisionero. Su primera exposición se montó en 1936, ni bien retornado a Bolivia. Luego se estableció en La Paz, donde colaboró con diarios y revistas. Estuvo rodeado por una familia que lo incentivó y acercó al arte y las letras. Aunque no logró cursar estudios en ninguna escuela de Bellas Artes, su talento innato lo llevó a ser considerado uno de los mejores muralistas Bolivianos. En 1940 se hizo militante del Partido Obrero Revolucionario (POR), del que se alejaría en 1955.



Figura 42. Oleo/Lienzo "Diablo".
Fuente: Colección Familia Alandia Pantoja.

Durante su vida creadora consiguió varios reconocimientos. En 1960 obtuvo el Gran Premio Nacional de Pintura de La Paz. Pero tres

años antes ya había obtenido un premio en la Primera Bienal de México, galardón que lo convirtió en un referente artístico latinoamericano. Diego Rivera, el célebre muralista mexicano, dijo estas palabras respecto a Alandia Pantoja:

> Este artista ha sabido tomar de Orozco, de Sequeiros y de mí lo mejor; su obra es un claro ejemplo de que nuestro movimiento ha trascendido hasta convertirse en el instrumento de expresión de los creadores que producen junto a su pueblo (1957).

Su obra mural estuvo directamente conectada con el proceso de la Revolución Nacional y con el partido que la gestó: el MNR. A invitación de Víctor Paz Estenssoro, Alandia Pantoja se convirtió en uno de los principales artistas de la revolución, usando su pintura para retratar al pueblo boliviano. En 1952 pintó el mural Historia de la mina, ubicado en el hall del Palacio de Gobierno en La Paz. Lamentablemente, este mural fue destruido en 1965, durante el gobierno militar de René Barrientos Ortuño, junto a otros murales suyos que estaban en el Parlamento y en la Cancillería. En 1954 pintó el mural Huelga y masacre, en la sede de la Federación de Mineros de Bolivia, en La Paz. Esta obra fue retirada en 1980, antes de que la sede de la Federación fuera demolida por orden del presidente de facto Luis García Meza. Actualmente, esta obra se encuentra en un proceso de restauración dirigido por el Ministerio de Culturas.

Una especie de destino trágico acompaño la labor creadora de Alandia Pantoja. De los trece murales que realizó, cuatro fueron completamente destruidos y seis están siendo restaurados en la actualidad. Los tres restantes se hallan dispersos y se desconoce el estado de conservación o su ubicación final (Gobierno Municipal: 2009).

## Walter Solón Romero Gonzales

> Siempre he pintado para decir algo, no comparto la posición de un arte por el arte mismo, menos con banales juegos formales que se revisten de seriedad emocional para no comunicarnos nada (Walter Solón Romero, 1999).

Nació el año de 1923 en Uyuni, centro ferrocarrilero situado cerca de Potosí. De pequeño se trasladó a la ciudad de Sucre para estudiar en el colegio jesuita Sagrado Corazón. Posteriormente obtuvo el título de maestro por la Escuela Nacional de Maestros de Sucre. Combinó su actividad artística con la que desempeñaba como alumno en la academia de Bellas Artes de La Paz. Finalmente, en 1953 consiguió la habilitación como profesor de arte y dibujo en la enseñanza media.

Su infancia, como afirma en su autobiografía, escrita en 1998, estuvo marcada por la Guerra del Chaco. A Solón Romero siempre lo impactaron las problemáticas de una sociedad boliviana que no solamente buscaba encontrarse con su país, sino con el mundo:

> En verdad podría afirmar que nací y viví en medio de pequeños y grandes conflictos mundiales, la Segunda Guerra Mundial me permitió afirmar que el hombre y la sociedad se desvanecían en el caos (Solón: 1998).

Su interés por la formación y la educación lo llevaron a que complemente sus estudios artísticos con estudios de filosofía y letras en la Escuela Normal. Posteriormente, ya en Chile, aprendió la técnica de la pintura mural. A la vez que su educación artística se ampliaba, su compromiso ideológico –vinculado a ideas de justicia y de consciencia social– se plasmó en su obra.

Para Solón Romero, el muralismo tenía el compromiso con la historia de evitar que la memoria popular se quede como ceniza del pasado:

> Pintamos para que no se olvide, para encender la llama del recuerdo, para refrescar la conciencia de los jóvenes que no vivieron el pasado inmediato, para cuestionar las mentiras de los testaferros del presente que hacen pasar a los tiranos del ayer por las grandes figuras de nuestros tiempos (Solón: 2007).

Solón no solamente encontró en el mural su principal medio de expresión. La recuperación de las técnicas antiguas del tapiz y el tejido también le interesaban mucho, y le permitieron realizar un trabajo capaz de recuperar el espíritu prehispánico y lograr un reencuentro con el pasado mundo andino.




Figura 43. El retrato de un Pueblo (fragmento). Mural piroxilina. Salón de honor de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Fuente: www.funsolon.org

Uno de los quiebres de su acción como muralista llegó con la dictadura instaurada por Barrientos, a fines de 1964. Este proceso estuvo marcado por la destrucción de los murales sociales. Desde entonces, Solón Romero decidió pintar sobre paneles desmontables, para poder ocultarlos o trasladarlos si era necesario.

Una de sus obras más emblemáticas es El retrato de un pueblo (1984), ubicado en el Salón de Honor del Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en la ciudad de La Paz. En el catálogo de la inauguración, Alfonso Gumucio Dragón dijo estas palabras respecto al mural:

> …deslumbramiento es la palabra, porque uno no puede cruzar impunemente el inmenso salón cuyas paredes parecen contener la clave de nuestra historia. Exactamente 242 figuras distribuidas en 148 metros cuadrados nos aguardan. No hay un solo espacio inerte. A cada paso una ventana de líneas nos remite a algún episodio esencial de nuestro ser nacional. Y cada episodio representado es al mismo tiempo una etapa en el arduo proceso de gestación de la Universidad Boliviana (Gumucio, 1980: 1).

## Mario Alejandro Illanes

> La pintura de Illanes tiene, además, otra virtud que no suele darse en el arte: es una pintura de masas, no solamente porque su personaje es el indio, la multitud india, (…) un indio que correspondía más a la imagen del protagonista del cerco de La Paz que a la del 'pongo' que sirve en los zaguanes (Salazar Mostajo, 1989).

Nació en Oruro, en 1913, y desde muy joven trabajó en las minas. Illanes tuvo una formación artística autodidacta, "sin escuela", forjada en la "tenacidad de un convencido", como mencionó el periodista Francisco Villarejos. Para este periodista, Illanes fue un artista "abigarrado, truculento, salvaje en todo su valor primigenio" (1933).

En 1930 se trasladó a La Paz y trabajó como dibujante en el periódico Semana Gráfica. En

aquella época conoció a Arturo Borda y a Cecilio Guzmán de Rojas. En 1932 empezó a exponer su obra, y ya desde allí abrazó las ideas sociales marxistas. Entre 1932 y 1935, a invitación del Elizardo Pérez, Illanes se desempeñó como profesor en la Escuela Ayllu de Warisata; allí pintó ocho murales. Por sus ideas políticas, en 1938 salió exiliado de Bolivia y fue acogido por México, donde se relacionó con Diego Rivera, Clemente Orozco y Alfaro Sequeiros. En 1946, los tres célebres artistas mexicanos auspiciaron una exposición de sus obras en la Galería del Palacio Nacional de México.



Figura 44. Wiracocha danzante.
Fuente: Archivo Cecilia Salazar.

Durante más de medio siglo la obra de Illanes ha permanecido marginada, sumida en el subsuelo de la historiografía del arte oficial en Bolivia. Su obra recién fue destacada en los trabajos y publicaciones de Carlos Salazar Mostajo, durante la década de los 1990. Las últimas investigaciones sobre la obra de Illanes corresponden a Cecilia Salazar de la Torres.

Los murales que realizó en la Escuela-Ayllu muestran a indios erguidos, inmersos en sus labores y con una dignidad que le es inusual al orden dominante. Como destaca Salazar Mostajo, los de Illanes son indios que no tienen tiempo para posar y por eso no están embellecidos –a no ser por la fuerza del trabajo. Pero, al mismo tiempo, Illanes los muestra en un contexto de paz y tranquilidad, reflejando el porvenir anunciado por la Escuela-Ayllu. Según Salazar de la Torre:

> Su actitud con la tierra no es, pues, pasiva, sino fuertemente involucrada, pero al mismo tiempo sobria y serena, aunque a su vez arrebate entre los receptores una sensación de intranquilizante desbordamiento. Es así que la tierra adquiere una presencia evidente, algo que se compenetra del indio y éste de ella, creando una unidad telúrica que tiene sentido en la apropiación mutua de la energía natural (2006: 12).

## Memorias del teatro

A partir de 1950, el teatro estableció su eje temático en lo histórico-social. Se buscó desempolvar héroes y personajes de la historia y confrontarlos con los problemas contemporáneos. Temas como la reivindicación marítima y la Guerra del Chaco, así como la aparición de las imágenes del campesino y del mestizo, despertaron la creación de diversos libretos. Este fue un tiempo en el que el pueblo se veía reflejado en las tablas y disfrutaba al ver sus propias flaquezas, tipologías sociales y costumbres (Cordero, 2011: 316).

El teatro histórico-social tuvo como principales gestores a Raúl Salmón y Guillermo Francovich. Paralelamente, varios jóvenes se organizaron en nuevos elencos, pues existía la necesidad de formar parte de las tendencias modernas del arte en general. Las universidades fueron los espacios donde más propuestas nuevas se gestaron. En el mes de julio de 1953, aun contando con escasos recursos, el Teatro Experimental Universitario (TEU) se estableció con la intención de montar obras de carácter universal y con un fuerte mensaje cultural.

El teatro universitario contaba con público y actores intelectuales. Mario Soria plantea que, en líneas generales, existía la necesitad de reeducar a la población para que capte estas nuevas propuestas escénicas que conmovieron al público internacional. Los esfuerzos fueron destacados, pero no bastaron para llenar el vacío que quedó en la experiencia de un público que prefería las manifestaciones del teatro popular. Aunque para 1958 el TEU de La Paz ya había desaparecido, la iniciativa logró ser replicada en Santa Cruz. Esto fue posible sobre todo gracias al empuje de Humberto Parada Caro, quien entonces dirigía el departamento de Cultura de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. La gestión del rector Walter Suárez Landívar y el apoyo de

Hernando Sanabria Fernández fueron vitales para respaldar la iniciativa.

Humberto Parada Caro, actor y director del TEU, mencionó que el elenco se formó en el seno de lo más granado de la intelectualidad y el arte en Santa Cruz, por quienes luego conformaron el Círculo de Bellas Artes. Ganando público dentro y fuera del recinto universitario, el TEU se convirtió en el único espacio donde el público ávido de buen espectáculo podía conocer y deleitarse con el llamado Teatro de Vanguardia. Esta intensa actividad se extendió por varias temporadas teatrales (Rivadeneira, 2011: 330).

En las siguientes dos décadas, el deseo de cambiar al teatro popular y callejero por uno más selecto permitió crear un teatro que siguió las corrientes literarias del teatro moderno europeo y norteamericano: existencial, surrealista, del absurdo, de "shock", etc. El objetivo era crear un teatro nacional que, en un grito rebelde, pudiera pasar a formar parte de la universalidad.

La creación del Instituto Boliviano de Cultura permitió la difusión de las puestas en escena del teatro experimental por varias ciudades del país. También ayudó a la oferta de mayores incentivos para los artistas, con premios y festivales que empezaron a formar una nueva generación de actores y directores que no se quedó en La Paz, sino que se expandió hacia Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Sucre y Tupiza. Jorge Rozsa, Humberto Parada, Raúl Vaca Pereira, German Coimbra Sanz, Renato Crespo, Eduardo Cassis, Jorge Bustillo, Armando Villafuerte, Raul Horth y Carlos Rimassa fueron algunos de los que lograron que estos festivales alcancen semejante trascendencia (Soria, 1980: 78).

En 1945, con la creación del colectivo Nuevos Horizontes, Tupiza se convirtió en un importante bastión del teatro nacional. Este colectivo, liderado por Liber Forti (1919-2015), fue uno de los más importantes del escenario cultural boliviano. Forti era hijo de un conocido sindicalista argentino que, después, ocupó por varios años el cargo –honorario– de asesor cultural de la Federación de Mineros (FSTMB) y de la Central Obrera boliviana (COB). Nuevos Horizontes era una propuesta consciente; era una visión de vida. Se fundó el 1 de mayo de 1946, con actividades de teatro, letras y cultura, y buscó montar obras en lugares donde no se veía teatro. La reflexión y la risa fueron los dos elementos fundamentales de sus 16 años de actividad teatral. En su repertorio alternaron comedias, obras sociales y obras de la vanguardia teatral de la época. Según el recuerdo de Alipio Medinacelli, miembro gestor del colectivo, la primera obra que se presentó fue Hermano Lobo. Medinacelli también contó, entre otras anécdotas, que muchas de las representaciones en las minas eran tan populares que, cuando no había luz, los mineros encendían los mecheros de sus cascos para continuar la función.

La continuidad de este proyecto se vio reflejada en la revista denominada Teatro, que por 41 años continuó articulando una relación profunda de testimonios sobre el mundo de las letras y el teatro. Liber Forti dedicó más de 50 años al desarrollo de la cultura y las artes. Una de las últimas entrevistas que ha realizado nos acerca a su pensamiento:

> El arte, pues, tuvo la debilidad por la presencia de grandes hombres de darle una cabida importante a la política para humanizar el teatro. Cuando no haya ideología va a seguir habiendo teatro. La necesidad del hombre de recrear su vida continuará. Por eso yo estoy contento de que el teatro no me haya rechazado. Siempre me dejó que estuviera a su lado (Heinrich, 2011: 59/ Fragmento entrevista a Liber Forti).

Lupe Cajías, en su obra sobre Nuevos Horizontes plantea que preguntarse si Liber Forti usó las obras teatrales para utilizar panfletos políticos es no conocerlo. Él mismo explicó una vez que eso sería confundir las cosas, ya que el arte es tan completo como función cultural y de realización práctica, que no necesita de las muletas políticas. Liber quería desarrollar un núcleo con principios éticos sólidos y de profundo conocimiento acerca de los valores de la Federación de Mineros y de la Central Obrera Boliviana (2007: 141).



Figura 45. Liber Forti
Fuente: http://autogestao.org/

Finalmente, tres estilos teatrales llegaron a consolidarse en Bolivia durante las décadas de 1970 y 1980. Estos fueron clasificados como: teatro popular, teatro criollo y teatro universal. Cada una de estas manifestaciones poseía –y aún posee– rasgos y características propios. Aunque compartían un mismo espacio geográfico e histórico y se vieron sujetas a las mismas determinaciones socioeconómicas y culturales, en cada uno de sus estilos era posible diferenciar y establecer una estética, una técnica y una ética o ideología subyacente y explícita. Cada proyecto teatral tuvo su lenta producción, y en la mayoría de los casos se autogestionó en el montaje. Muchas de sus obras interpelaron el contexto político de las devaluaciones, la represión o las luchas sindicales (Cordero, 2011: 313).

Los debates que se hacían después de cada obra eran espacios de reflexión. Por otra parte, los encuentros nacionales y departamentales mejoraron la comunicación entre los artistas de las distintas ramas. Aun cuando todavía queda mucho por recuperar de la memoria teatral, es importante resaltar algunos de los principales proyectos de aquellos años.

En La Paz resaltaron los proyectos de apertura de salas. En 1971 se inauguró una pequeña pero moderna sala en la Casa de la Cultura Franz Tamayo; ese mismo año tuvo lugar la reapertura del Teatro Municipal. Otros locales, como El Tambo y los teatrines de la Alianza Francesa y del Instituto Goethe, fueron refugios vitales para los artistas escénicos.

El rol de Santa Cruz en la difusión del teatro fue trascendental, especialmente a través de la creación de la Asociación Cruceña de Actores (ACRA), fundada por Enrique Alfonso en 1972. Durante doce años, esta compañía logró poner en escena más de 30 obras, 15 de ellas escritas y dirigidas por el mismo Alfonso. Sus textos están basados en mitos y leyendas cruceñas, como El mojón con cara o El carretón de la otra vida.

En 1976, en Cochabamba también se creó un interesante espacio de trabajo: el Teatro Runa. Según las notas de Javier Badani:

> El gran reto que asumimos fue plantearnos qué íbamos a hacer, qué íbamos a decir a la gente sobre el momento histórico que estábamos viviendo y que ese mensaje fuera coherente con nuestra ideología (2013).

Una de las figuras principales de Runa fue el argentino Edgar Darío González, quien había llegado a Bolivia en 1969, cargando con sus títeres y su familia. El elenco de este teatro, formado por universitarios y actores, tomó fábulas y cuentos como la base de sus textos e inició una serie de representaciones. Para realizar sus obras siempre se buscaron lugares poco convencionales.

Una de sus obras más relevantes fue Vida, pasión y muerte del AtojAntoño. Esta era historia simple, universal y eterna: la del opresor y el oprimido, pero el Teatro Runa no la presentó regida al mensaje panfletario, sino bajo una metáfora sobre el axioma: castigar con la sonrisa. El tigre era el presidente Banzer y el zorro era el pueblo. El elenco estuvo formado por Juan Espinoza del Villar (AtojAntoño), Luis Lara y Gonzalo Cuellar (tigre), Juan Carlos Taborga Solís (cuervo), Federico Rocha (conejo) Nayra Gonzales (chanchito), Frida Durán Rivera (pastora) y Patricia Durán Rivera (pastora) (Badani, 2013).

Mientras estuvo en funcionamiento, el Teatro Runa realizó todas sus actividades con mucho entusiasmo, pero con pocos recursos. En aquel entonces la Universidad se encontraba amenazada, y los proyectos de Tupiza y Cochabamba quedaron como actividades experimentales que no lograron crecer demasiado. Sin embargo, su aporte en la historia del teatro es crucial para comprender a las nuevas generaciones de actores.

## Voces desde las minas: emisoras mineras

Gracias a la motivación de obreros, mineros y la de sus sindicatos, que gestionaron sus propios canales de información, Bolivia logró ser un importante referente en el campo de la comunicación popular en América Latina. Las emisoras mineras se iniciaron en la década de 1940, pero su audiencia se incrementó a partir de 1956, cuando se afianzaron en los campamentos mineros de la COMIBOL. A su vez, durante la década de 1960, las radios mineras potenciaron y fortalecieron la organización popular de los trabajadores mineros de Bolivia. Hasta 1963, las voces de las diferentes minas se organizaron en 23 emisoras que, posteriormente, conformarían la Cadena Minera. Las principales emisoras eran: La Voz del Minero, en Siglo XX; San José, en Oruro; Sumac Orko, en Potosí; Radio

Nacional, en Huanuni; Radio Ánimas, en Ánimas; Radio Chichas, en Siete Suyos; Huayna Potosi, en Milluni; 21 de Diciembre, en Catavi; y La Voz del Cobre, en Corocoro.

Una de las primeras emisoras fue La Voz del Minero, creada en 1949. Pero, por su importancia, también es necesario destacar a otras dos emisoras: Radio Pío XII de Siglo XX, inaugurada oficialmente el 1 de mayo de 1959 por los Padres Oblatos de María Inmaculada, y Radio Nacional de Huanuni, fundada el 21 de diciembre del mismo año y gestionada por el Sindicato de la mina.

Las radios se constituyeron en un espacio de debate; las emisoras se convirtieron en el hogar de los trabajadores y permitieron el acceso al conocimiento por parte de una audiencia que antes no había tenido oportunidades como esta. Los mineros se involucraron en la vida política y, finalmente, se convirtieron en un canal contestatario e ideológico a favor de la clase obrera. Esta formación les permitió hacer resistencia en los centros mineros. La radio fue usada como un canal de comunicación durante los asaltos, clausuras, desapariciones y duras represiones de las dictaduras militares.

En los primeros años, las radios mineras contaron con personal externo. Muchos habían sido comunicadores de las emisoras comerciales de La Paz, Oruro y Cochabamba. Para su administración, los sindicatos primero trajeron a productores y locutores de las ciudades. Sin embargo, en cuanto los voluntarios locales aprendieron el negocio, el equipo externo se volvió innecesario y fue retirado. Los propios mineros se volvieron radialistas, y su manera de trabajo era, en sí misma, democrática. Los locutores preguntaban a la gente acerca de sus preferencias para estructurar la programación y también exigían sinceras opiniones sobre ellos mismos (Grebe, 2001: 19).

Un acontecimiento significativo para la vida de los distritos y las emisoras mineras fue el sábado 24 de junio 1967. Un ambiente de fiesta se desarrollaba en vísperas de San Juan; al día siguiente se debía realizar el Ampliado Nacional de Mineros en los predios del campamento Siglo XX. Varias delegaciones de mineros y de la prensa se habían dirigido a esa localidad con tal motivo. Sin embargo, al promediar las seis de la madrugada de aquel día, las fuerzas militares del regimiento Camacho y Ranger abrieron fuego, tomando la Plaza del Minero, la sede del Sindicato y la radio La Voz del Minero. Uno de los principales defensores de la emisora fue el dirigente Rosendo García Maisman que sería asesinado en pocas horas. La represión convirtió el escenario en un campo de batalla que, poco a poco, fue militarizado, ese día de luto es recordado como la Masacre de San Juan.

Fue a partir de este hecho que el Gobierno del General Barrientos dispuso estas intervenciones militares como control de los focos subversivos. Consecutivamente, las diferentes emisoras mineras recibieron agresiones y asaltos, entre ellas Radio Nacional Huanuni y Radio Ánimas. Durante estos diferentes asaltos, los militares destruyeron las instalaciones de las radios y provocaron decenas de heridos y muertos. Algunos de los relatos de defensa por las emisoras mineras se refirieron a manifestaciones que alcanzaban los 400 trabajadores.

Lamentablemente los esfuerzos no pudieron evitar el cierre y la persecución, y fue recién en 1969, durante el gobierno del General Ovando, que las emisoras mineras pudieron reabrirse.

> "(…) cuando en las ciudades todos los órganos de información oral y escrita habían sido tomados por asalto por militares y paramilitares que organizaron el golpe de Estado del 17 de julio, el pueblo boliviano se volcó a escuchar las transmisiones de la gran "Cadena de Democracia", establecida por las emisoras mineras.(…), el Ejército avanzaba lentamente hacia los centros mineros con el principal objetivo de acallar a las emisoras, y en su camino encontraba la resistencia de mineros y campesinos dispuestos a defender este importante medio" (Gumucio, 1989).

Recuadro 73

### Cadena minera

"Por una patria sin explotados y sin explotadores, por una Bolivia sin sometimiento por el imperialismo, por una Patria con fuentes de trabajo estables, por una Bolivia con sus riquezas naturales y finalmente porque la minas sigan siendo del patrimonio nacional, con esta premisa, señoras y señores, en este instante comienza el trabajo de la red nacional de emisoras mineras del país. Este es el trabajo de intercambio de informaciones con el concurso de las colegas emisoras mineras. El objetivo es mantener informada a la clase trabajadora minera y pretender la unidad de los trabajadores mineros del país".

Fuente: Transcripción de cuña radial introducción Red Minera 1980.

De esta forma, la década de 1970 abrió un nuevo periodo para las emisoras mineras. Los directores de la radio se constituyeron en gente importante y comprometida directamente en la lucha y defensa obrera. La programación de este momento se ve representada en materiales en contra de la dictadura, el exilio y la angustiosa vida minera.

## Los nuevos derroteros de la música

En toda la primera mitad del siglo XX, la modernidad y las migraciones configuraron distintas relaciones con la música criolla popular. Huayños y yaravis se escuchaban en discos de 78RPM; muchos de ellos fueron grabados en el extranjero, por la firma RCA Víctor alrededor de la década de los 1920 y 1930. Sin embargo, es evidente que el discurso de la Revolución Nacional y el posterior nacionalismo logró promover y cristalizar el encuentro con el folklore y la música popular.

Un movimiento cultural que giraba alrededor del folklore se generó en la ciudad de Cochabamba, a través del Festival Lauro. Año tras año, esta actividad permitió promover la apertura de nuevos espacios de difusión: peñas folklóricas, centros culturales, festivales y festividades religiosas que crecieron como sitios de encuentro para la música, las ideas, las letras e, incluso, la devoción.

Uno de los hitos más importantes para esta masificación de la música popular se dio con la llegada de la nueva tecnología de la industria discográfica. Ya desde 1958, Discolandia –empresa comercial importadora de discos fonográficos–, bajo la dirección del Sr. Miguel Dueri, popularizó los discos de 33 RPM (vinilo) de todo tipo de artistas y marcas. En 1963 empezó a fabricar sus propios discos de vinilo, y se encargó de producir y promover a los nuevos artistas, principalmente del folklore. Fue así que surgieron los considerados "segundos himnos departamentales", canciones de diferentes autores que fueron plasmadas en ritmos y melodías folklóricas.

Durante la década de 1960 se gestó la transición entre la denominada "Nueva Canción" y los movimientos de rock y jazz que cerraron el siglo. Violeta Parra, Tito Yupanqui, Benjo Cruz, Nilo Soruco y Víctor Jara, entre otros, se convirtieron en emblemas de la música rebelde y de protesta.

Recuadro 74

### CancionesdeautorsobreregionesBolivianas

| | |
|---|---|
| Viva Santa Cruz | Taquirari de Gilberto Rojas |
| Linda Cochabambinita | Cueca de Manuel Elías Coronel |
| Chapaco soy | Orlando Rojas |
| Noches de Sucre | Huayño de Alfonso Pardo Uzeda |
| Adios Oruro del Alma | Cueca de Jaime Medinaceli |
| Potosino soy | Humberto Iporre Salinas |
| En las playas del Beni | Lola Sierra Mendez y José Aguirre Achá |
| Cholita paceña | Cueca de Manuel Elías Coronel |
| Pandinita | Taquirari de José Torrico |
| Viva Mi Patria Bolivia | Apolinar Camacho |

El 21 de enero de 1965, Pepe Ballón y Jorge Carrasco Núñez del Prado fundaron la Galería de arte, artesanía y folklore Naira, ubicada en la ciudad de La Paz. Un año después, junto a Gilbert Favre –"el gringo"–, promovieron el espacio, convirtiéndolo así en un hito para el folklore boliviano. Naira fue el núcleo de libertad y creatividad donde Ernesto Cavour, Alfredo Domínguez y Luis Rico iniciaron sus carreras.

> La "Naira" fue, para aquella generación, la certidumbre de que, pese a los embates furiosos y violentos a que eran sometidos muchos de sus más asiduos visitantes, existía un lugar en el que se podía llegar sin miedo, deponiendo viejos rencores y exponiendo, más bien, lo más sano de Almas despejadas e inquietas en busca de un espacio luminosamente cómplice, verdaderamente humano (Orihuela, 2010).

De esta forma las peñas, que habían surgido como espacios de música popular, crecieron gradualmente. Varios artistas reclamaron un mensaje ideológico al resto de la sociedad boliviana. La música se convirtió en el altavoz de mineros y universitarios. El sonido de la quena, el charango y la zampoña se unieron a la canción protesta y comenzaron a sonar en todas las ciudades de Bolivia.

En un par de años más, Naira no solamente se consolidó como el espacio de moda para diferentes generaciones, sino que motivó la creación de otros sitios que complementaron el escenario popular,

artístico y de protesta. Por ejemplo, ubicada en la calle Juan de la Riva, la Peña KoryThika tuvo un rol fundamental para la difusión del folklore urbano en La Paz. Uno de los principales conjuntos que se consolidó en este espacio fue Los Caminantes, grupo formado por Carlos Palenque, Pepe Murillo, Tito Peñarrieta y otros artistas.

Recuadro 75

## Peña Naira

"Para nosotros, bolivianos, la lucha debe estar centrada contra Alcides Arguedas y su descendencia, o lo que es igual, contra los gestores de la enfermedad endémica de orden cultural que padece nuestro "pueblo enfermo", y por el reencuentro con el auténtico ser nacional (…). Vale decir que estamos llamados, no a vagar por vericuetos de una cultura esotérica y alada, sino a construir ideas óseas, ideas con gatillo, dado que toda ideología que responde al momento histórico se convierte inevitablemente en fuerza material al alcanzar cierto estadio de evolución. Restituir su sentido vertebral a la palabra "cultura", y darle un contenido nacional y militante".

Fuente: Boletín Naira, 1968

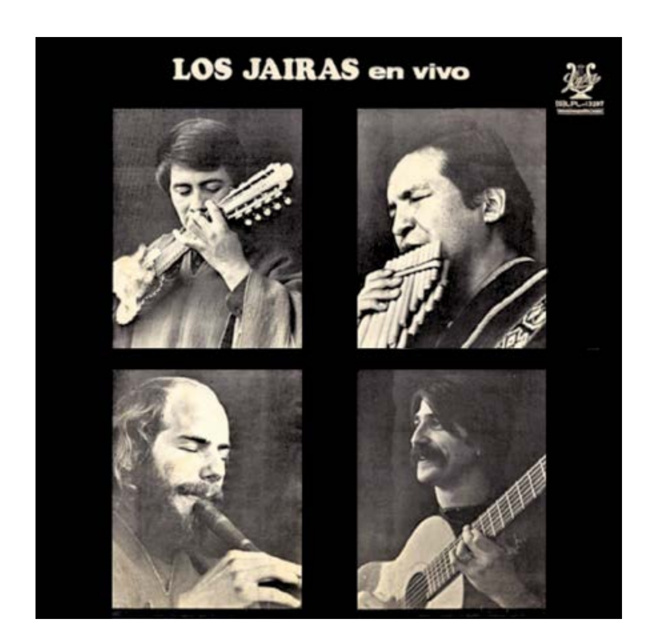






Figura 46. Portada de disco. Discolandia DUERI Y CIA. 1976. Diseño Logo Peña Naira

Otro espacio de interacción de finales de la década de 1960 fue El Tambo, sitio que abrió sus puertas a las manifestaciones de arte franco-boliviano e invitó a actividades de pintura, títeres, cine, folklore, teatro y conciertos. En su cartelera de 1968, publicada en el periódico Presencia, mencionaba:

> Inició ayer sus actuaciones públicas presentando, en la avenida 16 de Julio, una retreta folklórica y teatro nativo en aimara, a cargo de un grupo autóctono de Huanuni. (…) promover el desarrollo cultural, dando al artista los medios necesarios para que llegue al pueblo y, de esta manera, formar un público que participe de estas actividades. El Tambo se encuentra integrado por la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos y la Asociación Boliviana de Teatro Independiente, formada por grupos de teatro empeñados en dar continuidad a este arte (25 de agosto de 1969).

Recuadro 76

## Principales exponentes musicales

- **Los Jairas.** Formados en 1966 –precisamente en el Centro Cultural Naira– Gilbert Favre, Ernesto Cavour y Edgar Yayo Joffre decidieron inicialmente crear un trío, realizando sus primeras presentaciones. Más adelante, con la incorporación de Alfredo Domínguez, guitarrista tupizeño, lograron consolidar el conjunto.
- **Los Montoneros de Méndez.** Fundado en Tarija en 1967, como conjunto folklórico boliviano liderado por el compositor y director Hugo Monzón, este grupo produjo más de 20 álbumes y un repertorio de 2000 canciones. Esta agrupación asumió un rol significativo en las dictaduras, emitiendo letras de fuerte protesta social y carácter político.
- **Las KoryMajtas.** Formado en la ciudad de Oruro en 1968, fue el primer grupo femenino de zampoñas que unió melodías con instrumentos originarios de cuerda, viento y percusión.
- **Los Taitas.** El legendario grupo beniano, formado a mediados de la década de 1960, integrado por Silvio Tanaka, Jose Luis Maesse, Hugo Mercado y Alfredo Aukel, tuvo mucho éxito en sus presentaciones en el interior del país. Resaltaron la expresión de la música camba con tonos de taquirari, carnavalito o la chovena.




Figura 47. Publicidad en prensa sobre Peñas y movimiento cultural.
Fuente: Periódico El Diario, 1969.

Gradualmente, las ondas radiales trajeron al escenario nacional el sonido que movía a las masas y provocaba gritos en el mundo. La Beatlemanía y la "Nueva Ola" entraban con fuerza en las discotecas y en diversas actividades culturales. Sin embargo, en pocos años fue remplazada por un sonido más intenso y progresivo, lo que evidenciaba el cambio generacional. Los peinados con melenas y el rock se apoderaron del escenario de los setentas. Entonces surgieron varios grupos de sonido internacional, como los Bonny Boys Hots, Die Kaethzer, Flint Stones y los Blackbyrds.

> Pepe Eguino retornó al país no solo para reformar su pandilla de barrio Los Pájaros Negros, sino también para armar un grupo musical similar a los Beatles, y lo hizo con uno de los primeros bateristas que vio la juventud paceña, el timbalero Boris Rodríguez y su amigo de pandilla Javier Saldías. Se estrenan en el programa radial "El show de los sábados", y a partir de entonces ganan espacio en los principales locales de baile juvenil (Calero, 2005: 116).

A pesar de la presencia de estas agrupaciones modernas, fue durante esa época que el folklore se posesionó definitivamente, ocupando los lugares de preferencia en las emisoras. Algunos jóvenes intentaron fusionar instrumentos como el charango con un sonido más progresista. A ellos se sumaron otros proyectos universitarios, como Khanata y Lira Incaica, agrupaciones vitales para poder comprender agrupaciones posteriores como Savia Nueva y Savia Andina (Ibíd.: 120).

Artistas como Matilde Casazola, al agregarle características literarias y poéticas a las letras de sus composiciones, le otorgaron matices diferenciables a la canción folklórica boliviana. Su canción acentuó la expresión poética, siguiendo la tradición del periodo de oro de la música popular chuquisaqueña, que en su momento había contado con el aporte de poetas modernistas de gran prestigio (Rosells, 1997: 45-46).

Para 1971, el silenciamiento y la represión militar dirigida por el Gobierno de Hugo Banzer modificaron inevitablemente ese escenario en crecimiento. El vacío fue copado por lo que Walter Sánchez denominó "el repunte del neo-folklore". Nuevos conjuntos llamados autóctonos, grupos musicales que no estaban constituidos precisamente por indígenas sino por jóvenes urbanos de familias campesinas o indígenas, nacidos en barrios populares, tuvieron tal éxito que incluso conquistaron escenarios internacionales.

Paralelamente, las expresiones colectivas y populares urbanas, como las entradas folklóricas del Gran Poder, la fiesta de Urkupiña y el Carnaval de Oruro emergieron con fuerza explosiva. La diablada, baile estelar del carnaval orureño, empezó a cautivar a los grupos juveniles bolivianos. Las fiestas barriales, por lo general dedicadas a un santo, se reconfiguraron en expresiones populares que pronto tomaron las calles y modificaron los espacios de música y danza.

En 1972, festivales como La Revista Musical y Los Festivales Folklóricos fueron suplantados con la fundación de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (a la cabeza de Lucio Chuquimia, Luis Calderón, Carlos Suárez y Enrique Zenteno). Con esta determinación, las fiestas populares adquirieron el impulso definitivo. En pocos años se abrió pasó de la fiesta barrial a la fiesta de una colectividad heterogénea, de una veintena de conjuntos a medio centenar, de bailes exclusivamente masculinos a bailes mixtos (Barragán, 2009: 66).

> El folklore se fortalece y se consolida como la música fundamental, seguida de la balada romántica latina. El rock se alinea dentro de este impulso nacionalista y de inmediata representación, entendida como su fusión o convivencia con la música folklórica (Calero, 2005: 119)

De esta forma el espíritu nacional se contagió de las corrientes de rock argentino, que logró un

movimiento musical masivo importante entre 1971 y 1978. En esa dinámica, Dante Uzquiano y Omar León buscaron sintetizar la esencia del rock nacional en el proyecto que denominaron Wara y su primer álbum: El Inca (1973).

Recién en los años 80 se terminó de establecer la diferencia entre el folklore “tradicional” –término que en esa época se puso muy en duda– y la música popular –o la música de autor. La perdurabilidad de la influencia de ambos géneros se hizo perceptible en grupos como Wara, Khanata, Paja Brava, Savia Andina, y sobre todo Los Kjarkas, quienes refinaron esta fusión llamada “neo-folklore”. Uno de los momentos claves para la música folklórica nacional fue el Primer Encuentro de Cantautores y Poetas de la Nueva Canción Boliviana, realizado en la ciudad de Santa Cruz en 1983. Durante este Encuentro se consolidaron las nuevas propuestas musicales, haciendo evidente tanto la cantidad como la calidad de producción nacional.

## El poder de la pantalla grande

Desde la década de 1960, el cine adquirió mayor relevancia en el público boliviano. El apoyo brindado a este ámbito artístico durante los doce años de gobierno movimientista fue vital para afirmar a este medio artístico como uno de los más difundidos y efectivos para producir nuevos discursos. Algunos directores se consolidaron y otros hicieron sus primeras armas. Sin embargo, el apoyo gubernamental hizo que, en muchos casos, se redujeran los contenidos y limitaran la creatividad a largo plazo:

> De todos esos años quedó algo cierto, el cineasta tenía que tomar una actitud definida; la actitud intermedia o amorfa no cabía ya –y a pesar de ello se la adoptó con frecuencia. Se demostró que estábamos ante un arma que podía usarse en varios sentidos (Mesa, 1979: 36).

La motivación para crear equipos de filmación también tuvo su auge en aquella década. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin los primeros pasos que, desde 1953, dieron Jorge Ruiz, Hugo Roncal y Oscar Soria, pioneros en el rubro. También fue fundamental la fundación del Instituto Cinematográfico Boliviano (ICB). Los primeros trabajos –más se trataba de prácticas que otra cosa– se realizaron con filmadoras de 8mm., y esto no cambió hasta 1948, cuando Kenneth Wasson, un norteamericano interesado en el cine, entregó al ICB una cámara Bolex de 16mm.

En 1965 tuvo lugar el surgimiento de los clubes de cine, espacios de discusión de obras y reflexión sobre contenidos e ideas. El principal objetivo de estos clubes era permitir que el público, que no había tenido esa oportunidad todavía, pueda acceder a las películas fundamentales de Europa y otros continentes. El Cine Club Luminaria, que funcionó entre 1968 y 1979, fue el primero de estos espacios. Dirigido por Luis Espinal, este club contó con el apoyo del Centro de Orientación Cinematográfica (COC). Las proyecciones se realizaban en el Cine 16 de Julio, ubicado al final del Prado paceño.

Jorge Sanjinés y Oscar Soria Gamarra conformaron un equipo de filmación denominado Grupo Ukamau. Fueron ellos quienes, con dos filmes fundacionales –y aún dos de los más




Figura 48. Afiche película de Jorge Sanjinés “El coraje del pueblo”´ 1971.
Fuente: Fundacion Ukamau

importantes en nuestra historia cinematográfica–, iniciaron la producción de largometrajes: Ukamau, en el idioma aimara, y Yawar Mallku, en quechua. El progreso en la producción cinematográfica continuó ininterrumpido hasta 1971, cuando Jorge Sanginés estrenó su nueva película: El Coraje del Pueblo. Este filme fue elegido por la crítica internacional como una de las 20 mejores producciones de la historia del cine en el mundo.

Entre 1968 a 1975, tan solo en la ciudad de La Paz existían más de 20 cines dedicados a dar funciones de Clint Eastwood, François Truffaut, Frank Shannon, etc. Durante la década de 1970 se mantuvo un importante equilibrio en cuanto al origen de las películas proyectadas; aunque el cine de Hollywood y el europeo eran predominantes, hubo permanentes ciclos de cine organizados por las embajadas de países como Alemania, Brasil, URSS, Francia. Incluso se abrió un ciclo de cine hindú, dedicado a mostrar la cinematografía de aquel lejano país. A finales de la década de 1970, el cine europeo empezó a perder la hegemonía que compartía con las producciones norteamericanas. El cine comercial se fue apoderando de las carteleras, coincidiendo así con el auge de la era disco, expresado en películas como Saturday Night Fever y Grease. Estos filmes elevaron definitivamente al cine estadounidense a un primer plano, relegando al de los demás países a un lugar secundario.

En 1976, un 12 de julio, se consiguió el respaldo para la creación de la Cinemateca Boliviana. De pronto, una nueva opción se abrió para el público boliviano, una nueva forma de apreciar el cine de calidad. La existencia de un Cinemateca Boliviana posibilitó la llegada al país de obras clásicas del séptimo arte, en muchos casos por primera vez (Mesa, 1979: 62). La iniciativa fue llevada a cabo por Mario Mercado Vaca Guzmán (Alcalde de la ciudad de La Paz), Amalia de Gallardo (del Centro de Orientación Cinematográfica, COC) y el padre Renzo Cotta (del colegio Don Bosco). La nueva entidad fue dirigida por Pedro Susz y Carlos Mesa por muchos años.

El año de 1977 representa un hito muy importante para el cine boliviano; es el año del estreno del film nacional más taquillero del siglo XX: Chuguiago. Esta película, dirigida por Antonio Eguino, con guión de Oscar Soria, música de Alberto Villalpando y bajo la dirección de la productora UKAMAU, consiguió participar en varios festivales internacionales y algunas referencias afirman que superó el millón de espectadores. La historia de Chuquiago se desarrolla en una La Paz de antaño, marcada por las diferencias entre las distintas clases sociales, a las que corresponden los cuatro personajes. La corrupción y la discriminación son algunos de los temas que aborda la película.

Finalmente uno de los esfuerzos más importantes para cerrar este periodo fue en 1979 cuando se abrió el taller de cine en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), dirigido por Paolo Agazzi, quien debutaría años después con el largometraje Mi socio (1982). Este taller se convirtió en el primer espacio de formación de videastas, y de allí salió una segunda generación de cineastas. Esta actividad coincidió con la aparición de las primeras cámaras profesionales de video independiente, que abrieron nuevas rutas al imaginario artístico de la pantalla grande y chica. Fue entonces cuando la filmación documental dio sus primeros pasos. Es importante mencionar algunas figuras de aquella época, el esfuerzo de Producciones NICOBIS, fundada en 1981 por Liliana de la Quintana y Alfredo Ovando, en La Paz. También resalta el trabajo de memoria documental que promovieron Luis Mérida, Roberto Alem y Adolfo Roca con el equipo Wallparrimachi, productora fundada en Cochabamba en 1983.

## La expresión de la denuncia

La pintura y la expresión artística, tras la caída de la propuesta nacionalista del MNR y la aparición de los gobiernos militares, se vio en la necesidad de transformar sus expresiones con la realidad de represión que se vivía. De esta forma, el inicio de la década de 1970 permitió al arte boliviano impregnarse de temas y expresiones de fuerte denuncia contra el exilio, la desaparición, el abuso del poder y la injusticia social.

Un hito importante en este periodo se abrió en 1975, con las bienales de Inversiones Bolivianas (INBO). Este espacio logró materializar la presencia de los artistas dentro de propuestas creativas, lenguajes plásticos diferentes y nuevas formas de expresión. Algunos especialistas los han denominado como la Generación del 75.

Sin embargo, hay muy poco escrito sobre este periodo, y muchas trayectorias artísticas aún quedan por investigar.

Muchos de los artistas de esta época venían con trayectorias más avanzadas; en otros casos, estos eran los primeros de jóvenes emergentes que alcanzarían mayor relevancia en la década de 1990. Entre los más importantes representantes de esta corriente estaban artistas como: Walter Solón Romero, Luis Zilveti, Gonzalo Ribero, Gustavo y Raúl Lara, Gastón Ugalde, Marcelo Callaú, Fernando Rodríguez Casas, Roberto Valcárcel, y Edgar Arandia.

Su arte, además de denunciar los abusos y arbitrariedades de las dictaduras, se caracterizó por recrear escenas cotidianas del indígena y del mestizo, de sus costumbres y mitos. Muchos fueron perseguidos, y en algunos casos sus obras destruidas. Sin embargo, antes de que García Meza asumiera el Gobierno de facto, en julio de 1980, muchos de estos artistas ya habían alcanzado cierto grado de reconocimiento e influencia en el ámbito internacional y nacional.

Uno de los casos más emblemáticos representó la obra de Walter Solón Romero, quien retomó el escenario de las artes, esta vez apropiándose de uno de los personajes literarios más inspiradores: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Sus dibujos sobre el Quijote eran un claro ataque a la injusticia y la dictadura militar, y a su vez una defensa de los derechos humanos. En varias entrevistas, Solón comentó: "En la figura del Quijote encontraba la palabra que no hallaba en mi garganta".

El Quijote de Solón adquirió un papel contemporáneo, comprometido con su realidad. El personaje apareció en escenas cotidianas, pero sin perder su intención original. De esta manera, Solón fue conformando varias series que condensaron temas de protesta contra la ignorancia, el militarismo opresor, la Colonia y el abuso. Esta serie mostró que, aun en la adversidad, era posible hacer una denuncia y comunicación colectiva. Las últimas obras de la serie fueron contemporáneas al régimen de García Meza, dictador que se dedicó a truncar varios talleres artísticos y cinematográficos.

Recuadro 77

### Series de dibujos Walter Solón Romero

| Dibujos | Años |
|---|---|
| "El Quijote y los Perros" | 1973 |
| "El Quijote y San Francisco" | 1973 |
| "El Quijote y las Minas", | 1975 |
| "El Quijote en El Exilio" | 1980 |
| "Quijote y los Ángeles" | 1980 |
| "El Quijote en Uyuni" | 1980 |

Tras la caída de la última junta militar y la reinstauración de la democracia, el país pasó por



Figura 49. Dibujo Walter Solón Romero "La libertad tiñe de Rojo" serie El Quijote y los Perros 1973.

Fuente: www.funsolon.org

un periodo de inestabilidad política y social. La hiperinflación mantuvo en un estado de desazón a toda la sociedad boliviana. El proceso de las dictaduras había dejado su huella en la vida de los artistas, que se embarcaron en nuevos proyectos. Por un lado estaba el afán de ligar lo particular con lo universal, internacionalizando el arte; por el otro, la pretensión de democratizar el arte y vincularlo a un proyecto político. Las obras representaron la ventana de la crisis, pero también la de la angustia.

En este contexto, la figura de Roberto Valcárcel abrió una nueva brecha para el arte. Como la generación posterior a la del 52, Valcárcel abrió alternativas plásticas y temáticas para el arte boliviano del siglo XX. Formado como arquitecto y artista visual en Alemania, fue alumno de Joseph Beuys (1921-1986), un artista que es considerado por muchos como el "ingeniero" del arte conceptual.

Valcárcel apareció en la escena de aquella época con su obra Los Gritones, una serie de dibujos que transgreden y denuncian a la dictadura. Posteriormente, esta obra fue acompañada por su primera performance, realizada en 1982 y titulada Acción por la democracia. La performance fue ejecutada en la Av. Villazón, en la ciudad de La Paz.

De igual manera –y también cargado de un discurso transgresor–, el artista Gastón Ugalde empezó con la creación de manifestaciones fuertemente contrastadas. Las luchas callejeras, obreros, policías, rostros de mineros y caballos desbocados sobre un fondo de papel moneda son algunas de las obras emblemáticas que cierran este periodo.

## Apuntes finales

A partir de este capítulo buscamos revisar las principales corrientes que se proyectaron en los 30 años que pasaron entre 1952 y 1982. Bolivia se consolidó para mitad del siglo XX con la denominada Revolución Nacional de 1952, que llevó a una nueva conformación de la estructura económica, política y especialmente social. El periodo en cuestión –gestado lentamente desde la década de 1920– representó para la cultura boliviana una etapa de encuentro, formación, movimiento y resistencia.

El Estado, en su búsqueda de cristalizar la añorada nación, promovió la obra de artistas como Walter Solón Romero, Miguel Alandia Pantoja y Mario Illanes, que proyectaron su talento y vocación a través de murales insertados en edificios simbólicos del nuevo poder político y social. La reflexión constante apuntó a revalorizar la riqueza del país, a integrar al indígena –convertido en campesino– y, finalmente, a magnificar los nuevos íconos de la Revolución Nacional. Sin embargo, aún quedan vetas por investigar de este rico periodo. Manuscritos como el de Paz Román nos acercan a la problemática del artista como tal; nos recuerdan sobre la importancia de recuperar ilustraciones de artistas poco estudiados que a veces aparecen en periódicos y en otras publicaciones. Estas obras también son partes vitales para la memoria cultural boliviana.

El proyecto de la nación, truncado en el año de 1964 con la irrupción de las dictaduras, generó un nuevo destino para los artistas. El proceso militar, que se mantuvo firme hasta principios de la década de 1980 por medio de una dura represión, promovió un ambiente de tensa calma en la ciudadanía. De esta forma, espacios como peñas y centros culturales buscaron crear bastiones a través de la música y el teatro. La canción protesta, los ponchos, las guitarras y las melenas fueron los nuevos íconos de una sociedad que ese encontraba en constante cambio y pugna, que era continuamente quebrada con asesinatos, persecuciones y exilio. La resistencia de muchos artistas comprometidos con el arte social fue una constante.

Claramente, desde las manifestaciones culturales nos acercamos a emociones, percepciones, ideologías y discursos que en muchos casos retratan el sentir de nuestra sociedad. Existieron y existen esfuerzos importantes en la investigación y recopilación de la vida artística; muchos de estos trabajos hoy son los pilares fundamentales para comprender la cultura del país. Entre los principales gestores e investigadores que han promovido importantes trabajos se puede señalar a Teresa Gisbert, Pedro Querejazu, Beatriz Rossells, Sergio Calero y Michela Pentimalli, entre otros. Sin embargo, la historia boliviana necesita ser complementada con nuevas investigaciones que nos acerquen a las distintas historias locales de artistas que fueron protagonistas de la constante explosión de tendencias y escuelas que se promovieron a lo largo del siglo XX.

# VIII. Políticas y prácticas festivas después de la Revolución Nacional

Eugenia Bridikhina

## Propaganda política del MNR y los actos masivos

En 1952, inmediatamente después de la victoria de abril, se tomaron medidas para efectuar una propaganda política que acercara al pueblo la ideología del nuevo Gobierno, establecido por el MNR, que concebía a la revolución como una lucha ideológica contra el antiguo régimen. El objeto fundamental de esta "pedagogía de la revolución" fue la orientación ideológica y práctica de la educación cívica en las escuelas y colegios de todo el país. Además, con el despliegue de ceremonias y actos preformativos, se buscó dar sentido al proceso nacionalista revolucionario.

Se procedió a la construcción de un nuevo calendario cívico, reforzando los festejos establecidos por los gobiernos anteriores con nuevas fechas conmemorativas para resaltar los acontecimientos vinculados con la revolución de 1952. El 9 de abril se conmemoraba el triunfo de la revolución; el 16 de mayo la muerte del estudiante Ovidio Barbery, en Santa Cruz; el 21 de julio el colgamiento de Villarroel; y el 2 de agosto el día del indio. Por otra parte, la nacionalización de las minas fue concebida como el acto culminante de la revolución de abril, como el inicio de la "segunda independencia" –o independencia económica. En honor esa gesta, el 31 de octubre, fecha en la que se firmó el Decreto de Nacionalización, fue declarado feriado nacional.

El sello distintivo del MNR fue el uso de los actos propagandísticos masivos. En los primeros meses de la revolución, la ciudad de La Paz parecía haber sido inundada por una marea humana espontánea que provenía del campo, de las ciudades provinciales y de las capitales departamentales. El Gobierno se empeñó en crear un nuevo procedimiento ceremonial revolucionario, que pudiera reforzar el vehículo con sus bases sociales de forma simbólica.

La Firma del Decreto de Nacionalización de las Minas pertenecientes a Patiño, Aramayo y Hochschild fue un verdadero acto "performativo", cargado de un fuerte contenido simbólico. Este acto se realizó en Catavi, cerca del gran complejo minero de la Patiño Mines, en el Campo de María Barzola, un lugar denominado así en recuerdo de la masacre de mineros de diciembre de 1942. Cuando Paz Estensoro llegó al lugar, fue saludado por los mineros con 21 dinamitazos. Tradicionalmente, los mineros usaban la dinamita en su trabajo y en las protestas contra las compañías y el Ejército.

El festejo se realizó con los elementos rituales propios de la revolución: descargas de ametralladoras, tiros de dinamita y bramado –o tronado– de pututus, pero también mediante la misa de campaña. En el momento culminante, el Presidente de la República, sus ministros y los obreros, con un gran fervor revolucionario, se pusieron de pie y juraron con la "V" de la victoria. Víctor Paz Estenssoro, sus ministros, los miembros de la Comisión de Nacionalización, los dirigentes del MNR y los funcionarios nacionales firmaron el Decreto. Más adelante, ya en Potosí, Paz Estenssoro realizó un ritual cargado de mucho peso simbólico para los bolivianos y latinoamericanos: subió al Cerro Rico para declarar la Independencia Económica de Bolivia; lo mismo había hecho Simón Bolívar en 1825, cuando ascendió a la cúspide aquel cerro para proclamar la libertad de América. Malloy (1989) interpreta el hecho de que el Decreto también fuera firmado por el Ministro de Minas y Petróleos y por el Secretario Ejecutivo de la

Central Obrera Boliviana, Juan Lechin Oquendo, como "una realidad que saltaba a la vista: la disparidad entre el poder formal y el poder real (control obrero)".

Después de la publicación del Decreto de Nacionalización de las Minas, Paz Estenssoro, acompañado por Lechín, presidió una apoteósica manifestación popular en La Paz. El desfile por la nacionalización, cuyos protagonistas principales eran los trabajadores mineros –enviados por el gerente de la COMIBOL desde la mina de San José, en Oruro–, estuvo cargado de júbilo. El desfile del regimiento de los mineros, "uniformados con botas, pantalón, camisa de kaki y con "tojo" minero, portando armas y cargas de dinamita alrededor de sus cinturas y sus pechos" duró casi una hora, y se destacó por el orden y disciplina (Antezana, 1992). Sin embargo, durante el acto también se presenciaron manifestaciones anárquicas, disparos de armas y estallidos de cartuchos de dinamita. En la noche se escucharon tiroteos y en las laderas de El Alto y Hampaturi; también ardieron las fogatas en los cerros, formando las letras "V", "P", "E" (Víctor Paz Estenssoro) y "M", "N", "R" (Movimiento Nacionalista Revolucionario) (Ibíd.).

Otro acto multitudinario se armó para la firma del Decreto de Reforma Agraria, el 2 de agosto de 1953. Esa fecha había sido establecida como el "Día del indio" durante el gobierno de Germán Bush. El programa elaborado para esta ocasión incluía la difusión de mensajes propagandísticos, reforzados por distintos medios visuales y acústicos. Se usó el imponente sonido de los pututus; el Himno Patrio fue entonado por una monumental concentración humana; la bandera fue izada por el mismo Presidente ante una enorme masa de campesinos que, vistosos, lucían sus atuendos típicos y exponían sus armas.

A través de un ritual simbólico –un complejo acto de comunicación social–, el Primer Mandatario entregó una hoz de trigo enlazada por una cinta de colores nacionales a los campesinos. También se hizo la entrega de otros presentes simbólicos: un chullu autóctono, un casco de cuero potosino y varias chuspas y pututus. Poco después se procedió a la lectura y la firma del Decreto, ambas acciones realizadas por el Presidente de la República y los siguientes ministros: Ñuflo Chávez (Ministro de Asuntos Campesinos), Walter Guevara Arze (de Relaciones Exteriores), Federico Gutiérrez Granier (de Hacienda), Augusto Cuadros Sánchez (de Economía) y General Ernesto Arteaga (de Defensa), entre otros.

Según las palabras de Paz Estenssoro, con la firma del Decreto se acabarían cuatro siglos de opresión para los campesinos de Bolivia, que con la abolición del pongueaje se incorporarían finalmente a la vida nacional. El Presidente subrayó la importancia de la lucha iniciada por el ex-Presidente valluno, Gualberto Villarroel, y se dirigió a los indígenas para exigirles lealtad y compromiso. Estos y otros actos propagandísticos mostraban la necesidad que tenía el nuevo Gobierno de reafirmar el compromiso con los distintos sectores sociales. El consenso simbólico se conseguía por medio de rituales propios de la revolución: mítines, revistas de milicianos, desfiles y marchas que reforzaban y visibilizaban el vínculo entre el Gobierno y sus bases sociales.

## Organización del nuevo espacio festivo a partir de la revolución

El gobierno del MNR se esforzó por crear un espacio festivo nuevo, propio y relacionado con la fecha de 9 de abril: Día de la Revolución Nacional. Este festejo se llevaba a cabo durante tres días, acompañado con el sonido de las sirenas de las fábricas, el repique de las campanas en las iglesias y catedrales y las salvas de artillería, simbolizando a los tres poderes que hacían al nuevo Gobierno: la Iglesia, los militares y los sindicatos. El 9 de abril se hacían ofrendas florales a los muertos en la revolución, se organizaban misas de campaña y se realizaba el desfile, compuesto por distintos actores sociales: milicianos, obreros, campesinos, etc.

Los protagonistas de los desfiles fueron variando a medida que pasaron los años y cambiaron las alianzas del MNR. Durante los primeros años se destacó la participación de los mineros, las agrupaciones civiles y los militares. La presencia de este último grupo se hizo más visible a partir de 1953, luego de que recuperara su poder con la reapertura del Colegio Militar, en 1953. El Gobierno se apropió de la celebración obrera del día del trabajo, el 1 de mayo, que se conmemoraba desde principios del siglo XX. Inmediatamente después de la victoria de la revolución, durante los festejos del 1 de mayo, los mineros desfilaban como parte de este nuevo

Gobierno que pretendía representar intereses de los obreros. Sin embargo, a fines de la década de 1950, los sucesivos desencuentros entre los sindicatos obreros y el Gobierno hicieron que los mineros se encargaran de organizar sus propios desfilespara el día del trabajo.

En octubre de 1952, aprovechando la coyuntura política favorable que proporcionaba el primer centenario de la bandera y de los escudos nacionales, se realizó un acto conmemorativo de tal fecha. Otra vez, las reformas emprendidas por el Gobierno se convirtieron en el principal motivo de celebración cívica. También se conmemoraron las fiestas cívicas departamentales y se hicieron distintos homenajes a los aniversarios de las batallas de la independencia, como por ejemplo las de Suipacha y Aroma.

Con estas y otras actividades, el Gobierno apuntaba a marcar los hitos de la Revolución Nacional en el imaginario popular. Lógicamente, el objetivo de fondo era consolidarla como una revolución irreversible.

Para ampliar su base regional, el MNR realizó actos conmemorativos en Uyuni, Villazón y Camiri. De hecho, a partir de 1957, las efemérides de los departamentos de Pando y Beni fueron incluidas en la lista de fechas festivas reconocidas por el Gobierno a nivel nacional. La fecha del 16 de julio recibió un mayor énfasis, pues era –en palabras de Paz Estenssoro– el hito fundamental en la lucha por la independencia política. Por su parte, el 9 de abril fue concebido como la jornada decisiva en la lucha por la independencia económica. Ambas fechas se convirtieron en las conmemoraciones más importantes del proceso revolucionario boliviano.

Al inicio del gobierno movimientista, las alas derecha e izquierda del partido aún ejercían cierta presión sobre la toma de decisiones. Del otro lado, la Rosca derrocada y los partidos opositores todavía representaban un peligro para la estabilidad del Gobierno. En ese contexto, el pacto populista necesitaba visibilizar y demostrar de manera constante su alianza con el Gobierno. En sus primeros años de gestión, el MNR realizó varios actos públicos en los que manifestaba su popularidad, la adhesión y fidelidad de los distintos sectores y grupos sociales hacia la causa revolucionaria. Estas ceremonias permitían asegurarse la lealtad y fidelidad de un pueblo al Estado, al partido y a su líder. Los actos performativos se desarrollaron en una variedad de escenarios, pero siempre se empleó la nueva ritualidad "revolucionaria" para, de alguna manera, sacralizarlos.

## La imagen del líder de la revolución

Después de la victoria de 9 de abril, el MNR desplegó una campaña propagandística absolutamente inusual a favor de su líder. La Subsecretaria de Prensa e Informaciones publicó las revistas Pututu y Cultura Política, que junto a otros medios impresos realzaron la figura de Paz Estenssoro. La Radio Illimani y los noticieros con formato de cine, creados por el Instituto Cinematográfico Boliviano (ICB), también sirvieron a este propósito (Baptista Gumucio, 2001).




Figura50:Festejodel9deabril1953.
Fuente: Archivo de La Paz.

A partir de entonces, Paz Estenssoro se convirtió en el Presidente más biografiado y fotografiado del siglo XX; con él se inició una nueva época respecto a la propaganda política. Se puso mucho énfasis en las fotografías, que aparecían en las distintas publicaciones de los medios de comunicación. El más importante producto publicitario de aquellos años es el famoso Álbum de la Revolución de 1952. Las fotos acompañaban todas las noticias relacionadas con la vida y actividades del Presidente, pero sobre todo aquellos hechos trascendentales, como la Reforma Agraria y la Nacionalización de las Minas. Lógicamente, en varias de las fotos de estos acontecimientos históricos aparece Víctor Paz.

Recuadro 78

### Víctor Paz Estenssoro y el pueblo

Hubo Presidentes que infundieron temor personal y político. Otros, por el círculo cerrado en que actuaban, eran para la masa del pueblo lo ignoto, lo desconocido. Víctor Paz Estenssoro, con dar al pueblo acceso a su persona, no ha perdido, como habría pasado con otros, sino que ha ganado, ha revelado una cualidad también desconocida hasta el presente: es un hombre que infunde respeto, que sabe adónde va, mejor dicho, que sabe adónde lleva a Bolivia. Al consubstanciarse con el pueblo no ha descendido hasta él, sino que, verdadero conductor, lo ha elevado hasta su propio nivel de comprensión.

Fuente: Revista Pututu, agosto de 1954 año 2, n.29

En muchas fotos, el Presidente aparecía posando, conversando, abrazando a la gente o bailando con indígenas, obreros u otros miembros de su partido. En estas se mostraba más humano, más accesible, más próximo al pueblo con el que, incluso, llegó a compartir momentos privados. Un ejemplo de esto se vio en ocasión del cumpleaños del Presidente, el 2 de octubre de 1954. Ese día, la ciudad de La Paz "le tributó el homenaje más apoteósico". La prensa recalcó la "espontaneidad de la adhesión colectiva" (Pututu, 10 de octubre de 1953). Miles de ciudadanos, masas humanas ingresaban al Palacio de Gobierno para entablar una relación íntima y recíproca con el Jefe de Estado. Según los diarios, la espontánea asistencia popular no respondía a "ningún incentivo material, a ninguna iniciativa ni dirección" (Ibíd.);si fueron al palacio es "porque querían simplemente abrazar, felicitar y cuando menos tocar al líder" (Ibíd.).

En los primeros años de gobierno revolucionario se instituyó un verdadero culto al Presidente. Esta iniciativa respondía a la preocupación constante y prioritaria por legitimar las estructuras y líneas políticas MNR, personificado en Paz Estenssoro. Se creó una verdadera religión cívica en la que el Presidente era proclamado como "salvador nacional", "redentor de las masas" y merecedor de adoración. Para el pueblo, plenamente identificado con la gesta revolucionaria, él y su partido eran "los instrumentos que llevarían a la realidad sus aspiraciones" (Pututu, 7 de noviembre de 1953).

La imagen de Víctor Paz Estenssoro estaba vinculada con el símbolo de MNR. La "V" era tanto de victoria como de Víctor; se la formaba levantando los dedos índice y anular de la mano derecha. Este símbolo es una imitación del que Churchill utilizó para saludar a sus tropas durante la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, este símbolo también lo utilizaba Juan Domingo Perón, Presidente argentino –a quien Víctor Paz conoció de cerca en sus años de exilio en aquel país. Durante los festejos cívicos, tanto milicianos como miembros de los sindicatos y de los comandos de MNR desfilaban con el paso de parada y, con la mano en alto, formaban la "V". Desde la tribuna, los altos dignatarios del Gobierno –y sobre todo el Presidente– recibían el gesto como una muestra de lealtad y reciprocidad. El Presidente de la República respondía con un gesto idéntico, que representaba su compromiso y complicidad con el pueblo.

La imagen del presidente Paz Estenssoro, como protagonista de la independencia económica nacional, frecuentemente apareció ligada a tres grupos distintos: los mártires prerrevolucionarios, cuya principal figura era Murillo; los gestores de la Independencia de Bolivia, representados por Sucre y Bolívar; y los mártires de la pre-revolución, como Bush y Villarroel. A partir de 1952, los líderes indígenas fueron incluidos en el panteón de los héroes nacionales y se acentuó la imagen de Túpac Katari. También se dio mucha importancia a la heroica figura de Eduardo Abaroa, cuyos restos fueran recuperados meses antes de la revolución. Si la incorporación de

los mártires de la década anterior en el discurso oficial había servido al propósito de estigmatizar a los partidos contrincantes, el fortalecimiento de la imagen de Abaroa y la fiesta de 23 de marzo permitiría la constitución del nuevo enemigo de la patria: Chile.

## La formación de la "bolivianidad" y los héroes patrios en las décadas de 1960 y 1970

Esta última tendencia se reforzó aún más durante los 18 años de gobiernos militares, desde 1964 hasta 1982. Ni bien llegaron al poder intensificaron la problemática de relaciones con Chile, identificándolo como el enemigo externo. Pero los militares, formados bajo los postulados de la Doctrina de la Seguridad Nacional, también centraron sus esfuerzos en la identificación y la difamación de un enemigo interno: el comunismo. Para combatir la ideología del comunismo, durante el gobierno del presidenteBarrientos se elaboró el Proyecto de la Segunda República.

El meollo de este proyecto era la construcción de un concepto de bolivianidad basado en la población autóctona, pues, según sus autores, esta era la poseedora del "sentimiento de raza y de nacionalidad" (Llosa, 1967). La misión de la bolivianidad era "desenvolver a Bolivia como depositaria del espíritu americano" (Ibíd.). En este sentido, Barrientos se auto-denominó heredero de la lucha por la independencia de Bolivia y fundador de la Segunda República. Así, el proyecto de esta Nueva República se basó en la revolución moral, semejante a la corriente del nacionalismo y el romanticismo, personificada en la "Madre Patria" o el "alma de la Patria" (Ibíd.).

Recuadro 79

### Decreto Ley n. 07108

General de Fuerza Aérea René Barrientos Ortuño
Presidente de la junta Militar de Gobierno
Considerando:

Que la Revolución Nacional es un proceso histórico que no puede ser desvirtuado ni sometido a los intereses sectarios, porque emana de la voluntad popular, expresa los anhelos de liberación económica y social de las clases trabajadoras y medias, y conjunciona los comunes sacrificios del pueblo y de las Fuerzas Armadas, constituyendo, en suma, una vocación de lucha de la sociedad nacional en pos de mejores destinos.

Que el proceso de la liberación nacional tiene hitos que comienzan el 23 de agosto de 1939, con la trágica muerte del creador de la Revolución Nacional, Presidente Germán Bush, continúan el 20 de diciembre de 1943, con la asunción al poder del Tcnl. Gualberto Villarroel, bajo cuyo gobierno se inicia la redención del campesinado de Bolivia, el 21 de julio de 1946 cuando el Presidente Mártir rubrica con su sangre las aspiraciones reivindicatorias de los humildes, prosiguen el 27 de agosto de 1949, fecha en que, con la Guerra Civil, un grupo de héroes devolvió al pueblo su fe revolucionaria, y el 3 de noviembre de 1964, día en que las fuerzas Armadas, la juventud y el pueblo se alzan contra la traición a la causa revolucionaria, para restaurar los grandes valores de la Revolución.

Que se debe honrar las grandes fechas cívicas, porque ellas constituyen ejemplo de las generaciones y enseñan a la ciudadanía a enaltecer las figuras y los hechos gloriosos de nuestra historia (…).

Que es necesario establecer la línea de continuidad de este proceso que refleja los ideales renovadores de la comunidad nacional (…).

Junta Militar de Gobierno
Decreta:
Artículo 1.
Declarase fechas cívicas de conmemoración revolucionaria nacional, sin cierre de oficinas ni particulares, los días 23 de agosto, 20 de diciembre, 21 de julio, 27 de agosto, 9 de abril y 3 de noviembre…

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta un días del mes de marzo de mil novecientos sesenta cinco años.

Fuente: Bolivia. Leyes y Decretos. Decreto Supremo n.07108 La Paz. Honorable Congreso Nacional.

La escuela y el cuartel se convirtieron en los principales focos de la formación de la bolivianidad. De hecho, el cuartel pasó a ser considerado el espacio civilizador y modernizador por excelencia. La educación cívica se reflejaba en una pedagogía cuya parte principal fue el adoctrinamiento contra el comunismo y la insurgencia. Las referencias principales para la educación cívica fueron los "profetas de la bolivianidad" y los precursores de la "refundación nacional" (Bridikhina, 2008).Por un lado estaban Murillo y Bolívar, pero sobre todo el Mariscal Andrés de Santa Cruz, uno de los fundadores de la República de Bolivia y "forjador de la nacionalidad", que "realizó una obra administrativa de gran trascendencia". Barrientos se identificaba plenamente con el Mariscal, con Busch y con Villarroel.




Figura 51. Celebraciones cívicas Ucureña, Cochabamba.
Fuente: Lucio Flores Salinas.

En 1965, la Junta Militar del Gobierno –precedida por Barrientos– organizó un programa de festejos en homenaje a la memoria del Mariscal Andrés de Santa Cruz, en el año del centenario de su muerte. El programa contenía distintas actividades a realizarse tanto a nivel nacional como departamental: la erección de un monumento, la impresión de sellos postales y los festejos especiales en los establecimientos educativos del país. La repatriación de los restos de Andrés de Santa Cruz fue el punto principal de este programa; estos fueron devueltos desde Francia, y llegaron a la ciudad de La Paz el 2 de diciembre de 1965. Los días 4 y 5 de diciembre fueron declarados feriados cívicos en todo el territorio nacional. La glorificación de los restos del Mariscal Andrés de Santa Cruz se realizó por medio de las ceremonias cívicas respectivas. Finalmente se los depositó en un mausoleo construido en la Basílica Metropolitana de Nuestra Señora de La Paz.

Por otro lado, en un intento de legitimar su discurso, el gobierno militar renovó el calendario cívico nacional, rescatando los ejemplos y "los hechos gloriosos de nuestra historia" (Ibíd.). Desde el discurso oficialista, la toma del poder por parte de Barrientos en 1964 fue considerada como el punto culminante del proceso revolucionario iniciado con el gobierno de Germán Bush, seguido por Gualberto Villarroel y acentuado por la revolución del 9 de abril de 1952. Sin embargo, a ojos del gobierno, el MNR había terminado traicionando la causa revolucionaria. El Gobierno de Barrientos se empeñó en resaltar ciertas fechas históricas relacionadas con "las luchas políticas y conquistas sociales del pueblo" (Ibíd.), y aunque no prohibió el festejo del 9 de abril, lo opacó en detrimento a las efemérides departamentales.

Se intentó demostrar que la política emanada por parte de este Gobierno militar estaba dirigida a construir la unidad nacional frente al peligro comunista. Durante aquel periodo se resaltó la figura de Murillo como el héroe nacional por su lucha a muerte por la independencia nacional. También consideraron a la proclama de la Junta Tuitiva como "el legado más importante de nuestra historia"(Ibíd.), el ideario revolucionario del pueblo boliviano. En Cochabamba se reforzó la memoria sobre la geta heroica de Alejo Calatayud y los patriotas que participaron en la sublevación del 14 de septiembre de 1810; también se incluyeron los personajes más notables de la época republicana. Por su parte, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra apareció como "el factor más importante del desarrollo industrial y económico y el baluarte de la nacionalidad" (Ibíd.).

En líneas generales, la toma de poder en 1964 no representó una ruptura en cuanto a la elección de las figuras históricas. Barrientos eligió como referentes a Bush y Villarroel, dos famosos militares de la historia nacional. También afianzó el festejo del 23 marzo y enalteció la figura de Eduardo Abaroa, su héroe principal. En ambas decisiones actuó tal como lo había hecho el MNR durante sus tres gestiones gubernamentales. Estos festejos se complementaron con el establecimiento del 22 de octubre como el Día de Antofagasta. Ese día, en 1968, se conmemoró el centenario de la fundación del Puerto de Antofagasta y se recreó la memoria del Litoral boliviano.

## Las fiestas cívicas durante las dictaduras y la democracia

Durante el gobierno del General Hugo Banzer Suárez, el uso de la fiesta cívica se relacionó sobre todo con la idea del desarrollo económico-social, capaz de garantizar la seguridad interna y el trabajo disciplinado. Con este objetivo, el Gobierno criticó la "excesiva suspensión de actividades" (Decreto Supremo 11950, 9 de noviembre de 1974) y dio pie a la revisión y el ajuste del calendario cívico festivo y a la regularización de la "vigencia de días feriados, racionalizando su número" (Ibíd.).

En su mandato, Banzer dio mucha importancia a los héroes patrios, asociando la imagen de los personajes militares con el papel protagónico de las Fuerzas Armadas, la institución protectora de la libertad y la soberanía nacional. Sobre estos temas también se insistió con el realce de la imagen de Murillo y la celebración del 16 de julio. Pero Murillo no fue el único personaje al que recurrió el Gobierno para construir y plasmarsu ideología en la gente. Figuras de los héroes rebeldes, como Bartolina Sisa, Túpac Katari y AlonsoYáñez, formaron una parte importante de la política discursiva del régimen para obtener más popularidad y legitimidad. En los discursos políticos también se revalorizó la propensión a la lucha y el sacrificio por parte de los habitantes del departamento de La Paz, como un ejemplo para los demás departamentos. El pueblo paceño era considerado el pivote de la nación.




Figura 52. Festejo del día del mar.

Fuente: Archivo de La Paz.

En 1975, año del sesquicentenario de la fundación de la República, el Gobierno aprovechó la oportunidad para organizar una celebración imponente. Las publicaciones en la prensa, en las que se recalcaba la participación del Estado en la reconstrucción de la nación y la conservación de la soberanía, le dieron una tremenda resonancia al acontecimiento. Esta celebración fue de vital importancia para el Gobierno Banzer en su afán de adquirir una mayor legitimación popular. La propaganda estatal resaltaba los logros del régimen en los ámbitos económico, político y social, manteniendo siempre la idea de que la reconstrucción nacional era un proceso efectivo y que daría inicio a una nueva etapa para el país.

Durante la década de 1970 –especialmente durante el régimen banzerista, que se extendió desde 1971 hasta 1978–, la conmemoración del 23 de marzo adquirió mucha importancia. Se rescató la memoria de las batallas del Pacífico y se destacó la imagen de Abaroa, como un ícono para la juventud boliviana, símbolo de compromiso y de entrega a la patria. Los desfiles del 23 de marzo incluyeron elementos rituales heredados de los gobiernos anteriores. El momento central de estos desfiles era el traslado de dos urnas. La primera, de cristal, llevaba dentro una bandera nacional que flameó en las batallas de Calama, Canchas Blancas y Alto de la Alianza; la segunda contenía los restos de Eduardo Abaroa. Ambas fueron trasladadas desde el altar mayor, instalado en la Basílica de San Francisco, hasta la plaza Abaroa, para su respectiva veneración y posterior traslado hacia San Francisco. El ceremonial fue acompañado con el redoble de tambores y una serie de homenajes a cargo de las Fuerzas Armadas y otras instituciones públicas, cívicas y culturales de la ciudad de La Paz. Estos componentes festivos, aunque no nacieron en la época de Banzer, fueron muy importantes para la celebración de las fiestas cívicas avaladas por el Gobierno.

La imagen de Abaroa se asociaba con el anhelo boliviano de lograr una salida soberana al océano Pacífico. Para los representantes del Gobierno, este héroe personificaba la búsqueda de la reintegración de Bolivia con el territorio del Litoral, lo que a su vez fue entendido como el punto de partida para el desarrollo de la nación. En sus discursos, Banzer argumentó que la mediterraneidad boliviana era la causa más importante para el atraso nacional en el ámbito económico. Es a partir de esa época que los documentos emitidos por el Ejército boliviano llevan la rúbrica "El mar nos pertenece por derecho y recuperarlo es nuestro deber" (Bridikhina, 2008). Pero su uso alcanza incluso a los cuadernos y libros escolares, donde el lema se encuentra estampado.

El tema de la recuperación marítima también fue aludido en otras fechas cívicas por medio de




Figura 53. Festejo del 6 de agosto 2008 en Llallagua.
Fuente: E.Bridikhina, 2009.

representaciones teatrales, canciones y símbolos –como la bandera del Litoral. Recuperar la memoria de la Guerra del Pacífico y pronunciar nuevas consignas marítimas engarzaba perfectamente con la política interna y externa de Bolivia en las décadas de 1960 y 1970. Este fenómeno ocasionó un interés particular por parte de los intelectuales, interés que se tradujo en numerosas publicaciones. En los setentas se formaron varias instituciones encargadas de organizar los programas de la Semana del Mar: el Comité Cívico Pro-Mar, la Acción de Juventud Marítima, etc.

Sin embargo, paralelamente al proceso de construcción de la identidad nacional oficialista, en aquellos años surgieron propuestas alternativas del naciente movimiento katarista. Estas propuestas, además de conmemorar a Túpac Katari, líder de la sublevación indígena del siglo XVIII, ponían de manifiesto las raíces étnicas y culturales que compartían con él (Albó, 1999). La emergencia del movimiento katarista, además de crear nuevos héroes en el imaginario colectivo, trajo consigo la introducción de nuevos símbolos, como la wiphala. A su vez, Tiwanaku se consolidó como un hito de la Nación Aimara.

Aunque empezó durante el régimen banzerista, esta tendencia se fortaleció en el periodo de democracia. Fue entonces cuando se empezó a utilizar la imagen de Tiwanaku como un símbolo nacional en los billetes y pasaportes y su enalteció el festejo popular del año nuevo aimara, el 21 de junio, en este sitio arqueológico. Posteriormente, con la presencia del aimara Víctor Hugo Cárdenas –quien fue elegido como diputado al Parlamento Nacional en las elecciones de 1985, fue candidato a la Presidencia en las elecciones de 1989 por el Movimiento Revolucionario Túpac Katari (MRTKL) y logró ser Vicepresidente de la República con el binomio MNR-MRTKL en 1993–, la simbología étnica fue ganando cada vez más espacio en el imaginario colectivo y en el discurso oficialista.La presencia de Tiwanaku es de indudable importancia en el proceso de construcción de la identidad nacional, al igual que la producción artística que, ni bien iniciada la década de 1970, promovió la revalorización y revitalización de la cultura andina.

Durante el periodo democrático se siguieron las pautas marcadas por los gobiernos anteriores. Las fechas del 6 de agosto, 16 de julio, 23 de marzo y las efemérides departamentales fueron resaltadas como las más importantes. Los políticos intentaron profundizar el proceso de construcción de la nación e identidad bolivianas. Sin embargo, durante el gobierno de la UDP (Frente de Unidad Democrática y Popular, 1982-1985) el espacio festivo en muchas ocasiones se convirtió en campo de tensiones políticas, ya sea con la Central Obrera Boliviana o con el líder del MNR, Víctor Paz Estenssoro, que preparaba su camino de retorno al poder. Debido al carácter popular de la UDP y a la composición izquierdista de aquel Gobierno, las fechas del 1 de mayo adquirieron mayor magnitud y contaron con la participación masiva de la población. La participación del MNR dentro de este amplio frente popular explica porque se retomó la celebración del 9 de abril para conmemorar el triunfo de la Revolución de 1952. La idea de fondo era mostrarse partícipes y herederos de la política de cambios de la que Siles Zuazo, el Presidente de turno, había formado parte. La Revolución Nacional era recordada por medio de festejos populares multitudinarios que reforzaban la conciencia histórica sobre los logros históricos de aquel proceso.

En la década de 1990, la transformación de la visión política dio curso al desenvolvimiento de nuevos factores que, aunque no representaron cambios significativos, si mostraron un cambio aparente en los patrones de participación política y de construcción del imaginario. El tema de la recuperación de la memoria histórica volvió con mucha intensidad durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), entre 1989 y 1993. La diferencia con anteriores procesos es que, esta vez, iba relacionado a la época de las dictaduras militares, que fue muy desprestigiada.

En estos años se produjo el encarcelamiento de uno de los máximos representantes de la dictadura militar: el General Luis García Meza. De hecho, el 21 de julio, día de la sentencia, fue declarado feriado cívico, pues la culminación del juicio a García Meza no solo representaba la justicia histórica, sino también un homenaje a la democracia boliviana. Por su parte, durante su quinta gestión a cargo del país –entre 1993 y 1997–, el MNR recurrió sobre todo a los festejos del 6 de agosto. En los actos conmemorativos se refirió a las dramáticas situaciones por las que tuvo que pasar el país para poder llegar a la democracia, después de un largo periodo de gobiernos de facto y golpes de Estado.

El tema marítimo siguió siendo de crucial importancia para los gobiernos de la década de 1990, pero adquirió especial énfasis en uno de los de la década siguiente: el gobierno de Carlos D. Mesa, entre 2003 y 2005. Durante su corta gestión como Presidente, Mesa también le dio mucha importancia a la simbología nacional.

En general, los gobiernos denominados neoliberales se empeñaron en regular el calendario cívico nacional. Desde 1985, cuando Víctor Paz Estenssoro asumió por tercera vez como Presidente, hasta 2005, cuando Carlos D. Mesa dejó el cargo –pasando por dos gestiones de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) y una de Hugo Banzer Suárez (ADN)–, el calendario cívico fue modificado en más de una vez, lo que afectó también al número de días hábiles de trabajo. En 1992, con un gran despliegue festivo, se conmemoró el bicentenario del nacimiento del Mariscal de Zepita, Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Sin embargo, durante este periodo las fiestas cívicas se institucionalizaron bastante, dándole mayor realce a las departamentales.

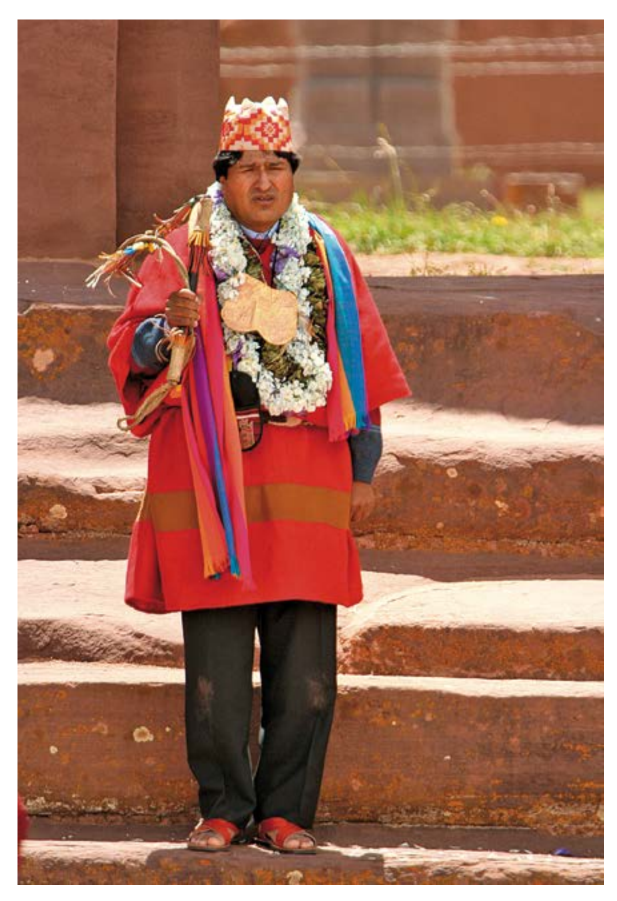


Figura 54. Evo Morales.
Fuente: Archivo La Razón, 2006.

## Nuevo orden político y nuevas prácticas festivas (2006-2012)

Los cambios introducidos durante la primera gestión de Evo Morales Ayma y el Movimiento al Socialismo (MAS), entre 2006 y 2010, formaron parte del proceso de búsqueda de la identidad nacional que se anunciaba en los períodos anteriores. Sin embargo, esta vez se lo hizo con la convicción profunda de que la transformación revolucionaria comprendía una profunda revalorización cultural. Estos cambios fueron enunciados desde la misma posesión de Evo Morales como Presidente, en 2006, que constó de dos escenarios festivos. Uno de los festejos fue llevado a cabo en Tiwanaku, considerado el centro del poder precolombino; el otro tuvo lugar en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, considerado el centro político del país.

La ceremonia en Tiwanaku, calificada por la prensa como un ritual andino-amazónico "que no se había realizado hace 500 años" (La Razón, 22 de junio de 2006) y que invistió a Evo Morales del poder, conglomeró a más de 30.000 espectadores y autoridades indígenas, entre ellas un grupo de 3.000 mallkus de Omasuyos, Ingavi y Pacajes. En la puerta del templo de Kalasasaya, Evo Morales alentó a los pueblos indígenas a iniciar una lucha por llegar al poder y lograr sus reivindicaciones. El reconocimiento de Evo Morales como apumallku (autoridad mayor); el recibimiento del bastón de mando de las autoridades originarias; el chicote obsequiado por el secretario de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari… todos estos actos simbólicos encajan en la clásica fórmula de Hobsbawm (2002), que denomina a estas ceremonias como la "invención de la tradición".

El ritual de posesión en Tiwanaku tenía un guión previamente elaborado y plagado de "rituales nunca vistos" (La Razón, 22 de junio de 2006). Todo empezó con la entrada de Evo Morales a la pirámide de Akapana, vestido con un poncho rojo con el sol bordado en la espalda, un chuku (gorra) –cuyas cuatro puntas representan el control sobre los puntos cardinales– y abarcas de cuero de llama. En la pirámide, Evo fue recibido por el sacerdote indígena. El mandatario atravesó una columna de jilacatas (autoridades

originarios)cubiertos con ponchos rojos y otra de mama t´allas (autoridades femeninas y parejas de autoridades indígenas) vestidas de negro. Luego-se acercó a cuatro amautas(sacerdotes)vestidos de blanco. Cuando ingresó a la pirámide, se arrodilló para besar un desnivel del suelo que, según arqueólogos que estudiaron estas ruinas, se había utilizado para realizar sacrificios. Más adelante fue a una segunda estación, donde recibió otro bastón de mando y se detuvo en la puerta de la luna. La ceremonia fue acompañada por el sonido de conchas marinas y el sahumerio de k´oas (inciensos y ofrendas) y diversas especias florales. En Tiwanaku, Evo Morales recibió la bendición de los dioses indígenas para ser líder del pueblo, y durante la procesión juró con el puño izquierdo en lo alto y con la mano derecha sobre el pecho.

Según Kojan (2008), la inauguración de la Presidencia de Evo en Tiwanaku puede ser interpretada como la apelación al más potente símbolo de la identidad nacional, pues, desde distintas perspectivas, este centro precolombino es un símbolo explícito del nacionalismo boliviano. Para el pueblo boliviano, la cultura tiwanakota representa las raíces de la nación. De hecho, el Estado-nación boliviano es visto como la reencarnación de la antigua civilización. En este sentido, la inauguración no tenía lugar en un sitio arqueológico, sino en un lugar monumental del nacionalismo aimara del siglo XX.

Desde la década de 1930, el templo de Kalasasaya había sido considerado como el símbolo del nacionalismo boliviano, y a partir de él se construyó la narrativa de la identidad nacional. Pero, por otro lado, Tiwanaku también forma parte de la representación simbólica de la herencia cultural indígena. De hecho, fue esto lo que posibilitó que la asunción de Evo Morales como Presidente tuviera un fuerte impacto sobre los indígenas e implicara un momento especial para muchos bolivianos.

Posteriormente, ya en la ceremonia oficial de posesión –que transcurrió en el Palacio de Gobierno y el Congreso Nacional–, Morales recibió el mando y presenció la Parada Militar, que simbolizaba la subordinación de la institución castrense y que culminó con una marcha hacia la plaza de los Héroes. El presidente Morales, escoltado por unos mil mineros, eligió esta plaza por ser un lugar simbólico para los movimientos sociales, y allí se comprometió a cumplir con su plan de Gobierno.

Evo Morales respetó el calendario festivo establecido por los gobiernos anteriores, y el 6 de agosto, el 16 de julio y el 23 de marzo se mantuvieron como siendo las fechas cívicas más importantes. Además, el 10 de febrero (en conmemoración de la sublevación en Oruro), el 1 de mayo (día de los trabajadores), el 17 de agosto (día de la bandera) y el 18 de noviembre (día del Himno Nacional) adquirieron mayor relevancia. La salida soberana de Bolivia al mar fue declarada como el punto principal de la política exterior boliviana. En consecuencia, los actos del 23 de marzo volvieron a cobrar un pronunciado protagonismo; eran el mayor evento convocado para establecer el programa de "espíritu de unidad



Figura55.EvoMoralesyAlvaroGarcíaLine participando en un ritual andino
Fuente: ABI.

entre los bolivianos" (La Razón, 21 de marzo de 2007). Se intentó reemplazar simbólicamente la fecha del 6 de agosto, que recuerda al Estado colonial, a través de la introducción de nuevas fechas conmemorativas, como el 22 de enero: día del nacimiento del nuevo Estado Plurinacional. En aquel día se conmemora la Refundación de Bolivia y a Evo Morales como su líder refundador. También se introdujeron las fechas cívicas del 21 de junio, en honor al año nuevo aimara, y el 21 de diciembre, cuando se festeja el solsticio de verano. Esta última celebración es considerada un acontecimiento "espiritual y cósmico" (Bridikhina, 2008), fuertemente relacionado con las tradiciones de los pueblos indígenas de todo el mundo.

Durante el gobierno de Morales y el MAS se engrosó la presencia de los indígenas durante los actos cívicos. Un ejemplo de esto es la extraordinaria marcha de los pueblos originarios en Sucre, llevada a cabo el 6 de agosto de 2006. Posteriormente, los pueblos indígenas participaron en la Parada Militar que se realizó en la ciudad de Santa Cruz en 2007 y en los desfiles campesino-militares de las distintas ciudades del país.

Como se puede ver, hoy los pueblos originarios forman una parte fundamental e inalienable del panorama festivo nacional. Con la instalación de la Asamblea Constituyente, el 3 de agosto de 2006, se realzó "el rostro indígena de Bolivia" (Ibíd.). No por casualidad aquella la fecha coincidía con el festejo del 53 aniversario de la Reforma Agraria, hecho que fue celebrado con igual o mayor magnitud que hace medio siglo.

Mediante el festejo del 53 aniversario de la Reforma Agraria se consolidó también la memoria histórica de la Revolución de 1952. Implícitamente, el Gobierno estaba reforzando la imagen del cambio, dándole importancia tanto a los eventos históricos que en su momento transformaron el país como a los que eran parte del actual proceso. Asimismo, el 1 de mayo de 2006, día del trabajador, Evo Morales emitió el Decreto Supremo 28701 Héroes del Chaco en el Campo San Alberto de Carapari. Con esto, mientras se decretaba la nacionalización de los hidrocarburos, también se realzaba el heroísmo de los antepasados. Durante el evento se exaltaron los símbolos nacionales. La bandera nacional se izó en pleno campo, en presencia de los militares que escoltaron a las altas autoridades durante la toma de la posesión del lugar.

Más de 50 años después, Evo Morales al igual que otrora Víctor Paz Estensoro, jugó un papel principal en estas puestas en escena. Firmó importantes documentos ante las masas y protagonizando la mayoría de los actos patrióticos importantes. Con esto, el Presidente y su partido pretendían persuadir a la multitud –y en gran parte lo lograron.

Desde que Morales arribó al poder, las fiestas cívicas se plagaron de símbolos andinos como los arcos de aguayo, las wiphalas y las pututas. Sin embargo, estos alternaron con símbolos partidarios, como las banderas e insignias del MAS, y fueron acompañados por grandes murales y lemas que realzaban la simbología nacional. Desde el año 2009, la wiphala y otros elementos fueron reconocidos como símbolos nacionales, respaldados por la misma nueva Constitución Política del Estado. Según el artículo 36: "Los símbolos del Estado son la bandera tricolor: rojo, amarillo y verde, el himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú".

La introducción de la wiphala –bandera indígena– como nuevo símbolo nacional fue motivo de muchas susceptibilidades en el Oriente. De hecho, el Comité Cívico Pro Santa Cruz instó a la población a no usarla como símbolo patrio. Las ceremonias oficiales en el Palacio de Gobierno se complementaron con los rituales andinos de la ch´alla y la milluchada. La institucionalización del armado de mesas de ofrenda a la Pachamama (Madre Tierra) se convirtió en una realidad durante la gestión de Evo Morales, sobre todo en ocasiones de fiesta o cuando se realizaban visitas de organizaciones sociales al Palacio. Incluso se recurrió a este ritual cuando se pretendía resolver problemas a nivel político. Para la reelección de Morales, en 2010, el armado de estas mesas de ofrenda fue parte de los actos públicos. En aquella ocasión se armaron cuatro mesas –una por cada punto cardinal– que representaban la unidad cultural entre el Oriente y Occidente y la protección del poder por la Pachamama –parte de la creencia de los pueblos indígenas.

Más allá de la incorporación de los nuevos, también se reforzó la presencia de los símbolos nacionales tradicionales, que fueron ampliamente utilizados durante los festejos cívicos, así como el "escudo vivo". Las consignas sobre la unidad nacional fueron algo recurrente. También se mantuvo el protocolo del viejo recetario sindical/nacionalista,



Figura56.EvoMoralesyAlvaroGarcíaparticipando en el acto de inaguración del gasoducto. Fuente: ABI.

pero incluyendo el puño izquierda en alto y la mano derecha sobre el corazón como la nueva forma de cantar el himno. Las canciones "La Patria" y "Píntame Bolivia" fueron reproducidas con el afán de reforzar el sentimiento nacionalista y dar un mensaje de un compromiso con el nuevo país. Estas y nuevas canciones patrias también se cantaron en los desfiles de las distintas organizaciones sociales.

Los años 2007 y 2008 fueron muy importantes respecto al cambio del campo simbólico. Debido a las controversias con la oposición por los temas de la Asamblea Constituyente, la capitalía plena solicitada por Sucre y el Referéndum Revocatorio de 2008, el 16 de julio y el 6 de agosto se convirtieron en escenarios de dura disputa política. En 2007, Sucre había demandado ser la sede de los tres poderes, lo cual conllevó a una disputa con La Paz por la capitalidad. En respuesta, en julio del 2007 se realizó un Gran Cabildo en La Ceja de El Alto por la unidad del país bajo la proclama "La sede no se mueve". Sucre se transformó en un importante escenario de demandas, primero por lo de la capitalía plena y luego a raíz de las confrontaciones con el Gobierno central, al año siguiente.

A partir de los festejos del 6 de agosto de 2008, Sucre perdió el protagonismo que había tenido desde la independencia, como principal espacio festivo. El Gobierno central no participó en las ceremonias organizadas por la Prefectura de ese departamento, encabezada por la opositora Sabina Cuellar. En consecuencia, en Sucre se llevaron adelante multitudinarias manifestaciones de oposición al Presidente, cuyo Gobierno propuso el concepto de espacio festivo movible. De ahí en adelante, los festejos para el día 6 de agosto con la participación del Presidente del Estado Plurinacional fueron rotando por las capitales de los distintos departamentos del país.

Los cambios producidos en los escenarios festivos y la reelaboración del calendario cívico vinieron acompañados por la intensiva construcción y re-construcción del panteón de los héroes. Con ello se pretendía dar mayor realce a los líderes de las sublevaciones indígenas, algo que comenzó a verse durante el gobierno revolucionario de MNR. Se reforzaron sobre todo las figuras de Túpac Katari, Tomás Katari, Bartolina Sisa y Zarate Willca; por oposición, se hizo menos referencia a los héroes de la Independencia.

El nuevo panteón de héroes incluyó también al Che Guevara, protagonista de las guerrillas, y a los líderes de la izquierda boliviana, como Marcelo Quiroga Santa Cruz y los presidentes Belzu, Busch y Villarroel –cuya política tuvo rasgos populistas y estuvo enfocada en lo "antioligárquico". Además, Evo Morales introdujo nuevos nombres, procedentes del Oriente boliviano. Entre ellos se encuentra el de Andrés Ibáñez, prominente político de Santa Cruz de la Sierra, cuyas ideas de igualdad fueron rescatadas para plasmar la nueva tendencia de la política boliviana.

El 23 de enero de 2010, durante el festejo del Día del Estado Plurinacional, en el balcón de Palacio, los retratos de Bartolina Sisa, Túpac Katari, Bruno Racua y Apiaguaiqui Tumpa –los dos últimos fueron líderes indígenas del Oriente– se colocaron junto a los de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. El retrato de Andrés de Santa Cruz, héroe criollo, fue retirado.

Recuadro 80

### Discurso de Evo Morales en el Parlamento Europeo el 15/05/2006

"Y quiero transmitirles la lucha en defensa de la hoja de coca, la lucha por el agua, para evitar cualquier privatización del recurso agua, y la lucha por los hidrocarburos, que son las luchas de nuestros antepasados, de los líderes indígenas, como Túpac Amaru, Túpac Katari y Bartolina Sisa: era la lucha por el territorio. Bolivia, con semejante riqueza, pero también con semejante pobreza. No se trata de distribuir la pobreza, sino de redistribuir la riqueza y, para redistribuir la riqueza, tenemos la obligación de recuperarla, nacionalizándola."

Fuente:http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2020527,00.html

Al final de cuentas, el propio presidente Evo Morales Ayma es un ícono del proceso de cambio y el principal personaje del Nuevo Estado Plurinacional. Su imagen resalta ante todos, como precursor, realizador y defensor de los cambios sociales, políticos y económicos. Es él quien personalmente lleva a cabo las medidas, por medio de grandes actos públicos; es él quien se asocia con su pueblo. El Presidente se enfoca en resaltar su origen indígena, y de esta forma se proclama como el líder que lucha a favor de este grupo étnico y social.

Desde este enfoque, una de las medidas más importantes que asumió el Gobierno populista fue la de crear la imagen de un líder capaz de conseguir la "unificación de los excluidos y la nación". Su condición de indígena le da mayor legitimidad a sus acciones y las medidas políticas que toma; es uno de los principales cimientos de su liderazgo. En las posesiones de 2006 y 2010 en Tiwanaku, Evo Morales fue proyectado y representado como líder indígena, defensor de la Madre Tierra y antiimperialista. Después de Paz Estenssoro, Evo Morales es el Presidente con más biografías escritas y películas filmadas. Numerosas películas y libros de carácter biográfico, estampillas que recrean su imagen, la declaración de su casa natal como patrimonio nacional, etc.; todos estos objetos y gestos ayudan a reforzar esa imagen de líder de un Estado "que no duda en recurrir a los más variados niveles de expresividad y propaganda política para reforzar (…) su proyecto de poder y de poderío" (Sánchez Patzy, 2013).

# Bibliografía


Aguilar, Gonzalo
1999 "Nativos del sudoeste en la guerra del Chaco". En: Bolivia en transición: La Guerra del Chaco, fascículo 6. La Paz: Coordinadora de Historia – La Razón.

Albarracín Millán, Juan
1972 Poder Minero. La Paz: Editorial Urquizo.

Albó, Xavier
1979a Medio siglo de luchas campesinas. La Paz: CIPCA.
1979b ¿Bodas de plata a réquiem para una reforma agraria?La Paz: CIPCA
1980 Khitipstanza quienes somos. La Paz: CIPCA.
1984 "De emeneristas a kataristas". Conferencia sobre resistencia y rebelión en los Andes, siglos XVIII - XX, Madison, Wisconsin
1986 Desafíos de la solidaridad aymara. La Paz: CIPCA.

Albó, Xavier; Josep Barnadas
1990 La cara india y campesina en nuestra historia. La Paz: Unitas – CIPCA.

Albó, Xavier; Raúl Barrios
1994 Violencias encubiertas en Bolivia. La Paz: CIPCA – ARUWIYIRI - Hisbol.

Albó, Xavier; Olivia Harris
1984 Monteras y guardatojos. La Paz: CIPCA.

Almaraz, Sergio
1958 Petróleo en Bolivia. La Paz: Burillo.
1969 Réquiem para una República. La Paz:Los Amigos del Libro.

Amusquivar Ulloa, Freddy
1991 "Hipótesis para una Historia del Teatro Popular en Bolivia". En: Anales de la Reunión Anual de Etnología. La Paz: MUSEF.

Andrade, Víctor
1979 La Revolución boliviana y los Estados Unidos 1944-1962. La Paz: Gisbert.

Antezana Ergueta, Luis
1988 Historia secreta del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Tomo VII. La revolución del 9 de abril: La Paz: Editorial. Juventud. 2da Edición.

Antezana, Luis
1983 "Sistema y proceso ideológicos en Bolivia (1935-1979)." En: Zavaleta Mercado (Comp.)Bolivia hoy.México: Siglo XXI. Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

Antezana, Luis y Romero Hugo
1970 Historia de los sindicatos campesinos. Madison-Wisconsin: LandTenure Center.

Arauco, Isabel
1984 Mujeres en la Revolución Nacional: Las Barzolas. La Paz: Cinco.

Arauco María Antonieta
2011 Los Jairas y El Trío Domínguez, Favre, Cavour – Creadores del Neo Folklore en Bolivia (1966-1974). La Paz: All Press Labores Gráficas.

Arce Álvarez, Roberto
2003 Desarrollo económico e histórico de la minería en Bolivia. La Paz: Plural Editores.

Ardaya, Gloria
1989 Política sin rostro: mujeres en Bolivia. Caracas: Nueva Sociedad.

Ardaya, Rubén
1997 De la isla del diablo a la libertad. La Paz: CEDOIN.

Arze, José Roberto
1989 Diccionario biográfico boliviano. Tomos I y II. La Paz – Cochabamba: Los Amigos del Libro.

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)

1976 Bolivia: 1971-1976. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones.
1978 La huelga de hambre. Documentos. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones.
1980 La heroica resistencia de los mineros de Bolivia. Lima: Centro de Estudios yPublicaciones.

Ayala Mercado, Ernesto
1961 Defensa de la revolución de abril. La Paz: Nueva Era.
1956 ¿Qué es la revolución boliviana? La Paz: Burillo.

Ballón, Luis A.
1968 Boletín Cultural Galería Naira. La Paz: NAYRA

Barragán, Rossana (coord.)
2009 Gran Poder: la morenada. Colección Fiesta Popular Paceña. Tomo 3.La Paz: IEB.

Barragán Rossana, José Peres-Cajías
2007 "El armazón estatal y sus imaginarios. Historia del Estado". En: Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, 2007. El Estado del Estado en Bolivia.La Paz: PNUD.

Barragán, Rossana; José Luis Roca
2005 Regiones y poder constituyente en Bolivia. La Paz: PNUD.

Barrios, Erasmo
1966 Historia sindical de Bolivia. Oruro: Editorial Universitaria.

Barrios, Raúl; René Mayorga
1994 La cuestión militar en cuestión. La Paz: CEBEM.

Basualdo Zambrana, Marco
2003 Rock boliviano. Cuatro décadas de Historia. La Paz: Plural Editores.

Baptista Gumucio, Mariano
2003 "José Cuadros Quiroga: Inventor del Movimiento Nacionalista Revolucionario". En: Historias… de la Revolución Nacional, 6. La Paz: Coordinadora de Historia.

Bautista, Juan José
2010 Crítica de la Razón Boliviana. Elementos para una crítica de la subjetividad del boliviano con conciencia colonial, moderna y latinoamericana.La Paz: Rincón Ediciones, Grito del Sujeto.

Bedregal, Guillermo
1985a Los militares en Bolivia. La Paz – Cochabamba: Los Amigos del Libro.
1985b Teoría del nacionalismo revolucionario. La Paz: Juventud.
1999 Víctor Paz Estensoro, el político: una semblanza crítica. México: Fondo de Cultura Económica.
2002 Breviario histórico del Movimiento Nacionalista Revolucionario: ideología y práctica histórica. La Paz: Fudena.

Bernabé Colque, Mercedes
2012 "Los destinos degradados de la revolución boliviana: el monumento al MNR, de mausoleo a centro de torturas (1964-1982)". En: Revista Ciencia y Cultura, 2.

Blasier, Cole.
1971 "The United States and the revolution." En: Malloy, James and Thorn, Richard. (eds.) Beyond the revolution: Bolivia since 1952. University of Pittsburgh Press. Pittsburgh.

Bolivia. Vicepresidencia de la República
2008 25 años construyendo democracia. La Paz: Vicepresidencia de la República.

Bridikhina, Eugenia
1999 "El movimiento universitario". En: Bolivia en Transición: La Guerra del Chaco, fascículo 5. La Paz: Coordinadora de Historia – La Razón.
2009 Fiesta cívica. Construcciones de lo cívico y políticas festivas. ColecciónFiesta Popular Paceña. Tomo IV. La Paz: Instituto de Estudios Bolivianos - IEB - Convenio UMSA - ASDI/BRC TB - IDIS.

Brockmann, Robert
2012 "Ernest Rohm en Bolivia". Revista Miradas, Página Siete. Junio 3, 2012.

Browman, David
2007 "La sociedad arqueológica de Bolivia y su influencia en el desarrollo de la práctica arqueológica en Bolivia". Nuevos aportes, 4.

Brunner, José Joaquín
1988 Un espejo trizado. Ensayos sobre cultura y políticas culturales. Santiago de Chile: FLACSO.

Buechler, Hans Christian
2006 Entre la Pachamama y la galería de arte: vidas y propuestas de artistas paceños de origen aymara y quechua. La Paz: Plural Editores.

Cabrera, Sinforoso
1960 La burocracia estrangula a la COMIBOL. La Paz: Editorial Murillo.

Cajias, Dora; Cajías, Magdalena; Johnson, Carmen; Villegas, Iris (comps.)
2001 Visiones de fin de siglo. La Paz: IFEA - Embajada de España – Coordinadora de Historia-Plural.

Cajías Fernando; Magdalena Cajías
1996 Geografía e historia de Bolivia.Madrid: Cultural.
Cajías, Fernando
2007 La Paz historia de contrastes. La Paz: Fundación Nuevo Norte.
Cajías, Lupe
1988 Historia de una leyenda. Vida y palabra de Juan Lechín Oquendo, líder de los mineros bolivianos. La Paz: Talleres Gráficos.
2007 Los caminos de Nuevos Horizontes: 60 años de una apuesta cultural. La Paz: Gente Común
Cajías, Magdalena; Jiménez Chávez, Ivan
1997 Mujeres en las minas de Bolivia. La Paz: Coordinadora de Historia Ministerio de Desarrollo Humano.
Cajías, Magdalena
1995 "Sindicalismo revolucionario y utopía socialista: 1965-1971. En: Estudios Bolivianos 2. La Paz: IEB
1999 "Sobre los pasos de la vida y la agonía de la Central ObreraBoliviana (COB)" En: El sindicalismo en Bolivia: Presente y Futuro. La Paz. Fundemos.
2003 "Rebelión y negociación en el mundo aymara boliviano". En:Violencias y estrategias colectivas en la región andina.Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Bogotá: Grupo EditorialNorma, IFEA, ERI.
2009 "Walter Solón Romero y el compromiso con la Memoria", en: El Bicentenario en la mirada de Solón. La Paz: Fundación Solón.
2010 a 50 años de Radio Nacional Huanuni junto a las luchas de los trabajadores mineros. La Paz: IEB-ASDI.
2010 b La Paz en el siglo XX, Tomo IV. En: Homenaje al Bicentenario del grito libertario del 16 de julio. La Paz: La Razón-Santillana.
2013 El Poder de la Memoria. La Paz: Plural -ASDI/SAREC- Instituto de Estudios Bolivianos.
Calderón, Fernando
1983 La política en las calles. Cochabamba: CERES.
1988 Búsquedas y Bloqueos. La Paz: CERES.
1991 "Memoria de un olvido. El muralismo boliviano". Nueva Sociedad, 116
1999 "Un siglo de luchas sociales". En: Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia contemporánea. La Paz: Harvard Club de Bolivia.
Calderón, Fernando; Roberto Laserna
1994 Paradojas de la modernidad. La Paz: Fundación Milenio.
Calero, Sergio
2005 "El Rock en Bolivia". En: Historia de la Cultura Boliviana en el siglo XXI. La música. Sucre: Fundación Cultural "La Plata".
Campero Prudencio, Fernando (coord.)
1999 Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia contemporánea. La Paz: Harvard Club de Bolivia.
Canelas, Amado
1963 Petróleo: Imperialismo y Nacionalismo. La Paz: Altiplano.
Cardoso, Ciro; Héctor Pérez Brignoli
1979 Historia Económica de América Latina. Barcelona: Critica.
Carter, William.
1964 Aymara communities and the Bolivian agrarian reform.Florida: University of Florida.
Catoira, Ricardo
1987 El sindicalismo boliviano: Testimonio de un dirigente gremial.La Paz: Tigre de papel.
1998 Las luchas sociales en Santa Cruz.Santa Cruz de la Sierra: Universitaria.
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social
1998 Lucha social y movimiento obrero en Santa Cruz. (Tomo 1: De Andrés Ibáñez a la Guerra del Chaco; tomo 2: De Adolfo Román hijo a la Revolución del '52; tomo 3: De la fundación de la COD a la Asamblea Popular).Santa Cruz de la Sierra: CEJIS.
Central Obrera de Bolivia
1954 Primer Congreso de Trabajadores.
1957 Declaración de Principios, II Congreso. La Paz.
1958 Análisis y proyecciones del desarrollo económico. IV: El desarrollo económico de Bolivia. México: Naciones Unidas.
1979 Frente a la crisis. Propuesta de política económica. Cochabamba: IESE. CEPAL.
Céspedes, Marcelo
1982 Los bolivianos ¿estamos maduros para la democracia? Las experiencias electorales de 1978, '79 y '80. La Paz: Khana.
Chávez Casazola, Gabriel (ed.)
2005 Historia de la Cultura Boliviana en el siglo XX. Tomo I: La música. Sucre: Fundación Cultural "La Plata". Aguas del Iniestro.

Chávez Casazola, Gabriel (ed.)
2009 Historia de la Cultura Boliviana en el Siglo XX . Tomo II: Pintura, escultura, cine, teatro. Fundación Cultural "La Plata". Sucre: Aguas del Iniestro.
Chávez Ortiz, Ñuflo
1963 Cincoensayos y un anhelo. La Paz: Murillo.
1988 Recuerdos de un revolucionario.La Paz: Centro de estudios políticos bolivianos.
Choque Canqui, Roberto
1986 La masacre de Jesús de Machaca. La Paz: Chitakolla.
1988 Diagnostico de Machaqa. La Paz: CIPCA-SARTAWI.
1996 Sublevación y masacre de 1921. La Paz: CEDOIN. CIPCA.
1999a "El indigenismo boliviano". En: Historias del Siglo XX. La Revolución Nacional. C.H. Fascículos de La Razón. La Paz, Bolivia
1999b "La situación indígena en la posguerra". En: Historias del Siglo XX. La Revolución Nacional. C.H. Fascículos de La Razón. La Paz, Bolivia.
Combes, Isabelle
2001 "La revolución en paredes y lienzos". En: Tinkazos, 11. La Paz: PIEB.
2005 Etnohistorias del Isoso. La Paz: PIEB-IFEA.
Cordero Caraffa, Carlos
2011 "El teatro Boliviano en las décadas 70 y 80" En: 500 años de teatro en Bolivia: Testimoniosyreflexionesdesdeelsiglo XVI al XX. La Paz: Oficialía Mayor de Culturas de la Alcaldía de La Paz.
Córdoba Claure, Ted
1986 Testigo de la Crisis. Colección Nueva Información. Buenos Aires: Legasa.
Cornejo, Alberto
1949 Programas políticos de Bolivia. Cochabamba: Universitaria.
Corte Nacional Electoral
2007 25 años de democracia en Bolivia (1982-2007). La Paz: Corte Nacional Electoral - La Razón.
Crafts, Nicholas; Toniolo, Gianni
1997 "Postwar Growth: An Overview". En: Economic Growth in Europe since 1945. London: Centre for Economic Policy Research.
Crespo, Alberto
1986 Tiempo contado. La Paz: UMSA.
Crespo, Alfonso
1996 Hernán Siles Zuazo. El hombre de abril. La Paz: Plural.
Cupuell, Adis; Froilán Gonzales
1989 De Ñancaguazú a la Higuera. La Habana: Política.
Dandler, Jorge
1983 Sindicalismocampesinoen Bolivia.Cambios estructurales en Ucureña1935-1952. Cochabamba: CERES.
Debray, Regis
1980 La guerrilla del Che (Cuarta edición). México: Siglo XXI.
Del Granado, Juan
1999 Artemio Camargo.La Paz: Fondo Editorial de los Diputados.
Delgado, Trifonio
1984 100 años de lucha obrera en Bolivia. La Paz: Isla.
Dirección Nacional de Informaciones
1962 Bolivia: 10 años de revolución 1952-1962. La Paz: Dirección Nacional de Informaciones.
Di Tella, Torcuato
2001 Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas. Buenos Aires: Emecé.
Drake, Paul
1995 Kemmerer en los Andes. Quito: Biblioteca de Historia económica - Banco Central del Ecuador.
Dunkerley, James
1987 Rebelión en las venas. La Lucha política en Bolivia 1952-1982. La Paz: Quipus. La Paz, Bolivia
Vargas, Cucho (comp.)
2000 De Pando (1900) a Banzer (2000).La Historia del Siglo XX en Bolivia. La Paz: PROINSA.
Encinas, Enrique; Mayorga, Fernando; Birhuet, Enrique
1989 Jinapuni.Testimoniodeundirigentecampesino. La Paz: Hisbol.
Escóbar, Filemón
1986 La mina vista desde el guardatojo. La Paz: CIPCA.
2008 DelaRevoluciónalPachakuti.Elaprendizaje delrespetorecíprocoentreblancoseindianos. La Paz: Garza Azul.
Federación de Trabajadores Fabriles de La Paz
1992 Los fabriles vistos por ellos mismos. La Paz: Aguirre.

Fellman Velarde, José
1955 Víctor Paz Estenssoro, el hombre y la revolución. La Paz: Murillo.
Fernández, Jorge
1976 Tema: El Petróleo. La Paz – Cochabamba: Los Amigos del Libro.
Flores Apaza, Policarpio
1999 El hombre que volvió a nacer. La Paz: Plural.
Fondo Monetario Internacional
2001 Government Finance Statistics Manual 2001. Washington: International Monetary Fund.
Fortún, Julia Elena
1975 "¿Integración o Coexistencia Cultural?". En: Dualismo o pluralismo cultural en Bolivia, Mesa Redonda sobre expresiones de la cultura boliviana (1925-1974). La Paz: Casa de la Cultura de la Alcaldía de La Paz.
1976 Política cultural boliviana. La Paz.
Frontaura Argandoña, Manuel
1974 La revolución boliviana. La Paz-Cochabamba: Los Amigos del Libro.
Fundación Huáscar Cajías K
2002 Así fue la revolución. Cincuentenario de la Revolución del 9 de abril de 1952. La Paz: Fundación Cultural Huáscar Cajía.
Gallardo Lozada, Jorge
1991 De Torres a Banzer. La Paz: Imprenta Editorial G. H.
García Linera, Álvaro
1999 Reproletarización. Nueva clase obrera y desarrollo del capital industrial en Bolivia.La Paz: Muela del Diablo.
2001 La Condición obrera. Estructuras materiales y simbólicas del proletariado de la Minería Mediana (1950-1999). La Paz: IDIS-UMSA-Comuna - Muela del Diablo.
2004 Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. La Paz: Diakonía-Oxfam.
García Linera, Álvaro et al.
2000 El retorno de la Bolivia plebeya. La Paz: Muela del Diablo.
Gildner, Matthew
2012 "La historia como liberación nacional: creando un pasado útil para la Bolivia posrevolucionaria". Ciencia y Cultura,29.
Gisbert, Teresa; José, Mesa
2012 Historia del Arte en Bolivia. Periodo republicano. La Paz: Gisbert- Fundacion Simón I. Patino.
Gómez, Walter
1978 La minería en el desarrollo económico de Bolivia, 1900-1970. La Paz - Cochabamba: Los Amigos del Libro.
Gordillo, José Manuel
1998 Arando en la historia. La experiencia política del campesino en Cochabamba. La Paz: Plural Editores.
2000 Campesinos Revolucionarios en Bolivia. Identidad, territorio y sexualidad en el Valle Alto de Cochabamba, 1952-1964. La Paz, Plural, 2000.
Gordillo, José M., Rivera Alberto,
Sulcata Guzmán, Ana Evi
2007 ¿Pitaqkaypikamachiq?: las estructuras de poder en Cochabamba, 1940-2006. Cochabamba: CESU-UMSS.
Gotkowitz, Laura
2011 La revolución antes de la revolución. Luchas indígenas por tierra y justicia en Bolivia 1880-1952. La Paz: Plural-PIEB.
Gray Molina, George (coord.)
2005 Informe temático sobre desarrollo humano. La economía más allá del gas (2ª ed.). La Paz: PNUD.
Grindle, Merilee Serrill; Domingo, Pilar
2003 Proclaiming revolution: Bolivia in comparative perspective. London: Institute of Latin American Studies.
GTZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica
2009 Aproximación histórica a los procesos de planificación en Bolivia. La Paz: GTZ.
Gueiler, Lidia
1983 La mujer y la revolución. La Paz – Cochabamba: Los Amigos del Libro.
Guevara, Ernesto
1968 El diario del Che en Bolivia.La Habana: Instituto Cubano del libro.
Gumucio Dagrón, Alfonso
1980 Solón Romero Walter. Catálogo Inauguración Mural UMSA, La Paz.
1982 Historia del cine en Bolivia. La Paz-Cochabamba: Los Amigos del Libro.
Gumucio Dagrón, Alfonso; Cajías, Lupe (comps.)
1989 Las Radios Mineras de Bolivia. La Paz: CIMCA.
Guzmán, Augusto
1979 Proceso histórico y cultural de Cochabamba. La Paz: Juventud.
Grebe López, Ronald
2000 De las emisoras sindicales a las radios comunitarias en Bolivia. La Paz: Instituto Prisma.

2009 Miguel Pantoja Alandia, Bicentenario El Pincel sobre la pared. 1914-1975. Catálogo, La Paz: Gobierno Municipal de La Paz -YPFB.

Haber, Stephen; Victor, Menaldo

2011 "Do Natural Resources Fuel Authoritarianism? A Reappraisal of the Resource Curse".AmericanPoliticalScienceReview, 105, 1.

Heath, Dwight; Erasmus, Charles;
Buechler, Hans.

1969 Land reform and social revolution in Bolivia. New York: Praeger Special studies in international economics and development.

Heinrich, Mónica

2011 "LiberForti" En: Fuentes del Congreso, vol.5/12. La Paz: Vicepresidencia.

Heyduk, Daniel.

1974 The hacienda system and agrarian reform in highland Bolivia: a re-evaluation. Madison:LandTenure Center.

Hobsbawm, Eric

1995 Historia del Siglo XX:1914-1991. Barcelona: Editorial Crítica.

Hurtado, Javier

1986 El Katarismo.La Paz: Hisbol.

Hylton, Forrest; Sinclair Thomson et al.

2005 Ya es otro tiempo el presente. Cuatro momentos de la insurgencia indígena. La Paz: Muela del Diablo.

Iriarte, Gregorio

1976 Los mineros bolivianos: Hombres y medio ambiente. Buenos Aires: Tierra Nueva.

1983 Los mineros, sus luchas, frustraciones y esperanzas. La Paz: Puerta del Sol.

1992 Productores de democracia. Actores sociales y procesos políticos. Cochabamba: CERES-FACES.

Irurozqui, Martha

2001 A bala piedra y palo: la construcción de la ciudadanía política en Bolivia, 1826-1952. Sevilla: Diputación de Sevilla.

Iturri Salmón, Jaime

1992 EGTK: la guerrilla aymara en Bolivia.La Paz: Vaca Sagrada - Edobol.

Jetté, Christian

1989 De la toma del cielo por asalto a la relocalización. La Paz: Hisbol.

Jiménez, Lucina

2006 Políticas culturales en transición. Retos y escenarios de la gestión cultural en México. México: Conaculta.

Justicia y Paz

1975 La Masacre del Valle. Cochabamba. Enero de 1974. La Paz: Cuadernos Justicia y Paz Nr. 2.

Kaplan, Temma

1989 "Conciencia femenina y acción colectiva". En: Trabajo, poder y sexualidad. México: El Colegio de México.

Klein, Herbert

1994 Historia general de Bolivia (número de edición). La Paz: Juventud.

Klein, Herbert; José Peres-Cajías

2014 "Bolivian Oil and Natural Gas under State and Private control, 1920-2010". BolivianStudiesJournal 20.

Kohl, James.

1969 "Peasants and revolution in Bolivia April 9, 1952- August 2, 1953."En: Hispanic American Historical Review58.2

Kohl, Benjamín; Linda Farthing

2007 El boomerang boliviano.La Paz: Plural.

Lagos, Maria.

1994 Autonomy and power: The dynamic of class and culture in rural Bolivia. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Laserna, Roberto

1980 El Estado Boliviano 1971-1978.Cochabamba: IESE-UMSS.

Laserna, Roberto (comp.)

1985 Crisis, democracia y conflicto social. La acción colectiva en Bolivia 1982-1985. Cochabamba: CERES.

Lavaud, Jean-Pierre

1998 El embrollo boliviano 1952-1982: turbulencias sociales y desplazamientos políticos, 1952-1982. La Paz: Hisbol.

2003 La dictadura minada. La Paz: IFEA-CESU-Plural.

Lazarte, Jorge

1989 Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia (Historia de la COB: 1952-1987). La Paz: EDOBOL.

1993 Bolivia: certezas e incertidumbres de la democracia. La nueva política en acción. La Paz: CIDES.

Lechín Oquendo, Juan

2000 Memorias.La Paz: Litexsa Boliviana.

Lema, Ana María

2002 "Apuntes sobre algunas conquistas femeninas en la primera mitad del siglo XX

en Bolivia". En: Correa, Loreto (ed.), El rol de la mujer en la revolución boliviana de 1952. Santa Cruz: Colegio Aleman.

Liborio, Justo (Quebracho)
1967 Bolivia: la Revolución derrotada (primera parte). Cochabamba: Serrano.

Lobo, Cecilia
1995 Mayo y después. La Paz: Latina.

Lora, Guillermo
1978 Contribución a la historia política de Bolivia. Colección historia y documentos. La Paz: Isla.
1979 Movimiento obrero contemporáneo. La Paz: Masas.
1980 Historia del Movimiento Obrero Boliviano. 1933-1952. La Paz-Cochabamba: Los Amigos del Libro.

Loureiro, Carolina
1999 "La identificación de una sociedad pigmentocrática". En: Bolivia en transición: La Guerra del Chaco, fascículo 4. La Paz: Coordinadora de Historia-La Razón.

Lorini, Irma
1999 "Las primeras manifestaciones del nacionalismo cultural en Bolivia". En: Historias del Siglo XX. La Revolución Nacional. C.H. Fascículos de La Razón. La Paz, Bolivia.

Luna, Jorge
1995 "El sector productivo boliviano durante el período inflacionario". En: Morales, Juan Antonio y Gilkade La Torre (eds.), Inflación, estabilización y crecimiento. La experiencia boliviana de 1982 a 1993. La Paz: IISEC-UCB.

Machicado Saravia, Eduardo
2013 Testimonios de las calles de La Paz. Inédito

Malloy, James
1989 Bolivia: La revolución inconclusa. La Paz: CERES.

Mamani, Pablo
2004 El rugir de las multitudes. La Paz: Aruwiyiri.

Mansilla, H.C.F.
1989 "Apogeo y Declinación del movimiento sindical boliviano 1982-1985. Una nota sobre la cultura política del Autoritarismo", en Estado y Sociedad: Revista Boliviana de Ciencias Sociales Nº5, La Paz: FLACSO.
1994 La empresa privada boliviana y el proceso de democratización. La Paz: Fund. Milenio.
2007 Problemas de la autonomía en el oriente boliviano: la ideología de la Nación Camba en el espejo de las fuentes documentales. Santa Cruz de la Sierra: El País.

Mayorga, Fernando
1993 Discurso y política en Bolivia. La Paz: ILDIS - CERES.

Mayorga, Fernando(comp.)
1997 ¿Ejemonías? Democracia representativa y liderazgos locales. La Paz: PIEB.

Mayorga, Fernando; Rodríguez, Gustavo et al.
1985 Historia y movimiento popular. Cochabamba: IESE.

Mayorga, Fernando
1985 El discurso del nacionalismo revolucionario. Cochabamba: Cochabamba, Bolivia: Centro de Información y Documentación para el Desarrollo Regional.

Mayorga, René Antonio
1983 Empate histórico y debilidad constructiva 1978-1979.Cochabamba: IESE.
1985 "Movimientos sociales y sistema político: la crisis del sistema democrático y la COB" En: Laserna, R. (Comp.) Crisis, democracia y conflicto social. Cochabamba: CERES.

Mayorga, René Antonio (Comp.)
1987 Democracia a la deriva. Dilemas de la participación y concertación social en Bolivia. La Paz: CERES-CLACSO.

McEwen, William.
1975 Changing rural society: A study of communities in Bolivia.Oxford University Press. New York. 1975.

Mendieta, Pilar
1999a "De la guerra al sindicato. Orígenes del sindicalismo campesino (1935-1940)". En: Bolivia en transición: La Guerra del Chaco, fascículo 6. La Paz: Coordinadora de Historia-La Razón.
1999b "La Convención de 1938. Hacia una nueva concepción del Estado". En: Bolivia en transición: La Guerra del Chaco, fascículo 11. La Paz: Coordinadora de Historia-La Razón.

Mesa Gisbert, Carlos
1985 La aventura del cine boliviano. La Paz: Gisbert.
1979 Cine boliviano, del realizador al crítico. La Paz: Gisbert.

1990 Presidentes de Bolivia: entres urnas y fusiles. El poder ejecutivo: los ministros de Estado (Segunda edición). La Paz: Gisbert.
2004 Las diez mejores novelas de la literatura boliviana. La Paz:Plural.
2009 "Cine Boliviano: Los ojos de la Historia (1952-2006)"En: Historia de la Cultura Boliviana en el siglo XX II. Teatro, Cine, y Video. Sucre: Fundación Cultural "La Plata".
Mesa Gisbert, Carlos; José Mesa; Teresa Gisbert
2012 Historia de Bolivia. (8va ed.). La Paz: Gisbert.
Memoria de la Conferencia Internacional
2003 Revoluciones del siglo XX. "Tenemos pechos de bronce: pero no sabemos nada: memoria de la conferencia internacional Revoluciones del siglo XX: homenaje a los cincuenta años de la Revolución Boliviana". La Paz: Friedrich Ebert Stiftung-ILDIS-Plural.
Miller, Pablo
1999 "La guerra y el contexto internacional". En: Bolivia en transición: La Guerra del Chaco, fascículo 9. La Paz: Coordinadora de Historia-La Razón.
Miranda, Carlos
1999 "Petróleo. Del descubrimiento petrolífero a la explosión del gas".En: Campero, Fernando (coord.), Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia contemporánea. La Paz: Harvard Club de Bolivia.
Mitre, Antonio
1993 Bajo un cielo de estaño. La Paz: ANMM-ILDIS.
1996 Los hilos de la memoria. Ascensión y crisis de las casa comerciales alemanas en Bolivia 1900-1942. La Paz: Anthropos.
2006 Náufragos en tierra firme. Bloqueo comercial, despojo y confinamiento de japoneses en Bolivia durante la Segunda Guerra Mundial. Santa Cruz de la Sierra: El País.
Movimiento Bolivia Libre
1987 Repensando el país. La Paz: sin editorial.
Movimiento Nacionalista Revolucionario
1964 Programa esquemático de gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario para el periodo 1964-1968: aprobado por la IX Convención del M.N.R. La Paz: Dirección Nacional de Informaciones.
1993 "Plan de Todos" Folleto de propaganda electoral. s/e.
Molina, Fernando
2009 Los demócratas. Retrato de una generación política. Guido Capra. La Paz: Pulso.
Möller, Edwin
1963 El cooperativismo y la revolución.La Paz: Dirección Nacional de Cooperativas.
Molpeceres, Antonio (Representante PNUD)
2007 Informe nacional sobre desarrollo humano 2007. El estado del Estado en Bolivia.La Paz: PNUD.
Montenegro, Carlos
1979 Nacionalismo y coloniaje. La Paz: Los Amigos del Libro.
Monroy Chazarreta, Manuel
2005 "De la protesta a la proyección" En: Historia de la Cultura Boliviana en el siglo XX I. La música. Sucre: Fundación Cultural "La Plata".
Morales, Juan Antonio; Jeffrey Sachs
1990 "Bolivia's economic crisis". Country studies: Argentina, Bolivia, Brazil, Mexico. Chicago: TheUniversity of Chicago Press.
Movimiento Bolivia Libre
1987 Repensando el país. La Paz: s/e.
Movimiento de Mujeres Libertad
2010 Libres. Testimonio de mujeres, Memorias de las dictaduras. La Paz: Plural.
Murillo, Mario
2012 La bala no mata sino el destino. La Paz: Plural.
Muñoz, MaríaEugenia
2009 "Video Boliviano del siglo XX" En:Historia de la Cultura Boliviana en el siglo XX II. Teatro, Cine, y Video.Sucre: Fundación Cultural "La Plata".
Navia, Carlos
1984 Los EEUU y la revolución nacional. Cochabamba: CIDRE.
Orihuela, Juan Carlos
2010 Cultura en Libertad. Homenaje a Pepe Ballón. Catálogo de exposición. La Paz: Espacio Simón I Patiño.
Osterweil, Marc
1978 The meaning of elite hood: Germans, Jews and Arabs in La Paz, Bolivia. New York: New York University.
Otálora,Carmen
1995 "La política fiscal boliviana entre 1975 y 1989". En: Morales, Juan Antonio y Gilkade La Torre (eds.), Inflación, estabili-

zaciónycrecimiento.Laexperienciaboliviana de 1982 a 1993. La Paz: IISEC-UCB.
Padilla, David
1982 Decisionesyrecuerdosdeungeneral (2ª ed.). La Paz: Urquizo.
Pamuk, Horma
1982 Lasmejorestradicionesyleyendas de Bolivia (4ª ed.). La Paz: Ed. Popular.
2006 Estambul, ciudad y recuerdos. Estambul: Sudamericana.
Paredes, Manuel Rigoberto
1936 Mitos, Supersticiones y Supervivencias Populares de Bolivia. (2ª ed.). La Paz: Ed. Atenea.
Patch, Richard.
1956 "Social implications of the Bolivian agrarian reform" New York: Pd.D. diss. Cornell University, Ithaca.
Patzi Paco, Félix
1999 Insurgencia y sumisión, Movimientos indígena - campesinos (1983 - 1998). La Paz: Muela del Diablo.
Paz Estensoro, Víctor
1955 Discursos parlamentarios. Cochabamba: Canata.
Pentimalli, Michela (Curaduría)
2009 Bolivia: los caminos de la escultura. La Paz: Fundación Simón I. Patiño - Espacio Simón I. Patiño.
Peña, Paula
2003 Lapermanenteconstruccióndelocruceño:un estudio sobre la identidad en Santa Cruz de la Sierra. La Paz: PIEB.
Peñaloza, Luís
1984 Nuevahistoriaeconómicade Bolivia.Comercio, moneda y bancos.La Paz-Cochabamba: Los Amigos del Libro.
Peredo, Inti
1994 Mi campaña junto al Che.La Paz: CIMA.
Peredo, Oswaldo "Chato"
2003 Volvimos a las montañas.Santa Cruz: Creativa
Peres-Cajías, José
2012 "Public Revenues in Bolivia, 1900-1931". En: Carreras, Albert y César Yañez(eds.), Latin-American Economic Backwardness Revisited. London: Pickering &Chatto.
2013 Bolivian Public Finances, 1882-2007. Challengesandrestrictions of State intervention in a small, multiethnic and revolutionary economy.Barcelona: PhD Thesis, Universitat de Barcelona.
Ponce Sanginés, Carlos
1975 "Origen del Dualismo Cultural en Bolivia". En: Dualismo o pluralismo cultural en Bolivia, Mesa Redonda sobre expresiones de la cultura boliviana (1925-1974), Tomo I.La Paz: Casa de la Cultura de la Alcaldía de La Paz.
Portugal, Pedro
2010 "Proceso de descolonización, resistencia y restauración". En: Matrices Civilizatorias: constitucióndepolíticasmunicipalesinterculturales.Encuentroydiálogosdesaberesyconocimientos. La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Programa de Naciones Unidas
2007 Elementos para el Desarrollo Humano. El estado de la opinión. La Paz: PNUD-IDEA.
Prado Salmón, Gary
1984 Poder y Fuerzas Armadas 1949-1982. La Paz-Cochabamba: Los Amigos del Libro.
1987 La guerrilla inmolada.Santa Cruz de la Sierra: Punto y Coma S.R.L.
Pruden, Hernán
2003 "Santa Cruz entre la pos-guerra del Chaco y las postrimerías de la Revolución Nacional: cruceños y cambas". En: Historias….de la Revolución Nacional, 6. La Paz: Coordinadora de Historia.
Puente, Rafael
2011 Recuperando la memoria. Tomo II. La Paz: Plural
Querejazu Leytón, Pedro
1999 "Las artes. Bolivia en pos de sí misma". En: Campero, Fernando (coord.), Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia contemporánea. La Paz: Harvard Club de Bolivia.
2009 "Arte Bolivia S. XX". La Razón Edición Aniversario.
Quintana, Juan Ramón
1998 Soldados y ciudadanos. La Paz: PIEB.
1999 "El derrumbe del prusianismo en la guerra del Chaco". En: Bolivia en transición: La Guerra del Chaco, fascículo 2. La Paz: Coordinadora de Historia – La Razón.
2005 Las palabras cobran vida.La Paz: Renacer.

2012 Policía en Bolivia. Historia no oficial (1826-1982). La Paz: Observatorio de Democracia y Seguridad-PIEB.Quiroga B, María René.
Quiroga Santa Cruz, Marcelo
1979 El saqueo de Bolivia (3ª ed.). La Paz: Puerta del Sol.
1997 Oleocracia o Patria. La Paz: Plural.
Quisbert, Pablo
1999 "Del empeño colonial a la guerra total". En: Bolivia en transición: La Guerra del Chaco, fascículos 2 y 3. La Paz: Coordinadora de Historia-La Razón.
Quispe, Felipe
2007 Mi captura. La Paz: Pachakuti.
Ramos, Pablo
1980 Siete años de economía boliviana. La Paz: UMSA.
1985 El neoliberalismo en acción: Análisis crítico de la "nueva política económica". La Paz: UMSA.
Ranaboldo, Claudia
1987 El camino perdido. Biografía del líder campesino kallawaya Antonio Alvarez Mamani. La Paz: SEMTA.
Reinaga, Fausto
1970 Manifiesto del Partido indio de Bolivia. La Paz: Murillo.
2001 [1970] La revolución india.La Paz: Ed.: Fundación Amáutica "Fausto Reinaga".
2010 Tesis India y Tierra y Libertad. La Paz: La Muralla Salvaje.
Reyeros, Rafael
1949 El pongueaje: La servidumbre personal de los indios bolivianos. La Paz:Universo.
Reyes, Ulrich
1970 Política y desarrollo regional en el Oriente boliviano. Lugar: Deusto.
Rivadeneira Prada, Raúl
2011 "Historia del Teatro Experimental Universitario (TEU), 1953-1970" En: Cordero Caraffa, Carlos (Comp.), 500 años de teatro en Bolivia: Testimonios y reflexiones desde el siglo XVI al XX. La Paz: Oficialía Mayor de Culturas.
Rivera Cusicanqui, Silvia
1984 Oprimidos pero no vencidos, Luchas del campesinado aymara y quechua 1900-1980. CSUTCB (Tesis Política 1983). La Paz: Hisbol - CSUTCB.
1993 "La raíz: colonizadores y colonizados" En Xavier Albó y R. Barrios (eds.) Violencias encubiertas en Bolivia, Tomo 1, Cultura y Política. La Paz: Cipca-Aruwiyiri.
2005 "Construcción de imágenes de indios y mujeres en la iconografía post 52: el miserabilismo en el álbum de la revolución". Tinkazos, 19.
Rivera, Silvia (comp.)
1996 Ser mujer indígena, chola o birlocha en la Bolivia post colonial de los años '90. La Paz: Subsecretaria de Asuntos de Género.
Roca, José Luís
2007 Fisonomía del regionalismo boliviano. La otra cara de la historia. (3ra edición).Santa Cruz de la Sierra: El País.
Rodrigo, Saturnino
1955 Diario de la revolución nacional. La Paz: Juventud.
Rodríguez, Huáscar
2012 La choledad antiestatal. El anarcosindicalismo en el movimiento obrero boliviano (1812-1965).La Paz: Muela del Diablo.
Rodríguez Ostria, Gustavo
1991 El socavón y el sindicato. Ensayos históricos sobre los trabajadores mineros, siglos XIX y XX. La Paz: ILDIS.
1993 Poder central y proyecto regional. Cochabamba y Santa Cruz en los siglos XIX y XX. La Paz: ILDIS.
1995 La construcción de una región. Cochabamba y su historia, siglos XIX y XX. Cochabamba: UMSS.
2006 Teoponte. Sin tiempo para las palabras. La otra guerrilla guevarista en Bolivia. Cochabamba: Kipus.
Rodríguez, Mariano
2004 Escape a Balazos. Los sobrevivientes del Che. México: Plaza James.
Rojas, Cesar
2007 Democracia de alta tensión. Conflictividad y cambio social en la Bolivia del siglo XXI. La Paz: Plural.
Rojas Rojas, Orlando
2005 "El auge de la música folklórica boliviana" En: Historia de la Cultura Boliviana en el siglo XX. Tomo I: La música. Sucre: Fundación Cultural "La Plata".
Romero, Fernando; Querejazu, Pedro
1989 Pintura boliviana del siglo XX. La Paz: Fundación BHN.

Rossells, Beatriz
1988 La Mujer: una ilusión. Ideologías e imágenes de la mujer en Bolivia del siglo XIX. La Paz: CIDEM.
1996 Caymari vida: La emergencia de la música popular en Charcas. Sucre: Corte Suprema de Justicia de la Nación.
1997 Matilde Casazola. Un poco de tierra que adquirió el don milagroso del canto.La Paz: Coordinadora de Historia-Subsecretaría de Asuntos de Género.
2003 "Después de "Siempre". Políticas culturales del MNR de 1952". Historias…de la revolución nacional, 6. La Paz: Coordinadora de Historia.
2010 "Nacionalismo cultural. Los mitos de Fernando Diez de Medina". Revista de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, 65.
Royuela Carlos
1996 Cien años de hidrocarburos en Bolivia. La Paz - Cochabamba: Los Amigos del Libro.
Ruiz G, René
1986 El drama de Bolivia. La Paz: Juventud.
Saavedra, José Luis
1990 Ava y Karai. Ensayos sobre la frontera chiriguano (siglo XVI y XX).La Paz: Hisbol.
2010a Identidad, interculturalidad y descolonización". En:Matrices Civilizatorias: constitución de políticas municipales interculturales. Encuentro y diálogos de saberes y conocimientos. La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
2010b "Hacia una propuesta pedagógico currricular aymara quechua". En: Matrices Civilizatorias: constitución de políticas municipales interculturales. Encuentro y diálogos de saberes y conocimientos. La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
2011 "Desafíos para a descolonización en Bolivia". En: Saignes, Thierry Descolonización en Bolivia. Análisis y debates. Oruro: Centro de Ecología y pueblos andinos - Latinas Editores.
Salazar, Fernando
2009 MallcuSiñani. La Paz: CERID.
Salazar de la Torre, Cecilia
2002 "El alma en la plástica boliviana o la nación expresionista". Tinkazos, 13.La Paz: PIEB.
2006 "Estética y política en la Escuela-Ayllu de Warisata: una aproximación al expresionismo de Mario Alejandro Illanes" En:Documento de trabajo /Informes. La Paz: CIDES-UMSA, Posgrado en Ciencias del Desarrollo 2006.
Salazar Mostajo, Carlos
1989 La pintura contemporánea de Bolivia. Ensayo histórico-crítico. La Paz: Juventud.
Salmón, Josefa; Guillermo Delgado (Comps.)
2003 Identidad, ciudadanía y participación popular desde la colonia al siglo XX. La Paz: Plural.
Sandoval, Dunia et al.
2003 Santa Cruz, economía y poder 1952-1993. La Paz: PIEB - CEDURE - U.A.G.R.M.
Sandoval, Godofredo
1986 Las mil caras del movimiento social boliviano. De las jornadas de marzo a las jornadas de septiembre 1985. La Paz: Panamericana.
Sandoval, Godofredo; Fernanda Sostres
1989 La ciudad prometida: Pobladores y organizaciones sociales en El Alto.La Paz: Systema - ILDIS.
Sandoval Rodríguez, Isaac
1979 Culminación y ruptura del modelo nacional. La Paz: Urquizo.
1987 Historia de Bolivia. La Paz: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.
Sanjinés, G. Alfredo.
1945 La reforma agraria en Bolivia. Segunda edición aumentada. La Paz: Universo.
Selser, Gregorio
1981 Bolivia. El Cuartelazo de los coca dólares. México: Nex-Sur.
Sen, Amartya
2000 Desarrollo y libertad. Buenos Aires: Planeta.
Serrate Reiche, Carlos
1964 ¿Qué es profundizar la revolución? La Paz: Burillo.
Siles Guevara, Juan
1975 Las 100 obras capitales de la literatura boliviana. La Paz - Cochabamba: Los Amigos del Libro.
Sivak, Martín
1997 El asesinato de Juan José Torres. La Paz: SERPA.
2001 El dictador elegido. Biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez. La Paz: Plural.
Smith, Anthony
2000 Nacionalismo y modernidad.Madrid: Istmo.

Schelchkov, Andrey.
2009 "En los umbrales del socialismo boliviano: Tristán Marof y la Tercera Internacional Comunista". En: Revista Izquierdas, Año 3, Número 5. Santiago: Creative Commons.
Solón Romero,Walter
1999 "El artista y la conquista interminable" Discurso inédito.
2007 Los Derechos Humanos en la obra de Solón. La Paz: Fundación Solón Romero.
2009 El bicentenario en la mirada de Solón. Catálogo. La Paz: Fundación Solón Romero.
Soria Galvarro, Carlos
1995 El Che en Bolivia: documentos y testimonios, su último combate (recopilación y notas) Tomo II (2ª ed.). La Paz: CEDOIN.
Soruco, Ximena; Wilfredo Plata; Gustavo Medeiros
2007 Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy.La Paz: Fundación Tierra.
Soria T. Mario
1980 Teatro Boliviano en el siglo XX.La Paz: Editorial Casa Municipal de la Cultura Franz Tamayo.
Sostres, Fernanda
1986 El largo camino en la búsqueda de identidad. Las Bartolinas. En: Historia y evolución del movimiento popular. Cochabamba: CERES.
2004 Kawsachun coca: Economía campesina cocalera en los Yungas y el Chapare. La Paz: PIEB.
Soux, Maria Luisa
1999 "La agricultura: entre intentos de modernización y resabios coloniales". En: Bolivia en transición: La Guerra del Chaco, fascículo 10. La Paz: Coordinadora de Historia – La Razón.
Strengers, Jeroen
1991 La Asamblea Popular.La Paz: SIDIS - Ediciones Gráficas.
Szmulker, Alicia
1998 La ciudad imaginada. Un análisis sociológico de la pintura contemporánea en Bolivia. La Paz: PIEB.
Soliz, Carmen
2012 "La modernidad esquiva: debates políticos e intelectuales sobre la reforma agraria en Bolivia (1935-1952)". En:Revista Ciencia y Cultura. 29.
Taboada Terán, Néstor
1983 De la servidumbre de los hombres comunes a la libertad. Historia de las luchas sociales y del movimiento obrero en Bolivia I. Cochabamba: Instituto de Formación y Capacitación.
Taller de Historia Oral Andina
1984 Santos Marka Tula, cacique principal de los ayllus Callapa y apoderado general de las comunidades originarias de la República. La Paz: THOA-UMSA.
Tapia, Luís
2002a La condición multisocial. Multiculturalidad, pluralismo y modernidad. La Paz: Muela del Diablo.
2002b La producción del conocimiento local. La Paz: Muela del Diablo.
Ticona, Esteban
1991 "Manuel Chachawayna, el primer candidato aymara a diputación". Historia y Cultura,19. La Paz: Don Bosco.
1999a "Aymaras y chaqueños en la contienda bélica". En: Bolivia en transición: La Guerra del Chaco, fascículo 6. La Paz: Coordinadora de Historia - La Razón.
1999b "El movimiento indígena en los Andes bolivianos 1920-1932". En: Bolivia en transición: La Guerra del Chaco, fascículo 4. La Paz: Coordinadora de Historia - La Razón.
1999c "El movimiento indígena pre 52 (1936-1952)". En: Historias del Siglo XX. La Revolución Nacional, fascículo 1. La Paz: Coordinadora de Historia - La Razón.
2000 Organización y liderazgo campesino 1979-1996. La Paz: Universidad de la Cordillera - AGRUCO.
Toranzo, Carlos; Arrieta, Mario
1989 Nueva derecha y desproletarización en Bolivia. La Paz: UNITAS/ILDIS.
Trigo, Eduardo
1999 Conversaciones con Víctor Paz Estenssoro. La Paz: Comunicaciones El País.
Luciano Tapia
1995 Ukhamawa Jakawisaxa. Así es nuestra vida. Yatiyawi. La Paz: Hisbol srl.
Urioste, Miguel
1987 Segunda Reforma Agraria. Campesinos, tierra y educación popular.La Paz: CEDLA.
Urquiola, Miguel
1999 "La distribución de la población en el siglo XX". En: Campero, Fernando (coord.),

Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia contemporánea. La Paz: Harvard Club de Bolivia.
Vargas V, John (ed.)
2004 La reforma agraria desde las regiones. 50 años de reforma agraria. La Paz: Plural.
Vásquez D, Rubén
1978 Bolivia a la hora del Che. México: Siglo XXI.
Viezzer, Moema
1977 Si me permiten hablar. Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia. México: Siglo XXI.
Vich, Víctor; Guillermo Cortés(eds.)
2006 Políticas culturales. Ensayos críticos.Lima: IEP.
Villanueva, Emilio
1967 Urbanística practica-técnica. La Paz: Universo.
Villegas, Iris
1999 "Socialistas y comunistas en Bolivia". En: Bolivia en transición: La Guerra del Chaco, fascículo 1. La Paz: Coordinadora de Historia-La Razón.
Wiethuchter, Blanca etal.
2002 Hacia una historia critica de la literatura en Bolivia. La Paz: IEB.
Wieviorka, Michel
2002 El racismo. Una introducción. La Paz: Plural.
Zavaleta Mercado, René
1980 Las masas en noviembre. Cochabamba: IESE.
1986 Lo nacional popular en Bolivia. México: Siglo XXI.
1987 El Poder Dual. La Paz - Cochabamba: Los Amigos del Libro.
1990 La formación de la conciencia nacional. La Paz - Cochabamba: Los Amigos del Libro.
1992 50 años de historia. La Paz - Cochabamba: Los Amigos del Libro.
1995 La caída del MNR y la conjuración de noviembre. La Paz-Cochabamba: Los Amigos del Libro
Zavaleta Mercado, René (comp.)
1983 Bolivia,Hoy.México: Siglo XXI.
Zondag, Cornelius
1968 La Economía Boliviana 1952 – 1965. La Paz – Cochabamba: Los Amigos del Libro.

Prensa

La Calle: 1936-1946
La Nación: 1952-1964
El Diario: 1952-1999
Presencia: 1964-1982-2000
Última Hora: 1970-1982-1995
Hoy: 1970-1982-1995
La Razón: 1990-1999
Presencia: Edición Especial del Sesquicentenario de Bolivia, 1975

Referencias electrónicas

Badani Javier
2013 "Gonzales, el teatro en tiempos de dictadura" En: http://javierbadani.blogspot.com/2013/08/gonzalez-el-teatro-en-tiempos-de.html
Blanco, Elías
2012 Blog Diccionario Cultural Boliviano. El Aparapita Referencia electrónica: http://elias-blanco.blogspot.com/
Gaceta de Bolivia
s.f. Decreto Presidencial 19230, 19231, 19236. En: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
Estadísticas de Bolivia
http://boliviaestadisticas.blogspot.com/2013_07_01_archive.html
Morales, Juan Antonio &Sachs, Jeffrey
1987 La Crisis económica en Bolivia. Instituto de Investigaciones Socio Económicas. UCB. En: http://www.iisec.ucb.edu.bo/papers/1981-1990/iisec-dt-1987-08.pdf
Sabino, Carlos
1999 "La Hiperinflación Boliviana". El Fracaso del Intervencionismo: Apertura y Libre Mercado en América Latina. Caracas, Ed. Panapo. En: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/bo/Sabino-bolivia.htm
Sánchez Castro, Claudio
2010 "Breve acercamiento histórico a la crítica de cine en Bolivia" Revista Digital Cinemas Cine, edición 11, En: http://www.cinemascine.net/archivo/tiracables/Breve-acercamiento-histrico-a-la-crtica-de-cine-en-Bolivia

# Autores y colaboradores



María Magdalena Cajías de la Vega (coord.) obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán (México), tiene una Maestría en Historia Andina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) y es Licenciada en Historia por la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Es catedrática emérita de la Carrera de Historia de la UMSA y docente – investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos (IEB) de la Facultad de Humanidades de esa universidad. Ha impartido clases en postgrados del CIDES-UMSA, en la Academia Diplomática de Bolivia y en la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Pertenece a la Academia de Historia de Bolivia. Ha trabajado como consultora en temas educativos en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Convenio Andrés Bello (CAB). Fue Ministra de Educación y Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia y, actualmente, ejerce como Cónsul general de Bolivia en Chile. Es especialista en historia política y social del siglo XX, con énfasis en la historia del movimiento minero boliviano y otros movimientos sociales. También ha trabajado textos en torno a la historia de la educación y sus transformaciones actuales. Sus publicaciones más recientes son El Poder de la Memoria. La mina de Huanuni en la historia del movimiento minero boliviano (2013); La Paz en el siglo XX (2010); 50 años de Radio nacional Huanuni junto a las luchas de los trabajadores mineros (2010). Ha dirigido y guionizado documentales históricos sobre el proceso de cambio en Bolivia, como "Achacahi: la insurgencia aymara" (2002), "Huanuni. De pie a pesar de todo" (2007), "Sariris. Abriendo camino al andar" (2009) y "El Poder de la Memoria" (2009).



Eugenia Bridikhina es docente titular de la Carrera de Historia de la de la Universidad Mayor de San Andrés. Trabajó muchos años en el Archivo de La Paz (UMSA), como docente y directora interina; es docente investigadora de la Instituto de Estudios Bolivianos, docente de las maestrías de CIDES (UMSA), de las maestrías de la Facultad de Arquitectura (UMSA), de la Universidad Andina (La Paz) y es investigadora de FLACSO (Ecuador). Su formación de historiadora en la Universidad Estatal de Donestsk fue completada con una maestría en la Universidad Internacional de Andalucía (La Rábida) y un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Es coordinadora y coautora del libro Fiesta cívica. Construcción de lo cívico y políticas festivas (2009), (junto con Pilar Mendieta y Lupe Mamani); Bolivia en blanco y negro. Fotografías de Archivo de La

Paz (2014). Publicó también numerosos artículos como "Los escenarios festivos y discursivos de la fiesta de 16 de julio a principios del siglo XX" (2009); "La educación cívica festiva: la participación de los escolares paceños en los festejos del 16 de julio y 6 de agosto al principio del siglo XX" (2010); "La propaganda política y creación del nuevo lenguaje festivo en los primeros años de la república de Bolivia: rupturas y continuidades" (2009); "Cuando se callaron los cañones: conmemoraciones de héroes y batallas en el nacimiento de Bolivia" (2013). Es autora de libros sobre la historia colonial y la historia de la mujer en la época colonial y republicana.



Maria Cristina Machicado Murillo egresada de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz). Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia (CIS). Desde el 2010 gestiona proyectos de conservación documental y exposiciones con archivos históricos privados y familiares junto a la Fundación Flavio Machicado Viscarra (FFMV).



Jorge Víctor Walter Ocsa Laime realizó estudios en Sociología, Historia y Estudios Latinoamericanos en la Universidad Mayor de San Andrés, además de grupos de formación en descolonización e investigación crítica. Trabaja temas referentes a políticas educativas del MESCP, la transformación del Estado, transición democrática e historia del siglo XX, escribiendo ensayos publicados en Bolivia, Perú y Colombia. Colaboró en la realización de investigaciones y documentales históricos referidos a los movimientos minero y campesino indígena en Bolivia. Acompañó a movimientos sociales y organizaciones populares desde la década de los 90.



José Alejandro Peres-Cajías es profesor a tiempo completo en la Escuela de la Producción y la Competitividad (Universidad Católica Boliviana San Pablo, La Paz). Obtuvo el título de Doctor (Cum Laude) en Historia Económica en la Universitat de Barcelona el año 2013. Junto a otros autores ha elaborado la Historia de la Regulación Financiera en Bolivia (ASFI, 2013). Ha publicado artículos en libros editados en Bolivia y en el Reino Unido. Ha publicado también en revistas internacionales arbitradas (Journal of Economic History of Developing Regions; Revista de Historia Económica. Journal of Iberian and Latin American Economic History; Bolivian Studies Journal; Cliometrica). Desde julio 2011, es miembro del Comité Asesor de la Montevideo - Oxford Latin American Database (MOxLAD).



Beatriz Rossells Montalvo es Antropóloga. Doctorado en Derecho, Universidad Mayor de San Francisco Xavier (Sucre). Estudios de Antropología e Historia en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Candidata al doctorado en Historia en la Universidad Central de Venezuela. Docente investigadora en el Instituto de Estudios Bolivianos y la Carrera de Historia de la UMSA. Es autora de Carnaval Paceño y Jisk'anata (con otros autores) (IEB/ ASDI SAREC, La Paz, 2009); "Transformaciones del imaginario social en los carnavales de Bolivia", Textos Escolhidos de Cultura e Arte Populares. Estudos de Carnaval (Universidad del Estado de Rio de Janeiro, 2011); La Gastronomía en Potosí y Charcas siglos XVIII, XIX y XX, 4ª. Ed. (UMSA, 2014); Identidad y memoria en la fiesta en Bolivia. La Fiesta. Memoria del IV Encuentro Internacional sobre el Barroco. Unión Latina. (Artes Gráficas Sagitario. La Paz.2007). Con otros autores ¿Un país desinformado? Estudios sobre información científica y cultural en Bolivia 1993-2003 (PIEB/SOL/UNESCO, 2004); Las mujeres en la historia de Bolivia, imágenes y realidades del siglo XIX. Estudio y antología (Embajada de los Países Bajos, La Paz, 2001); Caymari vida. La emergencia de la música popular en Charcas (Corte Suprema de Justicia, Sucre, 1996).



Carmen Soliz es historiadora, tiene un doctorado en la Universidad de Nueva York (NYU), Master en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca. Actualmente, docente en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte (UNCC). Su tesis de doctorado «Campos en Revolución: reforma agraria en Bolivia 1936-1971» explora el rol que los distintos actores sociales y políticos: hacendados, campesinos, comunidades indígenas, autoridades estatales jugaron en la implementación del proceso de reforma agraria, en casi dos décadas de disputas judiciales locales y nacionales en el que los campesinos y comunidades indígenas consolidaron el proceso de reforma agraria como uno de los mas redistributivos de América Latina. Entre sus publicaciones más recientes están: «El otro rostro de América Latina» en: Revista Nueva Sociedad, 238 y «La modernidad esquiva: debates politicos en intelectuales sobre reforma agraria 1935-1952) en: Revista Ciencia y Cultura, 29.



Beatriz Cajías de la Vega es Licenciada en Pedagogía por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Docente universitaria en diferentes carreras de la UMSA. Es especialista y consultora internacional en educación. Ha escrito diferentes libros y artículos relacionados con la historia y la coyuntura educativa boliviana. Ha sido Secretaria Académica del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) e investigadora del Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas (CEBIAE).